

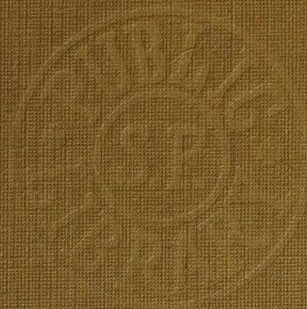
Pío Zabala

# HISTORIA<sup>DE</sup> ESPAÑA

---

EDAD CONTEMPORANEA

1808 - 1923



VOL. II

GIFT OF J. C. CEBRIAN

946 AL79 $\frac{5}{2}$

A

Altamira y Crevea

Historia de España v.5,pt.2

416468

Oct 17 47

87202

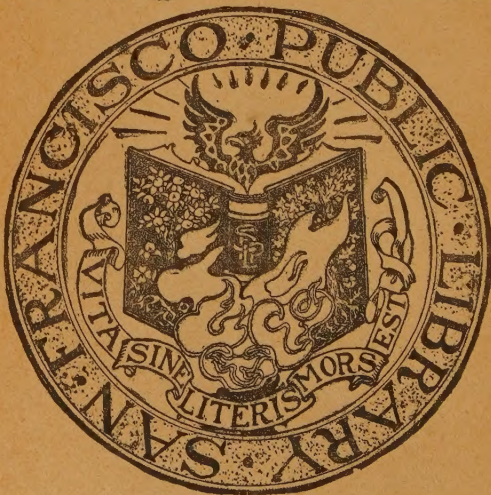
**SPANISH**

BOOK NO

ACCESSION

946 AL79 $\frac{5}{2}$  A

416468





INTERNATIONAL LANGUAGES  
COLLECTIONS

SAN FRANCISCO PUBLIC LIBRARY



3 1223 00675 7158





HISTORIA DE ESPAÑA  
Y DE LA CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA

---

TOMO V (VOLUMEN II)

# HISTORIA DE ESPAÑA

Y DE LA  
CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA

TOMOS I, II, III, IV

POR

D. RAFAEL ALTAMIRA

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  
ACADÉMICO DE LA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS  
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LISBOA  
ETC., ETC.

TOMO V

POR

D. PIO ZABALA Y LERA

CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID

---

SUCESORES DE JUAN GILI

CORTES, 581.—BARCELONA

M C M X X X

1930



# HISTORIA DE ESPAÑA

Y DE LA  
CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA

---

TOMO V - EDAD CONTEMPORÁNEA

POR EL DR.

DON PIO ZABALA Y LERA

DOCTOR EN DERECHO Y EN FILOSOFÍA Y LETRAS  
CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA EN LA UNIVERSIDAD DE MADRID  
ANTIGUO CATEDRÁTICO DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA  
EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA  
CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA  
EX-DIRECTOR GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA  
EX-SUBSECRETARIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA  
ETC., ETC.

(VOLUMEN II)

LA REVOLUCION DE 1868  
LA RESTAURACION BORBONICA

---

SUCESORES DE JUAN GILI

CORTES, 581.—BARCELONA

M C M X X X

Es propiedad. Reservados  
todos los derechos. Queda  
hecho el depósito que mar-  
ca la ley.

946  
A279 $\frac{5}{2}$  A  
416468

Tipografía de los Editores

3 1223 00675 7158



# La Revolución de 1868. - La Restauración borbónica

## I.—HISTORIA POLITICA

**82. El Gobierno provisional.** — Cuando convencido el Marqués de la Habana de la imposibilidad de hacer frente al pronunciamiento, abandonó el Poder, encargóse de ejercerlo una Junta compuesta por terceras partes de unionistas, progresistas y demócratas, presidida por don Pascual Madoz. Otra Junta de carácter radical, dirigida por el teniente coronel don Amós Escalante, dificultó algún tanto la gestión de la primera; pero entendidas al fin, convinieron en refundirlas en una sola, de la que formaron parte Rivero, Madoz, Lorenzana, Escalante, Figueras, Figuerola, Romero Robledo, Vega de Armijo, Morayta, Navarro Rodrigo, Muñiz, Orense y otros. A esta Junta revolucionaria se debió el manifiesto a tenor del cual se fijaban como principios fundamentales de la obra a realizar los siguientes: sufragio universal; libertad de cultos; libertad de enseñanza; libertad de reunión y asociación; libertad de imprenta sin legislación especial; descentralización administrativa que devolviera la autonomía a los Municipios y a las Provincias; juicio por jurado en materia criminal; unidad de fuero en todos los ramos de la administración de justicia e inamovilidad judicial.

Investido el Duque de la Torre, por acuerdo de la aludida Junta, de la facultad de constituir un *Gobierno provisional*, nombrólo el 8 de Octubre con los señores Prim (Guerra), Alvarez Lorenzana (Estado), Romero Ortiz (Gracia y Justicia), Topete (Marina), Figuerola (Hacienda), Sagasta (Go-

bernación), Ruiz Zorrilla (Fomento) y López de Ayala (Ultramar). El nuevo Gabinete recogió en un manifiesto, que vió la luz pública durante el mes de Octubre, la parte más substancial de las aspiraciones exteriorizadas por la Revolución; pero al tratar de la institución monárquica, procuró embozadamente combatir la aspiración republicana expresando que el mal éxito que había tenido ésta en Europa debía excitar a la meditación de todos, y que en punto a la Monarquía, no era justo confundir el desprestigio de una familia reinante con la magistratura que simbolizaba.

Con actividad realmente extraordinaria se aplicaron los miembros del Gobierno provisional a cumplir los compromisos contraídos con la Revolución. A tal efecto, fué decretada la libertad de enseñanza y de imprenta; se sancionaron los derechos de reunión pacífica, para fines lícitos, y de asociación; facultóse a las Juntas revolucionarias para que eligiesen los Ayuntamientos

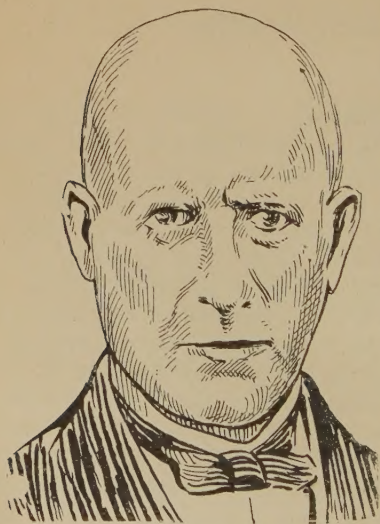


Fig. 113.—Don Pascual Madoz

y Diputaciones que habían de sustituirlas, hasta que se nombrasen estas Corporaciones por votación popular; vió la luz el Decreto sobre ejercicio del sufragio universal, y, finalmente, se convocaron Cortes constituyentes para el 11 de Febrero de 1869.

En la contienda electoral presentáronse formando un bloque los unionistas, los progresistas y parte de los demócratas, que se dirigieron al país (15 de Noviembre) para expresar que, aun procediendo de distintos campos, estaban de acuerdo en



reconocer que la forma monárquica era la que imponían la consolidación de la libertad y las exigencias de la Revolución, pero que, al hacer esta declaración, no se referían a la Monarquía de derecho divino, que acababan de derribar, sino a la que nacía del derecho del pueblo, superior a todas las instituciones y a todos los poderes. Discrepando de la opinión monárquica anteriormente expuesta, propugnaba la excelencia de la República no escaso número de demócratas, que respondiendo a la gran reunión celebrada en la explanada de las Caballerizas por unionistas y progresistas, organizaron otra en el Campo de la Lealtad, reunión en la que lució su esplendoroso verbo el gran tribuno Emilio Castelar. Tales discrepancias, que en Madrid no produjeron alteración sensible en el orden público, al trascender a provincias como Valladolid, Badajoz, Málaga, Cádiz y Burgos, dieron lugar a choques violentos entre monárquicos, republicanos y aun socialistas, choques que daban sobrado fundamento a los partidarios de la dinastía Borbónica para estimar que el rápido desprestigio de las instituciones nacidas al calor del pronunciamiento de Septiembre, haría menos difícil y más pronta la restauración de aquélla.

Reunidas las Cortes constituyentes en una sola Cámara, el 11 de Febrero de 1869, pudo cumplidamente apreciarse el resultado de la contienda electoral, en la que habían obtenido la mayor representación los progresistas, siguiéndoles los unionistas y a éstos los demócratas monárquicos. Formaban la oposición los republicanos, bastantes en número; los absolutistas dirigidos por el Arzobispo de Santiago, Cuesta, el Obispo de Jaén, don Antolín Monescillo, y el canónigo Manterola; y, últimamente, tres antiguos unionistas partidarios de la dinastía exonerada<sup>1</sup>. Leído el discurso de apertura por el general Serrano, constituyéronse las Cortes bajo la presidencia del Sr. Rivero. En ellas resignó el Duque de la Torre los poderes que había recibido de la Junta de Madrid, tras de lo cual se le concedió un voto de confianza autorizándole para formar Gobierno, que desde aquel momento trocó su nombre de *provisional* por el de *Poder ejecutivo*.

1. El jefe de esta exigua minoría era D. Antonio Cánovas.

**83. El Poder ejecutivo, la Constitución de 1869 y la Regencia del Duque de la Torre.**—Constituido el Gobierno en *Poder ejecutivo*, presentó en las Cortes el proyecto de Ley de amnistía por delitos de imprenta, que fué aprobado sin discusión; no obstante las promesas formuladas de abolir las quintas, hizo la petición de veinticinco mil hombres para el reemplazo del ejército, acordándola asimismo la Asamblea, y solicitó, y le fué concedida también, la autorización para contratar un empréstito de cien millones.

Formada una Comisión para redactar el proyecto de Código constitucional, terminó su ardua tarea en veinticinco días, presentándola a las Cortes en las que fué discutida brillantemente, destacándose Cánovas del Castillo por la profundidad de sus conocimientos en la ciencia política, Castelar por su maravillosa palabra y Manterola por el noble ardimiento que puso en defender la unidad católica.

Aprobada la Constitución por 214 votos contra 55 el 1.º de Junio, fué promulgada el día 6. Aparece dividido el Código constitucional a que hacemos referencia en 112 artículos distribuidos en once títulos, consagrándose en ellos los *derechos individuales* de seguridad personal, inviolabilidad del domicilio, propiedad, culto y libertad de enseñanza; los *derechos políticos* de sufragio y obtención de cargos públicos, y los *derechos mixtos* de libertad de pensamiento, reunión y asociación, y petición.

En la parte orgánica, establece la Constitución del 69 el principio de la soberanía nacional: la Monarquía como forma de Gobierno; las Cortes como único poder legislativo, incumbiendo solamente al Monarca la sanción y promulgación de las Leyes; el Rey como personificación suprema de la potestad ejecutiva, y los Tribunales como encargados de ejercer el Poder judicial. Instauraba la dualidad de Cámaras (Senado y Congreso), cuyos miembros representarían a la Nación y no exclusivamente a los electores que los nombrasen; daba al Senado carácter electivo lo mismo que al Congreso; preceptuaba que las Cortes habrían de estar reunidas a lo menos cuatro meses cada año, pudiendo el Rey suspenderlas, pero sin estar facultado a hacerlo más que una sola vez cada



legislatura; asimismo, aparecía facultada la Corona para disolver uno de los Cuerpos Colegisladores o ambos a la vez, mas con la obligación de reunir los nuevos dentro de los tres meses; declaraba la persona del Monarca sagrada e inviolable, y responsable, en cambio, ante las Cortes la de los Ministros por los delitos que cometieran en el ejercicio de sus funciones, y prohibíase a los Consejeros responsables la asistencia a las sesiones de las Cámaras cuando no pertenecieran a uno de los Cuerpos colegisladores. Regulaba la Constitución el nombramiento de la Regencia en el caso de que se imposibilitase el Rey para ejercer su autoridad, o en el de que vacare la Corona siendo menor de edad el inmediato sucesor, reproduciendo sobre el particular las prescripciones contenidas en el Código fundamental de 1837. Establecía el juicio por jurados, la unidad de Códigos y la de fueros, y apuntaba alguna mayor independencia en el gobierno y dirección de los pueblos por los Ayuntamientos y las Diputaciones.

Como era lógico suponer, el debate sobre la cuestión religiosa fué en el que pusieron más pasión las fracciones políticas en que se dividía la Asamblea, propugnando los demócratas la libertad de cultos y la separación de la Iglesia y del Estado, inclinándose los unionistas a la tolerancia, y defendiendo la unidad religiosa los elementos más caracterizados de las derechas. Las irreverentes intervenciones que en la discusión tuvo el diputado catalán Sr. Suñer y Capdevila, fueron rechazadas, no sólo por los católicos, sino por todas las personas dotadas de un mediano buen gusto. El artículo 21 referente a la cuestión religiosa quedó redactado y aprobado en la siguiente forma:

“La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica.

“El ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.

“Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior”.

Promulgada la nueva norma constitucional y en vista de las dificultades con que se tropezaba en la elección de la persona que había de ocupar el Trono, acordaron las Cortes establecer una *Regencia*, a la que fué elevado el Duque de la Torre, el cual nombró un Gobierno presidido por Prim (19 de Junio) en el que entraron los mismos Ministros que en el anterior,

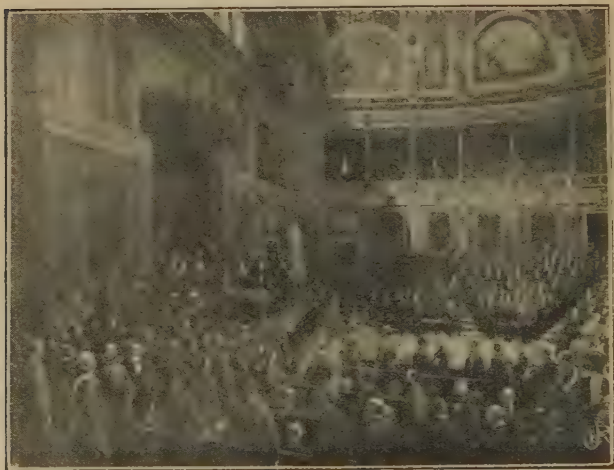


Fig. 114.—Juramento del Duque de la Torre como Regente del Reino

menos los titulares de Estado y Gracia y Justicia Sres. Lorenzana y Romero Ortiz, que fueron sustituidos por don Manuel Silvela y don Cristóbal Martín Herrera. El general Topete había anteriormente salido del Departamento de Marina por causa de su enemistad con los demócratas, y éstos, combatiendo a Silvela y a Martín Herrera, lograron que formaran parte del Gabinete sus correligionarios los Sres. don Manuel Becerra y don José Echegaray. Suspendidas las sesiones el 15 de Julio, tuvo el Gobierno que dedicarse a restablecer el orden gravemente perturbado en Andalucía y Levante por los republicanos y los socialistas. No habiendo podido conseguir los Ministros que las Cortes aprobasen la

nueva Ley de orden público, tuvieron que poner en vigor la de 17 de Abril de 1821, y ello les valió rudísimos ataques de la minoría democrática al reanudarse las sesiones durante el otoño de 1869. Al finalizar este año, aparecía el nuevo régimen como algo ya gastado y envejecido.

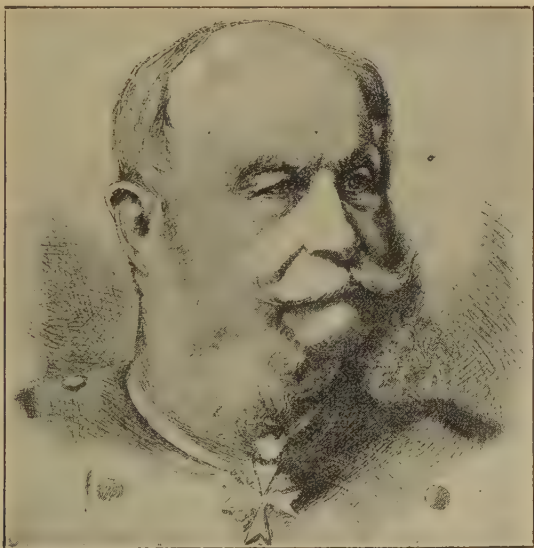


Fig. 115.—Guillermo I

Entre tanto el general Prim trabajaba activamente para hallar un candidato a la Corona española. Dos eran los que parecían, por sus circunstancias, merecer preferentemente aquel carácter: el príncipe don Alfonso, hijo de doña Isabel, y el pretendiente don Carlos, hijo de don Juan de Borbón, pero ninguno de ellos había conseguido inspirar simpatías a los directores de la política en boga. Otro aspirante era el Duque de Montpensier, esposo de la infanta Luisa Fernanda. Había servido de instrumento a la revolución y contaba entre los unionistas con decididos partidarios. Ello no obstante, la oposición que a sus pretensiones hizo Napoleón III y la cir-



cunstancia de ser el aspirante favorecido por uno de los partidos del victorioso pronunciamiento, le restaron desde los primeros momentos probabilidades de triunfo. Mostraron una vez más los progresistas sus aficiones al proyecto de unidad ibérica, sacando a plaza el nombre del rey de Portugal don

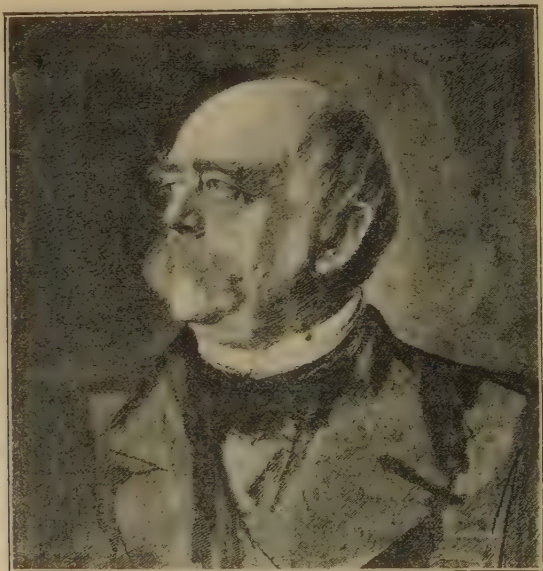


Fig. 116.—Bismarck

Fernando Coburgo, cuya esposa doña María de la Gloria, ya difunta, recuerdos tan gratos evocaba al liberalismo español; mas los rumores insistentes, aunque infundados, del veto francés y las escasas ambiciones del aludido Príncipe, tampoco permitieron que su candidatura adquiriera la menor consistencia. Pensaron asimismo los conspicuos de la situación en el Duque de Aosta, don Amadeo de Saboya, hijo del Rey de Italia, y en el Duque de Génova, primo de aquél. Uno y otro rechazaron el ofrecimiento: el de Aosta por estimarse inexperto en el arte de gobernar, y el de Génova por sugestio-

nes de su madre, atemorizada por las referencias que se le daban sobre el carácter indómito de los españoles. Otro candidato hubo extraordinariamente popular: don Baldomero Espartero. Folletos, artículos y manifiestos menudearon en su pro; pero entre los hombres más significados de la política no tuvo el mismo ambiente, y el propio Duque de la Victoria alegó sus muchos años y su poca salud para no aceptar la honrosa designación.



Fig. 117.—Napoleón III

Sin reparar en las consecuencias que pudiera producir con su determinación, acogió el general Prim, por instigaciones de Bismarck, el nombre del príncipe alemán Leopoldo de Hohenzollern, traído y llevado por la prensa prusiana de aquellos días. Tampoco se mostró propicio Leopoldo a tal designación, y ello dió margen a que nuevamente adquiriese algún predicamento el empeño del Duque de Montpensier. Sin embargo de esto, habiéndose producido en Marzo de 1870 la cuestión personal entre el infante don Enrique y el Duque, y a consecuencia de ella la muerte del primero a manos del segundo en desafío, tan deplorable suceso dió definitivamente al traste con las pretensiones del esposo de Luisa Fernanda. Al poco tiempo, una vez más suena el nombre del Príncipe teutón merced a la insistencia de Bismarck, y una vez más también el Marqués de los Castillejos preocupándose poca cosa de las repercusiones a que pudiera dar lugar en la política europea el prevalecimiento de las aspiraciones alemanas, insta a que acepte la Corona Leopoldo y, a la postre, lo consigue, así como que el Rey de Prusia apruebe dicha aceptación. Se hace pública en España y Francia tal noticia; Napoleón III, el Duque de la Torre y Olózaga, nuestro Emba-

jador en París, trabajan para que Leopoldo rectifique su decisión, resultado que al fin logran; pero el Emperador francés aspira a que el Rey de Prusia le dé seguridades de que no autorizará otra vez la candidatura del Príncipe alemán; no se aviene aquél a esta exigencia; Bis-



Fig. 118.—Emperatriz Eugenia

marck entonces adultera el texto de un telegrama de su Soberano, adulteración que presenta a éste no queriendo recibir al Embajador francés Benedetti, y tal desaire, al herir la dignidad nacional de Francia, produce la guerra con Prusia.

Pero España sigue sin candidato a la Corona. En vista del fracaso de Prim, su amigo don Francisco de P. Montemar, nuestro Ministro en Florencia, tantea de nuevo al monarca italiano Víctor Manuel y tras de vencer no

pocas resistencias, consigue que el Duque de Aosta se decida a empuñar el Cetro español (31 de Octubre de 1870).

En la sesión del día 3 de Noviembre da cuenta Prim a las Cortes de la disposición favorable del Príncipe italiano, y en la celebrada el día 16 es elegido rey Amadeo por 191 votos, contra 60 que se emiten por la República federal, 27 por Montpensier, 8 por Espartero, 2 por don Alfonso y 19 papeletas en blanco. El día 27 de Diciembre al salir del Congreso el Marqués de los Castillejos, para dirigirse por la calle del Turco al Ministerio de la Guerra, en la desembocadura de dicha calle a la de Alcalá, varios hombres apostados dispararon sobre el coche en que iba el General con sus ayudantes. Ocho balas y postas recibió el Conde de Reus en el brazo izquierdo, que le destrozaron el húmero. Los facultativos militares apreciaron desde el primer momento la gravedad de las heridas, pero indecisos en punto a practicar la operación que el famoso mé-





Fig. 119.—El rey Amadeo ante el cadáver de Prim



Fig. 120 Amadeo I prestando juramento ante las Cortes

dico don Melchor Sánchez de Toca juzgaba indispensable, no pudieron evitar que el ilustre General sucumbiera a las ocho y cuarto de la noche del día 30.

Topete, Concha y Zabala fueron a esperar a Cartagena al nuevo Monarca, que el 2 de Enero entró en Madrid, y después de prestar juramento ante las Cortes en manos de Ruiz Zorrilla y de ofrecer su pésame a la Marquesa de los Castillejos, dirigióse a la basílica de Atocha para orar ante el cadáver del infortunado Conde de Reus.

#### 84. Reinado de Amadeo de Saboya.

—Al ceñir la Corona Amadeo de Saboya, el panorama político español ofrecíase dividido entre progresistas, unionistas, demócratas, carlistas, republicanos, monárquicos moderados y alfonsinos. Incondicionales del Monarca eran

los que habían trabajado y hecho triunfar su causa, los progresistas, a los que seguían en devoción los unionistas y parte de los demócratas. Como partidos extremos figuraban el carlista y el republicano, y como pequeña zona evocadora de la dinastía y de la política proscrita, la agrupación moderada y la incipiente alfonsina con Cánovas como caudillo.

La experiencia de unos cuantos meses bastó para que en el conglomerado de los partidos autores de la Revolución se advirtieran dos orientaciones cada vez más definidas: la templada, defensora de la Constitución de 1869, representada por Sagasta<sup>1</sup>, y la radical, partidaria de las más audaces reformas,



Fig. 121.—Prim

1. Llamábase D. Juan Mateo y Escolar, aunque la costumbre hizo conocerle por su segundo nombre de pila y el segundo apellido paterno. Era hombre sagacísimo, afable y dotado de extraordinario don de gentes. "Su repulsión a los extravíos revolucionarios está bien caracterizada—dice el Marqués de Lema en su interesante obra, *De la Revolución a la Restauración*, tomo I, pág. 400,—en la calificación de los derechos individuales tal como los definían invariablemente los doctores del nuevo régimen revolucionario: "ilegislables, imprescriptibles, inalienables..."



con Ruiz Zorrilla al frente<sup>1</sup>. En tal deslinde de campos, los progresistas moderados y los unionistas propendían a formar la derecha o partido *constitucional*, y los progresistas exal-



Fig. 122.—D. Francisco Serrano, Duque de la Torre

tados y los demócratas la izquierda radical, lindante con el republicanismo.

No quiso Amadeo de Saboya decidir la cuestión entre unos y otros, todavía no manifestamente en pugna, y aspiró, por lo contrario, a mantener la unión entre todos, encargando al Duque de la Torre de formar una situación que representara la coalición de cuantos elementos habían contribuido al alzamiento de 1868. Por tal causa entraron en el Ministerio del 4

“Inaguantables”, exclamó una vez Sagasta, Ministro de la Gobernación, víctima de la interpretación que se daba a los ponderados derechos”.

1. Ruiz Zorrilla era el prototipo del hombre de acción. No poseía una gran capacidad, pero era tenaz y autoritario, aunque blasonaba siempre de liberal y demócrata. Su oratoria era ruda e incorrecta, y su cultura dejaba bastante que desear. Famoso se hizo el anuncio por él hecho siendo Ministro de disponerse a presentar a las Cámaras varios proyectos *civiles y criminales*.

de Enero de 1871 como factores componentes Martos (Estado), Sagasta (Gobernación), Ulloa (Gracia y Justicia), Beranger (Marina), Moret (Hacienda), Ruiz Zorrilla (Fomento), y López de Ayala (Ultramar), aprestándose unos y otros a la batalla electoral a que los llamaba la monstruosa alianza de carlistas y republicanos "dispuestos a que la situación no tuviese más herederos que el caos". Salió victoriosa de las urnas la coalición gobernante, pero su mayoría, aunque nutridísima, resultó por demás heterogénea por hallarse integrada de individualidades pertenecientes a las distintas agrupaciones que tenían su representación en el Ministerio.

Amadeo, que había ido a Alicante a recibir a su esposa doña María Victoria<sup>1</sup>, asistió después a la apertura de las Cortes el 3 de Abril, manifestando en ellas su propósito de gobernar dentro de la esfera constitucional con España y para España, con los hombres, con las ideas y con las tendencias que dentro de la legalidad le indicara la opinión pública representada por la mayoría de las Cámaras, verdadero regulador de las Monarquías constitucionales. El discurso del Rey fué aplaudido por Senadores y Diputados, especialmente cuando expuso en él su deseo de realizar la difícil misión que le estaba encomendada mientras no le faltase la confianza del pueblo, *a quien jamás trataría de imponerse*.

Consecuente con la línea de conducta que se había trazado, quiso Amadeo de Saboya cumplir sus deberes constitucionales con toda fidelidad, inspirando además sus actos en un generoso espíritu de concordia enderezado a paliar los rigores de nuestras cerriles contiendas partidistas. Personalmente se

1. Llamábase la nueva soberana de España María Victoria del Pozo de la Cisterna, y era hija del príncipe Carlos y de la condesa Luisa Ghislaine de Merode. "No conozco en Europa—decía la ilustre María Rattazi, al hablar de la Duquesa de Aosta, en su hermoso libro *Florescencia.—Retratos, Crónicas, Confidencias*—joven Princesa de más fácil conversación, de mayor inteligencia, de más oportunidad, y al mismo tiempo de más conveniente seriedad. No se ha formado en el mundo, sino que se ha deslizado su infancia en el rincón del hogar, bajo el ojo maternal siempre vigilante, y acompañada de sus queridos libros. Y ha leído tanto, ha estudiado tanto, que, ayudada de un recto sentido, ha adivinado la vida antes de conocerla: la joven Princesa posee la erudición de un literato alemán, y además del latín y del griego antiguo, que le son familiares, habla con facilidad cinco o seis idiomas; ha estudiado las matemáticas y podría discutir con Babinet sobre el cálculo integral y diferencial".

opuso a que se castigase a ningún general ni oficial de los que se habían negado a jurarle como Rey<sup>1</sup>; asistió a la fiesta cívica del 2 de Mayo complaciéndose en asociarse a ella; dió público testimonio de su religiosidad presidiendo la procesión del Corpus y dispensando decidida protección a los caritativos proyectos de la Reina en favor de los pobres, y percatado de que las diferencias entre sus Consejeros responsables impedían su continuación en el Poder, no quiso que fuera oficialmente planteada la crisis sin que las Cortes expresaran con sus votos la forma de resolverla parlamentariamente.

Dimitido el primer Ministerio de aquel reinado, puso especial empeño el Soberano en resolver la pugna entre constitucionales y radicales mediante la formación de dos partidos que turnasen en el Poder. No pudo lograrlo por los temores de Sagasta de que se le creyera entibiado en sus fervores progresistas, y aspiró entonces a que otra vez se encargara el Duque de la Torre de formar una situación que permitiera mantener aliados a unionistas, demócratas y progresistas. Fracasado también este intento, y queriendo dar cumplida prueba de las sinceras inclinaciones liberales de su espíritu, hizo objeto de la regia confianza a Ruiz Zorrilla (24 de Julio), es decir, al que comenzaba a representar la extrema izquierda de los parciales de la monarquía saboyana.

Propúsose Ruiz Zorrilla realizar un plan de economías en el presupuesto y llevar a las leyes el carácter innovador que permitiera ganar cuando menos la tolerancia de los partidos más radicales. Ello planteó claramente la pugna entre Sagasta y Ruiz Zorrilla, que desde entonces lucharon encarnizadamente para atraer a sus respectivas banderías el mayor número posible de afiliados al progresismo.

Transcurrido el verano, durante el cual visitó Amadeo al-

1. Dice Nicolás Estévanez en sus *Fragmentos de mis memorias*, pág. 349: "Uno de los que no juraron, perdiendo por lo tanto su carrera, fué el capitán general Marqués de Novaliches. Mi amigo y maestro el comandante Villamartín, que había sido ayudante del citado general, me leyó una carta en que éste le consultaba el caso del juramento, y Villamartín le contestó, palabra más o menos: *Hay tres españoles, sólo tres, que no pueden jurar: el preceptor del Príncipe Alfonso, el vencido en Alcolea y el general Novaliches*".

"Tres personas al parecer distintas—añade Estévanez—y un solo injuramentado verdadero".



gunas provincias, abriéronse las Cortes el 2 de Octubre y en la votación para la Presidencia del Congreso venció Sagasta a Rivero, candidato del Gobierno. Presentó por tal motivo su dimisión Ruiz Zorrilla, y el Monarca, después de requerir



Fig. 123.—D. Manuel Ruiz Zorrilla

inútilmente a Espartero para que formara una situación, encomendó por consejos de Sagasta la formación del nuevo Gabinete al Sr. Malcampo (5 de Octubre). No obstante las manifestaciones de éste en sentido de querer gobernar con el mismo programa que el Ministerio anterior, se vió combatido por republicanos, demócratas, alfonsinos y carlistas. Estos últimos presentaron una proposición solicitando que declarase el Congreso que infringía la Constitución cualquiera que

coartase la libertad de fundar y conservar los Institutos y Comunidades religiosas, que la Iglesia autorizaba y amaba; y el Gabinete se vió con tal motivo derrotado por las oposiciones enemigas del Trono y por los demócratas que también votaron con ellas. Suspendidas las sesiones de Cortes (18 de Noviembre)<sup>1</sup>, dimitió Malcampo<sup>2</sup>, y el 21 de Diciembre asumió la responsabilidad de formar otro Ministerio el Sr. Sagasta, con la real promesa de que en momento oportuno le sería otorgado el Decreto de disolución de las Cortes. Presentóse don Práxedes ante las que todavía funcionaban y pudo convencerse de que no era posible gobernar con ellas, ya que seguía la coalición de las fuerzas parlamentarias más dispares impidiendo por sistema la normal existencia de cualquier situación ministerial<sup>3</sup>. Disueltas al fin las Cámaras, señalóse el 2 de Abril de 1872 para verificar las elecciones y el 24 del mismo mes para la reunión del futuro Parlamento. A la lucha comicial fueron reunidos carlistas, radicales y republicanos, firmándose la disparatada coalición en casa del Sr. Ruiz Zorrilla. En presencia de tales desvaríos, Amadeo presidió dos Consejos de Ministros en los que hubo de leer sendos *Papelitos* hablando de su constitucionalismo y del deseo de que, mediante la publicación de sus respectivos programas, definieran su actitud las dos parcialidades dirigidas por Sagasta y Ruiz Zorrilla, a fin de que la opinión supiera a qué atenerse y de que la Monarquía pudiera establecer con ellas la normal rotación en el ejercicio del Poder. Con la anuencia de los unionistas y de

1. Costó no pocos esfuerzos al Presidente del Consejo convencer a D. Amadeo de que debía firmar el Decreto de suspensión de las sesiones parlamentarias. Consiguiólo al fin y dirigiéndose en las primeras horas de la mañana del 18 de Noviembre al Congreso, en el que seguían discutiendo los Diputados por haberse prorrogado la sesión del 17, subió a la tribuna, y quitándose rápidamente el gabán, apareció de uniforme y leyó el aludido Decreto. Dió lugar lo sucedido a graciosos comentarios y a que en periódicos y revistas teatrales se aludiese al *gaban de Malcampo* durante algún tiempo.

2. Contribuyó también a la caída del Gobierno, no sólo el deseo del Monarca de que se abrieran las Cortes, sino el inicuo fusilamiento en la Habana de ocho estudiantes acusados sin pruebas de haber profanado el sepulcro de D. Gonzalo Castañón, fundador del periódico *La Voz de Cuba*.

3. Al conmemorar D. Amadeo el primer aniversario de su entronización, elevó a la categoría de Príncipe de Vergara al general D. Baldomero Espartero,

algún monárquico alfonsino, logró el partido constitucional sacar de las urnas la necesaria mayoría, pero ello se hizo a costa de no escasas violencias sobre el cuerpo electoral, y aún así y todo, sin poder impedir que los carlistas obtuvieran el triunfo de 35 de sus candidatos. Abiertas las Cortes fué en ellas rudamente combatido el Presidente del Consejo por una famosa transferencia de dos millones de reales de la Caja de Ultramar al presupuesto de Gobernación, con el pretexto de los servicios de vigilancia, pero en realidad para fines electorales. Sagasta se defendió torpemente acudiendo al recurso de dar publicidad a una serie de documentos particulares, que sin absolverle de nada, le malquistaron hasta con sus propios amigos. Comprendiendo su lamentable equivocación, abandonó el Poder que le fué confiado al Duque de la Torre (26 de Mayo de 1872).

Hallábase éste a la sazón acaudillando en el Norte de la Península las huestes liberales frente a las absolutistas que desde fines del mes de Abril habían hecho su aparición en Navarra y las Vascongadas, pretextando don Carlos que a los desmanes cometidos por el Gobierno en las elecciones, se debía la determinación de empuñar sus partidarios una vez más las armas. Penetró don Carlos en España por la frontera de Ascaín (2 de Mayo) dirigiéndose a Oroquieta, pero aquí fué sorprendido por el general Moriones, que le obligó a regresar precipitadamente a Francia. Luchóse también, aunque con poca intensidad, por el lado de Vizcaya, y consiguió al fin el Duque de la Torre que se ajustara el convenio de Amorevieta (24 de Mayo de 1872), a tenor de las siguientes estipulaciones:

“1.º—Se concede indulto general a todos los insurrectos carlistas que se hayan presentado, los cuales serán provistos de un documento para que nadie les moleste.

2.º—Gozarán de igual beneficio los que en adelante se presenten con armas o sin ellas, a los cuales se les dará todo género de garantías para su seguridad.

3.º—Los que hubieran venido de Francia, podrán volver o quedarse en España, y al efecto se les proveerá del salvoconducto necesario, para que por nadie sean molestados.

4.º—Los Generales, Jefes, Oficiales y demás individuos de tropa que procedentes del ejército se hubieran alzado en armas en favor de la causa carlista, podrán ingresar de nuevo en el ejército, con los mismos empleos que tenían al desertar.

5.º—La Diputación de Vizcaya se reunirá con arreglo a fuero, so el árbol de Guernica, y determinará el modo y manera de pagar los gastos que ha ocasionado la guerra con motivo de la insurrección”.

El Gabinete moderado del Duque de la Torre, al que pertenecía, aunque a título de independiente, el Sr. Elduayen, amigo de Cánovas del Castillo, temeroso de la alianza de los demócratas y los republicanos, decididos a acudir a las armas para hacer triunfar sus aspiraciones, solicitó de Amadeo la suspensión de garantías. No se avino el Rey a tal determinación, que pugnaba con sus opiniones más arraigadas sobre los deberes constitucionales, y el Ministerio entonces hizo dejación de su autoridad en manos del Soberano (12 de Junio). Ocurría esto cuando acababa Ruiz Zorrilla de retirarse a la vida privada (31 de Mayo) en vista de las dificultades que a su política creía que se le oponían en Palacio y en razón también al peligroso derrotero tomado por gran parte de las fuerzas democráticas al aliarse con las republicanas. El Monarca quiso hacerle salir del ostracismo a que se había condenado, y tras de no pocos esfuerzos, logrólo al cabo, constituyéndose el 13 de Junio un nuevo Gabinete bajo la presidencia del aludido Ruiz Zorrilla en compañía de los señores Martos (Estado), Córdova (Guerra), Montero Ríos (Gracia y Justicia), Beranger (Marina), Ruíz Gómez (Hacienda), Echegaray (Fomento) y Gasset y Artime (Ultramar). Aunque al exponer este Gobierno su programa prometió “regenerar la Patria por medio de la libertad”, no pudo conseguir que los republicanos de acción abandonasen su actitud intransigente y contó, desde luego, con la enemiga de los constitucionales, que se dispusieron a hacerle la vida imposible.

Disueltas las Cortes el 28 de Junio y convocadas las futuras para el 15 de Septiembre, todos los elementos políticos, menos los carlistas, se aprestaron a la contienda, y mientras en Jerez y en Sevilla se alteraba el orden por los republicanos



y los graciosamente llamados *húsares*<sup>1</sup>., el Gobierno trataba de enfervorizar a sus correligionarios lanzando a la circulación extensos y detallados programas de reformas.

El 18 de Julio, al pasar los Reyes por la calle del Arenal, cerca de la de las Hileras, fueron objeto de un atentado, del que salieron ilesos. El 24 de Agosto se verificaron las elecciones que dieron 1.339.733 sufragios en favor de los radicales; 386.734 en el de los federales; 108.740 en el de los conservadores y 45.693 en pro de los alfonsinos. Abriéronse las Cortes el 15 de Septiembre sin que en ellas pudieran tener asiento el Duque de la Torre, Sagasta, Cánovas, Ríos Rosas y Topete, y mientras el pequeño número de constitucionales triunfantes atacaba al Ministerio, proclamábase la Federal en algunas provincias, estallaban motines republicanos en el Ferrol, Málaga y Madrid y retoñaba la guerra carlista en Cataluña y el Maestrazgo. Por si ello fuera poco, dos nuevos conflictos vinieron a complicar más y más la vida del Gabinete: la abolición de la esclavitud en Ultramar y la llamada "cuestión de los artilleros". Respecto de la primera, tenía el Ministro Sr. Gasset un proyecto enderezado a la aludida abolición por medio de un procedimiento gradual, de aplicación solamente a Puerto Rico, ya que el estado de insurrección en que se hallaba Cuba impedía extender a ésta los beneficios del citado proyecto. La mayoría del Gobierno, discrepando de la opinión del Sr. Gasset, se pronunció por la abolición completa, y ello produjo la dimisión del titular de Ultramar, que fué sustituido por don Tomás María Mosquera, y la formación de la *Liga Ultramarina*, llamada a combatir los planes del Gabinete en el respecto a que hacemos referencia.

La segunda cuestión, es decir, la artillera, se planteó por la negativa de los jefes y oficiales del arma de Artillería a cumplir con sus deberes militares mientras el general Hidalgo, nombrado primeramente capitán general de las Vascongadas y después destinado a Cataluña, ejerciera algún mando. Fundaban los artilleros su resolución, en no querer servir a las órdenes de quien, como Hidalgo, había sido responsable de la muerte de compañeros del Arma en la tristemente famosa

1. Gentes del pueblo con su chaquetilla al hombro.

sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, el 26 de Junio de 1866. Ruiz Zorrilla procuró contemporizar, pero vigorizado por el voto de las Cortes, propuso al Rey la disolución del Cuerpo de Artillería. Negóse Amadeo a tal pretensión; mas apremiado a acceder a ella y convencido, por otra parte, de que sus esfuerzos por regir constitucionalmente al país se estrellaban en la protervia de los hombres, firmó el 9 de Febrero la disolución del aludido Cuerpo, pero el día 11 abdicó la Corona, dejando en el espíritu de los españoles libres de la pasión partidista, el grato recuerdo a que es siempre acreedor el hombre leal que sabe hacer honor a sus promesas y juramentos.

A decir verdad, resulta incomprensible que no pudiera consolidarse en el Trono aquel hombre que tributó un sincero culto a sus obligaciones como Rey constitucional. Cuando tan recientes estaban los recuerdos de la época isabelina, sorprende ciertamente que los partidos adictos a la dinastía saboyana no pudieran enfrenar sus ambiciones personales en obsequio de quien tan reiteradamente daba testimonio de acatamiento a la voluntad del país. De ello mismo y de cuanto en tantos otros casos ha servido de fundamento a las más hiperbólicas loanzas, se hizo uso entonces para desacreditar al regio matrimonio. Criticábase la modestia con que los Monarcas vestían y la llaneza con que trataban a sus súbditos; su falta de afición a las aparatosas y protocolarias solemnidades palatinas; la sobriedad de su mesa; la escasa iluminación del Alcázar; las conmovedoras pruebas de maternal amor que doña María Victoria prodigaba a sus hijos; la falta de inteligencia y cultura de los esposos; su condición de extranjeros; las aventuras amorosas del Monarca... Y como los más encarnizados detractores eran los elementos adictos a la casa de Borbón, por fuerza obliga tal actitud a sospechar si quienes de tal modo se conducían al formular sus críticas, es que añoraban por ventura las prodigalidades de Isabel II, el desbarajuste de la administración del Real Patrimonio, las crisis ministeriales al compás de los rigodones, las desavenencias conyugales con el aparato que pudiera hacerlas más escandalosas, la hórrida sintaxis y menguada ortografía de la

hija de Fernando VII y la nada edificante privanza de los Serrano, Puig Moltó y Marfori.

Inexplicable es, sin duda, que aquel Soberano, arquetipo de monarcas constitucionales, no hallara entre los que se llamaban sus adictos la abnegación necesaria para, cuando menos, no dificultar la consolidación de una dinastía esencialmente liberal y democrática.

**85. La República española.**—Reunidos en una sola Asamblea el 11 de Febrero de 1873 los Cuerpos Colegisladores, no obstante la prohibición del artículo 47 del Código constitucional, acordaron por 258 votos contra 32 la proposición que sigue: “La Asamblea nacional reasume todos los Poderes y declara como forma de Gobierno la República, dejando a las Cortes constituyentes la organización de esta forma de gobierno”.

Aunque se había privadamente convenido para el caso en que Amadeo dimitiera que el Poder ejecutivo se integrara por partes iguales de elementos republicanos y demócratas, presididos por el Sr. Rivero, que abandonaría la dirección de la Asamblea para que fuera asumida por el Sr. Figueras, la intemperancia característica de don Nicolás María al manifestarse de un modo violento en la primera parte de la sesión del día 11, produjo como consecuencia el que el Sr. Martos le echara en cara, con aplauso de Diputados y Senadores, “que no estaba bien que contra la voluntad de nadie pareciese que empezaban las formas de la tiranía, el día que la Monarquía acababa”. Tan acerada frase dió al traste con la primacía que Rivero se atribuyera y produjo como consecuencia el que, nombrados por Diputados y Senadores los ele-



Fig. 124.—D. Nicolás M.<sup>a</sup> Rivero

mentos encargados de encarnar el Poder ejecutivo, quedara aquél excluido del mismo, y que, verificada la elección de Presidente de la Asamblea nacional, resultara elegido Martos por 222 votos contra 20 que obtuvo Rivero.



Fig. 125.—Estanislao Figueras

Entraron a formar el primer Ministerio de la República don Estanislao Figueras (Presidencia), Castelar (Estado), Pi Margall (Gobernación), Nicolás Salmerón (Gracia y justicia), Beranger (Marina), Córdova (Guerra), don Francisco Salmerón (Ultramar), Becerra (Fomento) y Echegaray (Hacienda). No hubo, pues, para Martos, Córdova, Beranger y Echegaray, solución de continuidad al transformarse el sistema de gobierno español, y aunque el último de los citados señores procuró en la misma sesión del 11 justificar la rápida extravasación de los *cimbrios*<sup>1</sup> del recipiente monárquico al republicano, es lo cierto que no pudo sustraerse a la crítica general-

1 Así eran llamados los demócratas no republicanos por una cita histórica que, a la manera de los *persas* de 1814, habían insertado en un manifiesto. Tenían los cimbrios su círculo en la calle del Príncipe, y su presidente era el genial D. Nicolás M.<sup>a</sup> Rivero. De éste se cuentan una porción de graciosas anécdotas que pintan su natural. El día mismo que se proclamó la República, peroraba D. Nicolás desde la escalinata del Congreso ante las nutridas masas populares de las que formaba parte un sujeto de mala catadura, que se entretenía en injuriar al orador. Harto Rivero de tanta insolencia, finalizó un elocuente párrafo y casi en el mismo tono en que lo había pronunciado se dirigió al interruptor diciéndole: *Como baje, te reviento*.

Ocurrió un desfalco en el aludido círculo de la calle del Príncipe. Los adversarios políticos aprovecharon aquel suceso para decir pestes de los demócratas y éstos hicieron que se reuniese la Junta directiva del círculo, sin que pudiera acudir a la reunión su presidente Rivero, que se hallaba enfermo. Tomando por lo trágico los directivos el asunto del desfalco, estimaron que el partido debía un desagravio a la opinión y que ninguno podía ser más elocuente que el de que se quitase la vida uno de los miembros de la Junta. Acordóse que el suicida fuera el Presidente, y con tan disparatada embajada fueron a casa de Rivero, llevando la voz de todos el vicepresidente. *Conque—dijo D. Nicolás—uno debe sacrificarse, y ése, según ustedes... Sí, señor—respondió el Vicepresidente;—es doloroso, pero preciso que V. se suicide*. Don Nicolás lanzó entonces una exclamación irrecordable: *¡Hombre... suicídese usted! ¡No está en funciones de presidente!*



mente formulada contra la facilidad de acomodación que tan notorio cambio suponía<sup>1</sup>.

Así como la Monarquía saboyana se desgastó en el corto espacio de dos años por causa de la discrepancia entre los diferentes factores políticos que habían contribuido a entronizarla, así también la República española nació con elementos componentes de distinta procedencia, que, al entrar en lucha, contribuyeron al descrédito de la naciente forma de Gobierno. En efecto, mientras los representantes del Poder ejecutivo, respondiendo a sus compromisos con el país, concedían una amplia amnistía, reorganizaban el cuerpo de Voluntarios de la libertad y abolían las quintas, en Málaga y Montilla se perturbaba gravemente el orden, y en Barcelona tumultuosamente se arrogaba las funciones directoras la Diputación provincial, en tanto que, debilitada la autoridad del capitán general Contreras, la indisciplinada soldadesca vejaba a jefes y oficiales con el tristemente famoso grito: *¡Que bailen!*

A acrecer los motivos de perturbación vino el divorcio cada vez más patente entre republicanos y demócratas. Arbitros de la Asamblea eran éstos con Martos al frente, y dueños del Gobierno los republicanos, que clamaban porque la República fuera para quienes a ella estaban sinceramente adheridos y no para las gentes allegadizas que sólo aspiraban a medrar a su sombra. Prevalido Martos de su ventajosa posición en la Asamblea y contando con el apoyo de los generales Morio-

1. Como se ve, seguían disfrutando de actualidad los conocidos versos de Bartolomé José Gallardo, insertos en su *Diccionario crítico burlesco*:

Pero ¡hombre! todo no ha de ser Numancia,

La constancia es virtud, pero algo rancia.

Yo siempre en este género de esgrima

Me voy al lado del que se halla encima,

Cuando vi sublevarse al pueblo insano,

Prorrumpí: ¡viva el pueblo soberano!

Siguió la Central; y yo al encuentro

Saliéndole, me hallé como en mi centro.

Vino José primero, y sin gran pena

De su orden me colgué la berenjena.

Y si después, rodando más la bola,

Viene a mandarnos un bozal de Angola,

Veréis que con el negro me congracio,

Y aun hundiré a estornudos el Palacio...

Así se vive en puestos y en honores,

Con sólo en la opinión *cambiar colores*.

nes y Gaminde, intentó un golpe de Estado (24 de Febrero) que, al fracasar totalmente por la energía de Pi Margall, dió lugar a la exclusión de los Ministros monárquicos del Gabinete y a que se constituyese otro que, por entrar a formarle los Sres. Pi, Chao, Sorní y Tutau, recibió el gracioso nombre de *Ministerio de los pájaros*.

La anarquía creciente de Barcelona y la actitud cada vez más agresiva de la Asamblea, entorpecía en términos difíciles de concebir la acción del Gabinete. En aquella capital la clase de tropa, amparada por la Diputación, se disponía a manifestarse para exigir que se le diera la licencia absoluta, y en el seno de la Asamblea se debatían los Ministros para disolver ésta y poder conseguir cuanto antes que se convocaran Cortes constituyentes. Mal conjurado el primer conflicto, exacerbóse el segundo por la oposición de la mayoría parlamentaria de procedencia monárquica a acceder a que el Gobierno, disolviéndola, destruyera el instrumento de dominación que todavía conservaba entre sus manos la parcialidad democrático-radical. Percatada de tal resistencia la Diputación de Barcelona, y a pretexto del peligro que corría la causa republicana, se dispuso a proclamar violentamente el Estado catalán. Pi vió el riesgo de que se perdiera para siempre su amado proyecto de República federal y trabajó con todo ahinco para ahogar el movimiento secesionista de Cataluña, a cuyo efecto partió con destino a Barcelona el Sr. Figueras, logrando aquietar algún tanto los espíritus de aquellos exasperados federalistas. Entretanto se discutía en la Asamblea el proyecto de ley del Gobierno llamando al país a Cortes constituyentes para el 1.º de Mayo y prometiendo que no sería disuelta la Asamblea hasta que fueran votados los proyectos de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, supresión de la matrícula de mar, y organización, equipo y sostén de cincuenta batallones de cuerpos francos. Comprendía asimismo el proyecto ministerial el nombramiento por los Diputados de una Comisión permanente de carácter consultivo que podría abrir de nuevo las sesiones de Cortes caso de exigirlo las circunstancias, y que resignaría sus poderes en cuanto las Constituyentes quedaran reunidas. Tras de no pocos

esfuerzos, y habiéndose, entre otras, aprobado la humanitaria Ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico (22 de Marzo), se suspendieron las sesiones de la Asamblea. Pero la Comisión permanente, *única tabla de salvación del partido radical*, no conforme con la marcha del Gabinete, se dispuso a reunir las Cortes y a obtener de grado o por fuerza la dimisión de los Ministros. Contando éstos con el apoyo de los Voluntarios del republicanismo y con los guardias de orden público, tomaron posiciones ventajosas en la capital. Y cuando el día 23 de Abril la Comisión y sus adictos quisieron dar el golpe, seguros de la adhesión del capitán general de Castilla la Nueva Sr. Pavía, y de la Milicia Nacional, la falta de armonía

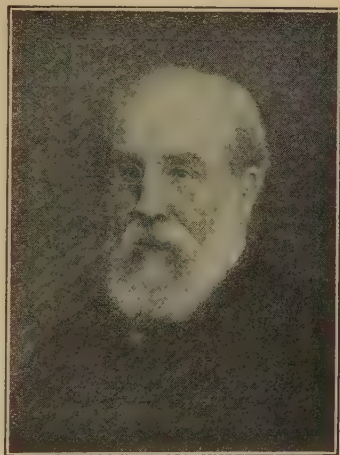


Fig. 126.—Francisco Pi y Margall

de los radicales, frente a la resolución y unidad de miras de los republicanos, dió a éstos el triunfo sin haber tenido que luchar, pues inactivas durante todo el día las fuerzas milicianas situadas en la antigua plaza de Toros, y activísimas, en cambio, las federales, vióse por éstas invadido el Congreso donde se hallaba deliberando la Comisión permanente, la cual fué materialmente disuelta y puestos en dispersión los asambleístas que se hallaban en el edificio.

Arbitro el Poder ejecutivo entonces de los destinos del país, presentóse después de haberse verificado las elecciones, en las Cortes constituyentes, abiertas el 1.º de Junio, y ante ellas hizo dejación de su poder. Proclamada la República democrático-federal, nombraron las Constituyentes un Gobierno con Pi y Margall como Presidente y Ministro de la Gobernación (7 de Junio), y por dimisión del Sr. Orense, fué elevado

a la Presidencia de la Cámara don Nicolás Salmerón (13 de Junio). El mismo día expuso Pi Margall su programa, angustiosa llamada a la unión de todos los republicanos para salvar la nueva forma de gobierno. Pero aquella fervorosa apelación se perdió en el estrépito promovido por la indisciplina mili-



Fig. 127.—D. Carlos de Borbón

tar y la anarquía a que suícidamente se entregaban en las provincias los elementos que se decían partidarios del régimen en vigor. Constituíase, en efecto, en la Ciudad Condal un Comité de salvación pública; alzábanse en Málaga los republicanos exaltados con don Francisco Solier al frente; daban muerte en Alcoy los revolucionarios al alcalde Sr. Albors. y en Sagunto los Cazadores de Madrid a su jefe Martínez Llagostera; Salvoechea, Alcalde de Cádiz, gobernaba a su antojo; en Sevilla se trabajaba por establecer el cantón anda-

luz, y en Cartagena, don Antonio Gálvez, de acuerdo con el general Contreras, formaba un gobierno en frente del de Madrid, apoderáronse de la escuadra surta en las aguas de aquel puerto. Para colmo de desdichas, don Carlos, penetrando en España (16 de Julio), se dirigía a Bilbao, y la guerra civil adquiría nuevos bríos en Navarra, las Vascongadas y Cataluña.

En presencia de tan lastimoso cuadro, Figueras huyó de España. El proyecto de Constitución federal, atribuido a Castelar y presentado en las Cortes el 17 de Julio, no llegó en puridad a ser formalmente discutido, y el Sr. Pi y Margall tuvo a la postre que abandonar el Poder (18 de Julio) sin dejar de su gestión otra huella merecedora de recuerdo que la Ley Benot relativa al trabajo de las mujeres, y los niños y la fundación por iniciativa del mismo Ministro del Instituto Geográfico y Estadístico.



En sustitución de Pi fué elevado a la Presidencia del Poder ejecutivo Don Nicolás Salmerón, el cual manifestó su propósito de restablecer el imperio de la ley lo mismo entre los republicanos que entre los carlistas. Para conseguirlo, envió contra Valencia, gobernada por una Junta revolucionaria presidida por el Marqués de Cáceres, al general Martínez Campos, que respondió con la fuerza a la obstinada resistencia de los cantonalistas valencianos, pudiendo el día 8 de Agosto penetrar en la ciudad; hizo que Pavía sojuzgase a los rebeldes republicanos de Córdoba, Sevilla, y Granada, y, asimismo, logró el Gobierno ver restablecida la tranquilidad en Salamanca y Béjar.

Los cantonalistas cartagenos dirigidos por Gálvez y el coronel Pernas, habían realizado a bordo de la fragata *Vitoria* una excursión a Alicante, donde exi-

gieron de las autoridades que les entregaran el vapor *Vigilante* para remolcar a la citada fragata. Conseguido esto, desembarcaron en Torrevieja, apoderándose de los fondos de la Aduana; pero al regresar a Cartagena fueron detenidos por la fragata prusiana *Federico Carlos* mandada por el comodoro Wernell, que se apoderó del *Vigilante*.

Por su parte, el general Contreras, una vez regresó Gálvez a Cartagena, se dirigió con la *Vitoria* y la *Almansa*, a Almería, que bombardeó, e hizo rumbo a Málaga. El *Federico Carlos* detuvo también a las fragatas cantonalistas e hizo prisionero a Contreras, al cual dejó en libertad a los pocos días. Este, una vez en franquía, organizó una columna de más de dos mil hombres marchando hacia Chinchilla, pero



Fig. 128.—D. Nicolás Salmerón

habiendo encontrado allí a las tropas del general Salcedo, sufrió completa derrota (10 de Agosto), representando tal vencimiento rudo golpe para los cantonalistas cartageneros.

Llegada la hora de hacer efectivas las sentencias de muerte impuestas por los Tribunales a algunos de los rebeldes,



Fig. 129.—D. Emilio Castelar

don Nicolás Salmerón, no obstante haber sido restablecida la pena capital por una ley de 9 de Agosto, se negó a confirmar la imposición de aquellas penas y, en su consecuencia, dimitió la alta magistratura de que se hallaba investido.

Sustituyóle en la Presidencia del Poder ejecutivo don Emilio Castelar, representante de la extrema derecha del republicanismo (7 de Septiembre). Percatado plenamente el señor Castelar de que sólo vigorizando los resortes le-

gales se podía salvar la República, aplicó la pena de muerte sin contemplaciones, restableció el Cuerpo de Artillería, tuvo la suerte de que el contralmirante Lobo derrotara en aguas de Cartagena a los cantonales de aquella plaza, consiguió que las reclamaciones formuladas por los Estados Unidos con motivo del apresamiento del barco pirata *Virginus* y el fusilamiento de 57 tripulantes del mismo, quedaran satisfactoriamente resueltas mediante la devolución del barco apresado y la repatriación de los piratas supervivientes, y reanudó las relaciones con Roma acordando el nombramiento de algunos Arzobispos y Obispos. No conformes Pi y Margall y Salmerón con la política conservadora de Castelar, tomaron la resolución de combatirle en cuanto las Cortes reanudaran sus sesiones el 2 de Enero de 1874. Sospechando el general

Pavía y Rodríguez de Alburquerque la derrota que había de sufrir en el Parlamento el Sr. Castelar, propuso a éste que prorrogara la suspensión de las sesiones; mas como se negara el requerido a esta propuesta, resolvió el General disolver por la fuerza la Asamblea, si, como era casi seguro, resultaba vencido el Gobierno. Llegado el día 2, dió el Gabinete cuenta a la Cámara del ejercicio de su Poder y de la situación del país. Según tal resumen, las Provincias Vascongadas y Navarra se hallaban poseídas casi totalmente por los carlistas que, por otra parte, amenazaban por Burgos el corazón de Castilla, repasaban el Ebro cuantas veces querían, dominaban el Maestrazgo y talaban los campos aragoneses y catalanes. Como lógica consecuencia de tan deplorable situación, agravada por el movimiento cantonalista, Castelar demandaba con el mayor apremio del patriotismo de todos los hombres de buena voluntad la unión para salvar, no sólo a la República, sino las antiguas libertades españolas. Un voto de gracias apoyado por el Sr. Martín de Olías, sirvió de iniciación para un largo debate en el que descendiendo de la Presidencia el Sr. Salmerón, atacó desde los escaños al Sr. Castelar. Se defendió éste reiterando sus puntos de vista conservadores y la soluciones de este carácter para resolver el grave problema político planteado en España; pero no obstante las admirables intervenciones parlamentarias del Presidente del Poder ejecutivo, que habló en aquella sesión con tanta elocuencia como sinceridad, a las cinco de la mañana del día 3 de Enero, por 120 votos contra 100, vióse derrotado el Gobierno. Conocedor el general Pavía de aquel resultado y de que los elementos izquierdistas del republicanismo pugnaban por hallar una solución al conflicto que acababan de crear<sup>1</sup>, envió la fuerza armada al



Fig. 130.—General Pavía

1. Tras de no escasos cabildeos se pusieron de acuerdo los Diputados para designar al señor Palanca como sucesor de Castelar. ..

Parlamento. Una descarga hecha en el pasillo central y la entrada en el Salón de sesiones de algunos guardias civiles<sup>1</sup>, bastaron para disolver la Cámara y con ella la última situación genuinamente republicana que rigió al país.

**86. El Poder ejecutivo.**—El golpe de Estado del 3 de Enero, efecto de la inteligencia entre constitucionales y radicales con el general Pavía, había de tener como finalidad, según los patrióticos designios de este General, la constitución de un Ministerio nacional integrado por representaciones de todos los partidos políticos, menos el carlista y el federal. Aspiraba con ello Pavía a salvar al ejército de la disolución que le amenazaba y a restablecer el orden en la sociedad española, tan hondamente perturbada por los lamentables sucesos que acabamos de reseñar. Pero en la ejecución de tal propósito, Castelar se negó a toda intervención en el Gobierno que se creara, y Cánovas, en representación del partido alfonsino, advirtiendo que de lo que trataban los elementos procedentes de los campos de Alcolea era de consolidar la República unitaria bajo la presidencia vitalicia del Duque de la Torre, se abstuvo asimismo de colaborar, precautelando con acierto que la situación que se formara había de ser efímera y, por ende, la más indicada para servir de adecuado tránsito entre la anarquía cantonal y la restauración borbónica.

En su consecuencia, solamente constitucionales y radicales contribuyeron a formar el Gobierno del 3 de Enero, en el que entraron los Sres. Duque de la Torre (Presidencia), Sagasta (Estado), Martos (Gracia y Justicia), Echegaray (Hacienda), Zavala (Guerra), Topete (Marina), García Ruiz (Gobernación), Mosquera (Fomento) y Balaguer (Ultramar). Suspendió este Ministerio las garantías constitucionales, declaró vigente la Ley de orden público de 23 de Abril de 1870 y dirigióse al país por medio de un manifiesto (8 de Enero) en el que después de hacer la más severa crítica de los Gobiernos presididos por Figueras, Pi y Salmerón y el más cumplido elogio de la gestión de Castelar, justificaba el golpe

1. D. Rafael Calzada en sus *Notas autobiográficas*, que forman el tomo IV de sus *Obras completas*, dice que la fuerza primeramente entrada en el Salón del Congreso, fué de Infantería.



de Estado del día 3 y hacía público que, mientras siguieran alzados en el Norte y otras provincias los carlistas, enhiesto en Cartagena el pendón antinacional y ardiendo en Ultramar la tea de la discordia, el Gabinete ejercería un poder absoluto, y que sólo cuando la Patria y las instituciones no corrieran riesgo, serían convocadas Cortes ordinarias, que habrían de determinar la forma y modo de elegir el supremo magistrado de la Nación, las atribuciones de éste, y la persona encargada de ocupar tan alto puesto.

Separado el cargo de Presidente del Poder ejecutivo, que desempeñó el Duque de la Torre, del de Presidente del Consejo, que asumió el Ministro de la Guerra Zavala, y vencidos los cantonalistas cartageneros por el general López Domínguez, aplicóse el Gobierno a intensificar la lucha contra el bando absolutista, cada vez más seguro de su próximo y definitivo triunfo. En efecto, dueñas las huestes de don Carlos de Portugalete, pusieron sitio a Bilbao (Enero de 1874). Moriones, que acudió en socorro de los sitiados, fué vencido en San Pedro Abanto (24 de Febrero), y el Duque de la Torre, al frente ya del ejército, libró las batallas de los días 25, 26 y 27 de Marzo en las líneas de Somorrostro, saliendo mal parado de la contienda. Reforzadas las huestes liberales con la llegada de un nuevo cuerpo al mando del Marqués del Duero, logróse al fin el ansiado objetivo, pudiendo entrar en Bilbao el 2 de Mayo, y alejando a las tropas carlistas de los alrededores de dicha plaza. Tras de tan feliz suceso, se propuso el Marqués del Duero adueñarse de Estella, pero rechazada la columna que se enviara contra Monte-Muru y habiéndose el General aventurado a practicar personalmente un reconocimiento, fué herido de muerte (27 de Junio), sustituyéndole Zavala, a quien no acompañó la fortuna; y bien por tal causa, bien por motivos puramente políticos, hizo dimisión de su cargo de Ministro de la Guerra y de Presidente de la situación, sustituyéndole el Sr. Sagasta el día 3 de Septiembre. Desde esta fecha hasta los últimos días del año continuó la contienda fratricida en Guipúzcoa (donde sufrió don Carlos un sangriento revés al querer apoderarse de Irún, 10 de Octubre); en Navarra, cuya capital asediaban las huestes del

Pretendiente, y con menor vigor en Cataluña, las Castillas y Andalucía.

**87. El Príncipe Alfonso y la restauración borbónica.—**

Del matrimonio de doña Isabel II con don Francisco de Asís nació el 28 de Noviembre de 1857 el príncipe Alfonso, Francisco de Asís, Fernando, Pío, Juan, María, Gregorio, Pelayo.



Fig. 131.—Muerte del general Concha

Once años contaba cuando, por causa del destronamiento de su madre, tuvo con ésta que salir de España, cifrándose ya desde aquel momento en el joven Príncipe todas las esperanzas de una posible restauración. Entregada la dirección del partido dinástico, primeramente al Conde de Cheste y después al general Calonge, y siendo opinión compartida por la mayoría de los prohombres del moderantismo la de que la abdicación de Isabel II en su hijo era el único medio de hacer factible la reintegración de los Borbones al Trono español, decidióse la ex-Reina a realizar aquélla. En tal empeño, no sólo hubo de encontrar la resistencia que su propio egoísmo le suscitaba, sino la de algunos consejeros, que veían truncada su carrera política caso de que la abdicación se

consumara. Venciendo al fin unos y otros obstáculos, el 25 de Junio de 1870 transfirió doña Isabel todos sus derechos a la Corona a su hijo don Alfonso, el cual había de continuar bajo la custodia materna hasta que, proclamado por un Gobierno y unas Cortes que representasen el voto legítimo de la Nación, se pusiese al frente de ésta.

La dirección del partido alfonsino, ejercida después de Cheste y Calonge por Lersundi, pasó al Duque de Montpensier, que por el llamado *Pacto de Cannes*, recabó al asumirla la promesa de que ejercería la Regencia única durante la menoría de don Alfonso. Rotas al poco tiempo las relaciones entre doña Isabel y el Duque, intentó la primera por conducta de don Jacinto Ruíz, entablarlas con el general Serrano; pero las ambiciosas miras de éste, deseoso de ejercer nuevamente el Poder supremo de España<sup>1</sup>, hicieron fracasar los propósitos de la Reina proscrita, la que, aconsejada por hombres lealmente adictos a su causa, entregó al fin el 4 de Agosto de 1873 la dirección suprema de la causa alfonsina en manos del ilustre hombre público don Antonio Cánovas del Castillo.

Mientras tales cambios se producían, el joven Príncipe, que a los comienzos de la proscripción había ingresado en el Colegio Stanislas, de París, interrumpió sus estudios para visitar la ciudad de Roma (24 de Febrero a 10 de Marzo de 1870), pasando después al Mediodía de Francia. En Mayo del mismo año se hallaba don Alfonso en Ginebra bajo la fécula educativa del brigadier don Tomás O'Ryan, y cuando éste renunció su cargo, entró en el colegio Theresianum, de Viena (Febrero de 1872), donde fué instalado por el Mar-

1. En los ambiciosos proyectos del Duque de la Torre influía su hermosa consorte, la que, a su vez y en el orden puramente privado, dispuso su confianza al caballero motrileño D. Antonio Mantilla de los Ríos, primeramente y después al gallardo Marqués de Ahumada, ayudante del General. Debido a aquellas amistades y con ocasión de haberse declarado en 1869 un terrible incendio en la Inspección de Milicias (edificio situado en los jardines del Ministerio de la Guerra, en la esquina de la calle de Alcalá y paseo de Recoletos), por aquellos días residencia de los Duques de la Torre, las gentes suspicaces comentaban que, a consecuencia de aquel siniestro, había tenido que salir del pabellón, y durante la madrugada, la Duquesa "sin mantilla y ahumada".

qués de Alcañices, Jefe Superior del Cuarto de S. A. Durante su estancia en la capital de Austria, tuvo ocasión de tratar a la bella infanta doña Mercedes, hija de los Duques de Montpensier, de la que se enamoró. Terminados sus estudios en el Theresianum, trasladóse a París (Julio de 1874) acompañado del aludido Marqués de Alcañices y de los profesores militares coronel Velasco y Conde de Mirasol. La conveniencia de que el joven Príncipe se habituase al ambiente de países como el inglés "con tradiciones constitucionales", movió a Canovas a recomendar su traslado a dicha Nación. En Agosto de 1874 vemos a don Alfonso en Londres, y después de un viaje por Bélgica y Alemania durante el mes de Septiembre, retorna el 2 de Octubre a la citada capital e ingresa en el Real Colegio de Infantería y Caballería de Sandhurst. Aquí se hallaba cuando con motivo de celebrar su cumpleaños (28 de Noviembre), los alfonsinos españoles llenaron el correo de cartas y felicitaciones al Príncipe enviadas. Entre ellas fue la más significada la que hubo de dirigirla la Grandeza para testimoniarle su adhesión entusiasta. Respondiendo a tales muestras de afecto, suscribió don Alfonso el 1.º de Diciembre el llamado "Manifiesto de Sandhurst", en el que hacía el elogio de las instituciones representativas y formulaba las más rotundas protestas sobre su amor a España, su catolicidad y su liberalismo.

Aunque Canovas no era partidario de que la restauración se realizase por actos de fuerza que pudieran dar lugar a efusión de sangre española, desde los meses de Octubre y Noviembre venían celebrando conspicuos militares alfonsinos activos trabajos para hallar la persona que con mando de fuerza pudiera iniciar el movimiento restaurador, al que esperaban habían de adherirse prontamente el Ejército y la Nación. Resultó el único en estas condiciones, con quien pudieron Martínez Campos y Valmaseda contar en absoluto — dice el Marqués de Lema — el prestigioso brigadier Sr. Dabán, que mandaba una brigada en el Ejército del Centro y se hallaba alrededor de Valencia. Requerido Dabán a colaborar en los trabajos en pro del Príncipe proscrito, mostróse enteramente dispuesto a la invitación que se le hacía; pero en-

trado el mes de Diciembre, como se hallara sin noticias y temiera que, de aplazarse el golpe, fracasara éste por perder los coroneles que como subordinados se hallaban bajo su mando, en razón a que estaban a punto de ser ascendidos.

instó al general Martínez

Campos a no perder

tiempo. Don Arsenio en-

tonces salió para Valen-

cia (27 de Diciembre);

allí le esperaban enviados

del brigadier Dabán, di-

rigiéndose todos a Sa-

gunto, en donde se halla-

ba el citado jefe con su

brigada. El comandante

militar de dicha plaza, a

los efectos de salvar su

responsabilidad, rogó a

Martínez Campos y a Da-

bán que realizasen el acto

fuera de la población. Así

se efectuó a un kilómetro

de la misma, hacia las

nueve de la mañana del

día 29. A las palabras enardecidas del General pintando la si-

tuación de España, cuyo único remedio estaba en la procla-

mación de la Monarquía legítima, respondieron todos con

vivas a don Alfonso, a Martínez Campos y al brigadier

Dabán. Don Arsenio telegrafió al general don Joaquín

Jovellar, que mandaba el ejército del Centro, dándole

cuenta de la resolución tomada e invitándole a ponerse al fren-

te del movimiento alfonsino. Adhirióse Jovellar desde Nules al

acto realizado; la guarnición de Madrid simpatizó también con

el pronunciamiento, y como en las huestes que acaudillaba el

Duque de la Torre en el Norte, se advirtiera alguna repugnancia

a tener que hacer armas contra sus camaradas declarados

en rebeldía, el Regente y el Gobierno, previa famosa conferen-

cia telegráfica, decidieron acatar los hechos consumados.



Fig. 132.—D. Antonio Cánovas del Castillo



El capitán general de Madrid Sr. Primo de Rivera que circunstancialmente había asumido todos los poderes, puso en libertad a Cánovas, detenido en la cárcel del Saladero y trasladado después al Gobierno civil por orden del caído Gabinete,



Fig. 133.—D. Adelardo López de Ayala

y el aludido hombre público se constituyó inmediatamente en el Ministerio de la Guerra en donde se celebró una magna reunión de personalidades alfonsinas. Cánovas presentó a los reunidos los poderes que recibiera de la Reina y de su hijo y propuso la formación de un Ministerio-Regencia que se organizó en la madrugada del 31 de Diciembre de 1874 y que compusieron don Alejandro de Castro (Estado), don Francisco de Cárdenas (Gracia y Justicia), don Pedro Salaverría (Hacienda), don

Joaquín Jovellar (Guerra), el Marqués de Molins (Marina), don Francisco Romero Robledo (Gobernación), el Marqués de Orovio (Fomento) y don Adelardo López de Ayala (Ultramar), asumiendo la Presidencia Cánovas<sup>1</sup>.

1. El Marqués de Lema, en su reciente y documentada obra, *De la Revolución a la Restauración*, tomo II, págs. 770 a 772, describe pintorescamente lo ocurrido en el Ministerio de la Guerra. "Cánovas confesaba—dice Lema—que revistiéndose de la gravedad propia de las circunstancias, procuraba que no trasluciesen los presentes dos impresiones que le agitaban: era una lo que su relativa juventud debía producir en aquellos señores venerables y le producía a él mismo; era otra la del apuro en que se vería, dado su criterio sobre la composición del futuro Gabinete, si la mayor parte de aquellos no decían "sí", cuando les ofreciese, aun tímidamente, un puesto en el Ministerio". Cánovas, sin embargo, salió airoso de aquel empeño. Se deshizo hábilmente de la colaboración con el desacreditado Esteban Collantes prometiéndole una legación y el patrocinio para su hijo; desprendióse también del compromiso con D. Fernando Alvarez manifestando a éste que no estaba

El general Martínez Campos fué ascendido a teniente general, y el Gobierno civil de Madrid quedó encomendado al Duque de Sesto.

Mientras tenían lugar en España tan importantes sucesos, don Alfonso, que había pasado en el mayor aislamiento la Nochebuena de 1874 alojado como un simple particular en un hotel de Londres, salió el 30 de Diciembre para París, a donde llegó a la caída de la tarde del mismo día. Disponíase entre ocho y ocho y media de la noche a marchar al teatro, cuando recibió una carta participándole que había sido proclamado Rey por el Ejército español. A la mañana siguiente enteróse de tan felices ocurrencias doña Isabel por medio de un telegrama concebido en estos términos: "Los ejércitos del Centro, del Norte y las guarniciones de Madrid y las de provincias han proclamado a Don Alfonso XII, Rey de España. Madrid y todos las poblaciones responden a esta proclamación con entusiasmo. Rogamos a V. M. que lo ponga en conocimiento de su augusto Hijo, cuyo paradero se ignora en este momento, y de todo corazón felicitan a VV. MM. por este gran triunfo alcanzado sin lucha ni derramamiento de sangre.—Primo de Rivera.—Cánovas del Castillo". Algo tardíamente (el 5 de Enero de 1875) respondió el Príncipe a don Antonio Cánovas ratificándole su confianza y aprobando la formación del Ministerio-Regencia. El día 6 salió don Alfonso para Marsella; el 7 embarcó en este puerto en la fragata *Navas de Tolosa*; el 9 llegó a Barcelona, y el 14 hizo su entrada en Madrid en medio de las más vivas expresiones de general complacencia. A los cinco días partió a revistar el ejército del Norte; el 7 de Febrero dirigióse a Pamplona, de donde pasó a Logroño a fin de visitar a Espartero, y por Burgos, Valladolid y Avila, regresó a Madrid el 13.

La guerra civil tuvo durante los primeros meses de 1875 algunos hechos de armas favorables para la causa absolutista, como los combates de Lúcar y Lorca (3 de Febrero); pero

en disposición de restablecer la Constitución de 1845, y al llegar al lado de don Claudio Moyano, del que Cánovas no tenía una idea muy elevada en cuanto a su capacidad, le dijo: *Con V. sé que no puedo contar...*; viéndose el interpelado en la precisión de responder: *En efecto, no es posible, dado el camino que piensa V. seguir.*

nombrado Quesada general del ejército del Norte, adquirió la contienda mejor aspecto para la causa liberal. Por la parte de Cataluña, el general Martínez Campos se apoderó de Olot (21 de Marzo), e iniciando una política de atracción con los carlistas, logró ponerse al habla con los jefes de la facción Sres. Savalls y Lizárraga, perdiendo desde entonces la contienda en tierras catalanas el carácter de violencia que la había distinguido. El 26 de Agosto (1875), capituló Lizárraga

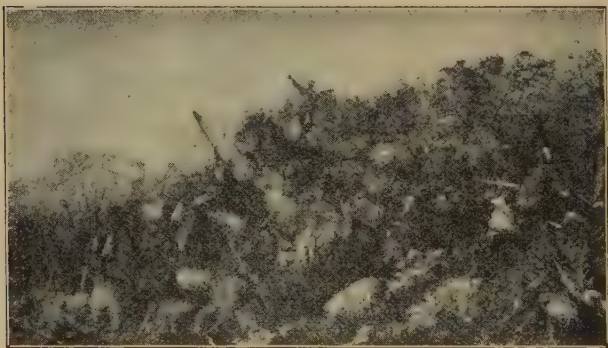


Fig. 134.—El coronel Contreras en Treviño (1875)

en la Seo de Urgel, y por la parte de Valencia los generales alfonsinos Echagüe y Lassala, obtuvieron sobre el absolutista Dorregaray ventajas indiscutibles. Por si fueran pocos los motivos apuntados para que don Carlos y sus más sinceros adictos se afirmaran en la creencia de que la causa carlista estaba perdida, el antiguo y prestigioso jefe don Ramón Cabrera reconoció la monarquía de Alfonso XII (11 de Mayo de 1875) y los ejércitos liberales, vencidas casi las facciones en Cataluña, Valencia y Aragón, concentrábanse bajo el mando de Martínez Campos y Quesada en el Norte, y tras de combates como el de Abadiano, en que el absolutista Cervera fué vencido por Quesada, y conquistas como la de Estella, debida a la pericia y arrojo del general Primo de Rivera, el Pretendiente tuvo que abandonar la tierra española (28 de Febrero de 1876)

retirándose a Pau, mientras el monarca don Alfonso entraba en Tolosa, San Sebastián y Estella, y después de recorrer el resto de las Vascongadas y parte de Santander, regresaba



Fig. 135.—Entrada de Alfonso XII en Madrid terminada la guerra carlista

triunfalmente a Madrid con una brillante representación del ejército victorioso (20 de Marzo).

El primer Gabinete presidido por Cánovas gobernó al país hasta el 12 de Septiembre de 1875, en que por causa



Fig. 136.—Sagasta

de las discrepancias suscitadas sobre la norma legal que había de regir en las próximas elecciones, presentó su dimisión. Sustituído por el Sr. Jovellar durante breve tiempo, volvió Cánovas a recobrar el mando el 2 de Diciembre, conservándolo hasta el 3 de Marzo de 1879 en que abandonó el Poder para dejar paso al Ministerio constituido el 7 de dicho mes bajo la presidencia de Martínez Campos. Duró esta situación hasta el 9 de Diciembre, en cuya fecha de nuevo empuñó las riendas del Gobierno el Sr. Cánovas, extendiéndose la nueva eta-

pa de su mando hasta el 3 de Febrero de 1881, en que asumieron las funciones directivas los elementos denominados *fusionistas* con su caudillo don Práxedes Mateo Sagasta en la Presidencia.

Las iniciativas legales correspondientes al período en que la gestión de Cánovas hubo de ser la dominante fueron las siguientes: el Real Decreto de 20 de Enero de 1875 relativo a la jurisdicción contencioso-administrativa; el de 9 de Febrero del mismo año, derogando la Ley de matrimonio civil como general en la materia, y estableciendo como obligatorias dos formas: la canónica para los católicos, con inscripción de la partida sacramental en el correspondiente Registro, y la civil para los no católicos; el Decreto de 3 de Enero de igual año suspendiendo el Jurado y, abiertas las Cortes el 15 de Febrero de 1876, la llamada *Constitución de los no-*



*tables*, hoy en suspenso. Recibió este nombre por haber sido redactada por una Comisión de ilustres personalidades nombrada en reunión de más de seiscientos ex-Senadores y ex-Diputados, procedentes de todas las Cámaras legislativas que



Fig. 137.—El Marqués de la Habana

habían funcionado en España durante los últimos treinta años. Producto de un saludable eclecticismo, aspiró el proyecto constitucional a que, una vez convertido en Ley, pudieran bajo su égida dirigir los destinos del país liberales y conservadores, sin necesidad de apelar a las frecuentes reformas que durante el reinado de Isabel II tan profundamente habían contribuido a perturbar la vida nacional.

Fundamentalmente discrepaba la Constitución de 1869 de

la de 1876 en que la primera establecía la libertad religiosa y la segunda la tolerancia, y en que mientras aquélla asignaba a las Cortes la facultad de reformar sin el Rey la Constitución y la de reunirse con el carácter de Constituyentes indisolubles e ilimitadas, la de 1876, al guardar silencio sobre extremo tan importante, dejaba de consagrar aquel derecho.

Más liberal que la de 1845, parecida en parte a las de 1837 y 1856, y reproduciendo casi literalmente algunos preceptos de la de 1869, la Constitución de 1876, que comenzó a regir el 30 de Junio, aparece dividida en 89 artículos distribuidos en 13 títulos. Como la de 1869 reconoce los derechos individuales de seguridad personal, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia y propiedad, y en cuanto al derecho del culto, mientras la del 76 prohíbe las ceremonias y manifestaciones públicas que no sean las de la religión del Estado, la del 69 no ponía otro límite a tales ceremonias y manifestaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.

En punto a derechos políticos, el de obtención de cargos públicos se explica más en la Constitución de 1869 que en la de 1876, y respecto al derecho de sufragio, mientras aquélla lo concede a todos los españoles que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles, la del 76 remite a una Ley especial la forma y condiciones de poder ejercerlo. Esta Ley fué la de 28 de Diciembre de 1878, que determinaba que sólo tendrían derecho a votar en las elecciones de Diputados a Cortes los españoles que estuviesen inscritos como electores en las listas del Censo, en el cual debían ser incluídos quienes, teniendo 25 años, fuesen contribuyentes por la cuota mínima para el Tesoro de 25 pesetas anuales por contribución territorial o de 50 por subsidio industrial.

Respecto a los derechos mixtos reconocíanse de igual modo en una y otra Constitución los de reunión, asociación y petición, pero el de libre emisión del pensamiento establecía en la de 1869 con prohibición de adoptar ninguna medida preventiva.

A tenor de la Constitución de 1869, la potestad de hacer las leyes residía solamente en las Cortes correspondiendo al Rey sancionarlas y promulgarlas. Por lo contrario, el Código

fundamental de 1876 establece que en las Cortes con el Rey reside la potestad de hacer las leyes, y en el Rey la de hacerlas ejecutar.

En cuanto a la organización del Senado, mientras la Constitución del 69 organizaba dicha Cámara con carácter electivo, la del 76 disponía que la integrarían, de un lado, Senadores por derecho propio y vitalicios, designados éstos por la Corona, y de otro, Senadores elegidos por las Corporaciones del Estado y mayores contribuyentes.

En otros extremos discrepaba también el Código del 76 del revolucionario de 1869, debiendo limitarnos a apuntar aquí las variantes de mayor importancia, a fin de no dar excesiva latitud a estas páginas. Según aquél, no pueden ser Diputados los eclesiásticos; los Ministros tienen el derecho de asistir a las Cámaras, aunque no sean Senadores o Diputados; el Congreso debe integrarse por representantes del país elegidos en la proporción de uno por cada cincuenta mil almas, y el Monarca es menor de edad hasta los 16 años.

Enamorado Alfonso XII de su prima hermana doña Mercedes de Orleáns, hija de los Duques de Montpensier, contrajo con ella matrimonio el 23 de Enero de 1878. La joven Soberana, que por su bondad y hermosura ganó el corazón de los españoles, sucumbió a los pocos meses (27 de Junio), contrayendo el Monarca nuevas nupcias el 29 de Noviembre de 1879 con la Archiduquesa de Austria doña María Cristina Deseada, en la que tuvo dos hijas, la princesa doña María de las Mercedes, nacida el 11 de Septiembre de 1880, y la



Fig. 138.—Alfonso XII

infanta doña María Teresa, venida al mundo el 12 de Noviembre de 1882.

En el palenque político, continuaba ocupando el primer estrato el partido *liberal-conservador*, dirigido por Cánovas.



Fig. 139.—La reina Doña Mercedes

Próximo a él se hallaba el *moderado histórico* aferrado a sus antiguas aficiones por la Constitución de 1845, y formando la oposición de S. M. se encontraban los *constitucionales* dirigidos por Sagasta y los *centralistas* que con Alonso Martínez y Gamazo ocupaban la zona intermedia entre los canovistas y los sagastinos. En las filas antidinásticas se hallaban los *carlistas* con Nocedal al frente; los *posibilistas*, partidarios de la República unitaria y conservadora, con don Emilio Cas-

telar como caudillo; los *republicanos revolucionarios*, que seguían las instrucciones de Salmerón y Ruíz Zorrilla, y los *federales* bajo la férula política de Pi y Margall.

Como ya hemos dicho, en Febrero de 1881 abandonó el Poder don Antonio Cánovas del Castillo, siendo llamados al ejercicio de aquél los *fusionistas*, es decir, el partido formado por la unión de los constitucionales y los centralistas. Esta situación ministerial derogó la circular del Gobierno conservador por la que se obligaba a los Catedráticos a respetar en sus explicaciones la Religión y la Monarquía; excitó al Fiscal del Tribunal Supremo para que prescribiera a sus subordinados la interpretación más liberal de las Leyes penales relativas a delitos contra el culto y de imprenta, y disolviendo las Cortes conservadoras, convocó las nuevas para el 20 de Septiembre.

La resolución de Sagasta en el sentido de gobernar liberalmente y las simpatías personales de que disfrutaba el jefe del Gabinete, lograron que la fracción republicana unionista, dirigida por Castelar, se mostrara dispuesta a apoyar al Go-

bierno, y que una buena parte de los antiguos demócratas, abandonando el campo zorrillista, se sumaran a los elementos de la izquierda adictos a la Monarquía alfonsina. También se produjeron cambios de importancia en el campo absolutista, pues no conformes muchos católicos con la dictadura ejercida por don Cándido Nocedal con su órgano en la Prensa *El Siglo Futuro*, se organizaron formando la *Unión Católica*, que tuvo como elocuente portavoz a don Alejandro Pidal.

Disgustados los demócratas convertidos al alfonsismo por la conducta que con ellos observaba el Sr. Sagasta y deseosos de constituir el partido liberal que turnara en el ejercicio del mando con el conservador dirigido por Cánovas, formaron la que se llamó *Izquierda dinástica* (Octubre de 1882), que proclamando como base de su futura gestión la restauración del Código fundamental de 1869 y al general Serrano como jefe, comenzaron a hostilizar al Gobierno. En la nueva agrupación entraron los conocidos hombres públicos Sres. López Domínguez, Montero Ríos, Becerra, Moret, Balaguer, Canalejas y, virtualmente, Martos.

Inquietaron, asimismo, al Gabinete los movimientos organizados en Madrid y Barcelona durante los meses de Febrero, Marzo y Abril por las clases mercantiles con motivo del alza en las tarifas del subsidio industrial. Los gremios madrileños, apoyados por los del resto de España, se organizaron en Sindicatos de resistencia, y los de Barcelona añadieron a su protesta por igual motivo la indignación que les producía el tratado de comercio con Francia que creían lesivo a los inte-



Fig. 140.—María Cristina



reses de la industria regional. El Gabinete se impuso por el rigor a los comerciantes de Madrid y consiguió que las Cortes aprobaran el tratado objeto de la protesta catalanista.

Las diferencias suscitadas en el seno del Ministerio entre los Sres. Albareda y Camacho, sobre la conveniencia y forma de venderse los montes públicos, produjo el 9 de Enero de 1833 una crisis parcial.



Fig. 141.—D. Manuel Alonso Martínez

Durante los primeros meses de este año la campaña jerezana y algunas otras comarcas de Andalucía viéronse perturbadas por la asociación denominada *La Mano Negra*, que proclamando los principios del más radical colectivismo, realizó una lamentable serie de violencias contra las personas y las propiedades. Por si ello fuera

poco, llegado el verano, estalló una conspiración tramada por los zorrillistas, que para lograr sus fines políticos se aprovecharon del descontento existente entre los numerosos jefes y oficiales que habían quedado en situación de reemplazo por causa del exceso de personal después de la guerra civil. En Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y la Seo de Urgel fuerzas del ejército alzaron la bandera republicana (Agosto de 1883), y aunque fué empresa fácil la de sofocar aquellos brotes de rebeldía, el Gabinete quedó harto quebrantado por su falta de previsión.

Verificada la visita de don Alfonso durante el mes de Agosto y primeros días de Septiembre a las ciudades de Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Lérida, Zaragoza, Logroño, Burgos, Palencia, León, Coruña y San Sebastián, partió con dirección a París a fin de trasladarse a Alemania con objeto

de asistir a las maniobras militares a las que había sido invitado. El 6 de Septiembre salió el Monarca español para Munich; el 9 entró en Viena, y de aquí partió para Francfort y Hamburgo, donde fué recibido por el emperador Guillermo.

Receloso el Gobierno francés de que el viaje de nuestro Soberano tuviera como principal objeto llegar a una inteligencia con Alemania, mostróse visiblemente contrariado, actitud que subió de punto cuando llegó a su conocimiento la noticia de que entre las distinciones tributadas a don Alfonso había figurado la de nombrarle Coronel del regimiento de hulanos, fuerza ésta de guarnición por aquel entonces en la capital de Alsacia.

Excitados algunos elementos parisienses, exteriorizaron ruidosamente su disgusto a la llegada de don Alfonso a la capital de Francia (27 de Septiembre). El Gobierno francés o no pudo o no quiso evitar la escandalosa protesta, y aunque el Presidente Grevy se apresuró a dar explicaciones al Rey de España, tan desagradable incidente produjo la justificada reacción de nuestro pueblo, que tributó al ofendido Monarca el más caluroso y sincero homenaje de simpatía cuando, de retorno de su viaje, entró en Madrid.

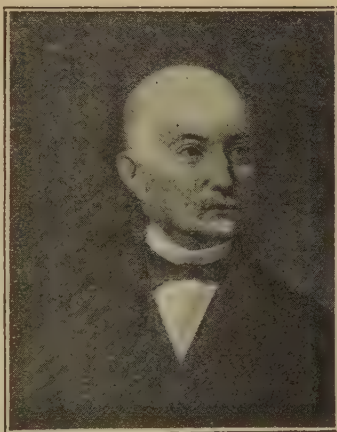


Fig. 142.—D. José Posada Herrera

Dimitió el Ministerio presidido por Sagasta el 13 de Octubre, constituyéndose otro de conciliación liberal, compuesto por elementos izquierdistas y constitucionales presididos por Posada Herrera. Las fundamentales diferencias entre unos y otros acerca de la implantación del sufragio universal y de la reforma de la Constitución, extremos ambos impuestos por los liberales izquierdistas en el discurso de la Corona, pero

no con tanto interés apetecidos por los constitucionales, dió lugar en plazo breve al rompimiento de la coalición y, en su consecuencia, a que abandonara su puesto el Sr. Posada Herrera (Enero de 1884), reemplazándole don Antonio Cánovas, que dió la cartera de Fomento a don Alejandro Pidal.

Disueltas las Cortes liberales (31 de Marzo de 1884), fueron convocadas las nuevas para el 20 de Mayo. En las elecciones, el Ministro de la Gobernación Sr. Romero Robledo extremó hasta el escándalo la presión oficial para obtener la mayoría parlamentaria, quedando convicto no sólo de haber perpetrado las trapacerías hasta entonces usuales, sino de haber enriquecido con otras inauditas el copioso repertorio. Objeto de los ataques de las minorías fuéronlo, en las sesiones parlamentarias, el Ministro de la Gobernación por su desenfado político, y el Sr. Pidal por el carácter reaccionario que imprimía a la marcha del Gobierno y por la inconsecuencia que suponía el que el antiguo representante de la unidad católica apareciera como miembro de una situación ministerial liberal-conservadora bajo la égida de la tolerante Constitución de 1876. Contribuyeron a hacer doblemente difícil la permanencia del Sr. Pidal en el Gabinete, los rozamientos con Italia ocasionados por atribuirse al Ministro de Fomento expresiones nada respetuosas para la unidad política de aquella Nación, y la cuestión universitaria.

Prodújose ésta por haber leído el Sr. Morayta en la sesión de apertura del curso de 1884-1885 un discurso de acentuados tonos heterodoxos. Ocupaba la Presidencia del acto universitario el Sr. Pidal, el que al hacer uso de la palabra se limitó a formular unas cuantas generalidades dejando sin correctivo las afirmaciones del Catedrático disertante, afirmaciones merecedoras, a juicio de los católicos, de severa censura. En tal sentido se expresaron el periódico carlista *El Siglo Futuro* y algunas autoridades eclesiásticas. Un hijo de don Cándido Nocedal redactó entusiasta mensaje de adhesión al gobernador eclesiástico de Toledo, que había condenado el discurso de Morayta. El mensaje fué firmado por algunos estudiantes y protestado por la generalidad. Ello dió margen a continuos tumultos en el edificio de la Central, que alteraron la vida aca-

démica desde el 17 al 22 de Noviembre, siendo el más grave de aquellos el del 20, durante cuya jornada, excitadísimas las masas escolares por las precauciones tomadas por la autoridad el día 19 o de Santa Isabel, silbaron al Gobernador de Madrid señor Fernández Villaverde. Este hizo que el jefe de orden público, Oliver, entrara violentamente en el edificio universitario



Fig. 143.—Alfonso XII visitando los cólericos de Aranjuez

con algunos guardias, que maltrataron a los estudiantes y a los Profesores, y como los demás Centros de enseñanza se solidarizaron con la Universidad, el Gobierno ordenó que la fuerza pública ocupara aquéllos y hubo de impedir que prosperase la causa que a instancias de los agraviados se formó por la autoridad judicial al citado Oliver.

La epidemia cólerica hizo su aparición durante el mes de Junio de 1885 en Valencia, Murcia y Madrid. El mismo Monarca quiso trasladarse a la segunda de estas ciudades a fin de entonar el espíritu público, pero Cánovas se opuso al arriesgado proyecto. Extendida la terrible epidemia a Aranjuez, don Alfonso, sin conocimiento del Gobierno, se presentó abnegada-

mente el 2 de Junio en el Real Sitio visitando a los epidemia-dos. El regreso del Monarca a Madrid aquella misma noche tuvo todos los caracteres de una verdadera apoteosis.

Un nuevo motivo de pública inquietud se produjo en pleno verano de este año: Alemania envió a la bahía de Yap (Carolinias) al cañonero *Iltis* a pretexto de que, siendo la ocupación efectiva de un territorio la que da origen a la soberanía sobre el mismo, y no habiéndose efectuado tal ocupación por parte de España, el Gobierno imperial tenía derecho a hacer suyo un archipiélago hasta entonces no apropiado por ninguna potencia. Indignése la opinión española por tal desafuero, máxime teniendo presente que a la llegada del cañonero alemán a Yap, se hallaban en la bahía los barcos españoles *Manila* y *San Quintín*. Arduas manifestaciones patrióticas en Madrid y en las principales ciudades de la Monarquía pidieron la inmediata declaración de guerra. Constitucionales e izquierdistas contribuyeron en aquel trance a estimular el bélico entusiasmo nacional. Sin embargo de ello, con excelente buen juicio tanto don Alfonso como el señor Cánovas mantuvieron con firmeza una actitud resueltamente contraria a toda belicosidad. Por fortuna, tras de explicaciones amplias y cumplidas dadas por el Gobierno alemán, la espinosa cuestión quedó confiada al arbitraje del pontífice León XIII, que con fecha 22 de Octubre de 1885 dictó un laudo comprensivo de los siguientes extremos:

“1.º—Se afirma la soberanía de España sobre las Islas Carolinas y Palaos. 2.º—El Gobierno español, para hacer efectiva dicha soberanía, se obliga a establecer lo más pronto posible en dicho archipiélago una administración regular, con una fuerza suficiente para garantizar el orden y los derechos adquiridos. 3.º—España ofrece a Alemania plena y entera libertad de comercio, navegación y de pesca en esas mismas islas, como asimismo el derecho de establecer en ellas una estación naval y un depósito de carbón. 4.º—Se asegura igualmente a Alemania la libertad de hacer plantaciones en esas islas y de fundar en ellas establecimientos agrícolas del mismo modo que los súbditos españoles”.

Hacía ya meses que era objeto de continuos comentarios la



precaria salud del Rey. Se decía que en Abril de 1884, el señor Cánovas, de acuerdo con las prescripciones facultativas, había dispuesto despachar él solo con don Alfonso a fin de evitarle la molestia de hablar con frecuencia. Añadiase que durante el mes de Mayo había tenido algunos vómitos de sangre. El 26 de Julio se trasladó a Betelu, donde el Monarca



Fig. 144.—Muerte de Alfonso XII

se entregó a expansiones nada compatibles con su estado. Durante los primeros meses de 1885 siguieron los comentarios cada vez más acentuados sobre la delicada salud del Rey. Negaba el Gobierno que hubiera motivos para la alarma, y el mismo doliente, sobreponiéndose a su terrible enfermedad, se esforzaba en desmentir los públicos rumores. Guardó cama casi todo el mes de Septiembre; trasladóse a El Pardo el 31 de Octubre, y durante los primeros días de Noviembre la enfermedad adquirió gravedad extrema. En la mañana del 25, cuando el doctor Camisón iba a poner el parte de las ocho al Marqués de Alcañices, Jefe superior de Palacio, para que éste lo trascribiese al Presidente del Consejo de Ministros, diciéndole que había aplicado al enfermo una inyección de

morfina y que seguía algo mejor, quedó muerto don Alfonso, no pudiendo llegarle más que la absolución *sub-conditione*.

**88. Regencia de Doña María Cristina de Austria durante la menor edad de Alfonso XIII.**—A la muerte de Alfonso XII, asumió la Regencia su viuda doña María Cristina. El estado de feliz esperanza de esta señora, cuya sola descendencia anterior eran dos hembras de cinco y tres años, abría a la sucesión del Trono un paréntesis de incertidumbre que la ciencia misma era impotente para cerrar hasta después de transcurridos más de cinco meses. Horas antes de que falleciera don Alfonso celebraron en el antiguo Palacio de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la calle de Alcalá, una extensa conferencia los señores Cánovas y Sagasta. De aquella entrevista, que ha pasado a la historia con el nombre de *Pacto del Pardo*, derivóse la dimisión de Cánovas y el nombramiento de Sagasta como jefe del primer Ministerio de la Regencia. A tan abnegada determinación estimuló al jefe del partido conservador, el íntimo convencimiento de que era preciso que la lucha ardiente en que se hallaban los partidos dinásticos, lucha que la robustez del Trono permitiera en vida de Alfonso XII, cesara, al asumir la regia prerrogativa una augusta dama sobre la que recaían juntas con la pesadumbre del mando, las congojas de la inexperiencia, las amarguras de la viudez y las zozobras de la maternidad<sup>1</sup>. Por ello también, al encargarse Sagasta de formar Gobierno, procuró que casi todos los matices de la policromía liberal tuvieran su ponderada significación en el Gabinete, y a tal efecto, ostentaron la representación de los elementos izquierdistas los Sres. Moret (Estado), Beranger (Marina) y Monteros Ríos (Fomento), y la de los derechistas Jovellar (Guerra), Gamazo (Ultramar) y Alonso Martínez (Gracia y Justicia), entrando además Camacho (Hacienda) como la más reconocida y sólida reputación económica del partido, y don Venancio González (Gobernación) como persona de la absoluta confianza de Sagasta.

Juró el nuevo Ministerio el 27 de Noviembre (1885) y, re-

1. Maura y Gamazo, *Historia crítica del reinado de Alfonso XIII durante su menoridad bajo la regencia de su madre Doña María Cristina de Austria*.

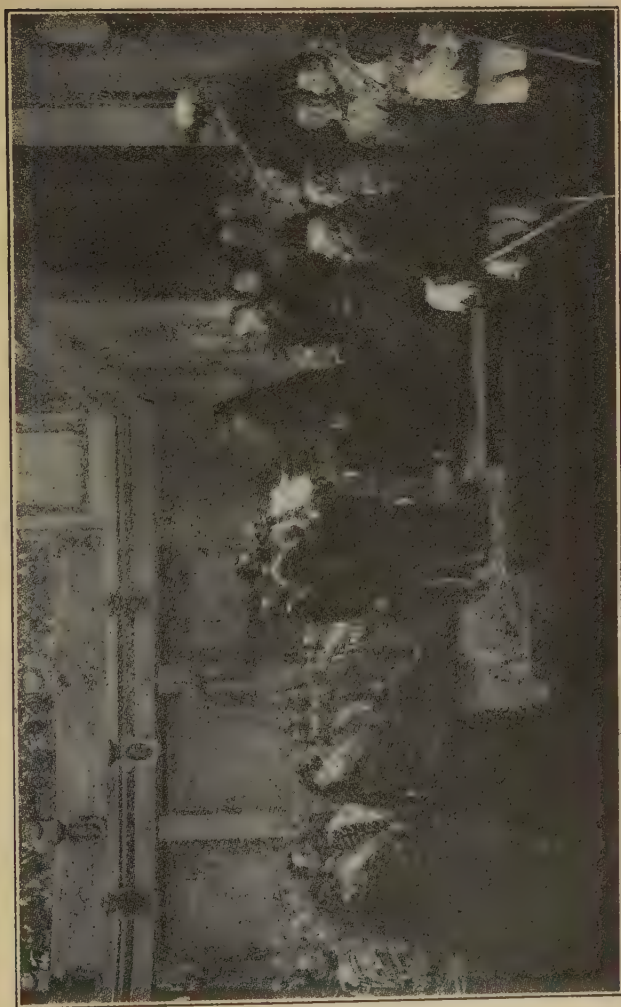


Fig. 145.—Juramento de María Cristina

unidas las Cortes, juró también ante ellas doña María Cristina el día 30 del mismo mes, ser fiel al Rey menor y guardar la Constitución y las Leyes. No conforme Romero Robledo con el consejo dado por Cánovas a la Regente en el sentido de que



Fig. 146.—D. Juan Francisco Camacho

debían ser llamados al Poder los liberales, ya que a nuevo Rey debía corresponder nuevo Gobierno, planteó la disidencia (15 de Diciembre), quedando junto a Romero Robledo los llamados *húsares*, que, como su caudillo, estimaban el acto de Cánovas, no como un testimonio de patriótico desprendimiento, sino como una deserción ante el país y una deslealtad ante los correligionarios.

Disueltas las anteriores Cortes y convocadas las sucedáneas

para el 10 de Mayo de 1886, presentáronse aliados en la contienda electoral zorrillistas, federales y salmeronianos; abstuvieronse los carlistas, sin perjuicio de luchar en los distritos en que tenían el triunfo asegurado; coligáronse los conservadores disidentes, que Romero Robledo dirigía, con los liberales izquierdistas atentos a las indicaciones del general López Domínguez, y los adictos a Cánovas y los candidatos ministeriales, fueron a la lucha cobijados por la égida protectora del Gobierno. El resultado no pudo sorprender: triunfó el partido liberal por abrumadora mayoría; obtuvieron los canovistas ochenta puestos; lograron salir victoriosos de las urnas algunos caracterizados republicanos y naufragaron casi todos los rome-  
 ristas e izquierdistas. La sesión de apertura de las Cortes celebróse el



Fig. 147.—Romero Robledo

día 10 de Mayo de 1886, leyendo en nombre de la Reina el discurso de la Corona el Presidente del Consejo. El 17, poco después del mediodía, dió a luz doña María Cristina un niño póstumo que, apadrinado por León XIII, fué bautizado el 22 en la Capilla real con los nombres de Alfonso, León, Fernando, María, Santiago, Isidro, Pascual, Antón.

Constituído el Congreso el 11 de Junio, siendo elegido Presidente el señor Martos, y discutido el Mensaje con la intervención de los más autorizados y elocuentes miembros de las minorías, de entre los cuales cautivó la atención el diputado cubano don Rafael Montoro, que defendió el criterio autonomista, único eficaz para resolver los grandes conflictos que venían planteándose en la hermosa isla que representaba, fué aprobada por las Cortes la dotación de la Casa Real y, asimismo, una serie de medidas propuestas por el señor Moret y enderezadas a hacer prevalecer las ideas librecambistas sobre las proteccionistas, especialmente profesadas por los elementos industriales de Cataluña. El Gabinete, no obstante el



revuelo producido por su actuación, consiguió que el Parlamento votase la prórroga hasta 1.º de Enero de 1892 de todos los Tratados comerciales, *el modus vivendi* con Inglaterra y el nombramiento de una Comisión llamada a informar sobre el restablecimiento de la base quinta de la Ley Figuerola de 1869, a cuyo tenor, habían gradualmente de reducirse en doce años los derechos arancelarios desde el 30 al 10 % del valor de los géneros importados. Por su parte, el Ministro señor Camacho aspiró a introducir grandes economías en los Presupuestos y quiso suprimir las cajas especiales existentes en varios Ministerios. Ello le indispuso con sus compañeros los titulares de Guerra y Marina, y como a tales motivos de disgusto se unió la resolución de Camacho de poner en venta algunas fincas del Estado que usufructuaban no escaso número de Municipios rurales, con la protesta de éstos y la contrariedad de aquéllos tuvo suficientes motivos el Ministro de Hacienda para abandonar su puesto, como lo hizo el 30 de Julio (1886) siendo llamado a sustituirle el Sr. López Puigcerver, Subsecretario del aludido Departamento.

Suspendidas las sesiones de Cortes el 1.º de Agosto y dedicado el Gobierno a disfrutar de las vacaciones estivales, vióse dolorosamente sorprendido por el pronunciamiento republicano organizado por Ruíz Zorrilla de acuerdo con los generales Villacampa y Merelo y con fuerzas de Infantería acuarteladas en Alcalá. Aunque el movimiento estaba dispuesto para el 22 de Septiembre, adelantóse a prima noche del 19. La escasa fuerza sublevada y la torpeza de sus directores hizo fracasar el golpe, del que fueron primeras víctimas el brigadier don Clemente Velarde y el coronel Conde de Mirasol, que al dirigirse al cuartel a fin de cumplir con su deber, resultaron muertos a balazos por los rebeldes. Villacampa, un teniente y cuatro sargentos fueron condenados a ser pasados por las armas. La piadosa petición de indulto formulada por la coalición republicana y por algunos elementos populares, halló buena acogida en Sagasta, el cual, no obstante haberse pronunciado en el Consejo de la noche del 4 de Octubre la mayoría de los Ministros por la ejecución del terrible fallo, autorizó al Subsecretario de la Presidencia señor Caña-

maque a que participase a los periodistas que en la reunión ministerial había prevalecido el dictamen favorable al indulto. Difundida la noticia al día siguiente, fué ya poco menos que imposible rectificarla, y comprendiéndolo así los Consejeros responsables, reunidos nuevamente en la tarde del 5, optaron por no defraudar a la opinión. En su consecuencia, conmutada la pena de muerte, los sentenciados expiaron durante algunos meses su delito en Fernando Poo, pasando después a los presidios de Africa.

La piadosa habilidad de Sagasta unida a la falta de armonía entre algunos de los Consejeros responsables produjo la crisis parcial planteada el 7 de Octubre, resuelta el 9, con la permanencia en sus puestos de los señores Sagasta, Moret, Alonso Martínez y López Puigcerver y con la entrada en el Gabinete de los señores general Castillo (Guerra), Rodríguez Arias (Marina), León y Castillo (Gobernación), Navarro Rodrigo (Fomento) y Balaguer (Ultramar).

Paliada la lucha partidista por el firme propósito de Cánovas de no hostilizar al liberalismo gobernante y por la desunión en que vivían los republicanos, partidarios unos (los zorrillistas) de la política de pronunciamiento, y adictos otros (los salmeronianos) al pacífico sistema de las propagandas, sólo tuvo el Gabinete que preocuparse de los liberales izquierdistas, que con López Domínguez al frente y no viendo por parte alguna la esperanza de prevalecer, se unieron a la desesperada con los conservadores disidentes dirigidos por Romero Robledo, convirtiendo la coalición electoral que circunstancialmente los había solidarizado en la flamante agrupación denominada *liberal reformista* (21 de Enero de 1887), suma y compendio de ambiciones fracasadas y despechos exhibidos sin la cautela del menor recato.



Fig. 148.—López Domínguez

La dimisión del Ministro de la Guerra señor Castillo producida por su falta de destreza parlamentaria, dió lugar a que entrara a sustituirle su colega don Manuel Cassola y Fernández (Marzo de 1887), que debidamente preparado para el alto cargo a que ascendía, presentó un amplísimo plan de reformas militares comprensivo, entre otras, de las siguientes innovaciones: servicio militar obligatorio; apertura, en tiempo de guerra, de las escalas en los cuerpos de Artillería e Ingenieros; desempeño del servicio de Estado Mayor por los oficiales de todas las armas que adquiriesen en la Academia de Estado Mayor el diploma correspondiente, y reorganización administrativa de la Península para reducir a ocho las trece Capitanías Generales existentes.

Uniéronse los cuerpos facultativos para combatir la antedicha reforma; las clases conservadoras se mostraron enemigas del servicio militar obligatorio, contando con la adhesión de no escaso número de padres de familia; por rivalidades profesionales combatieron también los proyectos de Cassola los generales López Domínguez y Martínez Campos, y solamente las armas de Infantería y Caballería aplaudieron con entusiasmo los proyectos del Ministro de la Guerra.

Mientras con procurada lentitud se tramitaba parlamentariamente la reforma militar, el Ministro de Estado Sr. Moret celebraba un tratado secreto con la Triple Alianza, formada por Austria, Alemania e Italia, a fin de mantener, contando con la anuencia de Inglaterra, el *Statu quo* mediterráneo.

Tema que dió por aquel entonces mucho que hablar fué el de la *moralidad administrativa*. Silvela, en Málaga, trató del asunto refiriéndose especialmente a la Península, y el general Salamanca, recién nombrado para el supremo mando militar de Cuba, habló también de los funcionarios que desde aquella isla giraban sumas importantes a hombres significados en el mundo político. Ofendido por las palabras del General el Ministro de Ultramar Sr. Balaguer, pidió explicaciones, y aunque Salamanca se apresuró a darlas, no por ello pudo impedir que el Gobierno le exonerara del empleo a que le había destinado. "La opinión pública seguía señalando con nombres y apellidos, pese a la rectificación de Salamanca, los ex-

plotadores peninsulares de la inmoralidad colonial, que, sobre todo en las aduanas, saqueaban sistemáticamente al Tesoro público, y el Gobierno de Madrid seguía prefiriendo para los destinos de Ultramar a los hijos de familia incorregibles, a los padres de ella arruinados o deshonrados, y a cuantos por petición ajena o por estímulo propio, infame a veces, deseaban los hombres políticos alejar de la Península. Si, tachado de defraudador, regresaba a Europa algún funcionario con buen asidero, ni él ni nadie ignoraban que a los pocos meses volvería ascendido a la colonia”<sup>1</sup>.



Fig. 149.—Rius y Taulet

Cuestión que tuvo la virtud de atraer la atención del país fué la planteada por los elementos agricultores, que defendidos por la recién constituida *Liga Agraria*, solicitaron la elevación de los derechos arancelarios sobre la importación de cereales extranjeros y la implantación de un plan de economías en los gastos públicos y de una política de protección a los intereses agrícolas. Gamazo, Moyano, Muro y el mismo Cánovas defendieron la causa cerealista, causa que, como hemos apuntado, sirvió para que la opinión parara un momento mientes en aspecto de tan vital interés para la economía nacional.

El 12 de Mayo de 1888 salió la Regente con sus hijos en dirección a Zaragoza, de donde se trasladó a Barcelona a fin de inaugurar la Exposición Universal (20 de Mayo), siendo en una y otra ciudad recibida con extraordinario entusiasmo. Ausente la Soberana de Madrid y habiendo partido para La Granja la infanta Isabel, el capitán general de Castilla la Nueva señor Martínez Campos negóse a pedir a la Infanta Eulalia, que había permanecido en la Capital, el acostumbrado *Santo y Seña*. Cassola, que con Sagasta acompañaba a doña María Cristina en su viaje, telegrafió desde Barcelona a Mar-

1. Maura y Gamazo, obr. cit., t. I, págs. 70 y 71.

tínez Campos para manifestarle que no existía disposición alguna que justificara *el despojar* a la infanta doña Eulalia del derecho que le asistía a dar el *Santo y Seña*, y don Arsenio, montando en cólera, replicó que *ni despojaba ni permitía que se le despojase* de su derecho, por lo que solicitaba que S. M. aceptase la dimisión de su cargo. Efecto de tal incidente fué la salida de Cassola del Ministerio y la reorganización de éste pasando a Gobernación Moret, al que sucedió el Marqués de la Vega de Armijo, entrando en Ultramar y Fomento los ex-Subsecretarios Ruiz Capdepón y Canalejas (don José) y en Guerra el general O’Ryan.

Los partidos políticos seguían en tanto entregados a sus luchas interiores. Parte de los liberales reformistas, a pretexto de las campañas poco respetuosas para la Regente del periódico de López Domínguez *El Resumen*, rompieron su postiza unión (25 de Abril de 1888); los republicanos continuaban ofreciendo la variedad de criterios que podía advertirse entre el ministerialismo de Castelar, la transigencia de Salmerón y la intemperancia federalista de Pi y Margall; los secuaces de don Carlos, en pugna con éste don Ramón Nocedal, se dividían en adictos al Pretendiente y nocalinos o enemigos de las claudicaciones de su antiguo Monarca y defensores a toda costa de la integridad de la verdad católica, por lo que se llamaron *integristas*; y, finalmente, los conservadores, aunque unidos, comenzaban a dar muestras de inquietud por la que juzgaban excesiva permanencia de los liberales en el mando. Resultado de tal disposición de ánimo de sus correligionarios, fué que don Antonio Cánovas, al trasladarse durante el verano de 1888 a visitar la Exposición de Barcelona, dirigiese la palabra a sus adeptos en esta ciudad censurando ácremente la política económica de los liberales y sus proyectos de implantación del sufragio universal. Tales declaraciones y el anuncio de que el jefe de los conservadores se disponía a dirigirse a Aragón, la Mancha, Extremadura y Andalucía para continuar su propaganda, alarmaron al Ministerio y a sus amigos, los cuales procuraron hacer atmósfera contra Cánovas, en Zaragoza, Sevilla y Madrid, capitales en las que fué estrepitosamente silbado el ilustre hombre público.



Reanudadas las sesiones parlamentarias el 30 de Noviembre de 1888, al ser elegida la Comisión de Presupuestos, para aquella legislatura, presentaron candidatos propios los conservadores y gamacistas unidos frente a los del Gobierno, y aunque triunfaron en una sola Sección, prodújose la inevitable crisis ministerial (10 de Diciembre de 1888), dejando sus Carteras Moret, Alonso Martínez, López Puigcerver, mantenedor éste de la política económica que los gamacistas combatían, y el general O'Ryan. Pasó Canalejas a Gracia y Justicia, sucediéndole en Fomento el conde de Xiquena; se hizo cargo de la cartera de Gobernación el señor Ruiz Capdepón ocupando la de Ultramar don Manuel Becerra; entró en Hacienda don Venancio González y fué llamado a regir el Ministerio de la Guerra el general Chinchilla.



Fig. 150. —D. Cristino Martos

Entrado el año de 1889 aliáronse contra el Gobierno los elementos políticos enemigos de Sagasta formando lo que se llamó entonces *la conjura*. Integraron ésta gamacistas, conservadores, romeristas, lópez-dominguistas y carlistas y, al fin, el propio Presidente de la Cámara popular señor Martos. deseoso de colocarse en condiciones de ocupar la cabecera del banco azul. Con ocasión de presentar el Sr. Fernández Villaverde una proposición solicitando aumento en los derechos de importación sobre los cereales, don Germán Gamazo pronunció un discurso de ruda oposición contra el Ministerio (16 de Mayo). Al procederse a la votación de la supradicha propuesta, Martos abandonó solemnemente el sillón pre-

sidencial, como queriendo significar con ello su divorcio del Gobierno (22 de Mayo). En la tarde siguiente, no habiendo comparecido el señor Martos como tenía por costumbre a la hora de abrirse la sesión, dió con esta ausencia sobrado fundamento al hecho de su renuncia; pero entrado el Congreso en el debate sobre el dictamen del sufragio universal, vióse a don Cristino subir la escalera de la presidencia. Alzáronse entonces indignados de sus asientos los Diputados ministeriales para increpar al versátil Presidente; el Marqués de la Vega de Armijo excitó a la mayoría a salir del Salón; contestaron a tono las oposiciones, y tras de algunos minutos de formidable escándalo, cubrióse Martos y levantó la sesión. Suspendida la actuación parlamentaria por Real Decreto el 24 de Mayo, fué convocada la nueva legislatura para el día 14 de Junio. Abierta ésta, resultó elegido para la Presidencia del Congreso el señor Alonso Martínez, y después de un largo debate sobre el que se denominó *cristineo del 23 de Mayo*, comenzaron el 17 de Julio las vacaciones de los Cuerpos Colegisladores.

Siguió siendo pasto del público comentario la famosa cuestión de la moralidad administrativa. Durante el verano del año anterior (1888) el vulgar asesinato de doña Luciana Borcino, viuda de Vázquez Varela, domiciliada en la calle de Fuencarral, número 109, realizado por la criada de la víctima, Higinia Balaguer, hizo recaer sospechas sobre José Vázquez Varela, hijo de aquélla, que se hallaba a la sazón en la Cárcel Modelo sufriendo condena por sus escándalos. Con tal motivo, pudo averiguarse que el tristemente famoso *Varelita*, como se le conocía en tabernas y burdeles, salía y entraba en la Modelo y asistía a las corridas de toros cuando le venía en gana, no obstante su condena, y aun maliciosamente se sospechó que la lentitud con que se tramitaba el proceso por el asesinato, era debida a punibles lenidades de la justicia, tan desgastada y corroída, a juicio de los poco piadosos comentaristas, como los demás organismos de la administración pública. Cual era de esperar, trascendió a la vida política aquel estado de opinión, y un hombre de espíritu tan refinado como don Francisco Silvela llegó a decir

ante sus correligionarios de Málaga, que era tal el Gobierno de Sagasta, que no conseguía siquiera "hacer obligatorios los presidios a aquellos penados que disfrutaban de recursos para tener abono de tendido en la plaza de toros". Cuando todavía eran objeto preferente de las conversaciones los mil incidentes derivados del crimen de la calle de Fuencarral, la pública murmuración hizo blanco de sus comentarios el desbarajuste administrativo del Ayuntamiento de Madrid, Corporación presidida entonces por don José Abascal, íntimo amigo de Sagasta. Comisionado el Gobernador Civil don Alberto Aguilera para girar una visita de inspección al Municipio de la Villa, resultó comprobado el fundamento de las denuncias formuladas y, en su consecuencia, el día 7 de Agosto de 1889 fueron suspendidos 26 concejales; el día 7, dimitió el alcalde señor Abascal, y el 22 de Septiembre se pasó el tanto de culpa a los Tribunales, sin que, a la postre, recayera ningún castigo sobre los culpables.

Durante los meses de Marzo, Julio y Agosto de 1889 realizaron sin éxito en la bahía de Cádiz las pruebas del submarino construido bajo la dirección del teniente de Navío don Isaac Peral. En Julio de 1890 se repitieron, sin dar tampoco resultado. Una Comisión técnica y el Consejo de Almirantes informaron desfavorablemente sobre el invento del laborioso oficial de Marina, a quien la popularidad alcanzada, y, ciertamente, no querida por Peral, le perjudicó notoriamente privándole de la tranquilidad necesaria para dedicarse a perfeccionar su nave submarina. Por ello quedó ésta arrumbada en el arsenal de la Carraca y su contrariado autor pidió la licencia absoluta, obteniendo la representación en España de una Compañía extranjera de electricidad que le proporcionó los medios de poder subsistir modestamente los últimos años de su vida.



Fig. 151.—Isaac Peral

También durante el verano de 1889 (22 de Junio) tuvo lugar por iniciativa del Liceo de Granada, la solemne coronación del poeta don José Zorrilla por el Duque de Rivas, en representación de la Regente.

Inauguróse el año de 1890 con la grave enfermedad padecida por el Rey. El justificado y noble interés que en conocer el curso de la dolencia del augusto niño manifestó Castelar, interpretóse por algunos en el sentido de un próximo ingreso del admirable tribuno en las filas dinásticas, supuesto que el interesado se apresuró a rectificar. Un intento de conciliación de las fuerzas liberales, conciliación a la que estimulaban la precaria salud del Soberano y el empeño de sacar a flote la Ley del sufragio universal, fracasó totalmente, no obstante los laudables esfuerzos del Sr. Alonso Martínez, encargado de llevarla a cabo. Por ello, después de tres semanas de laboriosa crisis, nuevamente juró Sagasta el cargo de Presidente del Consejo, entrando con él a formar la situación los Sres. Marqués de la Vega de Armijo (Estado), Puigcerver (Gracia y Justicia), Capdepón (Gobernación), Bermúdez Reina (Guerra), Romero Moreno (Marina), Eguilior (Hacienda), Duque de Veragua (Fomento) y Becerra (Ultramar). El famoso proyecto sobre sufragio universal, sirvió a los liberales para continuar algunos meses en posesión del mando. El 24 de Febrero aprobó el Congreso el primer artículo del citado proyecto, y el resto de éste asimismo mereció la aquiescencia de dicha Cámara, que lo remitió al Senado a fines de Marzo, quedando en él aprobado en poco tiempo y sometido a la regia sanción el 26 de Junio. Un debate político iniciado por Romero Robledo, con miras a la crisis, hizo desfilar por la tribuna parlamentaria a los primates de los partidos militantes, cada uno de los cuales formuló la correspondiente petición en armonía con sus aspiraciones. Sagasta planteó la cuestión de confianza el 3 de Julio (1890); llamó la Regente a consulta a los hombres más significados del liberalismo, y el 5 de Julio asumió el encargo de formar Gobierno don Antonio Cánovas del Castillo.

Durante el período de dominación liberal que hemos reseñado, vieron la luz pública, en materia civil, el Código civil,

vigente desde 1.º de Mayo de 1889 y en punto a Derecho público, la Ley de Asociaciones (30 de Junio de 1889) y la del Jurado (20 de Abril de 1889). En relación con la materia mercantil se dió vigencia desde 1.º de Enero de 1886 al Código de Comercio de 22 de Agosto de 1885.

Entraron en el Gabinete formado por Cánovas, juntamente con Silvela (Gobernación), Fernández Villaverde (Gracia y Justicia), y Cos Gayón (Hacienda), el general don Marcelo Azcárraga (Guerra), que acababa de acreditar en el supremo mando militar de Valencia sus dotes de gobierno, los señores don Antonio María Fabié (Ultramar) y don Santos Isa-sa (Fomento), distinguido académico el primero y notable jurisconsulto el segundo, y dos personajes de filiación izquierdista: el Duque de Tetuán (Estado) y el vice-almirante Beranger (Marina).

El carácter de conjunción liberal-conservadora que diera a la situación la presencia de los últimamente citados personajes, las manifestaciones de Cánovas y la circular dirigida el 7 de Julio (1890) por Silvela a los Gobernadores civiles, claramente denunciaban el designio de los conservadores de obtener, cuando no el apoyo, la benevolencia de los elementos izquierdistas, a los que el nuevo Gobierno prometía respetar las leyes políticas y las reformas jurídicas realizadas con el concurso del Parlamento durante los cinco años de dominación del partido liberal. Tal promesa y las también entonces formuladas en obsequio de la burguesía en el sentido de proteger el trabajo y la producción nacional, especialmente por medio de la revisión arancelaria, nivelar los presupuestos y rendir escrupuloso respeto a los compromisos relacionados con el crédito público, sintetizaban las miras de la nueva situación, atenta, de un lado, a desarmar los recelos del liberalismo y no menos solícita, de otro, en el empeño de no defraudar la confianza de las clases conservadoras. Pero los esfuerzos de Cánovas en este sentido no resultaron todo lo eficaces que él quisiera. Las simpatías de lo que convencionalmente hemos dado en llamar opinión, se pronunció por Sagasta, y frente al Gabinete representante de las ideas de orden, comenzaba a agitarse la incipiente organización socia-



lista acaudillada por el ex-obrero tipógrafo Pablo Iglesias, que entregado a la más tenaz labor de propaganda, fundaba en Madrid y provincias Centros obreros, entidades éstas que todavía en el poder los liberales, acababan de inaugurar la costumbre de consagrar el 1.º de Mayo (1890) como fiesta del trabajo.

Combatido Cánovas por los secuaces de Sagasta y amenazado por la propaganda socialista, debió acentuar la orientación hacia las derechas buscando el apoyo de los elementos católicos; pero temeroso de que pudieran servirle de pesado lastre en su futura actuación parlamentaria, dejó de aprovechar una fuerza que, limpia de algunas exageraciones, hubiérale servido de eficacísima ayuda para la campaña de acción social que la realidad política española demandaba con el mayor apremio.

Percatados los elementos izquierdistas de la situación del Gobierno, se aprestaron desde el primer momento a entorpecer su marcha. Ofrecióseles como propicia ocasión la de tener que constituir la Junta Central del Censo, instituída por la última Ley electoral con carácter principalmente consultivo. Integrada por el Presidente y Vicepresidentes y por los ex-Presidentes y los ex-Vicepresidentes del Congreso, circunstancia que permitió que de ella formaran parte, entre otros, los Sres. Castelar, Salmerón y Sagasta, fué planteada por el primero de éstos la cuestión relativa al carácter, independencia y atribuciones del naciente organismo, pretendiendo que éste actuara, tanto en la formación del Censo, como en los actos de la votación y el escrutinio sin la menor intervención del Poder ejecutivo. No prevaleció tal doctrina, pero el hecho de haber sido expuesta y con calor defendida por las representaciones liberales, constituía testimonio harto elocuente de la situación en que se hallaban respecto al Gobierno.

El 7 de Diciembre de 1890 se verificaron las elecciones provinciales, en las que lograron un señalado triunfo los candidatos adictos. El 1.º de Febrero de 1891 tuvieron lugar las generales, alcanzando en ellas el Gobierno 271 puestos en el Congreso y 123 en el Senado, contra 95 en el Congreso y 37

en el Senado sumados por los liberales, gamacistas e izquierdistas; 37 y 7 por los romeristas; 8 y 2 por los amigos de Martos; 6 y 3 los tradicionalistas; 3 y 2 los independientes, y 29 los republicanos. El 2 de Marzo se abrieron las Cortes, y el 20 de Abril constituyéronse ambas Cámaras, que fueron presididas, la Alta o aristocrática, por el general Martínez Campos y la popular por don Alejandro Pidal.

Fiel a sus compromisos en punto a los problemas económicos, derogó el Gobierno (Real Decreto de 24 de Diciembre de 1890) la base quinta de la Ley Figuerola, y en vista de que ascendían las obligaciones pendientes a la suma de 828 millones de pesetas, solicitó de las Cortes la oportuna autorización para emitir deuda amortizable en treinta años, al 4 % de interés, por valor nominal de 250 millones, y obtuvo del Banco de España 150 millones en préstamo sin interés, reintegrables a los treinta años, concediendo en cambio al aludido Establecimiento la ampliación a 1.500 millones del privilegio que gozaba para emitir papel moneda y la prórroga de su vida legal desde 1904 a 1921. Aunque fuera del Parlamento se agitaron contra el proyecto del Gobierno el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, y las Cámaras de Comercio de toda España, y en el seno de las Cortes la oposición fué tenaz y ardorosa, triunfó la propuesta ministerial, que se vió convertida en Ley el 14 de Julio de 1891.

El 22 de dicho mes insertó la *Gaceta* una generosa amnistía que alcanzaba sin excepción de clase ni fuero a todos los sentenciados, procesados, rebeldes o sujetos de cualquier modo a responsabilidad criminal, por delitos contra la forma de gobierno, rebelión y sedición, así militar como civil, y sus conexos, o por delitos cometidos por medio de la imprenta, exceptuando sólo los de injuria y calumnia contra particulares. Durante el mes de Septiembre (1891) se produjo la catástrofe de Consuegra ocasionada por el desbordamiento del río Amarguillo, y hubo también de lamentarse el tremendo choque de un tren mixto y otro expreso de las líneas del Norte entre las estaciones de Burgos y Quintanilleja. Aquel y éste suceso impresionaron dolorosamente al país por las numerosas víctimas que ocasionaron.

Llegado el otoño, el Sr. Romero Robledo, después de sus infructuosas andanzas por el reformismo, reingresó en las filas conservadoras, dando con ello margen a la dimisión del Sr. Silvela, que se juzgaba incompatible con el batallador político antequerano. La crisis producida por tal determinación fué resuelta (23 de Noviembre de 1891), mediante una ratificación de poderes al Sr. Cánovas, el cual constituyó nuevo Gabinete, conservando las carteras de Estado y Guerra los Sres Duque de Tetuán y general Azcárraga, pasando a la de Gracia y Justicia el Sr. Cos Gayón y entrando en Ultramar, Romero Robledo; en Gobernación, Elduayen; en Hacienda, don Juan de la Concha Castañeda; en Marina, don Francisco Montojo y en Fomento, don Aureliano Linares Rivas. El Gobierno reprimió con plausible severidad el movimiento anarquista iniciado en la noche del 5 de Enero de 1892 por algunos vecinos de los pueblos de Arcos, Lebrija y Lájár, que penetraron en son de fuerza en Jerez pretendiendo asaltar el Ayuntamiento; puso especial empeño en aminorar los deplorables efectos de la extinción del tratado de Comercio con Francia (había terminado el 1.º de Febrero) mediante el concierto con dicha Nación de un *modus vivendi* que debía comenzar a regir el 1.º de Julio, y se aplicó, sin conseguirlo en la medida que deseara, a realizar economías en el Presupuesto. Obtúvolas, en cambio, en su Departamento de Ultramar el Sr. Romero Robledo, pero ellas sirvieron para que los autonomistas cubanos, a pretexto de que para conseguir las se suprimían dos Institutos de segunda enseñanza y otras tantas Audiencias de lo criminal, pretendieran demostrar que la Metrópoli conspiraba contra la cultura y la justicia de la Isla.

Durante el mes de Junio se produjo en el Ayuntamiento de Madrid un ruidoso incidente entre el Alcalde Sr. Bosch y Fustegueras y las minorías, repercutiendo en las calles el disgusto contra la primera autoridad municipal. Asimismo, en dicho mes estalló la huelga de los telegrafistas fundada en sus aspiraciones no atendidas por el Gobierno de fusionarse con el Cuerpo de Correos y de constituir una escala facultativa cerrada, con inamovilidad absoluta. Solucionóse el conflicto

con la salida del titular de Gobernación Sr. Elduayen, que fué sustituido por el Sr. Villaverde; pero los gérmenes de indisciplina siguieron latentes como consecuencia de haber quedado tan por los suelos el principio de autoridad.

Con singular pompa y laudabilísimo acierto, celebró España desde Agosto a Noviembre de este año (1892) las fiestas del Centenario del descubrimiento de América, bien es verdad que sin lograr que los brillantes desfiles, eruditas conferencias, retretas militares y procesiones cívicas desviarán la atención del vecindario madrileño de las insistentes acusaciones formuladas por la Prensa contra la administración concejil y, especialmente, contra el Alcalde Sr. Bosch. Haciéndose eco el Ministro de la Gobernación Sr. Villaverde de las públicas denuncias, decretó la inspección de los actos municipales, encargando al Subsecretario Sr. Dato el practicarla. El resultado de la misma no pudo ser más desfavorable para los munícipes, los cuales, a juicio del Sr. Villaverde, debían ser suspendidos y, además, sometidos a la acción de los Tribunales de justicia. Discrepó de esta opinión Romero Robledo, que rompiendo lanzas por su correligionario señor Bosch, expuso que éste no había hecho en el Ayuntamiento cosa distinta a la que practicaran sus antecesores, y como la mayoría del Consejo se mostrara conforme con este parecer, presentó Villaverde la dimisión de su cargo, solidarizándose con los señores Dato, Marqués de Cubas (que había sido designado Alcalde en sustitución de Bosch), Cárdenas, Gobernador civil a la sazón, y don Francisco Silvela. Adquirió con todo esto la cuestión importancia extraordinaria. Las clases mercantiles, que por aquel entonces experimentaban las consecuencias de la interrupción de relaciones comerciales con Francia, se asociaron a la protesta contra el Gobierno, y el día 1.º de Diciembre una imponente manifestación popular recorrió las calles céntricas de la Corte a los gritos de ¡Abajo Cánovas!, ¡Fuera el Gobierno!, ¡Vivan los hombres honrados!

Reanudadas las sesiones parlamentarias el día 5 de Diciembre, inició Moret en el Congreso el esperado debate sobre la dimisión de Villaverde. Salió a la defensa de éste su ami-

go el Sr. Silvela, que en la sesión del día 6 pronunció un elocuente e intencionadísimo discurso, y como le pusiera término manifestando que el deber supremo de todo subordinado político era *soportar a su jefe*, el Sr. Cánovas vivamente replicó que no estaba allí *para que nadie le soportase*. En la tarde del día 7, una proposición de confianza, no votada por los silvelistas, liberales y republicanos, dió al traste con el Gobierno de Cánovas, facilitando el paso a la situación liberal presidida por Sagasta desde el 11 de Diciembre de 1892.

El Ministerio *de altura* o de *notables* formado bajo la presidencia de don Práxedes, se compuso de los siguientes elementos: Vega de Armijo (Estado), Montero Ríos (Gracia y Justicia), López Domínguez (Guerra) Gamazo (Hacienda), Cervera (Marina), Moret (Fomento) Maura (Ultramar) y don Venancio González (Gobernación). Personajes todos ellos de indudable relieve, dieron a la situación la máxima autoridad y los más justificados fundamentos a la pública esperanza de mejores tiempos. Disueltas las Cortes conservadoras y elegidas las sucedáneas con abrumadora mayoría ministerial en ambas Cámaras, se verificó su apertura el 5 de Abril de 1893, con asistencia de la Regente que anunció en su discurso el decidido propósito del Gobierno de normalizar la Hacienda y de dar seguridades a la riqueza nacional. Pero de tan plausibles propósitos hubo que rebajar, no sólo lo que es frecuente que la realidad misma imponga al convertir en hecho las ideas concebidas, sino lo que el egoísmo de los regidos y las querellas apasionadas de los dirigentes de consuno exigen al gobernante mejor intencionado. Así ocurrió, que los planes de reorganización económica de Gamazo hallaron clamorosa resistencia por parte de los que se estimaban perjudicados; las reformas militares de López Domínguez, levantaron protestas en las capitales que se creían desatendidas o expoliadas; los proyectos de Montero Ríos en orden a la administración de justicia y, sobre todo, el relativo a la institución de Tribunales de partido ambulantes, fueron acremente censurados por los mismos funcionarios de la carrera, y las bases presentadas por Maura para iniciar lógica y oportunamente un régimen de concesiones de carácter auto-



mista en Cuba y Puerto Rico, hallaron en los elementos conservadores peninsulares y en los afiliados al partido isleño de la Unión constitucional, la más viva hostilidad<sup>1</sup>. Resultado de ello fué, que, hartos Montero Ríos de la oposición que se le hacía dimitió el 7 de Julio; que López Domínguez vióse en el trance de tener que aplazar la ejecución de parte de sus reformas y de modificar sensiblemente las que pudo sacar a flote; que Maura luchó con denuedo contra sus encarnizados enemigos sin lograr imprimir la menor celeridad al lento debate parlamentario a que daban lugar sus iniciativas, y que Gamazo, persuadido ya de que ni aun se había de intentar la reorganización de servicios, complemento de su labor económica, forcejeaba en plena canícula, auxiliado por el calor más que por sus colegas, para sacar de las Cortes un Presupuesto que excusara por lo menos la prórroga gubernativa del vigente.

En las Cámaras había encontrado además el Ministerio serias dificultades por parte de Unión republicana al intentar el aplazamiento de las elecciones municipales, obteniendo, en cambio, el ingreso en las filas ministeriales de los antiguos posibilistas, a quienes su jefe Castelar había autorizado para realizar tal evolución. Cerrado el Parlamento a principios de Agosto (1893), trasladóse Sagasta a San Sebastián. Allí se hallaba a últimos del citado mes cuando, por causa de no haber querido tocar la banda municipal el *Guernicaco Arbola*, se amotinaron los donastiaras al grito de ¡Vivan los fueros!, y dirigiéndose al Hotel de Londres, donde se hospedaba el Presidente del Consejo, apedrearón el edificio. La

1. El proyecto de Ley de bases presentado a las Cortes por Maura, fundía en una sola las seis provincias existentes en Cuba. Dicha provincia sería dirigida por una Diputación con amplias atribuciones. Un Gobernador general sería el ejecutor de los acuerdos de la Diputación, pudiendo suspender éstos cuando infringieron las leyes; mas para adoptar esta medida, tenía que asesorarse de un Consejo de Administración presidido por él y formado por las más altas autoridades eclesiástica, judicial y de Marina, por la mitad más antigua de los diputados provinciales, un coronel de voluntarios y los presidentes del Casino español de la Habana, la Cámara de Comercio, la Sociedad económica de Amigos del País y el Círculo de Hacendados.

Concedía a los Ayuntamientos la facultad de elegir sus alcaldes, y se establecía la dependencia de aquellos respecto a la Diputación insular, en los asuntos administrativos, y respecto a los Tribunales ordinarios, en materia judicial.

fuerza pública tuvo que hacer fuego sobre los irritados manifestantes, resultando un muerto y bastantes heridos (27 y 28 de Agosto). En Barcelona, el anarquista Paulino Pallás aprovechó la ocasión de verificarse una parada militar, el 23 de Septiembre, para arrojar dos bombas de dinamita debajo del caballo que montaba el general Martínez Campos. Al poco tiempo, el 7 de Noviembre, con motivo de inaugurar el Liceo su temporada de ópera, otro anarquista, Santiago Salvador, lanzó desde el último piso del coliseo al patio de butacas dos bombas, causando la muerte de nueve señoras y seis caballeros. Pallás, Salvador y algunos de sus cómplices sufrieron la última pena, pero la hermosa Ciudad Condal quedó sobrecogida de espanto, no sólo por los terribles atentados, sino por lo que ellos significaban como amenaza para lo porvenir. También durante los primeros días de Noviembre hubo de sufrir Santander dolorosa tragedia: incendiadas las carboneras del buque *Cabo Machichaco*, amarrado a aquel muelle y portador de un cargamento de dinamita, petróleo y clavos, estalló horriblemente produciendo la muerte de más de trescientas personas e importantes daños en crecido número de edificios.

Nuevo motivo de patriótica preocupación ofreció a España la llamada Guerra de Melilla, que hubo de tener comienzo a primeros de Octubre de 1893. Motivóla la agresión de los moros a los obreros que construían el fuerte de Sidi-Aguariach, destinado a cerrar el campo melillense. La vecindad de aquellas obras a un cementerio indígena y a una mezquita, dió al levantamiento rifeño un carácter marcadamente religioso. Destruído en Sidi-Aguariach por los naturales cuanto habían edificado los españoles, quiso el general Margallo limpiar de enemigos el campo y reemprender las obras, pero sitiado en el fuerte de Cabrerizas Altas, halló la muerte al intentar romper el cerco (28 de Octubre). Nombrado Martínez Campos general en jefe de un ejército de veinticinco mil hombres, consiguió imponerse a los rebeldes, firmando después con el Sultán en Marrakesch (5 de Marzo de 1894) un tratado a cuya virtud se convino el castigo de los agresores de Octubre y Noviembre, el establecimiento de una zona

neutral entre el campo de Melilla y el marroquí y la indemnización de 20 millones de pesetas, que habían de ser abonados a España. A fin de ultimar algunos detalles del tratado, vino a Madrid en Enero de 1895 Sidi-Brisha, representante del Sultán. Disponíase a salir el alto dignatario del Hotel de Rusia, donde se alojaba, a fin de ser recibido en Palacio, cuando el general Fuentes saliéndole al paso en la escalera del Hotel abofeteó al Embajador. Originóse por tan lamentable motivo una crítica situación al Gobierno, el cual se apresuró a dar a Sidi-Brisha toda clase de explicaciones, no siendo el menor testimonio de desagravio haber puesto a su disposición el crucero *Reina Regente* a fin de que pudiera en él retornar a su patria. Cumplida la misión confiada a nuestros marinos, salió de Tánger con destino a España el hermoso barco de guerra, pero la mala fortuna le hizo naufragar, pereciendo toda la tripulación.

A todo esto habíanse producido en la constitución del Gabinete esenciales variaciones. Cansado Maura de la oposición que se hacía a sus proyectos autonomistas, y contrariado Gamazo por la negativa de la Diputación foral de Navarra a aumentar la cuota tributaria con que subvenía a los gastos nacionales desde el año de 1841, presentaron sus dimisiones siguiéndoles el Sr. López Puigcerver. Reemplazaron a los dos primeros don Amós Salvador y don Manuel Becerra; entró a desempeñar la cartera de Gobernación don Alberto Aguilera; fué conferida la de Fomento a don Alejandro Groizard, y quedaron encargados de las restantes sus anteriores titulares (12 de Marzo de 1894).

El Ministerio liberal así constituído se halló en la necesidad de buscar alguna solución al problema cubano, cada vez planteado en condiciones de mayor gravedad. No estando en circunstancias de procurársela el Ministro de Ultramar Sr. Becerra abandonó este cargo, que vino a ocupar entonces el posibilista don Buenaventura Abarzuza. El 17 de Enero de 1895 publicóse la fórmula a que, tras de mutuas concesiones, acababan de llegar el Gobierno y los representantes de los partidos isleños. Según ella, subsistirían las Diputaciones provinciales existentes en Cuba, pero las facultades de

aquella otra única que Maura había proyectado, se atribuirían a un Consejo de Administración de treinta miembros nombrados la mitad por la Corona y elegidos los otros quince por los organismos insulares. El capitán general presidiría este Consejo, al que se encomendaba también ahora la capital misión de formar anualmente los presupuestos y elevarlos a las Cortes. Los vocales natos del antiguo proyecto integrarían una Junta de autoridades, a la que se asignaron funciones propias, auxiliares de las del Consejo de Administración. Ante éste podrían alzarse los Ayuntamientos de la isla de los acuerdos emanados de las Diputaciones respectivas, emancipándose así del Poder central madrileño.

Recibida con entusiasmo la fórmula por los partidos *autonomista*, *reformista* y *constitucional* de la isla, y aun por elementos representativos de la masa neutra, no tuvo, empero, la virtud de evitar que los separatistas cubanos dieran fe de vida en Baire, Holguín y Guantánamo, así como en las provincias de Habana y Matanzas. Preparóse el Gobierno para hacer frente al grave movimiento iniciado por los insurgentes, a cuyo efecto acordó enviar seis mil hombres que reforzaran los catorce mil que constituían el ejército español en Cuba. Si entre la clase de sargentos fué crecido el número de los que se dispusieron voluntariamente a ir a las Antillas y no faltaron tampoco entre los generales, jefes y capitanes, escasearon, en cambio, entre los oficiales subalternos, que, a decir verdad, compartían la atonía bien manifiesta del elemento civil. Haciéndose eco de tal fenómeno el periódico *El Resumen*, acusó al personal recién salido de las Academias militares de rendir culto “a la comodidad sibarita y a la conservación individual”, y de haber abrazado la carrera de las armas “por juzgarla lucrativa, segura u ostentosa”. La indignación producida en los oficiales por tal ofensa, movió a unos treinta de ellos a asaltar a las once de la noche del 14 de Marzo (1895) la redacción *El Resumen*, situada en la calle de la Reina. Al día siguiente, *El Globo* censuró la violencia cometida por los subalternos, y éstos invadieron también su redacción disponiéndose además a destruir la imprenta donde se tiraba el primero de los citados periódicos. La lle-

gada del capitán general Sr. Bermúdez Reina contuvo a los jóvenes militares, pero solidarizadas con ellos la Guardia Civil y la de Seguridad, y estimándose impotente el Gobierno para resolver el conflicto en el sentido que demandaba la justicia, planteó la crisis total en la mañana del 18 de Marzo, asumiendo las responsabilidades de la nueva situación el señor Cánovas (23 de Marzo) que con Tetuán (Estado), Azcárraga (Guerra), Beranger (Marina), Cos Gayón (Gobernación), don Tomás Castellanos (Ultramar), Romero Robledo (Gracia y Justicia), don Juan Navarro Reverter (Hacienda) y Bosch y Fustegueras (Fomento), inició la segunda etapa de dominación conservadora durante la Regencia.

Teniendo el Ministerio que gobernar con las Cortes liberales, ya que Sagasta se había comprometido a prestarle el necesario apoyo parlamentario, procuró no dar motivo a su protector de arrepentirse del generoso ofrecimiento. Contando con él, legalizó el partido conservador la situación económica y realizó las elecciones municipales; mas cuando llegado el 1.º de Julio (1895) estimóse en condiciones de emanciparse de la tutela que parlamentariamente sobre él ejercía la llamada oposición de S. M., dió Cánovas por terminada la legislatura, disponiéndose a actuar libre de todo compromiso y desentendido de toda enojosa influencia. Pero en sus egoístas designios halló como obstáculo la obstinada enemiga de la disidencia silvelista, que Cánovas simuló despreciar. No dispuestos los heterodoxos conservadores a perdonar a su antiguo jefe la magnánima protección que dispensaba a Romero Robledo, Bosch y Navarro Reverter, aprovecharon una vez más la circunstancia de que los concejales patrocinados por el Gobierno en el Municipio madrileño se entregaran a los más escandalosos peculados con motivo ahora de las obras de algunos ensanches de calles céntricas y otros embellecimientos en el extrarradio de la capital. El Marqués de Cabriñana, copropietario de unos solares situados en la calle de Sevilla, que acababa de ser ampliada, denunció las proposiciones que algunos concejales le habían hecho a fin de obtener, de la exagerada valoración de aquéllos y subsiguiente adquisición por el Ayuntamiento, inmoral margen de ga-



nancia que pudiera distribuirse entre propietarios e inverecundos granjeros. Prodújose al hacerse pública la denuncia la natural reacción de protesta, que subió de punto cuando en las primeras horas de la noche del 19 de Noviembre fué objeto, en la entonces desierta calle de Felipe IV, de un cobarde atentado el Marqués denunciador. El 28 de Noviembre



Fig. 152.—Martínez Campos

quedaron sometidos a proceso diez concejales y tres ex-concejales, mientras la Prensa seguía insertando acusaciones que no sólo alcanzaban a bastantes de entre los desaprensivos administradores del Consejo, sino que llegaban a afectar a los Ministros Sres. Bosch y Romero Robledo. El 9 de Diciembre, una imponente manifestación de más de cincuenta mil individuos desfiló ordenadamente desde Atocha hasta la Castellana para expresar la indignación del ve-

cindario de la capital contra la inmoralidad de su Ayuntamiento. Bosch no pudo seguir formando parte del Gobierno, que abandonó el día 13, acompañándole su amigo y valedor Romero Robledo, bien que aspirando éste a dar como explicación de su salida su disconformidad con la política de transigencia que el general Martínez Campos seguía en la lucha con los insurrectos cubanos.

En efecto, desde el 27 de Marzo de 1895 figuraba nombrado el general Martínez Campos para el mando supremo de la Gran Antilla, en sustitución del general Calleja. El 16 de Abril llegó don Arsenio a Santiago de Cuba, cuando hacía pocos días que los insurrectos José Martí y el dominicano Máximo Gómez, habían lanzado desde Monte Christi un manifiesto excitando a la revuelta, manifiesto seguido del desembarco de ambos cabecillas y de los hermanos Maceo en la parte oriental de la Isla. En presencia de tal peligro, declaró Martínez Campos en estado de sitio la provincial oriental,

comenzando una guerra de guerrillas tan costosa e ineficaz para las tropas leales, como fácil y utilísima para las insurrectas. El cabecilla José Martí, que actuaba ya de Presidente de la República Cubana, murió en un encuentro con fuerzas españolas; a primeros de Junio, Máximo Gómez pudo dilatar sus correrías desde Santiago al Camagüey; y durante el mes de Julio, trasladado Martínez Campos desde la Habana al teatro de la guerra, se vió sorprendido en los altos de Peralejo por siete mil insurrectos mandados por los hermanos Maceo. Componíase la escolta del general español solamente de trescientos hombres, y al providencial auxilio que pudo en aquella ocasión prestarle el general Santocildes con sus mil cien hombres, se debió el que Martínez Campos pudiera salir con vida y con libertad de aquel desdichado encuentro. El 24 de Julio, otra expedición filibustera desembarcada en la costa Sur de Sancti Spiritus extendía la rebelión a más de la mitad del territorio cubano. Si por tierra ofrecíase con tan mal aspecto la contienda, por mar no lograban nuestros barcos disminuir el escandaloso contrabando de armas, realizado en no pequeña parte por navíos norteamericanos. A más de esto, la escasa pericia de nuestros marinos dió margen por aquellos días a una profusa serie de accidentes que, disminuyendo la eficacia material de nuestros medios navales, tampoco favoreció su prestigio.

Durante el mes de Septiembre y primeros días de Octubre, pudieron reunirse los jefes de la rebelión en Jimaguayú (Puerto Príncipe), es decir, en el centro de la Isla, para celebrar una Asamblea constituyente de la República, que aprobó el texto de un Código fundamental y la organización administrativa del nuevo Estado. En Noviembre, Máximo Gómez y Antonio Maceo se ponían en contacto extendiendo cada vez más sus correrías hacia la Habana, y, a mediados de Diciembre, Martínez Campos procedía a desarrollar su plan consistente en empujar de Oeste a Este a los insurrectos a fin de llevarlos hasta la trocha de Júcaro o Morón, donde había concentrado elementos marciales de gran importancia. Salió el General en jefe de la Habana con ánimo de llevar a cabo su madurado proyecto, y el 23 de

Diciembre halló al enemigo cerca de Matanzas. El encuentro quedó reducido a una pequeña escaramuza, tras de la cual retrocedieron los mambises, haciéndolo también los españoles camino de la ciudad antes citada. Proseguido a los pocos



Fig. 153.-Weyler

días nuestro avance con el mencionado propósito de barrer a los insurrectos hacia la trocha de Morón, una habilísima filtración de las huestes insurrectas a través de las fuerzas de Martínez Campos permitiéoles dirigirse, con Máximo Gómez y Maceo al frente, hacia la Habana y extender la insurrección por esta provincia y la del Pinar del Río (Enero de 1896). Rápidamente regresó a la capital de Cuba el chasqueado general español, contra

quien, tanto en la Península como en la Isla se alzaban voces de protesta, no sólo por su reciente fracaso militar, sino por su política de transigencia con los insurrectos. Como ya hemos dicho, la salida de Romero Robledo del Gabinete conservador (Diciembre de 1895) fué justificada por el Ministro dimisionario alegando su disconformidad con los temperamentos contemporizadores de Martínez Campos. En Enero de 1890, la opinión de Romero, compartida por la casi totalidad del Gobierno, produjo el reemplazo de don Arsenio por el general don Valeriano Weyler.

Llegado el mes de Febrero, el forcejeo entre liberales y conservadores acerca de si debía o no la Corona dar el Decreto de disolución de las Cortes a Cánovas del Castillo, movió a éste a pedir a Weyler su opinión sobre si el estado de la contienda en Cuba permitía verificar las elecciones generales. Convertido don Valeriano en verdadero Poder moderador, manifestó su conformidad con el proyecto de disolución, y entonces el Presidente del Consejo solicitó y obtuvo de la Regente el oportuno Decreto (28 de Febrero de 1896).

Coincidió por aquellos días la inquietud de los partidos políticos con la indignada protesta de gran parte del país contra el acuerdo de las Cámaras norteamericanas favorable al reconocimiento de la beligerancia de los insurrectos cubanos; y aun cuando tal acuerdo no tenía otro valor que el de un estímulo dirigido al Presidente Cleveland, que era el que, en definitiva, había de decir la última palabra sobre el asunto, bastó que se conociera la opinión de los parlamentarios yankis para que nuestra indignación se exteriorizara ruidosa y apasionadamente.

Verificadas las elecciones generales, reuniéronse las Cortes el 11 de Mayo (1896), ocupando los bancos de la mayoría cerca de trescientos Diputados ministeriales, mientras la oposición de S. M. representada por los elementos liberales, sumaba 102 votos en el Congreso. En el discurso de la Corona, el Presidente del Consejo hizo decir a la Regente que el Gobierno no había abandonado el estudio de la futura legislación de las Antillas, lo que tanto significaba como la iniciación de un cambio en los procedimientos a seguir con los insurgentes, a los que si Cánovas quería al principio someter únicamente con la fuerza de las armas, ahora pensaba que también podía reducir por medios no tan violentos. En la notoria variante del criterio presidencial influyó, sin duda, una nota dirigida por el Secretario de Estado Mr. Olmey a nuestro representante en Wáshington Sr. Dupuy de Lome expresándole que siendo ineficaces las armas españolas para vencer la insurrección cubana, quizá fuera conveniente alguna declaración oficial de las concesiones que estuviera en disposición de introducir el Gobierno de Madrid en la administración cubana. Ofrecía también la Nación norteamericana su intervención como mediadora a fin de "cooperar a la inmediata pacificación de la Isla". No aceptó Cánovas el ofrecimiento que el Gobierno de los Estados Unidos le hacía, pero, como acabamos de apuntar, se apresuró a no hacer incompatible en lo porvenir su permanencia en el mando con la concesión de ulteriores prerrogativas autonómicas a los cubanos.

Entretanto el general Weyler aplicábase en la Isla a rea-

lizar su plan de campaña que, fundamentalmente, consistía en la construcción de dos trochas militares: una, de Júcaro a Morón, y otra, de Mariel a Majana, destinada ésta a aislar la provincia de Pinar del Río, centro de las operaciones de



Fig. 154.—Polavieja

Antonio Maceo. Terminada la última y en vista de la inacción del citado cabecilla, decidió Weyler acosarle en su propio campamento de Cacarajícaras, y aunque consiguió una brillante victoria sobre el ladino insurrecto, no pudo hacerlo prisionero (30 de Abril de 1897).

Mientras continuaba el General activamente su campaña militar de Cuba, en la Península discutían y aprobaban las Cortes los Presupuestos presentados por el Sr. Navarro Reverter, obra económica la de éste enderezada por empíricos y

arbitrísticos caminos a reforzar los ingresos y aun a establecer algunos, a fin de compensar el extraordinario aumento de los gastos ocasionados por la guerra. Votaron también las Cámaras una Ley que atribuía a la jurisdicción militar el conocimiento de los delitos perpetrados por medio de explosivos, disposición legislativa con verdadero fervor aprobada en vista del reciente e infame atentado anarquista de la calle de Cambios Nuevos, en Barcelona (7 de Junio de 1896) del que resultaron muertas más de diez personas que asistían a la solemne procesión religiosa verificada en la infraoctava del Santísimo Corpus Christi. Sobre el cúmulo de preocupaciones que oprimían al espíritu público, una nueva vino a hacer la carga doblemente pesada. El 7 de Septiembre de 1896, el Gobernador general de Filipinas don Ramón Blanco, participaba al Gobierno los primeros movimientos de rebeldía de los tagalos y mestizos de Luzón, que organizados en sociedades secretas, de entre las cuales era la más importante la llamada el *Katipunán*, propagaban el espíritu separatista por todo el Archipiélago filipino me-



diante el tristemente famoso *pacto de sangre*<sup>1</sup>. Blanco logró sofocar los chispazos del alzamiento producidos en Mindanao, Joló, Cebú y Panay, y pudo dejar localizada la rebelión a la provincia de Cavite (Luzón), no obstante los esfuerzos de Andrés Bonifacio y Emilio Aguinaldo, jefes de los sublevados. Sin embargo de ello, no gozando el citado general español de las necesarias simpatías, fué sustituido el 21 de Octubre por don Camilo Polavieja, que desembarcó en Manila el 2 de Diciembre. El nuevo general actuó pronta y enérgicamente. José Rizal, conspicuo filipino, médico y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, fué fusilado (29 de Diciembre de 1896), sufriendo igual pena el consejero de administración don Francisco Rojas y hasta veintitantas personas más de distinguida extracción social, pero indudablemente complicadas en el alzamiento. Desde Febrero hasta Abril tuvo Polavieja la suerte de reconquistar la mayor parte de las posiciones ocupadas por los tagalos. Una petición de refuerzos por él formulada y no atendida debidamente por el Gobierno, produjo la dimisión del General, al que se encargó de sustituirle don Fernando Primo de Rivera, marqués de Estella, que siguió el triunfal avance por tierras filipinas hasta dominar completamente la provincia de Cavite (17 de Mayo de 1897).

El partidismo político, quiso hacer de la llegada de Polavieja a España un arma de combate contra el Ministerio, a cuyo efecto, silvelistas y liberales se prepararon a recibir al General victorioso con inusitada solemnidad. El Gabinete acordó entonces anticipar algunas horas la llegada a Madrid del ilustre viajero, pero ello no impidió a los manifestantes el dar rienda suelta a su interesado entusiasmo



Fig. 155.—Rizal

1. Consistía en que cada conjurado se hacía una incisión en el brazo izquierdo y con su misma sangre firmaba el compromiso.

cuando en la mañana del 16 de Mayo descendió del tren en la estación de Atocha, el Sr. Polavieja, a quien aquéllos acompañaron hasta Palacio, donde fué recibido efusivamente por doña María Cristina. La circunstancia de que ésta se asomara al balcón juntamente con sus hijos al salir del regio Alcázar el General, fué interpretada como testimonio de discrepancia entre la Corona y el Sr. Cánovas, y como se complicara este asunto con el incidente producido por el Duque de Tetuán en los pasillos de la Alta Cámara al discutir y dar una bofetada al senador don Augusto Comas, la minoría liberal y la silvelista se retiraron de las Cortes, y el Gobierno presentó su dimisión, ratificando, ello no obstante, la Regente su confianza a don Antonio Cánovas (6 de Junio).

En tanto España había enviado a Cuba cerca de 200.000 hombres; 25.000 a Filipinas y 4.480 a Puerto Rico. Weyler, salió de la Habana trasladándose por mar a la trocha de Mariel (9 de Noviembre de 1896) a fin de batir a Antonio Maceo en su campamento de la loma del Rubí. La nueva operación permitió a los españoles vencer nuevamente al enemigo, obligando a Maceo a embarcar con algunos de los suyos en dirección a la provincia de la Habana. Llegado a ella, encontró en Punta Brava una columna española mandada por el comandante don Francisco Cirujeda, y, trabado el combate, perdió en él la vida el famoso cabecilla insurrecto (7 de Diciembre).

Al mismo tiempo que de la escena desaparecía para siempre Maceo, el Presidente de los Estados Unidos, Cleveland, se dirigía a las Cámaras de su país por medio de un Mensaje (7 de Diciembre de 1896) dedicado a explicar su actitud ante el conflicto creado por la lucha que España sostenía en la Gran Antilla. Con mayor precisión que en la Nota de Olney se pedía que nuestro Gobierno ofreciera a los isleños una verdadera autonomía, que dejando a salvo el poder soberano de la metrópoli, diese satisfacción a las exigencias de los alzados contra ella. Apuntábase también en el Mensaje a que aludimos que si las circunstancias hacían llegar a España al extremo de probar la ineficacia de sus

medios para reducir a los rebeldes, *los Estados Unidos pondrían la soberanía hispana a más altos deberes que no podrían dudar en reconocer y cumplir.*

Aunque claramente podía advertirse la amenaza que envolvían las precedentes palabras, eran ellas todavía poco expresivas para el sector de opinión norteamericana calificado de *jingoísta*, que aspiraba a todo trance a una intervención armada en Cuba. También en nuestra Patria dábese, aunque en sentido opuesto, la intransigencia, claramente manifestada en la inclinación favorable a un rompimiento con Norteamérica y en la negativa a conceder a los cubanos la menor reforma administrativa. Cánovas, sin embargo de esto, convencido ahora de la necesidad de contemporizar, publicó en la *Gaceta* de 5 de Febrero de 1897 un extenso Real Decreto que venía a transformar profundamente la organización colonial antillana, pues confiaba al sufragio la elección de Ayuntamientos, Diputados y Consejo de Administración cubanos; determinaba que los cargos públicos, incluso los judiciales, serían provistos en indígenas, y concedía casi por entero a éstos la facultad de formar sus presupuestos y fijar sus aranceles. Tan amplias atribuciones, por lo tardías, no llegaron a producir el menor efecto en los isleños. Siguió, pues, la guerra y Máximo Gómez pudo pasar con los suyos la trocha de Morón, que se reputaba infranqueable. A pesar de ello, durante la primavera de 1897, la lucha en la parte occidental de la isla decreció visiblemente, si bien en la oriental continuaba dominando los insurgentes. El sistema de rigor empleado por Weyler, singularmente la orden de concentrar en las ciudades a los habitantes del campo cubano, dió pretexto al Secretario de Estado norteamericano Mr. Sherman para dirigir el 26 de Julio de 1897 nueva Nota a Dupuy de Lome en la que protestaba contra la manera incivilizada e inhumana de llevar la guerra en la Isla. Respondió a esta violencia nuestro Ministro de Estado recordando las hazañas de los generales yankis en sus luchas con los sudistas y, asimismo, las atrocidades realizadas por ellos en la cruenta guerra secesionista; pero tan justo desahogo, desgraciadamente, no quitaba gravedad a la actitud

del pueblo americano, ya por entonces dirigido por el Presidente Mac Kinley, personificación la más autorizada del *jingoísmo*.

Así las cosas, el asesinato de Cánovas del Castillo (8 de Agosto de 1897) realizado por el anarquista italiano Miguel Angiolillo en el balneario de Santa Agueda (Guipúzcoa), a donde había ido por prescripción facultativa el Presidente del Consejo de Ministros, imprimió un cambio en la marcha política del país. Ciertamente es que, muerto Cánovas, asumió la Presidencia del Gobierno el Ministro de la Guerra señor Azcárraga, pero llegado el 1.º de Septiembre a San Sebastián el nuevo representante de los Estados Unidos Mr. Woodford y siendo portador de otra nueva conminación a España para que diera seguridades de la pronta pacificación de Cuba, o para que, durante el próximo mes de Octubre, formulara alguna proposición que permitiera hacer efectivo el ofrecimiento de buenos oficios hecho por el Gabinete de Washington, no estimándose nuestro Gobierno con autoridad suficiente para responder a tal apremio, declinó el mando, encargando la Regente de formar Gabinete al señor Sagasta, que nombró titular del Departamento de Ultramar al señor Moret, del de Estado a don Pío Gullón y de los de Gracia y Justicia, Fomento, Hacienda, Guerra y Marina a los señores Groizard, Conde de Xiquena, Puigcerver, don Miguel Correa y don Segismundo Bermejo, respectivamente.

Reunidos el 6 de Octubre (1897) los Consejeros responsables, acordaron apelar preferentemente a la acción política para concluir la guerra, y sustituir al general Weyler por su colega señor Blanco, cuya blandura de carácter era conocida. En tal sentido respondió el Ministro de Estado señor Gullón a la Nota norteamericana últimamente recibida, expresando, además, en la reconventional que hubo de enviar, la íntima creencia del Gabinete español de que la insurrección cubana hubiera sido ya sofocada si de los Estados Unidos no hubieran recibido los insurgentes los auxilios morales y materiales que les prestaban su única fuerza.

Fiel al compromiso adquirido, el Ministerio liberal publicó en la *Gaceta* del 26 de Noviembre el texto de una Cons-

titución para Cuba y Puerto Rico, a tenor de la cual se organizaba el Poder legislativo con una Cámara, equivalente al Congreso español, y un Consejo de Administración o Senado, compuesto de 16 miembros elegidos por los naturales y 18 por la Corona; se confiaba el Ejecutivo a un Presidente y cinco Ministros, y se asignaba el Poder moderador al Gobernador general. "Salvo, pues, la política internacional y la defensa del territorio, atributos inalienables del poder soberano, en todo lo demás, incluso la vidriosa materia arancelaria, la autonomía era cabal, insuperable y omnímoda".

La anterior resolución del Ministerio español tuvo por el momento la eficacia de acallar la sistemática protesta norteamericana, que ahora carecía del menor fundamento para ser formulada. El 1.º de Enero de 1898 tomaron posesión de sus Departamentos los nuevos Ministros cubanos, y con este suceso coincidió casi el no menos esperanzador de terminar la contienda filipina mediante el pacto de Biac-na-bató (Diciembre de 1897). Pero la realidad se encargó de dar al traste en breve plazo con tal cúmulo de optimismos. Laxa hasta dejarlo de sobra la política del general Blanco en la Gran Antilla, permitió que sin rebozo se exteriorizaran en la Prensa de la Isla opiniones harto violentas contra la dominación peninsular. Un periódico recién fundado en la Habana, *El Reconcentrado*, inició una injusta campaña crítica de la pasada gestión del general Weyler. Excitados algunos subalternos por las procacidades del aludido periódico, asaltaron y destrozaron su redacción (12 de Enero de 1898) y ello produjo como consecuencia la disputa y a la postre, la colisión entre los separatistas embozados y los amigos de España. De tal suceso, aunque lamentable, no ciertamente de importancia capital, se valió el *jingoísmo* americano para querer demostrar que la autonomía concedida a los insulares había fracasado. Sobre tan falso supuesto y sobre el imprudente texto de una carta particular escrita por el señor Dupuy de Lome a su amigo el señor Canalejas haciendo poco gratas alusiones al presidente Mac-Kinley, basóse éste para enviar extraoficialmente un representante a la Regente



Doña María Cristina con la misión de proponerle la venta de Cuba, y caso de no ser aceptada, anunciarle la intervención inmediata del ejército norteamericano en la Isla para acabar con la soberanía hasta entonces ejercida por España. A los efectos de facilitar la realización de la primera propuesta, se ofrecían como indemnización a



Fig. 156.—Restos del *Maine* en el puerto de la Habana

nuestra Patria 300 millones de dólares y otro millón como corretaje a favor de los mediadores en el asunto. Justo es reconocer que ningún político español se prestó a la indigna grangería, prefiriendo hallar la solución del conflicto en una intensificación de la lucha contra los mambises acompañada de la mayor diligencia en pro de la total implantación del régimen autonómico en Cuba y Puerto Rico.

Así las cosas, la llegada a la bahía de la Habana del crucero norteamericano *Maine*, “que como prueba de amistad”, enviaba a aquellas aguas el Gobierno de Wáshington, vino a añadir otro motivo de complicación a nuestras relaciones con los americanos. En efecto, próximas las diez de la noche del 15 de Febrero, una tremenda explosión abrió el

casco del crucero, que comenzó lentamente a sumergirse. Aunque tanto los elementos civiles como los militares de la Habana rivalizaron en el generoso empeño de prestar auxilio a la tripulación del barco siniestrado, no pudieron evitar que perecieran dos oficiales y doscientos sesenta marineros. La exaltada e injusta opinión *jingoísta* yanqui, imputó la catástrofe a los españoles. Una comisión de técnicos norteamericanos dictaminó en el sentido de atribuir a una mina submarina el hundimiento del *Maine*, mientras los técnicos españoles cumplidamente probaron en su informe que había sido interna la causa de la explosión. Mac Kinley solicitó entonces de España la otorgación de un armisticio a los rebeldes cubanos (29 de Marzo de 1898); pero nuestro Gobierno no pudo acceder a tal demanda, aunque sí defirió a otras que al mismo tiempo se le hacían, como a la de repartir un socorro pecuniario a los campesinos necesitados, y a la de derogar el bando de reconcentración en las provincias occidentales de la isla. No conforme Mac Kinley con que se rechazara su propuesta de armisticio, se dispuso a plantear ante las Cámaras el pleito hispano-cubano (6 de Abril), lo que tanto significaba, dada la situación de ánimo de aquéllas, como la inmediata ruptura de hostilidades. En tan críticos instantes Italia, Francia, Rusia e Inglaterra, solicitaron de los Estados Unidos y de España la prosecución de las negociaciones a fin de llegar a un pacífico acuerdo. Por su parte, el Pontífice León XIII aprestóse a solicitar de nuestra Patria la concesión del armisticio, y el Gobierno de Madrid se mostró propicio a secundar los nobles designios de Su Santidad; pero tan laudables disposiciones de espíritu resultaron a la postre inútiles, pues el 18 de Abril las Cámaras norteamericanas acordaban el reconocimiento de la independencia cubana y el exigir, por consiguiente, a España que renunciara para siempre a la soberanía en la Gran Antilla. La noticia de tales acuerdos, que constituían una verdadera declaración de guerra, llegó a la Península casi al mismo tiempo que en la Capital se verificaba la apertura de las Cortes (20 de Abril de 1898). Sagasta planteó entonces a la Regente la cuestión de confianza; mas realizadas por aquélla

las correspondientes consultas, estimó como más prudente la continuación del Gabinete liberal.

Empezada la guerra, nuestra escuadra de Filipinas dirigida por el almirante Montojo, se acogió a la bahía de Subic, en la costa occidental de Luzón, de donde hubo de trasladarse a la de Manila. Al cerrar la noche del día 30 de Abril llegó también a esta bahía la escuadra del comodoro Dewey.

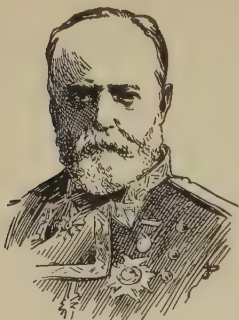


Fig. 157.—Almirante Cervera



Fig. 158.—General Linares

Nuestros barcos *Reina Cristina*, *Castilla*, *Don Juan de Austria*, *Don Antonio Ulloa*, *Isla de Cuba* e *Isla de Luzón*, únicamente protegido éste, trabaron al amanecer del 1.º de Mayo desigual combate con los norteamericanos, casi todos protegidos, *Boston*, *Olimpia*, *Raleigh*, *Concord*, *Baltimore*, *Mac Culloc* y *Petrel*. El resultado de la lucha no pudo ser más adverso para España, pues antes de la una de la tarde de aquella triste jornada nuestra escuadra quedaba totalmente vencida. El 2 de Mayo rindióse sin combatir el arsenal de Cavite, y el 3 caía la plaza de este nombre en poder de los yanquis. Puesto anteriormente de acuerdo el comodoro Dewey con el cabecilla Aguinaldo, comprometióse éste a coadyuvar a la ocupación del territorio filipino por los norteamericanos, y si bien nuestro Gobierno quiso ganar el terreno perdido otorgando a los indígenas algunas concesiones, por lo extemporáneas, resultaron totalmente ineficaces.

Mientras tales sucesos se desarrollaban en el Pacífico, reuníase en San Vicente de Cabo Verde la escuadra del Atlántico (18 de Abril de 1898), mandada por el almirante Cervera y compuesta de los barcos *Infanta María Teresa*, *Colón*, *Vizcaya*, *Oquendo*, y una escuadrilla de tres destroyers y tres torpederos a las órdenes de don Fernando Villamil. Contra el parecer de Cervera, que estimaba como más importante defender el archipiélago canario, salió en virtud de órdenes superiores la escuadra con destino a las Antillas, llegando el 19 de Mayo a Santiago de Cuba. A los pocos días de esto realizaba acto de presencia en aquellas aguas la escuadra del comodoro Schley, reforzada el 1.º de Junio con la del almirante Sampson. El capitán general Blanco, que estimaba como más prudente que nuestros barcos salieran de Santiago para dirigirse a la Habana a fin de quedar bajo la protección de sus defensas terrestres, rectificando por el momento su opinión, resolvió que permanecieran en aquella plaza; pero como el enemigo realizara un desembarco de 15,000 combatientes y se apoderara el 1.º de Julio de las posiciones de Caney y Loma de San Juan, antemurales de Santiago, el riesgo de que al caer ésta última plaza en poder de los invasores les permitiera hacer suya también la escuadra, movió al Gobierno de Madrid a ordenar su salida. Verificóse, en efecto, entre nueve y diez de la mañana del 3 de Julio y al mediar la tarde nuestros barcos eran pasto de las llamas o yacían embarrancados en diferentes puntos de la vecina costa. Consecuencia de tal desastre fué la capitulación de Santiago de Cuba (15 de Julio), firmada por el general Toral, en sustitución de don Arsenio Linares, herido en el combate de la Loma de San Juan.

Para colmo de desdichas, desembarcadas en Puerto Rico el 25 y 27 de Julio fuerzas yankis, se apoderaron de toda la isla, y en el archipiélago filipino capituló la ciudad de Manila el 14 de Agosto.

Cuando esto ocurría, ya nuestro Gobierno había iniciado las negociaciones de paz por conducto de Mr. Julio Cambón, Embajador de Francia en Wáshington (26 de Julio). El

Presidente Mac Kinley empezó por exigir de España su renuncia a la soberanía sobre Cuba y, a título de resarcimiento, la entrega de todas las islas que poseía en las Indias occidentales (Puerto Rico entre ellas), una en el archi-



Fig. 159.—Conde de las Almenas

piélago de las Marianas y la ocupación interina de la ciudad de Manila. El 12 de Agosto se firmaba la paz provisional a base de las dolorosas concesiones apuntadas. Un principio de resistencia opuesto por el ejército español de Cuba al que se le obligaba a deponer las armas sin haber casi luchado con los vencedores, logró ser dominado por el buen sentido. Las Cortes, que reanudaron sus sesiones el 5 de Septiembre, autorizaron al Gabinete para renunciar a los derechos de soberanía y para ceder territorios en las provincias y posesiones

de Ultramar, y el 10 de Diciembre de 1898 quedó firmado en París el Tratado definitivo, a cuya virtud cedía España a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico, la de Guam y el archipiélago filipino, renunciando su soberanía en Cuba. Obligábanse, en cambio, los Estados Unidos a pagar a España dentro de los tres meses siguientes al canje de ratificaciones del Tratado la suma de veinte millones de dólares, a transportar a España los soldados prisioneros en Manila, a devolverles sus armas y a admitir durante diez años en Filipinas las mercancías y barcos españoles en iguales condiciones que las de los barcos y mercancías de la Unión norteamericana.

Una nota consoladora se destacó en aquel conjunto de torpezas, claudicaciones e infortunios que nuestra nación hubo de sufrir, a saber: la heroica defensa de Baler, cabeza del distrito del Príncipe (Luzón), donde un puñado de abnegados españoles acaudillado por el capitán don Enrique las Morenas y, cuando éste falleció, a las órdenes del te-



niente don Saturnino Martín Cerezo, defendió el pabellón hispano hasta el 2 de Junio de 1899.

Tras de la catástrofe nacional, que acabamos de reseñar, el Gobierno, falto de autoridad y temeroso del descontento del país, extremó la tolerancia con el juego y otros vicios. Un artículo publicado en un periódico de Madrid, contra el Gobernador de Cádiz don Pascual Ribot, pariente de Gamazo, dió lugar al procesamiento y prisión del director del aludido órgano de la prensa señor Suárez de Figueroa, el cual, alegando su condición de Diputado a Cortes, logró al fin ser puesto en libertad. Resultado de este incidente fué la salida de Gamazo del Gabinete y su separación definitiva de la jefatura de Sagasta (21 de Octubre de 1898). Alzóse también



Fig. 160.—Joaquín Costa

contra la situación la importante agrupación derechista formada por el concierto de los elementos adictos a Silvela y de los que se habían agrupado en torno del general Polavieja, los que puestos de acuerdo en punto a las líneas fundamentales del programa a seguir, fundaron la llamada *Unión conservadora*. Una vigorización de los sentimientos católicos del país y un discreto patrocinio brindado a las aspiraciones regionalistas, constituían, con la austeridad en la gestión económica, los extremos más importantes del ideario del nuevo partido.

Abiertas las Cortes el 20 de Febrero de 1899, tronó Salmerón contra la política del turno pacífico en el usufructo del mando, causante del desastre nacional, y pidió la reunión de Cortes constituyentes. Defendióse Sagasta de las elocuentes diatribas del señor Salmerón, y al hacer lo propio Silvela, solicitó el Poder para los conservadores. Una votación recaída en el Senado sobre la autorización pedida por el

Gobierno para ceder a los Estados Unidos las islas Filipinas, dió como resultado dos sufragios de mayoría a favor de la demanda ministerial, obligando a Sagasta a plantear la cuestión de confianza. Tras de algunos intentos en pro de

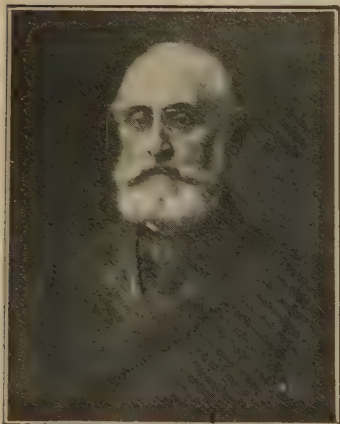


Fig. 161.—D. Francisco Silvela

la continuación de los liberales en el Poder, fué dado éste al señor Silvela, que asumiendo con la Presidencia la cartera de Estado, constituyó Gobierno el 4 de Marzo de 1889 con los señores Dato (Gobernación), Fernández Villaverde (Hacienda), Marqués de Pidal (Fomento), Polavieja (Guerra), Durán y Bas (Gracia y Justicia) y Gómez Imaz (Marina). Este Gabinete fué recibido con recelo por los demócratas inquietos, según decían, del ex-

cesivo vaticanismo de algunos Consejeros, así como de los proyectos descentralizadores que constituían extremo importante del programa que los Ministros se disponían a realizar. El 2 de Junio se verificó la apertura de las Cortes conservadoras, y ante ellas la Regente dió idea de la obra ministerial que se intentaba acometer, la que había de abarcar los siguientes proyectos: reorganización de las fuerzas de mar y tierra sobre la base del servicio militar obligatorio; regularización del ingreso y estabilidad de los funcionarios civiles; descentralización provincial y municipal; reforma en sentido autonómico de la enseñanza universitaria; revisión de los Códigos Penal y de Comercio; fijación de las instituciones forales; retoques en las leyes vigentes sobre el Jurado, la justicia municipal, el sistema electoral y el régimen de incompatibilidades; ejecución de un vasto plan de obras públicas que fomentaría preferentemente los riegos y los ferrocarriles se-

cundarios, y liquidación de las cargas de guerras y desastres, que debía ser atendida con recursos ordinarios y permanentes, mediante una enérgica y severa política de nivelación. Para lograr esto último, el titular de Hacienda señor Villaverde, al presentar el 17 de Junio el proyecto de Presupuestos para el ejercicio siguiente, anunció el acrecentamiento de las cargas tributarias estimulando a todas las clases sociales a sobrellevar el sacrificio patriótico que de ellas se exigía y que fundamentalmente había de consistir en el aumento de todas las contribuciones indirectas, con la sola excepción de las riquezas agrícola y pecuaria que se desagravarian en vista de que la exacción que sobre ellas pesaba era ya notoriamente excesiva. Al solo anuncio de la reforma tributaria, protestaron las clases mercantiles, que desde Noviembre del año anterior, en que se verificó la Asamblea de las Cámaras de Comercio en Zaragoza, aparecían organizadas para la acción común. En las Cortes asimismo se vió combatido el señor Villaverde, al que pidieron las oposiciones una reducción de los gastos públicos, que el Ministro se comprometió a realizar durante el interregno parlamentario impuesto por las vacaciones estivales. Tal exigencia obligó a aplazar indefinidamente la iniciación de las reformas del Ejército proyectadas por Polavieja, el que, al verse defraudado, hizo dimisión de su cartera (28 Septiembre), sustituyéndole el señor Azcárraga.

Produjo la salida de Polavieja hondo malestar en Cataluña, que cifraba en el general esperanzas de obtener por su influjo la realización de un concierto económico con la Hacienda nacional. Convencidas las clases directoras catalanas de que, perdido el valedor principal, habían perdido el pleito que tanto les interesara, apelaron a propagar entre sus secuaces la especie de que el único medio de patentizar eficazmente su disgusto era el de negarse a pagar los tributos. Cundió este ejemplo a Valencia y otras ciudades, y el Ministerio tuvo que salir al paso de tal desmán ordenando que sin contemplaciones se procediera al embargo de bienes de los contribuyentes morosos. El cumplimiento de tal disposición en Barcelona produjo la renuncia del alcalde Doctor Robert,

a la que al poco tiempo siguió la del señor Durán y Bas, no conforme con la poquedad de los proyectos de descentralización administrativa presentados al Consejo de Ministros por su Presidente señor Silvela (Octubre de 1899). Reanudadas las sesiones de Cortes, logró Villaverde, después de empuñadísimo forcejeo con las oposiciones y no escaso número de enmiendas, que fuese aprobada la Ley económica (Abril de 1900); pero las Cámaras de Comercio, que habían ya celebrado nueva Asamblea en Valladolid (14 de Enero de 1900), constituyeron el partido político denominado *Unión Nacional*, que comenzó a trabajar activamente excitando a los contribuyentes españoles a resistirse al pago de los impuestos. El temido choque entre el Gobierno dispuesto a hacer cumplir la ley, y los afiliados a la Unión decididos a vulnerarla, se resolvió, afortunadamente, prevaleciendo aquél sobre éstos.

Habíase, en tanto, producido en el Gabinete cambios de importancia. El Conde de Torreanaz, que sucediera a Durán y Bas en Octubre de 1899, renunció a su puesto en Abril de 1900, dimitiendo también el Ministerio de Marina Gómez Imaz y el de Fomento el Marqués de Pidal. Sustituyeron a éstos los señores Gasset y García Alix, que se hicieron cargo, respectivamente, de los Departamentos de Agricultura, Industria y Comercio y de Instrucción pública, en que se dividió el antiguo Ministerio de Fomento; de la cartera de Marina se encargó el Sr. Silvela, de la de Estado el Marqués de Aguilar de Campoo, y de la de Gracia y Justicia el Marqués de Vadillo.

Llegado el verano, emprendió la Familia Real una excursión, a bordo del *Giralda* por las costas del Norte y Noroeste de España. El 23 de Septiembre murió en Zaráuz el general Martínez Campos, Presidente del Senado, Dicha vacante y la producida por la dimisión que de la Presidencia del Congreso hizo don Alejandro Pidal, fueron cubiertas por los señores Azcárraga y Villaverde, entrando en Hacienda el señor Allendesalazar y en Guerra el general Linares, que asumió tal cargo con la promesa de gozar de completa independencia en su desempeño. Usando de ella, designó, sin

conocimiento del Consejo de Ministros, para la Capitanía General de Castilla la Nueva al señor Weyler. Tal decisión disgustó a los señores Dato y Gasset, que al anunciar su propósito de hacer dejación de sus puestos, obligaron a Silvela a plantear la crisis total, que resolvió la Regente encargando al general Azcárraga formar nueva situación.

Bajo la débil férula del nuevo Gobierno, se celebró la boda de la Princesa de Asturias doña Mercedes con su primo don Carlos de Borbón, hijo del Conde de Caserta. Se opuso Romero Robledo a aquel enlace, observando igual actitud los señores Canalejas, Montero Ríos y el mismo Sagasta, que manifestaba su contrariedad por no ser don Carlos un candidato liberal, de antecedentes liberales y aun de sangre liberal. Verificóse, no obstante esto, la boda el 14 de Febrero de 1901, no sin haber tenido el Gobierno que declarar el estado de guerra en Madrid para poner coto a las demasías de algunas turbas de vocingleros y desocupados. El señor Fernández Montaña, presbítero culto y erudito, apasionado historiador del reinado de Felipe II y profesor de Religión y Moral del joven monarca don Alfonso, insertó por aquellos días en *El Siglo Futuro* un artículo enderezado a hacer la crítica de las doctrinas liberales. Ello produjo la consiguiente protesta de los elementos aludidos, que se dieron a comentar apasionadamente los riesgos que corría el Soberano al ser educado bajo la reaccionaria férula de un preceptor, a su juicio, de tan vitando linaje, y como también por aquel entonces se estrenara en el Teatro Español el drama anticlerical del señor Galdós, titulado *Electra*, y se celebrara en el Supremo la vista de un recurso interpuesto por el señor Salmerón a nombre de una señora, cuya hija, cumplida la mayor edad, había ingresado por consejo de su confesor, jesuita, y contra la voluntad materna, como novicia en un convento, de una y otra circunstancia, se aprovecharon los elementos izquierdistas para declamar contra el cauteloso avance de la reacción y del obscurantismo. Latente la crisis desde el día siguiente al de la ceremonia nupcial de la Princesa de Asturias, se hizo pública el 25 de Febrero. Fundamentóla Azcárraga en la necesidad de aprobar los Presupuestos



antes del 1.º de Enero de 1902, empeño para el que no se creía con las asistencias parlamentarias precisas, y en la urgencia de meditar sobre la situación de los partidos políticos al aproximarse la hora solemne de un nuevo reinado. La Regente quiso sortear las dificultades del momento encomendando la difícil tarea de realizar una concentración conservadora al Presidente dimisionario señor Azcárrega, y después, al señor Fernández Villaverde, que fracasaron en el intento, y como la única solución expedita era la llamada a los liberales, quedó Sagasta encargado de formar Gobierno el 5 de Marzo.

Entraron en el Gabinete, Moret (Gobernación), Duque de Veragua (Marina), Weyler (Guerra), Marqués de Teverga (Gracia y Justicia), don Angel Urzáiz (Hacienda), el entonces joven Conde de Romanones (Instrucción pública), don Miguel Villanueva (Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas) y el Duque de Almodóvar (Estado). El 22 de Marzo (1901) dirigió el Ministro de Hacienda a los delegados de ésta en provincias una circular a cuya virtud declaraba sujetos a la contribución industrial y de comercio los productos fabricados en los conventos, y el 12 de Abril el titular de Instrucción pública dió un Reglamento de exámenes por el que, entre otras disposiciones, se adoptaban las de suprimir las comisiones de Catedráticos examinadores, y ordenar que los Profesores particulares se hallasen en posesión del título académico correspondiente para formar parte de los Tribunales de examen.

En las elecciones celebradas el 19 de Mayo y el 7 de Junio triunfó el Gobierno apelando a las más censurables violencias, pero, aun a pesar de ellas, no pudo impedir que en Barcelona prevaleciera en las urnas la candidatura regionalista, contrastando la hostilidad de que la hizo objeto con la protección oficial dispensada al fogoso caudillo republicano señor Lerroux, verdadero representante en Cataluña de la política centralista.

Nombrado el señor Moret Presidente del Congreso por la dimisión que de este cargo hizo el Marqués de la Vega de Armijo, fué designado Ministro de la Gobernación don Al-

fonso González, al que se debió el Real Decreto de 19 de Septiembre de 1901 concediendo el plazo de seis meses para que las Asociaciones ya creadas y comprendidas en los preceptos de la Ley de 30 de Junio de 1887, se inscribieran en el Registro correspondiente de los Gobiernos de provincia y cumplieran las demás formalidades que determinaban dicha norma. Pero como ésta, es decir la Ley del 87 había exceptuado de esos preceptos a las Asociaciones religiosas autorizadas por el Concordato, resultaba, que si se interpretaba, como era forzoso interpretar, dicho Concordato en el sentido amplio de no limitar a tres órdenes religiosas únicamente las que pudieran establecerse en España, debían quedar fuera del alcance del Real Decreto de 19 de Septiembre las Congregaciones referidas, ya que, exentas del derecho común las había declarado la Ley de 1887, y el Poder ejecutivo no tenía, ciertamente, facultades para derogar los preceptos de una norma solemnemente aprobada por las Cámaras y sancionada por la Corona. Caso de querer obtener esto último, o sea, la derogación de la Ley, un solo camino tenía el Gobierno: presentar un nuevo proyecto a las Cortes. No lo hizo así, y por ello, el Real Decreto de 19 de Septiembre sufrió notorias rectificaciones que desvirtuaron su eficacia y que contribuyeron a dejarlo a la postre totalmente olvidado.

Tratóse, en cambio, y con singular empeño, en el Parlamento el problema regionalista, hablando en pro de las tendencias descentralizadoras de Cataluña los señores Robert y Marqués de Camps, a quienes se encargó de contestar a nombre del Gabinete el señor Moret. Suspendidas las sesiones el mes de Julio de 1902, siguió apasionando al país el tema regionalista objeto de no escasos comentarios, públicas conferencias y enérgicos artículos periodísticos. Llamado a actuar como mantenedor de los Juegos florales de Barcelona el señor Pí y Margall, acertó en su hermoso discurso a hermanar el amor a la Patria común con el profesado a la región y el impuesto por la solidaridad humana. "Hay—dijo en aquella ocasión memorable el ilustre federalista español—una Patria para todos los hombres, la tierra; hay

una Patria que nos han hecho siglos de comunes venturas y desventuras, la Nación; hay una Patria constituida por la común lengua, las comunes leyes y los comunes usos y costumbres, la región; la región en que nacimos y tenemos los sepulcros de nuestros padres. Seamos catalanes, españoles, hombres”.

Llegado el mes de Octubre y abiertas las Cortes, continuó debatiéndose el problema regional con motivo de los desagradables incidentes acaecidos en la Universidad de Barcelona entre estudiantes españolistas y catalanistas. Trascendió tan enojoso asunto a las Cortes y en ellas autorizadamente hablaron los primates políticos representantes de una y otra orientación, destacándose en el debate la admirable oración parlamentaria pronunciada por don Antonio Maura, que, con laudable espíritu crítico, analizó las famosas bases de Manresa para concluir diciendo que su aplicación era incompatible con el principio de la unidad de la Patria.

Entrado el año de 1902 estalló en la capital de Cataluña la primera huelga general organizada que conoció Europa (13 de Febrero), prolongándose la gravísima paralización del trabajo durante ocho días, no obstante la declaración del estado de guerra.

Diferencias producidas entre el Ministro señor Urzáiz y el Consejo del Banco de España sobre los planes del primero en punto a la regulación monetaria, produjeron la dimisión del titular de Hacienda y, a la postre, la crisis total. Una vez más intentó la Regente conseguir amplia concentración de elementos políticos en torno a quien pudiera realizar con las máximas garantías empresa tan necesaria. Para lograrla, pensó Doña María Cristina en el autorizado hombre público señor Montero Ríos, pero las dificultades suscitadas a éste por los señores Sagasta y Moret, hicieron fracasar el intento. Por tal causa, ratificada la regia confianza al anciano jefe del partido liberal, constituyó Sagasta el 19 de Marzo otro Gabinete del que entró a fomar parte el elocuente orador radical señor Canalejas, que asumió la cartera de Agricultura. Los radicalismos de éste en relación con los problemas obrerista y del régimen de la propiedad y acerca del originado por

la enérgica actitud del Ministro frente a la resistencia de las Comunidades religiosas a inscribirse en la forma dispuesta por el Real Decreto de 19 de Septiembre, produjeron justificada alarma incluso entre los representantes de la mayoría parlamentaria. El anuncio de un Estatuto regulador de las Ordenes monásticas, patentizó la división de criterio del Gabinete, pues mientras Canalejas creía que el Poder civil estaba facultado para legislar sobre el asunto sin contar con Roma, la mayoría de los Consejeros responsables se inclinaba a estimar tal cuestión como materia exclusivamente concordataria. A fin de evitar las fatales consecuencias de semejante dualidad de criterio, se dispuso Sagasta a negociar con Roma a espaldas de los radicales españoles y del mismo Canalejas; pero advertidos éstos de tal maniobra por la lectura de una circular dirigida por el Nuncio (7 de Abril) a los Prelados, recomendando la pronta inscripción en los Registros de los Gobiernos civiles de las Ordenes religiosas que no hubieran todavía llenado tal requisito, y aludiendo a las negociaciones, ya en curso, del Gobierno con la Curia romana, y profundamente indignados por la que calificaban de inicua burla, estimularon a Canalejas y consiguieron de él que anunciase su separación del Gabinete en pleno Parlamento, aplazando, ello no obstante, la realización de tal propósito por la proximidad de los festejos organizados para celebrar el advenimiento de Don Alfonso XIII.

Reunidas las Cámaras en el edificio del Congreso de los Diputados el 17 de Mayo de 1902, prestó el Rey ante ellas el juramento prevenido por el artículo 45 de la Constitución española, tras de cuyo solemne acto dirigió el Monarca a la Nación en general, y al Ejército y a la Marina en particular, sentidas y patrióticas alocuciones. Por su parte, la Reina madre, al abandonar el elevado cargo que hasta entonces desempeñara, despidióse del País por medio de una carta dirigida al Presidente del Consejo de Ministros, concebida en estos términos: "Al concluir hoy la Regencia a que fui llamada por la Constitución en momentos de profunda tristeza y de viudez inesperada, siento en lo íntimo de mi alma la necesidad de expresar al pueblo español la inmensa e

inalterable gratitud que en ella dejan las muestras de afecto y de adhesión que he recibido de todas las clases sociales. Si entonces presentí que sin la lealtad y la confianza del pueblo no me sería dado cumplir mi difícil misión, al dirigir la vista a ese período, el más largo de todas las Regencias españolas, y al recordar las amargas pruebas que durante el nos ha deparado la Providencia, aprecio aquellas virtudes en toda su magnitud, afirmando que gracias a ellas la Nación ha podido atravesar tan profunda crisis en condiciones que aseguran para la política una época de bienhechora tranquilidad. Por eso, al entregar al Rey Don Alfonso XIII los poderes que en su nombre he ejercido, confío en que los españoles todos, agrupándose en torno suyo, le inspirarán la confianza y la fortaleza necesaria para realizar las esperanzas que en él se cifran. Esta será la recompensa más completa de una madre que, habiendo consagrado su vida al cumplimiento de sus deberes, pide a Dios proteja a su hijo para que, emulando las glorias de sus antepasados, logre dar la paz y la prosperidad al noble pueblo que mañana empezará a regir”.

## II.—ORGANIZACION SOCIAL Y POLITICA (1833-1902)

**89. Las clases sociales.**—Con la revolución política de principios del siglo XIX y la social, que opera tan fundamentales cambios en la vida económica del país durante el primero y el segundo tercio de dicha centuria, la estratificación en clases es cada vez más difícil de apreciar, a medida que se destruye la base económica que sustentaba a las tradicionalmente privilegiadas, *nobleza* y *clero*, y que sobre la posesión de nuevos patrimonios adquieren relieve elementos de una *burguesía* nacida del *estado llano*.

La antigua nobleza, con todos sus títulos heráldicos y distinciones, puramente formularias, queda reducida a vano nombre sin consistencia y ser real. Durante los períodos constitucionales del reinado de Fernando VII fué atacada en sus intereses y en su dignidad de clase. En las Cortes extraordinarias de 1810 hemos visto cómo se derogan las antiguas



prerrogativas señoriales, y en las postrimerías de la guerra por la Independencia y en las Cortes de 1821 se echa en cara a los nobles el haber desertado del cumplimiento de su deber durante la invasión francesa, ora abandonando la Península para ponerse en salvo con todas sus familias en Mallorca, Gibraltar, Ceuta y otras partes, ora viviendo entre los enemigos. Una curiosa *Memoria económico-política sobre los señores y grandes propietarios*, impresa en Salamanca en 1813, dice a tal propósito: "Una de las mayores obligaciones de los vasallos era defender a sus señores, porque ellos y sus cosas eran guardados por éstos. Ahora bien, España se vió acometida del modo más vil, inundada de tropas con el fin de conquistarla, las cuales exercían su rapacidad sobre todos los pueblos. Esta era la ocasión de que esospreciados de Señores debían tratar de la defensa de sus vasallos, ponerse al frente de ellos y acometer al enemigo común, como hacían en igual caso sus mayores; pero estos hombres, por lo común afeminados y degenerados, unos se huyeron a Ceuta u otros sitios seguros, y otros permanecieron tranquilos en sus casas, esperando la suerte de la guerra: muy pocos se presentaron en el exercito"<sup>1</sup>.

Rebajando de tan graves imputaciones aquella parte que debe ser considerada como producto de la pasión, es indudable que los testimonios aducidos son lo suficientemente delatores de un estado adverso de conciencia pública respecto a lo que significaba la clase nobiliaria en la vida social española de la época a que aludimos. Pudo todavía entonces el elemento aristocrático, como poseedor en el segundo tercio de la centuria décimonona de pingües y dilatadas propiedades, servirse de la revolución social para comprar por la mitad de precio los bienes nacionales, acreciendo de tal suerte su riqueza; pero como con harta razón apunta Valera<sup>2</sup>, "esta aristocracia de nacimiento, aunque no pocos de sus individuos descollasen mucho, carecía ya de espíritu de clase, no tenía influjo ni crédito en los pueblos y cifraba su única aspiración en ser áulica o cortesana; en componer

1. Véase J. Costa, *Colectivismo agrario en España*, cap. XIX, pág. 616.

2. *Continuación de la Historia de España de D. Modesto Lafuente*, tomo VI, pág. 458.

la más alta servidumbre de Palacio y en adornarse la casaca con un moño o lazo carmesí y con una llave de metal dorado”.

Y tan a menos llega en la consideración que se le tributa, que ni siquiera por fuero de su linaje acierta a que se le reconozca el derecho inconcuso a formar parte del Senado al ser realizada la reforma constitucional de 1845; y cuando al fin logra alcanzarlo por la Ley de 17 de Julio de 1857 y por el Código constitucional de 30 de Junio de 1876, es con la condición de que a la Grandeza de España que acredite el aspirante a Senador, acompañe la circunstancia de gozar de opulenta situación económica.

Anulada, pues, la nobleza como tal clase social y derrumbado el basamento económico sobre el cual apoyó el clero su hegemonía durante siglos, la sociedad española se democratiza rápidamente, hasta el extremo de poder afirmarse que, desde la muerte de Fernando VII, el *estado llano* comienza a serlo todo, y que dentro de él no es cosa fácil hacer la distinción de clases, sino la de individuos, ya que sólo la riqueza puede deslindar los campos entre la llamada *burguesía* y la *plebe*, y este elemento de diferenciación, aun siendo tan perceptible, no tiene eficacia suficiente para constituir los vínculos característicos de una clase social. “No da esta riqueza—ha dicho el citado historiador—comunidad de intereses a los ricos contra los pobres, a no ser para defenderse el que tiene algo contra el que no tiene nada, y en este caso, la defensa no es ya de los intereses de una clase contra la otra, sino de todo el orden social existente. En este caso además, la *burguesía*, la clase media, la colectividad que se supone en pugna contra el cuarto estado, adquiere tal extensión, que no es posible considerarla como clase: contiene en su seno desde el que tiene una mezquina choza, un haza, en suma, cualquier predio, finca u objeto, que no le obliga a vivir meramente del trabajo de sus manos o de su ingenio, hasta el acaudalado capitalista que amontona millones en sus arcas y que es poseedor de campos extensos y fértiles, de fábricas, quintas, palacios y jardines”. Y tanto es así, añadimos nosotros, que en los intentos tantas veces fracasados de solidarizar los intereses de la llamada clase media

como táctica defensiva, no contra otra clase, sino contra el Poder público, se halla la más cumplida prueba de la imposibilidad de trazar el perfil de un estrato social, que no ha logrado él mismo reconocerse ni definirse.

En su consecuencia, no hubo en todo el siglo XIX más que un estado llano, escalonados en él por grados desde los más pobres a los más ricos. Quienes por aspirar a que fueran los primeros los que, en razón a su mayor número, usufructuasen la dirección del país, orientaron sus propagandas en sentido político, fueron los fundadores de los partidos democráticos; quienes, por lo contrario, con la misma apelación a la masa desheredada han inspirado su actuación en designios sociales, engendraron en el decurso del siglo XIX las incipientes organizaciones socialistas y comunistas. Ahora bien, la prolongación en nuestra patria del predominio de los agentes políticos sobre los económicos, explica el fenómeno de que la democracia haya obtenido durante la citada centuria el mayor caudal de adhesiones entre los elementos carentes de riqueza; y como al propio tiempo la industria fabril se desenvolvía por regla general en un ambiente de relativa modestia, sin dar margen aún a las grandes concentraciones obreras, y los jornaleros de la naciente industria minera se reclutaban todavía en la comarca aledaña de cada yacimiento y no solían abandonar del todo los antiguos quehaceres agrícolas en sus pequeñas heredades, la organización de los elementos proletarios, bien para realizar con criterio individualista y procedimientos anarquizantes la revolución social, (*Federación de Trabajadores*), bien para implantar gradualmente el ideario colectivista (*Unión general de Trabajadores*), no llegó a adquirir verdadera importancia hasta los últimos veinte años del pasado siglo, es decir, cuando el creciente desarrollo de la industria nacional produce las grandes congestiones obreras y cuando las repercusiones del exterior estimulan al proletariado a la más activa acción societaria.

Pero si el retraso en el planteamiento de la cuestión social evitó a nuestros abuelos un elemento más de complicación, los excesos del profesionalismo político han engendrado un proletariado de levita, que atento a los vaivenes de los par-

tidos, ha abandonado menesteres más fecundos para consagrar su actividad y su tiempo al empeño de asegurarse en el goce del Presupuesto o, a falta de éste, a la empresa de anticipar la ocasión de su llegada.

**90. La familia.**—Trascendentales reformas se introducen en la legislación referente a la familia durante el período que historiamos (1833-1902). Aunque, fundamentalmente, se mantiene en el seno del hogar el tipo clásico de organización caracterizado por la sumisión de la mujer y los hijos a la autoridad del padre, las nuevas orientaciones de la legislación civil producen en los regímenes matrimonial y familiar modificaciones de notoria importancia, que habrán de ser objeto por nuestra parte de algunas notas y comentarios.

En punto al matrimonio, la forma canónica era la única existente en nuestra patria hasta la Ley de Matrimonio civil de 18 de Julio de 1870. Hasta entonces, lo que era sacramento para la Iglesia, era contrato matrimonial para el Estado. Publicada la aludida Ley, extendió ésta sus efectos a todos los españoles católicos y a todos los no católicos, los cuales, decididos a contraer matrimonio, habían de sujetarse a las normas del matrimonio civil. La violencia de tal medida fué paliada por el Real Decreto de 9 de Febrero de 1875, que dispensando a los católicos de la obligación de casarse civilmente, dejó subsistente dos formas de matrimonio: la canónica para los católicos y la civil para los no católicos. El artículo 42 del Código civil vigente ha conservado esta distinción, concediendo el artículo 76 al matrimonio canónico todos los efectos civiles, para lo cual debe asistir al acto en que se celebre el Juez municipal u otro funcionario del Estado, que se encargará de verificar la inscripción correspondiente en el Registro civil (art. 77).

La citada Ley de 1870, rompiendo con una práctica tradicional de nuestro antiguo derecho, suprimió de una vez los esponsales, negando efectos civiles a la promesa de futuro matrimonio.

Particularidad, asimismo, digna de ser mencionada fué la relativa a la obligación impuesta a los hijos de impetrar el consentimiento o el consejo de los padres para contraer

matrimonio. Tal deber había sido establecido por las Pragmáticas de 26 de Marzo de 1776 y 28 de Abril de 1803; pero contra la negativa del padre a conceder el consentimiento se daba el recurso denominado de *irracional disenso*. Para evitar tamaña demasia la Ley de 29 de Junio de 1862 estableció que ninguno de los llamados a prestar el consentimiento o consejo estaba obligado a manifestar las razones en que se fundaba para concederlo o negarlo, y que contra su disenso no cabía ejercitar recurso alguno. El Código civil ha sancionado la misma doctrina (art. 49). En cambio, ha modificado la citada Ley de 1862 en punto a distinguir entre varones y hembras para los efectos de obtener el consentimiento, pues mientras ésta exigía a la mujer para poder casarse sin la aquiescencia paterna la edad de veinte años, y la de veintitrés al hombre, el Código establece, sin distinción de sexo, la prohibición de contraer matrimonio al menor de edad que no haya obtenido la licencia, y al mayor que no haya solicitado el consejo de las personas a quienes corresponde otorgar una y otro en los casos determinados por el legislador.

Novedad digna de ser apuntada también es la introducida por el Código civil al especificar los casos en que la mujer puede comparecer en juicio sin licencia de su marido.

De igual modo carecía de precedentes en nuestra legislación el matrimonio secreto de conciencia, que el Código admite en su artículo 79.

En materia de paternidad y filiación, el mismo Cuerpo legal introduce las siguientes reformas: frente al criterio de la Ley 11 de Toro, que definía al hijo natural diciendo que era el nacido de padres que al tiempo de la concepción o del parto podían casarse sin dispensa, determina que sólo el momento de la concepción y no el del parto podrá dar al hijo aquel carácter; y en cuanto a la legitimación por concesión real, generadora de tan escandalosos abusos, la limita, de acuerdo con la Ley de 14 de Abril de 1833, a los hijos naturales y debiendo mediar especiales circunstancias, que el artículo 125 del Código detalla.

Respecto de la obligación de alimentos entre parientes, las variantes más notables de nuestro Código son: la de esta-



blecer dicha obligación entre padres e hijos legitimados por concesión real; la de conceder a la persona que debe prestar los alimentos el derecho de darlos, bien pagando una pensión, bien recibiendo y alimentando en su casa al alimentista, y la de extinguir la obligación de suministrarlos al morir el obligado, sin que tal carga se trasmita a sus herederos, como antiguamente sucedía, a no ser que éstos sean parientes de los comprendidos en el artículo 143.

En relación con la patria potestad, negada a la madre durante siglos, la mencionada Ley de matrimonio civil se la otorgó subsidiariamente, y el Código confirmó tan justa concesión en su artículo 154, extendiendo la potestad paterna y en su caso la materna, no sólo a los hijos legítimos y legitimados, sino también a los naturales reconocidos y a los adoptivos. Terminaba la patria potestad, por muerte del padre o del hijo, por emancipación, por adopción, por dignidad o cargo público que el hijo recibiera, y por profesión religiosa de éste. Las dos últimas causas han desaparecido de nuestro Código. En cuanto a la emancipación, históricamente podía tener lugar por el matrimonio del hijo y por la concesión expresa del padre o madre que ejerciera la patria potestad. Ambas han sido reconocidas por la norma civil vigente; pero ésta ha adoptado otra de singular importancia: la emancipación por la mayor edad. Hasta la Ley de matrimonio civil del 70, tal emancipación no existía. Publicada dicha norma prodújose por su mandato la emancipación de los hijos que habían cumplido veinticinco años. Hoy, el Código vigente, al sancionar esta especie de emancipación, ha fijado en veintitrés años la edad para obtenerla.

Finalmente, reformas asimismo merecedoras de ser destacadas al hablar de la guardaduría legal de los menores huérfanos y de los incapacitados, han sido: la refundición en un solo cargo de los antiguos de tutor y curador, y la institución del Consejo de familia<sup>1</sup> y del cargo de protutor, injertados en la legislación española por influjo del Código civil francés.

1. Propiamente fué una restauración, pues aunque no bien organizado, existió ya en nuestra antigua legislación.

**91. La propiedad.**—Al período comprendido entre 1833 y 1902 corresponde el pleno desenvolvimiento de las medidas desamortizadoras, suspendidas por la reacción de 1823.

Con respecto a los *señoríos territoriales y solariegos*, la Ley de 2 de Febrero de 1837 restableció la de 3 de Mayo de 1823, a que nos hemos referido en la parte interna del período precedente; y la de 26 de Agosto, también de 1837, reconoció como de propiedad particular las haciendas, heredades, censos, pensiones y terrenos sitos en pueblos que no fueran de señorío jurisdiccional, y aun los que estando emplazados en territorio de tal señorío, hubieran sido poseídos como dominios particulares. Ampliábase, además, lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de 1823 respecto a las prestaciones y tributos señoriales, *suprimiendo en absoluto, desde luego y para siempre*, los conocidos con los nombres de *pecho, fonsadera, martiniega, yantar, yantareja, pan de perro, moneda forera, maravedises, plegarias*, o cualesquiera otros que denotasen señorío o vasallaje.

En punto a las *vinculaciones*, la Ley de 6 de Junio de 1835 hizo que se reintegraran en los bienes desvinculados los adquirentes de los mismos a quienes la Ley de 11 de Marzo de 1824 les había desconocido sus derechos como compradores, y la de 19 de Agosto de 1841 restableció las leyes y declaraciones de la anterior época constitucional sobre mayorazgos y vinculaciones.

La *desamortización eclesiástica* tiene su expresión en los Decretos de 25 de Julio y 11 de Octubre de 1835 que reiteraron la supresión de algunas Ordenes monacales; en el de 8 de Marzo de 1836 que amplió la medida y, sobre todo, en la Ley de 29 de Junio de 1837 que ordenó la extinción de los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas religiosas de ambos sexos, y la adjudicación a la Nación de todos los bienes del clero secular, catedral, colegial y parroquial, exceptuando tan sólo los de prebendas, capellanías, beneficios y demás patronatos de sangre, los de cofradías y obras pías procedentes de adquisiciones particulares, los dedicados a objetos de hospitalidad, beneficencia e instrucción, las iglesias y las habitaciones y huertos adya-

centes de los prelados y curas. Por el momento, no tuvo inmediato efecto esta disposición, pero se reprodujo literalmente en la Ley de 2 de Septiembre de 1841.

Advenido al Poder el partido moderado, suspendió la venta de los bienes del clero secular y de las comunidades de monjas, por Real Decreto de 26 de Julio de 1844, y por la Ley de 9 de Abril de 1845 se ordenó la devolución al clero secular de los bienes que todavía no se hubiesen enajenado. Por Real Orden de 13 de Mayo de 1851, y como consecuencia del Concordato con la Santa Sede, firmado el 16 de Marzo anterior, se hizo general la suspensión de venta a todos los bienes eclesiásticos incluso los del clero regular, y por el aludido Concordato, publicado como ley el 17 de Octubre de 1851, se dispuso que cuantos hubiesen comprado bienes eclesiásticos, no serían molestados en su disfrute; que habría casas de religiosas dedicadas a la vida contemplativa, a la educación y enseñanza de niñas y a otras obras de caridad, colegios de misioneros, y casas y congregaciones de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra Orden de las aprobadas por la Santa Sede; que se reconocería a la Iglesia el derecho de adquisición por cualquier título legítimo y se respetaría solemnemente su propiedad adquirida y la que pudiese adquirir, y que serían devueltos a aquélla desde luego y sin demora todos los bienes eclesiásticos que no fueron comprendidos en la Ley de devolución de 1845 y que todavía no hubieran ido enajenados, incluso los que restasen de las comunidades religiosas de varones, debiendo los Prelados proceder inmediatamente a venderlos para invertir sus productos en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100.

Por incuria de los Gobiernos, por pasividad de los Prelados, o por ambas causas a la vez, el Concordato quedó incumplido en punto a la venta de los bienes y destino ulterior del producto de los mismos. Sobrevenida la revolución de 1854 la Ley de 1.º de Mayo de 1855 y la que, completándola y en algunas disposiciones modificándola, vió la luz pública el 11 de Julio de 1856, abordaron resuelta y acertadamente la cuestión, destruyendo los argumentos que fundamentalmente

podían ser formulados contra la manera de haber hasta entonces el Poder público llevado a efecto la obra desamortizadora. La citada Ley de 1.º de Mayo, clásica en la materia, declaró en estado de venta los bienes del clero, pero dispuso que sus productos se invirtieran en inscripciones intransferibles de la Deuda pública con renta del 3 % a favor de aquél, y modificó la absoluta prohibición de *adquirir* bienes las manos muertas, que habían establecido leyes anteriores, sustituyéndola por la prohibición de *poseer*, pero autorizando a aquéllas a recibir por donación o legados bienes. que serían puestos en venta o redención, invirtiendo su producto en la forma ya apuntada. Es decir, que la nueva norma desamortizadora, respetando la propiedad del clero, no hizo sino variar la forma de la misma, invocando para ello esenciales motivos de pública utilidad.

Tras del bienio liberal, se interrumpe la desamortización por Real Orden de 14 de Octubre de 1856, hasta que publicado el 4 de Abril de 1860 un nuevo Convenio con la Santa Sede, firmado el 25 de Agosto de 1859, una vez más se reconoce el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar toda especie de bienes y valores y, asimismo, se la declara propietaria de los que el Concordato de 1851 le había devuelto, pero debiendo, en cuanto a éstos, hacer cesión al Estado mediante el recibo de inscripciones intransferible de la Deuda consolidada de 3 %.

Como en 1851, tampoco ahora llegó a cumplirse lo pactado, por lo que el problema, de posible solución entonces, siguió planteado como antes del acuerdo. La Revolución de 1868 puso especial empeño en fomentar la obra desamortizadora. Por Decreto de 12 de Octubre de 1868 se reiteró la supresión de la Compañía de Jesús, y por el de 18 del mismo mes y año fué ordenada la extinción de los monasterios, conventos y casas de religiosos de ambos sexos fundados después de la Ley de 1837, adjudicando aquél y éste al Estado los bienes de las Congregaciones que suprimían.

Con tales disposiciones se pone término a la profusa legislación sobre desamortización eclesiástica durante el siglo XIX.

En cuanto a la *desamortización civil*, la Real Orden de 21

de Agosto de 1834 autorizó a los Ayuntamientos para enajenar sus bienes raíces en venta real o dándolos a censo, y la ya citada de 1.º de Mayo de 1855, ley que abarcaba tanto la desamortización civil como la eclesiástica, declaró en venta los bienes del Estado, del Clero, de las Ordenes militares, de las cofradías, obras pías y santuarios, del secuestro del ex-instante don Carlos, de *propios* y *comunes* de los pueblos, de beneficencia e instrucción pública y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, debiendo invertirse el 80 % de la venta, de bienes de propios y de los procedentes de beneficencia e instrucción pública en títulos de la Deuda consolidada del 3 % para convertirlos en inscripciones intransferibles de la misma, a favor de los respectivos pueblos y Corporaciones. Fuera del alcance de la desamortización, quedaron a virtud de las leyes de 1855 y 1856, que hubo de exceptuarlos, los montes y bosques cuya venta no estimara oportuna el Gobierno, las minas de Almadén, las salinas, los terrenos de aprovechamiento común, los edificios y las fincas destinados al servicio público, los edificios ocupados por los Establecimientos de beneficencia e instrucción, y las dehesas destinadas por los pueblos a pasto de sus ganados de labor.

“Así han ido llevándose a cabo de un modo completo y definitivo — dice Azcárate — la desamortización civil y la eclesiástica, la desvinculación de los bienes amayorazgados, y la destrucción de los vestigios que quedaban del régimen feudal”<sup>1</sup>.

Aunque no es posible precisar el importe de los bienes amortizados que se vendieron a fines del siglo XVIII y durante la primera época constitucional, consta, en cambio, el de los enajenados desde 1821 a 1867. En efecto, según datos oficiales, se vendieron fincas y se redimieron censos en dicho período por valor de 1.744.695.278 pesetas, y conforme a la *Estadística de los presupuestos*, desde 1850 a 1890, se realizaron por ventas y por negociación de los pagarés de compradores 1.641.958.769 pesetas. Concertando ambas referencias, calcu-

1. Azcárate, *Ensayo sobre la Historia del Derecho de propiedad*, tomo II, pág. 343.



la el Sr. Piernas y Hurtado<sup>1</sup> en 2.700.000.000 de pesetas el producto de la desamortización desde 1821 a 1890.

Sintetizando nuestra opinión sobre la obra desamortizadora, diremos que, si bien estimamos inconcuso el derecho que el Estado tiene de impedir el estancamiento de la propiedad, así como creemos que le cumple, no sólo la facultad, sino la obligación de manumitirla reintegrándola a su condición natural de bien transmisible y no exento del gravamen del impuesto, asimismo juzgamos que en la realización de tal finalidad, ni ha debido llegarse a la incautación total de la propiedad perteneciente a las instituciones y personalidades jurídico-colectivas, a quienes no se puede negar el derecho de poseer bienes inmuebles, ni es lícito justificar que tal incautación se haya podido realizar sin mediar la completa indemnización de lo expropiado. Tan elementales principios de equidad y de justicia legal, fueron en España, como en otros países, por regla general, olvidados. Se vió en la desamortización una abundantísima fuente de recursos para el erario y un medio seguro de solidarizar a gran número de propietarios con la causa de la revolución, a la que debían el poder serlo, y a realizar tales objetivos, y no otros, se enderezaron las disposiciones de los Gobiernos. Es decir, que, si la amortización fué en épocas anteriores broquel defensor de los *misoneístas*, de los enemigos del progreso social, la desamortización vino a convertirse en arma de que se sirvieron los partidos liberales para contender ventajosamente con sus rivales políticos.

En cuanto a las consecuencias derivadas de la obra desamortizadora y a su influjo en la vida económica del país, debemos hacer constar que, si es cierto que la propiedad aumentó su producción y que el Estado vió acrecidas sus rentas, no lo es menos que la situación económica no mejoró por ello. "Recogíanse cantidades insignificantes de la Deuda, y se hacían grandes emisiones para indemnizar a los desposeídos; gastábase algunos millones en fomentar intereses legítimos, aunque sin la medida y discreción convenientes, y se emplea-

1. Piernas y Hurtado, *Tratado de Hacienda pública*, tomo II, pág. 505.

ban otros tantos en cosas superfluas o en atenciones de peor índole, y de este modo, las obligaciones permanentes crecieron mucho más de prisa que los recursos ordinarios; su descenso en el presupuesto fué continuo, y la repetida acumulación de los déficits, produjo el desquiciamiento de la Hacienda”<sup>1</sup>.

Aparte lo anterior, es indudable que la doctrina según la cual asiste al Estado el derecho de mudar la forma de la propiedad siempre que considere que así lo reclama la salud pública, doctrina que propugnaron Martínez Marina en las Cortes de 1821 y Madoz, Escosura y Sorní en las Constituyentes de 1854, envolvía y sigue envolviendo el grave peligro de que, así como entonces se aplicó para justificar la expropiación de los bienes del clero, de propios, de beneficencia y de instrucción pública, por iguales motivos e idénticas razones puede ser aplicada a los bienes de los particulares. A tal propósito, decía Balmes, combatiendo las leyes desamortizadoras de los años de 1835 a 1841: “Una vez atacado un género de propiedad, ya no es posible defender las otras: el principio sentado para legitimar la invasión de la una, se extenderá igualmente a las demás”. Y dirigiéndose a los hombres influyentes que con sus votos podían evitar que se consumara la incautación, hacíales ver la inconsecuencia en que habían de incurrir cuando, tras de colaborar en la obra desamortizadora eclesiástica, quisieran defender sus particulares caudales y haciendas frente a la revolución de las clases menesterosas. *“Al tribuno que acaudilla a la turba feroz — añadía, ¿qué le responderéis cuando recuerde lo que hicisteis con el clero? Su lógica será terrible, porque estribará en vuestro ejemplo: él os podrá decir con toda verdad: yo os despojo, y vosotros me lo habéis enseñado”*<sup>2</sup>.

1. Piernas y Hurtado, obra citada, tomo II, pág. 511.

2. Jaime Balmes, *Observaciones sociales, políticas y económicas sobre los bienes del clero*, págs. 104 a 107. Como dato curioso debemos consignar, que lo supuesto por Balmes, tuvo confirmación, afortunadamente teórica, en las Cortes de 1871, en las que el diputado Lostau y Garrido sostuvo que la *Internacional* no hacía otra cosa que lo que había hecho la clase media para instaurar el régimen existente, es decir, acudir a las asociaciones secretas, las revoluciones, el incendio de los conventos, el asesinato de los frailes y el despojo de los que poseían la propiedad.

Pues bien, si a lo dicho se añade que a la incautación de los bienes del clero acompañó la del patrimonio de las clases menesterosas, incautación representada por la supresión de la servidumbre de pastos de rastrojera y barbechera a favor de los pueblos (Ley de 1831), por la venta de bienes de propios (Ley de 1855) y por la expropiación de la quinta o la cuarta parte de los bienes de aprovechamiento común que disfrutaban los vecindarios (ley de 1888), y todo ello se apostilla diciendo, como es verdad, que la desaparición de tal fondo de reserva de los humildes sirvió especialmente para acrecer el capital de las clases acomodadas, fácilmente podrá comprenderse hasta qué límite podrán tener razón los desposeídos al invocar en pro de sus reivindicaciones los argumentos de libertad, salud pública y dominio eminente del Estado, que tantas veces estuvieron en labios de los apologistas de la desamortización civil y eclesiástica durante la pasada centuria<sup>1</sup>.

Aunque la expropiación de la llamada *mano muerta*, la supresión de los mayorazgos y los reveses de fortuna experimentados por algunas casas nobles modificaron sensiblemente el régimen de la propiedad durante los dos últimos tercios del siglo XIX, fundamentalmente conservó sus anteriores características representadas por la concentración de grandes extensiones en pocas manos en las provincias de Extremadura, Andalucía y las centrales de Toledo, Ciudad Real y Salamanca, y, por lo contrario, la excesiva división de la propiedad rústica en otras, como en las provincias del Noroeste.

En las andaluzas, extremeñas y centrales aludidas, resulta, según los concienzudos estudios hechos por Barthe<sup>2</sup> que 456.393 hectáreas aparecían concentradas en 164 propietarios, correspondiendo un promedio de casi 2.783 hectáreas por dueño. En cambio, en las provincias de Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo y León, la contribución territorial abonada en cuotas de tipo inferior a seis pesetas, es decir,

1. J. Costa, *Colectivismo agrario en España*, págs. 623 y 624.

2. Antonio Barthe, *El aumento de la riqueza en España*.

las más pequeñas, suponen la quinta parte del 40 % a que se elevan las cuotas inferiores a seis pesetas en toda la Península. Quiere ello significar que el fraccionamiento de la propiedad en dichas provincias llega a límites realmente extraordinarios, y que, no obstante los cambios operados en el dominio de la tierra durante el siglo XIX, siguió y sigue teniendo actualidad el patriótico anhelo expresado al finalizar la centuria décimoctava por Jovellanos, cuando decía: "Yo quisiera una ley que contuviese la funesta división del suelo de Asturias y otra que dividiese los cortijos andaluces".

**92. La organización administrativa.**—La *Administración central*, como representativa de la unidad del Poder ejecutivo del Estado, sigue durante el segundo tercio del siglo XIX integrada por los Ministerios y los Altos Consejos. En los últimos años del reinado de Fernando VII funcionaban los cinco Departamentos ministeriales de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Hacienda y Marina, a los que se añadió el 3 de Noviembre de 1832 el de *Fomento general del Reino*, denominado el año de 1834 *Ministerio del Interior*, en 1835 de la *Gobernación del Reino*, y el 11 de Septiembre de este mismo año, por haber pasado al *Ministerio de Marina* los ramos de Comercio y Gobernación de Ultramar, *Ministerio de la Gobernación de la Península*. En 28 de Enero de 1847 se fundó el de *Comercio, Instrucción y Obras públicas*, con la Dirección de Instrucción pública y las Secciones de Agricultura, Obras públicas y Comercio, que existían en las Secretarías de Gobernación y Marina, tomando el 20 de Octubre de 1851 el nombre de *Ministerio de Fomento*.

Los negocios administrativos de Ultramar, incorporados al *Ministerio de Fomento* fundado en 1832, se agregaron en 1836 al de *Marina*, que tomó la denominación de *Secretaría del despacho de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar*, para pasar después por todos los Departamentos ministeriales y la *Presidencia del Consejo*, y dar lugar, en fin, al *Ministerio de Ultramar*, instituido por Real Decreto de 20 de Mayo de 1863, el cual Departamento quedó reducido después de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas a una

*Dirección general liquidadora*, en virtud del acuerdo tomado por el consejo de Ministros el 31 de Enero de 1899.

Por último, por Real Decreto de 18 de Abril de 1900, quedó suprimido el *Ministerio de Fomento*, formándose en su lugar dos nuevos Departamentos denominados: *Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes* y *Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas*.

Aunque la reunión de los Ministros en el que indistintamente ha sido llamado *Consejo de Ministros*, *Gabinete* y *Gobierno*, debía ser presidida por la persona más caracterizada, cualquiera que fuera la cartera que regentase y aun sin ser titular de ninguna, durante los dos primeros tercios del siglo XIX fué práctica generalmente seguida la de que el *Presidente del Consejo* asumiera también el *Ministerio de Estado*. Posteriormente tal costumbre dejó de observarse, siendo muy frecuente el caso de que el *Presidente del Consejo* no tuviera Departamento ministerial asignado.

Como Cuerpo consultivo de los Ministros, instituyóse el 24 de Marzo de 1834 el *Consejo Real de España e Indias*, que heredó las facultades gubernativas del anterior *Consejo Real de Castilla*, mientras las judiciales por este también ejercidas, fueron atribuidas en el mismo citado año a un *Tribunal Supremo de España e Indias*. Suprimido el *Consejo Real* por la Constitución de 1837, fué nuevamente organizado el año de 1845 como Cuerpo consultivo de la Administración, recibiendo en 1858 el nombre de *Consejo de Estado*, y quedando definitivamente regulado por la Ley de 17 de Agosto de 1860 que le asignó la doble misión de Cuerpo Supremo consultivo del Gobierno, y de Tribunal llamado a resolver los conflictos entre la Administración y la Justicia y a proponer las resoluciones de los asuntos *contencioso-administrativos*. Ahora bien, por la Ley de 13 de Septiembre de 1888 se instituyó, formando parte del *Consejo de Estado*, el *Tribunal de lo contencioso-administrativo*, cuyos miembros habían de concurrir a las deliberaciones de aquél, pero sin que el Consejo pudiera intervenir para nada en los asuntos *contencioso-administrativos*.

Otros Consejos integrantes de la administración central en



el período que nos ocupa, fuéronlo: el *Consejo de Instrucción pública*, instituído por Real Decreto de 1 de Junio de 1843, suprimido por Decreto-Ley de 10 de Octubre de 1868, e instaurado por Decreto de 12 de Junio de 1874; el *Consejo Supremo de Hacienda*, que desapareció el año de 1834, pasando sus atribuciones gubernativas al *Consejo Real de España e Indias*, y fundándose para las contenciosas el *Tribunal Supremo de Hacienda*; el *Consejo de Sanidad*, agregado al Ministerio de la Gobernación e instituído por Real Decreto de 17 de Marzo de 1847, etc., etc.

Como representantes del Poder central en las provincias, se hallaban los *Jefes políticos*, denominados desde 1833 *Subdelegados de Fomento*, y en 1834 *Gobernadores civiles*, y los *Intendentes*, encargados de la administración de la Hacienda de las provincias. Por Real Decreto de 28 de Diciembre de 1849 fueron suprimidos los *Jefes políticos* y los *Intendentes*, reemplazándolos los *Gobernadores de provincia*, que debían ser en ella Jefes de todos los ramos de la Administración civil, conservando tal carácter hasta la Ley de 9 de Diciembre de 1881, que puso la autoridad económica superior de las provincias a cargo de los *Delegados de Hacienda*.

Respecto de los Municipios, la autoridad del Gobierno aparece representada, por conducto del *Gobernador*, en el *Alcalde*, el cual, a su vez, tiene la propia significación de que le inviste su carácter de Jefe de la Administración municipal.

**93. Evolución del régimen local español desde 1833 a 1902.**—Como dejamos dicho, la *Ley para el Gobierno económico-político de las provincias de 1823*, fué la verdadera generadora de las bases sobre que se sentó el régimen local español durante el período constitucional.

La institución de gobierno local primeramente consagrada y definida en el reinado de Isabel II fué la de los llamados anteriormente *Jefes políticos* por las Leyes de 1813 y 1823. En efecto; a la fundación del Ministerio de Fomento en 1832, sucede el Real Decreto de 23 de Octubre de 1833, a cuyo tenor se establecen *Subdelegados principales de Fomento* en las provincias y *Subdelegados subalternos* en las grandes poblaciones. La misión de tales funcionarios consistía en hacer

ejecutar las disposiciones del Gobierno y en promover en las provincias la prosperidad material y la cultura. A diferencia de los *Jefes políticos*, los *Subdelegados* no presidían los Ayuntamientos, ya que su misión era la de velar por los intereses de toda la provincia, con la cual se compenetran cada vez más, como lo revela la denominación de *Gobernadores civiles* que les da el Decreto de 13 de Mayo de 1834 y la de *Gobernadores de provincia* que les concede el Decreto de 28 de Diciembre de 1849.

El 30 de Noviembre de 1833 se ordenó la división territorial provincial presidida por el criterio informante de la Constitución de 1812, es decir, por el que estimaba a la provincia como *circunscripción artificial* para los servicios del Estado, prescindiendo de las antiguas *regiones*. A tenor de tal disposición fueron creadas 49 provincias, que comparadas con la antigua división, dieron el siguiente resultado: 1.º Andalucía, que anteriormente comprendía los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, fué dividida en ocho provincias, a saber: Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva.; 2.º Aragón, en tres: Zaragoza, Huesca y Teruel; 3.º Asturias comprendía una: Oviedo; 4.º Castilla la Nueva cinco: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara; 5.º Castilla la Vieja, ocho: Burgos, Valladolid, Palencia, Avila, Segovia, Soria, Logroño y Santander; 6.º Cataluña, cuatro: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona; 7.º Extremadura, dos: Badajoz y Cáceres; 8.º Galicia, cuatro: Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra; 9.º León, tres: León, Salamanca y Zamora; 10.º Murcia, dos: Murcia y Albacete; 11.º Valencia tres: Valencia, Alicante y Castellón de la Plana; 12.º Navarra, una: Navarra; 13.º Las provincias Vascongadas, tres: Vizcaya, Alava y Guipúzcoa; 14.º Las islas Baleares, una; y 15.º las Islas Canarias, una.

*Régimen municipal.*—Al terminar el reinado de Fernando VII, la vida municipal se hallaba representada por una multitud de Ayuntamientos compuestos desigualmente de *Regidores perpetuos, vitalicios, bienales, anuales, nobles por constitución unas veces, plebeyos por constitución otras, Síndicos* de varias denominaciones, *Diputados*, etc., etc. El Real Decreto

de 23 de Julio de 1835 aspiró a suprimir éstas anomalías reorganizando los Ayuntamientos, que habían de componerse de *Alcaldes, Tenientes de Alcalde, Regidores y Procurador síndico*. Tales oficios concejiles serían de elección libre. Se conservarían los Ayuntamientos en los pueblos que ya los habían tenido, aunque su población no llegara a cien vecinos, y podrían constituirse en aquellos otros que los solicitaren contando con este último número, bien por sí solos o reuniéndose a otros pueblos limítrofes. De la antigua organización quedaban suprimidos expresamente los cargos perpetuos (*Regidores, Veinticuattros, Jurados, Alféreces, Escribanos, etc.*); pero con la nueva se acentúa el régimen centralizador, patentizado en la dependencia de los *Alcaldes* respecto de los *Gobernadores*, en la facultad que el Monarca tiene de destituir los Ayuntamientos, en la de suspenderlos que se atribuye al *Gobernador*, y en el derecho que asiste al Rey de nombrar para Madrid y demás capitales o ciudades Presidentes de las respectivas Corporaciones municipales con el título de *Corregidores*, derecho éste que constituyó el precedente natural de los *Alcaldes de Real nombramiento*, posteriormente desarrollado por las leyes.

Derrocado el régimen político del Estatuto Real de 1834, restablecióse el 15 de Octubre de 1836 la *Ley para el Gobierno económico-político de las provincias*, de 1823. Al año siguiente, la Constitución de 1837 limitó a muy pocos artículos los principios relativos a la organización del régimen local, principios que el Gabinete del conde de Ofalia quiso desarrollar en un proyecto de ley, en el que, teniendo presente el carácter excesivamente popular de las municipalidades, dirigía la reforma “hacia una centralización que recientes sucesos—decía el Ministro de la Gobernación—han hecho todavía más precisa, y que sin destruir la justa intervención de los pueblos en los asuntos propios, contribuya a que no sea ilusoria la existencia del Poder supremo, dándole la fuerza suficiente para oponerse a la disolución de la sociedad, inevitable siempre donde falta su influencia tutelar y organizadora”. No llegó a ser aprobado el proyecto en aquella legislatura de 1837-38. Se reprodujo en la siguiente de 1839, aunque también sin éxito, y en las Cortes de 1840, el Sr. Cal-

derón Collantes, titular de la cartera de Gobernación, presentó un proyecto sobre *Organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales* y otro sobre *Organización y atribuciones de los Ayuntamientos*. El primero no llegó a discutirse, y el segundo, reproducción del presentado en la legislatura precedente, alcanzó vida parlamentaria, si no larga, sí accidentada. En efecto, el Gobierno quiso abreviar su discusión recabando una autorización para implantar la Ley, pero combatido por acudir a tal expediente, que reducía proyecto tan importante de reforma a un solo artículo, e igualmente impugnados los principales extremos del mismo, singularmente el de atribuir a la Corona el nombramiento de los *Alcaldes* y *Tenientes de Alcalde* de las capitales de provincia, la discusión empeñada sobre tales extremos, sirvió para dividir profundamente a moderados y progresistas. No obstante, doña María Cristina, ligada a los primeros, sancionó la llamada *Ley de Ayuntamientos* (14 de Julio de 1840), pero tal determinación la obligó a abandonar la Regencia, hizo posible que asumiera ésta el general Espartero y llevó a la dirección del país al partido progresista.

Triunfantes los amigos del progreso, suspendieron la ejecución de la ya famosa *Ley de Ayuntamientos* (13 de Octubre de 1840), pero victoriosos al cabo los moderados, pusieronla nuevamente en vigor (Real Decreto de 30 de Diciembre de 1843). Posteriormente y en virtud de la Ley de 1.º de Enero de 1845, el Gobierno fué autorizado para arreglar la organización y fijar las atribuciones de las Diputaciones y Ayuntamientos, por lo que el 8 de Enero de 1845 promulgó una Ley inspirada en los conocidos principios centralizadores, característicos más que de ninguna otra de la agrupación moderada, a saber: *Alcaldes* y, en su caso, *Alcalde Corregidor* de real nombramiento; actuación de los Ayuntamientos bajo la presidencia del *Jefe político* o del *Alcalde*; subordinación de éste como delegado del Gobierno a la autoridad inmediata de aquél, y constante vigilancia de la Administración superior sobre la gestión de la Corporación municipal. En suma: prevención y desconfianza respecto de la vida local, cuya autonomía estaba, muy lejos de quererse.

La labor de las Constituyentes durante el período comprendido entre 1854 a 1856, está representada en relación con la vida local por los artículos 74 a 77 de la Constitución *non nata* de 1856 y por los proyectos de Leyes orgánicas municipal y provincial presentados a las Cortes el 7 de Mayo de 1856, sancionado el primero el 24 de Junio del mismo año y publicado como Ley el 5 de Julio. La reforma a que aludimos, que por el momento no llegó a regir, contenía como novedades: la extensión del derecho electoral a tenor de una escala de población que se fijaba; la representación de las minorías en la elección de concejales, y la intervención en la formación, examen y censura de los presupuestos y de las cuentas de los Ayuntamientos de *un número doble de electores* que el de concejales, es decir, la fiscalización de los *asociados*.

Movidos los legisladores de 1856 por el deseo de conciliar la libertad de las Corporaciones locales con los intereses generales del país, de que el Gobierno estaba exclusivamente encargado, laboraron una norma que se limitó a significar la mera orientación rectificadora del régimen de centralización; pero presidida por el espíritu de uniformidad y subordinación que sus inmediatas precedentes.

Durante los años de 1859 y 1860, el Ministro de la Gobernación don José Posada Herrera, presentó dos proyectos sobre economía y organización municipal. Informábalos la idea de sustituir la desconfianza del Poder central respecto de los organismos locales, por el propósito de dilatar su esfera de acción, disminuyendo la intensidad de la vigilancia y tutela que desde 1845 ejercía sobre los Ayuntamientos el Estado. En la realización de tal designio se advierten las siguientes particularidades: el concepto del sufragio como un deber cívico, que se deduce de la disposición por la cual si no hubiesen tomado parte en las elecciones municipales la mitad por lo menos de los electores, se procedería a otra nueva dentro de diez días; la mayor mediatización de la autoridad de los Ayuntamientos en el nombramiento de *Alcaldes*, representada por la facultad que se concede al Poder central para separarlos y para nombrar individuos extraños que desempeñen



la Alcaldía en localidades cuya población exceda de 40.000 almas, y la declaración de inmediatamente ejecutivos que se hace a favor de los acuerdos municipales sobre asuntos de perentoria y reconocida urgencia.

Carácter marcadamente centralizador tuvo, en cambio, la reforma sobre Ayuntamientos llevada a cabo por el Real Decreto de 21 de Octubre de 1866, reforma que restauró sin reservas la facultad plena del Monarca para nombrar *Alcaldes Corregidores*.

Triunfante la revolución de 1868, se estableció el sufragio universal a favor de los varones mayores de edad para la elección de los Ayuntamientos (acuerdo de la Junta superior de Gobierno, de 13 de Octubre de 1868), y por Decreto del 21 del mismo mes y año se reprodujo, con pequeñas variantes, la *Ley municipal* de 5 de Julio de 1856. Después, la Constitución de 1869, en su artículo 99, limitóse a decir: "La organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos se regirá por sus respectivas leyes", añadiendo que éstas se ajustarían a determinados principios, que enumeraba. Tras de ello, las Cortes Constituyentes acometieron el problema de la reorganización local al discutir, primeramente, el proyecto de Ley del Ministro de Hacienda Sr. Figuerola sobre el modo de cubrir los presupuestos provinciales y municipales (10 de Enero de 1870) y, después, los proyectos relativos a organización provincial y municipal presentados en la sesión del 18 de Febrero del mismo año. Tendía el primero de ellos a reconstruir las haciendas locales mediante el reconocimiento en pro de los Ayuntamientos y Diputaciones, de completa independencia para apreciar y fijar sus gastos respectivos; pero en materia de ingresos, era el Gobierno el que proponía un sistema general de impuestos locales en armonía con el del Estado. Los citados proyectos dieron lugar a las Leyes de 20 de Agosto de 1870, que constituyen en buena parte la base del régimen local en vigor hasta el final de la Regencia, término que nos hemos impuesto para el presente estudio. A virtud de las nuevas normas, las Corporaciones populares obrarían con independencia en lo relativo a la administración de sus intereses y ordenación de

sus servicios, pero tendrían solamente delegación en lo referente al orden político. Ahora bien, el Municipio como asociación legal de todas las personas que residen en un término municipal, seguía siendo, como para los legisladores de Cádiz de 1812, *no una realidad objetiva consagrada por la Historia*, no una *expresión natural* producida en ella en vista de necesidades positivas de los pueblos, sino *una mera institución* del legislador puesta al servicio del Estado.

Las aludidas Leyes de 20 de Agosto de 1870 siguieron en vigor hasta 1876, en que la de 16 de Diciembre de este año, tras de confirmar aquéllas, introdujo en las mismas algunas variantes (restricción del sufragio; nombramiento por el Rey de los Alcaldes correspondientes a pueblos que excedieran de 30.000 almas; necesidad de que los presupuestos municipales fueran aprobados por el Gobernador o por el Gobierno, etc.). Por último, la Ley de 2 de Octubre de 1877 autorizó al Ministro de la Gobernación para publicar la *Ley orgánica municipal* de 1870, incorporando a su texto la reforma de 1876. Tal ha sido la encargada de presidir la vida municipal española hasta el año de 1902, en que damos fin a la presente obra. Con arreglo a dicha Ley, el gobierno interior de cada término municipal se halla encomendado a un Ayuntamiento compuesto de concejales divididos en tres categorías: *Alcalde*, *Tenientes* y *Regidores*. En todo término municipal ha de haber, además del Ayuntamiento, una *Junta municipal* compuesta de los *concejales* y de un número igual de *vocales asociados*, a la cual corresponde la aprobación de los Presupuestos municipales, el establecimiento y obtención de arbitrios en el tiempo y forma que la ley ordena, y la revisión y censura de las cuentas del Ayuntamiento. El *Alcalde* tiene el doble carácter de *representante* del Gobierno y de *jefe de la Administración municipal*, en razón al doble aspecto del municipio como parte de un todo superior y como todo que es en sí mismo. A tenor de la reforma que analizamos, el nombramiento de Alcaldes obedece a tres sistemas distintos, ya que, de un lado, el Rey tiene la facultad de nombrar Alcalde de Madrid; de otro, puede nombrar de

entre los Concejales a los Alcaldes de las capitales de provincia, de las cabezas de partido judicial y de los pueblos que tengan igual o mayor vecindario que aquéllas dentro del mismo partido, siempre que no bajen de seis mil habitantes, y de otro, finalmente, los Ayuntamientos eligen de su seno a los Alcaldes en los demás casos.

*Régimen provincial.*—Como ya indicamos, la organización provincial fué una institución esencialmente legalista, puesta desde el primer momento al servicio del Estado. Con una *comarca* (no determinada por la Historia, como la *región*, sino circunscrita por la ley) y una *capital*, como elementos geográfico-políticos, y una *Diputación* y un *Jefe político* representante del Poder central, se constituye la provincia por el Código gaditano de 1812 y la *Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias* de 1813. La Ley de 1823, con un criterio eclético que persiste en el proceso legislativo sobre la organización local, considera la provincia, no sólo como una creación *exclusivamente* hija de la voluntad del legislador, sino como *asociación* resultante de *condiciones naturales* y *circunstancias históricas* que se pretende tener en cuenta.

Derogada toda la reforma legal precedente por el Decreto de 1.º de Octubre de 1823, adquiere nueva vigencia el 15 de Octubre de 1836 como consecuencia del movimiento político que restaura la Constitución del 12; y en vigor continúa hasta la Ley de 8 de Enero de 1845, que con las de 2 de Abril del mismo año sobre Gobierno político de las provincias y establecimiento de los *Consejos provinciales*, representan la integración plena de las tres instituciones que en lo futuro han de constituir la vida política y administrativa de las provincias, a saber: la *Diputación provincial*, el *Gobernador o Jefe político* y el *Consejo provincial*. Según tales normas, las *Diputaciones* limitaban sus facultades a una intervención en la gestión administrativa y económica de las provincias; el *Jefe político* ejercía funciones bajo la dependencia del Ministro de la Gobernación, especialmente en el orden público, protección a personas y propiedades, moralidad, policía de costumbres, etc.; y, finalmente los *Consejos provinciales*,

compuestos del Gobernador y de tres o cinco vocales, actuaban de *Cuerpos consultivos* del Gobierno y del Gobernador y como *Tribunales* en las cuestiones contenciosas. Mientras subsistió junto al *Jefe político* el *Intendente*, de quien dependía la administración económica de la provincia, aquél no pudo centralizar todas las funciones esenciales de Gobierno; pero cuando por Real Decreto de 28 de Diciembre de 1849 fueron instituidos los *Gobernadores de provincia* en sustitución de los *Jefes políticos* y de los *Intendentes*, concentróse, como ya dijimos anteriormente, en los *Gobernadores* la autoridad civil de cada provincia.

Derogadas las Leyes de 1345, fué restablecida en Agosto de 1854 la de 3 de Febrero de 1823, que rigió hasta el Decreto de 16 de Octubre de 1856, que dió nueva vigencia a la Ley de 8 de Enero de 1845. El 25 de Septiembre de 1863 promulgóse otra Ley para el gobierno y administración de las provincias, norma ésta que refundió las Leyes de 1845 sobre gobierno de las provincias, Diputaciones y Consejos provinciales, y que con el Decreto de 17 de Octubre del mismo año, se acentúa el sentido descentralizador, descongestionando la acción administrativa del Gobierno como lo exigía la creciente complejidad de los negocios públicos; pero reservándose siempre el Poder central la *alta inspección* sobre los organismos locales.

La Revolución de Septiembre de 1868, simbolizada en la Constitución de 1869, aspiró a completar su obra legislativa determinando orgánicamente la existencia de las Corporaciones municipales y provinciales. Realizóse tal objeto en punto al régimen provincial por la Ley de 20 de Agosto de 1870, que consagró la sustantividad de la provincia, logrando que dejara de ser una *mera división territorial*, para convertirse en una *expresión local*, con autonomía en su gestión administrativa y con delegación de facultades en el orden político. Según la ley que examinamos, la provincia es una división territorial y un compuesto de Municipios. El organismo provincial comprende como instituciones suyas: el *Gobernador*, nombrado y separado por el Gobierno; la *Diputación provincial*, compuesta por los Diputados elegidos por los vecinos

de cada provincia; la *Comisión provincial* elegida por la Diputación, y los *empleados y agentes* de la Administración provincial. Finalmente, ésta última se determina por las funciones del Gobernador, por las de la *Diputación* y por las de la *Comisión provincial*.

Rigió integralmente la Ley de 20 de Agosto hasta el 16 de Diciembre de 1876, en cuya fecha fué reformada en sentido centralizador, elaborándose el oportuno cuerpo legal, unificado, es decir, el producto sistematizado de la reforma, por medio de la Ley de 2 de Octubre de 1877. Mantúvose vigente ésta hasta el 29 de Agosto de 1882 en que fué publicada la *Ley provincial* que ha regulado la vida de las Corporaciones provinciales durante el último período a que se extiende la presente obra. Base de la nueva reforma fué la Ley de 1870. Distínguense en la organización provincial por dicha norma establecida: la *Provincia*, como unidad territorial de carácter esencialmente administrativo; el *Gobernador*, con la doble significación de delegado directo del Poder central y de Jefe superior de la Administración local; la *Diputación*, como cuerpo de representación popular al cual corresponde exclusivamente la administración de los intereses peculiares de la provincia y el ejercicio de funciones de superior jerárquico de los Ayuntamientos; la *Comisión provincial*, que formada de individuos de la Diputación provincial, ofrece el triple carácter de Cuerpo administrativo que ejecuta y auxilia a la Diputación, de superior jerárquico de los Ayuntamientos en ciertos asuntos, y de Cuerpo consultivo del Gobernador; y por último las *dependencias burocráticas* que son: la secretaría, la contaduría y la depositaría.

Resumiendo el largo proceso de nuestros organismos locales durante el siglo XIX, resulta que ha sido el de un *régimen centralizado* con los caracteres propios del mismo, cuales son: la *uniformidad*; la *subordinación* de todas las funciones al Poder central; la jerarquía administrativa con el predominio del elemento burocrático, y la *falta de autonomía* de los Cen-

1. Para componer el siguiente artículo nos hemos servido de las siguientes obras: Cos Gayón, *Historia de la Administración pública en España*; Posada Herrera, *Lecciones de Administración* y, sobre todo, Adolfo Posada, *Evolución legislativa del régimen local en España*.



tros locales, supeditados al Poder ejecutivo. Lo cual no impide que se puedan señalar algunas orientaciones *descentralizadoras*, que ya hemos procurado poner de relieve al referirnos a las Leyes de 1823, 1856, 1863 y 1870.

**94. Reformas legislativas.**—La labor legislativa de las Cortes Constituyentes de 1810 a 1813 orientada en el sentido de llegar a la unificación del derecho por el procedimiento *codificador*, persiste y se acentúa en el período comprendido entre los años de 1833 y 1902.

En punto al Derecho constitucional, al *Código gaditano* de 1812 con sus declaraciones de soberanía nacional, Cámara única con período fijo de funcionamiento, veto suspensivo e iniciativa parlamentaria en la formación de las leyes, sucede la Carta otorgada de 10 de Abril de 1834, denominada *Estaduto Real*, que al establecer los dos Cuerpos colegisladores (Estamentos), uno de próceres y otro de procuradores, al atribuir a la Corona la facultad de convocar, suspender y disolver las Cortes, que en contados casos habían necesariamente de reunirse (jura de nuevo Monarca y votación de contribuciones, cuando menos, cada dos años), y al privarlas del derecho a tratar de otros asuntos que no fueran los sometidos expresamente a su examen por un Decreto Real, quiso hallar el término de transacción entre la antigua Monarquía absoluta y la constitucional de 1812. Fracasado el intento de Martínez de la Rosa y triunfante el ideario progresista en las esferas del Poder, vió la luz pública el 18 de Junio de 1837 una nueva *Constitución*, democrática en su forma, pero moderada en su esencia. En efecto, reconocíase en ella la soberanía nacional, la obligación de reunir Cortes todos los años, la iniciativa de las leyes en el Rey y en cada uno de los Cuerpos colegisladores; pero la parquedad de su articulado, el derecho reconocido a la Corona de convocar, suspender y disolver la representación nacional, la misma organización de ésta en dos Cámaras (Senado y Congreso) y el espíritu centralizador que la preside, constituyen prueba bien palmaria de lo muy distantes que se hallaban los liberales de 1837 de los ilusos reformadores de 1812 y de los exaltados demagogos de 1820.

Triunfantes desde las prostrimerías de 1843 las ideas moderadas, refléjase el hecho en la vida constitucional, que con el *Código fundamental* de 23 de Mayo de 1845 experimenta una positiva regresión, caracterizada por el robustecimiento de la autoridad del Monarca y del Poder ejecutivo, por la declaración de catolicidad del Estado español, por el derecho que se asigna a la Corona de nombrar a los Senadores, por la facultad de que se priva a las Cortes de reunirse automáticamente el 1.º de Diciembre de cada año si el Rey no las hubiere congregado antes, por la supresión de la Milicia nacional y por la sustitución del deber impuesto al Soberano, a tenor del artículo 48 de la Constitución de 1837, de recabar de las Cámaras la licencia para contraer matrimonio, por el de notificar meramente a las mismas aquella decisión.

Tras del intento de nuevas reformas representando por la Constitución no promulgada de 1856, la *Unión liberal* palia los rigores del Código moderado del 45 por el *Acta adicional* de 15 de Septiembre de 1856; pero el advenimiento de Narváez al Poder produce como reacción la *Ley de 17 de Julio de 1857*, que reforma la Constitución de 1845 en sentido más restrictivo, pues reorganiza el Senado y permite a los Grandes de España constituir vinculaciones a fin de perpetuar la dignidad de Senador en sus familias.

La Revolución de 1868 dió margen a las Constituyentes de 1869 que discutieron y aprobaron el *Código fundamental* de 1.º de Junio de este año, cuyos preceptos, reflejo del espíritu democrático que los engendra, consagran explícita y ampliamente los derechos de la ciudadanía, singularmente el ejercicio público o privado de cualquier culto religioso, convierten al Senado en Cuerpo electivo, restablecen el principio de la reunión anual de Cortes y de su precisa actuación durante cuatro meses cuando menos, y amplía las atribuciones del Poder legislativo, limitando las prerrogativas de la Corona.

Finalmente, la *Constitución* promulgada el 30 de Junio de 1876, hoy en suspenso, llamada *Constitución de los Notables*, por los trabajos previos de que fué objeto por parte de una nutrida y brillante comisión de hombres públicos.

representa un justo medio entre la moderada de 1845 y la democrática de 1869.

En la misma esfera del derecho público han venido a la vida en el período que nos ocupa las leyes orgánicas consiguientes a cada reforma constitucional y las muy importantes normas relativas a las *Asociaciones* (30 de Junio de 1887), al establecimiento de *Jurado* (20 de Abril de 1888) y a la implantación del *Sufragio universal* (26 de Junio de 1890).

En orden a la vida mercantil, al *Código de Comercio de 1829* y a su reforma del 30 de Julio de 1878, sucedió el nuevo *Código publicado el 22 de Agosto de 1885*, en vigor desde 1.º de Enero del siguiente año.

Aludimos ya en la parte interna del anterior período a los trabajos realizados por las Cortes de 1822 en orden a la reforma del *Derecho penal*; pero el Código entonces sancionado no llegó a prosperar a causa de la reacción política de 1823. A la muerte de Fernando VII, siguió actuando una Comisión de juriconsultos que había sido nombrada en vida del Monarca a los efectos de revisar los proyectos de Código penal y la Ley procesal para aplicarlo, formados en 1830. Pero ni los trabajos entonces realizados ni los que en el mismo sentido codificador se efectuaron en 1839-40 cristalizaron en nada práctico. El Gobierno provisional de 1843 procedió a nombrar una *Comisión general de Códigos* que presentó su labor relativa a la materia penal en Diciembre de 1845, y aprobada por las Cortes, fué promulgada, constituyendo el Código penal de 1848, en cuya formación señaladamente intervino el eminente criminalista Sr. Pacheco. El aludido Cuerpo legal fué primeramente reformado en 1850 y después en 1870, sufriendo este último algunas modificaciones que introdujo la Ley de 17 de Julio de 1876 e integrando ambos la norma penal en vigor hasta el fin de la Regencia (1902), a la que hay que añadir la Ley de 10 de Junio de 1894 sobre delitos cometidos por medio de explosivos y, en materia procesal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de Septiembre de 1882.

Respecto al *Derecho civil* y por modo especial a la familia y a la propiedad, que constituyen la esencia objetiva

del mismo, las reformas verificadas durante el siglo XIX han sido tan numerosas como importantes. Figura a la cabeza de ellas por su indiscutible trascendencia la *Ley de Matrimonio civil* de 18 de Junio de 1870, vigente desde 1.º de Septiembre del mismo año. Profesando los españoles la religión católica y habiéndose reconocido este hecho por las Constituciones políticas desde la gaditana del 12; viviendo en nuestros Códigos fundamentales el principio de la unidad confesional como dogma del régimen político español, la legislación canónica fué, hasta el año de 1870, la que rigió en punto a la celebración del matrimonio. Pero consignada la libertad de cultos en la Constitución de 1869 y la tolerancia en la vigente de 1876, el Estado ha querido efectivar su derecho a tener legislación propia, particular y distinta de la Iglesia en cuanto al matrimonio se refiere. Por tal motivo, la citada Ley de 1870 sometió a sus preceptos a todos los ciudadanos españoles cualquiera que fuera su religión, si bien el Real Decreto de 9 de Febrero de 1875, derogó aquélla como general en la materia y, en su consecuencia, dispensó a los católicos de la obligación de contraer matrimonio civil, que quedó reservado para los no católicos, concediendo efectos civiles a los matrimonios canónicos celebrados con arreglo a las prescripciones del Concilio de Trento.

Asimismo, deben ser citadas la Ley de 29 de Julio de 1837 suprimiendo las Comunidades religiosas y ordenando la venta de sus bienes, y las Leyes y Decretos subsiguientes en relación con los bienes de dichas Comunidades y con la facultad de las mismas para adquirirlos y poseerlos, materia que ya ha sido objeto de consideración especial al hablar de la propiedad en el período que examinamos. El 17 de Junio y el 13 de Diciembre de 1870 vieron la luz pública la *Ley y el Reglamento de Registro Civil*, en el que habían de inscribirse o anotarse los actos concernientes al estado civil de las personas, para lo cual se dividiría el citado Registro, a tenor del Real Decreto de 12 de Junio de 1899, en cuatro secciones: *nacimientos, matrimonios, defunciones y ciudadanía*. El 10 de Junio de 1847 se publicó la *Ley de*

*Propiedad intelectual*, derogada por la de 10 de Enero de 1879 que es la vigente; el 8 de Febrero y 21 de Junio de 1861 la *Ley Hipotecaria* y su *Reglamento*, con fuerza de obligar desde 1.º de Enero de 1863, reformados por la Ley de 21 de Diciembre de 1869, que empezó a regir el 1.º de Enero de 1871, y que hoy está en vigor con la reforma parcial introducida por la Ley de 17 de Julio de 1877; y finalmente, el 1.º de Mayo de 1889, el *Código civil*. La formación de éste comprende un largo y accidentado proceso que muy someramente habremos de reseñar.

Va dejamos consignado en la parte interna del anterior período, los trabajos realizados en 1813 y 1821 para llegar a la codificación civil. También aludimos a la benemérita labor que con igual finalidad llevaron a cabo particularmente los señores Gorosabal, Cambronero, Tapia Vizmanos y Ayuso. Nombrada la *Comisión general de Códigos* (19 de Agosto de 1843) que ultimó la formación de los libros primero, segundo y parte del tercero del Código civil, fué disuelta (31 de Julio de 1846) y sustituida por otra, que bajo la presidencia del señor García Goyena, presentó el 8 de Mayo de 1851 un proyecto completo, cuyos elementos fueron el Derecho de Castilla con algunas, muy pocas, instituciones del Derecho foral, las doctrinas de los expositores y jurisconsultos glosando la legislación civil castellana, y algunos principios e instituciones de la legislación extranjera, singularmente, del Código francés (Consejo de familia, protutor, testamento ológrafo, mayoría de edad, etc.) Desechado el proyecto fué, ello no obstante, recogido como base por la *Comisión general de Códigos*, a la que se incorporaron autorizadosísimos representantes de las provincias forales (Real Decreto de 2 de Febrero de 1880). Don Manuel Alonso Martínez, que había presidido esta Comisión, presentó como Ministro de Gracia y Justicia un Proyecto de bases para el Código civil (22 de Octubre de 1881), pero habiendo encontrado alguna resistencia en las Cortes, que manifestaron su deseo de discutir el proyecto íntegro y no las aludidas bases, llevó al Senado los libros primero y segundo del Código. Los acontecimientos políticos impidieron que la importante



reforma legislativa pasara adelante, pero otro Ministro de Gracia y Justicia, don Francisco Silvela, solicitó del Parlamento (7 de Enero de 1885) la oportuna autorización para publicar un Código civil con sujeción a un nuevo Proyecto de Ley de Bases que discutido por las Cortes de 1885 y por las convocadas y reunidas en 1886, dió lugar a la Ley de 11 de Mayo de 1888, fundamento legal supremo del Código civil, que fué a continuación redactado por la Sección civil de la Comisión codificadora, y aprobado y publicado por Real Decreto de 6 de Octubre del mismo año de 1888. Mas habiéndose permitido abrir amplia discusión parlamentaria sobre el nuevo Cuerpo legal y demostrándose en el curso de la misma las deficiencias de aquél, el Gobierno inutilizó la edición hecha y dió el encargo a la citada Comisión de preparar una nueva edición del Código con las enmiendas y adiciones resultantes de la discusión habida en las Cámaras. En su consecuencia, desde 1.º de Mayo de 1889 comenzó a regir el nuevo Código con el texto de su primitiva edición, y por la Ley de 24 de Julio de igual año entró en vigor el nuevo texto legal corregido y segunda edición oficial hecha.

No obstante tan larga y laboriosa gestación, la ansiada unificación del Derecho civil no pudo verse realizada. El Código recién aprobado sólo había de extenderse a las treinta y nueve provincias del territorio castellano. Para las de Aragón y Baleares regiría como supletorio de su peculiar Derecho, y para Cataluña, Navarra y Vizcaya había de colocarse, no ya inmediatamente detrás de sus respectivas legislaciones forales, sino aún después del Derecho supletorio (romano y canónico) que tradicionalmente se aplica en estas regiones. Es más: ni en la misma Castilla ha conseguido el Código la suspirada unidad, ya que fuera de él han quedado más de dos terceras partes de leyes civiles en vigor.

**95. La administración de Justicia.**—Consignaron los autores del *Discurso preliminar* de la Constitución de 1812, la necesidad imperiosa de establecer el principio de la inmovilidad judicial como garantía de independencia de los encargados de administrar la justicia. "Como la integridad de los jueces—decían—es el requisito más esencial para el buen des-

empeño de su cargo, es preciso asegurar en ellos esa virtud por cuantos medios sean imaginables. Su ánimo debe estar a cubierto de las impresiones que pueda producir hasta el remoto recelo de una separación violenta. Y ni el desagrado del Monarca, ni el resentimiento de un Ministro, han de poder alterar en lo más mínimo la inexorable rectitud del Juez o Magistrado. Para ello nada es más a propósito que el que la duración de su cargo dependa absolutamente de su conducta calificada en su caso por la publicidad de un juicio”.

Fundamentalmente se mantiene a través de nuestros Códigos constitucionales tal principio de inamovilidad. Conságranlo, en efecto, las Constituciones de 1837, 1845 y 1869 y, asimismo, lo establece la de 1876 al decir en su artículo 80: “Los Magistrados y Jueces serán inamovibles y no podrán ser depuestos, suspendidos ni trasladados sino en los casos y en la forma que prescriba la ley orgánica de Tribunales”.

Reforma de notoria importancia en relación con el ejercicio del Poder judicial, fué la introducida durante el período que historiamos al unificar los fueros. Apuntamos ya que, procesalmente, significaba esta palabra la serie de circunstancias personales, reales o locales que determinaban la competencia de un Juez o Tribunal para conocer de un negocio determinado. Dijimos también que los legisladores gaditanos habían dado a la cuestión la trascendencia que en sí tenía. “Una de las principales causas de la mala administración de justicia—habían manifestado éstos—es el fatal abuso de los Fueros privilegiados introducidos para ruina de la libertad civil y oprobio de nuestra antigua y sabia Constitución. El conflicto de autoridades que llegó a establecerse en España el último reinado, de tal modo había anulado el imperio de las leyes, que casi parecía un sistema planeado para asegurar la impunidad de los delitos”. Pues bien; la intrincada y enojosa cuestión originada por la variedad de fueros, quedó resuelta por el Decreto-Ley de 1868, en cuya virtud, se suprimieron los Juzgados especiales de Hacienda, Comercio y Extranjería, quedando únicamente como jurisdicciones especiales la eclesiástica y la de Guerra y Marina.

Respecto de la organización judicial, los Decretos de 26 de

Enero, 24 de Marzo y 21 de Abril de 1834, fueron básicos en la materia. Por este último, el territorio nacional se dividió en *partidos judiciales*, al frente de cada uno de los cuales quedó un *Juez de partido* que había de instruir las causas criminales y conocer de las civiles en primera instancia. En su consecuencia, los Alcaldes ordinarios de todos los pueblos, cesaron en el desempeño de sus funciones judiciales, y sólo por excepción se consintió que las siguieran ejerciendo los Corregidores y Alcaldes mayores situados en localidades que por la nueva división no fueran cabeza de partido.

El Decreto de 26 de Enero de 1834, fundándose en la urgencia de unificar la división administrativa, establecida el 30 de Noviembre de 1833, con la demarcación judicial, reorganizó con el nombre de *Reales Audiencias* las de Madrid, Valladolid, Granada, Coruña, Sevilla, Oviedo, Cáceres, Zaragoza, Valencia y Barcelona; fundó con el mismo título las de Burgos y Albacete, y aunque concediendo a las de Pamplona (*Consejo Real de Navarra*) Canarias y Mallorca iguales atribuciones que a las anteriores, ordenó que conservaran sus antiguas denominaciones. Tales Tribunales superiores entenderían en los negocios civiles y criminales, incluso los de hidalguía y tenutas, que habrían de quedar definitivamente terminados en los mismos, salvo los recursos de ley ante los *Tribunales Supremos* de la Corte.

Finalmente, un Decreto inserto en segundo lugar entre los promulgados el 24 de Marzo del citado año de 1834, suprimió el *Consejo de Castilla* y, en su lugar, instituyó en el orden judicial, el *Tribunal Supremo de España e Indias*, que había de conocer de los recursos de nulidad de los procedimientos de los Tribunales inferiores, de los de injusticia notoria, Mil y Quinientos, tanteo, incorporación y reversión a la Corona, y fuerza de la Nunciatura; de los juicios contra Magistrados de los Tribunales superiores y empleados de elevada jerarquía, y de los negocios contenciosos del Real Patronato. Un Presidente, quince Ministros y tres Fiscales compondrían el Supremo, que se dividiría en tres Salas: dos para negocios de la Península e islas adyacentes y una para las provincias ultramarinas.

Como se ve, los estratos que podían distinguirse en la administración judicial, eran los siguientes: *Juzgados de partido*, *Audiencias territoriales* o *Reales Audiencias* y *Tribunal Supremo*. Por Real Decreto de 22 de Octubre de 1855 fueron instaurados los *Juzgados de paz* que, desde el año 1870 se denominaron *Juzgados municipales*.

A tenor del Real decreto de 13 de Diciembre de 1867, la jerarquía judicial comprendía: 1.º) Presidente del Tribunal Supremo. 2.º) Presidentes de Sala del mismo. 3.º) Ministros del propio Tribunal, y el Regente o Presidente de la Audiencia de Madrid. 4.º Regentes de las Audiencias de fuera de Madrid y Presidentes de Sala de las demás Audiencias. 6.º Magistrados de las Audiencias de fuera de la Corte y Jueces de primera instancia de Madrid. 7.º) Jueces de primera instancia de término y 8.º) Jueces de primera instancia de ascenso.

La organización judicial establecida por los Decretos de 1834 fué modificada por la Ley orgánica de 1870, según la cual, en cada término municipal habría uno o más *Jueces municipales*; en cada circunscripción un *Juez de instrucción*; en cada partido un *Tribunal de partido*; en cada distrito una *Audiencia*, y en la capital de la Monarquía un *Tribunal Supremo*. Pero los Tribunales de partido no llegaron a implantarse, ni fueron precisadas las circunscripciones de los Jueces de instrucción, por lo que *Juzgados municipales*, *Juzgados de primera instancia e instrucción*, *Audiencias territoriales* y *Tribunal Supremo* siguieron constituyendo los elementos fundamentales de la organización judicial española. En 1882 y a virtud de la Ley adicional a la orgánica de 14 de Octubre del citado año, se dispuso que a las quince salas que en las Audiencias territoriales venían entendiendo en las causas criminales, se agregaran 80 *Audiencias de lo criminal*, para concurrir con aquéllas al conocimiento en juicio oral y público y única instancia de los procesos por delitos cometidos en la Península e Islas adyacentes. Tales Audiencias de lo criminal funcionaron hasta la Ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1892 que dispuso la supresión de las que no estuvieran situadas en capital de provincia. En cumplimiento de esta disposición, el Real Decreto de 16 de Julio del mismo año redujo el número de aquéllas a 34, susti-

tuyendo su primera denominación por la de *Audiencias provinciales*, que todavía conservan.

**96. La Hacienda.**—Al morir Fernando VII, los esfuerzos realizados por el Ministro de Hacienda señor Ballesteros habían casi logrado la ansiada nivelación del Presupuesto, pero no pudieron impedir el aumento de la Deuda, que por aquel entonces se aproximó a la cifra de 18.000 millones de reales. Tan enorme carga unida a las exigencias impuestas por la guerra civil, obligaron al Conde de Toreno a recurrir al crédito, solicitando la correspondiente autorización para hacer un empréstito de 400 millones. La oportunidad para el concierto de tal operación fué indiscutible, pues por aquellos días era grande la confianza que las naciones extranjeras tenían cifrada en la solvencia moral y material de España; pero Toreno quiso que precediera a la realización del empréstito un arreglo de la Deuda extranjera, a tenor del cual, quedaba la emitida dividida en dos clases: una activa o con interés, y otra pasiva, que no debía entrar a gozarle hasta pasados bastantes años. Los tenedores perjudicados por el arreglo protestaron airadamente, y la Ley de 16 Noviembre de 1834, que sancionó la reforma, vino a disminuir notoriamente nuestro crédito en el mundo, forzándonos a contratar el aludido empréstito de 400 millones a 50, cuando pudo hacerse a tipo superior al 80 por 100. Presentó después el Ministro el Presupuesto para 1835 con un cálculo de 937 millones de reales de gastos y 766 de ingresos, es decir, con un déficit de 171 millones, y aunque al proyecto de ley económica acompañaba un pequeño plan enderezado a obtener una reducción de 63 millones en el citado déficit, es lo cierto que las circunstancias políticas impidieron a Toreno realizarla.

Mendizábal, que le sucedió en la cartera de Hacienda, tuvo que subvenir a las necesidades de la guerra civil, que imponía un gasto mensual de 60 millones de reales, y asimismo, se vió agobiado al tener que allegar fondos para atender a las obligaciones ordinarias del Estado y al pago de los 232 millones a que ascendían anualmente los intereses de la Deuda. Para acudir al remedio de situación tan crítica, apeló a los donativos, a la redención del servicio militar mediante la entrega de cuatro mil reales o de mil reales y un caballo, a la negociación de



títulos, a la adquisición de fondos con la garantía de las rentas futuras de Ultramar y los productos de las minas de Almadén, a la conversión al 5 por 100 de la Deuda no consolidada, a los giros al descubierto, y a la venta de los bienes pertenecientes a las Comunidades religiosas. Pero ni tan violentas disposiciones ni las que adoptó durante su segunda etapa ministerial, el año de 1837 (adjudicación al Estado de los bienes del clero secular; establecimiento de la contribución del culto; contribución extraordinaria de guerra por 603 millones sobre la propiedad y la industria; descuento de sueldos, etc., etc.) pudieron evitar la penuria del Tesoro ni que las más apremiantes necesidades públicas resultaran menguadamente satisfechas. El Presupuesto del citado año de 1837 cifraba los gastos en 1.570 millones de reales y calculaba los ingresos en 841.

En 1838 se hizo un nuevo empréstito de 500 millones; en 1839 se recargó la contribución extraordinaria, y hasta mediados de 1840 subsistió el impuesto extraordinario y fueron abundantes las emisiones de Títulos. En 1841 se arrendaron las rentas de la sal y del papel sellado, pusiéronse en venta los bienes del clero (Ley de 2 de Septiembre) y fué establecida como parte de la dotación de éste una contribución directa que se llamó del *culto y clero*. Entrado el año de 1842 se emitieron 160 millones en billetes del Tesoro y se formó un Presupuesto en el que los gastos ascendían a 1.280 millones de reales y los ingresos a cifra menor en 400 millones. Tales datos y el no menos elocuente de sumar en 1839 la Deuda reconocida 11.300 millones, dicen más acerca de la Hacienda española en la época que examinamos que cuantas circunstanciadas referencias y extensos comentarios pudiéramos apostillar.

El Ministro de Hacienda don Alejandro Mon fué el encargado de realizar durante el año de 1845 la inaplazable reforma del desbarajustado *sistema tributario*. Según la Ley de 23 de Mayo del citado año, las antiguas rentas denominadas alcabalas, millones, equivalentes, rentilla, etc. desaparecieron, siendo sustituidas por un reducido número de ingresos, divididos en dos grupos: uno de *contribuciones* directas, en que figuraban la de inmuebles, cultivo y ganadería, el subsidio industrial y de comercio y la contribución de inquilinatos, y otro, de *impuestos*

*indirectos*, constituido con los derechos de consumos, los de hipotecas, las aduanas y los estancos. En la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería se refundieron los históricos impuestos de paja y utensilios, frutos civiles, catastro, equivalente y talla de Aragón, cuarteles, impuesto sobre legados y herencias y manda pía forzosa, el donativo de las Vascongadas y el cupo de Navarra. En el subsidio industrial y de comercio se englobaron, el subsidio industrial y el cupo industrial de culto y clero. Por último, en la contribución de consumos fueron comprendidas las denominaciones rentas provinciales (alcabalas, cientos y millones, aguardientes y licores, etc.), la parte del catastro, equivalente y talla que no correspondía a la riqueza territorial y pecuaria y los derechos de puertos. El Presupuesto aprobado por la citada Ley de 23 de Mayo cifraba los gastos en 1.184.377.172'64 y los ingresos en 1.226.635.353 reales. Pero el optimismo a que daba margen el anuncio de tal superávit quedó bien pronto desvirtuado por la resistencia opuesta por los contribuyentes a la realización de los planes ministeriales del señor Mon, el cual, bien a su pesar, vióse obligado a disminuir los cupos que había fijado a la contribución de inmuebles y de subsidio y tuvo que renunciar a la contribución de inquilinatos. Por Decreto de 23 de Diciembre de 1846 fué sustituido el servicio de lanzas y medias anatas por el impuesto sobre grandezas y títulos.

El sistema tributario de Mon se conservó con pequeñas variantes hasta el año 1854, durante el cual, las Juntas revolucionarias suprimieron los impuestos que les vino en gana, pero, unánimemente, el de consumos, cuya abolición fué sancionada por el Gobierno el 7 de Febrero de 1855. La falta de tan importante fuente de ingresos obligó a los Ministros de Hacienda a recargar la contribución de inmuebles y de subsidio, y, a la postre, a restablecer el derecho de puertas (Decreto de 15 de Diciembre de 1856), que quedó nuevamente abolido en 1868, y restablecido al cabo el 26 de Junio de 1874.

Fuera tarea poco en armonía con el linaje de la presente obra la detallada enumeración de los impuestos creados o simplemente recargados durante el período que tratamos de

sinetizar. Reduciendo, pues, nuestras referencias a las reformas de mayor relieve, recordaremos: la relativa al ramo de minería y su imposición, de 6 de Julio de 1859; la creación por la Ley de Presupuestos de 25 de Junio de 1864 de un impuesto sobre los viajeros de los ferrocarriles; las bases para una imposición sobre caballerías y carruajes de lujo formuladas por la Ley de Presupuestos de 1867-68; la creación de la contribución sobre cédulas de empadronamiento (Ley de 8 de Junio de 1870); el impuesto sobre la sal, establecido el 26 de de Junio de 1874, y los arbitrios y recursos extraordinarios, como los donativos forzosos, anticipos exigidos a los contribuyentes (fué famoso el decretado por el Ministro señor Doménech en 1854), venta de minas, como las de Falset, Hellín y Río Tinto, desamortización civil y eclesiástica y empleo inmoderado del crédito.

Pero la apelación a tales medios no logró cubrir el constante déficit presupuestario. Desde 1845 a 1854 llegó a un promedio anual de 100 millones de reales. El bienio progresista (1854-56) aumentó el desnivel a unos 250 millones. La *Unión liberal*, que puso en práctica el cómodo expediente de recurrir a los *Presupuestos extraordinarios* para cohonestar el empleo del crédito, gastó anualmente unos 500 millones más de lo que las contribuciones producían, y desde 1868 a 1874, el déficit anual osciló entre 200 a 349 millones de pesetas. En su consecuencia, el Ministro Sr. Camacho pudo calcular que el déficit de los Presupuestos desde 1850 hasta el ejercicio de 1870-71 sumaba la cantidad de 1.811 millones de pesetas; que la Deuda flotante ascendía a 668,500.000 y la del Estado y del Tesoro a 10.882 millones de pesetas. Durante el reinado de Alfonso XII tan sólo se logró enjugar fugazmente el déficit, pero en el ejercicio económico de 1884 1885 excedieron los gastos de 893 millones de pesetas, mientras los ingresos no llegaron a producir 793.

Mas con ser ya tan grande la endémica desproporción entre los recursos y las necesidades, fué todavía de peores consecuencias el defectuoso sistema de orientar y estructurar el Presupuesto español. Sorprende en primer término al repasar el proceso de los gastos públicos durante el si-

glo XIX, el vertiginoso incremento de los mismos. En efecto, durante los primeros años de la aludida centuria, elevábanse los gastos ordinarios a unos 150 millones de pesetas anuales (en 1802 se fijó el Presupuesto en 647 millones de reales); pero en el espacio de cuarenta y cinco años se duplica (en 1845 ascendieron los gastos a 296.094.093 pesetas); pasados otros quince años vuelve a duplicarse (en 1860 se elevaron a 547.823.619 pesetas), y llegados a 1890 resultan seis veces mayores que los de 1812 (en el ejercicio de 1891-92 ascendieron a 920 millones de pesetas<sup>1</sup>). Analizados los gastos del aludido presupuesto de 1891-92 se obtiene el siguiente cuadro:

Concepto	Partidas	Tanto por %
Deuda pública y gastos de justicia . . . . .	291.539.593 ptas.	31'69
Clases pasivas civiles . . . . .	14.643.672 "	1'63
Organización política (Rey, Cortes, Presidencia Consejo y Ministerio de Estado) . . . . .	17.771.614 "	1'97
Gastos militares . . . . .	227.097.839 "	24'67

1. La suma 920 millones se obtiene computando además de los gastos ordinarios los 50 millones del Presupuesto extraordinario autorizado por la Ley de 14 de Julio de 1891.

Como gráfica expresión del creciente desarrollo de los gastos públicos desde el siglo XVII, insertamos el siguiente cuadro:

Años	Gastos públicos Pesetas
1600 (Felipe III)	33.105.187,50
1665 (Felipe IV)	45.168.979,00
1667 (Carlos II)	48.248.000,00
1737 (Felipe V)	83.985.745,00
1755 (Fernando VI)	94.479.600,00
1788 (Carlos III)	215.292.934,00
1798 (Carlos IV)	628.449.792,00
1812 (Cortes de Cádiz)	300.000.000,00
1817 (Fernando VII)	178.493.400,00
1820-21 (Segunda época Constitucional)	175.700.576,00
1825 (Vuelta del absolutismo)	128.789.214,00
1835 (Tercera época constitucional)	223.746.158,00
1845 (Reformas de Mon)	296.094.293,00
1855 (Situación progresista)	374.560.093,00
1860 (Unión liberal)	547.823.619,00
1870-71 (Amadeo I)	718.040.628,00
1875-76 (Restauración borbónica)	638.120.001,00
1885-86	897.146.890,00
1891-92	920.000.000,00

Concepto	Partidas	Tanto por %
Administración de justicia, servicios de seguridad y policía . .	37.805.663 ptas.	4'20
Culto y clero católicos . . . .	41.215.257 "	4'48
Gobernación, gastos generales, Correos y Telégrafo . . . .	27.501.666 "	2'99
Beneficencia . . . . .	1.102.841 "	0'12
Instrucción pública . . . . .	12.708.518 "	1'39
Obras públicas e intereses materiales . . . . .	78.358.151 "	8'40
Administración de la Hacienda .	167.915.618 "	18'25

De la consideración del cuadro precedente pueden deducirse estas consecuencias: 1.º—Qué sólo para atender a compromisos del pasado tiene el Presupuesto que consignar cerca de la tercera parte de los recursos disponibles.—2.º—Que sumadas las atenciones de la Deuda a los gastos militares, arrojan la cantidad de 518 millones, o lo que es lo mismo, más de la mitad del total del Presupuesto, y 3.º—Que si a los aludidos 518 millones añadimos los 167, casi 168, a que asciende el coste de la administración de la Hacienda, alcanzamos la cifra de 686 millones, que se gastan sin que el Estado haya consagrado ni una sola peseta todavía a cumplir los fines esenciales a que es llamado, debiendo reducirse a 254 millones para atender a la administración de justicia, al fomento de las obras públicas, a la instrucción en todos sus grados, etc., etc. “He aquí— dice el Sr. Piernas y Hurtado — como el cargo de excesivo que puede hacerse a nuestro Presupuesto es menos grave que el que resulta contra él por la mala distribución y el empleo que recibe”.

Los consuetudinarios agobios del Erario obligaron a los titulares de la cartera de Hacienda durante los primeros años de la Regencia a discurrir arbitrios ingeniosos que, reduciendo el déficit, no implicasen nuevas cargas directas o inmediatas para el contribuyente. Así, el Ministro Sr. Camacho, obtuvo 90 millones reuniendo en la Caja general del Tesoro las tres especiales del Consejo de redención y enganches, Consejo de premios a la Marina, y Obra pía de Jerusalén; y López



Puigcerver, sucesor de aquél, al elaborar el proyecto de Presupuestos para 1887-88 arrendó la renta de Tabacos a una Compañía privada, a quien vendió las existencias acumuladas en las Fábricas del Estado, cifrando el ingreso extraordinario por tal motivo en 40 millones de pesetas. Ello no obstante, el desnivel entre ingresos y gastos siguió cada vez más acentuado, y como se tuvo siempre el hipócrita designio de encubrirlo o disimularlo, se apeló, a pesar de las limitaciones impuestas por la ley, a los abusivos *suplementos de crédito*, *créditos extraordinarios* y *transferencias de crédito* decretados por los Gobiernos, que así falseaban el régimen constitucional y fomentaban el desorden rentístico.

El Presupuesto de 1889-90 tuvo, un gasto por ampliación de créditos de 24 millones. El de 1890-91 aumentó por igual motivo 14 millones, y con harta frecuencia no han importado menos tales ampliaciones en ejercicios sucesivos. Avenido al Poder el partido liberal, el Sr. Gamazo encargado de la cartera de Hacienda, consiguió que en el Presupuesto para 1893-94 se redujeran los gastos en unos 32 millones y medio, y unida tal economía a un discreto aumento del tributo que pesaba sobre los inmuebles urbanos y a un mayor celo recaudatorio, logró interrumpir la tradición del déficit crónico y liquidar el ejercicio económico de 1893-94 con cerca de 29 millones de superávit. En cambio, la liquidación del ejercicio de 1894-95 arrojó un exceso de 25 millones de pesetas en los gastos, bien es verdad que pasaban de 48 lon invertidos en diversas amortizaciones de la Deuda pública. La liquidación del Presupuesto para 1896-97 tampoco fué adversa, pues el aumento en la recaudación de la mayor parte de los tributos, singularmente del que procedía de la redención del servicio militar (en años normales producía 9 millones; pero la guerra de Cuba y Filipinas le hicieron llegar a 30 millones en el año económico de 1895-96, y a 42 en el de 1896-97), permitió dar algún margen al optimismo. Llegados al año económico de 1898-99, aunque los gastos siguieron en aumento, los recursos transitorios de que por razón de la guerra se hizo uso, permitieron limitar el déficit a 34 millones. Pero el término de nuestras contiendas coloniales y el de la sostenida con los

Estados Unidos, nos llevó a la precisión de allegar por medio de nuevos arbitrios la suma de 300 millones más sobre los 750 que rendían anualmente los recursos permanentes de la Hacienda española. Logro realizar la deseada nivelación el Ministro Sr. Fernández Villaverde mediante el refuerzo de los ingresos del Fisco, la desgravación de la anualidad pagadera a los acreedores y la consolidación de la mayor parte de la Deuda del Tesoro, por lo que el Presupuesto de 1900, que se liquidó con 966.930.693 de ingresos y 878.544.372 de gastos alcanzó, como se ve, su superávit de 88.386.320 pesetas.

En punto a la Deuda pública durante el período comprendido entre 1833 y 1902 habrá de recordarse que la que pesaba sobre el Estado en los últimos años del reinado de Fernando VII ascendía a 18 mil millones de reales. Desde 1835 hasta 1840 los apremios de la guerra civil obligaron a nuestros Gobiernos a frecuentes emisiones de nuevos títulos, pero como se realizaron también distintas amortizaciones y reducciones quedó en 1839 reducida a 11.300 millones, cuyos intereses no se satisfacían. En 1841 el Ministro de Hacienda Sr. Gamboa consolidó mil millones de intereses atrasados del 4 y 5 %, originando la Deuda del 3. Aunque el Sr. Mon fué autorizado en 1845 para realizar un arreglo general de la Deuda, no puso mano en el asunto, correspondiendo los honores y las censuras de tal obra al Sr. Bravo Murillo. Halló éste la cuestión planteada en términos harto difíciles. Una caótica masa de títulos de la Deuda, desorientaba y confundía hasta a los hombres más expertos en materia financiera. Un atraso que databa de 1835, en el abono de los intereses de la Deuda exterior, había puesto nuestro crédito por los suelos, y un Presupuesto desnivelado, con una Deuda flotante de 500 millones, no daba ciertamente el menor margen a la esperanza de un discreto arreglo. No obstante esto, Bravo Murillo acometió la empresa. Clasificó la Deuda en tres grupos: *del Estado*, *del Tesoro*, y *de Obras públicas*. En la del Estado distinguió la *Perpetua*, que unificó convirtiendo la del 4 y 5 % al tipo del 3 %, y la *Amortizable*, que no gozaba interés. La del *Tesoro* fué dividida en *Deuda del material*, que comprendía la Deuda flotante contraída desde 1.º de

Mayo de 1828 hasta 31 de Diciembre de 1849 y los débitos correspondientes a la misma época, y *Deuda del personal*, que abrazaba las obligaciones procedentes de haberse atrasado. Por último, con los títulos correspondientes a los empréstitos contraídos para la realización de Obras pública, se formó la Deuda que tomó tal nombre.

El nuevo arreglo, que tuvo como normas las leyes de 1 y 3 de Agosto de 1851, fué discutidísimo, llegándose a decir de él, que no hizo sino dar forma legal a la bancarrota. Los acreedores extranjeros, a quienes se les invitaba a convertir sus títulos del 4 y 5 por los del 3 %, y a quienes, además, se le reducía a 50 % el importe de los cupones vencidos y no satisfechos desde 1835, protestaron airadamente. Asimismo, los poseedores de amortizables iniciaron y prosiguieron en años sucesivos una serie de campañas para asegurar el reembolso de sus capitales; y todo ello vino a parar en un quebranto de nuestro nombre y en una serie de acuerdos lesivos en su mayor parte a nuestros intereses. Justo es, con todo, decir, que en el laudable empeño de unificar la Deuda española, las iniciativas de Bravo Murillo representaron un gran paso.

Al estallar la Revolución de 1868, el capital nominal de la Deuda no bajaba de 3.390 millones de pesetas (de Exterior, 1.875 millones; de Interior, 1.515 millones). Durante el reinado de Amadeo de Saboya aumentóse la cifra en 1.575 millones. La República, a su vez, emitió 1.403 millones de Títulos de la renta. En Junio de 1874 el total de la Deuda era de 10, mil millones y medio, y a fines de 1881 importaba unos once mil.

El 9 de Diciembre del citado año de 1881, el Ministro Sr. Camacho llevó a cabo dos operaciones afortunadísimas mediante la creación de Deuda del 4 % para la conversión de la Interior y de la consolidada Exterior. El resultado de ambas fué la reducción de la Deuda del 3 % en circulación, que ascendía a 9.548.767.004 pesetas, a 4.224.771.000, es decir, una aminoración en el capital de la Deuda de 5.323.996.004 pesetas

Una nueva emisión de Amortizable al 4 % por valor de 250 millones, autorizada por la Ley de 14 de Julio de 1891,

y la reducción de los restantes factores de nuestra Deuda, permiten cifrar ésta a fines del citado año en 6.402.250.800.

Finalmente, el Sr. Fernández Villaverde operó reducciones considerables en la Deuda pública, tan sobrecargada por los gastos de nuestra última guerra colonial, valiéndose del cercenamiento en el abono de las amortizaciones, de la asimilación de las Deudas coloniales a las de la metrópoli y del gravamen fiscal uniforme del 20 % sobre los intereses del papel del Estado.

**97. Relaciones entre el Estado y la Iglesia.**—Al morir Fernando VII dejando planteada la grave cuestión sucesoria que había de entenebreecer las páginas de nuestra Historia contemporánea, el panorama político español ofreciase dividido entre los elementos *realistas*, casi en masa afiliados a la causa de don Carlos, y los *liberales*, adictos con mayor o menor sinceridad al Trono de Isabel II y a la Regencia de Doña María Cristina. Planteado así el problema, las potencias europeas de tradición francamente absolutista, como Austria y Prusia, se abstuvieron de reconocer como Soberana legítima de los españoles a la hija de Fernando VII, y el Pontífice Gregorio XVI, sugestionado por Austria, y dejándose además llevar de sus naturales inclinaciones, aunque blasonando de neutral en la contienda entre carlistas e isabelinos, de hecho se sintió atraído hacia la parcialidad del Infante. Tal actitud, que en los primeros meses del reinado de Isabel II no podía tener mayor fundamento que el que le prestara la mera sospecha de que la consolidación de los derechos de la Corona de esta señora había de realizarse mediante la alianza del Trono con los elementos constitucionales, hubo naturalmente de acentuarse cuando la realidad se encargó plenamente de confirmar aquel presagio. Por ello, al suceder en las esferas del mando a los eclecticismos de Zea Bermúdez criterios cada vez más acusados en pro de las ideas avanzadas, la actitud de la Corte romana creció respecto de la española en intransigencias y adusteces, y como en ellas veían los partidos extremos del liberalismo los más claros testimonios de las simpatías del Pontífice en pro de don Carlos, y aun los más vivos estímulos para vi-

gorizar la belicosidad de las facciones absolutistas, so pretexto de tomar la defensiva frente a tal actitud, apelaron al expediente de cerrar por sistema contra cuanto significase autoridad espiritual del Padre Santo o interés temporal del clero, que en su mayoría y con su actitud francamente favorable al Infante sublevado, no dejó de dar argumentos de alguna fuerza a quienes aspiraban a combatirlo y anularlo.

Por tales motivos, desde 1834, se acentuó en las decisiones del Gobierno y en las hostilidades, en ocasiones aborrecibles, de los elementos más exaltados del liberalismo, la enemiga contra el clero. La matanza de los frailes en Madrid durante la luctuosa jornada del 17 de Julio (1834), el saqueo e incendio de los conventos en Barcelona, Murcia, Zaragoza y Reus el año de 1835; las medidas dictadas por los Gabinetes de Martínez de la Rosa, Toreno, Mendizábal y Calatrava disolviendo cenobios tachados de carlistas, extinguiendo la Compañía de Jesús, decretando como medida general la supresión de todos los conventos establecidos en territorio nacional y la incautación de sus bienes, suprimiendo el diezmo y declarando bienes nacionales los del clero secular, no fueron sino testimonio de aquella animadversión contra quienes, si en algún respecto habían a ella dado margen, en otros no significaban sino la tenencia material de una riqueza, que la revolución política y económica apetecía para consolidar su triunfo.

En tales circunstancias y teniendo la Santa Sede, de un lado, y los Gobiernos españoles de otro, motivos de tanta monta para mostrarse recíprocamente agraviados, harto puede comprenderse que el estado de sus relaciones diplomáticas no podía ser menos cordial. Negábase el Pontífice a reconocer a Isabel II pretextando que tenía que estudiar con todo detenimiento las razones que alegaban para no hacerlo naciones como Austria y Prusia; instaban nuestros Gabinetes al Papa para que rectificase tal actitud, y, entre tanto, la necesidad de proveer algunos obispados en nuestro país colocaba a Roma en condiciones de, o desatender los intereses espirituales de la católica España o, al resol-



verse satisfacerlos, tener que acceder al nombramiento de los Obispos que en uso del Regio Patronato designase y presentase Isabel II, lo cual suponía un reconocimiento implícito de la legitimidad de ésta. Para hacer compatible la satisfacción de aquella necesidad con el deseo de seguir manteniendo la aparente equidistancia entre doña Isabel y don Carlos, apeló el Papa a la especiosa fórmula de nombrar a los Obispos sin propuesta, y de reconocer, ello no obstante, el derecho que tenía España al Regio Patronato, pero sin confesar que éste pudiera ser ejercido por la hija de Fernando VII. Como era lógico, nuestro Gobierno no quiso aceptar tan sofisticado acomodo, y como la Corte romana se negó a pasar por otro, los Obispos presentados por la española quedaron sin confirmar, dejando de proveerse sedes que, desde 1833, estaban vacantes. De tan anómala situación aspiraron, con mejor deseo que fortuna, a hacer salir a España los hombres afiliados al moderantismo que formaron la mayoría del Ministerio de Pérez de Castro el año de 1839, los cuales, fundadamente pudieron alegar entonces ante el Papa, no sólo sus gestiones para mejorar la situación del clero, procurando mitigar los resultados de pasadas arbitrariedades, sino el rotundo triunfo representado por el Convenio de Vergara, que venía a resolver definitivamente la cuestión dinástica a favor de Doña Isabel II. Contra lo que pudiera creerse, tales argumentos no hicieron mella en el obstinado Gregorio XVI, que siguió aferrado a la idea de no dar un solo paso que pudiera suponer reconocimiento en pro de la Reina hasta que Austria tomara la iniciativa en tal respecto. Advenidos al Poder por causa de la Revolución de 1840 los partidarios del progreso, prescindieron, no sin ciertos temores a la opinión católica del país, de la autoridad eclesiástica al adoptar algunas medidas sobre arreglos parroquiales y proceder al nombramiento de don Valentín Ortigosa como encargado del gobierno eclesiástico del Obispado de Málaga. Produjeron estas medidas la airada protesta del vicergerente de la Nunciatura Sr. Ramírez de Arellano, al que las autoridades extrañaron del Reino, añadiéndose a tal medida de rigor el cierre de la Nuncia-

tura y la suspensión del Tribunal de la Rota. Ante tamañas violencias, articuló el Pontífice severa alocución recapitulando las demasías cometidas por los Gobiernos liberales españoles contra los sagrados intereses de la Iglesia, y, por su parte, el Ministerio progresista de Septiembre de 1841, rectificó la política contemporizadora de los moderados de 1839 y 1840, volviendo a declarar nacionales los bienes del clero secular, ordenando su venta, e imponiendo el destierro a algunos eclesiásticos. Así las cosas, el pronunciamiento de 1843 dió al traste con la Regencia del Duque de la Victoria, haciendo posible el acceso al Poder a los representantes de las ideas conservadoras que, como se esperaba, pusieron especial ahinco en llegar a un pacífico acomodo con el Padre Santo. Para ello fué encargado el Sr. Castillo y Ayensa, agente de preces en Roma, de entablar relaciones con la Corte pontificia a fin de hacerla entrar en tratos con la nuestra y conseguir el ansiado reconocimiento de la Reina. Tras de vencer la obstinada resistencia opuesta por el Cardenal Lambruschini, Ministro de Negocios extranjeros del Papa, logró nuestro agente hacer llegar a sus manos una que llamaba Pro-memoria, destinada a impetrar perdón por los pasados desvaríos revolucionarios y a poner de manifiesto cómo las determinaciones del Gobierno de Madrid restableciendo el Tribunal de la Rota, levantando la prohibición de conferir órdenes religiosas y facilitando la vuelta de los Prelados a sus diócesis, con más su designio de suspender la venta de los bienes del clero secular y de las monjas y de devolver los no vendidos todavía, le hacían acreedor a que la Corte romana le dispensase la merced de entablar una franca y generosa negociación con los representantes de S. M. Católica. Para robustecer tal súplica, el 13 de Agosto de 1844 el Ministerio presidido por Narváez acordó la susodicha suspensión de venta de bienes y nuestro Embajador en París Sr. Martínez de la Rosa se puso en comunicación con monseñor Fornari, Nuncio de Su Santidad en Francia, reiterando con algún vigor los deseos del Gabinete español. Todo fué, sin embargo de ello, inútil, pues sometido Gregorio XVI a la tutela de Austria, y disgustada

a la sazón esta potencia por haber reconocido el Rey de Nápoles a Isabel II, el apetecido acomodo encontró el peor ambiente para ser llevado a efecto.

No experimentaron cambio alguno los términos de la cuestión mientras ciñó la tiara Gregorio XVI; pero muerto éste y elevado al solio Pontificio Pío IX, las condiciones personales del nuevo Papa y la intensa conmoción que hubo de producirse en el continente el año de 1848, facilitaron la solución del espinoso asunto. En efecto, a mediados de 1847 envió Pío IX a Madrid como Delegado apostólico a monseñor Brunelli, y sus buenos oficios, unidos a la excelente disposición de nuestro Gobierno, demostrada con actos que no daban margen a duda, produjeron como consecuencia el que se constituyera en 1848 una Junta integrada de representantes del Delegado pontificio y del Gabinete, cuya labor, discutida después en Roma y en Madrid, constituyó al fin el Concordato de 17 de Octubre de 1851, perfeccionado y publicado cuando se hallaba ya al frente de los destinos del país el Ministerio presidido por el Sr. Bravo Murillo. Reconocía tal pacto solemne que la Religión católica era y sería la única y exclusiva de los españoles; investía a los Prelados de la alta inspección sobre todos los Establecimientos de instrucción de la juventud; establecía una nueva división y circunscripción de diócesis, suprimiendo algunas, creando otras, como la de Madrid, Ciudad Real, Vitoria y Ceuta, y trasladando de un punto a otro algunas sillas episcopales; designaba un coto redondo para las Ordenes militares, coto que sería gobernado por un Prior con carácter episcopal; suprimía todas las jurisdicciones privilegiadas y exentas, menos la del Nuncio en la Iglesia y Hospital de los Italianos, la del Pro-capellán mayor de Palacio, la castrense, la de los Prelados regulares y la de las Ordenes militares; fijaba el número de capitulares y beneficiados de las Iglesias metropolitanas, la dotación del clero y los gastos para el culto; declaraba el derecho que asistía a la Iglesia de adquirir por cualquier título legítimo, obligándose en cambio el Papa a reconocer la venta de los bienes del clero hasta entonces realizada y comprometíase nues-

tro Gobierno a tomar las disposiciones convenientes para que se establecieran donde fuera necesario, oyendo previamente a los Prelados diocesanos, casas y Congregaciones de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra Orden de las aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirían de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para otros usos piadosos.

Sobrevenida la Revolución de 1854 e iniciado el bienio liberal, decretaron las Constituyentes una nueva Ley de desamortización, que, no obstante la repugnancia de la Reina a sancionarla por estimar que vulneraba el espíritu y la letra del reciente Concordato, adquirió pleno vigor el 1.º de Mayo de 1855. Indignado el Pontífice por la conducta de nuestro Gobierno, formuló reiteradas reclamaciones, que no habiendo sido atendidas por éste, motivaron la grave resolución de solicitar el Nuncio sus pasaportes y de retirarse de Madrid. Duró la ruptura de relaciones hasta el advenimiento al Poder del Ministerio Narváez-Nocedal (Octubre de 1856) que se apresuró a derogar la Ley desamortizadora, de Mayo del 55, y cuantas podían causar el menor enojo en Roma, permitiéndole esta conducta al abrir las Cortes el 1.º de Mayo de 1857 insertar en el discurso de la Corona el siguiente párrafo: "Se ha establecido en toda su fuerza y vigor, como lo exigía mi palabra Real y mi religiosidad, el Concordato celebrado con la Santa Sede, y se han dictado además otras disposiciones para restituir a la Iglesia aquella libertad con que la dotó su Divino Fundador, y que tan acatada ha sido en todos los tiempos por el religioso pueblo español y por mis gloriosos progenitores".

Tras la dominación moderada, que duró hasta el 30 de Junio de 1858, empuñó las riendas del Poder la agrupación política que bajo el caudillaje del general O'Donnell tomó el nombre de *Unión liberal*. El Ministerio entonces formado envió a Roma como Embajador al célebre jurisconsulto don Antonio de los Ríos y Rosas a fin de obtener la aquiescencia pontificia para reformar el Concordato de 1851 y llevar a debido cumplimiento la ley de 1855, motivadora del anterior rompimiento entre las dos Cortes. Aunque difícil en

grado extremo la misión confiada a Ríos Rosas, logró salir de ella con el mayor éxito, pues a base del reconocimiento formulario del pleno derecho que tenía la Iglesia a adquirir y conservar toda clase de bienes, obtuvo por el Convenio firmado el 25 de Agosto de 1859 la autorización para vender todos los bienes eclesiásticos, indemnizando a sus poseedores por medio de inscripciones de la Deuda consolidada.

Pasados unos cuantos años, en el de 1865, el envío del *Syllabus* a los Obispos sin que la Corte romana se preocupase de obtener la obligada autorización de nuestro Gobierno, produjo, siendo Presidente del Consejo el general Narváez, un nuevo rozamiento, resolviéndose la delicada cuestión planteada, por medio de la inserción en la *Gaceta* de la Bula *Quanta cura* y del *Syllabus*, acompañados de un preámbulo en que se declaraba en vigor la Pragmática de 1768 (que prohibía la circulación de las Letras Apostólicas sin haber sido revisadas por la autoridad española), pero procediendo a armonizarla con los derechos de la Santa Sede y con la libertad de imprenta.

Triunfante la Revolución de 1868, nuevamente se vió interrumpida la cordialidad de relaciones entre Roma y España. La Constitución de 1869 proclamó la libertad de cultos, la Ley de 1870 estableció el matrimonio civil, y los hombres que por entonces usufructuaron el mando, violentaron la voluntad del Papa al tratar de proveer las Sedes episcopales con elementos afiliados al bando liberal. Verificada la Restauración, normâlizóse la comunicación con Roma, acreditándose cerca del Padre Santo un Embajador especial, distinto del destinado a ostentar nuestra representación cerca del Rey de Italia; pero la aprobación de la Base Constitucional relativa a la Religión y formulada en el artículo 11 del Código fundamental de 1876, a tenor de cuyo apartado segundo, nadie sería molestado en territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana, motivó hondo disgusto al Pontífice que puso el mayor ahinco en restablecer en tan importante extremo la fórmula constitucional de 1845, es decir, la de la catolicidad del Es-



tado español sin concesiones que adulterasen la unidad religiosa del país.

Tras de tales episodios de nuestras relaciones con la Santa Sede, volvió a plantearse en las prostrimerías de la Regencia de doña María Cristina de Austria (Septiembre de 1901) la batallona cuestión de la legalidad e ilegalidad de las Ordenes religiosas. El Ministro de la Gobernación don Alfonso González refrendó un Real Decreto (19 de Septiembre) por el que se concedía un plazo de seis meses para que las Asociaciones ya creadas y comprendidas en los preceptos de la Ley de 30 de Junio de 1887 se inscribiesen en el Registro correspondiente de los Gobiernos de provincia; pero como el artículo 2.º de la citada Ley exceptuaba de sus disposiciones a las Asociaciones autorizadas por el Concordato y en éste se aludía a las de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra Orden de las aprobadas por la Santa Sede, tratábase de dilucidar si el citado Concordato autorizaba la vida legal de tres Congregaciones solamente, o si no ponía límite a tal establecimiento. Sobre tan interesante cuestión se expusieron opiniones para todos los gustos, prevaleciendo de la sostenida por el Ministro demócrata Sr. Canalejas el criterio de transigencia de la mayoría del Gobierno, criterio del que fué cumplido testimonio el *Modus vivendi* convenido el 7 de Mayo de 1902 entre el Nuncio de Su Santidad y nuestro Ministro de Estado, comprensivo de los siguientes extremos: 1.º)—Manteniendo la Santa Sede siempre firme su tesis de que las Comunidades religiosas que han obtenido la aprobación del Gobierno deben ser de hecho consideradas como autorizadas por el Concordato, y sosteniendo el Gobierno criterio opuesto, la misma Santa Sede consiente en discutir tal punto, de conformidad con el artículo 45 del Concordato.—2.º)—Las Comunidades religiosas hasta ahora no autorizadas por el Gobierno no tendrán que cumplir otra formalidad que la inscripción civil, que no podrá ser negada, y 3.º)—Cumplido este requisito, se considerarán como reconocidas por el Gobierno, y en tal concepto se comprenderán en la clase de las anteriores.

Como se ve, aspiró el Gobierno a consignar dos criterios

totalmente antitéticos: el del Concordato y el de la Ley de Asociaciones ampliamente interpretada. La imposibilidad de lograrlo, motivó en el Parlamento las siguientes frases del Sr. Maura, que acertaron a sintetizar el estado de la cuestión: “De todas maneras — dijo el ilustre orador, — siempre resultará que es menester tomar uno de los dos partidos para resolver la cuestión: o seguir la política del Concordato con la Santa Sede, o atenerse a la política de la Ley de Asociaciones. Vosotros habéis querido promiscuar las dos políticas, simultaneando los inconvenientes de la impotencia senil con las imprudencias y temeridades de la más bulliciosa y bullanguera juventud, y todo puede ser menos eso”.

### III.—LA VIDA ECONOMICA NACIONAL (1833 - 1902)

**98. La Agricultura.**—Con referencia al aspecto de nuestros campos al promediar el siglo XIX, nos ha legado el ilustre don Fermín Caballero una valiosa descripción, tan verídica como perfectamente estilada<sup>1</sup>. Aunque, como observa el esclarecido conquense, la agricultura patria había mejorado notoriamente, su atraso general respecto a países más civilizados era indudable. Bastaba examinar el mapa de nuestro territorio para convencerse de la inferioridad española en tan fundamental respecto de la pública riqueza. En unas partes, poblaciones de miserables viviendas donde se amontonan los campesinos, que para labrar su término, tienen que andar diariamente una, dos y tres leguas; en otras, desiertos extensos, incultos o casi vírgenes, sin una casa ni señal alguna de que sean propiedad de gentes cultas; aquí, montes talados o descuajados de mano airada, presentando el desorden de una devastación vandálica; allí, terrenos del común o de ningún, sin lindes ni mojoneras. De un lado, barbechos, que parecen sembrados, porque la labor se ha reducido a una arañadura engañosa, que únicamente vale para facilitar el des-

1. *Fomento de la población rural de España*, segunda edición. Madrid, 1863.

arrollo de la grama y hierbas espontáneas; de otro, descolando entre las mieses de cereales cardos, amapolas, neguillas, fustas y maleza, que los ahogan y consumen. Acá, rebaños que se mueren de hambre en anchurosos campos sin vegetación; acullá, yuntas y caballerías mal cuidadas y peor atalajadas. Y por doquiera, la mayor parte del terreno que se cultiva, en descanso completo por uno y por dos años seguidos; aguas perdidas o torpemente aprovechadas, como quien espera de la acción vital de la naturaleza efectos que debía procurar un trabajo más inteligente y más asiduo.

Agrupando los territorios españoles por razón de sus analogías en punto a la vida rural, establece Caballero los siguientes núcleos: 1.º Provincias Vascongadas, Navarra y Rioja; 2.º Asturias y Galicia; 3.º Cataluña, Aragón y Baleares; 4.º Valencia y Murcia; 5.º Andalucía; 6.º Extremadura y 7.º Castilla y León.

En las Vascongadas, singularmente en Guipúzcoa y Vizcaya, el asiento de la población agrícola es el *caserío*, donde los campesinos viven de continuo, explotando el terreno adjunto, casi siempre unido, a que se añade un trozo de monte más o menos apartado. Casa, heredad, labrantía, monte y ganado constituyen la hacienda rústica de estas provincias. El maíz, como fruto y como forraje, el trigo, la cebada, el centeno, el trébol, la alfalfa, el nabo, la alholva y algún cáñamo y lino alternan interpolándose, a fin de que la tierra siempre esté ocupada; hasta la vid vegeta a fuerza de empeño, y si no sazona el fruto completamente, sirve al menos para el afamado chacolí, que con la sidra de manzanas, suplen al vino. En los montes hay castaños, argomas, helechos y jaras, que proporcionan fruto, combustible, cama y basuras; y es imprescindible el horno de cal, principalmente destinado a sostener, como abono adecuado trienal, la productividad de la hacienda. Aranse los campos con ganado bovino y vacuno y para las labores se sirven los labriegos de la pala o *laya*. Aunque la mayoría de los caseros son arrendatarios, trabajan la tierra como si fuera propia, pues viven confiados en la permanencia que consuetudinariamente tienen los arriendos. Alava y Navarra cuentan con menos caseríos

y con más lugarcillos agrícolas compuestos de pequeño número de casas, y la propiedad aparece muy subdividida en la primera. En la provincia de Logroño los núcleos de población agraria son más crecidos y la abundancia de sus cereales, vinos, hortalizas y frutas es, realmente, extraordinario.

En Galicia, Asturias y la montaña santanderina se halla, por lo general, muy diseminada la población agrícola, ya en casas sueltas de labor, ya en grupos diminutos de cuatro a cinco viviendas, ya en reducidas *aldeas* y lugares. Esta atomización de la población rural aparece como nota más peculiar de Galicia que de las otras regiones análogas. Asimismo es característico de aquélla el tipo de *casa solariega*, con tierras en sus inmediaciones que de ella dependen y caseros que las trabajan. En la mayor parte de los concejos asturianos se siembra el trigo, alternando con el maíz y las judías, siendo el barbecho una excepción reservada para las tierras de ínfima clase. En Galicia prevalece el sistema de año y vez, y la siembra se hace a dos manos u hojas, destinando la una a lo que llaman fruto o paja blanca (trigo, centeno, avena y cebada) y la otra al maíz, nabos, patatas y legumbres. Cada familia cultiva por término medio unas diez hectáreas (tres de cereales y huerta, una de prados y seis de monte); pero se hallan las tierras a tal punto desunidas, que en regadío las hay hasta de 25 centiáreas, y en secano desde una a 25 áreas, mereciendo la consideración de buenas parcelas las que llegan a medir una o dos hectáreas. Un factor jurídico ha venido a fomentar la extraordinaria división de la tierra gallega: el *foro* y su filial el *subforo*, que tan perturbadora influencia han ejercido en la vida agraria de las provincias del N. O.

Cataluña, Aragón y las Baleares constituyen el tercer grupo formado por tradiciones comunes y por analogía en el modo de vivir las familias agrícolas. Aunque éstas no se hallan tan perfectamente distribuídas como en Vizcaya, Guipúzcoa y Galicia, lo están mejor que en la mayor parte del resto de España, a lo cual han contribuído dos instituciones peculiares: el Fuero de Monzón de 1585, que limita la legítima

de los hijos a la cuarta parte, y el catastro territorial, que existe desde 1715. Por la mayor parte de sus términos hay caseríos y labores sueltos, ya con el nombre de *juber*as, *granjas*, *masías*, *cuadras* y *alquerías* cuando se emplean en el cultivo ordinario, ya con el de *torres* si están destinadas también al recreo. La variedad del clima de las cuatro provincias catalanas permite que en ellas se produzcan desde el limonero, el naranjo, la palmera y el algarrobo, que crecen en el litoral, hasta los bosques de pinos, abetos y alcornoques, que tan nutrida representación tienen en la banda del Pirineo. Abundan en el Priorato el almendro y el avellano; el olivo en el Ampurdán, y el trigo en el llano de Urgel. En la provincia de Barcelona se cultiva el viñedo así como en Tarragona, donde a beneficio del clima abundan también frutas, hortalizas, legumbres y granos. En la provincia de Gerona y sobre todo, en el Ampurdán, se sigue la práctica de año y vez donde faltan abonos, pero en los campos que pueden beneficiarse, hay sucesión de cosechas, alternando los cereales y las legumbres. El sistema general que se observaba en el modo de llevar las fincas era el arriendo a parte de frutos, dos tercios para el arrendatario y un tercio para el propietario. En las Baleares existían las llamadas *alquerías*, o sea, heredades cuyos tenedores pagaban al Real Patrimonio un canon anual, y los *casuláns*, compuestos de familias que viven en el campo, bien cultivando pequeñas parcelas, bien como colonos o aparceros. En las provincias aragonesas, más de la mitad de las poblaciones tienen menos de cuarenta casas. En la de Zaragoza, cerca de la mitad de los pueblos disfruta de riego, distinguiéndose los fértiles valles y huertas de la Almunia, Ateca, Borja, Calatayud, Daroca y Tarazona, con la llanura de Caspe. La provincia de Teruel, aunque es quebrada, cuenta con las llanuras que forman los campos de Cella, Monreal y Visiedo y la mayor parte de lo que se dice *Tierra baja*. Huesca disfruta en su banda meridional terrenos como los Monegros de gran producción de cereales. Por todo el Aragón alto y bajo se producen abundantes cosechas de cereales y legumbres, de vino, de aceite, de cáñamo y lino y de frutas.



Las provincias de Valencia y Murcia se caracterizan por el fraccionamiento de la propiedad agrícola, por su excelente sistema de riegos y por la laboriosidad e inteligencia de los labradores. Habitan éstos en los pueblos, que suelen distar pocos unos de otros, y en medio de la huerta, donde ocupan las típicas barracas valencianas. Mientras los terrenos murcianos son de mucha miga exigiendo labor honda, los de la huerta valenciana son poco profundos y requieren labor somera, por lo que los campesinos los trabajan con el *horcate* o arado ligero, la *azada* y el *legón*. La provincia de Alicante es riquísima en contrastes, siendo frecuente que el monte empinado, la horrible barrancada y el delicioso jardín, se den en relativo corto espacio. Cautiva por modo especial la atención de quien observa la huerta valenciana y el trabajo de sus cultivadores, la constante preocupación de éstos por planear o nivelar el terreno para el mejor aprovechamiento de las aguas, preocupación que patentizan los numerosos bancales contruídos en las zonas más accidentadas. Asimismo, acredita la inteligencia de tan activos campesinos la insistencia con que recogen y multiplican los abonos: “Niños con capazos—dice Caballero—recorren los caminos por donde andan caballerías, y no hay labrador que deje de tener cerca su muladar donde amontona hierbas, despojos y desperdicios, y donde toda la familia acude a sus menesteres aunque tenga que venir desde lejos”. Finalmente, si en los terrenos murcianos y valencianos de regadío es objeto de verdadera solicitud el cuidado de acequias y partidores y materia de inflexible ordenanza el turno y policía del riego, en los de secano de Alicante y Murcia se ponen las esperanzas casi exclusivamente en las lluvias, que cuando no se dan, mueven a los pueblos a impetrarlas por medio de novenarios y rogativas.

Las ocho provincias de Andalucía que anteriormente formaron los cuatro reinos de Córdoba, Jaén, Sevilla y Granada, tienen también su fisonomía peculiar desde el punto de vista agrícola. Dase en ellas la influencia de un cielo esplendoroso y de una feracidad de suelo que han contribuído a moldear el carácter del labriego andaluz, dotado de mayor imagina-

ción que laboriosidad. Las poblaciones son pocas y muy crecidas y aun las que modestamente se llaman aldeas cuentan de 150 a 300 casas. Característico del campo andaluz es el *cortijo*, que no suele estar solo, sino en la vecindad de otros más, que con él forman las *cortijadas*. Pero su existencia no supone que en él vivan los trabajadores, porque la mayor parte de éstos habita en los pueblos, trasladándose diariamente al cortijo para entregarse a las faenas campesinas. Aquí, como en otras regiones, la forma jurídica del cultivo es el arrendamiento a corto plazo, pero existe también, y en proporciones notables, el gran cultivo, es decir, la explotación directa de las fincas por los grandes terratenientes. La labor se lleva por punto general a tres hojas, una que se siembra, otra que descansa de rastrojo (llamada *manchón*) y la tercera se barbecha; o lo que es lo mismo, que hay dos años de hueco, por lo que el labrador andaluz necesita el duplo de terrazgo que el del interior y el cuádruple que el del Norte. Realízanse las labores con ganado boyal, pero también se utiliza el mular. Finalmente, se cosechan cereales, legumbres, aceites, vinos y todo género de frutos.

Extremadura es la región donde existe una mayor acumulación de propiedad territorial, donde los pueblos son menores en número y concentran más la población agrícola y donde hay más terreno sobrante y menos casas de labor. El cultivo de los cereales combinado con el de los pastos para el ganado, constituyen nota muy típica de la agricultura extremeña. Lábranse las tierras con reses vacunas y con caballerías. Prevalece en el cultivo el método de año y vez, pero en algunos puntos usan el de tres hojas y aun cuatro, es decir, que, siguiendo éste, se siembra de trigo el primer año, se resiembra sobre el rastrojo en el segundo (cebada, avena, centeno), descansa el tercer año, y al cuarto se labra. Las propiedades rústicas reciben el nombre de *encomiendas*, cuando son heredades que miden millares de fanegas; se llaman *dehesas*, las que tienen un millar; *quintos*, las de quinientas, y *asientos* o *quinterías* las de cien. El mayor número de ellas se disfruta a solo pasto, algunas a pasto y labor,

que suelen explotar cultivadores en grande, pero otras se arriendan a pequeños labradores, reunidos para tal fin.

Las quince provincias de las Castillas y León presentan la tierra muy dividida, los lugares agrícolas son poco numerosos y aparecen muy separados, y los labradores, en su mayoría, tienen que recorrer grandes distancias para trasladarse desde el sitio en que viven a aquel en que tienen la labor. En la provincia de Albacete llaman *aldea* a la casa de campo que algunos ricos propietarios pueblan con sus criados, o que arriendan a colonos de menor fortuna; pero las tierras, en vez de estar en un pedazo unido a la aldea, constan de varias suertes, distantes a veces media legua. Lo mismo sucede con los llamados *rentos* en la serranía de Cuenca. Por otra parte, la casa aldea no constituye la vivienda permanente del cultivador, porque los amos viven en los pueblos, y los sirvientes, vecinos de los mismos, procuran seguir su ejemplo cuantas veces pueden. Con mayor motivo que a las aldeas, cabe considerar como remedo del *caserío* vasco las *tudas* de Zamora y Valladolid, las *quinterías* manchegas y los llamados *sótanos* y *cuevas*, que hay en otros distritos castellanos, menguados albergues sólo provisionalmente habitados por las gentes del campo. El sistema jurídico de cultivo es el arrendamiento a corto plazo, bien pagado en dinero, bien en cantidad fija de frutos, ya mediante la estipulación de algún género de aparcería. Utilízase para la labranza el ganado mular que ha adquirido extraordinario desarrollo. Las provincias de Salamanca, Zamora, Valladolid y Palencia, con la triguera tierra de Campos, están consideradas como de los mejores graneros de España. En Castilla la Nueva gozan igualmente de justo renombre, como centros de producción cerealista la campiña de Alcalá, la Sagra de Toledo y la Mancha alta y baja.

El género de vida, la clase de cultivo y la cantidad de tierra trabajada por cada labrador varía según los lugares. Las gentes de la serranía cosechan más centeno y escaña que candeal y cebada, y cuando no pueden labrar, se dedican al pastoreo de vacas y cabras, a la industria de maderas y resinas o van los hombres a trabajar a otras provincias. En

las tierras llanas el cultivo principal son los cereales, con algún viñedo y olivos en la banda meridional y en los valles de la Alcarria. En la Mancha hay yunta de mulas que labra 89 hectáreas, de las que se siembran 33, se resiembra 12, y las 44 restantes descansan de barbecho. En cambio en Avila, sólo cultiva un labrador lo que llaman una *renta*, que equivale a 36 hectáreas.

En cuanto al valor de las tierras españolas dedicadas a la agricultura y a los rendimientos de las mismas en 1838, las diferencias entre las de unas y otras provincias y aun las que se daban dentro de cada una de éstas era grandísima. Una hectárea de huerta en Villajoyosa (Alicante) valía 44.158 reales y producía 1.764, es decir, el 3'99 por ciento; en cambio; una hectárea de huerta en Segorbe (Castellón) valía 9.864 reales y producía 660, lo que equivalía al 6'69 %. Una hectárea de secano en Denia (Alicante) valía 4.513 reales y producía 113, es decir, el 2'50 %; pero la misma unidad superficial y la misma calidad de tierra en Barajas de Melo (Cuenca) valía 1.040 reales y producía 65, o lo que es lo mismo, daba el 6'35 %. Pasados veinticinco años, el valor de la propiedad rural experimentó un notorio acrecentamiento, aminorándose le desproporción entre el capital y la renta. Con referencia al año de 1863 afirma Caballero que en la Plana de Castellón había hectárea de tierra que llegaba a valer 72.000 reales. Sin embargo de esto, según los cálculos más aproximados, podía fijarse en el citado año el precio medio de la hectárea en toda España en 1.300 reales y el de la renta en un 4 %.

Desde 1845 a 1888, se realizaron reiterados esfuerzos para determinar los elementos de la riqueza rústica del país, resultando de los datos reunidos, que estaba constituida por 1.228.133 hectáreas de regadío y 28.419.763 hectáreas de secano. Ahora bien, la riqueza rústica que resultaba de la declaración hecha por los interesados ascendía a 516.019.540 pesetas, pero como la evaluación practicada por la Dirección de Contribuciones arrojaba la cantidad de 962.582.936, resultaba que la ocultación probable era de 446.563.396 pesetas, suma, que no por haberse tachado de exagerada deja

de patentizar la realidad de un abuso que en algunos lugares llegaba a suponer un 78 % de ocultación.

Calculada en 49 millones de hectáreas la extensión del territorio nacional—dice Valera,—y ascendiendo a mediados de siglo la porción cultivada a unos 26 millones de hectáreas, quedaban 23 millones. Dando para el sitio de ciudades, cauce de ríos, caminos, etc. 5 millones, aún restaban 18. Poniendo ahora en esta cuenta 7 millones de hectáreas de bosques o de tierra con árboles, quedaban 11 millones de hectáreas sin ellos, o dígase de páramo, eriales y monte bajo, lo cual daba por algunas comarcas, tan desolado, pobre, feo y triste aspecto a nuestra patria.

Como en el período anterior, sigue en este la producción cerealista a la cabeza de la total producción agrícola española. La cosecha de trigo durante el quinquenio de 1882-86 dió una media de 33.437.926 hectólitros, necesitándose importar anualmente 2 millones para atender al consumo nacional. La cosecha de los demás cereales se puede representar aproximadamente en las siguientes cantidades: cebada, 17 millones de hectólitros; centeno, 7 millones; y avena, 2 millones y medio. Respecto de los cereales sacaríferos, el maíz y el arroz eran los más abundantes, pues del primero se ha venido calculando la producción anual en unos ocho millones de hectólitros, y la cosecha arroceras de Valencia y regiones colindantes de Levante ha solido elevarse a unos dos millones de hectólitros.

Aunque incompletos los datos estadísticos de la época sobre las condiciones económicas de la viticultura española, facilitan, ello no obstante, elementos suficientes para formar concepto de tan preciada fuente de riqueza. En efecto, a tenor de las informaciones más autorizadas, la región vitícola catalana aparece, en primer lugar, con una extensión de 350.000 hectáreas de viñedo y una producción de siete millones de hectólitros de vino. Seguían en orden de importancia: la región valenciana, con 230 mil hectáreas y cinco millones de hectólitros; la de Castilla la Vieja, con 234 mil hectáreas y cerca de tres millones y medio de hectólitros; la de Castilla la Nueva, con 200.000 hectáreas y 3.200.000 hectólitros; la



aragonesa, con 160.000 hectáreas y 3.180.000 hectolitros, y después la Penibética, la Manchega, la Leonesa, la Riojana-Navarra, la Bética, la Extremeña, la Baleárica, la Cantábrica y la Canaria, sumando todas ellas una extensión de 1.843.000 hectáreas con una producción de más de 33 millones de hectolitros. En las regiones Bética, Penibética y Catalana, hacia las costas, se hallaban, como al presente, las localidades productoras de vinos más selectos y de mayor precio, como son los de Jerez de la Frontera, Málaga y el Priorato (Tarragona), cuya exportación, con la de otras clases, a Francia, a Inglaterra y demás naciones y pueblos de Europa, América, Asia, Oceanía y Africa, han venido a representar equivalentes al cincuenta por ciento del total valor de nuestras exportaciones de toda especie.

Cultivo, asimismo, de extraordinaria importancia, ha sido el de los olivares. A la región Bética con sus 415.500 hectáreas de olivar y sus cerca de dos millones de hectolitros de aceite, corresponde el primer puesto en la producción olivera española, perteneciendo, dentro de la región, a Sevilla la máxima extensión y rendimiento de este cultivo y, después, a Córdoba y Jaén. La región catalana y, tras de ella, las de Castilla la Nueva, Valencia, Penibética, Aragón, Extremadura, Baleares, la Mancha, Navarra, León (región de Salamanca) y Castilla la Vieja (región de Avila) aparecen por este orden en punto a la importancia de su riqueza olivera, que hacia los primeros años del último tercio del pasado siglo comprendía en España unas 900 mil hectáreas y producía tres millones y medio de hectolitros de aceite, cuando era buena la cosecha. En tal caso la exportación (a Inglaterra y Francia, especialmente) llegaba a alcanzar cifras superiores a 300 mil quintales métricos.

A los cultivos precedentes, han seguido en importancia el de las patatas, las judías, los garbanzos, las algarrobas, los frutales<sup>1</sup> y las hortalizas.

1. El enorme desarrollo que ha tenido nuestra exportación de naranja a Inglaterra en las tres últimas décadas del pasado siglo puede observarse consultando el siguiente cuadro:

La agricultura española que durante tanto tiempo ha vivido apegada a los antiguos procedimientos, experimentó un evidente desarrollo al finalizar la pasada centuria y en los primeros años de la actual. La aplicación a las labores del campo de los modernos ingenios mecánicos, el estudio analítico de las tierras para determinar la índole del cultivo más apropiado a su naturaleza, el empleo de abonos químicos y la organización de Granjas Modelo, fundadas por Real Decreto de 2 de Noviembre de 1849, pero no organizadas con perfección hasta 1903, han contribuido a que se acentúe la corriente ya hace años iniciada en pro de los intereses agrícolas. Con sólo recordar que en 1898 había en toda la nación una sola casa dedicada a la construcción de maquinaria agrícola y que pasado un decenio se establecieron y siguen funcionando con notorio provecho más de veinte, se tendrá la mejor prueba del extraordinario avance realizado en la que, con tanto fundamento, ha sido considerada como la primera industria nacional.

**99. El desarrollo industrial y comercial.**—El largo y laborioso período comprendido entre 1833 y 1902, no obstante haberse visto casi de continuo perturbado por la guerra civil y por la empeñada contienda sostenida entre los apologistas sistemáticos de la libertad y los partidarios de las ideas moderadas en la teoría y en la práctica del Gobierno, significa un positivo y, en ocasiones, extraordinario avance en el desarrollo de la industria española. Examinemos en comprobación de tal aserto algunas de sus principales manifestaciones.

Como ya dejamos dicho, al comenzar el siglo XIX la minería española se reducía casi a la explotación de las minas de Río Tinto, Linares, Almadén, Falset y Marbella, algunas de hierro de Vizcaya y las plomizas de las Alpujarras. El indiscutible impulso dado a la minería desde el final de la guerra por la Independencia merced a las acertadas disposi-

Años	Quintales métricos
1870	142.000
1880	610.000
1890	517.513
1900	1.862.477
Actualmente se aproxima a los 4 millones.	

ciones del Ministro López Ballesteros y a la intervención de capitales extranjeros, se tradujo en un notorio aumento de producción. En 30 millones de pesetas la calculaba don Martín Hoppensach, Director que fué de las minas de Almadén, con referencia a los principios del siglo XIX, y a 32 millones y medio de pesetas elevaba el ingeniero Sr. Ezquerro del Bayo el valor de la elaboración de las primeras materias del reino inorgánico en 1839, calculando en 45 mil las personas que se ocupaban en estas industrias. Aunque deficientísimas las estadísticas publicadas hasta 1860, acusan un gradual aumento de la producción, pues de los 33 millones de pesetas en que se cifraba el año de 1844, llega a cerca de 57 en 1854 y a 92 en 1856. Desde 1860 publicase anualmente la Estadística minera, que en 1861 calculaba nuestra riqueza en tal respecto en 120.833.748 pesetas; en 1888, en cerca de 235 millones, y en 1900, en más de 400, utilizando unos ochenta mil obreros de ambos sexos.

Rigióse ramo tan importante de la riqueza pública durante el siglo XIX, primeramente, por la Ley de 12 de Febrero de 1822; después por el Decreto de 4 de Julio de 1825 que declaraba propias de la Corona todas las minas del Reino y que estuvo en vigor hasta la Ley de 11 de Abril de 1849, derogada por la de 6 de Julio de 1859, que, a su vez, fué reformada por otra de 4 de Marzo de 1868 y ambas abrogadas en parte por el Decreto-Ley de 29 de Diciembre de 1868. Proclámase en estas últimas normas jurídicas el dominio del Estado sobre las minas, en sustitución de la antigua regalía del Soberano; pero reconocen el derecho del primer ocupante, sobre todo, el Decreto de 1868, que hace perpetuas las concesiones, deja libre la explotación y admite la diferencia entre el *suelo*, que comprende la superficie propiamente dicha y el espesor a que haya llegado el propietario, y el *subsuelo*, que se extiende indefinidamente en profundidad desde donde el suelo termina. Solicitada por el particular o particulares la facultad de explotar la riqueza minera de un terreno, se les otorgaba una *concesión*, que según el aludido Decreto de 1868, era perpetua y mediante un canon anual por hectárea, que debería pagarse desde la fecha en que la

concesión se hiciera. Unicamente caducaría ésta en el caso en que el concesionario dejara de satisfacer el importe de un año del canon correspondiente. Los abusos a que dió lugar este sistema por parte de quienes obtenían concesiones para no hacer uso de ellas hasta que se presentara un buen comprador, obligaron a poner un límite a la demasía, disponiéndose a tal efecto por la Ley de 28 de Marzo de 1900 que toda concesión que no fuera aprovechada en cuatro años para comenzar, cuando menos la explotación, se entendería caducada, pudiendo el Estado disponer de ella en provecho de otro propietario.

Durante el período que examinamos, continuó la Hacienda pública contando entre sus rendimientos la explotación directa de algunas minas. La Ley de 6 de Julio, de 1859 reservó al Estado la propiedad de las siguientes: las de Azogue de Almadén y Almadenejos, las de cobre de Río Tinto, las de plomo de Linares y Falset, las de azufre de Hellín y Benamaurel, las de grafito o lápiz plomo de Marbella, las de hierro adscritas en Asturias y Navarra al surtido de las fábricas nacionales de armas, las de carbón, que en Moncín y Riosa abastecen a las fábricas de Trubia, y las de sal, sobre todo, en Torrevieja. Poco a poco fué el Estado desprendiéndose de la mayor parte de ellas; se vendieron las de Río Tinto en 1873 a una Compañía inglesa por cerca de 93 millones de pesetas, y en las postrimerías del siglo XIX sólo las de Almadén, Linares y Torrevieja seguían siendo del Estado. En 1869 fueron arrendadas por término de cuarenta años las de Linares, y las riquísimas de Almadén quedaron desde 1870 afectas a la responsabilidad de un antiguo contrato con la casa Rothschild sobre la venta de los azogues.

Gravaba la riqueza minera española antes de 1850 un impuesto del 5 % sobre el valor de los minerales y metales que se vendían y un derecho de superficie que abonaban los mineros por cada determinado número de varas cuadradas. En 1850 pasó la tributación minera al Ministerio de Hacienda, que se encargó de la exacción del canon de superficie y del tanto por ciento de la producción. Los diversos impuestos mineros produjeron en 1850 cerca de 973 mil pesetas, convir-

tiéndose al finar la centuria en 3.691.000 pesetas, o sea, un aumento de 2.718.294 pesetas.

Como en el primer tercio del siglo XIX, seguían en el segundo y tercero explotándose los terrenos argentíferos en Almería, Sierra Almagrera y Hiendelaencina. El hierro ofrecíase abundante y de excelente calidad en Vizcaya, Asturias, Murcia y Andalucía, experimentando su producción un notable aumento, pues si en 1864 fué de 253.121 toneladas, en 1882 llegó a 4.726.293 y en 1900 a 8.600.000 toneladas. El plomo constituía asimismo importantísima fuente de riqueza, habiendo sido su producción en 1864 de 274.589 toneladas y en 1882 de 341.818, hallándose sus criaderos más abundante en Murcia, Badajoz, Ciudad Real, Jaén y Oviedo. Sensible incremento experimentó también la producción hullera, singularmente en Asturias que ha sido la región más favorecida en este aspecto; la mina de Salinas, que se halla debajo del mar, fué puesta en explotación el año de 1838, y con ella compitieron en riqueza las de Mieres y Langreo. En 1864 la producción total de hulla ascendió a 387.904 toneladas; en 1882 llegó a 1.165.517, y en 1900 a 2 millones y medio, cantidad que por ser insuficiente para las necesidades del consumo nacional obligó en el citado último año a importar cerca de 1.800.000 toneladas de carbón inglés. Igualmente deben ser registrados como aumentos extraordinarios de producción el del cobre que fué en 1864 de 213.389 toneladas, en 1882 de 1.720.853 y al comenzar la actual centuria se aproximaba a los 3 millones de toneladas; el de la sal, el del azogue, etc.

Los anteriores datos, cumplidamente demuestran el notorio y en ocasiones extraordinario progreso experimentado por la industria minera. Ahora bien, al desarrollo de tal riqueza no correspondió el de las industrias destinadas a transformarla o manufacturarla, resultando dolorosamente sensible la desproporción entre la exportación de minerales en bruto y la riqueza minera beneficiada. Acusaba ello un indudable atraso en el desenvolvimiento de la industria que transforma y mejora los productos, y tal rezago no sólo afectaba a las industrias derivadas del reino mineral, sino a las que



se basan en los reinos vegetal y animal. No obstante, sería injusto dejar de reconocer el relativo progreso realizado por la industria española durante el período a que se contrae esta parte de nuestra obra (1833-1902), debiendo por ello destacar entre los adelantos en tal respecto realizados el de las industrias *metalúrgica* y *siderúrgica*. En efecto, en 1832 se verificaron las instalaciones siderúrgicas con altos hornos en Málaga; de 1846 a 1860 en Villayana y Felguera (Asturias) y en Santander, y en 1854 en Baracaldo (Bilbao). De 1880 a 1890 experimentaron la metalurgia y siderurgia españolas el más apreciable progreso, siendo la citada fábrica de Baracaldo la primera que estableció modernos altos hornos, con convertidores Bessemer y grandes laminadoras para la producción de rieles, hierros y aceros de gran sección, y palastros. En la citada década se fundó en Sestao (Bilbao) otra fábrica con altos hornos para la producción de hierros y aceros, y otra en San Francisco del Desierto con altos hornos de gran capacidad. Unidas las de Baracaldo y Sestao con la fábrica de hoja de lata La Iberia, constituyeron en Abril de 1902 la Sociedad Anónima de Altos Hornos de Vizcaya, la más poderosa entidad metalúrgica española. En Asturias empezaron también a trabajar con creciente provecho las fábricas de La Felguera y Moreda, y, en Santander, la de la Nueva Montaña.

Asimismo merecen mención especial los adelantos realizados por la industria de tejidos, singularmente en Cataluña, que hubo de mejorar su producción con los nuevos telares importados de Inglaterra, Francia y Bélgica, sobre todo, desde 1842, en que fué autorizada la exportación de maquinaria en la primera de dichas naciones; el de la industria de cordelería y alpargatas de esparto, que adquirió extraordinario incremento desde que en 1862 recibimos de los ingleses sabia lección sobre los aprovechamientos de tan abundante gramínea; el de la fabricación de máquinas que tuvo como centros principales, en Barcelona, los talleres denominados Nuevo Vulcano, fundados en 1834 por la Sociedad de Navegación e Industria de dicha ciudad, de los que salió en 1840 la primera locomotora de construc-

ción española y en 1852 la primera máquina marina destinada al barco de guerra *General Liniers*; los que montó para reparaciones La Maquinista Terrestre y Marítima; los que con algunos elementos salvados de la vandálica destrucción de la hermosa fábrica de Bonaplata y Compañía, víctima de los sucesos revolucionarios de 1835, creó don Vicente Esparó, y los que hubo de montar el francés Mr. Pernau, también en Barcelona, y que traspasó a don Manuel Lerena, quien, unido al Sr. Güell y a otros capitalistas en la Sociedad llamada Barcelonesa, los instaló magníficamente en el ex-convento de San Agustín; en Gerona, los fundados por la casa Planas especialmente dedicados a la fabricación de turbinas; en Valencia, los de la Primitiva Valenciana (1855) especializada en la construcción de maquinaria agrícola y, en el último cuarto del siglo XIX, los de Orueta, en Gijón; Averly, en Zaragoza; Dóriga, en Santander; Ibarra, en Vizcaya; Aznar, en Alicante y Grosso, en Sevilla.

En 1842 se estableció el alumbrado de gas en Barcelona; en 1844 en Valencia y en 1846 se generalizó en Madrid, extendiéndose a otras capitales, si bien se vió sustituido en gran parte durante el último decenio del siglo por el alumbrado eléctrico. La rápida difusión de las aplicaciones de este maravilloso fluído, ha engendrado en el período dicho el creciente desarrollo de las industrias eléctricas, y así como la Exposición general de productos mineros celebrada en Madrid en 1883 constituyó un acto de capital trascendencia en el progreso de la minería española, así la Exposición Universal de Barcelona en 1888, representó el momento inicial del rápido desarrollo de la industria eléctrica, cuya aplicación a las demás industrias, sobre todo al quedar resuelto el problema de la transmisión de la fuerza a distancia por medio de las altas tensiones, permitió en las postrimerías de la centuria poner en movimiento grandes fábricas y electrificar las líneas tranviarias de Barcelona y Madrid.

Igualmente, han experimentado en el período a que nos referimos notable incremento: la industria de estampados, en la que logró singular perfección la fábrica titulada La España Industrial, situada en el pueblo de Sans y fundada hacia

los comedios de la pasada centuria; la industria harinera, que empleando como motor no sólo la fuerza animal y el agua sino el vapor, el gas y la electricidad, tan extraordinaria importancia adquirió en Valladolid, Palencia, Zaragoza, Aranjuez, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc.; la industria azucarera que, especialmente a partir de la pérdida de los últimos restos de nuestro imperio colonial en 1898 y al utilizar como primera materia, sobre todo, la remolacha, intensificó la producción en las 45 fábricas que funcionaban en 1900; la industria conservera, que en el decurso de pocos años logró un envidiable crédito en los principales mercados del mundo; la vinícola, que ha sabido mantener sus tradicionales prestigios y que sobre las clases ya ventajosamente conocidas de sus vinos, ha logrado perfeccionar la elaboración de los espumosos en San Sadurní de Noya (Barcelona) y en Haro; la industria de mobiliario desarrollada en pocos años y con notable perfección en las Vascongadas, Barcelona y Valencia, etc., etc.

Intimamente ligado al desenvolvimiento de la industria nacional, se halla el problema relativo a la política seguida por nuestros Gobiernos en relación con las mayores o menores trabas puestas a la importación de los productos de la industria extranjera. Los precedentes de tan interesante cuestión se hallan en las concepciones antitéticas sostenidas por los *mercantilistas*, defensores de prohibicionismo, y los *fisiócratas*, apologistas del libre cambio. Frente a unos y otros, Federico List combatió en la primera mitad del siglo XIX los criterios extremos, propugnando las ventajas de un régimen aduanero de moderada protección, fundando la moderna teoría de los derechos protectores, definitivamente aceptada por la legislación de casi todos los países. En España se dejaron sentir intensamente los influjos del libre-cambismo a los comedios del siglo pasado. El patricio catalán don Juan Güell, interesado como hemos dicho en la fábrica de máquinas La Barcelonesa, demostró cumplidamente que el derecho impuesto por el Arancel español de 1841 a la maquinaria importada del extranjero era extraordinariamente menor al señalado a las primeras materias para su construcción, y que, por con-

siguiente, resultaba completamente imposible el que la industria nacional, que necesitaba de éstas, pudiera dedicarse a construir con ella mecanismos, que traídos de fuera, eran más baratos. Como se ve, planteaba el Sr. Güell, al tratar de un caso, el aspecto más esencial del problema, es decir, el de si era o no lícito que una industria naciente dejara de recibir el patrocinio oficial hasta llegar a la plenitud de su desarrollo.

Mientras en España se iniciaba el debate sobre el más acertado criterio a seguir en materia arancelaria, la Liga de los fabricantes de Manchester conseguía hacer prevalecer en Inglaterra las corrientes del libre cambio, y el famoso economista Cobden, que preconizaba en 1845 la necesidad de evitar la plétora de producción británica procurando a toda costa la colocación de los géneros de la manufactura inglesa en los mercados extranjeros, realizó por Francia, España, Italia, Austria y Rusia una propaganda para convencer a las gentes de que "el pueblo más rico era el que más consumía". La estancia de Cobden en nuestra nación produjo los efectos que deseaba, y a ella se debió la formación, el año 1847, en Cádiz, de una Sociedad organizada para fomentar las ideas libre-cambistas. A partir de este momento el influjo de las nuevas corrientes se dejó sentir en no escaso número de nuestros elementos directores y por ello, así como en Rusia en 1850, en Piamonte en 1851 y en Portugal en 1852, en España se advirtió desde la reforma arancelaria de 1849 el predominio de las orientaciones favorables a la libertad comercial, frente a las sostenidas por el proteccionismo. Lograr la baratura de los productos y el aumento de la recaudación de Aduanas, fomentando las importaciones, fueron los polos del eje en torno al cual giró la actividad de nuestros Gobiernos, cada vez más inclinados a estimar que en la libertad se hallaba la fórmula capaz de responder a las necesidades apuntadas. Paralelamente, en la prensa y en la tribuna se hacía activa propaganda de los mismos ideales, y organizadas por la Sociedad libre de Economía política, se pronunciaron resonantes conferencias en el salón de la Bolsa, el año de 1859, y en el Ateneo de Madrid durante el curso de 1862 a 1863, actuando como entusiastas mantenedores del libre cambio personajes de

tan singular relieve como Castelar, Moret, Canalejas (don Francisco de Paula), Figuerola, Carreras y González, Silvela (don Luis), Alcalá Galiano, Rodríguez (don Gabriel) y otros. Por su parte los apologistas del proteccionismo tuvieron en el Parlamento como activos y autorizados representantes a Madoz, Moyano, Jordá, Gil Berges, Doménech, Capdepón, Maluquer, Viluma, Peña Aguayo, etc., y, fuera de él, laboraron a favor de los mismos principios Güell, Sol y Padrís, Ferrer y Vidal, Tous y Soler y Ricart. Mantuvieron en la prensa la tesis proteccionista *La Nación* y *El Diario Español*, ambos de Madrid, que contendieron reciamente con *El Heraldo*, *La España* y *El Defensor del Comercio*, que veían también la luz pública en la Corte, y *El Contribuyente*, que se componía en Cádiz. Pero ni tan activas campañas a favor de las ideas protectoras, ni la organización de sus propugnadores en la asociación constituida bajo el sugestivo título de *Fomento de la Producción nacional* lograron impedir el triunfo de sus contrarios, que al calor de las exasperaciones revolucionarias de 1868 y 1869, vieron colmados algunos de sus deseos en la reforma arancelaria verificada en Julio del último de los citados años. Su prevalecimiento, ello no obstante, fué efímero, ya que las normas legales dictadas sobre la materia en Julio de 1877, rectificaron el espíritu libre-cambista de las anteriores, y el predominio de los elementos derechistas durante el reinado de Alfonso XII permitió que Cánovas, que en pleno Congreso declarara el proteccionismo dogma substancial del partido conservador, previniera las armas arancelarias indispensables para el eficaz desarrollo de una política nacional de tratados de comercio. Inspirándose en tales ideas fueron confeccionadas las tarifas de 1891 y 1899, cuya orientación francamente proteccionista nos da la postrera nota sobre el resultado de la empeñada contienda sostenida entre los partidarios de la protección y de la libertad de comercio durante el siglo XIX.

El comercio español durante el período que nos ocupa sufrió las alternativas consiguientes a las perturbaciones políticas que caracterizan nuestra historia contemporánea. Es, sin embargo de ello, tan progresiva la naturaleza mercantil,



que no puede sorprender el hecho de que, aun a trueque de los mayores riesgos y máximas violencias, la vida comercial española haya realizado los más notables avances durante los años que median entre la muerte de Fernando VII y el advenimiento al trono de Alfonso XIII. Atribuye Duesberg la animación mercantil experimentada durante el reinado de Isabel II a la influencia de la libertad comercial en las relaciones de España y de sus colonias con los Estados Unidos de la América del Norte, e intenta probarlo aduciendo las cifras representativas de las mercancías exportadas e importadas por ambas naciones, desde 1840 a 1841. Sin negar el beneficioso influjo atribuído a dicha libertad, creemos que sólo al lógico desarrollo de un país como el español, dotado de elementos naturales de especial valía y cada vez más identificado con las exigencias de la vida moderna, puede atribuirse el notorio incremento experimentado por su comercio.

Del año 1850 datan las primeras estadísticas que poseemos para apreciar en su justa medida tal desenvolvimiento. En la aludida fecha, el volumen total de nuestro comercio exterior, con inclusión del que manteníamos con nuestras posesiones de Ultramar y los puertos francos de Canarias y Norte de Africa elevábase a 290 millones de pesetas, de los que 167,9 correspondían a la importación y 121,1 a la exportación. En 1857 se cifraba el total en 680 millones; en 1870 ascendió a 921 millones; en 1871 a 1.011 millones, y desde este año no bajó del millar de millones, salvo en 1876 que arrojó 998, acentuándose la marcha progresiva en los años 1896, 97 y 99 en que hubo de rebasar la cifra de 1.900 millones. En su consecuencia, en el período de medio siglo, el comercio español se ha elevado de 290 millones a 1.909 (el año 1897 llegó a 1.984 millones), o lo que es lo mismo, que ha aumentado en 1.619 millones, representando la cifra de 1899<sup>1</sup>, 6,60 veces la de 1850. La pérdida de nuestros mercados coloniales el año 1898 produjo una baja de 342 millones (en 1897 el total ascendía como hemos apuntado, a 1.984 y en 1898 a 1.642.387). Ahora bien, prescindiendo del comercio con nuestras posesiones y circunscribiéndonos al propiamente exterior

1. En este año la cifra total fué de 1.907.758 pesetas.

o sea al sostenido con el extranjero, resulta, que su volumen en 1850 se elevaba a 234.436.000 y en 1899 a 1.898.987, lo que, como se ve, no hace variar fundamentalmente los cálculos que acabamos de hacer.

Descomponiendo las cantidades globales apuntadas en los conceptos de importación y exportación, se viene a la consecuencia de que la balanza mercantil nos ha sido casi constantemente desfavorable, es decir, que las importaciones han superado casi siempre a las exportaciones. En efecto, en 1850 correspondían a la importación 141.007.000 y a la exportación 93.429.000, arrojando una diferencia a favor de la importación de 47.578.000, y en 1899 lo importado se elevó a 1.043.912.000 y lo exportado a 855.075.000, es decir, 188.836.000 en pro de la importación. Como excepción de esta regla general deben citarse los años de 1853 a 1855 en que nuestras exportaciones alcanzaron un exceso sobre las importaciones (en 1853, el exceso fué de 13.840.000; en 1854, de 46.225.000 y en 1855, de 58.695.000); repitiéndose el caso en 1873 (el exceso fué de 33.572.000), en 1888 (el exceso fué de 24.995.000) y en 1898 (el exceso fué de 189.038.000). Sumando ahora todos los excesos de la importación y los de la exportación en el aludido período de cincuenta años resulta: que las importaciones superaron a las exportaciones en 5.071 millones, mientras las exportaciones sólo excedieron a aquéllas en 336 millones, lo que nos lleva al reconocimiento de que la balanza comercial nos ha sido desfavorable en más de 4.707 millones de pesetas. "Este fué el tributo que rendimos al extranjero en los cincuenta años últimos del siglo XIX, disminuyendo en esa cifra, relativamente elevada, el incremento que por otros distintos conceptos tuvo nuestra riqueza nacional"<sup>1</sup>.

Con leves variantes, que no alteran esencialmente la prelación de los elementos constitutivos de nuestro comercio, los artículos principales objeto de la importación en España han sido: trigo, algodón en rama, petróleo, madera, azúcar, hulla, tabaco, hierro, máquinas, artículos de lana, pieles, bacalao,

1. *La riqueza y el progreso de España*, trabajo publicado por el Banco Urquijo. Madrid, 1920.

artículos químicos, cacao, artículos de seda, telas de algodón, material de buques y de caminos de hierro, etc. Los correspondientes a la exportación española han consistido en vino, plomo, cobre, hierro, corcho, naranja, uva, pasa, esparto, calzado, aceite de oliva, ganados, lanas, mercurio, etc.

La relación comercial más activa mantúvola nuestra nación con Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. como puede apreciarse en el adjunto cuadro relativo a los países con los cuales España sostenía en 1889 un movimiento de negocios de más de 20 millones de francos.

Países	Importación	Exportación
Francia	264.292.090	386.476.280
Inglaterra	161.000.674	207.346.307
Estados Unidos	102.046.918	15.193.556
Alemania	53.533.205	14.967.139
Bélgica	29.974.342	19.934.940
Portugal	16.891.347	43.756.372
República Argentina	3.567.414	23.290.053
Italia	19.503.582	9.542.581
Rusia	19.658.306	825.683

Por último, como factor de extraordinario relieve al tratar del movimiento comercial hemos de poner de manifiesto el relativo a la marina mercante española en el período de 1881 a 1898, es decir, durante los años en que se hace más sensible el descenso de los barcos de vela y el aumento de los de vapor como consecuencia de la aplicación cada vez más frecuente de éstos a las necesidades del tráfico marítimo

Años	Núm. de barcos de vela	Tonelaje	Núm. de barcos vapor	Tonelaje	Núm. de barcos	Tonelaje.
1881	1.889	326.438	347	233.695	2.236	560.133
1886	1.379	224.931	431	388.117	1.800	613.048
1898	609	105.449	437	446.896	1.046	552.345

Como se ve, el número de buques de vela disminuye en proporciones extraordinarias, aumentando el de barcos a vapor. De los primeros existían en 1898, 1.280 menos que en

1881 y, en cambio, había 90 vapores más. Esta notoria diferencia entre el rápido decrecimiento de los primeros y el pausado incremento de los segundos, acusó una disminución de 7.788 toneladas en 1898, diferencia que desapareció a los pocos años, pero que aun en los que hubo de mantenerse no disminuyó la capacidad de transporte, ya que la mayor rapidez y seguridad de la navegación a vapor suplió con exceso el déficit del tonelaje.

Sin embargo de esto, como autorizadamente hace constar un geógrafo moderno con referencia a los primeros años del presente siglo, todavía gran parte de nuestro comercio marítimo se hacía bajo pabellón extranjero, pues bajo el inglés solamente, transportaba un tonelaje cuatro veces superior al que cargaban las embarcaciones españolas. Esta circunstancia movía al tratadista a que aludimos a desear que en el movimiento marítimo de nuestro puerto ocupase el primer lugar el pabellón de España, como ya se había conseguido en el comercio de cabotaje, o sea, entre diversos puntos de nuestro litoral. A este importante resultado contribuyeron poderosamente en las postrimerías del siglo XIX nuestros armadores aumentando la flota mercante. Las principales casas navieras y empresas marítimas que representaban nuestra Marina dedicada al comercio eran: la Compañía Trasatlántica, la Vasco-Andaluza, la de Aznar, la de Pinillos, la de Ibarra y otras, domiciliadas en Cádiz, Barcelona, Bilbao y Sevilla.

#### **100. La cuestión social y las organizaciones obreras.—**

La revolución económica operada por las leyes desamortizadoras, el rápido desarrollo de la industria nacional, la minera especialmente, la consiguiente concentración de grandes masas obreras en los focos más importantes de la actividad fabril y la carestía de la vida como consecuencia del incremento de las necesidades originadas por la comodidad y el lujo, contribuyeron desde mediados del pasado siglo a plantear incipientemente la cuestión que por antonomasia se llamó social. Frente a las exacerbaciones del egoísmo y la vanidad de los poderosos, comenzó a diseñarse la rebeldía de los humildes, y aunque el predominio del carácter político, ca-

racterístico de nuestras contiendas partidistas, permitió durante años mantener confundidos y aun en ocasiones identificados factores individuales de la vida nacional de significación económica harto diferente, cuando el apremio de las necesidades y el estímulo del ejemplo venido del exterior comenzaron a alterar los términos del problema, fácilmente pudo comprenderse que, a despecho de cuanto las asustadizas autoridades hicieran para entorpecer la lógica reacción contra el doctrinarismo individualista, había a la postre de prevalecer aquélla rebeldía, hasta consumir la obra de reemplazar las antiguas instituciones sociales amparadoras del individuo y destruídas irreflexivamente por la ley, por otras creadas espontáneamente por el cuerpo social para realizar la finalidad de auxiliar y defender económicamente a los más necesitados de protección y auxilio.

Por tal motivo, las primeras organizaciones obreristas españolas (tales como la Sociedad de los Tejedores, fundada en Cataluña en 1840 por el obrero Munts, y, siguiendo tal modelo, otras, que llegaron en 1854 a confederarse originando la que se llamó Unión de clases) persiguieron una finalidad puramente económica, de la que son elocuente testimonio además, las cooperativas de producción y consumo constituídas desde 1856 en Barcelona y Valencia especialmente por los tejedores, obreros de la seda, sogueros, curtidores, calafates, y pintores de ribera.

Durante la Exposición francesa de 1862, los delegados del obrerismo francés, Tolain, Fribourg y otros, se congregaron en Londres, y de acuerdo con los jefes de los socialistas ingleses y alemanes, establecieron las bases de la que se llamó *Unión Internacional de los Obreros*. El 5 de Agosto de 1863, celebraron los mismos delegados la fiesta de la fraternidad, y el 28 de Septiembre de 1864 se fundó definitivamente la *Internacional*. Se determinó entonces que un Consejo central provisional redactase el programa y los estatutos de la Asociación. En este Consejo, Carlos Marx con sus proyectos revolucionarios, económicos e internacionales, triunfó de Mazzini, que deseaba solamente una liga política y no la lucha de clases. Celebróse el primer Congreso de la naciente entidad en Ginebra



(Septiembre de 1866) y volvieron a reunirse sus miembros en Lausana (1867) y Bruselas (1868), constituyendo los órganos directivos de la misma un *Consejo general* y el *Comité de las Secciones ginebrinas*. En Noviembre de 1868 envió este Comité a Madrid al diputado italiano José Farinelli Ribere, que no sin algún trabajo, logró constituir la *Asociación Internacional de los Trabajadores* en España. Disuelta en 1874 por el Gobierno, cuando contaba ya con 60,000 adeptos, retoñó el espíritu de unión que ella representaba en 1881, pero ya entonces con notoria discrepancia en la orientación de sus componentes. Adictos unos a las doctrinas de Bakunin, mostrábanse teóricamente individualistas y prácticamente partidarios de la revolución social implantadora del anarquismo; discípulos otros de Carlos Marx, propugnaban las excelencias del credo socialista, aspirando a la abolición de todas las clases sociales y su conversión “en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes”. Los primeros dieron vida en el Congreso celebrado en Valencia el 24 y 25 de Septiembre de 1881 a la denominada *Federación de Trabajadores de la Región española*; los segundos, reunidos en el primer Congreso socialista, celebrado en el teatro Jovellanos de Barcelona, en Agosto de 1888, crearon la llamada *Unión general de Trabajadores*. La *Federación*, minada por la intestina discordia entre *anarquistas* y *comunistas*, se fraccionó en pequeños grupos locales consecuentes en su táctica de perturbar el orden público por medio de la propaganda de hecho; en cambio, la *Unión*, organizando la resistencia societaria contra el capital, promoviendo y dirigiendo huelgas enderezadas a mejorar las condiciones del trabajo, facilitando recursos a los huelguistas y organizando a partir del 1.º de Mayo de 1890 la anual Fiesta del Trabajo, logró que el número de sus afiliados, que escasamente llegaba a tres mil en 1899, se elevara a 33.000 en 1902. Ahora bien, apegados excesivamente al marxismo que diera vida a la *Unión*, quisieron los fundadores de ésta completar la acción social con la política, pero tal empeño, que notoriamente los desviaba de su finalidad primordial, no correspondió realmente a las ilusiones que en él se cifraban. “Las elecciones

de 1901, las más próximas a la mayor edad del Rey — dice el Sr. Maura Gamazo — arrojaron un total de 25.400 votos socialistas en toda España, guarismo que era inferior al que bastaba para asegurar representación parlamentaria, bajo regímenes electorales más perfectos que el vigente a la sazón en España, con el cual no la obtuvo el partido obrero, pero que no traducía el considerable ascendiente logrado ya por los societarios en la vida nacional”<sup>1</sup>.

El alarmante incremento tomado por las organizaciones socialistas, movió en las postrimerías del pasado siglo a los elementos católicos a realizar una activa propaganda en pro de la organización obrera confesional. En el generoso intento destacó el jesuita Padre Vicent, que auxiliado, entre otros, por el Marqués de Comillas, logró organizar 114 Centros católicos de obreros con más de 21.000 asociados, unificando tan vasta labor por medio de la institución de un *Consejo nacional de las Corporaciones católicas obreras*.

La importancia creciente de los conflictos planteados por las organizaciones obreristas, singularmente desde el establecimiento de la *Internacional* en nuestra patria, y la consideración de que no debía el Poder público permanecer cruzado de brazos ante la realidad de los múltiples problemas planteados por la pugna entre el capital y el trabajo, produjo como consecuencia una intervención del Estado cada vez más frecuente y eficaz en tal linaje de asuntos. Testimonios de esta orientación fueron la Real Orden de 7 de Septiembre de 1853 por la que el Ministro de la Gobernación Sr. Egaña recomendaba a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona la construcción de casas baratas e higiénicas para obreros, y la de 10 de Junio de 1861, que reconocía la utilidad moral social y económica de las sociedades de socorros mutuos para trabajadores; el proyecto presentado a las Constituyentes por el Ministro de Fomento Sr. González sobre formación de Jurados mixtos para cada industria, compuestos de ocho miembros elegidos por mitad por los capitalistas y los trabajadores; la Ley Benot, de 24 de Julio de 1873, regulando el trabajo de las mu-

1. *Historia Crítica del reinado de D. Alfonso XIII durante su minoridad bajo la Regencia de su madre Doña María Cristina de Austria*, tomo II, pág. 273.

jeros y de los niños; el nombramiento por el Sr. Moret, el 5 de Diciembre de 1883, de una *Comisión de Reformas Sociales*, precedente inmediato del actual *Instituto*; el Real Decreto de 11 de Enero de 1887 estableciendo en Vista Alegre un Asilo para inválidos del trabajo y, sobre todo, la Ley de Accidentes del trabajo, de 30 de Enero de 1900 y la de 13 de Mayo del mismo año, reguladora ésta del trabajo de las mujeres y de los niños, debidas a las iniciativas del ilustre hombre público don Eduardo Dato.

**101. Las Obras públicas.**—El reinado de Isabel II representa en nuestra historia contemporánea un período de extraordinaria actividad en punto a la construcción de obras de pública conveniencia. Para remover los obstáculos que pudieran dificultar éstas, dictóse la Ley de Expropiación forzosa de 17 de Julio de 1836, que vino a satisfacer la necesidad de una norma que desarrollara el principio de la enajenación obligatoria por causa de utilidad pública, principio ya establecido en las leyes de Partida y en los fueros regionales, que al hablar del abono de los terrenos expropiados, decían que había de hacerse “a bien vista de omes buenos”.

Como puede comprenderse, la guerra civil paralizó la ejecución de crecido número de obras, y aunque desde el año de 1834 al de 1841 llegaron a invertirse 48 millones de reales, la mayor parte de esta cantidad se dedicó a la reparación de carreteras, tan de continuo recorridas entonces por el ejército. Terminada la ruinoso y sangrienta contienda, la diligencia legislativa de nuestros elementos directores dió fe de vida, aprobando el 14 de Septiembre de 1842 las Ordenanzas de policía y conservación de carreteras, dividiendo la Península, por Real Orden de 7 de Abril de 1843, en diez distritos organizados bajo la autoridad técnica de los Ingenieros de Caminos, y finalmente, dando el 10 de Octubre de 1845 la famosa *Instrucción para promover y ejecutar las obras públicas*, completada por la Ley de 7 de Mayo de 1851. A tenor de ésta, clasificábanse las carreteras en generales, transversales, provinciales, y locales. Tenían el primer concepto las que, costeadas por el Estado, partían de Madrid para las capitales de provincia; llamábanse transversales las que, construídas

por las Diputaciones con el auxilio del Estado, servían de enlace entre las generales, pasando por importantes núcleos de población; denominábanse provinciales las que unían una general con otra transversal y las de comunicación directa de dos o mas provinciales, y se llamaban locales las construídas por los pueblos asociados para realizar proyectos de utilidad común.

Según los datos consignados en la *Memoria sobre el estado de las obras públicas en España*, compuesta en 1856 por el benemérito don Cipriano Segundo Montesinos, a la sazón Director de Obras públicas, había en dicho año 6.587 kilómetros construídos de carreteras generales y 640 en construcción; 1.533 kilómetros construídos de carreteras transversales y 1.112 en construcción, y 1.209 kilómetros construídos de caminos provinciales con 986 en construcción.

Las cantidades gastadas y kilómetros construídos desde 1841 a 1856 aparecen detallados en el cuadro siguiente:

Años	Cantidades gas-	Corresponde	Kilómetros
	tadas	cada año.	construídos
	Reales	Reales	cada año
De 1841 a 1845	80.000.000	20.000.000	117
De 1845 a 1850	177.156.440	35.431.288	249
De 1850 a 1855	276.894.294	55.378.859	418
En 1855 y 1856	115.650.704	57.825.352	437

De la consideración de los datos precedentes se deduce que el mayor impulso dado hasta entonces a la construcción de carreteras procedía de los comedios de la pasada centuria, correspondiendo a la misma época el planteamiento y ejecución de otras importantes obras de pública utilidad. Desde 1857 a 1863, activáronse todavía más los trabajos para mejorar las condiciones de viabilidad, invirtiéndose en la construcción, reparación y conservación de carreteras 699.359.835 reales y abriéndose anualmente al tránsito 609 kilómetros.

El cuadro adjunto resume la fecunda labor realizada durante el reinado de Isabel II en el respecto que nos ocupa.

Carreteras del Estado	Kilómetros en explotación	Kilómetros construídos
De primer orden	6.782	158
De segundo orden	6.022	1.192
De tercer orden	4.605	1.812
Total ... .. 17.409		3.162

Ahora bien, si se recuerda el número de kilómetros en explotación en 1853 y se compara con la cifra 17.409 correspondiente a 1868, se vendrá a la consecuencia de que en treinta y cinco años se habían abierto a la circulación 12.829 kilómetros de carreteras generales, cantidad que habla harto elocuentemente en pro de la patriótica actividad de los elementos directores de nuestra política en aquel período.

Formando brusco contraste con el rápido desarrollo de las carreteras del Estado, aparecía la paralización de las provinciales y vecinales, cuya escasez no lograban los Gobiernos impedir a pesar de las disposiciones encaminadas a reanimar la punible indolencia localista. En 1849 vió la luz pública una Ley brindada a la construcción de caminos vecinales, y aunque en ella se especificaba la forma en que los pueblos habían de contribuir a costearlos y construirlos, incluso apelando a la prestación personal, la libertad en que se dejó a los Ayuntamientos para emprender o no obras de tan apremiante necesidad, malogró las buenas intenciones del legislador. Una nueva disposición dictada en 25 de Septiembre de 1863 tampoco tuvo la eficacia de hacer salir de su atonía a los organismos provinciales y municipales, que hasta para los efectos de prestar su colaboración a la Administración central facilitando los datos estadísticos que de ellos se solicitaban, mostráronse perezosamente remisos. Así resultó, que la *Memoria de Obras públicas*, correspondiente al año de 1868, sólo pudo insertar respecto a caminos provinciales datos correspondientes a 32 provincias, de las cuales había 12 que no tenían un solo



kilómetro de carretera provincial. Sumados los kilómetros de caminos no generales de las aludidas 32 provincias, resultaban 435 kilómetros de vías provinciales y 748 de caminos vecinales, y aplicando la misma proporcionalidad a las 11 provincias restantes (ya que de este cálculo quedaban excluidas las 3 Vascongadas, Navarra, Canarias y Baleares) se venía a la conclusión de que el número total de kilómetros a cargo de 43 Diputaciones era de 584, y de 1.005 el de caminos vecinales costeados por los Ayuntamientos, es decir, 1.589 kilómetros en conjunto. Téngase ahora presente que en igual fecha (1868) contaba Francia 30.386 kilómetros de caminos provinciales y vecinales, y se podrá apreciar en su justo valor la enorme desproporción existente entre una y otra nación en punto a elemento de tan vital importancia para la economía de los pueblos.

El cuadro que a continuación insertamos, expresivo de la totalidad de las carreteras de ambos países en 1868, dará una idea más clara de la diferencia que acabamos de apuntar.

Carreteras	Francia	España
	Kilómetros	43 provincias Kilómetros
Del Estado	38.479	17.409
Provinciales y vecinales	33.386	1.589
Totales...	71.865	18.998

Acusa este cuadro—dice Alzola<sup>1</sup>—679 metros de carretera por kilómetro cuadrado y 10 por habitante en Francia, y en España 40 metros por kilómetro cuadrado y 1'30 por habitante.

Excepción honrosísima del general rezago en punto a vías de comunicación de carácter local, ofrécenos en la época que estudiamos, tanto el grupo formado por las provincias vascongada (Vizcaya contaba con 526 kilómetros de carreteras del Estado, de la Provincia y de empresas particulares, y Gui-

1. Alzola y Minondo (Pablo de) *Las obras públicas en España. Estudio histórico.*

púzcoa con 488 kilómetros) como el Principado catalán, donde constituída una Junta delegada de carreteras el año de 1848, supo corresponder dignamente a la confianza de que se le había hecho objeto.

El período revolucionario de 1868 a 1875 acusa un incremento anual de 230 kilómetros; pero como a virtud de las orientaciones descentralizadoras de los Gobiernos de aquellos años fueron entregados 2.500 kilómetros de carretera a las Diputaciones, que los dejaron en el mayor abandono, prácticamente el aumento que acabamos de consignar quedó anulado.

La Restauración representó un nuevo y poderosísimo impulso dado a la viabilidad. El 4 de Mayo de 1877 vió la luz pública la *Ley de carreteras*, hecha de acuerdo con las bases establecidas en la de 29 de Diciembre de 1876; y la de 11 de Julio, también de 1877, aprobó el Plan general que aspiraba a dotar a España de 47.719'735 kilómetros de carreteras. En 1880 comenzaron los trabajos de construcción de nuevos tramos, llegando a abrirse a la circulación 8.100 kilómetros en el decenio de 1880-90, y 7.800 más desde 1890 a 1900.

Resulta, pues, que desde 1880 hasta finalizar el siglo, se construyeron 15.900 kilómetros, y como en el citado año sumaba la red 19.500, el total de carreteras en 1900 fué de 35.400 kilómetros, o lo que es lo mismo, que en los dos últimos decenios de la centuria se había llegado a un promedio anual de cerca de 800 kilómetros construídos, hasta sumar el lucido total apuntado (35.400 kilómetros), que puesto en relación con los proyectados 47.719'735 del Plan general, nos lleva a la conclusión de que para cumplir éste todavía faltaba construir 12.319'735.

Esencial y casi único medio de transporte de viajeros, correspondencia y mercancía en el interior de la Península durante los quince primeros años del reinado de Isabel II constituíanlo los vehículos de tracción animal ya conocidos en el anterior período, es decir, las *diligencias*, *sillas de posta*, *galeras* y *carros* y la que se llamaba *posta a la ligera* o sea, a lomos de caballería. La guerra civil obligó a algunas de las Compañías de diligencias que funcionaban en el período pre-

cedente a suspender total o parcialmente los servicios que venían prestando. Tal ocurrió con la de *Caleseros de Burgos*, la de *Alquiladores de Pamplona*, la de *Reales Diligencias* y la llamada *Sociedad de Diligencias y mensajerías de Cataluña*. Las necesidades cada vez más apremiantes de comunicación entre los pueblos impusieron, con todo, la restauración de algunas de aquellas empresas y la fundación de otras nuevas, como la que en 1840 llevó el título de *Compañía de Maestros de Postas de la carrera de la Mala*, que estableció el servicio de Madrid a Bayona para correspondencia y viajeros; la llamada de *Carsi, Ferrer y Compañía*, que atendió a las comunicaciones con Valencia, Valladolid, Zaragoza, Sevilla y Granada, Coruña, Tordesillas, Trillo y Sacedón y, por último a Bayona, y la que se formó en Barcelona el año de 1842 con la denominación de *Sociedad de Diligencias de la Coronilla de Aragón*. De las antiguas, la *General de Diligencias* y la de *Caleseros de Burgos* se fusionaron haciendo el servicio de Madrid a Bayona, en 1842, en coches de quince asientos; salían de Madrid estas diligencias a las seis de la mañana para llegar a Bayona el quinto día a las dos de la tarde, pernoctando los viajeros en el Parador de Peralta, Burgos, Victoria y Tolosa. Como se ve, no se había adelantado en celeridad respecto del año de 1826. Pasados unos cuantos, en el de 1859, la *Compañía de Postas generales* y la de *Diligencias del Norte y Mediodía de España* abreviaron extraordinariamente el viaje que realizaban en dos días y medio, o sea, sesenta horas invertidas en el recorrido de 522 kilómetros que son los que separan nuestra Corte de la citada ciudad de Bayona. Si se tiene presente lo duro de un recorrido en el que se precisaba ascender por Somosierra, la Brújula de Burgos, la cuesta de Salinas y los violentos zig-zags de la de Descarga, que había de ser subida con yuntas de bueyes y bajada con planchas, se comprenderá el progreso que supuso la precitada economía de tiempo.

Tanto las *sillas de posta* como las *diligencias*—dice Alzola—llevaban un postillón, montado en el caballo delantero de la izquierda, el mayoral, que recorría todo el trayecto, y el zagal encargado del tiro hasta la sustitución de éste. Los pos-

tillones hacían, como los mayores, todo el recorrido, pero las fatigas de tal trabajo y las frecuentes desgracias que hubo que lamentar al caerse de sus monturas rendidos por el sueño los muchachos que prestaban el servicio, obligaron a organizar en Burgos un relevo de postillones. Los billetes para las diligencias que hacían el recorrido de Madrid a Bayona importaban: 700 reales en berlina, 600 en el interior, 500 en la rotonda y 400 en el cupé.

Los viajeros *en posta* (a la ligera y en ruedas) es decir, los que hacían el viaje alquilando particularmente el vehículo, tenían que pagar, según el Reglamento, si iban a la ligera, o lo que es lo mismo, a caballo, 7 reales por legua y caballería, y si hacían el viaje en *sillas o carruajes de posta*, 7 reales por éstas y 6 reales por caballería, también por cada legua.

Aunque la opinión, generalizadísima en el extranjero, sobre los riesgos que suponía un viaje por las carreteras españolas retrajo a propios y extraños de recorrer éstas sino en los casos imprescindibles, es lo cierto que hubo en aquélla una gran parte de novelesca exageración. En su curioso *Itinéraire descriptif, historique et artistique de l'Espagne et du Portugal*, nos cuenta su autor Mr. Germond de Lavigne sus particulares impresiones sobre los viajes que hubo de realizar a los comedios del siglo XIX por nuestro territorio, y ellas distan gran trecho de cuantas forjaba por aquel entonces la imaginación de las gentes medrosas y el interés de los folletínistas. Ciertamente que tuvimos que sufrir el azote del bandolerismo, sobre todo en Andalucía, y que las tristes andanzas de José María el Tempranillo y de gentes de su laya, constituyeron objeto del público comentario, pero este mal no fué ni tan frecuente como se declama ni privativo de España, sino que hubo también de darse por aquel entonces en Inglaterra, Estados Unidos, Francia y, especialmente, en Italia, en la que los Fra Diávolo, Pedro el Calabrés y Gasparoni dejaron muy atrás en ferocidad a nuestros Francisco Esteban el Guapo, el citado Tempranillo y demás sujetos representantes de esta mala ralea.

Formidable propulsor de nuestro desarrollo económico fué

a mediados de la pasada centuria el establecimiento de los *caminos de hierro*. El famoso invento de la locomotora por Jorge Stephenson, seguido de una porción de pruebas hasta el 6 de Octubre de 1829, en que se verificó el primer ensayo técnico, completamente satisfactorio, continuado por la apertura solemne del primer ferrocarril de servicio público entre Liverpool y Manchester, el 15 de Septiembre de 1830, repercutió prontamente en España. En efecto, el año 1829 solicitó don Marcelino Calero Portocarrero la concesión del ferrocarril de Jerez al Puerto de Santa María, Rota y Sanlúcar, concesión que hubo de caducar por carecer el concesionario del imprescindible capital para acometer la empresa. Igual resultado tuvo la autorización otorgada en 1833 para construir la línea férrea de Tarragona a Reus. Paralizada casi totalmente la vida nacional por causa de la guerra civil, no se registraron nuevas demandas de concesión hasta el año de 1843 en que don José María Roca formuló la de una línea de Barcelona a Mataró. Al año siguiente, se hizo la concesión del ferrocarril de Madrid a Aranjuez y prolongación hasta Alicante, solicitándose también la de Madrid a Cádiz. Ahora bien, a pesar de suponer las anteriores concesiones la autorización para construir 1.300 kilómetros de línea férrea, no se inauguró ninguno hasta el 28 de Octubre de 1848 en que se abrió al tránsito público la sección de Barcelona a Mataró con sus 28'26 kilómetros, y el 5 de Diciembre de 1851 la de Madrid a Aranjuez.

Hallóse por aquellos años nuestra nación con la sorpresa de tener que dar solución a un problema de la entidad del que se planteaba con la construcción de caminos de hierro, cuando no había podido fijar sus orientaciones sobre la política que en tal respecto le convenía seguir. Y ello ocurría en los momentos en que con mayor insistencia aspiraban empresas extranjeras a colocar ventajosamente en España sus capitales en la explotación de líneas férreas que, por otra parte, habían de contribuir a desarrollar la economía de sus naciones respectivas al facilitar con el transporte el medio de activar el cambio de nuestra riqueza agrícola y minera por las manufacturas inglesas, francesas, belgas y alemanas.



Con tal designio, vino a nuestra patria el propio Stephenson, a fin de hacer sobre el terreno algunos estudios preliminares por cuenta de un grupo de capitalistas británicos, y de aquellos trabajos salió una proposición dirigida a nuestro Gobierno, el cual pidió informe a la Dirección general de Caminos, Canales y Puertos, la que comisionó a este efecto a los ingenieros don Juan Subercase, Inspector general del Cuerpo, y don Calixto de Santa Cruz y don José Subercase, Ingenieros primeros, que supieron cumplir su cometido con excepcional competencia. En el referido informe mostrábase sus autores partidarios en términos generales de la construcción de las líneas férreas por cuenta del Estado, “único medio—decían—de que los caminos de hierro produzcan completamente el efecto que de ellos se debe esperar, porque sólo de este modo se podrá conseguir que los transportes de personas y mercancías se reduzcan al mínimo precio posible, esto es, a aquel en que los derechos percibidos produzcan lo estrictamente necesario para el sostenimiento del camino después de amortizado el capital que se empleara en su construcción”; aconsejaban que el Poder público caso de no construir directamente las líneas, se reservase el derecho de revisar las tarifas periódicamente, a fin de evitar ganancias abusivas de las Empresas; opinaban también que al hacer el Gobierno la concesión, debía conservar la facultad de adquirir la propiedad del camino, pasado que fuera un cierto número de años contados desde el día de la concesión, abonando a la Compañía una renta por cada uno de los años que faltasen hasta expirar aquélla; mostrábase opuestos al monopolio de la explotación por la Empresa concesionaria y partidarios, en cambio, de la libre concurrencia; propugnaban la necesidad de fijar uniformemente el ancho de la vía para todas las líneas y que éste fuera de seis pies; que la Compañía que aspirase a la concesión, probase técnicamente la posible realización del proyecto y la utilidad pública e industrial que pudiese reportar; que los concesionarios constituyesen un depósito que garantizase su solvencia ante el Estado y que las formalidades precedentes a la concesión fueran lo suficientemente rigurosas para

evitar el abuso de que ésta pudiera otorgarse por pura influencia a uno o más individuos particulares, los cuales, sin el menor título para ello, traficasen con la concesión vendiéndola a la Compañía verdaderamente constituida para construir y explotar la línea.

En suma: el informe que acabamos de extractar, magistralmente trataba la compleja cuestión ferroviaria, dando orientaciones y formulando consejos que, por desgracia, no fueron totalmente atendidos al dictarse las disposiciones legislativas consiguientes. Ello permitió que, en punto a concesiones, se llegara a extremos de verdadero escándalo, ya referidos al tratar de esta cuestión en las páginas dedicadas a la Historia política, y que en relación con el sistema jurídico elegido para construir las líneas pudiera el imperialismo económico, ejercido por poderosas agrupaciones de negociantes extraños, obtener, so capa de querernos beneficiar, las más privilegiadas concesiones en orden a un servicio público de la entidad del ferroviario, concesiones que, desnacionalizando las claves económicas y estratégicas de nuestra existencia como nación, habían de someter la soberanía española durante largos años a la mediatización más depresiva<sup>1</sup>.

La legislación española sobre esta materia está representada por la Real Orden de 31 de Diciembre de 1844, originaria norma a la que se ajustó la construcción y explotación de nuestras primeras líneas férreas, y por las Leyes de 3 de Junio de 1855, 4 de Junio de 1863 y 13 de Abril de 1864; Decreto-ley de 14 de Noviembre de 1868; Decreto y Ley de 5 de Abril y 20 de Agosto de 1873; *Ley general de Obras públicas*, de 13 de Abril de 1877; *Ley general de Ferrocarriles*, de 23 de Noviembre del mismo año y Ley de 19 de Septiembre de 1896 sobre rebaja de tarifas y compensación a las empresas.

Tan profusa legislación, de la que hemos omitido la cita correspondiente a los Reales Decretos y Reales Ordenes dictados sobre la materia, mantiene por regla general los siguientes principios: concesión por 99 años; revisión de las tarifas cada cinco, y reversión de las líneas al Estado por causa de

1. Véase a este propósito la obra del Sr. Sánchez Toca, *Reconstitución de España en vida de Economía política actual*.

utilidad pública. Como excepción bien notoria de tales orientaciones deben ser citadas las normas que, triunfante la Revolución de Septiembre de 1868 dictaron los Gobiernos que de ella procedieron. El criterio entonces seguido fué el de no fijar tiempo a las concesiones ni reconocer al Estado derecho alguno a la reversión ni a intervenir en las tarifas<sup>1</sup>.

Las primeras concesiones otorgadas correspondieron a las siguientes líneas: Barcelona a Mataró (16 de Marzo de 1847); Barcelona a Granollers (20 de Julio de 1850); Jerez al Trocadero (16 de Agosto de 1850); Játiva al Grao de Valencia (31 de Diciembre de 1850); Reus a Tarragona (30 de Septiembre de 1851); Alar del Rey a Santander (19 de Diciembre de 1851); Mataró a Arenys de Mar (29 de Junio de 1852); Almansa a Játiva (26 de Agosto de 1852); Almansa a Alicante (4 de Septiembre de 1852); Martorell a Barcelona (14 de Septiembre de 1852); Zaragoza a Barcelona (27 de Noviembre de 1852); Córdoba a Sevilla (25 de Enero de 1853); Madrid a Almansa (9 de Marzo de 1855) y Sevilla a Jerez (21 de Abril de 1856).

Dada la importancia que en el orden económico suponía la construcción de las líneas férreas, constituyéronse para llevarla a cabo una porción de Compañías, de entre las cuales citaremos las más destacadas por la cuantía de su capital y el número de kilómetros que pusieron en explotación. La primera en orden al tiempo fué la *Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante*, constituida por escrituras de 27 de Septiembre y 31 de Diciembre de 1856 y 10 de Enero de 1857. A su fundación tenía las concesiones de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza, de Madrid a Almansa y de Almansa a Alicante. El 24 de Julio de 1875 compró a la *Compañía de Córdoba a Sevilla* todos los derechos que tenía sobre el ferrocarril que unía a ambas ciudades; posteriormente adquirió otras líneas, entre ellas las de la *Red catalana*. La *Compañía de caminos de hierro del Norte de España* se constituyó en 29 de Septiembre de 1858 para la construcción y explotación de la línea de Madrid a Irún por Avila, Vallado-

1. Para más detalles pueden consultar los *Elementos para el estudio del problema ferroviario en España*, publicados bajo la dirección del Ministro de Fomento D. Francisco Cambó.

lid, Burgos, Vitoria, Tolosa y San Sebastián. El 1.º de Abril de 1878 adquirió las líneas de Barcelona a Alsasua y de Tardienta a Huesca, y en 1891 las de Almansa a Valencia y Tarragona. *La Compañía de Ferrocarriles Andaluces* se fundó definitivamente el 30 de Mayo de 1877, y la *Sociedad de los ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal*, el 7 de Diciembre de 1880.

Durante el período comprendido entre 1844 y 1856 las concesiones se elevaron a 1.516'762 kilómetros, resultando el promedio anual de 75'838; de 1856 a 1877 el número de kilómetros de línea fué de 1.200'774, y el promedio de 281'853; de 1869 a 1879 el número de kilómetros solamente sumó 803'322 y el promedio 73'030, y de 1879 a 1903 nuevamente hubo de elevarse la cantidad, arrojando la cifra de 5.854'561 kilómetros. En su consecuencia, el total de kilómetros de línea férrea en explotación al comenzar el reinado del actual Monarca ascendía a unos 14.000 kilómetros en números redondos.

Del propio modo que las carreteras y las líneas férreas, experimentaron notorio desarrollo otras importantísimas obras de pública utilidad. Desde 1831 reanudáronse los trabajos del *Canal de Castilla* por una empresa subvencionada, y aunque se interrumpieron otra vez por causa de la guerra civil, pudieron proseguirse a partir de 1842, dándoseles término a los diez años. Sobre la base de esta obra, que sumaba 227 kilómetros de longitud, se pensó en realizar una red de canales de navegación, a cuyo efecto se mandó estudiar en 1849 un proyecto de canalización de Medina de Rioseco a Zamora y de Valladolid a Segovia, con un ramal al Duero a fin de hacer este río navegable hasta Oporto, ordenándose además en 1851 un magno proyecto de unión del Atlántico con el Mediterráneo mediante un canal de tramo divisorio para enlazar las cuencas del Duero y del Ebro; lo costoso de la empresa, por las muchas dificultades que había que vencer, y la entonces reciente aplicación del vapor al transporte, contribuyeron a abandonar la ejecución de aquélla.

Por Ley de 26 de Noviembre de 1851 se concedió a Mr. Pourcet autorización para llevar a vías de hecho el proyec-

to de comunicar a Zaragoza con el mar siguiendo el curso del Ebro hasta Amposta y construyendo el Canal de San Carlos de la Rápita; pero el aludido concesionario cedió sus derechos en 1852 a la *Real Compañía de Canalización del Ebro*, y ésta, tras de practicar costosos trabajos, paralizó las obras. En cambio, merecen ser citadas por haber coronado el éxito los esfuerzos puestos en su realización las siguientes: el proyecto para mejorar la navegación del río Guadalquivir estudiado por don Canuto Carroza (Agosto de 1859) y realizado por don Manuel Pastor; la construcción del *Canal de Isabel II*, proyectada sobre trabajos anteriores por don Juan Rafo y don Juan Rivera (10 de Marzo de 1848) y culminada en 24 de Junio de 1857 con la inauguración, a presencia de la Reina Doña Isabel, del magnífico surtidor dispuesto en la calle de San Bernardo; la terminación en 1868 de las obras del *Acueducto de Tempul*, destinado al abastecimiento de la ciudad de Jerez de la Frontera, y la ejecución por una Compañía particular del *Pantano de Níjar* (1841-1850), en la provincia de Almería, para el riego de 13.000 hetáreas y el embalse de 15 millones de metros cúbicos de agua, y la realización del *Canal de Urgel* (1853-1861), también por particulares, según el proyecto de los Sres. Puigdollers y Ardanaz y bajo la competentísima dirección de don Domingo Cardenal.

Al mismo tiempo efectuáronse trabajos de importancia en el puerto de Valencia, según proyecto de don Juan Subercase, en el de Santander y en la dársena de San Sebastián; se mejoró y ensanchó el puerto de Barcelona y se hicieron obras de consideración en los de Bilbao, Alicante, Almería, Vinaroz, Tarragona, Laredo, Santoña y otros.

Finalmente, entre los puentes construídos en el período que historiamos, deben ser citados los colgantes de Fuentidueña, Menjíbar y el Gállego, y los de arcos de fundición del sistema Polenceau de Triana, en Sevilla, y de Isabel II, en Bilbao, construídos en 1845. Durante la Regencia de doña María Cristina de Austria ilustran con sus obras el período, Alberto Palacio, a quien se debe el transbordador, entre Portugalete y Las Arenas; Churruca, constructor del puerto artificial de Bilbao; Maristany, que dirigió la apertura del túnel de La



Argentiera, y Leonardo Torres Quevedo, genial inventor del aparato que determina las raíces reales e imaginarias de cualesquiera funciones algebraicas, constructor de una admirable serie de obras de ingeniería, e inmortalizado por dos de sus grandes creaciones: el dirigible autorrigido y el telekino que lleva su nombre.

#### IV.—CULTURA Y COSTUMBRES (1833-1902)

**102. La Instrucción pública.**—El período comprendido entre 1833 y 1902, caracterízase en punto a la enseñanza pública por el predominio de las ideas centralizadoras. El 25 de Septiembre de 1834 fué instaurada una *Dirección general de Estudios* compuesta de cinco vocales y dos suplentes, a la que se confió la misión de establecer de un modo definitivo y uniforme la enseñanza en España. Puede ser considerada dicha Dirección como el precedente del *Consejo de Instrucción pública*, pues aunque el Plan de 4 de Agosto de 1836 y el proyecto de reforma presentado a las Cortes en 1838 aspiraron, sin lograrlo, a suprimir aquélla y establecer el Consejo, cuando por Real Decreto de 1.º de Junio de 1843, refrendado por don Pedro Gómez de la Serna, Ministro por aquel entonces de la Gobernación, se ordenó que la antigua *Dirección* desapareciera, reemplazóla inmediatamente el *Consejo de Instrucción pública*, que comenzó a funcionar como autorizado cuerpo consultivo de los titulares del ramo. Reformado por disposiciones dictadas el 17 de Julio de 1844, 17 de Febrero de 1848 y 25 de Agosto de 1854, fué objeto de amplia reorganización por la Ley de 9 de Septiembre de 1857, y de nuevas variantes por el Decreto-ley de 9 de Octubre de 1866 y el Real Decreto de 17 de Junio de 1868. Por el Decreto-ley de 10 de Octubre de este último año, quedó suprimido, y por Real Decreto de 12 de Junio de 1874, convertido en ley en 29 de Diciembre de 1876, fué restaurado, viniendo desde entonces funcionando sin interrupción, aunque con las modificaciones impuestas por sucesivas reformas, de entre las cuales, la introducida por la Ley de 27 de Julio de 1890, puesta en vigor el 1.º de

Noviembre de 1895, clasificando los Consejeros en *electivos* (25), *natos* (6), y de *regio nombramiento* (22), y nombrando una *Comisión permanente*, es una de las más dignas de hacerse resaltar<sup>1</sup>.

Los asuntos relativos a la Instrucción pública dependientes, como sabemos, en un principio del Ministerio llamado originariamente de *Fomento*, después de lo *Interior* y, desde 1835, de la *Gobernación del Reino*, pasaron a formar con las Secciones de Agricultura, Obras públicas, y Comercio el Departamento fundado en 1847 con el nombre de *Secretaría del Estado y del Despacho de Comercio y Obras públicas*. Desde 1851 a 1855 dependió parte de la Instrucción pública del Ministerio de Gracia y Justicia, centralizándose otra vez en el Ministerio de Comercio, titulado ya desde 1851 *Ministerio de Fomento*, en el que ha premanecido hasta la fundación el 18 de Abril de 1900 del actual *Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes*, fundación anteriormente intentada, traducida aun en forma legal en el Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, pero no llevada a cabo hasta el citado año de 1900.

Aunque no ha sido el problema de la Instrucción pública el que mayores preocupaciones ha suscitado a los hombres públicos españoles durante el siglo XIX, sería injusto dejar de reconocer que el progreso experimentado en tan esencialísimo aspecto de la vida nacional en la segunda mitad de dicha centuria no acusa una mayor comprensión en las clases directoras acerca de las cuestiones que plantea la educación nacional.

Como nota común en la política practicada por nuestros Gobiernos en todos los grados de la enseñanza, debe ser reconocida la que en el transcurso del siglo XIX reiteradamente se acusa en el hecho de ir vigorizando los vínculos de dependencia de la Instrucción española respecto del Estado. Característica de los procedimientos de educación e instrucción en pasadas centurias fué la libertad con que el organismo social se constituyó para satisfacer las necesidades de cultura. Como ya apuntamos al hablar de la enseñanza durante el primer

1. Miguel Betegón, *Consejo de Instrucción pública. Datos de 1874-1906*.

tercio del siglo XIX, el concepto unitarista o centralizador de nuestros revolucionarios doceañistas, reaccionó contra aquella libertad docente, atribuyendo al Poder público la realización de fines en relación con la cultura del país, que secularmente había cumplido la actividad social con plena autonomía. Pues bien; tal orientación en pro del Estado docente se acentúa en España a partir de la muerte de Fernando VII, teniendo como expresiones legislativas más acusadas, la reforma de Gil de Zárate (17 de Septiembre de 1845) inspirada en modelos franceses y radicalmente centralizadora; la Ley de 1.º de Mayo de 1855 por la que se declaraba en estado de venta, entre otros, los predios pertenecientes a los establecimientos de Instrucción pública; la Ley general de 9 de Septiembre de 1857, o ley Moyano, también centralizadora; la de Presupuestos de 29 de Julio de 1887 que encomendó al Estado el pago de las obligaciones de los Institutos de segunda enseñanza, y los Reales Decretos de 21 de Enero de 1871 y de 26 de Octubre de 1901, el primero de los cuales inicia el propósito de transferir al Tesoro la obligación de abonar los créditos del Magisterio y, el segundo, que ordena el pase al Estado de la mayor parte de las atenciones de primera enseñanza.

Como excepción de la política centralizadora seguida por nuestros Gobiernos en punto a la organización docente, deben ser citados los Decretos de 14 y 21 de Octubre de 1868, que plantean la libertad de enseñanza, manteniendo, ello no obstante, la oficial. Pero aquel ensayo fracasó ruidosamente por la forma defectuosísima de haber sido llevado a cabo, y las disposiciones ministeriales dictadas desde 1874 se encargaron de rectificar lo hecho por el imperioso deseo de innovar, que siempre domina a los Gobiernos nacidos de revoluciones triunfadoras.

Tras de la precedente impresión general sobre el proceso de la Instrucción pública en el período que examinamos, pasemos a analizar la evolución operada en cada uno de sus grados<sup>1</sup>.

1. Para componer este extenso artículo nos hemos servido, fundamentalmente, de la *Colección legislativo de España* (continuación de la *Colección de Decretos*) y, además, de las obras siguientes: *De la Ins-*

*La enseñanza primaria.* — Al empezar el reinado de Isabel II, seguía en vigor el *Plan de escuelas y Reglamento general de primeras letras*, de 16 de Febrero de 1825. El 31 de Agosto de 1834 fué fundada la *Comisión central de Instrucción primaria*, de la que formó parte como caracterizado elemento el famoso pedagogo don Pablo Montesino. Producto de la fecunda labor de dicha Comisión fué la *Instrucción para el régimen y gobierno de las escuelas de primeras letras del Reino*, publicada el 21 de Octubre, en la cual, se establecían *Comisiones provinciales*, de *partido* y *municipales*, embrión de las llamadas después Juntas, y se proyectaba la fundación de una *Escuela Normal*. Asimismo, debióse a la iniciativa de la citada Comisión la *Ley provisional de primera enseñanza*, de 21 de Junio de 1838, la fundación, el 8 de Marzo de 1839, de la primera *Escuela Normal*, en Madrid, dirigida por don Pablo Montesino, y la apertura, bajo el patrocinio directo de la *Sociedad encargada de propagar y mejorar la educación del pueblo*, de algunas *Escuelas de párvulos*, que llegaron a sumar 41 públicas y 54 privadas el año de 1850, fecha en que desapareció la filantrópica Sociedad. Del primer núcleo de maestros normalistas formado en Madrid bajo la autorizada férula de Montesino, partió el más decidido impulso para la fundación de las Normales de provincia, las que, regularizadas en su actuación por el *Reglamento orgánico*, de 15 de Octubre de 1843, llegaron a funcionar en 42 de las 49 provincias del Reino. El Real Decreto de 30 de Marzo de 1840 reorganizó las Normales, y desarrollando el principio de la *inspección* de las Escuelas primarias, *inspección* anteriormente confiada a las Comisiones provinciales y locales, dió carácter permanente a dicha institución fiscalizadora y asesora del Magisterio, nombrando seis Inspectores generales y un Inspector en cada provincia.

Funcionaron también durante la primera mitad del siglo XIX algunas *Escuelas de adultos*, destinadas solamente entonces a

*trucción pública en España*, por Antonio Gil de Zárate; *La Enseñanza primaria en España*, por Manuel B. Cossio y Lorenzo Luzuriaga; *Educación de la Adolescencia*, por Eloy Luis André; *La Enseñanza en el siglo XX*, por Becerro de Bengoa; *Historia de las Universidades*, por La Fuente; *La vida corporativa de los estudiantes españoles en sus relaciones con la historia de las Universidades*, por Menéndez y Pelayo.

suplir la falta de instrucción primaria en quienes no la habían recibido durante su infancia.

La Ley general de 9 de Septiembre de 1857 no hizo en punto a la enseñanza primaria más que reunir con pequeñas variantes las disposiciones anteriormente dictadas. Dió carácter obligatorio a la instrucción de primer grado; dividió los maestros en *elementales*, *superiores* y *normales*, según los años de estudio que hubiesen seguido y, a tenor de tal división, clasificó las *Escuelas* en *elementales*, *superiores* y *normales*, admitiendo también las *Escuelas incompletas* y las de *temporada* (que serían desempeñadas por adjuntos o pasantes), las *Escuelas de párvulos* (que habrían de establecerse, por lo menos, en las capitales de provincia y pueblos que llegasen a diez mil almas) y las de *adultos*, cuyo fomento procuraría el Gobierno a fin de que pudieran adquirir instrucción, no sólo quienes no la hubieran alcanzado durante la infancia, sino quienes desearan ampliar la recibida en dicho período de su existencia.

Respecto de las *Escuelas Normales de Maestras*, la Ley de 1857 se limitó a recomendarlas para mejorar la instrucción de las niñas. Las provincias, con excelente instinto, fundaron algunas desde 1860, elevándose su número a más de veinte en el año de 1864, y el Gobierno, por Real Orden de 24 de Febrero de 1858, convirtió la *Escuela Normal de Maestras de Madrid*, establecida sobre la base de la antigua escuela mutua lancasteriana, en *Central del Reino*, destinada a formar maestras elementales y superiores.

Sobre tales bases siguió organizada la Instrucción primaria hasta la Ley de 2 de Junio de 1868. Por esta nueva norma, orientada por punto general en un sentido reaccionario, fueron suprimidas las Escuelas Normales, sustituyéndolas, para la instrucción teórica de los maestros, por los *Institutos de segunda enseñanza*; pero la existencia de la referida Ley resultó harto efímera, pues sobrevenida la Revolución de Septiembre del mismo año, el Decreto-ley de 14 de Octubre restableció provisionalmente la legislación anterior, es decir, la de 1857, y declaró, además, libre la enseñanza primaria, reconociendo a todos los españoles el derecho de ejercerla y el de establecer



y dirigir Escuelas sin necesidad de título ni autorización previa. Habían de sostenerse, no obstante esto, las *Escuelas públicas*, pero los maestros encargados de dirigir las serían nombrados y pagados por los Ayuntamientos respectivos, y los mismos Ayuntamientos elegirían *Juntas locales de enseñanza*, y las Diputaciones *Juntas provinciales*, en sustitución de las antiguas *Comisiones y Juntas de Instrucción primaria*, primitivamente fundadas por la Ley de 1838 y, que tan señalados servicios habían prestado a los Gobiernos en la obra de difundir la luz del saber.

Los resultados de aquel ensayo de libertad docente fueron lamentabilísimos. Los Ayuntamientos usaron de las facultades que se les concedían suprimiendo escuelas a millares, escatimando a los maestros sus modestísimas dotaciones y dejando en muchos casos de abonarles éstas; las *Juntas provinciales de primera enseñanza* se convirtieron, a juicio del propio Gobierno que las había instituído, en “los más rudos adversarios de la enseñanza, defraudando enteramente las esperanzas que al instalarse hicieron concebir a la Nación”, y el Poder público, convencido de su desacierto, comenzó por rectificar su obra regulando el ejercicio de la libertad de enseñanza, para, según decía, “mejor protegerla e impedir que degenerase en perturbadora licencia”. Al fin, desaparecidas las circunstancias políticas que habían motivado la reforma, recobró el Estado sus anteriores funciones directivas, reanudando la política pedagógica centralizadora, característica del periodo que historiamos.

Desde la Ley de 2 de Junio de 1868, no se volvió a formular ninguna otra de carácter general sobre Instrucción primaria, reduciéndose las normas posteriormente dictadas a introducir modificaciones parciales enderezadas con plausible intención a acomodar este grado de enseñanza a las exigencias de la educación moderna y al progreso realizado en otros países.

En 1876, siendo ministro de Fomento el Conde de Toreno, se abrió en Madrid la *Escuela Modelo de párvulos*, organizada como *Jardines de la Infancia*, y se fundó en la Escuela Normal Central de Maestros una cátedra de Pedagogía froebeliana

En 1882, por iniciativa de la *Instrucción libre de enseñanza*, fué creado el *Museo Pedagógico* de Madrid, con el título de *Museo de Instrucción primaria*, para contribuir al estudio de los problemas modernos de la pedagogía, dar a conocer en España el movimiento pedagógico del extranjero y ayudar a la formación de los maestros. Asimismo, estimulado el Gobierno por el interés que en relación con los problemas de la instrucción primaria hubo de despertar la aludida *Instrucción libre de enseñanza*, estableció en el citado año de 1882 el *Patronato general de las Escuelas de párvulos* y el *Curso normal* para preparar a los maestros de dichas Escuelas, y por Real Decreto de 13 de Agosto reorganizó totalmente la *Escuela Normal Central de Maestras* de Madrid, a fin de poder fundar un Profesorado femenino capacitado para realizar su fecunda misión llevando el espíritu reformador a las Escuelas Normales de provincias.

La Ley de 6 de Julio de 1883 concedió a las maestras los mismos sueldos que a los maestros. En 1887 y por la Ley de Presupuestos de 29 de Junio pasaron al Estado los gastos de las Escuelas Normales y de la Inspección primaria, que hasta entonces abonaban las Diputaciones provinciales, y por la Ley de 16 de Julio fueron concedidos a los maestros los derechos pasivos y las vacaciones escolares durante el verano. También arranca del año 1887 la organización por el *Museo pedagógico* de colonias escolares de vacaciones y, en años sucesivos y merced también a sus instancias, se introduce la costumbre de celebrar periódicamente asambleas y exposiciones escolares.

El año de 1889 fundó en Granada el benemérito Catedrático de aquella Universidad don Andrés Manjón las admirables *Escuelas del Ave María*, basadas en punto al sistema de enseñanza en métodos intuitivos e inspiradas por un espíritu hondamente cristiano.

Finalmente, por Real Decreto de 26 de Octubre y Ley económica de 31 de Diciembre de 1901 pasaron al Presupuesto del Estado las atenciones de primera enseñanza, exceptuadas las de las Provincias Vascongadas y Navarra, realizándose plenamente con ello la iniciativa tomada por el partido liberal en 1886.

No obstante haber ordenado la Ley de 1857 que en todo pueblo de 500 almas debía existir una Escuela elemental de niños y otra, aunque fuera incompleta, de niñas, tal exigencia legal no se ha cumplido. En 1849 el número de escuelas primarias era de 12.357; en 1850 se elevó a 13.334, siendo 13.103 primarias, 41 de párvulos y 190 de adultos; en 1880, el total fué de 23.113; de ellas, 21.985 primarias, 417 de párvulos y 781 de adultos; en 1885, el total acusó 24.449; de ellas 22.996 primarias, 417 de párvulos y 1034 de adultos; y en 1908, elevóse el total a 35.649, correspondiendo 24.403 a la clase de escuelas primarias, 418 a la de párvulos y 11.828 a la de adultos.

Como puede apreciarse por la consideración de los datos precedentes, el número de Escuelas casi se ha triplicado en el espacio de sesenta y dos años; pero como la población ha crecido también y con ella el cúmulo de exigencias docentes, es indudable que cada vez es mayor la desproporción entre las necesidades colectivas de instrucción y los medios pedagógicos para satisfacerlas, resultando de ello que así como para cumplir las exigencias de la Ley de 1857 hacían falta fundar en 1880 unas 4.350 escuelas, en 1908 este déficit se elevaba a 9.505.

Y téngase presente que nada se ha apuntado todavía acerca de las condiciones materiales de los locales escolares, pues al fijar nuestra atención en tan esencial aspecto del problema sacamos en consecuencia, que, si en 1855 se daba la enseñanza en 13.334 edificios, 7.492 de ellos carecían de condiciones higiénicas; y que si en 1908 el número de edificios se elevaba a 22.572, solamente 10.302 merecían la categoría de buenos, quedando clasificados como regulares 9.891, y como malos 4.638.

Con el número de Escuelas creció, como era natural, el de maestros y el de alumnos, pues en 1855 sumaban los primeros de uno y otro sexo 16.645, y los segundos 876.085, y en 1900 elevábase el número de maestros a 23.730 y el de educandos a 1.617.824<sup>1</sup>. Ahora bien, poniendo esta cifra en relación con la total de niños de tres a doce años, que en 1887 ascendía ya

<sup>1</sup>. En 1887 los alumnos inscritos eran 1.356.136.

a 3.794.952, resulta que más de dos millones de ellos no recibían enseñanza.

A tamaña desproporción, todavía mayor a medida que se remonta nuestro examen a épocas menos avanzadas de la pasada centuria, se ha debido la persistencia de esa gran vergüenza nacional que se llama *analfabetismo* y que acusaba en 1860, en una población total de 15.673.481 habitantes, 11.837.391 de analfabetos, y en 1900, con un total de 18.618.086 denunciaba la existencia de 11.874.890 de españoles sin saber leer ni escribir<sup>1</sup>.

*La segunda enseñanza.* — Al iniciarse el reinado de Isabel II, seguía en vigor el Plan de estudios de segunda enseñanza que viera la luz pública el año de 1825. Durante el Ministerio de Istúriz, el titular de la cartera de Gobernación, Sr. Duque de Rivas, publicó sin la anuencia de las Cortes el *Plan de 4 de Agosto de 1836*, en el cual, aparecían las disciplinas secundarias distribuidas en dos grados: uno *elemental* y otro, *superior*. Comprensivo dicho Plan de casi todas las materias que hoy se incluyen en los estudios intermedios de los países más cultos, supuso un positivo adelanto respecto del Plan de 1825, mereciendo cumplido elogio el hecho de aparecer el griego, el árabe o el hebreo como enseñanza del grado superior. La situación política sobrevenida después del famoso motín de La Granja, dió al traste en la acertada reforma del Duque de Rivas, y no logró sustituirla con otra, limitándose los Gobiernos que se sucedieron desde 1837 hasta 1845 a reformar parcialmente los estudios secundarios y a ir estableciendo algunos *Institutos* en vista de las dificultades que las Cortes oponían a la aprobación de un plan general, como el rechazado en 1838 por el Senado primeramente establecido con arreglo a la Constitución de 1837, y el presentado a las Cámaras en Julio de 1841, que no llegó siquiera a discutirse.

Venida a tierra la Regencia de Espartero y tras del Gobierno provisional de Agosto a Noviembre de 1843 y el efí-

1. Aunque dicha aterradora suma haya sido con fundamento tachada de errónea, es indudable que no por restar de ella algunos miles, deja de ser formidable el número de analfabetos.

mero Gabinete presidido por don Salustiano de Olózaga, ascendió al Poder el partido moderado, y bajo su influjo y ocupando el Ministerio de la Gobernación don Pedro José Pidal en la situación presidida por el general Narváez, se implantó extraparlamentariamente, por el Real Decreto de 17 de Septiembre de 1845 el Plan llamado de Gil de Zárate, por ser éste quien, puesto al frente de la Sección de Instrucción pública, inspirara la reforma, con el asesoramiento de don José de la Revilla, Oficial del Ministerio, especializado en las cuestiones referentes a la enseñanza secundaria. También este Plan dividió en dos grados, *elemental* y de *ampliación*, los estudios intermedios. El *elemental* aparecía distribuido en cinco años, y el de *ampliación* subdividido en dos secciones: *letras* y *ciencias*. Constituía tal grado de ampliación lo que se denominaba *Facultad menor de Filosofía*, y a su terminación se adquiría el título de Licenciado en Letras o en Ciencias. La susodicha *Facultad menor de Filosofía*, entroncada con los estudios propiamente universitarios, se convirtió después en *Facultad mayor*, naciendo de ella las dos de *Filosofía* y *Letras* y de *Ciencias* que han llegado hasta nosotros.<sup>1</sup>

La reforma de Gil de Zárate, aunque notoriamente favorable a los estudios clásicos o literarios frente a las orientaciones realistas o modernas, representa un evidente progreso, y de haberse podido implantar totalmente, hubiera permitido forjar con ella clases directoras de hombres serios, conscien-

1. Resultaba, pues, que la segunda enseñanza era una verdadera Facultad de Filosofía en la que se distinguían los dos grados, clásicos en nuestras Universidades: *Bachillerato* y *Licenciatura*; bien es verdad que este último emplazado para los efectos de la colación, como veremos después, en la Universidad. Aprobado el alumno en las asignaturas del *período elemental*, era admitido al grado y, si lo aprobaba también, recibía el título de *Bachiller en Filosofía*. Tras de ello, si cursaba y obtenía la aprobación en las asignaturas de Perfección de la lengua latina, Lengua griega (dos cursos), Lengua inglesa o alemana, Literatura y Filosofía, todas del *grado de ampliación* podía graduarse de *Licenciado en Letras*, en la Universidad; si aprobaba las asignaturas de *Complemento de las matemáticas elementales*, Lengua griega, primer curso, Química general, Mineralogía, Botánica y Zoología, podía graduarse de *Licenciado en ciencias* en la Universidad, y el que aprobaba los estudios de una y otra Sección tenía derecho a optar al título de *Licenciado en Filosofía*. Todo lo anterior, sin salir del ámbito propio de la segunda enseñanza. Posteriormente, el graduado en la Licenciatura podía seguir cursos superiores de Letras o de Ciencias, organizados en la Universidad, a fin de obtener el grado de *Doctor en Letras o en Ciencias*.



tes de su responsabilidad moral y de los destinos históricos de su patria<sup>1</sup>.

Complemento de la fecunda labor de Gil de Zárate en punto a la enseñanza secundaria fué la difusión de Centros docentes consagrados a darla. Funcionaron por aquel entonces, en efecto, once *Institutos universitarios* (dos en Madrid y uno en cada una de las siguientes capitales: Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza); treinta y tres *provinciales de primera clase* (Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Baleares, Bilbao, Burgos, Cáceres, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Huesca, Jaén, Jerez de la Frontera, León, Lérida, Logroño, Málaga, Murcia, Monforte, Orense, Pamplona, Pontevedra, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Toledo, Vergara y Vitoria); tres *provinciales de segunda clase* (Ávila, Teruel y Zaragoza), y cuatro *locales* (Algeciras, Cádiz, Figueras y Osuna).

Espíritu el de Gil de Zárate realmente selecto, comprendió el carácter normativo y público de los estudios secundarios y aspiró también a que fuesen populares. “La segunda enseñanza — dice en su conocida *Historia de la Instrucción pública en España* — es objeto de particular esmero en los Gobiernos ilustrados y de saña para los opresores. Por eso también muestra el clero tal interés en apoderarse de ella, porque con ella sabe que tiene en sus manos el regulador de las ideas y de las aspiraciones del pueblo”<sup>2</sup>.

Un nuevo Plan, el de 1847,<sup>3</sup> vino a sustituir al que acabamos de considerar. Distribuíanse en el de 1847 las enseñanzas en cinco años, se conservaba del anterior el cultivo de las lenguas vivas y sólo el del latín entre las muertas, y con positivo acierto se incluían como disciplinas obligatorias el di-

1. Consúltese la obra del catedrático D. Eloy Luis-André, *Educación de la Adolescencia*.

2. Gil de Zárate, *Historia de la Instrucción pública en España*, tomo II, pág. 4.

3. Las materias incluidas en este Plan eran: Religión y Moral, Lengua Española, Idem latina, Retórica y Poética, Elementos de Geografía, de Historia general y particular de España, Elementos de Matemáticas, Idem de Psicología, Ideología y Lógica, Idem de Física experimental y de Química, Nociones de Historia Natural, Lenguas vivas, Dibujo y Gimnasia.

bujo y la gimnasia. Tras del plan del 47 se sucedieron, el de 1850 que suprimió las lenguas vivas, el dibujo y la gimnasia, y redujo el resto de las materias, y el de 1852 que dividió otra vez los estudios en dos periodos: uno, que llamó de *Latinidad y Humanidades* (tres años), y otro, de *Estudios elementales de Filosofía* (tres años). El primero se reducía a las Gramáticas castellana y latina, a la Doctrina cristiana e Historia Sagrada y a los ritos romanos, la Mitología y los elementos de Retórica y Poética. El segundo, aunque denominado de Estudios elementales de Filosofía, daba escasa representación a esta rama del saber.

El 9 de Septiembre de 1857 y en uso de la autorización concedida al Gobierno por la Ley de bases de 17 de Julio del mismo año, fué publicada la *Ley general de Instrucción pública*, denominada Ley Moyano. A tenor de sus prescripciones en orden a la segunda enseñanza, había de comprender ésta dos linajes de estudios, a saber: *Estudios generales* y *Estudios de aplicación*. Los generales, divididos en dos períodos, el primero de dos años, y el segundo de cuatro, daban derecho a quien los aprobase y, además, sufriese con éxito el examen de reválida, a la obtención del título de *Bachiller en Artes*. Los estudios de *aplicación*, que consistían en Dibujo lineal y de figura, Nociones de Agricultura, Aritmética mercantil y cualesquiera otros conocimientos de inmediata aplicación a la Agricultura, Arte, Industria, Comercio y Náutica, podrían ser cursados después de sufrir el alumno un examen general de las materias que comprendía la primera enseñanza superior. Aprobadas las aludidas disciplinas de aplicación, podrían recibir los escolares un certificado de *Peritos* en las materias a que especialmente se hubieran dedicado.

Digna de elogio resulta la propensión manifestada por Moyano al considerar el primer período de los Estudios generales como un complemento de la enseñanza primaria, como un testimonio vivo de la solidaridad que debe existir entre la Escuela y el Instituto; pero el carácter preferentemente intelectualista del segundo período y la omisión que en él se advierte de cuanto se refiere a la educación física y artística, le hacen inferior a algunos de los Planes precedentes. Res-

pecto a las disciplinas de *aplicación* (que encerraban en sí el germen de las futuras Escuelas de Comercio, de Agricultura y de Artes e Industrias), es indudable que su inclusión en el cuadro de enseñanzas de los Institutos partía de la confusión entre la enseñanza secundaria de carácter cultural y la enseñanza secundaria de carácter profesional.

Los Establecimientos públicos de segundo grado se dividirían según la Ley que examinamos en *Institutos de primera*, que serían los de Madrid; *Institutos de segunda*, que funcionarían en las capitales de provincia de primera o segunda clase, o en pueblos donde existiera Universidad; e *Institutos de tercera*, en cuya categoría habían de entrar los de las demás poblaciones. Asimismo, se distinguían los *Institutos provinciales* y los *locales*, según que su sostenimiento estuviera a cargo de las provincias o de los pueblos.

Al Plan de Moyano siguieron, el de 1858, que comprendió todas las materias en un solo ciclo de cinco años, redujo las lenguas vivas al francés y prescindió de la Geometría; el de 1861, también en cinco años, que intensificó el estudio del griego; el de 1866, dividido en dos períodos de tres años cada uno, que suprimió el griego, añadió a la Aritmética y al Álgebra principios de Geometría e hizo exigible la traducción del francés para obtener el grado de Bachiller; el de 1867, con pocas variantes respecto al anterior; el de 1868, que ofrece la característica de ser doble, pues organiza un *grado con latín* y otro sin dicha lengua, dominando en este último las Ciencias morales y políticas y exigiendo elementos de Agricultura, Industria fabril y Comercio; los de Junio y Agosto de 1873; el Plan de 1880, que sigue en buena parte al de 1868, pero introduce la novedad de incluir la enseñanza de tres lenguas vivas (francés, inglés y alemán), y organiza, además, una sección de *Estudios de aplicación* que, con respecto a la Ley de 1857, amplía dichas materias; el de 1894 o Plan de Groizard, que dividía el Bachillerato en dos períodos: uno, de *Estudios generales*, y otro, de *Preparatorios*, este último subdividido en *Sección de Ciencias Morales* y *Sección de Ciencias Físico-Naturales*, cada una de ellas comprensiva de dos años de enseñanza; el Plan de 1895, que incorpora los

estudios de Religión, instituidos por Real Orden de 25 de Enero de dicho año y reduce el cuadro de materias a quince asignaturas que han de ser cursadas en cinco años; el de 1898 debido al Sr. Gamazo, en el que aparecen las disciplinas distribuidas en seis años, dentro de cada uno de los cuales se estudian cinco o seis asignaturas distintas en lección alterna; el Plan de 1899, llamado del Marqués de Pidal, de orientación clásica, organizado sobre la base del método cíclico o progresivo desarrollado en siete años; el de García Alíx, de 20 de Julio de 1900, que reduce a seis años los del Bachillerato y que, reaccionando contra el excesivo clasicismo del Plan de Pidal, aspira a que predomine el sentido técnico y moderno, y el llamado Plan del Conde de Romanones, establecido por Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, que distribuye las enseñanzas también en seis años, introduce la Caligrafía, ordena la división de las clases en secciones y mezcla las enseñanzas generales con las técnicas.

Fuera de los límites de la presente obra, cae el Plan de 6 de Septiembre de 1903, publicado por el Ministro Sr. Bugallal, no como reforma total de las enseñanzas de segundo grado, sino como prudente reducción del Plan anterior. A tenor del aludido de 1903, refúndense en efecto, los tres cursos obligatorios de Dibujo en dos, y en dos también los seis de Gimnasia; se dejan dos cursos de Geografía, englobando en el primero la Cosmografía y Física del Globo y prescindiendo de la Geografía Comercial y Estadística; se suprime un curso de Caligrafía; deja de incluirse la enseñanza de inglés y de alemán, y se traslada la del latín al segundo y tercer año, en vez del tercero y cuarto, para evitar su coincidencia con igual enseñanza del francés.

Tales son, rápidamente considerados, los múltiples Planes que han tratado de organizar los estudios secundarios desde 1833 a 1903, resultando de su análisis que en unos predomina la orientación clásica, en otros se aspira a equilibrarla con el sentido realista o moderno, en algunos se acentúa el carácter técnico o profesional, y en todos se advierte la preocupación del legislador por definir un grado de enseñanza que, según el criterio de cada Ministro, o aparece preferentemente

dirigido a dar una cultura general preparatoria para la vida, e manifiestamente se brinda a capacitar al alumno para el ingreso en las enseñanzas superiores, o, con mejor intención que fortuna, aspira a satisfacer ambas exigencias.

Aunque pueden ser consideradas como instituciones pedagógicas precursoras de los *Institutos de segunda enseñanza*, el Colegio Imperial de San Isidro, los Colegios oficiales de Jóvenes Nobles de Isabel la Católica y el Seminario de Nobles, propiamente no se cursaba en ellos la segunda enseñanza. Las *Universidades de Provincia*, fundadas por el Plan presentado a las Cortes el año de 1821 y llamadas a dar la enseñanza de segundo grado, no llegaron a establecerse. El Plan del Duque de Rivas, de 1836, inspirado en el de 1821, fundó *Institutos elementales* dedicados a la enseñanza general de las clases acomodadas, e *Institutos superiores* organizados como centros preparatorios de los estudios de Facultad. El Plan de 1845, tomando por base el de 1836, distinguió tres clases de *Institutos* (*superiores*, de *segunda* y de *tercera*) y dos grados de enseñanza secundaria (*elemental* y *superior*). Los *Institutos de tercera* darían una parte del grado elemental; los de *segunda*, la enseñanza elemental completa, y los de *primera*, tanto el grado elemental como algunos estudios del de ampliación. Por último, el Plan de 1847 quiso suprimir el carácter preparatorio que asignaba Gil de Zárate a los cursos de *ampliación* y emplazó éstos en los estudios de Facultad, convirtiendo la de *Filosofía* en *Facultad mayor*.

Al organizarse definitivamente los Institutos en 1845, se instituyó el *Cuerpo de Regentes*, en el cual se ingresaba optando el aspirante a una asignatura determinada y practicando el ejercicio en la correspondiente Universidad. Dicho cargo de Regente se exigía para dedicarse a la enseñanza privada y para hacer oposiciones a cátedras, y constituía como un embrión de noviciado en el que se comenzaba a adquirir la indispensable técnica pedagógica. Abundando en la necesidad de tal preparación del personal docente, el Real Decreto de 2 de Julio de 1847 creó una *Escuela Normal* para profesores de segunda enseñanza, a la cual Escuela acudirían los alumnos que, mediante concurso, enviaran las



Universidades. Los estudiantes que fueran aprobados en la *Normal*, gozarían de las siguientes ventajas: ser sin más ejercicios Licenciados en su Sección respectiva y *Regentes de primera clase*, con título gratuitamente concedido, y tener durante los tres años siguientes un sueldo de cinco mil reales. El Real Decreto de 28 de Agosto de 1850, refrendado por Seijas Lozano, perfeccionó la organización del aludido Centro normalista al establecer minuciosamente los principios que habían de regir la que llamó *Escuela Normal de Filosofía*, fundada "con el fin de formar Profesores para los Institutos y también para las Escuelas especiales cuyos Reglamentos lo exijan". La enseñanza en la citada Escuela duraría, para quienes desearan tomar el grado de Licenciado, el tiempo necesario para la recepción del mismo. Conforme fueran saliendo los alumnos, ya ultimados sus estudios, recibirían un número destinado a fijar el orden de su colocación para cubrir las vacantes que ocurrieran en su respectiva Facultad, pero hasta que fueran colocados en la correspondiente Cátedra, tenían la obligación de servir como Ayudantes o sustitutos en los establecimientos de Instrucción pública a que los destinare el Gobierno.

La oposición era el procedimiento general de ingreso en la cátedra según los planes de 1845 y 1847. Consistía aquélla en la práctica de tres ejercicios: uno escrito y compuesto durante veinticuatro horas de incomunicación del opositor; otro de explicación de una lección durante sesenta minutos, y otro de contestación a varias preguntas en una hora. Según la Ley de 1857, que mantuvo la división de los Institutos en tres clases, la oposición a las cátedras vacantes en éstos se verificaría directamente en las que se produjeran en los Institutos de tercera, pasando después por concurso los catedráticos de Institutos de tercera a los de segunda, y, por el mismo procedimiento, los de segunda a los de primera.

Respecto de la variedad de matrícula reconocida por los Decretos de 1845 y 1847, es decir, la *oficial* y la *privada*, el Real Decreto de 28 de Agosto de 1850 y la Ley general de 1857 añadieron una más: la *enseñanza doméstica* o reci-

bida en casa de los padres, que sólo era permitida para la preparación de las materias que integraban el primer período de la segunda enseñanza. Cursados y aprobados los *estudios generales* de ésta, podría el alumno ser admitido al examen de grado de *Bachiller en Artes*, y terminados los de *aplicación*, recibiría un certificado de *Perito* en la carrera a que especialmente se hubiera dedicado. Tal título de *Bachiller en Artes* quedó reducido simplemente al de *Bachiller* por la ley de 7 de Mayo de 1870 que, además, suprimió el antiguo grado de Bachiller en todas las Facultades.

Dependientes los Institutos en el orden económico de las Diputaciones y Ayuntamientos, fueron con el tiempo pasando a cargo del Gobierno. Por Decreto de 3 de Marzo de 1858 quedaron los dos de Madrid bajo la férula directa del Estado, y si bien volvieron por Decreto de 3 de Agosto de 1866 a ser mantenidos por la Diputación, a virtud de otro Decreto, el de 14 de Noviembre de 1874, pasaron nueva y definitivamente al Presupuesto general de Instrucción pública. La diferencia, establecida por la legislación anterior entre *Institutos provinciales y locales*, quedó suprimida por la Ley de 13 de Junio de 1870, y por la de Presupuestos de 29 de Junio de 1887 los gastos de todos los Institutos corrieron a cargo del Estado.

Como instituciones complementarias de los *Institutos* funcionaron en buena parte del período que historiamos los llamados *Colegios*. Su precedente lo tenemos en pasadas centurias en las llamadas *Casas-Pensión*, sobre las que Carlos III dió algunas circulares regulando su funcionamiento. Como ya apuntamos, en 1825 se fundaron los *Colegios de Humanidades* con carácter oficial; pero estos Centros desaparecieron durante la primera guerra civil. Restablecida la paz y en vista del desorden con que funcionaban los numerosos Colegios particulares a la sazón existentes, Gil de Zárate propuso organizar una inspección de dichos establecimientos privados y, a la vez, la fundación de *Colegios oficiales* en los que vivieran los alumnos bajo un régimen de internado. En su consecuencia, el Plan de 1845 prescribió la fundación de los que llamó *Colegios Reales*, estableciéndose en Madrid, Se-

villa, Granada y Valencia, en edificios ya existentes, como el Seminario y los Colegios de San Telmo, San Bartolomé y Santiago y San Pablo. No dió el ensayo todo el satisfactorio resultado que se deseaba y llegó a pesar de ello a pensarse en establecer el internado en todos los *Institutos*. Insistiendo en tal designio, la Ley de 1857 ordenó que en los mismos edificios que ocupaban los Institutos en sus inmediaciones se establecieran *Colegios* donde, por una módica retribución, se recibieran alumnos internos, quedando reglamentadas dichas residencias por el Decreto y Reglamento de 6 de Noviembre de 1861. Así continuaron viviendo los *Colegios* como agregados a los Institutos, hasta que decretada la libertad de enseñanza en 1868, dejó el Estado al arbitrio de las Diputaciones y Ayuntamientos el sostenerlos o suprimirlos (Decreto de 9 de Febrero de 1869). Al dictarse esta medida, había en España treinta *Colegios oficiales*, de los cuales, cuatro, se mantenían de sus rentas y podían dedicar un sobrante a sostener los Institutos que estaban adscritos; dos, se limitaban a vivir de sus ingresos y veinticuatro, no siéndoles éstos suficientes, tenían que recibir fondos de la Provincia o del Municipio.

En punto a particularidades sobre el cuadro de enseñanzas técnicas que habían de ser dadas en los Institutos con arreglo a la Ley de 1857, debe apuntarse que, por Real Decreto de 23 de Agosto de 1861, se refundieron en aquéllos los estudios de aplicación a la Agricultura, Artes, Industria y Comercio, que habilitaban para aspirar a los títulos de *Agriensores*, *Peritos tasadores de tierras*, y *Peritos mercantiles Químicos* y *Mecánicos*, debiendo seguir funcionando las *Escuelas elementales de aplicación* de la expresada índole, establecidas en las poblaciones que no tuviesen Instituto.

El número de éstos a mediados del siglo XIX, era de 52, que costaban anualmente 4.509.230 reales, ascendiendo sus ingresos a 2.322.053. En 1879 aumentó su número a 61, rebajándose a 58 al comenzar el presente siglo. La población escolar que cursaba la segunda enseñanza con carácter oficial, elevábase en 1851 a 4.480 alumnos. En el curso de 1867-68 ascendió a 18.903, decreciendo a 12.734 en el curso de 1878-

1879, pero acusando, en cambio, la enseñanza privada un considerable aumento, pues estando constituida en el curso de 1867-68 por 6.385 alumnos, en el de 1878-79 elevóse nada menos que a 14.290. Tal desproporción entre la matrícula oficial y la privada y libre seguía en aumento al finalizar la pasada centuria, pudiendo en números redondos calcularse que de los 30.000 alumnos que cursaban la segunda enseñanza, tan sólo una tercera parte asistía a la aulas de los Institutos.. Las otras dos terceras partes recibían en su mayoría la instrucción o en Colegios privados de carácter seglar, que en el curso de 1900-901 sumaban 387, correspondiendo a cada uno un promedio de 27 alumnos, o en Colegios dirigidos por religiosos, que ascendían a 79 con un total de 6.411 alumnos.

*La enseñanza universitaria.* — Al iniciarse con la muerte de Fernando VII el segundo período de nuestra historia contemporánea, las Universidades españolas seguían sometidas a las normas trazadas por el *Plan de Calomarde*, de 14 de Octubre de 1824. Fracasada una Comisión que hubo de nombrarse el 31 de Enero de 1834 para que redactara un nuevo Plan que, inspirado en el de 1821, no mereció ser aprobado, instituyóse la *Dirección general de Estudios* (Septiembre de 1834), que compuso otro proyecto de reforma, que sirvió de base al Duque de Rivas para decretar el Plan de 4 de Agosto de 1836. Este Plan fué derogado al mes cabal (el 4 de Septiembre) por una Real Orden dictada por el Gobierno progresista formado a raíz de los sucesos de La Granja. Fundamentó la aludida Real Orden tal derogación en las circunstancias de no haber contado el Duque de Rivas con el voto de las Cortes para dar legalidad a su reforma; pero es lo cierto que el triunfante progresismo, no atreviéndose por temor a los gastos que pudiera ocasionar a llevar a la práctica el Plan de 1821, apeló, en vísperas de la apertura del curso, al procedimiento extra-parlamentario de amoldar la vida universitaria al *Arreglo provisional de estudios*, implantado por la Real Orden de 29 de Septiembre de 1836.

Abiertas las Cortes constituyentes (Octubre de 1836), nada hicieron en punto a la reorganización de la enseñanza. En las primeras ordinarias reunidas con arreglo a las Constitución

de 1837, el Congreso aprobó un proyecto de reforma de las enseñanzas secundarias y superior, proyecto que no mereció la aquiescencia del Senado. En vista de tales dificultades, apeló el Gobierno a encargar a la *Dirección general de Estudios* la redacción en pocos artículos de unas bases capitales de reforma, presentándolas al Congreso; pero entonces, como tantas otras veces después, las pasiones políticas, ganosas de mejor palenque donde ventilar sus pleitos de ambición, hicieron caso omiso de las cuestiones relativas a la instrucción pública para enfrascarse en debates, si de harta menor importancia para el país, más ocasionados a producir las complicaciones y cambios apetecidos por el inquieto partidismo.

En su consecuencia, limitóse el Ministro de la Gobernación a preparar, independientemente de las Cortes, algunas reformas parciales, de entre las que debe ser mencionada la relativa a una nueva organización de la Universidad de Madrid. Habíase primeramente constituido ésta trasladando a la Corte, con el nombre de *Escuela provisional de Jurisprudencia*, las Facultades de Leyes y Cánones de la antigua y famosa Universidad complutense, instalándolas en el Seminario de Nobles (Noviembre de 1836). Las Facultades de Filosofía y Teología, que habían quedado en Alcalá, fueron asimismo traídas a Madrid durante el curso siguiente, estableciéndolas el Gobierno, juntamente con la *Escuela provisional*, en el edificio de las Salesas Nuevas (calle de San Bernardo). Sobre este núcleo de enseñanzas, se planeó la reorganización a que hemos aludido al principio de este párrafo; pero tampoco pudo implantarse por haber sobrevenido la revolución de Septiembre de 1840. El Gobierno que ocupó el Poder por causa de este acontecimiento, llevó a las Cortes un nuevo proyecto de reforma universitaria, que no fué siquiera discutido.

En vista de ello, continuaron los titulares de la cartera de Gobernación realizando modificaciones parciales sin la anuencia de las Cámaras. El 1.º de Octubre de 1842, un Decreto del Regente don Baldomero Espartero refundió en una sola, llamada de *Jurisprudencia*, las dos Facultades de Cánones y Leyes; fundóse por otro una *Escuela de Administración*; y a fin de dar a los estudios filosóficos en la Universidad de



Madrid toda la extensión e importancia que correspondía a la primera Escuela del Retiro, establecióse en ella, por Decreto de 8 de Junio de 1843, una *Facultad completa de Filosofía*.

Durante el Gobierno provisional constituído al cesar la Regencia del Duque de la Victoria, se publicó el Plan de estudios médicos de 10 de Octubre de 1843, inspirado por el célebre Doctor don Pedro Mata, Plan por el que se suprimían los *Colegios de Medicina y Cirugía* de Madrid, Barcelona y Cádiz, los de Farmacia de Madrid y Barcelona y la enseñanza de dichas ciencias en las Universidades literarias, fundándose en su lugar para la docencia de la Medicina, Cirugía y Farmacia, dos órdenes de *Escuelas*: el primero con el nombre de *Facultades*, de las que habría dos únicamente (Madrid y Barcelona), y el segundo, con el título de *Colegios*, de los que se establecerían uno en cada una de las siguientes ciudades: Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid y Santiago.

Elevado al Ministerio de la Gobernación don Pedro José Pidal y puesto al frente de la Instrucción pública el antiguo oficial de Secretaría don Antonio Gil de Zárate, ambos personajes, auxiliados por el funcionario don Pedro Juan Guillén, acometieron la obra de roformar la organización universitaria, oyendo antes a todos los Claustros y nombrando Comisiones especiales cuyos dictámenes, fueron examinados por el Consejo de Instrucción pública. "La historia de lo sucedido en los nueve años anteriores — dice Gil de Zárate, — me convenció de que nada se conseguiría por los medios parlamentarios, y que era preciso hacer lo que en 1836, esto es, publicar el nuevo plan por un Real Decreto". En efecto, por el de 17 de Septiembre de 1845, vió la luz pública el que nos ocupa. Su importancia en punto a las orientaciones que lo presiden y al influjo que hubo de ejercer en las ulteriores reformas universitarias, obliga a un estudio regularmente minucioso del mismo.

Empezaba el Plan que examinamos por definir los estudios de *Facultad mayor* diciendo que eran los que habilitaban para ciertas carreras y profesiones, comprendiendo en tal categoría a las Facultades siguientes: Teología, Jurisprudencia, Me-

dicina, y Farmacia. Para ingresar en ellas, se exigía estar graduado de *Bachiller en Filosofía*, o lo que es lo mismo, haber seguido el Bachillerato elemental y tener la reválida del mismo y, además, haber aprobado de los estudios de ampliación las asignaturas siguientes: *Perfección de la lengua latina*, *Lengua griega* (un curso) y *Literatura*, si se trataba de ingresar en la *Facultad mayor de Teología*: *Perfección de la lengua latina*, *Literatura* y *Filosofía*, si se quería cursar la *Facultad de Jurisprudencia*, y *Química general*, *Mineralogía*, *Zoología* y *Botánica*, si se aspiraba a seguir los estudios de las *Facultades de Medicina* o de *Farmacia*.

Dentro ya de cualquiera de las Facultades dichas, dividiánse éstas en tres grados, a saber: *Bachillerato*, que duraba cinco años en todas las Facultades; *Licenciatura*, que duraba dos años y era el que habilitaba para el ejercicio profesional, y *Doctorado*, que se cursaba en otros dos años. Este último grado brindábase especialmente a cuantos pretendían dedicarse al Profesorado, y se centralizaba en la Universidad de Madrid a fin de que pudieran concurrir a perfeccionarse en una misma Escuela los que quisieran profesar la enseñanza. Los *Doctorados* que en la Universidad Central se organizaban eran los de Letras, Ciencias, Teología, Jurisprudencia, Medicina y Farmacia.

Las aludidas *Facultades mayores* de Teología, Jurisprudencia, Medicina y Farmacia habían de enseñarse en las Universidades, que quedarían reducidas a diez, cuales eran: Barcelona, Granada, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, convirtiéndose las antiguas de Canarias, Huesca y Toledo en Institutos de segunda enseñanza. Existiría la Facultad de Jurisprudencia en todas las Universidades; de Teología, en las de Madrid, Oviedo, Sevilla, Valladolid y Zaragoza; de Medicina en Madrid, Barcelona, Santiago, Valencia y Cádiz, formando esta última parte de la Universidad de Sevilla; y, por último, Facultad de Farmacia en Madrid y Barcelona.

Los profesores dedicados a la enseñanza en las Universidades se dividirían en *Regentes de primera*, *Regentes agregados* y *Catedráticos*. Recibirían el primer nombre quienes estuvieran

habilitados para dedicarse a la docencia de *cualquier asignatura* de su respectiva Facultad, habilitación que conseguían mediante ejercicios practicados en las diferentes Universidades; llamaríanse *Regentes agregados* los nombrados por el Gobierno a fin de *sustituir* a los Catedráticos en vacantes, ausencia y enfermedades, y tendrían la consideración de *Catedráticos* los que hubieran obtenido mediante oposición, que se verificaba en Madrid, la propiedad de alguna asignatura. Tanto los Catedráticos de Facultad mayor como los de ampliación de los Institutos, excepto los de Lenguas vivas, formarían un solo Escalafón, en el cual el ascenso y mejora de sueldo había de verificarse con arreglo a estos dos conceptos: 1.º Antigüedad en la enseñanza; 2.º, Categoría en la carrera. En razón a la antigüedad, los Catedráticos habían de cobrar sueldos que oscilarían entre doce mil y diez y ocho mil reales. En relación con la categoría, dividíanse en Catedráticos de *entrada*, *ascenso* y *término*, cobrando los de ascenso cuatro mil reales más sobre el sueldo que percibían en la Escala de antigüedad, y ocho mil reales más los de término. Estas dos categorías obteníanse por oposición que se verificaba en Madrid. Los Catedráticos de la Central disfrutaban de cuatro mil reales además de lo que les correspondía por antigüedad y categoría.

A tenor del artículo 42 del Real Decreto que analizamos y del artículo 143 del Reglamento para su ejecución, de 22 de Octubre de 1845, el curso académico se abría el 1.º de Octubre durando las clases hasta el 14 de Junio. El 15 de este mes empezaban los exámenes, y el 1.º de Julio las vacaciones. Los exámenes habían de verificarse por cursos completos y no por asignaturas aisladas, respondiendo el alumno a seis preguntas sacadas a la suerte. Las notas que se podían otorgar eran las de *Sobresaliente*, *Bueno*, *Regular* y *Suspense*. Al examinando al que se le diera esta última, reconocíasele el derecho de sufrir nueva prueba académica en el mes de Septiembre, y si durante este período de exámenes extraordinarios no merecía la aprobación, era calificado de *Reprobado* en vez de *Suspense*. En cuanto a libros de texto, se facultaba a los Catedráticos para elegir el que estimaran mejor de entre los comprendidos en la lista que al efecto publicaba el Gobier-

no, lista en la **que**, se designarían, a lo más, seis obras por cada asignatura.

El Plan que acabamos de reseñar consumó la obra centralizadora iniciada a fines del siglo XVIII. El Plan de Calomarde, de 1824, había establecido ya la uniformidad en la enseñanza en todas las Universidades, a las que sujetó a un mismo régimen; pero el de 1845 llevó hasta las últimas consecuencias los precedentes en que se inspirara. "Desde aquel día — escribe Menéndez y Pelayo,—la Universidad, como persona moral, como Centro de vida propia, dejó de existir en España. Le sustituyó la oficina llamada Instrucción pública, de la cual emanaron programas, libros de texto, nombramientos de Rectores y Catedráticos, y aun circulares y órdenes menudísimas sobre lo más trivial del régimen interno de las aulas. A las antiguas Escuelas en que el Gobierno para nada intervenía, sucedieron otras en que el Gobierno intervenía en todo, aun en los pormenores de indumentaria y en el buen servicio de los bedeles. Nada menos español, nada más antipático a la genialidad nacional que esta administración tan correcta, esta reglamentación inacabable, ideal perpetuo de los moderados. Nada más contrario tampoco a la generosa y soberbia independencia de que disfrutaban las grandes instituciones docentes del mundo moderno, las Universidades inglesas y alemanas. ¿Quién concibe a Max Müller o a Mommsen ajustando el modo y forma de su enseñanza al capricho de un oficial de secretaría o de un covachuelista sin más letras que las que se adquieren en la redacción de un periódico o en la sala de conferencias?"<sup>1</sup>

El Plan de 1845 fué modificado por el Real Decreto de 8 de Julio de 1847, siendo Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas don Nicomedes Pastor Díaz. Fundamentalmente respetó éste las líneas generales de la reforma de Gil de Zárate, introduciendo algunas variaciones, que pasamos a detallar.

Redujo la segunda enseñanza a cinco años, aprobados los cuales y el grado o reválida, obtenía el alumno el título de *Bachiller en Filosofía*. Los  *cursos de ampliación*  establecidos

1. *Historia de los Heterodoxos españoles*, tomo III, pág. 629.

en los Institutos por el Plan de 1845, emplazólos el de 1847 en la Universidad, en la que instituyó como *nueva Facultad mayor*, la de *Filosofía*, dividida en cuatro *Secciones*: *Literatura*, *Ciencias filosóficas*, *Ciencias físico-matemáticas* y *Ciencias naturales*. Cada una de estas *Secciones* exigiría para ser cursada tres años, al cabo de los cuales el que se hubiere examinado de la totalidad de cualquiera de las dos primeras, recibiría el título de *Licenciado en Letras*, con expresión de la *Sección* a que correspondía, y el que lo hubiese hecho del completo de las materias de cualquiera de las dos segundas, obtendría el título de *Licenciado en Ciencias físico-matemáticas o naturales*, según la *Sección* de donde procediera.

Para el ingreso en las Facultades de Teología, Jurisprudencia, Medicina y Farmacia, se seguía exigiendo el grado de *Bachiller en Filosofía* y haber aprobado en la Facultad de Filosofía las asignaturas de Literatura y Composición latinas, Literatura española y Filosofía y su historia, si se trataba de seguir la carrera de Teólogo o de Jurista, y las de Química general, Mineralogía, Zoología y Botánica, si el aspirante trataba de consagrarse a los estudios médicos o farmacéuticos.

Las carreras de Teología, Jurisprudencia y Medicina duraban, según este Plan, siete años, y lo de Farmacia cinco, cursados los cuales quedaba el alumno capacitado legalmente para aspirar a la *Licenciatura*, debiendo antes haber obtenido el correspondiente título de *Bachiller* en la Facultad de que se tratase.

Los ejercicios de cada uno de los grados universitarios, organizados por los Reglamentos de 22 de Octubre de 1845 y 19 de Agosto de 1847, discrepaban solamente en detalle. El *grado de Bachiller* consistía según la reforma de 1845 en responder durante dos horas a las preguntas de los examinadores, y según el Reglamento de 1847 y tratándose del Bachillerato en Filosofía, en practicar dos ejercicios, el uno de preguntas sobre Gramática y traducción latina durante una hora, y el otro, de hora y media, relativo al resto de las materias estudiadas. El *grado de Licenciado* se componía de tres ejercicios; el primero secreto y de tanteo, el segundo público y consis-



tente en componer un discurso o memoria durante cuatro días (Reglamento de 1845), o durante veinticuatro horas de incomunicación (Reglamento de 1847), sobre uno de los tres temas sacados a la suerte por el graduado, y el tercero en explicar de viva voz un tema, también sacado a la suerte, y preparado sin auxilio de libros durante dos horas. El *grado de Doctor* consistía según el Reglamento de 1845 en dos ejercicios iguales al segundo y tercero de la Licenciatura, y, según el Reglamento de 1847, en la explicación de una lección.

Las *investiduras de los grados de Licenciado y Doctor*, otorgadas con las mismas solemnidades a tenor del Reglamento de 1845, fueron diferenciadas por el de 1847. Acerca de la de *Licenciado* dice esta última disposición: "En día festivo se reunirá la Facultad a que pertenezca el graduado, presidida por el Rector o el Decano en delegación suya, con asistencia de los Doctores, agregados y demás personas que quieran convidar los candidatos, debiendo aquéllos presentarse en traje de ceremonia. El graduando será introducido en la sala por su padrino, que le presentará haciendo una breve oración. En seguida aquél subirá a la tribuna y leerá un discurso escrito en castellano sobre algún punto de la Facultad. Concluído este acto, se acercará a la mesa de la Presidencia, pondrá la mano en el libro de los Santos Evangelios y el Secretario leerá en alta voz el juramento siguiente: ¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios obedecer la Constitución de la Monarquía, sancionada en 23 de Mayo de 1845, ser fiel a la Reina Doña Isabel II y cumplir las obligaciones que impone el grado de Licenciado en... que se os va a conferir? El graduando contestará: "Sí, juro". Y el Presidente dirá: "Si así lo hicieris, Dios os lo premie, y si no, os lo demande." Acto continuo el graduando se acercará al Presidente, que añadirá: "Haciendo uso de la autoridad que me está confiada, y en nombre del Gobierno de S. M. la Reina Doña Isabel II, os declaro Licenciado en la Facultad de ... por haber considerado los jueces del examen que sois digno de este honor"; dicho lo cual, le colocará, con la solemnidad posible, las insignias del grado. En seguida se sentarán todos

los circunstantes, y el graduando saldrá de la sala acompañado del padrino y de los bedeles, pronunciando primero una breve oración de gracias". "Si fueren muchos los graduandos, — dice el artículo 338, — se presentarán todos a la vez introducidos por un padrino común, y el discurso será leído por uno de ellos, que elegirán".

El *grado de Doctor* había de conferirse individualmente de la manera que sigue: "El candidato — ordena el artículo 339 — escribirá una tesis sobre un punto cualquiera de la Facultad o ciencia, y la imprimirá entregando al Rector, con la anticipación de ocho días, el suficiente número de ejemplares para repartir al Claustro. Llegado el día de la ceremonia, después de ser introducido en la sala por el padrino, como en el caso de la licenciatura, leerá el impreso que se distribuirá entre los circunstantes; teniendo obligación el graduante de sostener su tesis, durante media hora, contra los argumentos que le hagan los Catedráticos. Transcurrido que sea dicho tiempo, el Presidente le recibirá el juramento y conferirá el grado con las insignias, hecho lo cual se retirará acompañado del padrino y de los bedeles, después de abrazar a los Doctores y de dar gracias al Claustro". En todos los actos precedentes se podría emplear la pompa que los graduandos quisieran, pero no se exigiría de ninguno de ellos que contribuyera forzosamente para ella.

Con independencia de los grados y como detalles dignos de mención especial recordaremos que en punto a *libros de texto*, el Reglamento de 1847 establecía la obligación en que estaba el alumno de comprarlos y escribir en la portada su nombre y apellidos y el número que tuviera en la lista de clase, y que en cuanto al *traje de los estudiantes* para asistir a clase prescribía que se compusiera de "levita de color obscuro, pantalón, corbata negra y sombrero redondo, pudiendo en invierno llevar capa o gabán, pero en ninguna época chaquetas, fajas, sombreros gachos y botines de cuero".

A las iniciativas de Bravo Murillo durante su gestión como Ministro de Comercio e Instrucción (Noviembre de 1847 a Agosto de 1849), se debe la organización de un *concurso para la adopción de libros de texto*, el establecimiento de una

*Inspección* para hacer más eficaz el funcionamiento de los Institutos, y el arreglo de los estudios médicos de 30 de Agosto de 1849, a cuya virtud, se instituían Facultades de Medicina de primera clase en Madrid, Barcelona y Cádiz, y de segunda en Valencia, Santiago, Salamanca y Granada, ordenando que en éstas últimas durasen los estudios cinco años, a fin de aumentar el número de médicos, pues según cálculos hechos, no había en la Península más que un médico y un cirujano por cada mil habitantes, y mientras en 1844 el número de alumnos inscritos en las Facultades de Medicina, era el de 3.473, en 1849 no pasaba de 1.906.

Una nueva reforma de carácter general hubo de realizarse en la enseñanza universitaria por Real Decreto de 28 de Agosto de 1850, refrendado por el señor Seijas Lozano. Esencialmente respetó éste la organización de 1845 y 1847, consistiendo las modificaciones que introdujo en pequeñas variantes que procuraremos sintetizar en pocas palabras: En los períodos de la *Licenciatura* y del *Doctorado de la Facultad de Filosofía*, distinguió las *Secciones* que siguen: *Literatura, Administración, Ciencias Físico-Matemáticas* y *Ciencias Naturales*. La investidura del grado de Bachiller en todas las Facultades se haría por los Decanos respectivos; la del Licenciado por los Rectores y la de Doctor por el Ministro, que podría delegar esta misión en algún alto funcionario del ramo. Suprimía en las Universidades el cargo de Regente agregado, reemplazándolo por el de Sustituto. Las cátedras facultativas serían provistas por oposición, pero la mitad de las que vacasen en la Universidad de Madrid y la mitad de las que vacasen en las Facultades de Filosofía en las Universidades de distrito se proveerían por elección del Gobierno; las de Madrid, entre Catedráticos propietarios de las Universidades que las solicitasen y que perteneciesen a la misma Facultad, siempre que hubiesen ingresado por oposición, llevaran tres años de servicio y desempeñaran igual asignatura que la vacante; y las de Filosofía de las Universidades de provincia, entre los Catedráticos de Instituto agregado a Universidad que tuvieran 24 años de edad y estuvieran en posesión de los títulos de Licenciado y Regente de primera.

Tras el Plan de 1850, dictáronse una porción de disposiciones sueltas de entre las cuales destacaremos: el Real Decreto de 2 de Octubre de 1850, designando el traje y las insignias académicas que habían de usar los graduandos y Catedráticos de las Universidades e Institutos de segunda enseñanza<sup>1</sup>; la Real Orden de 12 de Octubre del mismo año dictando reglas para impedir que los Catedráticos después de haber señalado una obra de texto adoptasen otra; los Reales Decretos de 30 de Enero y de 10 de Septiembre sobre organización de estudios de la Facultad de Medicina, etc., etc.

En pos de las precedentes disposiciones, dictadas, como habrá podido apreciarse, sin la solemnidad legal que les diera el voto de las Cortes, la necesidad de sistematizar todo lo hecho, el imperio de las circunstancias políticas y el influjo de las reformas pedagógicas francesas, sobre todo, el ejercido por la famosa ley Falloux (1850), produjeron como consecuencia el planteamiento en el seno de las Cortes españolas de la Ley de bases de 17 de Julio de 1857 autorizando al Gobierno presidido por el general Narváez para formar y promulgar una Ley de Instrucción pública, Ley que fué la del 9 de Septiembre del citado año de 1857.

En puridad no hizo ésta sino recapitular la obra realizada por los reformadores de 1845, 1847 y 1850, dándole la consistencia de que le adornaba el voto de las Cámaras. Detallar, pues, el contenido de dicha Ley valdría tanto como repetir gran parte de lo que llevamos apuntado. Por tal motivo, habremos de limitarnos a poner de manifiesto en qué extremos la nueva norma alteró a las precedentes, ya que en todas las demás hubo de respetar ésta lo que hallara por las disposiciones anteriores establecido.

Respecto del número de Facultades universitarias, aumentó

1. Introdujo este R. D. algunas modificaciones respecto del publicado el 6 de Marzo de 1850 sobre indumentaria académica. Las principales de aquellas fueron: la supresión de la *sobrevesta* negra que habían de llevar los Consejeros de Instrucción pública y los Rectores; la autorización concedida a los Licenciados para usar la muceta característica de los Doctores, diferenciándose éstos de aquéllos en la gran borla del birrete, la adscripción de colores a cada una de las Facultades; el *blanco* a la de Teología; el *grana* a la de Jurisprudencia; el *amarillo oro* a la de Medicina; el *violado* a la de Farmacia y el *azul celeste* a la de Filosofía.

la Ley una más, al desdoblar la antigua de *Filosofía* en dos: la de *Filosofía y Letras* y la de *Ciencias exactas, físicas y naturales*, resultando por ello seis el número total de aquéllas, a saber: *Filosofía y Letras*, *Ciencias*, *Farmacía*, *Medicina*, *Derecho* (anteriormente llamada de *Jurisprudencia*), y *Teología*, en cada una de las cuales se habían de distinguir los tres clásicos períodos que habilitaban para los tres grados académicos de *Bachiller*, *Licenciado* y *Doctor*. La *Facultad de Ciencias* quedó subdividida en tres *Secciones*: de *Ciencias físico-matemáticas*, de *Ciencias químicas* y de *Ciencias naturales*, y la de *Derecho*, en otras tres; de *Leyes*, de *Cánones* y de *Administración*. Como en anteriores planes, el establecido por la Ley del 57 y Real Decreto de 11 de Septiembre del 58 seguía exigiendo para matricularse en la Facultad de Derecho haber aprobado en la de Filosofía algunas asignaturas (Metafísica e Historia Universal en el plan que analizamos) y para ingresar en las Facultades de Medicina y Farmacia haber estudiado en la de Ciencias determinadas materias (ampliación de la Física experimental, Química general y Zoología, Botánica y Mineralogía con nociones de Geología los que aspiraran a seguir la carrera de médico, y Química general, Zoología, Botánica y Mineralogía con nociones de Geología, los que se propusieran emprender la de farmacéutico).

El personal docente de las Universidades quedó clasificado en dos *clases*: *numeraria* y *supernumeraria*. Constituían el personal numerario los Catedráticos titulares de sus asignaturas, y el supernumerario los suplentes o auxiliares. De cada tres vacantes de Catedráticos numerarios se proveerían dos en supernumerarios, mediante concurso y una por oposición. En punto a categorías se mantenían las ya conocidas de *entrada*, *ascenso* y *término*, siendo concedidas ahora éstas, no por oposición como antes, sino a propuesta en terna del Consejo de Instrucción pública, en presencia de los méritos y servicios que cada Catedrático hubiera contraído en la enseñanza, señaladamente con la publicación de obras y otros trabajos literarios y científicos.

Comenzaba el curso el 1.º de Octubre y terminaba el 15



de Junio. La prueba académica se hacía por asignaturas respondiendo el alumno por lo menos durante diez minutos a las preguntas que le formularan los jueces. Estos podrían calificar al examinando con las notas de *Sobresaliente*, *Notablemente aprovechado*, *Bueno*, *Mediano* y *Suspense*. El ejercicio del *grado de Bachiller* consistiría en un examen de preguntas por espacio de una hora; el de *Licenciado* en dos ejercicios, uno de preguntas y otro práctico, menos en las Facultades de Filosofía y Letras y de Derechos que constaría de un solo ejercicio dividido en dos partes, la primera de exposición de viva voz de un tema preparado durante tres horas y la segunda de contestación a preguntas. El *grado de Doctor* había de consistir en desarrollar por escrito y en el tiempo que el graduando necesitara un tema de entre los cuarenta que acerca de la carrera compondría todos los años la Junta de Catedráticos de cada Facultad o Sección, en Madrid. El aspirante leería el discurso aludido ante el Tribunal y contestaría a las observaciones que le hicieran sus censores. Las investiduras del grado de *Licenciado* y *Doctor* se harían en la forma que hemos descrito al hablar del Plan de 1847, sin otra diferencia que la de leer el aspirante a *Doctor* en el acto solemne de la investidura, el mismo discurso que había juzgado ya el Tribunal al practicar el doctorando el ejercicio a que nos hemos referido, bien que presentándolo ahora impreso y con las modificaciones que se hubieren acordado.

En cuanto a la indumentaria tan sólo se exigía a los alumnos que vistiesen con decencia, y respecto del traje académico de los Profesores se reproducían las prescripciones anteriormente dictadas añadiendo que el color de la muceta de los graduados en Ciencias exactas, físicas y matemáticas fuera el *azul turquí* y que la borla de seda del birrete doctoral cubriera totalmente a éste.

A la Ley general de 1857 y al Reglamento de las Universidades del Reino, de 22 de Mayo de 1859, siguieron una porción de disposiciones sueltas relativas a los estudios universitarios, y en Octubre y Noviembre de 1866 los Reales Decretos del Ministro de Fomento don Manuel de Orovio,

reformando las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias, Medicina y Farmacia. No obstante habérseles dado a estos últimos carácter de Ley, el 17 de Mayo de 1867, fueron a rajatabla derogados por el Decreto de 21 de Octubre de 1868, obra de los hombres llegados al Poder por influjo de la Revolución de Septiembre. A virtud del aludido Decreto, firmado el 21 de Octubre, por el Ministro de Fomento Sr. Ruiz Zorrilla, se estableció la libertad de enseñanza en todos los grados de ésta, dejando a los Profesores que expusieran sin la menor limitación en sus cátedras lo que científicamente estimaran verdadero; autorizóseles, además, a señalar el libro de texto que estimaran más en armonía con sus doctrinas y a adoptar el método de enseñanza que creyeran más conveniente; se les relevó de usar el traje académico en la cátedra, exámenes y demás actos literarios; facultóse a los Profesores particulares adornados de títulos suficientes, para formar parte de los tribunales y examinar a sus alumnos; se anuló, para la obtención de los grados, la condición de estudiar un determinado número de años, pudiendo los escolares examinarse de todas o de algunas asignaturas en las convocatorias que estimaran oportuno, y se suprimió la Facultad de Teología y la investidura de los grados de Bachiller y de Licenciado, conservándose únicamente la de Doctor, que se otorgaría sin exigir juramento a los candidatos y pudiendo conferirla todas las Universidades.

En punto a organización de los estudios en las respectivas Facultades, el Real Decreto de 25 de Octubre de 1868 se limitó a derogar la legislación de 1866, restableciendo la de 1857 con algunas modificaciones. Respecto del Profesorado, el Decreto de 5 de Noviembre de 1868, sometió a revisión todos los expedientes de nombramientos y traslaciones de catedráticos en virtud de concurso, y en relación con los exámenes, grados y títulos, el Decreto de 26 de Noviembre autorizó a los Rectores para que designaran Jurados permanentes de exámenes y grados, valiéndose de personas aptas para el caso, pertenecieran o no al Profesorado oficial; el de 21 de Diciembre facultó a los Directores de Instituto para la expedición de los títulos de Bachiller, y a los

Rectores para la de los títulos de Bachiller en Facultad, Licenciado y Doctor, y el de 7 de Mayo de 1870 abolió los grados de Bachiller en todas las Facultades, reservando tal título exclusivamente a los Institutos.

Como disposiciones expresivas de las nuevas ideas que privaban en las esferas del Poder, citaremos, el Decreto de 14 de Enero de 1869 que, reaccionando contra el tradicional criterio centralista, autorizó a las Diputaciones y Ayuntamientos para fundar toda clase de Centros de enseñanza con derecho a conferir grados académicos, y el de 17 de Junio y la Ley de 18 de Diciembre, ambos de 1869, obligando el primero a jurar la Constitución a todos los funcionarios del Ministerio de Fomento, y declarando la segunda sin derecho a desempeñar destinos y funciones públicas y el percibo de retiro, cesantías y jubilaciones, a todos los que no hubieran prestado el citado juramento en el término de un mes.

Merecedor de ser destacado entre las disposiciones dictadas durante el período que historiamos fué el *Reglamento provisional para el ingreso en el Profesorado público*, de 15 de Enero de 1870, por el cual se organizaban las oposiciones a cátedras universitarias obligando primeramente al opositor a acompañar su solicitud de un *Programa* razonado de las enseñanzas correspondientes a la cátedra vacante, y de una *Memoria* sobre las fuentes de conocimiento y método de enseñanza de la asignatura o asignaturas objeto de la oposición. El primero y segundo ejercicio de ésta consistirían en la lectura de los aludidos *Programa* y *Memoria* por el actuante, con las observaciones que a éste le fueran formuladas por los compañeros de trinca y por el Tribunal, y el tercero en la explicación por el opositor de tantas lecciones de su programa, libremente elegidas, excepto una que se sacaría a la suerte, como fueran las asignaturas que comprendiera la vacante, y si fuese una sola asignatura, en la explicación de dos lecciones, una a la suerte y otra por elección.

Al criterio de amplísima libertad inspirador de las disposiciones sobre enseñanza dictadas desde Octubre de 1868,

hubo de suceder en los mismos hombres afiliados a las ideas liberales el natural deseo de poner un límite al desbarajuste a que habían dado aquéllas lugar. En su consecuencia, el Decreto de 29 de Julio de 1874 reivindicó enérgicamente para el Estado la dirección de todos los Establecimientos públicos docentes, excepción hecha de los Seminarios conciliares, y el de 29 de Septiembre se propuso regular el modo de hacer los estudios en las Universidades y otros Centros de enseñanza impidiendo a los "jóvenes escolares marchar a su capricho y atropelladamente al término de sus deseos, que eran los de abandonar las aulas para lanzarse en los azares de la vida antes de haber fortalecido su espíritu con la savia de la Ciencia, o volver a sus hogares a consumir en lastimosa ociosidad su vida sin aspiraciones ni levantados propósitos."

Tales disposiciones, rectificadoras de las que con mayor pasión que cautela habían sido dictadas por el espíritu de la Revolución de Septiembre, hubieron de ser acentuadas en sentido regresivo al verificarse la Restauración y volver con ella a las esferas del mando algunos de los personajes conservadores que se habían distinguido en el cultivo de la política pedagógica durante los años de 1866 a 1868. Por tal causa, el Real Decreto de 26 de Febrero de 1875 derogó el de 21 de Octubre de 1868 en cuanto a la libertad que éste concedía a los Profesores para adoptar libros de texto, restableciéndose las prescripciones de la Ley de 1857 y del Reglamento de 20 de Julio de 1859; el Real Decreto de 11 de Febrero de 1876 centralizó nuevamente en el Ministerio de Fomento la expedición de títulos, dejando de seguir atribuídos a los Rectores, a los Claustros Universitarios o a los Jefes de los Establecimientos de enseñanza, como se había ordenado en 21 de Diciembre de 1868, y otro Real Decreto, el de 25 de Junio (1876) suprimió la clase de *Sustitutos personales*, autorizada desde 21 de Octubre de 1868, instituyendo en su lugar la de *Profesores auxiliares*.

Párrafo aparte merecen las variantes introducidas en el régimen de oposiciones por los Decretos dictados desde el Reglamento provisional de 15 de Enero de 1870, hasta el

de 2 de Abril de 1875. Del primero ya hemos hecho una pequeña referencia. Tras de él vieron la luz pública los de 1.º de Junio de 1873 y 29 de Marzo de 1874, a cuyo tenor los ejercicios de oposición serían tres: el primero, de contestación a diez o más preguntas sacadas a la suerte de entre cien que el Tribunal tendría dispuestas; el segundo, de explicación de una lección durante sesenta minutos, y el tercero que consistiría en la composición de un discurso durante doce horas de incomunicación, pero facilitándose a los opositores los libros que necesitaren. Rectificando algunos extremos de las normas precedentes, refrendó el Ministro de Fomento Marques de Orovio el Real Decreto de 2 de Abril de 1875, por el cual, los dos ejercicios primeros eran con pequeñas variantes iguales que los establecidos por las disposiciones anteriores, pero el tercero había de consistir en un discurso oral acerca del Programa de la asignatura presentado por el opositor, contestando éste tanto en tal ejercicio como en el segundo a las observaciones que le hicieran sus contrincantes.

A fin de hermanar la libertad de enseñanza (interpretada en el sentido de enseñar y aprender fuera o dentro de los organismos de carácter público), con la facultad del Estado de someter a los graduandos a las pruebas de idoneidad necesarias para otorgarles el título correspondiente con las debidas garantías, los Reales Decretos de 4 de Junio y 27 de Octubre de 1875 dispusieron la formación de Tribunales integrados por Profesores oficiales y representantes de la enseñanza privada, a fin de que ante ellos pudieran dar validez a sus estudios y obtener los grados académicos los alumnos que hubiesen preparado extraoficialmente las materias del Bachillerato, de las carreras facultativas y de los estudios superiores. Dichos Tribunales actuarían únicamente en Madrid cuando se tratara de juzgar las pruebas de aptitud de los aspirantes a títulos universitarios, superiores o profesionales, y en las capitales de distrito universitario cuando de pretendientes a la obtención del grado de Bachiller o de títulos periciales. Los demás exámenes de asignaturas se harían reuniendo éstas en grupos, aproba-



dos los cuales podrían los aspirantes practicar los ejercicios del grado respectivo.

El 13 de Agosto de 1880 vino un nuevo Real Decreto a reformar el Plan de estudios universitarios. Según él las enseñanzas de la carrera de Filosofía y Letras se cursarían en las Universidades de Madrid, Barcelona, Granada, Salamanca, Sevilla y Zaragoza; las de la carrera de Derecho (divididas en dos *Secciones*: de *Derecho civil y Canónico*, la una, y de *Derecho administrativo*, la otra) se estudiarían, las de la primera Sección, en todas las Universidades, y las de Derecho administrativo en Madrid y Barcelona; las de la Facultad de Ciencias dividiríanse en tres *Secciones*: *físico-matemáticas*, *físico-químicas* y *naturales*, cursándose las tres Secciones en Madrid; la de Ciencias físico-matemáticas y físico-químicas en Barcelona, y las enseñanzas indispensables para las carreras de Medicina y Farmacia en Granada, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza; los estudios de Medicina se darían en Madrid, Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla (Cádiz), Valencia, Valladolid y Zaragoza y en las Escuelas de Salamanca y Sevilla; y los de Farmacia, en Madrid, Barcelona, Granada y Santiago. Para la admisión a los ejercicios del grado de Licenciado en Derecho, se exigía la aprobación durante los tres primeros años de la Licenciatura de las asignaturas de Literatura general, Literatura griega y latina, Literatura española, e Historia universal, de la Facultad de Filosofía y Letras, y para ser admitido al grado de licenciado en Medicina o en Farmacia, asimismo se precisaba tener aprobadas la Ampliación de la física, la Química general y la Historia natural, de la Facultad de Ciencias.

Con posterioridad a la disposición que acabamos de analizar, han sido publicadas otras muchas, de entre las cuales mencionaremos por su mayor interés las que siguen: la Ley de Presupuestos de 31 de Diciembre de 1881 por la que fueron declaradas como puramente honoríficas las categorías de *entrada*, *ascenso* y *término* de los Catedráticos universitarios, fijándose el sueldo de éstos en cantidades que oscilaban entre 3,500 y 10,000 pesetas; el Real Decreto de

17 de Marzo de 1882 que sustituyó la antigua práctica de proponer los tribunales en terna a los opositores más aventajados, por la de formular dicha propuesta unipersonalmente; el de 2 de Septiembre de 1883 que, reorganizando la Facultad de Derecho, refundió en la Sección de Derecho civil y canónico, la Sección de Derecho administrativo y la carrera del Notariado, y el de 22 de Noviembre de 1883 que planteó nuevamente el problema de dar validez académica a los estudios hechos privadamente, resolviéndolo en el sentido de someter a iguales pruebas de suficiencia tanto a los alumnos oficiales como a los de enseñanza privada, los que habían de responder en cada asignatura al mismo programa oficialmente establecido para toda España y renovado cada tres años, siendo juzgados los alumnos que particularmente hubieran hecho sus estudios por Jurados de examen compuestos de dos Catedráticos y de tres vocales nombrados por el Ministerio de Fomento, si se tratase de asignaturas, y de un Consejero de Instrucción pública, dos Catedráticos y cuatro vocales, también elegidos estos últimos por el Gobierno, cuando se fuera a juzgar a aspirantes a grados de Licenciado y Doctor, grados éstos que solamente y por lo que respecta a los alumnos no oficiales se verificarían en la Universidad de Madrid.

El 16 de Enero de 1884, el Ministro de Fomento Sr. Marqués de Sardoal, refrendó tres Reales Decretos reorganizando los estudios de las Facultades de Derecho, Farmacia y Medicina, pero fueron tales las protestas a que dieron margen que el sucesor de Sardoal en el Ministerio, don Alejandro Pidal, suspendió la ejecución de aquéllos por Real Decreto de 25 del mismo mes y año. El 14 de Agosto (1884) el mismo titular de Fomento Sr. Pidal, reformó el Plan de estudios de la Facultad de Derecho, reforma que con ligerísimas variantes ha estado vigente hasta principios de la actual centuria. En dicho Plan los estudios de Filosofía y Letras preparatorios para el ingreso en los propiamente jurídicos, estaban representados por las asignaturas de Metafísica, Literatura general y española e Historia crítica de España.

También se debió a la iniciativa del Sr. Pidal la institución de una tercera clase de Establecimientos de enseñanza llamados *asimilados*, a los que aun siendo no oficiales, se les facultaba para examinar y dar validez a los estudios que en ellos hicieran sus alumnos. Tanto éstos como los oficiales tenían que someterse al final de su carrera a la correspondiente reválida para la obtención del grado, que se verificaría ante un Tribunal compuesto de un Presidente, elegido y nombrado por el Ministerio de Fomento, dos Catedráticos designados por la Facultad respectiva, dos Jueces elegidos por las Academias correspondientes y dos Vocales nombrados por los Jefes de Establecimientos libres, y a falta de éstos, por el Rector, de entre los Licenciados con dos años de ejercicio en la enseñanza privada. La anterior reforma, llevada a la Gaceta el 18 de Agosto de 1885, fué derogada el 5 de Febrero de 1886 por el Sr. Montero Ríos. El 7 de Mayo del mismo año decretóse la supresión del Ministerio de Fomento y la fundación en su lugar de dos nuevos Departamentos ministeriales: el de *Instrucción pública y Ciencias, Letras y Bellas Artes* y el de *Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio*. Dificultades económicas y políticas impidieron realizar tal desdoblamiento que, como hemos apuntado, hubo de tener lugar el año de 1900.

Los estudios médicos, objeto desde el Plan de carácter provisional publicado en 23 de Septiembre de 1857 de algunas reorganizaciones, tales como la de 18 de Julio de 1867, 25 de Octubre de 1868, 13 de Agosto de 1880 y 16 de Enero de 1884, fueron nuevamente reformados el 16 de Septiembre de 1886. A tenor de este último Plan, seguían las enseñanzas de la Licenciatura distribuídas en seis cursos, precedidos de los estudios llamados *preparatorios* integrados por disciplinas de la Facultad de Ciencias (Ampliación de la Física, Química general, Mineralogía, Botánica y Zoología); se consolidaba en el período de la Licenciatura la enseñanza de la Histología e Histoquímica y el Curso especial de las enfermedades de la infancia, añadiéndose en determinadas Universidades al cuadro general de estudios algunas asigna-

turas especiales, con carácter no obligatorio, como la Sifiliografía y Dermatología, la Oftalmología, la Otología y un curso de Neuropatías, con inclusión de las alteraciones mentales, fundándose además, en el Doctorado, dos nuevas enseñanzas referentes a la ampliación de la Higiene pública y a la Química biológica, cursada ésta en la Facultad de Farmacia.

También en la citada última Facultad operóse una reorganización por Real Decreto de 24 de Septiembre de 1886, consistente en añadir a sus anteriores enseñanzas el Estudio de los instrumentos y aparatos de Física, de aplicación a la Farmacia, la Análisis química, la Botánica (en lección diaria) y la Farmacia práctica o galénica y la Legislación relativa a la Farmacia, en el período de la Licenciatura, y la Historia crítica de la Farmacia y la Química biológica en el del Doctorado.

Del resto de las disposiciones sobre enseñanza universitaria dictadas en las postrimerías del pasado siglo merecen especial mención el Real Decreto de 23 de Agosto de 1888 por el que se instituyó la clase de *Profesores auxiliares supernumerarios*; el de 22 de Noviembre del mismo año otorgando facilidades a los alumnos de enseñanza libre para poder dar validez a sus estudios aprobando las asignaturas y verificando los ejercicios del grado de Licenciado en todas las Universidades en que estuviesen establecidas las Facultades que quisieran profesar, y el de 2 de Agosto de 1895 por el que se crearon Facultades de Ciencias en las Universidades de Granada, Sevilla y Valencia. Asimismo, en 1895 se confirió carácter oficial a la Facultad de Derecho de la Universidad granadina del Sacro Monte, y en 1896, se hizo lo propio con la Universidad de Oñate, donde se cursaban las enseñanzas de Derecho, Filosofía y Letras y Notariado.

El 18 de Abril de 1900 se divide el *Ministerio de Fomento*, comenzando a funcionar el de *Instrucción pública y Bellas Artes*; el 20 de Julio se reorganiza la Facultad de Filosofía y Letras refundiendo en ella la antigua Escuela Superior de Diplomática y dividiendo aquélla en tres *Secciones*, a saber: *Estudios filosóficos*, *Estudios literarios* y *Estudios históri-*

cos; el 31 de Julio se modifica el plan de enseñanzas farmacéuticas ampliando algunas asignaturas y dando entrada a las nuevas de Microbiología, Preparación de sueros medicinales e Higiene pública; el 2 de Agosto se estructura la Facultad de Derecho dividiéndola en dos *Secciones*: una de *Derecho* y otra de *Ciencias sociales*, y el 4 del mismo mes se transforma la Facultad de Ciencias distinguiéndose en su seno cuatro *Secciones*: *Ciencias exactas*, *Ciencias físicas*, *Ciencias químicas* y *Ciencias naturales*.

A virtud del Reglamento de exámenes y grados de 28 de Julio de 1900 se exigió el examen de ingreso en las Facultades a los alumnos que quisieran seguir carrera universitaria; el 17 de Febrero de 1901 fué instituída la cátedra de Pedagogía, que halló su emplazamiento en el cuadro de disciplinas del Doctorado de la Sección de Estudios filosóficos en la Facultad de Filosofía y Letras; el 18 del citado mes se dispuso que quedaran sometidos al mismo régimen que las del Estado las Facultades de Medicina y de Ciencias de Salamanca y la de Medicina de Sevilla, costeadas por las Corporaciones locales; el 10 de Mayo se dictó un nuevo Reglamento de exámenes y grados; el 18 de Julio se establecieron pensiones a los alumnos para ampliar sus estudios en el extranjero, dando asimismo facilidades al personal docente para realizar igual finalidad y, por último, el Real Decreto de 2 de Septiembre instituyó Tribunales de honor para el Profesorado oficial.

LAS ENSEÑANZAS ESPECIALES.—A la solicitud que nuestros elementos gobernantes mostraron durante la primera mitad del siglo XIX por legislar sobre los tres grados más conocidos de la enseñanza, representados por la Escuela primaria, el Instituto y la Universidad, no correspondió, en verdad, un interés parejo en pro de los estudios especiales. La impugnación más reciamente hecha contra el Plan de 1845, por nosotros analizado, fué precisamente la que tomó por base el olvido en que dejaba a las enseñanzas industriales. Esto no quiere decir que no se tuviera en absoluto concepto de su importancia y del lugar que debían ocupar en el cuadro general de nuestra cultura, sino que los problemas por los



estudios especiales suscitados, quizá por no ser debidamente comprendidos por nuestros Gobiernos, aparecieron casi siempre pospuestos a los que planteaban los aspectos más conocidos de la instrucción clásica. La significativa expresión formulada por Fernando VII cuando al mostrarle el Ministro López Ballesteros en la primera Exposición de la Industria española, celebrada en Madrid en 1828, unos tejidos catalanes, hubo de decir: *¡Bah! Todas estas son cosas de mujeres*, quizá no sea exagerado afirmar que sintetizaba el criterio de la mayoría del país en punto a la eficacia de las enseñanzas técnicas.

El Plan de 1845 definía los estudios especiales diciendo que eran los que habilitaban para las carreras y profesiones que no se hallaban sujetas a la recepción de grados académicos, y enumeraba como de tal carácter los referentes a la construcción de caminos, canales y puertos, al laboreo de las minas, a la agricultura, a la veterinaria, a la náutica, al comercio, a las bellas artes, a las artes y oficios y a la profesión de escribano y procuradores de los Tribunales. La reforma general de 1850 puntualizó la anterior relación enumerando como dependientes del Ministerio de Instrucción pública las Escuelas especiales siguientes: la de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; la de Ingenieros de Minas; la de Arquitectura; la preparatoria para las anteriores; la Superior de Pintura, Escultura y Grabado; la provincial de Bellas Artes; el Conservatorio de Arte; la Escuela de Veterinaria; las de Comercio, y el conservatorio de Música y Declamación.

La Ley general de Instrucción pública de 1857 dividió las enseñanzas especiales en *superiores*, que eran las de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de Minas, de Montes, Agrónomos e Industriales y las de Bellas Artes (Pintura, Escultura, Arquitectura y Música) Diplomática y del Notariado; y *profesionales*, a las que pertenecían las de Veterinaria, Profesores mercantiles, Náutica, Maestros de obras, Aparejadores y Agrimensores y la de Maestros de primera enseñanza. En las poblaciones donde hubiera Instituto, se refundirían en él las Escuelas elementales que exis-

tiesen de Industria, Agricultura, Comercio, Náutica y cualesquiera otras que exigieran estudios de aplicación de segunda enseñanza.

Tras de las notas que preceden, sinteticemos ahora lo más brevemente posible el desarrollo de cada una de las *Escuelas especiales* citadas.

La de *Ingenieros de Caminos*, instituída en 1802 merced a las iniciativas de don Agustín Bethencourt, su primer Director, fué, después de un período accidentadísimo de su historia, coincidente con las alternativas absolutistas y liberales del reinado de Fernando VII, reglamentada el 14 de Abril de 1836,<sup>1</sup> y funcionó primeramente en el Buen Retiro, después en el edificio de la llamada Aduana vieja y, desde 1847, en la antigua calle del Turco. Por Real Decreto de 20 de Septiembre de 1858, se reorganizaron sus estudios y si bien no pudo realizarse el ideal de emplazarlos en la Facultad de Ciencias, convirtiendo a ésta en una Escuela Politécnica, se exigió para el ingreso en la carrera el Bachillerato en Artes y haber estudiado cuando menos tres años en la citada Facultad las materias que se enumeraban, tras de cuya aprobación y la del Dibujo, habían de cursar los aspirantes los estudios propios de la Escuela en tres años. El Decreto de 23 de Octubre de 1868 suprimió de la carrera de Caminos todas las asignaturas referentes a la ciencia pura, las que cedió a la enseñanza libre, dejando en la Escuela las disciplinas netamente especiales de aplicación, que agrupó en cuatro años. Pero la realidad se encargó de demostrar que bastantes de las asignaturas abandonadas a la enseñanza de los profesores privados y de las academias libres no eran debidamente cultivadas, motivando esto la fundación por Real Decreto de 29 de Enero de 1886, de una *Escuela general preparatoria de Ingenieros y Arquitectos*, destinada a dar las enseñanzas comunes a cuantos aspirasen a ingresar en las Escuelas de Caminos, Minas, Montes, Agrónomos, Industriales y Arquitectos. A esta fundación siguió, con fecha 26 de Agosto de 1888, un nuevo

1. El 30 de Abril de 1835 se había organizado el Cuerpo de Ingenieros y otro de Minas, cada cual con su correspondiente *Escuela*, fundándose al propio tiempo el *Colegio Científico* para que cursaran los alumnos los estudios comunes a ambas carreras.

Reglamento de la Escuela de Caminos, por el cual se exigía para ser admitido como alumno interno tener aprobadas en la *general preparatoria* todas las materias que comprendían sus enseñanzas, después de lo cual habían de durar tres años los estudios especiales de la carrera, que en 1900 fueron otra vez reorganizados.

Fundado el *Cuerpo de Ingenieros de Minas* por Real Orden de 14 de Julio de 1777, se planteó en las de azogue de Almadén la *Escuela especial* del ramo. Por Real Decreto de 23 de Abril de 1835 se trasladó a Madrid, quedando destinada la de Almadén a la enseñanza práctica de la minería. Como ya hemos dicho, la Escuela de Minas fué clasificada por la Ley de 1857 entre las superiores; el Real Decreto de 20 de Septiembre de 1858 confió a las Facultades de Ciencias los estudios previos de dicha carrera y organizó en tres años los peculiares de la misma. Como la de Caminos, vió también suprimidas en Octubre de 1868 las enseñanzas preparatorias, que se confiaron a la iniciativa privada, emplazándolas después en la *Escuela general preparatoria* fundada, como sabemos, en Enero de 1886. En 1901 fueron ampliadas las enseñanzas de la carrera de Ingeniero de Minas, poco después de haberse otorgado carácter oficial a la Escuela de Capataces que costeaba el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación de esta provincia.

Por Real Decreto de 1.º de Mayo de 1835 y por Decreto del Regente Duque de la Victoria, de 18 de Marzo de 1843, instituyóse la *Escuela de Ingenieros de Montes*, o de *Bosques*, como se titularon primeramente, funcionando en Villaviciosa de Odón a virtud de lo ordenado por el Real Decreto de 18 de Noviembre de 1846, y trasladándose a El Escorial por Decreto de 25 de Octubre de 1869. La Ley general de 1857 incluyó esta Escuela entre las superiores; el Real Decreto de 20 de Septiembre de 1858 organizó sus enseñanzas especiales en tres años; el Reglamento de 18 de Mayo de 1862 exigió para el ingreso en ella el Bachillerato en Artes y un examen previo, distribuyendo después los estudios de la carrera en cuatro años; y el Reglamento de 24 de octubre de 1870, introdujo algunas modificaciones

en el anterior exigiendo a los aspirantes la aprobación en el Instituto de la Gramática castellana, Nociones de Gramática latina, Geografía e Historia general y particular de España, manteniendo el examen de ingreso en la Escuela y conservando en ésta la división en cuatro años de las disciplinas propiamente profesionales. Adscrita la preparación de la Escuela de Montes a la *Escuela general* (29 de Enero de 1886) a que hemos repetidamente aludido, quedó por Real Decreto de 11 de Marzo de 1887 suprimido el antiguo examen de ingreso, y se redujo el tiempo de la carrera a tres cursos, terminados los cuales, habían de practicar durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre los alumnos aprobados en el tercer año el servicio ordinario del Cuerpo, procediéndose después de ello a la clasificación y calificación de fin de carrera.

Respecto de las *enseñanzas agrícolas*, el Real Decreto de 8 de Septiembre de 1850 fundó *Escuelas elementales*, *Escuelas de ampliación* y una *Superior*. Las elementales darían enseñanzas distribuídas en los tres años necesarios para la obtención de los títulos de *Agrimensor* y *Perito agrónomo*; las de ampliación, en las que se ingresaría después de aprobados los dos primeros cursos del grado elemental, distribuirían sus enseñanzas en dos años, al cabo de los cuales, el escolar que fuese aprobado obtendría el título de *Agrónomo facultativo*; y la enseñanza superior se haría también en dos años. Instalábanse las Escuelas elementales en los Institutos de primera clase; las de ampliación en los de Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia, Salamanca y Zaragoza, y la superior en una hacienda-modelo, que se designaría. El Real Decreto de 1.º de Septiembre de 1855 fundó la *Escuela Central de Agricultura* en la Flamenca (Aranjuez), reglamentando sus estudios, que habían de durar seis años (cuatro preparatorios y dos de aplicación). La Ley de 1857 incluyó esta Escuela entre las superiores, y el Real Decreto de 20 de Septiembre de 1858 distribuyó sus disciplinas en cuatro años, dos que serían aprobados en la Facultad de Ciencias y dos más dentro de la Escuela. La Ley de 11 de Junio de 1866 dividió la enseñanza agrícola en tres clases:

*elemental, profesional y superior.* Las dos primeras proveerían a la formación de *Capataces* y de *Peritos agrícolas*, respectivamente, y la tercera tendría por objeto formar *Ingenieros agrónomos* aptos para el Profesorado y para organizar y dirigir explotaciones agrícolas. El 26 de Enero de 1869, es decir, en plena actuación de los elementos liberales generadores de la Revolución de Septiembre, el Ministro de Fomento Sr. Ruiz Zorrilla, decretó el establecimiento de una *Escuela de Agricultura* en la posesión que había sido de Patrimonio de la Corona, denominado La Florida y, verificada la Restauración, la Ley de 1.º de Agosto de 1876 estableció como obligatoria la enseñanza de la Agricultura en las Escuelas primarias y en los Institutos, anunció la reorganización de los estudios de la Escuela Superior y autorizó a las provincias para fundar Granjas-modelos experimentales y Estaciones agronómicas. El Real Decreto de 27 de Enero de 1878 estructuró nuevamente la *Escuela superior de Ingenieros agrónomos* de La Florida, sustituyendo su anterior denominación por la de *Escuela general de Agricultura* y distribuyendo las enseñanzas de la Sección de Ingenieros en cuatro cursos, las de Sección de Peritos en dos y las correspondientes a los trabajos materiales para obtener el título de Capataz en tres años consecutivos empleados, el primero, en las labores de cultivo y recolección y en el cuidado de animales, el segundo, en los trabajos de jardinería, huertas y viveros, y el tercero en los de quesería, bodegas, colmenar y demás industrias agrícolas de la explotación. Adicionado al título de *Escuela general de Agricultura* el de *Instituto de Alfonso XII*, con que también hubo de ser conocida (Real Decreto de 1881), fueron objeto de los estudios agrícolas de nueva y minuciosa reglamentación el 4 de Noviembre (1881), posteriormente modificada por los Reales Decretos de 8 de Mayo de 1884, 14 de Octubre de 1887 y 10 de Julio de 1903 que es el que, con algunas variantes, hoy rige.

La *enseñanza industrial*, harto abandonada en España hasta los comedios del siglo XIX fué objeto del Real Decreto de 4 de Septiembre de 1850, refrendado por el Ministro de



Comercio Sr. Seijas Lozano. Con arreglo a tal norma, fundábanse *Escuelas Industriales* de tres categorías: *elemental*, de *ampliación* y de *enseñanza superior*. Los estudios elementales se darían en los Institutos de primera clase; los de ampliación, en Barcelona, Sevilla y Vergara, y los superiores en un *Real Instituto Industrial*, establecido en Madrid. Los alumnos que cursasen y aprobaran los tres años en que se dividía el grado elemental, recibirían un Certificado de aptitud para las profesiones industriales, y si estudiaban un curso más, compuesto de Mecánica y Tecnología industriales, Química aplicada a las artes y Dibujo y Modelado, podrían obtener el título de *Maestro en artes y oficios*. Los alumnos de las Escuelas de ampliación después del examen final de carrera, recibirían el nombramiento de *Profesores industriales*, y los de las mismas Escuelas que estudiasen los tres años del grado de ampliación y un cuarto curso más de perfeccionamiento de Mecánica industrial o de Química industrial tendrían derecho a obtener el de *Ingenieros mecánicos de segunda clase*, si habían aprobado la Mecánica, y el de *Ingenieros químicos de segunda clase*, si habían cursado la Química industrial. El alumno que obtuviese ambos títulos se denominaría *Ingeniero industrial de segunda clase*. Por su parte, los estudiantes de la *Escuela Superior* que aprobase la Sección de Mecánica, recibirían la denominación de *Ingenieros mecánicos de primera*; los que aprobasen la Sección de Química serían titulados *Ingenieros químicos de primera*, y los que reunieran los dos títulos tomarían el de *Ingenieros industriales*. Como las Escuelas de Caminos, de Minas, etc., fué la de Ingenieros Industriales clasificada por la Ley de 1857 como de enseñanza superior que había de ser dada en Madrid, Barcelona, Gijón, Sevilla, Valencia y Vergara, y, como aquéllas, vió aprobado el Programa de sus materias docentes por el Real Decreto de 20 de Septiembre de 1858, que siguió manteniendo las dos clases apuntadas de Ingenieros, a saber: los mecánicos y los químicos. Pero de tan aparatosa organización quedó bien poco, ya que la única Escuela de Ingenieros que logró funcionar con normalidad fué la que en Barcelona sostuvo la Diputación

provincial, y que para salvarla de una muerte cierta al ser fundada la *Escuela general preparatoria en Madrid* (20 de Enero de 1886), el Real Decreto de 23 de Agosto de 1890 autorizó para que continuara con sus estudios preparatorios, evitando con ello el que tuvieran que venir a Madrid a cursar éstos los alumnos que habían después de seguir la carrera de Ingeniero Industrial en Barcelona. En 1899 se fundó la *Escuela de Ingenieros industriales* de Bilbao, y por Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, se organizaron en los Institutos de segunda enseñanza estudios elementales de Industrias que habilitaban para obtener certificados de *Práctico industrial*; instituyéronse en Madrid, Alcoy, Béjar, Gijón, Cartagena, Las Palmas, Tarrasa, Vigo y Villanueva y Geltrú, *Escuelas superiores de industrias*, destinadas a dar los estudios y certificados de *Mecánicos, Electricistas, Metalurgistas ensayadores, Químicos y Aparejadores*, y se constituyó en Madrid una *Escuela Central de Ingenieros Industriales*, a cuyo plan habían también de adaptarse las de Barcelona y Bilbao.

Englobada en la común denominación de *carrera de Bellas Artes*, la Ley de 1857 comprendió las de *Arquitectura, Escultura, Pintura y Música*. Para el estudio de la primera, cuya enseñanza venía dándose en la Academia de San Fernando, se había constituido el 25 de Septiembre de 1844 la *Escuela especial de Arquitectura* en Madrid, que el 23 de Septiembre de 1845 y el 24 de Enero de 1855 organizóse bajo la inmediata dependencia de la mencionada Academia. El Real Decreto de 20 de Septiembre de 1858 articuló el Programa general de tales estudios exigiendo a los alumnos para cursar los propios de la carrera de Arquitecto el título de Bachiller en Artes, haber aprobado durante tres años determinadas disciplinas de la Facultad de Ciencias, tener conocimientos de Dibujo hasta copiar a la aguada detalles de edificios y sufrir con éxito un examen general. El 30 de Noviembre de 1864 fué nuevamente reglamentada la Escuela manteniendo la división de sus disciplinas en preparatorias, que se cursarían durante tres años en la Facultad de Ciencias, y especiales que se estudiarían durante cua-

tro cursos dentro de aquélla. La fundación el 29 de Enero de la *Escuela general preparatoria de Ingenieros y Arquitectos* organizó en tal Centro las enseñanzas comunes a estas carreras pero por Real Decreto de 23 de Agosto de 1890, se permitió que en la Escuela de Arquitectura que funcionaba en Barcelona a expensas de la Diputación provincial se establecieran los estudios preparatorios centralizados en la aludida *Escuela general*. Finalmente, el 7 de Septiembre de 1896 fué aprobado un nuevo Reglamento, que ha sufrido algunas modificaciones hasta la promulgación el 23 de Octubre de 1914 del vigente.

El estudio de las *Bellas Artes*, que, como hemos dicho se hacía en Madrid en la Escuela de San Fernando, fué objeto de una reorganización completa en 1844. Por Real Decreto de 31 de Octubre de 1849, estableciéronse *Academias provinciales de Bellas Artes* en Barcelona, Bilbao, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, dividiéndose en *Academias de primera clase* (Barcelona, Valencia, Valladolid y Sevilla) y *Academias de segunda*. A cargo de cada una de ellas se establecía una *Escuela especial de Bellas Artes*, que daría *estudios menores* (Aritmética y Geometría propias del dibujante, Dibujo de figura, Dibujo lineal y de adorno, Dibujo aplicado a las artes y a la fabricación y Modelado y vaciado de adornos), si estaba adscrita a una Academia de segunda, y *estudios menores y los mayores* de Dibujo del antiguo y del natural, Pintura, Escultura y Grabado y Enseñanza de maestros de obras y Directores de caminos vecinales, si se trataba de Escuelas incorporadas a Academias de primera. Por Decreto de 30 de Junio de 1869 se desentendió el Estado del sostenimiento de las Escuelas de Bellas Artes que existían en las provincias. La Ley de 1857 organizó los estudios superiores de Bellas Artes en una *Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, otra de Arquitectura* y un *Conservatorio de Música y Declamación* que funcionarían en Madrid sujetas al régimen universitario. El Real Decreto de 20 de Septiembre de 1858 articuló el programa de la enseñanza profesional de Pintura,

Escultura y Grabado, y el Reglamento de 9 de Octubre de 1861 dió las normas a que había de sujetarse la *Escuela superior de Pintura y Escultura de Madrid*, que fué desarticulada del mecanismo universitario por Real Decreto de 9 de Octubre de 1866, y nuevamente reglamentada por el de 5 de Mayo de 1871. El 8 de Agosto de 1873, siendo Ministro de Fomento de la República el Sr. Soler y Pla, se estableció la *Escuela española de Bellas Artes en Roma*, mantenida inicialmente con el sobrante de los fondos pertenecientes a la Obra Pía de Santiago y Montserrat, Escuela que había de componerse de un Director y doce pensionados. Finalmente, las *Escuelas provinciales* fundadas en 1849 y privadas, como hemos dicho, de los auxilios del Estado en 1869, fueron refundidas con las de *Artes y Oficios*, por Real Decreto de 4 de Enero de 1900, constituyendo ambas las que se denominaron *Escuelas de Artes e Industrias*, y por Real Decreto de 17 de Agosto de 1901 se organizaron en los Institutos de segunda enseñanza, denominados por aquel entonces *generales y técnicos*, estudios elementales de Bellas Artes, y en los de Barcelona, Córdoba, Granada, León, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Toledo, *estudios elementales y Escuelas superiores de Artes industriales*.

Fundado el *Real Conservatorio de María Cristina* por Real Decreto de 15 de Julio de 1830, se le denominó por la Ley de 1857 *Conservatorio de Música y Declamación*, sujetándolo como Escuela especial de estudios superiores al régimen universitario. El Real Decreto de 9 de Octubre de 1866 hizo que se desprendiera del organismo total docente fundado por la mencionada Ley del 57, recobrando la independencia debida respecto del mecanismo universitario ya que, como decía el preámbulo de la disposición a que nos referimos, "difieren y se alejan los vuelos de la imaginación y las creaciones de la fantasía del pausado procedimiento y discurso de la razón serena." El Real Decreto de 15 de Junio de 1868 convirtió el Conservatorio en *Escuela de Música y Declamación*, dividiendo sus enseñanzas en tres Secciones: *Música, Declamación general y Declamación lírica*. Por Decreto de 15 de Diciembre (1868) Ruiz Zorrilla dió al Con-

servatorio el título de *Escuela nacional de Música*, excluyendo de ella la enseñanza de la Declamación, que dejó abandonada al estudio libremente hecho de las producciones teatrales y de los grandes maestros de la escena. La reglamentación de la Escuela fué debida al Real Decreto de 2 de Julio de 1871. El 8 de Julio de 1873 fundóse la cátedra de Estética, y el 28 de Agosto de 1874, alegando el Ministro Alonso y Colmenares los brillantes testimonios que del aprendizaje de la Declamación había dado el antiguo Conservatorio al formar actores de universal prestigio, restableció dicha enseñanza, alterando la denominación del Centro, que se tituló *Escuela nacional de Música y Declamación*, hasta el Real Decreto de 14 de Septiembre de 1901 que hubo de darle nuevamente el de *Conservatorio de Música y Declamación*, en el que organizó las enseñanzas de la *Música vocal e instrumental*, la *Declamación lírica* y la *Declamación dramática*.

Los *estudios mercantiles*, atendidos primeramente por los Consulados y sus Juntas de Comercio, fueron pasando en el decurso de la primera mitad del siglo XIX a cargo del Estado. Pero esta supeditación no se tradujo en uniformidad de tales Centros, que hacia el año de 1840, aparecían organizados, según las localidades, del modo más distinto. Escasos en el número, diferentes en su objeto, sin procurar la enseñanza metódica más o menos completa, las primitivas *Escuelas de Comercio*, ni aun merecían este nombre, pues sin él era imposible adivinar el fin para que habían sido establecidas la mayor parte de ellas. El Real Decreto de 8 de Septiembre de 1850, del que tomamos las manifestaciones precedentes, estableció *Escuelas especiales de Comercio*, en Madrid, Barcelona, Cádiz, Coruña, Málaga, Santander, Sevilla y Valencia, las cuales, habían de estar incorporadas en los Institutos de segunda enseñanza, aunque con un Director especial, pudiendo conceder el título de *Profesor mercantil* a los alumnos que aprobasen en las mismas los estudios de Matemáticas elementales con sus ramos agregados, Partida doble y sus agregados, Elementos de Economía política y sus agregados, Geografía fabril y comercial, y dos



idiomas. La Ley general de 1857 clasificó como enseñanza profesional la de Profesores mercantiles, determinando los estudios correspondientes a la misma y su emplazamiento en la Escuela de Madrid agregada al *Real Instituto Industrial*. El Real Decreto de 20 de Septiembre de 1858 estableció como requisito para el ingreso en la *Escuela Profesional de Comercio* haber aprobado en los Institutos de segunda enseñanza las asignaturas exigidas para ser *Perito mercantil*, y determinó el cuadro de disciplinas de la carrera de Comercio. Como verdaderamente básico en la materia debe ser considerado el Real Decreto de 11 de Agosto de 1867 refrendado por el Sr. Navarro y Rodrigo. En tan importante disposición se hace una apología de la profesión mercantil y se dividen sus enseñanzas en *elementales* y *superiores*. Establece *Escuelas de Comercio elementales* para la carrera de Peritos mercantiles en Alicante, Bilbao, Coruña, Málaga, Sevilla, Valladolid y Zaragoza; y *Escuelas de Comercio superiores* para esta misma carrera (la de Perito) y la de Profesores mercantiles, en Barcelona y Madrid. Por último, el Real Decreto de 17 de Agosto de 1901 emplazó en los Institutos generales y técnicos de Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Canarias, Castellón, Coruña, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pontevedra, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza, *estudios elementales de Comercio*, que capacitaban para obtener el certificado de *Contador de Comercio* y, asimismo, fundó en los Institutos de Alicante, Barcelona, Bilbao, Málaga y Madrid, *Escuelas superiores de Comercio*, que darían las enseñanzas y expedirían el título de *Profesor Mercantil*, título que habilitaría para obtener el ingreso en el Cuerpo de Aduanas, en el de Contabilidad del Estado y en el de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos.

En el concepto de *Escuelas especiales* entran también las siguientes: la *Escuela Superior de Diplomática*, fundada en Madrid por Real Decreto de 7 de Octubre de 1856, cuyas enseñanzas se incorporaron a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central por Real Decreto de 19 de Julio

de 1900: las *Escuelas del Notariado*, fundadas el 15 de Abril de 1844 y hoy absorbidas por las Facultades de Derecho; las *Escuelas de Veterinaria*, convertidas en Centros de carrera profesional por la Ley de 1857, y reglamentadas por Decreto de 2 de Junio de 1871; las *Escuelas de Artes y Oficios* cuyo embrión estuvo constituido por las primeras cátedras establecidas en el Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, convertido en 1824 en *Real Conservatorio de Artes*; las *Escuelas Nauticas*, algunas de las cuales prepararian segun la Ley de 1857 para *Pilotos* (las de Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, La Coruña, Gijón, Málaga, San Sebastián, Santander y Santa Cruz de Tenerife) y otras para *Constructores navales* (las de Barcelona, Cádiz, Cartagena, La Coruña y Santander); la *Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnasia*, instituida por la Ley de 9 de Marzo de 1873, y otras menos importantes, de que hacemos gracia para no dilatar este artículo, ya sobradamente extenso.

**103. El progreso científico y sus principales representantes.**—Durante los años que constituyen el periodo histórico objeto al presente de nuestro estudio (1833-1902), las disciplinas llamadas por antonomasia científicas experimentaron algun impulso, no sólo procedente de la acción personal de figuras aisladas que con su labor sirvieran de estímulo y norte a los estudiosos, sino de la cada día mas cumplida organización de las enseñanzas relativas a cada una de las disciplinas científicas, organización de la que fue uno de los primeros testimonios el dado por la Ley general de Instrucción pública de 1857 al establecer en Madrid la *Escuela Superior de Ciencias exactas, Físicas y Químicas*, que con el *Museo de Historia natural* y el *Observatorio Astronómico* habían de constituir la *Facultad de Ciencias*.

Apuntamos ya en el anterior periodo al tratar de los mas esclarecidos representantes de los *estudios botánicos* los nombres de Cavanilles, importador del sentido científico de Linneo, Rojas Clemente, representante de la nueva evolución de la ciencia de las plantas, y Lagasca (el gran propagador del método de De Candolle) que todavía logro alcanzar los primeros años del reinado de Isabel II, pues murió en Barcelona

en 1839. En pos de las tres grandes figuras dichas marcha una serie cada vez más nutrida de cultivadores de la *Botánica*, en la que se destacan durante la segunda mitad del pasado siglo Amo Mora, autor de dos importantes estudios sobre la flora española (*Flora fanerogámica* y *Flora criptogámica*); Miguel Colmeiro, que en 1889 dió a la estampa su hermosa obra *Enumeración y revisión de las plantas en la Península hispano-lusitana e islas Baleares*; Lázaro e Ibiza, escritor de magistrales trabajos sobre *Flora española* y de un meritísimo estudio acerca de *Las Regiones botánicas de la Península Ibérica*; Reyes Prósper, personalidad originalísima, autor, entre otras, de una minuciosa investigación sobre *Las Carofitas* (1901) y de un magnífico estudio titulado *Las estepas de España y su vegetación*, que no por haberse publicado en 1915 queremos dejar de consignar aquí en honor de quien fué tan autorizado maestro como excelente compañero; Joaquín Cipriano Costa, Juan Montserrat, etc., etc.

Entre los especialistas en el cultivo de la *Mineralogía* deben ser citados don Jacobo María de Parga (fallecido en Abril de 1850), que dejó su magnífica colección al Museo de Historia Natural de Madrid; don Donato García, competentísimo maestro y, sobre todo, don Casiano de Prado, fundador en España de los estudios de *Geología*, a quien los eminentes especialistas extranjeros Barrande y Verneuil dedicaron los más cumplidos elogios por las notabilísimas investigaciones modestamente tituladas por Prado *Nota sobre la existencia de una fauna primordial en la cordillera cantábrica*, y autor también de la magistral obra *Descripción física y geológica de la provincia de Madrid*. La fundación el 7 de Febrero de 1834 de la *Academia de Ciencias naturales*, reemplazada el 25 de Febrero de 1847 por la *Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, los trabajos de la *Comisión del mapa geológico de España* y la labor perseverante de la *Sociedad Española de Historia Natural* (1872), contribuyeron de modo extraordinario a los progresos de esta clase de estudios, en los que, aparte los mencionados autores, lograron conquistar sólido prestigio Calderón, Macpherson, Quiroga, Lucas Malladas, el preshistoriador Vilanova, Lan-

derer, Vidal, Fernández Navarro y, posteriormente, Hernández Pacheco.

La *Zoología* cuenta en la segunda mitad del siglo XIX con especialistas de tan merecida fama como Eduardo Chao, José Monlau y José María Galdo, encargados de la parte zoológica de la magnífica obra *Los tres Reinos de la Naturaleza*, adaptación de los libros de Buffón y otros naturalistas franceses. Asimismo brillan en esta rama del saber, Jiménez de la Espada, González Hidalgo, Pérez Aracas, Boscá, Bolívar y otros.

En cultivo de las *Ciencias exactas* el rezago nacional fué notorio. La lectura de la obra de Bails compendia la matemática española de fines del siglo XVIII, y tanto dicha producción como la posterior de Vallejo, acusan un enorme retraso respecto de la obra de Lacroix, que refleja la matemática europea de la citada centuria. Como afirma el señor Rey Pastor, es preciso esperar hasta fines del siglo XIX para notar un progreso esencial en estas disciplinas, y tal renacimiento fué debido a la labor tenaz de un sabio modesto: Eduardo Torroja, que logró imponer en nuestra Patria la Geometría de la posición, pasando directamente de Euclides y Descartes a Staudt. Igualmente debe ser destacada la figura del ilustre don Zoel García Galdeano, fundador de la primera Revista española dedicada a esta clase de conocimientos, *Progreso matemático*, y la del eximio don José Echegaray, genial vulgarizador de las Ciencias exactas.

En punto a los estudios *astronómicos* y *meteorológicos* deben ser citados como conspicuos cultivadores de los mismos: Sánchez Cerquero, que dió nuevas fórmulas para el cálculo de aberración de los planetas, aberración de cometas y eclipses; José de Paula Márquez, que rectificó las tablas de Lindenau y Bonard y puso de manifiesto el error que se cometía en la aplicación de las fórmulas de Bessel; José Galbis, Merino, etc. La *Geodesia* tuvo su centro de mayor actividad científica en el *Instituto Geográfico y Estadístico*, organizado por Decreto de 12 de Septiembre de 1870, y su representante más autorizado en el general Ibáñez, a quien se debe el enlace geodésico de España y Africa.

Respecto de los estudios de *Medicina y Cirugía*, aunque el Real Decreto de 14 de Julio de 1827 y el Reglamento de 10 de Diciembre de 1828 procuraron resolver la pugna entre médicos y cirujanos reuniendo las dos Facultades en una sola Junta y sus enseñanzas en unos mismos Centros docentes, que se denominaron Colègios de Medicina y Cirugía, siguió el pugilato entre los titulados de una y otra procedencia. El Plan de estudios y el arreglo provisional de estos, de 1836 y 1843, inspirado el último como ya indicamos, por el doctor don Pedro Mata, fueron combatidos con verdadero encarnizamiento; y después del Plan de 1847 y de la Ley de Instrucción pública de 1857, hemos de llegar a la Reforma de Octubre de 1868 para ver establecido con caracteres definitivos el principio de que, en lo sucesivo, no se reconocerían otros profesores de la ciencia de curar que los Doctores y Licenciados en Medicina y Cirugía, “cuyas dos ciencias—decía la disposición legal—forman ya una sola Facultad”. Como se ve, los Doctores sólo en Medicina, como los Doctores sólo en Cirugía se habían ido extinguiendo en el decurso del segundo tercio del siglo XIX; pero todavía subsistían los *médicos puros*, cuyo título les autorizaba para curar enfermedades internas, estándoles vedado el dedicarse a la curación y asistencia de las enfermedades quirúrgicas y el hacer ninguna clase de operaciones propias de la Cirugía.

Aunque en la primera parte del período que nos ocupa llenaban el mundo culto los gloriosos nombres de los médicos ingleses Morgan, Simpson, Clay, Wells y Marshal; de los alemanes Weber, Textor, Bargmann y Esmarch; de los norteamericanos Hauward, Jakson y Warren, y de los franceses (continuadores de las tradiciones de Dupuytren), Roux, Lisfranc, Bérard, Guerin, Cloquet, Velpeau, Malgaigne, Nélaton; aunque por medio de las inhalaciones de éter Jakson y Warren comenzaban a operar sin dolor de los pacientes (Octubre de 1846) y Simpson, cirujano de Edimburgo, empleaba en 1847 las propiedades anestésicas del cloroformo; aunque los más afamados cirujanos europeos afanábanse por conseguir el ideal de operar sobre miembros *isquémicos* y trabajan con verdadero empeño para llegar



a la *asepsia*, y conseguir la *antiseptis* de las superficies cruentas, tan notorios adelantos del mundo médico repercutían en España con cierta lentitud. En general, siguió nuestra clase médica nutriendo su inteligencia con producciones de la cultura extranjera, pudiendo afirmarse que los verdaderos maestros de la Medicina española fueron los Blandin, Trouseaux, Pidoux, Beclard, Clouquet, Velpeau, Sappey, Chassaig-nac, Gerdy, Marchessaux, Petrequin. Tissot y demás tradistas que nuestros profesores leían y comentaban en sus cátedras o tomaban como base para sus Manuales y Compendios. Apenas una decena de libros españoles pueden citarse como testimonio de cierta originalidad en sus autores; el *Compendio de Cirugía*, del Doctor Argumosa, el *Tratado de Anatomía general topográfica y descriptiva*, de Lorenzo Boscasa, los *Estudios Clínicos de Cirugía* del Catedrático de la Facultad de Medicina de Barcelona don Antonio Mendoza, el trabajo sobre *Tumores y quistes del ovario y su tratamiento médico - quirúrgico*, del Dr. Rubio y la *Higiene pública y privada* de Pedro Monlau deben ser citados en tal clase de producciones.

Claro es que del atraso general en punto al cultivo de la ciencia médica y a la práctica profesional hay que reconocer algunas excepciones y no sería por ello justo dejar de consignar que el citado Dr. Mendoza aplicó en 1847 con verdadero éxito la eterización en un caso de amputación de pierna y que utilizó también por aquellos días como anestésico el cloroformo, con feliz resultado; que el Catedrático de Valencia Dr. Romagosa introdujo perfecciones en la operatoria de amputación de las extremidades; que el Dr. Hisern realizó por vez primera en España la decolación del fémur, y que en las postrimerías del segundo tercio de la centuria el Dr. don Federico Rubio, discípulo del Colegio de Cádiz, contribuyó a transformar la Cirugía española siendo el primero que practicó en nuestra nación la ovariectomía y la extirpación total de la laringe.

Merecen asimismo honrosa mención los facultativos don Mateo Seoane, médico predilecto de la aristocracia madrileña, gran clínico, abnegado propulsor de la educación popular

y espíritu independiente del que dió gallardo testimonio al ser llamado juntamente con Argumosa a intervenir en el famoso asunto de las llagas de Sor Patrocinio; el médico militar y sabio catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid don Ramón Capdevila; el ya aludido don Diego Argumosa Catedrático también en el Colegio de San Carlos de esta Corte y operador de extraordinaria valía<sup>1</sup>; el asimismo citado don Joaquín Hisern contra el cual se formuló la acusación de que daba en su cátedra “mucha importancia a los experimentos y vivisecciones, y este tiempo lo robaba a la exposición de sus doctrinas”, acusación que, como se ve, constituye el más cumplido elogio de aquel maestro eminente; don Vicente Asuero, reputado como el primer médico español de su tiempo, magistral expositor en sus lecciones de *Terapéutica substitutiva*, y nombrado médico de Cámara para contrarrestar la influencia que en el Real Palacio comenzaban a ejercer los homeópatas; el portentoso operador de fama mundial don Melchor Sánchez de Toca, eximio maestro de la Facultad de Medicina madrileña y publicista meritísimo; el catedrático académico y periodista profesional Dr. Juan Fouquet, notable anatómico, dotado de extraordinaria cultura general y a cuya iniciativa se debió la fundación del *Museo Iconográfico*; el Dr. Corral y Oña, médico de Isabel II y de Alfonso XII, que recompensaron sus eminentes servicios concediéndole el título de Marqués de San Gregorio<sup>2</sup>; don Pedro Mata, eminente catedrático de Medicina legal y Toxicología y, según Menéndez y Pelayo “el propagador más ilustre, elocuente, convencido y honrado

1. Encargado de la curación de Sor Patrocinio, logró que desaparecieran del cuerpo de ésta las famosas llagas. Esta curación fué causa de que, como decía Argumosa, *le cerraran muchos devotos las puertas de sus casas y hasta... las del Cielo*.

2. Anteriormente, al Dr. Castelló se le había otorgado por Fernando VII el de Marqués de la Salud. Después, los Doctores Núñez, Busto y Toca tomaron su apellido para título de los respectivos marquesados con que fueron honrados; Nieto y Serrano ostentó el título de Marqués de Guadalerzas; J. Bonet lució la baronía de su apellido; Calleja el conado; Gutiérrez el marquesado de San Diego; Gimeno, el condado de Gimeno y, últimamente, el Dr. Aguilar también ha recibido título de nobleza. Sería curioso hacer un estudio enderezado a explicar los móviles de esta manifiesta inclinación de los profesionales de la ciencia de curar en pro de las exornaciones palatinas y las rutilancias nobiliarias.

del materialismo". Pizcueta, Batllés, Hoyos, y, ya entrado el último tercio del siglo, Camisón, San Martín, Calleja, Gimeno Cabañas, Hernando (don Benito) Esquerdo, Sañudo, Gutiérrez, Fernández Chacón, Barraquer, Cardenal y Sarabia.



Fig. 162.—Ramón y Cajal

Finalmente, la *Biología* ha tenido como notables representantes a Rodríguez Carracido, autorizadísimo maestro en las cuestiones químico-biológicas, Recasolano en las físico-biológicas, Castelló, Arnao y Gredilla, en el análisis microscópico del reino vegetal y, sobre todo, el Padre Vicent, iniciador de la ciencia biológica española, y Santiago Ramón y Cajal (nacido en Pettilla de Aragón el 1.º de Mayo de 1852), el más alto y portentoso maestro de ella. Las profun-

das y originalísimas investigaciones de Cajal sobre el sistema nervioso han ganado para su autor condigna fama mundial y para España un honroso lugar en el concierto de los pueblos cultos.

Respecto de los *estudios filosóficos*, las tendencias más acusadas durante el período que estudiamos son la tradicional *escolástica*, con diferencias de matices y la representada por el influjo de *sistemas extranjeros*. La primera tiene en Jaime Balmes (1810-1848) su más alta personificación. Filósofo independiente dentro del escolasticismo, logró extraordinaria y merecida boga con sus obras *Filosofía fundamental*, *El criterio*, *Cartas a un escéptico* y *El protestantismo comparado con el catolicismo*, acertando a interesar con su claro juicio y elegante estilo aun a personas nada aficionadas a esta clase de disciplinas. Escolástico afiliado reciamente al tradicionalismo, fué Donoso Cortés, propugnador de temperamentos en materia religiosa que, por lo extremos, le hicieron caer casi en la heterodoxia; y escolásticos también fueronlo Mendive, Cuevas, Ceferino González y Orti y Lara.

La corriente filosófica extranjera más acentuada fué la de Krause, de cuyas ideas se convirtió en el más activo propagandista en España don Julián Sanz del Río. Tradujo éste de aquél el *Sistema de la Filosofía* y el *Ideal de la Humanidad para la vida* y compuso de propia Minerva el *Análisis del pensamiento racional* y la *Filosofía de la Muerte*. Constituyera o no su designio enseñar un sistema filosófico determinado, es lo cierto que acertó a modelar la mentalidad de una porción de hombres inteligentes que llevaron a la política, la Pedagogía, el Derecho y la Economía el espíritu de investigación y la orientación liberal de su maestro; Salmerón, Giner de los Ríos, Sales y Ferré, Tapia Quevedo, Canalejas (don Francisco de Paula), Castro, Azcárate, González Serrano, etc., personifican la influencia a que aludimos.



Fig. 163.—Jaime Balmes

Igualmente empiezan a dar fe de vida en España las ideas filosóficas de Kant en la segunda mitad de la centuria que historiamos, pues aunque el nombre del famoso pensador de Königsberg se ve ya citado en 1807 en una oda de don Bernardino Fernández de Velasco, Conde de Haro, realmente el influjo de sus obras no se deja sentir hasta fecha muy posterior. En efecto, el año 1865 Rey Heredia tradujo unos fragmentos de la *Lógica trascendental* de Kant, y Gabino Lizárraga, García Ruvira, J. Uña y Zozaya, hicieron también diferentes versiones de los trabajos del filósofo alemán. Sin embargo de ello, a José del Perojo es a quien se debe la más meditada y valiosa traducción de la *Crítica de la razón pura* (1883), precedida de la *Vida de Kant*, obra de la que sólo se publicó el primer tomo, y a Salmerón y Lloréns y Barba las primeras lecciones de cátedra destinadas a exponer los fundamentos de la filosofía kantiana.

Aparte las anteriores corrientes filosóficas se acentúan otras, tales como la hegeliana, cartesiana, positivista y ecléctica, de las que fueron intérpretes Cantero, Ramírez, Fabié, Moreno Nieto, Manuel de la Revilla, García Luna, etc.

En las aplicaciones de la Filosofía a la Política, la Sociología y el Derecho debemos mencionar a don Francisco Pi y Margall en sus conocidas obras *Las nacionalidades* y *Las luchas de nuestros días*; a doña Concepción Arenal, cuyas producciones *El visitador del preso*, *El derecho de gracia*, *La mujer de su casa*, *La beneficencia*, *la filantropía y la caridad*, *El pueblo*, *el reo y el verdugo*, *Estudios penitenciarios*, etc., etc., son en cuanto al estilo, modelo de concisión y elegancia, y en cuanto al pensamiento testimonio elocuente del refinamiento espiritual de su ilustre autora; León Galindo y de Vera, sabio jurisconsulto y correctísimo autor del admirable preámbulo de la *Ley hipotecaria*, y Pacheco, Arrazola, Cortina, García Goyena, Alvarez, Romero Girón, Silvela, Dorado Montero, Gil Robles y Díaz Cobeña, que en la teoría y en la práctica del Derecho adquirieron justo renombre.

La Historia, llegada durante el siglo xvi a la perfección literaria y cultivada con magistral orientación científica en el siglo xviii, tiene durante el período que examinamos como autorizados cultivadores a don Modesto Lafuente, cuya *Historia general de España*, aunque en ocasiones ampulosa, puede citarse como meritísima labor, singularmente en la parte destinada al estudio de la edad moderna; don Vicente la Fuente, que con calidad y traza eruditas que le aproximan a los historiadores del siglo xviii, nos ha legado, entre otras, la magnífica *Historia de las Universidades*, la *Historia de las sociedades secretas*, los *Estudios críticos sobre la historia y el derecho de Aragón* y la *Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud*; Emilio Castelar, cuya *Historia del descubrimiento de América*, así como la del movimiento republicano de Europa, se hacen perdonar la, en ocasiones, deficiencias de fondo por los esplendores y bellezas de la forma; Pi y Margall, más sobrio y científico que Castelar; Amador de los Ríos con su erudita *Historia de*



los *judíos españoles*; Cánovas del Castillo con los concienzudos trabajos sobre la *Decadencia de España*; Tapia, Ferrer del Río, Gebhard, etc.

En los estudios históricos de carácter crítico, literario y artístico, Menéndez y Pelayo es la figura cumbre, gozando del mayor predicamento entre los cultos su *Historia de las ideas estéticas en España*, su *Antología de poetas líricos españoles*, y su admirable *Historia de los heterodoxos españoles*. Figuras también de singular prestancia científica en el respecto que nos ocupa fueron la del ya citado don José Amador de los Ríos, autor de una magistral *Historia crítica de la literatura española*; la de José María Quadrado, que en la parte en que hubo de contribuir a la monumental obra *Recuerdos y bellezas de España*, tan gallarda prueba dió de su extraordinaria cultura; la del glorioso maestro Milá y Fontanals, a quien debemos dos peregrinos estudios sobre la *Historia de los Trovadores*, y la *Poesía heroica popular castellana*; la del compilador, comentarista y acucioso anotador del *Romancero general*, don Agustín Durán; las de los ilustres arabistas Gayangos y Codera; la del eminente arqueólogo y filólogo Fernández Guerra y Orbe, y las de Hinojosa, Padre Fita, Rodríguez Villa y tantos otros beneméritos investigadores que por especialísimo modo han contribuído al progreso de las disciplinas históricas.



Fig. 164.—D. Marcelino Menéndez y Pelayo

**104. Los géneros literarios.**—Al terminar el primer tercio del pasado siglo, una nueva secta literaria había adquirido difusión en Francia, y trascendido de la nación vecina a España en las postrimerías del reinado de Fernando VII. La naciente orientación no era, empero, de origen francés sino que por lo contrario, habíase iniciado en Inglaterra y Alemania como reaccionó contra la hegemonía hasta entonces ejercida por los gustos y modas galicanos del siglo XVIII y por las armas

victoriosas del genio napoleónico. Características fundamentales de tal corriente fueron: la propensión a ensalzar en el orden poético la producción popular y espontánea de cada país, frente al preceptismo académico del pseudo-clasicismo francés: la marcada inclinación a contraponer a la procaz irreligiosidad del revolucionarismo galo, la antigua piedad cristiana y cierto espiritualismo y misticismo, o cuando ello no era posible, dado el sentimiento de duda que dominaba a algunas almas, la de sustituir aquella audacia atea, grosera e irreverente, por un desespero interior, generador de melancólico pesimismo; el olvido del empleo de la Mitología clásica, para llenar el hueco producido por tal desplazamiento con el factor sobrenatural inspirado bien por los libros sagrados de nuestra religión, bien por las antiguas mitologías del Norte europeo, y aun del Oriente; y la afirmación rotunda del criterio de libertad como protesta contra los rigores del dogmatismo<sup>1</sup>.

De aquel movimiento, tan intensamente operado en Alemania fué Mme. de Stael principal importadora en Francia, poniendo en tal empeño, no sólo designios literarios, sino intención política, ya que aspiraba, al convertirse en portavoz de las nuevas ideas, a precipitar la ruina del régimen napoleónico. Sobrevino al fin ésta, y tras ella, verificóse la restauración monárquica, adquiriendo cada vez mayor intensi-

1. "El romanticismo — ha dicho Valera — podía ser católico ferviente, "incrédulo y blasfemo, amoroso y blando, terrible y endemoniado, y todo "a la vez. El toque para ser romántico consistía principalmente en renegar "de las divinidades del Olimpo: en hablar de Jehovah o en no hablar de "Dios alguno; y en poblar el mundo, no ya de dioses y semi-dioses "paganos, sino de ondinas, huríes, brujas, sálides y hadas, o en dejarle "vacío de toda apariencia que no fuese natural y conforme al testimonio "de los sentidos."

"El poeta no escribía ni debía escribir por arte, sino por inspiración; "su existencia debía tener algo de excepcional y de extravagante; hasta "en el vestido se debía diferenciar el poeta de los demás hombres; y el "universo mundo le debía considerar como a un apóstol con misión especial "que cumplir en la tierra. Víctima de su misión y de genio, no com- "prendido por el vulgo, el poeta debía ser infeliz; debía ser *una planta "maldita con frutos de bendición*. En sus amores, debía aspirar el poeta "a un ideal de perfección que nunca se realiza en el mundo, ni por "asomo se hallase en mujer alguna, y sin embargo, amar a una mujer "con delirio, imaginando ver en ella a la *maga de sus sueños*, a la "*paloma del diluvio* y a la *rosa de Jericó*; mas al cabo debía palpar la "realidad, conocer lo vulgar del objeto de sus amores, maldecirle y me- "nospreciarle, y llorar sus ilusiones perdidas ya blasfemando de Dios y "de sus santos, ya echándose a los pies de los altares y entonando ple- "garias a la Virgen y a Jesucristo."

dad la iniciada corriente literaria, que incorporada al espíritu francés con las variantes que le impuso el portentoso genio de este pueblo, dió propiamente lugar al llamado *romanticismo*.

“La Revolución romántica—escribe un ilustrado historiador moderno—se consumó entre nosotros por un doble movimiento, realizado el uno dentro de la Península y el otro fuera, o sea, en los poetas emigrados del fuste del Duque de Rivas o Espronceda. El movimiento alemán, representado principalmente por los hermanos Schlegel y por Grimm, tuvo aquí su entrada con Bolh de Faber; el inglés, con la vulgarización del falso Ossian, traducido ya por Montegón, y de las novelas de Walter Scott; el francés, con la traducción y éxito de Chateaubriand, de Mad. Cottin, de Bernardino de Saint-Pierre y de Mad. de Genlis. Desde 1818 el editor Cabrerizo de Valencia, y desde 1831 el literato Bergnes en Barcelona, comenzaron a publicar con novelas extranjeras otras de autores españoles. En 1833 hacía ya de estas últimas el editor Repullés una Biblioteca especial que colaboraron Larra, Espronceda y Escosura. Víctor Hugo influyó también decisivamente en el triunfo definitivo del romanticismo en España: el estreno de *Hernani* en París sugirió al Duque de Rivas la idea de componer un drama genuinamente romántico, y ese drama fué el *Don Alvaro*”.

Consignadas las notas precedentes, pasemos a hacer una sucinta enumeración de nuestros principales valores literarios durante el período que historiamos.



Fig. 165.—Mariano José de Larra

La crítica literaria tuvo su más esclarecido representante en don Mariano José de Larra (1809-1837), respecto de cuya labor pueden distinguirse dos épocas perfectamente caracterizadas correspondientes a los dos pseudónimos que hubo de emplear en sus escritos, a saber: el *Pobrecito Hablador*, y



Fig. 166. — Espronceda

menos espontáneo y asaz agrio y taciturno en la segunda, dió en ambas elocuente testimonio de sus portentosas facultades para enjuiciar la vida teatral, la social y la política, habiendo quedado algunos de sus trabajos como, por ejemplo, el que dedicó al estreno del *Trovador*, de García Gutiérrez como piezas verdaderamente clásicas en punto a crítica literaria.

El romanticismo tiene como más altos representantes en la lírica y en la épica españolas del segundo y postrero tercio del

siglo XIX a don José Espronceda y a don José Zorrilla. Evocar aquí las bellezas de *El Diablo Mundo*, *El estudiante de Salamanca*, y *el Canto a Teresa*, producciones culminantes de aquél, o pretender descubrir los primores literarios y el caudal de inspiración que atesoran las composiciones de Zorrilla, tituladas *Granada*, *Leyendas*, *Los Gnomos*, *Los cantos del trovador*, etc., valdría tanto como querer llamar la atención sobre algo que, de puro conocido y admirado, vive en la memoria de toda persona culta. Poetas también de extraordinario fuste fueronlo el correcto e injustamente olvidado García y Tassara, los melancólicos Gustavo Adolfo Becquer y Augusto Ferrán, el ingenioso Ventura Ruiz Aguilera, el regocijado Manuel del Palacio, y los filosóficos Gaspar Nuñez de Arce y Ramón de Campoamor.

La *novela nacional*, creación poética más importante y originalísima del siglo XIX, tuvo como base las *Escenas andaluzas* de Serafín Estévez Calderón (*El Solitario*), las *Es-*

*enas matritenses*, de Mesonero Romano, los bellísimos cuentos de Antonio Trueba, los animados cuadros de costumbres de Larra, las primorosas relaciones de Pedro Antonio de



Fig. 167.—José Zorrilla



Fig. 168.—Gustavo Adolfo Becquer

Alarcón y las novelas históricas de *Fígaro*, Enrique Gil y Fernández y González. Aproxímase al tipo de la novela moderna doña Cecilia Bohl de Faber, y brillan posteriormente, en el cultivo de la *realista* de costumbres campesinas y populares, José María Pereda, en la *psicológica*, Varela, y en la *histórica*, Benito Pérez Galdós.

El *romanticismo* influyó profundamente en la dramática española del siglo XIX. Actuó de nexo entre el teatro clasicista del siglo XVIII y el romántico del XIX el ilustre don Francisco Martínez de la Rosa con sus dramas históricos



Fig. 169.—D. Gaspar Núñez de Arce



*Aben Humeya* y *La conspiración de Venecia*, y fué portaestandarte de las nuevas orientaciones literarias el Duque de Rivas, cuyo magnífico drama *Don Alvaro o la fuerza del sino*, estrenado el 22 de Marzo de 1835, representó el decisivo y com-



Fig. 170.—D. Ramón de Campoamor



Fig. 171.—Pedro Antonio de Alarcón

pleto triunfo del romanticismo, que siguió inspirando las producciones escénicas de un García Gutiérrez en *El Trovador*, de un Zorrilla en *El Zapatero y el Rey*, en *Sancho García* y en *Traidor inconfeso y mártir*, y de un Hartzenbusch en *Los amantes de Teruel*.



Fig. 172.—Juan Valera

La comedia de costumbres halló su representación más genuina en Manuel Bretón de los Herreros y en Narciso Serra; y la total concepción dramática, amplia y comprensiva, en Manuel Tamayo y Baus y Adelardo López de Ayala. La tragedia clásica *Virginia* y el drama histórico *Locura de Amor*, del primero, y los celebradísimos dramas y comedias del segundo, tales como *Consuelo*, *Un hombre de Estado*, *El tanto por ciento*, *El tejado de vidrio*, etc., cons-

tituyen admirables arquetipos en su género. Durante los veinte últimos años de la centuria domina como amo y señor de la ficción dramática el peregrino ingenio de don José Echegaray, cuyas obras teatrales, no obstante lo falso y artificioso de algunas, lograron conquistar la entusiasta adhesión de los públicos sugestionados por el arte de quien, siguiendo las huellas de Víctor Hugo, Dumas y Sardou, supo trasladar a las tablas los más violentos conflictos creados por las humanas pasiones.

A los hombres prestigio-sísimos ya citados al hacer el rápido inventario de la producción poética española a partir de 1833, debemos apostillar los más representativos de la pléyade literaria que brilla durante los años de la Regencia de Doña María Cristina de Austria. Tales son los de Emilio Ferrari, Federico

Balart, Juan Antonio Cavestany, Manuel Reina, Carlos Fernández Shaw, Salvador Rueda y, sobre todo José María Gabriel y Galán, en la lírica y épica; Leopoldo Cano, Eugenio Sellés, Zapata, Dicenta, Galdós, Ramos Carrión, Vital Aza, Javier de Burgos, Ricardo de la Vega, los Hermanos Quintero y Benavente, en la dramática, y Vicente Blasco Ibáñez, el atildado Jacinto Octavio Picón, Emilia Pardo Bazán y Armando Palacio Valdés, en la creación novelística.

Continúa en el período que historiamos la espléndida floración de la tribuna española. De la época anterior llega a ésta en plena posesión de sus portentosas facultades oratorias don Antonio Alcalá Galiano, incorporándose a la vida pública como nuevos artífices de la palabra: Donoso Cortés,

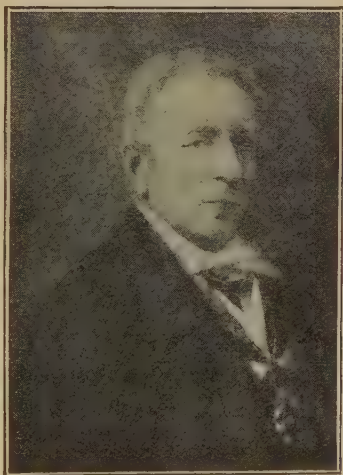


Fig. 173.—El Duque de Rivas

profuso y amanerado; don Joaquín María López, verboso hasta dejarlo de sobra; Olózaga, recio argumentador y acerrado polemista; Cándido Nocedal, irónico y castizo; Gon-



Fig. 174.—Hartzenbusch



Fig. 175.—Bretón de los Herreros

zález Bravo, improvisador admirable; Aparisi Guijarro, Pacheco y Cortina, serenos, mesurados y profundos; Ríos Rosas, vehemente y tribunicio; Martos, sobrio y elegante; Pi



Fig. 176.—Manuel Tamayo y Baus



Fig. 177.—José de Echegaray

y Margall, frío y reflexivo; Salmerón, magnífico y filosófico; Castelar, esplendoroso de forma y ampuloso de concepto;

Cánovas del Castillo, magistral siempre; Sagasta, hábil y sagacísimo; Silvela, culto y áticamente incisivo; Moret, abundoso y atildado; Maura, clásico de figura, luminoso de pen-



Fig. 178.—Serafín Álvarez Quintero



Fig. 179.—Joaquín Álvarez Quintero

samiento y sobrio de expresión; Canalejas, fácil de palabra y rico de ideas, y Vázquez Mella, a quien los más puros



Fig. 180.—Benito Pérez Galdós



Fig. 181.—Jacinto Benavente

afectos hacia la patria inspirábanle bellísimas oraciones, más académicas que parlamentarias.

Corresponde al siglo XIX, especialmente en su segunda

mitad, un espléndido renacimiento de las Literaturas regionales. La catalana, que despierta magnífica de inspiración con la *Oda a la Patria*, compuesta por Aribau en 1834, con *La Noya fugitiva* de Juan Cortada, y con las variadas composiciones de Rubió y Ors (el *Gayter de Llobregat*), recibe nuevo impulso al instaurarse los Juegos Florales el año 1859 y llega al ápice de su esplendor con el grandioso estro de



Fig. 182.—Leopoldo Alas (Clarín)

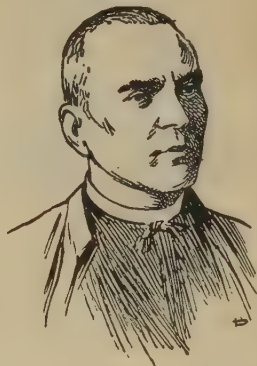


Fig. 183.—Jacinto Verdaguer

Mosen Jacinto Verdaguer, que con sus poemas *La Atlántida* (1877) y *Canigó* (1886), justamente alcanza la consideración de magno, quizá el más grande, poeta épico español del siglo XIX. La dramática catalana cuenta asimismo en la época que examinamos con dos figuras de primer orden: la de Angel Guimerá y la de Ignacio Iglesias. Por su parte, la Literatura valenciana registra entre sus cultivadores más sobresalientes a los poetas Vicente Querol y Teodoro Llorente y al gracioso sainetero Escalante.

Por último, el renacimiento de las letras gallegas se inicia en los primeros años del reinado de Isabel II, contando entre sus heraldos de más valía a Nicomedes Pastor Díaz y Juan Manuel Pinto, a quienes siguen Ramón Barros, Fernández Anciles, Ricardo Puente Braños, Antonio Santiago Somoza y otros; llegando a límites de verdadera perfección lírica y épica gallegas con la maravillosa Rosalía de Castro y el inspiradísimo Curros Enríquez.



**105. La Música.**—Continúa durante el segundo tercio del siglo XIX el predominio de la ópera italiana en la técnica de nuestros músicos y en las aficiones del público español. Rossini, Donizetti, Bellini, Mercadante y Paccini, gozan del máximo predicamento entre la gente filarmónica y la que, sin llegar a serlo, convierte el espectáculo lírico en mero artículo de moda. Escenarios del arte musical en auge siguen siéndolo los teatros de la *Cruz* y del *Príncipe* hasta el año de 1848, y desde 1842 a 1850, el del *Circo*, que llegó a denominarse *Teatro de la Ópera*, por virtud de las reformas llevadas a efecto el año de 1849 en los coliseos de Madrid por el conde de San Luis. El 19 de Noviembre de 1850 abrió sus puertas el *Teatro Real*, construido, como ya hemos dicho, sobre el solar que había ocupado el de los *Caños del Peral*.

Centro asimismo de los amantes de la música fué el *Liceo artístico y literario*, fundado por don José Fernández de la Vega y algunos de sus contertulios del *Parnasillo*, el año de 1837<sup>1</sup>. Los *jueves del Liceo* llegaron a adquirir justa celebridad, pues en ellos se organizaban amenas y cultísimas sesiones de competencia artística y literaria en que brillaban alternativamente los antiguos campeones de la literatura y el arte con los nuevos ingenios que aparecieron como por encanto en aquella época fecunda<sup>2</sup>. Las más notables veladas del Liceo fueron aquellas en que la música representó el principal papel. Allí cantó Rubini, en 1841, *Lucía* y la *Sonámbula*; allí deleitó a los oyentes Paulina García interpretando *El barbero de Sevilla* y *Otello*; allí lucieron su genio musical Listz y Thalberg; allí logró sus triunfos más felices la notabilísima cantante española doña Manuela Oreiro Lema, esposa de Ventura de la Vega; allí dieron testimonio de sus extraordinarias dotes artísticas la Moscoso, Nieves González, Encarnación Lama, Hijosa Cajigal, Miralles, Reguer, Becerra y Carrión, así como el eximio director de orquesta don Francisco Frontera y La Serra, conocido por Valldemosa, y

1. Se constituyó el *Liceo* en un piso de la calle del León trasladóse a las pocas semanas a la calle de las Huertas, frente a la plaza del Matute; de aquí a la calle de Atocha, casa llamada de Balmaseda y, últimamente al palacio de los Duques de Villahermosa, en la Carrera de San Jerónimo.

2. Mesonero Romanos, *Memorias de un setentón*, págs. 448 y 449.

allí, por último, estrenó Saldoni una inspirada cantata con letra del egregio vate don José Zorrilla.

El arte lírico tuvo también su adecuado asiento en el Real Palacio, donde Isabel II mandó construir un bello coliseo, en el que Arrieta hizo oír las inspiradas melodías de sus óperas *Ildegonda* (10 de Octubre de 1849) y *La Conquista de Granada* (10 de Octubre de 1850), interpretadas por cantantes de tanta valía como la Lema, la Istúriz, la Aguirre y la Ramírez, y por los señores Castell de Pons, Hijosa, Reguer Lázaro Puig, Gallart, Calvet, y Algarra<sup>1</sup>.

Como hemos apuntado, el *Teatro del Circo*, construido en 1834 para espectáculos ecuestres en el emplazamiento del actual *Price*, albergó durante ocho años (1842-1850) la ópera italiana. El banquero don José Salamanca, primero, y, después, don Nemesio Pombo y don Andrés Vila, lograron reunir excelentes compañías que con general aplauso actuaron en el citado escenario. La Basso-Borio, Dolores Franco, la Persiani, Salvi, Bettini, Pedro Unánue, Ronconi, Salvatori y Tamberlick, hicieron las delicias de la distinguida concurrencia, que durante varios años favoreció con su asistencia y su entusiasmo el coliseo de la Plaza del Rey. También por aquel entonces lograron sobre las mismas tablas escénicas clamorosos éxitos las bailarinas Guy-Stephan, la Fuoco y la Cerrito, de las que hablaremos más adelante.

Máxima consagración del arte lírico italiano constituyó la inauguración del *Teatro Real* (19 de Noviembre de 1850) con la ópera de Donizetti *La Favorita*, desempeñada por la Alboni, Gardoni, Barrohilhet y Formes. El público ocupó totalmente el hermoso coliseo, pagando algunas butacas a mil reales<sup>2</sup>. El primer director de orquesta fué Rochele, a quien sucedió don Juan Daniel Skoczdpola. Desde la fecha inaugural hasta el año de 1895 se cantaron, además de las óperas de repertorio, *Luisa Miller*, *Rigoletto*, *Il Trovatore* y *La Traviata*, de Verdi; *Roberto il Diábolo*, e *Gli Ugonoti*,

1. Para más detalles consúltese la obra de Peña y Goñi, *La Ópera española y la música dramática en España durante el siglo XIX*, página 444 y siguientes.

2. Narciso Díaz Escobar y F. Lasso de la Vega, *Historia de Teatro español*, tomo II, pág. 67.

de Meyerbeer; *Il Saltimbanco* de Pacini; *Marco Visconti*, de Petrella, e *Isabel la Católica* y *Marina* de Arrieta.

Mientras la escuela musical fundada por Rossini, tan rica en inspiración y fecundidad melódicas, se desarrollaba y transformaba con Bellini, Donizetti y Verdi, ganando cada vez más al público español, nuestros artistas, esclavos del divismo italiano, aspiraban inútilmente a fundar la ópera nacional. Faltos de la preparación necesaria, fracasaron en tal empeño, y aunque fué especie corriente por aquel tiempo la de atribuir el fiasco al desvío sistemático del público por cuanto pudiera significar intento de hacer independiente el arte español de la tutela extraña, es lo cierto que los compositores nacionales, aun siendo algunos meritísimos, no lograban sino engendrar meras imitaciones de aquellos modelos que aspiraban a substituir. Carnicer, Genovés, Saldoni y Eslava, constituyen el testimonio más cumplido de nuestra afirmación. En efecto, Carnicer, de quien ya hemos hablado al tratar de la música durante el primer tercio del siglo XIX, sigue laborando en el período que nos ocupa. Compone en él la ópera en dos actos *Ismalia o Morte ed Amore*, estrenada en el *Teatro de la Cruz* (12 de Marzo de 1838), una *Misa de Requiem* para ser ejecutada en las exequias del opulento capitalista Sr. Safont<sup>1</sup> y algunas canciones sobre motivos populares. Pues bien, prescindiendo de estas últimas, se advierte en la producción total de Carnicer el calco del modelo rossiniano. "Excelentes producciones desde el punto de vista de los preceptos didácticos—dice Peña Goñi,—pero privadas de ese sello potente de la individualidad, único que puede comunicar savia vital a las creaciones artísticas, pasaron como pasan las obras de imitación, tan pronto nacidas como olvidadas". Otro tanto puede

1. Safont, opulento banquero madrileño — escribe Peña y Goñi, — había salido con parte de su familia a pasar un día de campo en una posesión que tenía en las inmediaciones de San Fernando. Al regresar a la corte en su carruaje, dió al cochera orden de atravesar el Jarama que venía muy crecido. Las aguas arrollaron el vehículo, pereciendo todos los que lo ocupaban. Este horrible suceso causó en Madrid gran consternación. Entonces se hizo popular la copla siguiente:

Permita Dios que te veas  
como se ha visto Safont,  
dando vueltas en el agua  
metido en su faetón."

decirse de Genovés en sus óperas *Enrico e Clotilde o la Rosa bianca et la rosa rossa* y *El Rapto*, con letra del famoso Larra ésta, ambas estrenadas en el *Teatro de la Cruz* en las postrimerias del reinado de Fernando VII, y con las que posteriormente compuso en Italia *Zelma*, *La battaglia di Lepanto*, *Bianca di Belmonte* y *Luisa della Valliere*.

Respecto de los notables compositores don Baltasar Saldoni y don Hilarión Eslava, es obligada una referencia de algún mayor detalle. Saldoni luchó bravamente por conseguir la fundación de la ópera nacional, pero creyó que en tal empresa era factor el más importante, no la técnica y la inspiración musicales, sino el libreto y la nacionalidad del autor y de los intérpretes de la obra. Y el público se encargó de demostrar que, poesía española, argumento español, maestro español y cantantes españoles, pueden dar por resultado una ópera italiana. El estreno de *Ipermestra*, en el *Teatro de la Cruz* (20 de Enero de 1838) y el de *Cleonice, Regina di Siria*, en el mismo coliseo (24 de Enero de 1840), colocaron a la mayor altura el nombre de Saldoni. La Prensa elogió sin tasa al afortunado compositor, y si bien reconocía que el *espartito* de éste pertenecía a la escuela italiana, advertía asimismo el carácter español de la obra y animaba a su autor a acometer sin titubeo el patriótico empeño de nacionalizar el arte lírico. Con tan gratos estímulos, el compositor español emprendió su nobilísima empresa poniendo música al libreto en castellano de González Aurioles *Boabdil, último Rey de Granada*, y al del poeta Cabrés Guzmán *el Bueno*, pero sus desvelos no tuvieron más recompensa que la de ver aplaudidas algunas piezas de *Boabdil* en los salones del *Liceo* (28 de Junio de 1845). En cambio, quien en el arte musical hubo de sufrir tan amargos desengaños, ha logrado en el cultivo de la Historia pasar a la posterioridad como autor del *Diccionario biográfico de efemérides de músicos españoles*, obra apreciableísima como guía en esta clase de estudios.

Dos años hacía que la *Cleonice* de Saldoni se había puesto en escena, cuando un presbítero español, don Hilarión Eslava, estrenaba en Cádiz (1841) con clamoroso éxito su ópera titulada *Il Solitario*. Al año siguiente reverdecía sus laureles po-

niendo en escena *Las treguas de Tolemaida* y, al poco tiempo (1843), una nueva producción, *Pietro il Crudele* venía a testimoniar la fecundidad artística del aventajado músico. Pero de tal linaje de producciones, inspiradas como las de Saldoni y Genovés en el italianismo imperante, hubo bien pronto de separarse para ingresar como maestro en la Real Capilla (1847) y como Profesor en el Conservatorio. A esta etapa de la vida de Eslava corresponden las obras maestras con que ha enriquecido la música religiosa española, en la que no ha tenido rival, y las producciones docentes que durante tantos años han servido de autorizada guía a la juventud estudiosa. Su *Te Deum*, su *Misa de Difuntos*, el *Dies Irae*, sus *Lamentaciones* y sus *Motetes a voces solas*, así como su *Método de solfeo*, producto de una larga preparación, y su *Escuela completa de armonía y composición*, han dado a Eslava a los ojos de la posteridad los máximos honores como eminente autor de música sagrada y esclarecido maestro de nuestro primer Centro de enseñanza lírica.



Fig. 184.—D. Hilarión Eslava

Mientras Eslava producía sus óperas, ya citadas, un benemérito compositor, don Joaquín Espín y Guillén, juntamente con el poeta Romero Larrañaga y con el musicógrafo Soriano Fuertes, fundaba el periódico *La Iberia Musical* (2 de Enero de 1842), cuyo objetivo más concreto era el de laborar en pro de la ópera española. Tradújose aquella campaña en una serie de nuevos intentos a favor del arte nacional: en el *Liceo* de Valencia estrenó don José Valero la ópera española *La Esmeralda* (1843), en Granada, don José Antonio Martos puso en escena la ópera denominada *Veleda o la Sacerdotisa de los Galos*; en Pamplona el maestro don Francisco Porcell consiguió que una compañía italiana interpretase su drama lírico *El Trovador* y, finalmente, el ya citado Espín y Guillén,



el campeón más decidido de la ópera española, logró ver premiados sus esfuerzos al recibir el homenaje que el público madrileño le tributó con motivo del estreno en el Circo del primer acto de su *Padilla o el asedio de Medina*.

Creyóse entonces que la batalla en pro de la ópera hispana comenzaba a ganarse, pero fué ahora el público quien, inconstante y olvidadizo, dejó de prestar su concurso a Espín, no mostrando el menor interés por conocer los dos actos restantes de la referida obra, la cual no llegó nunca a cantarse íntegramente.

Súmense a los anteriores intentos los realizados por don Francisco Gómez, en su obra lírica *Irza* (1846) y por don Inacio Ovejero en su *Hernán Cortés o la conquista del México*, y se tendrá una visión aproximada del panorama de nuestra producción operística con tendencias españolizadoras durante el segundo tercio del siglo xix. Es cierto que en Barcelona brillaron por aquel entonces Cuyás, Rovira, Domínguez y Grassi, pero sus óperas *La Fattucchiera*, de Cuyás; *Sermondo il Generoso*, de Rovira; *La Vedobella* y *La Dama del Castello*, de Domínguez, e *Il proscritto di Altemburgo*, de Grassi, que se estrenaron en el *Teatro de Santa Cruz* de la ciudad Condal, entre los años 1838 y 1843, no representaban otra cosa que un testimonio más de la subordinación de nuestros compositores al arte lírico italiano.

A los comedios del siglo xix corresponde la aparición de un género musical con carácter puramente español. Nos referimos a la ópera cómica española generalmente conocida con el calificativo de *Zarzuela*. Ya desde los siglos xv y xvi se venían representando en nuestra patria pequeñas composiciones dramáticas con parte cantada. En el siglo xvii, el Cardenal Infante don Fernando, organizó en el Palacio que poseía en las inmediaciones del Pardo ciertos espectáculos lírico-dramáticos de mayor o menor extensión y de diferente carácter, a los que se les comprendió bajo la denominación común de *Zarzuela*, por ser éste el nombre que llevaba el aludido Palacio bajo cuyo techo se daban aquellas representaciones. Pero en tales producciones la música tenía un valor muy secundario, valor que no pudo aumentar cuando, entrados en el siglo xviii,

se hallaron nuestros teatros invadidos por la ópera italiana y nuestros músicos dominados por el arte de los Cimarosa, Paisiello, Anfossi y otros. Como sabemos, tal hegemonía hubo de acentuarse durante la primera mitad del siglo XIX merced

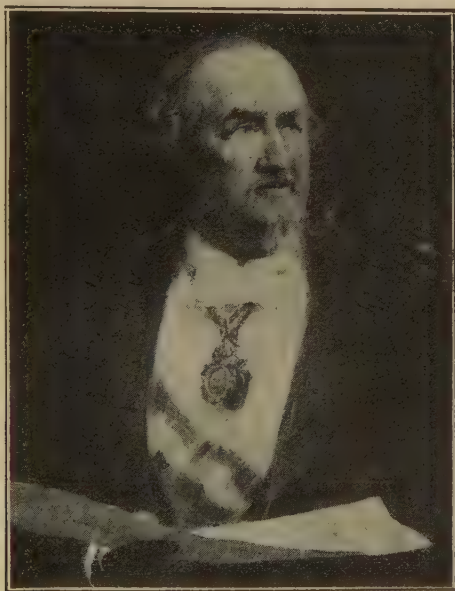


Fig. 185.—D. Emilio Arrieta

al talento de Rossini, Bellini, Donicetti y Verdi. En su consecuencia, en el género de lo que se ha llamado ópera seria, no teníamos en este último período sino música italiana y algunos apreciables testimonios de la inspiración de nuestros compositores, fieles adoradores de aquélla; del género de la antigua *Zarzuela* no quedaba casi nada, y sólo en la música religiosa y en la popular se acusaba la individualidad nacional. Así planteado el problema y en vista de la inutilidad de tanto esfuerzo por dar nacimiento a la ópera española, apareció como

género nuevo en España, el que impropiaamente fué llamado *Zarzuela*, cuando debió denominarse *ópera cómica*. El asunto y el corte general de las nuevas producciones de tal linaje, eran fundamentalmente distintos de los que caracterizan las antiguas Zarzuelas. Hizo su aparición el incipiente género con el estreno en 1849 de *Colegiales y Soldados*, de Rafael Hernando, y de *El Duende*, de Luis de Olona. Después, unidos ambos maestros a sus compañeros Gaztambide, Salas, Oudrid, Barbieri e Incenga, formaron una *Sociedad artística*, que tomando en arriendo el Teatro del Circo, puso en escena con creciente éxito desde 1851 a 1855 las siguientes zarzuelas: *Jugar con fuego*, *Los diamantes de la corona* y *Mis dos mujeres*, de Barbieri; *Buenas noches, señor Don Simón*, de Oudrid; *Catalina* y *El sargento Federico*, de Gaztambide y Barbieri, y *El dominó azul*, *El Grumete*, y *Marina* del gran Arrieta. La benemérita *Sociedad artística*, puesta de acuerdo con el opulento banquero don Francisco de las Rivas, edificó en seis meses el *Teatro de la Zarzuela*, que inauguró sus funciones el 10 de Octubre de 1856. En este coliseo se estrenaron *El último mono* y *El molinero de Subiza*, de Oudrid; *Los Magyares*, *Un pleito*, *El Juramento*, *Las hijas de Eva*, y *La conquista de Madrid*, de Gaztambide; *El diablo en el poder*, *Pan y Toros*, *El hombre es débil* y *El barberillo del Avapiés*, de Asenjo y Barbieri, y *La vuelta del corsario* y *La guerra santa*, de Arrieta. En otros escenarios fueron puestas en escena *Zarzuelas* que el público recibió con extraordinario agrado. Reduciéndonos a citar las que obtuvieron éxito más clamoroso, mencionaremos: *El postillón de la Rioja*, de Oudrid, obra estrenada en el teatro del Circo; *El sueño de una noche de verano* y *Catalina* de Gaztambide, también en el Circo; *Gracias a Dios que está puesta la mesa*, de Barbieri, como las anteriores, en el Circo; del mismo Barbieri *La vuelta al mundo*, estrenada en el *Príncipe Alfonso*, *Artistas para la Habana*, en la *Comedia*, y *De Getafe al Paraíso*, en *Variedades*; y *El dominó azul*, *El grumete* y *Marina* de Arrieta, en el Circo (la primera, el 19 de Febrero de 1853; la segunda el 17 de Junio de igual año, y la tercera el 21 de Septiembre de 1855).

Representáronse también por aquel entonces piezas de ma-

gia, y de entre ellas habremos de citar *La paloma azul*, *Los polvos de la madre Celestina* y *La pata de Cabra*, las tres con música de Oudrid y libreto de Liern, Harzenbusch y Grimaldi, respectivamente; *La varita de virtudes*, de Gaztambide, con letra de Larra, y *Las manzanas de oro*, de Arrieta, con letra de Blasco.

La aparición y rápido desarrollo de la Zarzuela española, motivaron, de un lado, extraordinario entusiasmo en los públicos, que frenéticamente premiaban con sus aplausos a los que eran sus artistas predilectos, pero de otro, la airada protesta de una minoría selecta que estimaba el nuevo género como mezquina manifestación del numen de nuestros compositores. El ilustre novelista don Pedro Antonio de Alarcón se puso al frente de tal cruzada contra la Zarzuela, no ya por lo que ésta tuviera de mediocre expresión artística, sino porque a ella dedicaran sus vigiliass quienes habían abandonado la noble empresa de fundar la ópera nacional. Y positivamente, tenía razón, pues el éxito clamoroso obtenido por Arrieta con su *Marina* cuando, convertida en ópera en tres actos, fué cantada en el *Teatro Real* (16 de Marzo de 1871), honor por primera vez concedido en tales condiciones a un compositor español, cumplidamente probaba que al ser capaces nuestros artistas líricos de tan altos empeños, no debían distraer sus actividades y talentos en menesteres de inferior categoría al muy encumbrado y patriótico que les estaba impuesto. Pero las predicaciones de Alarcón no surtieron el menor efecto, y nuestros compositores, lanzados por el camino de la ópera cómica, en vez de aspirar a servirse de ella como de escabel para rayar a más altura, cayeron en la vulgaridad representada por la compañía de los *bufos madrileños*, que Francisco Arderíus, inspirándose en Offenbach, organizó en Madrid, en Septiembre de 1866. Para servir los intereses del nuevo espectáculo, que comenzó a funcionar en el *Teatro de Variedades*, de donde pasó al *Circo* y de aquí a la *Zarzuela*, el músico Rogel y el literato Blasco compusieron *El joven Telémaco*, tras de la cual producción fueron poniéndose en escena, *Un sarao y una soirée*, de Arrieta, Ramos Carrión y Lustonó; *La gran duquesa de Gerolstein* de Offenbach; *Barba*

*Azul, La bella Elena y Robinsón*, de Barbieri; *El rey Midas*, de Rogel; *Pascual Bailón*, de Cereceda y otras.

La deplorable desviación artística a que dieron lugar los famosos *bufos Arderius*, produjo como saludable reacción en algunos compositores españoles el legítimo deseo de renovar los anteriores esfuerzos en pro de la ópera española. A tal efecto se organizó en 1869 un concurso del que salieron premiadas las óperas *Athaulpa*, de Barrera; *Don Fernando el Emplazado*, de Zubiaurre; *Una venganza*, de los hermanos Fernández Grajal, y *El puñal de misericordia*, de Aceves y Llanos. De las producciones mencionadas, el *Don Fernando el Emplazado* y *Una venganza* llegaron a estrenarse en el *Teatro de la Alhambra* (1871), y, dos años después, la primera de estas óperas, traducido su libreto al italiano, fué cantada en el *Teatro Real* por la Fossa, Tamberlick y Boccoolini. El éxito alcanzado por Zubiaurre le animó a poner música a un poema de don José Cárdenas, titulado *Ledia*, cuyo estreno se verificó también en el *Real* durante el mes de Abril de 1875.

Respecto de la ópera extranjera (abandonada un tanto por nuestro público desde que la mayor complejidad del arte lírico de Meyerbeer<sup>1</sup> le sorprendió y alejó del Real) operóse asimismo una saludable reacción que se tradujo en la asistencia más asidua y entusiasta al regio coliseo en el que durante los años de 1860 a 1870 se cantaron *Il Profeta* y *L'Africana*, del citado maestro berlinés; *Un ballo in máscara*, *Simone Bocanegra* y *La forza del destino*, de Verdi; *L'Ebreo*, de Halvey; *Giuditta*, de Peri; *Marta*, de Fotow; *Zampa*, de Harold; *Pietro de Medici*, de Poniatouski, y *Le tre nozze*, de Allari.

Testimonio hartó significativo de la creciente afición del

1. Su *Roberto el Diablo* se puso en escena el 15 de Marzo de 1853.

2. El propio Verdi vino a Madrid en Febrero de 1863 a ensayar y poner en escena *La forza del destino*, que cantaron magistralmente la Lagrange, la De-Meric, Fraschini, Giraldoni, Cotogni y Bouché. A este viaje corresponde la anécdota que refiere Carmina y Millán en *Cosas del Pasado*, pág. 82, relativa a la desatención de que hizo objeto Verdi a Asenjo Barbieri, dejando de corresponder a las deferencias de éste Pasados tres años y necesitando Verdi de algunos motivos musicales españoles para su ópera *Don Carlos*, solicitó de Barbieri que le facilitase elementos, pero éste correspondió con un rotundo "no me da la gana" a las insistencias de aquél, vengando de esta suerte la falta de urbanidad del engreído compositor italiano.



público a la ópera, lo tenemos en la inauguración en los antiguos *Campos Elíseos* del *Teatro Rossini*, en el que durante el verano de 1864 se celebraron cuarenta y cuatro funciones, estrenándose el *Fausto* de Gounoud, interpretado por la Spezia, Tamberlick, Aldighieri y Vialletti. En el estío siguiente se dieron 78 representaciones, y al acabar la temporada, abrió sus puertas el *Teatro Real* (Octubre de 1865) que prolongó su actuación hasta fines de Mayo, celebrando 164 funciones. Es decir, que en el transcurso de un año se verificaron 242 representaciones, todas ellas interpretadas por cantantes de primera categoría.

Así continuó en auge durante el resto del siglo XIX la ópera italiana en el *Teatro Real* y también en la *Zarzuela* y el *Príncipe Alfonso*, donde lucieron sus dotes líricas la Donadío Stagno, Verger, David, Baldelli, Florini y otros. El 4 de Octubre de 1877, hizo su aparición en el regio coliseo el eminente tenor Julián Gayarre, y algún tiempo después Massini y Tamagno<sup>1</sup>. En la última década de la centuria comenzó a abrirse paso en nuestra patria la música de Wagner, llegando a ponerse en escena con alguna frecuencia óperas como *Lohengrin*, *Sigfrido*, *La Walkyria* y *Tannhauser* y, en la temporada de 1901 a 1902, se anunció el estreno de *Los maestros cantores* y *El crepúsculo de los dioses*. Pero, a decir verdad, la técnica musical del ilustre compositor alemán y su concepto de la ópera, según el cual las voces aparecían, no como factor predominante, sino como elemento fundido en el conjunto sonoro de una verdadera sinfonía vocal e instrumental, no hallaron buena acogida en la generalidad del público, que por su significativa ausencia del teatro, reiteradamente probó su desvío respecto de la nueva corriente del arte lírico. Por ello, cuando el empresario Sr. Arana confeccionó para la temporada de 1902 a 1903, el correspondiente programa, tuvo buen cuidado de acentuar la nota de regresión hacia la ópera italiana, y bastó este anuncio para que el abono se triplicase y el público no abonado ocupase el resto de las localidades para

1. Actuaron también en Madrid artistas líricos de tan cimentada fama mundial como la Frezzolini, la Pencko, la Galletti, la Patti, Mario, Bettini, Varessi, Coletti y Selva.

volver a aplaudir *El barbero*, *La Favorita*, *Los Puritanos*, *Elixir d'amore* y demás obras de su predilección, entre las que en la última parte del período que examinamos adquieren extraordinaria boga las debidas al inspirado estro musical de Mascagni, León Caballo y Puccini.

Asimismo se advierte en las postrimerías de la centuria decimonona, un nuevo intento de creación de la ópera española. Tomás Bretón en *Los amantes de Teruel*, *Garín*, *La Dolores*, *Guzmán el Bueno* y *Raquel*; Ruperto Chapí con *Las naves de Cortés*, *La hija de Jefté* y *Roger de Flor*, Serrano, Nieto, Salvador Giner, Espí, y Felipe Pedrell acometen la noble empresa, sin conseguir enteramente su propósito. En cambio, mantienen con honra y provecho la tradición de la Zarzuela grande española Fernández Caballero, Miguel Márquez y el ya citado Ruperto Chapí. Al primero se deben obras tan celebradas como *Los sobrinos del capitán Grant*, *El salto del pasiego*, *La Marsellesa*, *Las dos princesas*, *La niña bonita*, etc., etc. Marqués triunfó plenamente en *El reloj de Lucerna*, y *El anillo de hierro*. Por último, Chapí obtuvo los más resonantes éxitos con *La tempestad*, *El milagro de la Virgen*, y la inspiradísima partitura de *La bruja*.

Las aficiones del público hacia el llamado *género chico*, estimularon a los compositores españoles a dedicar preferentemente sus aptitudes al cultivo del mismo. Bretón con *La verbena de la Paloma*; Fernández Caballero con *El dúo de la Africana* y *La viejecita*; Chapí con *El tambor de granaderos* y *La revoltosa*; Jerónimo Jiménez, Federico Chueca, Joaquín Valverde y Amadeo Vives alcanzaron fáciles triunfos y pingües rendimientos, que contrastaban con los obstáculos que algunos de los citados compositores hallaron para ganar el aplauso en obras de mayor empeño.

Respecto de la música instrumental, en sus géneros sinfónico y de cámara, es obligado destacar el nombre de las dos entidades que gloriosamente la cultivaron, a saber: la *Sociedad de Conciertos* y la *Sociedad de Cuartetos*. Fundó ésta el eminente violinista Jesús Monasterio, en Enero de 1863, entrando a formar parte de la misma los señores Pérez (don Rafael), Lestán y Castellanos, Profesores de violín, viola y violoncelo,

respectivamente y el pianista don Juan Guelbenzu. La *Sociedad de Conciertos* tuvo su origen en la Corporación fundada en Junio de 1860 por los profesores de música bajo la denominación de *Sociedad de Socorros mutuos*. Aprovechando Barbieri los valiosos elementos allí reunidos, organizó la aludida *Sociedad de Conciertos*, que así constituida, se presentó por vez primera al público de Madrid en el *Circo del Príncipe Alfonso*, el 16 de Abril de 1866. Cuanto la benemérita entidad ha realizado en pro del arte musical difundiendo las más selectas producciones de Beethoven, Listz, Gounod, Meyerbeer, Mozart, Haydn, Auber, Mendelsshon, Wagner, etc. están en la memoria de todos. Pasados algunos años, el ilustre maestro don Tomás Bretón fundó la *Unión artístico-musical*, cuyo primer concierto celebróse el 11 de Abril de 1878. Ambas entidades líricas pusieron especial empeño en dar a conocer, junto a las producciones de los grandes compositores extranjeros, las de los maestros españoles, como Marqués, Ledesma, Zubiaurre, Espino, Monasterio, Espí, Pedrell, Brull, Giner, Chapí, Jiménez, Serrano, etc.

La enseñanza de la música, centralizada en el *Conservatorio de María Cristina*, hubo de sufrir las consecuencias de los cambios frecuentes introducidos en la organización de dicho Establecimiento a partir de la muerte de Fernando VII. Reducida a 2,005 reales anuales la cantidad destinada en presupuestos al sostenimiento del Conservatorio; suprimido el internado de los alumnos y puesta en manos de personalidades salientes en las Administración la dirección del aludido Centro, arrastró éste una vida que nada tuvo de próspera. El nombramiento de don Hilarión Eslava como Profesor de Composición y, en 1866, como Director de la Sección de Música, señala el comienzo de una serie de saludables y bien meditadas reformas que secundó y después prosiguió el gran Arrieta desde que, nombrado Director en 1868, pudo, con la amistad que le unía al Ministro Ayala, recabar para nuestro primer Centro de educación lírica los más decididos y entusiastas patrocinios oficiales. Del Conservatorio, denominado durante algunos años *Escuela nacional de Música y Declamación*, salieron en el primer período de su actuación cantantes de tan re-

conocido mérito como la Lema, la Villo y Unánue. Discípulos de Eslava fueron Zubiaurre, Fernández Caballero y Arriola. En la clase de Arrieta se formaron Miguel Marqués, creador de la Sinfonía en España, Eduardo López Juarranz, Tomás Bretón, Ruperto Chapí y Emilio Serrano. Finalmente, bajo la férula artística de don Jesús Monasterio, famoso violinista, inspiradísimo autor del *Adiós a la Alhambra* y Director del Conservatorio desde 1894, han adquirido las extraordinarias cualidades musicales que hoy admiramos maestros tan renombrados como Arbós, Fernández, Bordas y Hierro.

Faltaría un elemento esencialísimo al cuadro que acabamos de trazar si omitiéramos el glorioso nombre del violinista Pablo Sarasate, discípulo de Allard, y, asimismo, los del compositor y pianista Isaac Albéniz y de los célebres guitarristas Arcas y Tárrega. Sarasate fué algo excepcional como virtuoso del violín. Su periódica aparición en Pamplona, durante las fiestas de San Fermín, se recuerda por los navarros con la triste nostalgia del bien perdido y sin posible sustitución. Isaac Albéniz, continuador de la obra de Pedrell orientada en el sentido de nacionalizar el arte lírico, ha logrado en *Iberia* realizar plenamente el ideal del maestro, tomando como base el canto popular. La gran cruzada emprendida por Pedrell cuenta al presente como autorizados continuadores a Manuel de Falla, Joaquín Turina, Bartolomé Pérez y Oscar Esplá.

**106. La Pintura.**—El arte genial de Goya fué señero. Quienes como Esteve, Juliá, Alenza y Eugenio Lucas quisieron seguir las huellas del maestro, no acertaron más que a imitarle. Sin experimentar la influencia del genial pintor aragonés trabajan, Vicente López, los hermanos González Velázquez, Diego Monroy y otros, que representan al finalizar el primer tercio del siglo XIX la supervivencia del barroquismo pictórico de la centuria precedente. Al mismo tiempo, la orientación clasicista francesa representada por David, tiene en nuestra patria

1. Para la composición de este artículo nos hemos servido preferentemente de la *Galería biográfica de artistas españoles en el siglo XIX*, de Ossorio y Bernard; del *Catálogo de los cuadros del Museo del Prado*, magnífico estudio del Sr. Berruete y Moret, *Historia de la Pintura española en el siglo XIX*.

como autorizados intérpretes a José Madrazo, Juan Ribera y al artista alicantino José Aparicio.

En tales circunstancias, *la reacción romántica* operada en Alemania y Francia por Overbeck, Gericault y Eugenio Delacroix, reacción francamente enderezada a derrocar el artificio de la escuela clasicista de David y sus secuaces, llega a España y cuenta como ilustres cultivadores a Federico Madrazo, hijo de don José y a Carlos Luis de Ribera. Inspirado el primero en Overbeck, pintó en 1841 su magnífico cuadro *Las santas mujeres en el Sepulcro de Cristo*, dedicándose después preferentemente al retrato bajo el influjo bien manifiesto de otro gran artista alemán: Winterhalter. Inferior en mérito a Madrazo fué Carlos Luis Ribera, discípulo de Delaroche, y autor del hermoso lienzo que tituló *Origen del apellido de los Girones en la batalla de La Sagra*. Junto a ambos pintores de figura aparece como expresión del romanticismo en el paisaje Genaro Pérez Villaamil, artista dotado de una gran independencia, pero extremoso e inverosímil en la ejecución de sus obras.

Paralelamente a los *románticos*, brillan como pintores no afiliados a una orientación determinada: Antonio María Esquivel, pintor de asuntos religiosos, históricos, mitológicos, de costumbres y retratos; el erudito Valentín Carderera, Luis y Fernando Ferrant, Antonio Brugada, etc.

Como continuación de la *pintura romántica* se produce la llamada *pintura de historia*, cuya técnica es superior y diferente de aquélla. En Francia realizó la transformación de una a otra Paul Delaroche; en Bélgica, Gustav Wappers, Navez y, sobre todo Gallait, y en Alemania influída ahora por los artistas belgas, Anselm Feuerbach y W. Müller. En nuestra patria la *pintura de historia* encontró un ambiente singularmente propicio dadas las aficiones del gran público al dramatismo de este linaje de producciones y dado también el indiscutible talento que adornaba a los artistas representantes de tan acusada orientación. Rosales, Fortuny, Gisbert, Casado del Alisal, Palmaroli, Alvarez y Zamacois, fueron quienes más autorizadamente la personificaron en el *primer período* que se extiende desde 1856 (fecha de la primera Exposición



nacional de Bellas Artes) hasta 1878 (fecha de la Exposición Universal de París). El *segundo período* de la *pintura de historia* arranca de dicho año de 1878 y termina en 1889 (nueva Exposición Universal de París).

Pertenecen al primero de los aludidos períodos Eduardo Cano, que en la Exposición Nacional de 1856 presentó su cuadro *Cristóbal Colón en el convento de la Rábida pidiendo pan para su hijo*, y que dos años más tarde compuso el magistral lienzo *Don Alvaro de Luna enterrado de limosna en el cementerio de los ajusticiados, extramuros de Valladolid*; el alcoyano Antonio Gisbert a quien se deben los conocidos lienzos *Los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo* y *Fusilamiento de Torrijos*; el palentino Casado del Alisal, que con su lienzo *La rendición de Bailén* llegó al ápice de la fama; Vicente Palmaroli, cuyo cuadro histórico más notable es el que titula *Los enterramientos en la Moncloa en 3 de Mayo de 1808*; Luis Alvarez, que adquirió justo renombre con su entonada obra pictórica *Doña Isabel la Católica en la Cartuja de Miraflores*, y sobre todos los citados, Eduardo Rosales y Mariano Fortuny.

Rosales era madrileño (nacido en 1836). Discípulo de Luis Ferrant y de Federico Madrazo, se trasladó a Roma donde pintó su famosa obra *Doña Isabel la Católica dictando su testamento* a la que siguió en 1871, otra también de grandes proporciones: *La muerte de Lucrecia*.

Mariano Fortuny nació en Reus el año de 1838, fué alumno de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y obtuvo una pensión para estudiar en Roma. Declarada la guerra de Africa (1859), la Diputación de Barcelona envió a Fortuny a Marruecos a fin de que tomara apuntes de la campaña. Allí se reveló como artista de extraordinarias cualidades. Sus cuadros *Wad-Ras*, *Voluntarios catalanes formando su campamento* y *Expugnación del campamento marroquí el día 4 de Febrero de 1860*, fueron el más sazonado producto de las enseñanzas recibidas durante aquella expedición. Sobre motivos africanos también pintó en 1862 el cuadro *Fantasia de la pólvora*. Después cultivó la pintura de género, la acuarela, el grabado al agua fuerte y el dibujo a pluma. En 1869 terminó

su famoso cuadro *La Vicaría*, del que Gautier dijo con singular acierto que era “un boceto de Goya retocado por Meissonnier”. Preocupado hondamente por la resolución del problema de la luz, se le vió luchar por hallar la fórmula ideal en tal respecto. Sus obras *Almuerzo en la Alhambra*, *Gitano apoyado en un asno*, *El jardín de los poetas* y *Playa de Portici* son elocuente testimonio de los esfuerzos del artista por superarse en cada una de sus afortunadas producciones trasladando al lienzo las más auténticas impresiones del ambiente, las proyecciones azuladas y la vibración de la luz en los objetos. En tal sentido puede afirmarse que Fortuny es como el precursor de la corriente *impresionista* o *modernista* que caracteriza el arte pictórico en el último tercio de la pasada centuria.

Brillan también en esta época, Víctor Manzano, entre cuyas obras se destaca la que titula *Ultimos momentos de Cervantes*; Francisco Sans, autor del cuadro *Los náufragos de Trafalgar*; Lorenzo Vallés, que obtuvo un verdadero éxito con su lienzo *La demencia de Doña Juana de Castilla*; Alejo Vera, cuya obra *El último día de Numancia*, fué en 1881 objeto de merecidos elogios; Pablo Gonzalvo, notabilísimo por sus conocimientos de perspectiva; Parcerisa, Espalter, Díaz Carreño, Pérez Rubio, Jover, Navarrete y otros.

Asimismo durante los años a que estamos aludiendo da elocuente testimonio de su talento una brillante serie de paisajistas, de entre los cuales figura como principal representante, el insigne Carlos de Haes, nacido en Bélgica, pero nacionalizado en España, donde aleccionó a discípulos tan distinguidos como Ceferino Araujo y José Jiménez Fernández.

El *segundo período de la pintura de historia*, se inicia, como hemos dicho, en 1878 (primera Exposición Universal de París) y se caracteriza por la acentuación de la orientación realista. París, Roma y Madrid son los tres núcleos más importantes de producción pictórica española durante este período. Trabajan en París, Jiménez Aranda, Raimundo Madrazo y Francisco Domingo y Márquez; en Roma, Francisco Pradilla, José Villegas y José Benlliure, y en Madrid, Castro Plasencia, Manuel Domínguez y Alejandro Ferrant. Al pintor sevi-

llano Jiménez Aranda, influído por Meissonnier, se deben las siguientes obras: *El guardacantón*, presentada en París en 1878, *Los bibliófilos*, *Una cogida en los toros*, y *Un palco de la plaza de toros*. Después de la Exposición Universal de 1889, evolucionó este artista comenzando a trabajar al *aire libre* Raimundo Madrazo, niéto de don José e hijo de don Federico, siguió las huellas de ambos, distinguiéndose en los llamados cuadros de género. *La salida del baile de máscaras*, *Una Pierrette* y *Un baile de máscaras* le acreditan como admirable maestro en aquel estilo parisiense, tan en boga entonces, que, no por pecar de artificioso, deja de ser un dechado de refinamiento y elegancia. El valenciano Francisco Domínguez y Márquez recuerda en algunas de sus producciones la modalidad artística de Goya. *Un lance en el siglo XVII* y *Santa Clara* fueron sus más celebradas primeras obras. Francisco Pradilla, natural de Zaragoza, obtuvo una pensión para trabajar en Roma. Desde esta capital envió los productos de su meritísima labor, en la que destaca el famoso cuadro *Doña Juana la Loca*, premiado con la primera Medalla de Honor en las Exposiciones de Madrid y París celebradas en 1878. Siguieron a esta obra de tan extraordinario empeño *La rendición de Granada* y *El suspiro del moro*, que no pudieron superar a la primera. El sevillano José Villegas, trasladado a Roma en edad moza, recibió el influjo de Fortuny. Sus lienzos más notables son el *Triunfo de la Dogaresa* y *La muerte del maestro*. José Benlliure, nacido en Valencia, fundó en Roma una verdadera escuela derivada de la pintura de Fortuny, y es autor, entre otros, del cuadro de gran tamaño *Visión del Coloseo*, que puede admirarse en el Museo de Pinturas de Valencia.

Entre los pintores de este período que habitaban preferentemente en Madrid, figuran Casto Plasencia, caracterizado por su propensión a la grandiosidad, acreditada en su lienzo *Órigenes de la República romana*, y en parte de la decoración de San Francisco el Grande; Manuel Domínguez, autor del cuadro de historia titulado *La muerte de Séneca*, que figuró en la Exposición madrileña de 1871, y Alejandro Ferrant, sobrino de Luis, e inspirado compositor de los cuadros *El*

*entierro de San Sebastián*, expuesto en 1878, y Cisneros examinando los planos del hospital de Illescas.

Formando grupo aparte deben ser citados el admirable colorista valenciano Emilio Sala, cuyas producciones *Guillén de Vinatea* y *La expulsión de los judíos* le acreditaron de verdadero maestro, digno continuador de Rosales; y José Moreno Carbonero cuyas ilustraciones del Quijote, la *Primera aventura de Gil Blas*, *El Príncipe Don Carlos de Viana*, y, sobre todo, *La conversión del duque de Gandía*, le han colocado en la primera fila de los artistas de la paleta con personalidad pictórica original, no obstante haberse inicialmente inspirado en la manera del gran Fortuny.

Merecen asimismo especial mención entre los pintores del período que estudiamos, Ulpiano Checa, a quien se deben los lienzos *Invasión de los bárbaros* y *Carrera de carros romanos*, y Salvador Viniegra que, desde Roma donde residía, lo mismo que Checa, envió a la Exposición de Madrid de 1884 su célebre composición *Bendición de los campos*; los valencianos Ignacio Pinazo, Joaquín Agrasot, Vicente Borrás y Alberto Pla y Rubio; los sevillanos José García Ramos y Gonzalo Bilbao, este último, artista de mérito excepcional que ha evolucionado hacia el realismo planteándose y revolviendo gallardamente los problemas de la pintura al aire libre; y los artistas, que, procedentes de distintas provincias, han trabajado en Madrid, tales como Martínez Cubells, Américo, Plácido Francés, Nin y Tudó, Lizcano, Muñoz Lucena, Francisco Maura, José Garnelo, Enrique Simonet, Luis Menéndez Pidal, Alvarez Dumont, Cecilio Pla, Marceliano Santamaria, autor del magnífico cuadro *El triunfo de la Santa Cruz*, Víctor Morelli, Alejandro Saint-Aubin, Juan Antonio Benlliure y otros.

El paisaje es cultivado con extraordinaria brillantez en la época a que nos referimos por Martín Rico, Muñoz Degraín, Modesto Urgell, Eliseo Maifrén, Jaime Morera, Aureliano de Beruete y Juan Martínez Abades.

Tras de la *pintura de historia*, viene el período de la *pintura realista o impresionista* basado en la observación y la experiencia de la naturaleza. Tal corriente artística, iniciada en Inglaterra por el paisajista John Constable (1776-1837) y

seguida en Francia por Rousseau, Troyón, Corot, Daubigny y, singularmente, por Eduardo Manet, y en los países nórdicos por el danés Kroger, el sueco Berg y los noruegos Werenskiöld y Thanlow, tiene su momento de esplendor en la Exposición Universal de París de 1889. A ella fué una nutrida representación de nuestros artistas, pero inspirada en las ya pasadas orientaciones, en abierta pugna con las nuevas propensiones pictóricas que anteponían los estudios de ambiente y de luz a los cuadros artificiosos de los períodos precedentes. Debido a tal rezago, pudo en aquel certamen darse el caso de que un pintor español mediocre como Luis Jiménez, por inspirarse en las nuevas corrientes realistas al componer su cuadro *Visita al hospital*, fuera premiado con Medalla de oro, mientras compatriotas suyos, superiores en merecimiento, quedaron sin recompensa. Aprovechada la lección, fueron nuestros pintores desviándose de las anticuadas orientaciones para entrar de lleno en el movimiento *naturalista* moderno. De éste ha sido la más alta representación entre nosotros el pintor valenciano Joaquín Sorolla, nacido en 1863. Con modelos colocados al sol compuso en 1884 el cuadro *El dos de Mayo*; después, en los ejercicios de oposición para la pensión a Roma ofrecida por la Diputación provincial de Valencia, pintó el hermoso lienzo *El Palleter dando el grito de la Independencia*; ya en Roma, compuso el cuadro titulado *El entierro de Cristo*, expuesto en Madrid en 1887, y tras de fluctuar entre las corrientes pictóricas de los anteriores períodos y las realistas en auge, detidido por éstas, hubo de ejecutar el hermoso trabajo *Otra Margarita*, testimonio cumplidísimo de las extraordinarias aptitudes de su autor en el cultivo del arte moderno. Concurrió Sorolla al Salón de 1893, en París, con *El beso de la reliquia*. Obtuvo al año siguiente en la misma capital un rotundo éxito con sus lienzos *Trata de blancas* y *La vuelta de la pesca*, esta última adquirida por el Estado para el Museo del Luxemburgo. Presentó en el Salón de 1897 *Cosiendo la vela*, y en la Exposición Universal de París de 1900, con el cuadro *Triste herencia* y otros, obtuvo uno de los Diplomas del Gran Premio, merced la más preciada a que oficialmente podía aspirar un artista. Paisajista, autor de



magistrales retratos y marinista, ha sido Sorolla una cumbre del Arte pictórico. Sus discípulos Manuel Benedito, Eduardo Chicharro, Alvaro Alcalá Galiano, José Mongrell y José Bermejo, honran en nuestros días la memoria de su esclarecido maestro.

Procedentes de otras tutelas artísticas han cultivado también el *naturalismo* Carlos Vázquez, José Soriano Fort, ilustre pintor valenciano, que presentó en la Exposición de 1897 su hermosa obra titulada *¡Desgraciada!*, Federico Ferrándiz, discípulo de Muñoz Degrain, el gaditano Federico Godoy, Jaime Garnelo, Juan Francés, Alvarez de Sotomayor y José María López Mezquita, el que concurrió a la Exposición de 1901 con el cuadro *Cuerda de presos*, premiado con Medalla de oro.

Bajo el influjo francés han formado su personalidad artística algunos pintores catalanes, entre los cuales descuellan el ilustre Santiago Rusiñol, expresionista admirable de la melancolía en su colección de paisajes *Los jardines de España*; Ramón Casas, Joaquín Mir, Nicolás Raurich, Luis Graner, B. Gili Roig y Félix Mestres.

Impresionistas son también los pintores norteos Darío de Regoyos y Anselmo Guinea. El vascongado Ignacio Zuloaga, comenzó su carrera artística cultivando asimismo el impresionismo, pero en evolución su temperamento, ha abandonado el problema de la interpretación del ambiente y la luz para consagrarse a trasladar a sus lienzos el carácter español en sus más destacadas figuras. Aunque con diferente técnica, han dedicado también sus actividades al cultivo de la pintura españolística Hermenegildo Anglada y Francisco Iturrino.

Por último, paralelamente al desenvolvimiento del *realismo* o *naturalismo*, se ha ido desarrollando una orientación a la *pintura idealista* o enderezada a la expresión de *estados del alma*. "El refinamiento de la época presente—dice Beruete,—la delicadeza más o menos formal de la actual sociedad y la fuerza que presta a gran parte de la juventud intelectual que va por ese camino, parece que preparan el terreno para que la iniciada evolución *neo-idealista* triunfe por completo. No debe olvidarse tampoco que el artista más grande de estos úl-

timos tiempos, Ricardo Wagner, a cuya obra se rinde culto por muchos en el mundo entero, fué idealista en todas sus obras, y en la última que creó, Parsifal, marcó más aún la propensión dándole un impulso poderoso". Representante de esta orientación en la pintura española ha sido Rogelio de Egusquiza, amigo de Wagner, y autor de una serie de admirables cuadros, inspirados en los dramas musicales de este coloso del arte lírico.

**107. La Escultura.**—El arte escultórico, sacrificado en su legitimidad nacional castiza por el frío academicismo del siglo XVIII, no logró en la centuria décimonona recobrar su antigua personalidad. Tras de los beneméritos maestros neoclasicistas José Alvarez, Damián Campeny y Antonio Solá, deben ser citados en el período que nos ocupa, José y Mariano Bellver, hijos del escultor valenciano Francisco Bever y Llop, y el nieto de este último, Ricardo Bellver, a quien se deben la estatua del *Angel caído*, en el Retiro de Madrid, premiada con primera medalla en la Exposición de 1881, la de *Juan Sebastián Elcano*, en Gueteria, y las de los Apóstoles Santos, Andrés, Pedro, Pablo y Bartolomé, en San Francisco el Grande (Madrid). También contribuyó a enriquecer el apostolado de este hermoso templo el escultor catalán Jerónimo Suñol, de quien son la estatua del *Dante*, premiada en la Exposición nacional celebrada en Madrid el año de 1864; las de *Himeneo* y *Petrarca*, existentes en el Museo Balaguer, de Villanueva y Geltrú, el *Sepulcro del general O'Donnell*, en la Basílica de Atocha; el proyecto de frontón para el Palacio de la Biblioteca y Museos de Madrid; la estatua de *Cristóbal Colón*, en el Paseo de Recoletos; las de *Neptuno* y *Anfitrite*, en el parque de Barcelona, etc., etc. Otro escultor de singular relieve fué el sevillano Antonio Susillo, fecundo artista del que entre las numerosas obras que produjo es justo destacar las tituladas *La raza latina*, *El beso de Judas*, *Colón a la puerta de la Rábida*, *El lazarrillo de Tormes*, y las estatuas de *Daoiz*, *Arias Montano*, *Mañara*, *Murillo*, *Velázquez* y *Martínez Montañés*.

Junto a los ya citados deben figurar Venancio y Agapito Valmitjana, laboriosos e inspirados artistas, de cuyo taller salieron, no sólo producciones meritísimas que cimentaron la

justa fama de ambos como ilustres representantes de la corriente propiamente estatuaria, sino nutrida falange de brillantísimos discípulos, honra y prez de sus maestros; José Alcobarro, autor de las hermosas estatuas de *San Isidro* y *Alfonso X el Sabio*, que admiramos en la escalinata de la Biblioteca Nacional, obras ambas, tratadas según el estilo de Berruguete; Mariano Benlliure que, ora cultivando la nota realista, ora dejándose llevar de acusadas aficiones barrocas, ha sabido imprimir en sus esculturas el sello de un personalismo genial, patentizado en su admirable estatua del cuentista *Trueba*, en Bilbao; en la ponderadísima del *Beato Juan de Ribera*, en el Colegio del Patriarca de Valencia; en la de la Reina Gobernadora *Doña María Cristiana de Nápoles*, en la calle de Felipe IV en Madrid, admirable ejemplar de graciosa elegancia; en el *Mausoleo del tenor Gayarre*, en Roncal, testimonio vivo y emocionado de la más inspirada fantasía, y en tantas otras como ha creado el cincel o la espátula de este admirable artista valenciano.

Frente a los dogmatismos academicistas que pervivieron durante el primero y segundo tercio del pasado siglo, alzóse otro escultor de extraordinario mérito; el tortosino Agustín Querol. Su hermoso grupo *La Tradición*, dado a conocer en 1887, fué una obra realista entroncada directamente con las más espléndidas floraciones del genio escultórico español. En evolución el temperamento artístico de este escultor, inicia en la última década del siglo XIX, una corriente, cada vez más acusada, hacia un discutido realismo condicionado por la exigencia de obras concebidas en grande, y en ocasiones, hasta postergado para dar paso a las creaciones imaginativas de más altos vuelos. Expresiones cumplidísimas del talento de Querol son: el *Monumento a las víctimas de la Caridad*, en la Habana; el *frontón de la Biblioteca Nacional* de Madrid; el *Monumento al Padre Bartolomé de las Casas*, en Méjico, y los de *Legazpi* y *Urdaneta* (en Manila), *Elduayen* (en Vigo); y *O'Donnell* (en Tenerife); el *Grupo alegórico y genios alados*, que exornan el Ministerio de Fomento; la estatua de *Alfonso XII*, en el Retiro; el busto de la *Regente Doña María Cristina de Austria*, etc., etc.

Finalmente, Aniceto Marinas, Miguel Blay, Mateo Inurria y José Llimona, representan en las postrimerías del precedente siglo, el laudable esfuerzo por extraer del natural la virtualidad emotiva de la pura forma, depurada por la más severa disciplina. Dichos artistas constituyen como el lógico enlace entre el *realismo* algo convencional de Benlliure y Querol y el *naturalismo* de nuestros estatuarios contemporáneos; orientación ésta última que aspira a expresar con elementos arrancados de la realidad misma, los matices más delicados del sentimiento y las cualidades más excelsas del espíritu. La obra escultórica del francés Rodín, tan rica en simbolismos y tan acusadamente enderezada a introducir en la estatuaría pensamientos trascendentales y verdades eternas, ha ejercido sobre nuestros modernos artistas un influjo que está fuera de duda.

**108. La Arquitectura.**—Al *neoclasicismo* de Rodríguez y Villanueva, que tan señaladamente influyó en nuestros arquitectos de la primera mitad del siglo XIX, sucedió una reacción, paralela en sus orígenes a la del romanticismo literario, enderezada a restaurar el *clasicismo* puro y el *medievalismo* como fuentes más puras y copiosas de inspiración. El Congreso de los Diputados, y la Universidad Central, debidos a Colomer, y el Teatro Real, en la última parte de su construcción dirigido por el aparejador Cabezuelo, pueden citarse como ejemplos de la pervivencia del *neoclasicismo* del siglo XVIII.

La *reacción clásica* con marcada orientación *nacional*, estuvo representada por Jareño, Salces, Gándara, Mendívil, Alvarez, Velázquez Bosco, Lastra, Adaro, Repullés, etc. Expresiones de tal orientación fueron: la *Biblioteca Nacional* (de Jareño y Salces); el *Museo de Reproducciones* (de Velázquez); la *Bolsa* (de Repullés); el *Museo del Doctor Velasco* (de Cubas) y el *Banco de España* (de Adaro y Lastra).

De la corriente *medievalista*, inspirada en los estilos románico y gótico, constituyen autorizada representación: Mérida, en el monumento a Colón, sito en la plaza de este nombre, en Madrid; Cubas, en su proyecto de catedral de la Almudena; Aparici, en la Basílica de Covadonga, y los arquitectos catalanes, que tomando como modelos los ejemplares del gó-

tico de su país, lograron iniciar una obra de restauración arquitectónica nacional, digna del más cumplido encomio.

La orientación *medievista fundada* en el *mudejarismo*, cuenta con un cultivador de justo renombre; el arquitecto Ayuso, autor de la Plaza de Toros de Madrid, y suma asimismo en su pró a Mérida, Velasco y Moya, a quienes, respectivamente, se deben la Escuela de Artes de Toledo y la iglesia de San Fermín y el Seminario, en Madrid.

También inspiraron nuestros arquitectos algunas de sus producciones en los modelos más valiosos del Renacimiento, pudiendo mencionarse como personificación de mayor relieve en el cultivo de tal tendencia a Urioste, que proyectó los edificios españoles de la Exposición de París (1900), y a Magdalena, a quien se debe la Facultad de Medicina de Zaragoza.

Durante el último tercio de la precedente centuria, el predominio de nuevos materiales para la construcción, singularmente del hierro, obligó a nuestros arquitectos a dar a sus concepciones formas apropiadas a tan modernas exigencias. La *Estación del Mediodía*, el *Palacio de Cristal* del Retiro y el *Mercado* de la plaza de la Cebada, pueden ser citados como tipos representativos de la aludida modalidad arquitectónica.

Finalmente, a las postrimerías de la Regencia de Doña María Cristina de Austria, corresponde la aparición en Barcelona, Madrid y otras capitales, del llamado *estilo modernista*, importación germánica y belga extravagante y antipática, que dió pie a una lamentable serie de atentados contra el buen gusto.

No quedaría completo el cuadro que tan someramente acabamos de trazar acerca del desarrollo del arte arquitectónico hispano durante los años de 1833 a 1902, si no destacáramos de él, como valores de primer orden, los nombres de don Juan Madrazo, ilustre restaurador de la catedral de León, y de la iglesia de las Calatravas, en Madrid; Vicente Lampérez, restaurador de la catedral de Burgos y eminente historiador de la arquitectura en España, y Antonio Gaudí y Cornet, cuya personalidad artística, especialmente puesta de relieve en su proyecto del *Templo Expiatorio de la Sagrada Familia*, en Barcelona, obra de la que se encargó en 1873, acusa la ten-



dencia más independiente y original de cuantas se han manifestado en la arquitectura del pasado siglo.

**109. Reformas urbanas (1833-1902).** — Persiste en los primeros años del reinado de Isabel II el atraso de nuestras más populosas ciudades respecto de los principales núcleos urbanos de Europa. La capital de la Monarquía continuaba ofreciendo el aspecto de población destartado y desidioso que ya apuntamos al hablar del Madrid *fernandino*. Junto a unos cuantos hermosos edificios oficiales o pertenecientes a la nobleza (Palacios Real, de Liria, de Villahermosa, de Buenavista, Ministerio de Hacienda y Casa de Correos), agrupábanse los inmuebles particulares, contruídos con rudimentarios entramados de madera, rellenos de cascote y, cuando más, de ladrillo, con exiguos balcones y ventanas que daban luz y ventilación a angostas habitaciones, bajas de techo, asoladas de tosco baldosín y sin otra disponibilidad de agua para los servicios, que la pacientemente acoopiada en una o dos tinajas por la cuba del aguador. En ameno artículo compuesto por Mesonero Romanos e incluido en su *Panorama Matritense*, se describe con referencia a las postrimerías del primer tercio del pasado siglo el interior de una casa destinada a servir de alojamiento a familia de la clase media. El portal, según tal descripción, constituía una estrecha pieza, oscura y prolongada y en la mitad de su espacio, interrumpida por el *doble* y repugnante depósito destinado a recoger la basura. La escalera era pina, y tan angosta, que si por casualidad se oían resonar en la parte más alta las rotundas pisadas del aguador asturiano, no había más remedio que volver a bajar o hacer que él volviese a subir, por la imposibilidad de hallar paso simultáneo; la barandilla era de tosco y oxidado hierro; la exigua caja (la de la escalera) ventilábase por estrechas ventanas que daban a un patio, cubiertas con vidrios verduscos y ennegrecidos por las moscas; la meseta principal aparecía durante las horas de la noche iluminada por un yaso de vidrio; y, por último, en cada descansillo se abrían dos o tres puertas que indicaban otras tantas habitaciones separadas, pendiendo al lado de cada una de aquéllas un pedazo de cordón, hilo de alambre o una ca-

denilla para llamar. Penetrando en el interior del cuarto principal de la finca que examinamos, apreciaba el visitante: “una *antesala* que, por lo breve, podría pasar por esdrújulo”; el llamado *salón*. “que consistía en un *cuadri* no más *longo* que de unos veinte pies por quince de ancho, cuya pared de fachada compartíanla dos balcones, dejando en el medio un espacio suficiente para un espejo, una mesa con un reloj y dos quinqués. La pintura de toda la sala era sencilla, de color de caña, interrumpida en las esquinas por fajas de otros colores. Un sofá, una docena de sillas, cuatro chucherías en las rinconeras, seis vistas de la Suiza en sendos marcos de caoba, una modesta lámpara pendiente del techo y un velador colocado debajo, concluían el adorno de tal pieza de recibo. El *gabinete* inmediato jugaba por el mismo estilo, si bien ostentaba dos muebles más, a saber: el indispensable brasero y una jaula dorada cerca del balcón. La *alcoba* principal no tenía más relieve que la cama lisa, llana y limpia de colgaduras y garambainas. Pasábase después a unos dormitorios a guisa de camarotes de fragata, tan espaciosos, que el durmiente podía muy bien formarse una perfecta idea de su última mansión. Tras las anteriores habitaciones venían los *corredores*, “cuyas inevitables paredes se iban desgastando en los codos de los transeuntes”; el modesto *comedor*; la *cocina* “que era ancha como cañón de chimenea y tan clara como las *Soledades* de Góngora”, estando a ella adicionada “el estrecho recinto que más lejos de ella debía colocarse”; la *despensa*, lo suficiente húmeda para prestar saorete a todos los alimentos en ella apiñados; y, en los sótanos del edificio, la *bodega* o *trastera*, cuya extensión era tal, que había que mirarla desde la escalera siempre que estaba surtida de un carro de carbón o de dos arrobas de vino.

Si tan deficientes eran las viviendas de la Corte, puede colegirse lo que serían las emplazadas en poblaciones de segundo y tercer orden, en las que no había vidrios en las ventanas y balcones sino en la casa de algún señorón, “el cual daba así tal prueba de orgullo y de afición al regalo y a la molicie, que se malquistaba con la gente, y ya los mili-

cianos realistas, ya los milicianos nacionales, calificándole de liberal o de servil, ora en nombre de la libertad, ora en nombre del Altar y del Trono, se los rompían a pedradas". De aquí que las casas estuviesen poco resguardadas de la intemperie y que las visitas se hiciesen en invierno sin quitarse el sombrero, conservando la capa y a veces sin des-embosarse. "Médicos había, dice Valera, que solían tomar el pulso por encima del embozo".

Con respecto a Madrid habíanse iniciado tímidamente las mejoras urbanas en 1821, a consecuencia de la constitución de la importante Sociedad de Seguros mutuos, datando el verdadero comienzo de las reformas de 1834 y 1835, y el incremento de las mismas de 1854. El principal propulsor de ellas fue Mesonero Romanos, que en laudable Memoria titulada *Rápida ojeada de la capital y de los medios de mejorarla*, publicada como apéndice de una de sus ediciones del *Ma-nual de Madrid* (1835), propuso una serie de proyectos de entre los cuales debemos destacar los siguientes: la ampliación de la capital por los lados Norte y Levante; el abastecimiento de aguas; la construcción de nuevos mercados, a fin de hacer desaparecer los miserables cajones para la venta que afeaban y obstruían algunas vías de importancia de la Corte, como las de la Montera y Atocha; la construcción de aceras, y la reforma del empedrado, que era entonces pesimo y formado con guijarros de pedernal desiguales y con el arroyo en el centro de la calle, sustituyendo éste por la forma convexa, con vertientes a los lados; la modificación del alumbrado público reemplazando los mortecinos farolillos por un buen sistema de reverberos; el cambio en la numeración de las casas, que desde 1750 se hacía dando la vuelta a la manzana y que, a juicio de Mesonero, debía variarse adoptando el sistema de colocar en cada calle los numeros pares a la derecha y los impares a la izquierda; la limpieza diaria de las vías públicas, en vez de la semanal; la supresión de los nauseabundos basureros de los portales; la prohibición de los canalones exteriores y de las buhardillas en las nuevas construcciones; la apertura de *pasajes* y *bazares*, pues de estos últimos sólo existían en Madrid

las covachuelas de San Felipe y la plaza del Rastro; el establecimiento de *coches de plaza* o de punto fijo; la ordenación de un buen servicio de fondas y hoteles, generalmente representado en los primeros años de la regencia de Doña María Cristina de Nápoles por posadas y paradores, como los del *Peine*, en la calle de Postas; de la *Gallega*, en la de *Montera*; de los *Huevos*, en la Concepción Jerónima; de los *Segovianos*, en la del Carmen, y de los todavía más primitivos que existían en la calle de Toledo y en la Cava Baja.

De tan cumplida serie de laudabilísimos planes, fué, en parte, ilustre ejecutor don Joaquín Vizcaíno, Marqués viudo de Pontejos, cuya fecunda gestión administrativa durante los años de 1835 y 1836 debe ser recordada con gratitud por los vecinos de Madrid. Desde el citado último año hasta el de 1844 las circunstancias políticas interrumpieron la obra tan felizmente comenzada. Llamado a formar parte del Ayuntamiento madrileño Mesonero Romanos, en 1846, presentó un *Proyecto de mejoras generales* en el que se proponía: la transformación del distrito del Barquillo (que era entonces un feo arrabal, compuesto de miserable caserío, en el que abundaban las herrerías, de donde les vino a sus moradores el remoquete de *chisperos*), abriendo por la manzana 316 de la calle de Hortaleza la nueva de Gravina, y rompiendo luego las de Santa María del Arco, Soldado, San Marcos, Válgame Dios, Saúco, Piamonte, Almirante, Santa Lucía y otras en dirección a Recoletos, con lo cual se conseguiría vitalizar aquel extenso distrito y dar ocasión al interés privado para construir decoroso caserío; la transformación del citado paseo de Recoletos ampliándolo mediante la retirada, por el lado izquierdo, de las tapias correspondientes a las huertas de las Salesas, Altamira y de la Inspección de Milicia, y construyendo por el lado derecho una extensa y elegante barriada en los solares ocupados por la Veterinaria, Recoletos, Montealegre, el Pósito, los hornos de vidrio y los cuarteles; la comunicación de la calle de Alcalá con la carrera de San Jerónimo por dos nuevas vías, que Mesonero tituló de Floridablanca y Jovellanos; el ensanche

de la calle Angosta y Ancha de Peligros, llamando a ésta última calle de Sevilla; la prolongación de la de Atocha hasta el convento; la construcción del viaducto sobre la calle de Segovia; la regularización de la Cuesta de la Vega en la que había de desembocar la calle Mayor, debiendo edificarse en el comienzo de la bajada y delante de la Plaza de la Armería, entonces también en proyecto, la Catedral de Madrid; la construcción en la Plaza de Oriente de casas en semicírculo a los lados del teatro Real, en los términos en que hoy las vemos; la reducción a mercado cerrado de la plaza de la Cebada y la construcción de otro nuevo sobre el solar de los Mostenses; la restauración de la Plaza Mayor, nivelando sus soportales, pavimentándola y colocando en su centro la estatua de Felipe III; la organización del servicio de incendios, y la formación de un plano topográfico de Madrid.

Quien considere hoy la hermosa capital de España y repase las reformas que han contribuido a su embellecimiento, no podrá menos de reconocer que buena parte de ellas se debe a la iniciativa del ilustre patricio "natural y vecino de Madrid" don Ramón de Mesonero Romanos, que tan justamente logró popularizar el seudónimo de "El curioso parlante".

Detallar el proceso de cada una de las aludidas mejoras sería labor fácil, pero de enojosa lectura. Circunscribiéndonos a los más notables citaremos: las obras realizadas desde 1841 por el Real Patrimonio, dirigido entonces por don Agustín Argüelles y don Martín de los Heros, para ultimar la Plaza de Oriente; la inauguración en ésta del hermoso edificio destinado a Teatro Real, el 19 de Noviembre de 1850; el desempedrado de la Plaza Mayor a fin de poder celebrar en ella las corridas regias organizadas en Octubre de 1846 para solemnizar el matrimonio de Isabel II, y las mejoras realizadas en los años inmediatamente siguientes, mejoras que consistieron en dejar en el centro de la Plaza un explanada elíptica, circundada de una calle empedrada de adoquines para el paso de carruajes, en construir en las enjutas de los cuatro ángulos aceras levantadas, en igualar el piso de los soportales y en colocar en el centro



de la plaza como exornación y debido homenaje la estatua de su fundador Felipe III; las importantes obras de ampliación de la Puerta del Sol, empezadas en 1856 y concluídas en 1861, obras que consistieron en rectificar la línea recta de casas que se extendía desde la calle del Arenal a la de Alcalá, convirtiéndola en curva al hacer que las calles de la Montera, Carmen y Preciados, que anteriormente arrancaban próximamente desde la mitad de la Plaza, tuvieran sus comienzos bastantes metros después; la apertura de la Castellana, paseo llamado entonces de las *Delicias de Isabel II*, por haberse empezado su construcción cuando nació esta Princesa (1830), dándose término a las obras cuatro años después, durante el corregimiento de Pontejos, y adquiriendo el carácter de paseo de moda desde 1854, en la que la duquesa Angela de Medinaceli lo frecuentó e hizo que lo frecuentase las gentes de buen tono; la construcción de los *Pasajes de Murga, del Iris, Nueva Galería, y Villa de Madrid*, el primero que empezaba en la casa número 43 de la calle de la Montera, teniendo su salida por la de Tres Cruces, el *del Iris*, inaugurado el 23 de Septiembre de 1847, que servía de comunicación entre las calles de Alcalá y carrera de San Jerónimo, por la casa número 11 de la primera y número 12 de la segunda, compuesto de tres galerías llamadas de Madrid (la central), de París y de Londres; el denominado *Nueva Galería*, proyectado por el arquitecto don Aníbal Alvarez, que abría sus comunicaciones entre la calle de Espoz y Mina y la de la Victoria, y el conocido con el título de *Villa de Madrid*, situado en la casa de don Manuel Mateu, que unía también las dos citadas calles y que por sus proporciones era el más notable. En punto a mercados, a parte de las plazas para ellos habilitadas del Carmen, de San Miguel, de la Cebada, del Rastro, del Humilladero, de los Mostenses y de Herradores, se construyeron desde 1834 algunos cubiertos, a saber: el de san Ildefonso; el de San Felipe Neri, entre las calles de Bordadores e Hileras; el del Caballero de Gracia, situado en el solar en que estuvo el convento de monjas del mismo nombre, y el de la calle de los Tres Peces.

Por Real Orden de 22 de Febrero de 1843 se determinó que, sobre los terrenos del convento del Espíritu Santo, en la carrera de San Jerónimo, fuese construído un edificio destinado a servir de Palacio del Congreso de los Diputados, aceptándose para ello el proyecto presentado por el arquitecto don Narciso Pascual Colomer. La construcción de este edificio duró algunos años, pudiendo inaugurarse en el de 1850. Al mismo Colomer se debió también la dirección de los trabajos de edificación de la Universidad Central. En 1852 y para celebrar el natalicio de la infanta doña Isabel, fué construído cerca de la antigua puerta de Fuencarral el Hospital de la Princesa, quedando terminada la obra en 1857. En 1868 se edificó la magnífica Casa de la Moneda en las afueras de la antigua puerta de Recoletos, y el 31 de Enero de 1872 inauguróse el viaducto de la calle de Segovia.

A la iniciativa privada debiéronse durante el reinado de Isabel II una porción de obras que contribuyeron al embellecimiento y dilatación de la Corte. El Marqués de Salamanca terminó en 1854 la construcción de su hermoso palacio en el Paseo de Recoletos, y dió comienzo al ensanche de la población por los terrenos que se extendían desde la puerta de Alcalá hacia el camino de Hortaleza, es decir, por los solares del actual barrio de Salamanca, del cual, en los últimos años del reinado de Doña Isabel, estaban ya construídas las primeras manzanas de la calle de Serrano, denominada entonces boulevard Narváez; el acaudalado maragato don Santiago Alonso Cordero, edificó sobre el terreno en que estuvo emplazado el convento de San Felipe el Real, la hermosa finca que constituye la manzana limitada por las calles Mayor, de Esparteros, del Correo y Pontejos; otro riquísimo propietario, don Manuel Mateu, alzó en la calle de Espoz y Mina el año de 1841 y sobre parte del solar que había ocupado el convento de la Victoria la hermosa casa en la que se abría el pasaje *La Villa de Madrid*; don Manuel Safont, aconsejado por el arquitecto don Aníbal Alvarez, compró y urbanizó en las afueras de la Puerta de Bilbao las tierras de propios llamadas de Santa Ana; los

condes de Vegamar y Sanafé y doña Josefa Rodríguez de Berindoaga siguieron el ejemplo de Safont en las propiedades que poseían desde Chamberí a la Pradera de Guardias; el marqués de Pozas comenzó a construir el barrio que todavía recuerda tal título; don Narciso Bruguera adquirió, en Septiembre de 1844, cuatro fanegas y un celemin de terreno con un edificio denominado desde larga fecha Casa y jardín del Pastelero, convirtiendo tal posesión en la simpática casa de recreo, aún existente en la esquina de la calle de Goya y paseo de la Castellana, en cuya fachada principal se alza una galería sostenida por cuatro columnas de granito procedentes del derribo de la iglesia del Buen Suceso; y otros capitalistas, como Casariego, Santa Marca, Rivas, Riera, Mariátegui, etc., asimismo pusieron a contribución sus elementos pecuniarios y su buen gusto edificando suntuosas moradas.

Claro testimonio del profundo cambio que hubo de operarse en el Madrid de los tiempos isabelinos, nos lo da el curioso inventario que los señores Rada y Delgado y Amador de los Ríos han dejado hecho con referencia a los años 1850 a 1860 en su monumental: *Historia de Madrid*. Según la precitada relación, inspirada en parte en el *Diccionario* de Madoz, de los antiguos conventos que habían quedado en pie, conservando sus templos para el culto y aprovechando la parte claustral para diferentes destinos, podían citarse: Santo Tomás, que utilizado primeramente para cuartel de la Milicia nacional, estaba ocupado en 1860 por el Supremo Tribunal de Guerra y Marina; San Francisco, convertido en cuartel de Infantería; los Capuchinos llamados de San Antonio del Prado, transformados en colegio de las Madres Ursulinas; San Cayetano, utilizado para vivienda particular; el Carmen Calzado, habilitado para la Dirección de la Deuda y Oficinas de Amortización; el Descalzo, sirviendo de Escuela de Estado Mayor y Centro de Administración militar, y la Trinidad, convertido en Instituto industrial, Museo y Ministerio de Fomento. En lugar de los conventos demolidos—añaden los citados historiadores—se ven actualmente (1860) grandes manzanas o plazas anchurosas; así,

el de la Merced se convirtió en plaza del Progreso; el de Capuchinos de la Paciencia, en plaza de Bilbao; los Mostenses y San Felipe Neri, en mercados; el Noviciado, de la calle Ancha de San Bernardo, en Universidad; San Bernardino, en Asilo de la mendicidad; las Baronesas, en jardines del palacio del Marqués de Casa Riera, y todos los demás, por ejemplo, San Felipe el Real, la Victoria, el de Constantinopla, el de los Angeles y la parroquia del Salvador, en magníficas manzanas o casas particulares, a excepción del Espíritu Santo y el de María de Aragón, a que respectivamente han reemplazado el Congreso de los Diputados y el Senado.

A diferentes usos fueron igualmente aplicados antiguos edificios públicos: la Casa de Correos, a Ministerio de la Gobernación (1874); la de Aduanas, a Ministerio de Hacienda; los palacios de Buenavista y del Almirantazgo, a Ministerios de la Guerra y de Marina, respectivamente; la magnífica casa de la Sonora, en la calle de San Bernardo, a Ministerio de Gracia y Justicia, permaneciendo todavía en 1860 el de Estado en una de las plantas bajas del Palacio Real.

Entre las reformas urbanas más generalmente demandadas figuraron en la época a que aludimos el ensayo de nueva pavimentación de las calles de mayor tránsito, sustituyendo el antiguo empedrado de *cabeza de perro*, bien por el entarugado (que se ensayó de 1841 a 1848 en la calle Angosta de Peligros), bien por la combinación de adoquines de piedra berroqueña con cuña de pedernal o con paralelepípedos también de berroqueña (clase de pavimento que se utilizó en las calles del Correo, Príncipe, Caballero de Gracia, Montero, Carretas y Carrera San Jerónimo), bien por el asfaltado (que en 1848 ya existía en la Puerta del Sol, en la subida del palacio de Buenavista, en la galería principal y en algunas dependencias del Colegio de San Carlos, y en los portales de varias casas particulares).

Asimismo, el antiguo alumbrado a base de aceite, se vió mejorado desde 1835 por el de faroles de reverbero y, pasado algún tiempo, por el de gas, con el que se iluminaron pri-

nicamente la Puerta del Sol y el Real Palacio. El Ayuntamiento de Madrid contrató este nuevo sistema de iluminación con Viejo Medrano en los primeros años del reinado de Isabel II; pero el aludido industrial traspasó el negocio, en 1846, a los señores Mamby y Partington, los cuales lo cedieron a la Sociedad Anónima La Madrileña. En julio de 1847 se hizo funcionar por vía de prueba el alumbrado por faroles de gas en el paseo y calle del Prado y en la calle del Lobo, y si bien la escasez de carbón y resinas hizo pasar en 1848 a la Sociedad por angustiosa crisis, la competencia de su nuevo director señor López de Mollinedo, le permitió salir airoosamente del conflicto, regularizando la producción y extendiendo el alumbrado desde las citadas calles y la Puerta del Sol a otros puntos de la capital.

Experimentaron también por este tiempo notorias mejoras los servicios de limpieza y seguridad. Respecto del primero, en vez de prestarse a día alterno, se organizó diariamente, completándose con el servicio de riego, que en 1848 se verificaba por medio de cubas de las denominadas de lluvia. La conducción hasta la capital de las aguas de Lozoya por medio del Canal de Isabel II, que inauguró a presencia de la Corte el 24 de Junio de 1858, en la calle Ancha de San Bernardo, un magnífico surtidor, permitió abastecer a la capital de tan indispensable elemento de vida. Por otra parte, la reorganización en 1835 del personal encargado del alumbrado público, personal que de algunos años antes ejercía también la vigilancia nocturna de las calles, contribuyó a mejorar el servicio de serenos.

Aunque aparentemente de poca monta, tuvieron indudable importancia en orden al progreso urbano las siguientes mejoras: la instalación de porterías en las casas de nueva construcción; la colocación de barandillas en los umbrales de las puertas; el establecimiento del servicio de coches públicos por horas; la fijación del nombre de las calles en los faroles del alumbrado público; la numeración de los mozos de cuerda; el empadronamiento de los criados de ambos sexos, y la reforma en la colocación de todas las rejas salientes, que fueron remetidas, disposición esta última que, adoptada du-



rante su corregimiento por el marqués de Peñaflorida, le valió el chistoso remoquete de *el Corregidor regicida*.

A los progresos urbanos de Madrid durante el reinado de Isabel II, correspondieron otros bien notorios en las más populosas capitales de provincia. Barcelona siguió con toda actividad la reforma de su pavimentado y régimen de desagüe, y merced a la actividad e inteligencia del súbdito francés Carlos Lebón, asistido pecuniariamente por los barceloneses, pudo en pocos años ver extendida por sus calles y por muchos de sus edificios públicos y privados las cañerías conductoras del gas, hasta el extremo de contar en 1847 con cerca de tres mil vecinos abonados. El extraordinario aumento de su población y el desarrollo de su vida comercial e industrial produjeron fundamentales cambios traducidos en la construcción de nuevos edificios en las vías abiertas por el Ayuntamiento. La prolongación de la calle de Fernando VII hasta la plaza de la Constitución y desde aquí, por la actual calle de Don Jaime, hasta la plaza del Angel; la apertura de la calle de la Unión, en la Rambla, frente a la de Fernando, y con prolongación por la de Fonseca; las nuevas vías practicadas para poner en comunicación la del Conde Asalto con la de Trentaclaus; los barrios construídos entre las calles de la Cadena y Riereta y en las inmediaciones del Jardín Botánico; el llamado de la Plaza de Palacio; la continuación de las obras del magnífico Paseo de Gracia; la ampliación del hermoso Jardín del General (Castaños), con motivo del memorable viaje de la Familia Real a la ciudad, en 1840; la inauguración del Paseo de la Barceloneta, en 1830, debida a la iniciativa del capitán general Barón de Meer; la apertura del que enlazaba la Puerta del Mar con el Cementerio; la restauración de los estudios facultativos en el Oratorio de San Felipe, y, después, en el local del antiguo convento del Carmen al quedar en 1837 suprimida la Universidad de Cervera, y la traslación de dichos estudios al espléndido edificio en que hoy se hallan, edificio proyectado por don Elías Rogent e inaugurado en Octubre de 1872; la fundación del *Liceo Filarmónico Dramático de S. M. la Reina Doña Isabel II*, y su magnífica instalación

sobre el solar de la antigua iglesia y convento de Trinitarios descalzos, en el Paseo de la Rambla, donde, a partir de Abril de 1845, comenzó la construcción de suntuoso edificio, inaugurado el 4 de Abril de 1847, destruido por voraz incendio en Abril de 1861 y reconstruido bajo la dirección del arquitecto don José Oriol en 1862; y, sobre todo, la autorización para el derribo de las murallas, concedida en 1854 y seguida en 1859 de la aprobación de los nuevos planos de reforma, transformaron la ciudad colocándola en condiciones de que pudiera llegar a las inauditas y admirables dilataciones que con asombro contemplamos en nuestros días y que obligan a recordar el nombre ilustre del ingeniero catalán don Ildefonso Cerdá (n. en 1816 y m. en 1876) que en su fundamental obra, *Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona*, produjo una verdadera revolución en toda España estableciendo las reglas para la mejora y el trazado de las poblaciones y motivando la Ley de Ensanche de 29 de Junio de 1864.

También Valencia y Sevilla experimentaron apreciable desarrollo urbano. En la primera, se empedraron las calles de San Fernando, San Vicente, Zaragoza y la plaza de Santa Catalina; se instaló cerca de la Puerta del Mar la fábrica del gas, que suministró éste desde Octubre de 1844; constituyóse en Julio de 1846 la *Sociedad de conducción de aguas potables*, que en pocos años estableció la necesaria red de tuberías, realizando el ideal que filantrópicamente concibiera el ilustre valenciano don Mariano Liñán, y para cuyo logro destinara gran parte de su fortuna; se construyó en 1838, sobre el solar del antiguo convento de las Magdalenas el Mercado nuevo, y, en la Pescadería vieja, la plaza del Cid o Redonda; reemprendiéronse las obras del puerto del Grao en vista de los dictámenes favorables dados en 1849 por el eminente ingeniero señor Subercase y se empezaron a edificar casas de cuatro y cinco pisos, dando margen a que, junto a las señoriales de los Cervellón, Montortal, Dos-Aguas, Jura-Real, Parsent, etc., gallardamente lucieran su arquitectura moderna las de los Bertrán de Lis y don Javier Paulino, en la

plaza de la Aduana, hoy de Príncipe Alfonso, la de don José Vergés en la plaza de San Francisco y la de don Juan Bautista Romero en la calle de San Vicente.

Sevilla dió igualmente gallardo testimonio de su actividad en orden al progreso urbano mejorando la pavimentación de sus calles mediante la sustitución del antiguo empedrado de guijarros por el cómodo y limpio embaldosado; reemplazando desde 1834 los antiguos y mortecinos faroles por otros de reverbero; dando más discreta organización a los servicios de limpieza y vigilancia, construyendo de hierro y ladrillo el Puente Nuevo (cuya primera piedra fué colocada en 12 de Diciembre de 1845), en lugar del antiguo de barcas que ponía en comunicación el núcleo principal de la ciudad con el simpático barrio de Triana; embelleciendo los paseos llamados *Delicias de Arjona* y *Salón de Cristina*; prolongando el que se extendía a orillas del río, e inaugurando los construídos en 1846 en las plazas del Museo y del Salvador y, en 1847, en la del Triunfo.

**110. Fiestas religiosas y profanas.**—Como en el período *fernandino*, siguió en punto a tradicionales fiestas religiosas el pueblo de Madrid celebrando con toda solemnidad la del Corpus, tan brillantemente descrita por Mesonero; las de Semana Santa, con la característica ostentación de ciertos oficios de las Ordenes Militares y la brillante visita de la Corte a los monumentos; la fiesta de San Ildefonso, patrón del Arzobispado, y las de Navidad, durante las cuales, los vecinos de la coronada villa, según sus aficiones, o las celebraban en la intimidad cordialísima del hogar o en plena calle, alborotada con el ruido de los panderos y zambombas de nochebuena, o con los no menos ruidosos elementos de que se proveían para dar acompañamiento al crédulo provinciano, generalmente gallego, a quien embromaban obligándole a llevar durante la noche del 5 de Enero la pesada escalera destinada a poder atalayar desde su altura el camino que traían los Reyes Magos desde el lejano Oriente.

Asimismo, continuaba el vecindario de Madrid solazándose en la famosa romería a la ermita de San Isidro, el 15 de Mayo; en las de Santa María de la Cabeza, San Blas y el

Santo Angel de la Guarda, en las inmediaciones de cuyas ermitas se improvisaban pintorescos mercadillos para la venta de toscas imágenes de barro y de rosquillas, almendras y otras golosinas, y, finalmente, en la de San Antón, que aun habiendo perdido a mediados de la pasada centuria su antiguo esplendor, seguía ofreciendo el pintoresco desfile frente a las Escuelas Pías de la calle de Hortaleza de jinetes de toda casta, desde el chabacano carretero, a lomos de rústica mula, hasta el mozo presumido, caballero de nerviosa jaca, allí idos con el aparente propósito de que fuera bendita la pequeña cantidad de cebada de que eran portadores.

Con la romería rivalizaban en punto a animación las populares verbenas de San Antonio de la Florida, en el Paseo de este nombre; la de la Virgen del Puerto, a orillas del Manzanares, en la alameda del Puente de Segovia; las de San Juan y San Pedro, que se celebran en el Prado; la de Santiago, en la calle de su nombre; la del Carmen, en las inmediaciones de esta iglesia y después en el trozo de la calle de Alcalá comprendido entre San José y la Cibeles; la de San Cayetano, en la calle de Embajadores y las típicas, aunque más localizadas de San Lorenzo y de la Virgen de la Paloma. Respecto de las fiestas patrióticas, era la más solemne la del Dos de Mayo, que congregaba a todas las clases sociales en el Campo de la Lealtad y en la Puerta del Parque de Artillería, en Maravillas, como testimonio harto elocuente de que no se borraba de la memoria de los madrileños el triste recuerdo de las luctuosas jornadas de 1808. Formando brusco contraste con tan solemne y conmovedor festejo, continuaba en Carnestolendas el vecindario de la Corte regocijándose con las máscaras callejeras, y la porción más grosera de él, entregándose a las cerriles expansiones del nauseabundo entierro de la sardina, en las praderas del Canal.

Típicas eran también las fiestas celebradas en otras capitales españolas. Barcelona, lucía sus esplendores en las del Patrón de Cataluña, San Jorge (23 de Abril), y veía sus calles rebosantes con motivo de la de Todos los Santos, durante la cual, se hacía extraordinario consumo de los

sabrosos panecillos de mazapán vulgarmente llamados *panellets*, y de la selecta mistela. Los famosos y exquisitos *tortells* se vendían el día de San Antonio Abad (17 de Enero), durante cuya jornada los jinetes y los peatones paseaban por las calles que rodeaban la iglesia del Santo para dar los tradicionales tres *toms*. La fiesta de Santa Eulalia (12 de Febrero) se solemnizaba trasladándose los barceloneses al pueblo de Sarriá, y en las de Pascua de Resurrección, esparcíase el vecindario por los hermosos aledaños de la ciudad, expansión campestre que tenía como inmediatas precedentes dentro del año, el *dijous gras* o *larder* (Jueves anterior al Domingo de Carnaval), y el primer día de Cuaresma, que regocijadamente se dedicaba a enterrar al *Carnestoltes*. Típicas fueron también las fiestas a éste dedicadas, y elemento en ellas indispensable el famoso alpargatero humorista Sebastián Junyet, que organizó con el nombre de *Sociedad del Born*, el año de 1840, un Centro destinado a celebrar aquéllas con pintorescas cabalgatas y graciosas recepciones en el improvisado *Palacio del Carnaval*, construido en la Plaza del Borne. Los populares bailes de *La Patacada*, organizados por esta sociedad en los almacenes propiedad de don Antonio Nadal, en la calle de las Tapias, y los aristocráticos que se celebraban en la Lonja y en el Teatro de la Santa Cruz (Principal), servían de apropiado escenario a las expansiones a que se dedicaban las clases sociales todas de Barcelona desde el Domingo de Quincuagésima hasta el miércoles de Ceniza, ya que los bailes de la Piñata eran pocos y únicamente frecuentados por gentes de costumbres equívocas. Clásicas seguían siendo también las tradicionales hogueras en la verbena de San Juan.

En Valencia eran por demás peculiares las fiestas del Corpus con sus enanos y gigantes, con los carromatos simbólicos llamados *roques* y con las pintorescas caracterizaciones de personajes bíblicos; las de San Vicente Ferrer, con sus tabladillos o *milagros*, dispuestos para escenificar las intervenciones milagrosas del portentoso Patrón de la ciudad; las de San Dionisio con los sabrosos obsequios que las acompañaban, singularmente las dulces *piuletes* y los *tronaors*, que consti-



tuían elementos fundamentales del paquete o *mocaor* (pañuelo) en que conteníanse además otras golosinas con que los valencianos regalaban a las personas de su afección; las de San José, con sus graciosas *fallas*, riquísimas tortadas y ramilletes e indigestos buñuelos, y las de Pascua de Resurrección, con la celeberrima *mona* o torta, guarnecida con los característicos huevos duros.

Sevilla continuaba manteniendo el prestigio de su esplendorosa Semana Santa. Indescriptible e inolvidable para el que la haya gozado una sola vez, es la vista que presenta la Plaza de San Francisco al anochecer del Jueves Santo adornada de sedas y flores, animada por una multitud estremecida de entusiasmo y de unción religiosa, surcada por las innumerables llamas de los cirios de los Nazarenos, constelada por las ascuas de oro de los pasos en que las divinas imágenes parecen temblar y estremecerse. De pronto, en el ambiente aromado de azahar y de incienso, una voz cálida y deliciosamente desgarradora entona la clásica saeta:

“¿Quien me presta una escalera  
para subir al madero,  
para quitarle los clavos  
a Jesús el Nazareno?”

O aquella otra tan humana y patética:

“Tan estrecha era la cama  
que el Rey del cielo tenía  
que por no caber en ella  
un pie sobre otro ponía”<sup>1</sup>.

Juntamente famosas eran, asimismo, las ferias sevillanas anualmente celebradas durante el mes de Abril en el prado de San Sebastián; la poética romería de la Virgen del Rocío, y las veladas o verbenas organizadas en la Alameda de Hércules con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro, y las de Santa Ana, que tenían como apropiado escenario la castiza margen de Triana.

Zaragoza, con sus memorables fiestas del Pilar; Murcia, con su procesión de Semana Santa realzada por los admirables pasos de Salcillo; las Vascongadas, con sus devotas

1. En tan inspirada forma describe el distinguido colaborador de la *Eiciclopedia Espasa*, las solemnidades religiosas a que aludimos.

solemnidades en honor de San Ignacio de Loyola; Navarra, con las que anualmente celebraba los días de San Francisco y San Fermín, y Galicia, Extremadura y Asturias, con las suyas en honor del apóstol Santiago, de la Virgen de Guadalupe y de la Covadonga, respectivamente, formaban con las numerosas romerías tan frecuentes por el resto de las provincias españolas, animado cuadro y expresivo testimonio de los sentimientos religiosos del país.

**III. Espectáculos públicos.**—Durante el período *isabelino* funcionaron en Madrid algunos coliseos del período anterior y fueron construídos otros. A los primeros pertenecían los teatros del *Príncipe* y de la *Cruz*, pues el antiguo de los *Caños del Peral* aparecía ocupado antes de terminar la primera mitad del siglo por las obras del que había de ser inaugurado en 1850 con el título de *Teatro Real*. Entre los coliseos nuevos deben ser mencionados, el *Teatro Circo*, el del *Museo*, el de *Variedades*, el del *Instituto*, el *Circo de Madrid*, el *Teatro de los Basillos*, y el *Circo Olímpico*, denominado después *Teatro de Novedades*, el de la *Zarzuela* y el de *Rossini*, en los *Campos Elíseos*.

En el del *Príncipe*, denominado por Real Decreto de 7 de Febrero de 1849, *Teatro Español*, se estrenó el 22 de Marzo de 1835 el drama original del duque de Rivas, *Don Alvaro o la fuerza del sino*, desempeñando los principales papeles Concepción Rodríguez y los señores Luna, Romea y Guzmán. El 1.º de Marzo de 1836 se puso por primera vez en escena *El Trovador* del hasta entonces desconocido literato don Antonio García Gutiérrez, y el 19 de Enero de 1837, *Los amantes de Teruel*, de Hartzenbusch. Las exigencias del negocio obligaron a que la escena prestigiosa de este teatro sirviera no sólo para que en ella brillaran las producciones dramáticas de más alto linaje literario, sino también comedias de magia, como *La redoma encantada* y *Los polvos de la madre Celestina*, piecitas ligeras como *El hombre gordo*, y aun menguados engendros brindados a que pudieran lucir sus aptitudes coreográficas las famosas bailarinas la *Nena* y la *Cámara*.

Como en el período anterior, hallábase la sala de este co-

liseo dividida en *platea* (lo que hoy llamamos patio de butacas), ocupada por las *lunetas* que formaban las primeras filas y por bancos para las filas posteriores; *palcos*, que se extendían por las partes laterales; *tertulia* (lo que hoy es *anfiteatro*), dividida en una sección, la de la izquierda, sólo para mujeres, y la otra destinada a los hombres, y *cazuela*, localidad la más alta y a la que únicamente tenía acceso el sexo femenino. En 1836 la *tertulia* de hombres y la de mujeres se convirtieron en una sola, pero al poco tiempo se volvió a la anterior separación. También se introdujo por aquel entonces la novedad de vender independientemente cada uno de los asientos de los palcos laterales, dando lugar a la localidad denominada *palcos por asientos*.

El *Teatro de la Cruz*, emplazado como sabemos en la calle del mismo nombre, en la prolongación de la de Espoz y Mina, con accesorias a la plaza del Angel, funcionó con relativa normalidad hasta el año 1856, siendo demolido al poco tiempo. Durante el período isabelino se estrenaron en este coliseo producciones escénicas de positivo mérito, de entre las cuales citaremos la linda comedia de Bretón *El pelo de la dehesa* (Febrero de 1840), y los dramas de Zorrilla *El zapatero y el Rey* (14 de Marzo de 1840), *Don Juan Tenorio* (7 de Abril de 1844) y *Traidor, infame y mártir* (3 de Marzo de 1849). Como había sucedido en el teatro del Príncipe, la falta de público obligó a la empresa del de la Cruz a contratar a la bailarina Manuela Perea y a algunas compañías de comedia francesa.

El *Teatro del Circo*, situado en la plaza del Rey e inaugurado el 23 de Abril de 1840 para que en él actuasen las compañías gimnásticas, cultivó desde 1842 casi exclusivamente la ópera y el baile de espectáculo, habiendo sido sus empresarios don José Salamanca y don Nemesio Pombo, que en cantantes, danzarinas y arreglo del coliseo gastaron sumas crecidísimas. En 1857, 1858, 1860 y 1866 actuaron algunas compañías de zarzuela, y, en diferentes épocas, pero dando corto número de funciones, lucieron sus talentos Teodora Lamadrid, Romea, Manuel Catalina y José Valero.

El *Teatro del Museo*, construido en la calle de Alcalá, en

el local que fué iglesia del convento de las Vallecas, por una sociedad lírico-dramática, dirigida por don Félix López, se dedicó al drama, viéndose bastante favorecido por el público hasta 1849, en que empezó su decadencia. El *Teatro Variedades*, emplazado en la calle de la Magdalena, en el local de un antiguo juego de pelota, abrió sus puertas por vez primera en Diciembre de 1843, actuando en él desde entonces compañías de verso, de zarzuela y de baile, hasta que en Septiembre de 1865 formó Arderús la compañía llamada de *Bufos madrileños*, que se presentó al público con la zarzuela de Eusebio Blasco y el maestro Rogel *El joven Telémaco*. De esta obra se derivó el calificativo de *suripantas* aplicado a las coristas, pues en la obra cantaban éstas una letra que, imitando la eufonía griega, decía:

“Suripanta la suripanta  
macatrunqui de somatén,  
sunfáriben, sunforidón,  
melintónimen sompén”.

La Sociedad que, bajo el título de *Instituto Español*, fundó el año de 1839 el marqués de Sauli y otros amantes de las letras y el arte con el filantrópico designio de favorecer la instrucción de las clases populares, después de haberse instalado en una parte del ex-convento de la Trinidad (calle de Atocha, esquina a la de Relatores), pasó a ocupar el edificio construido *ad-hoc* en la calle de las Urosas. Una de sus dependencias fué el teatro que con el título del centro de que formaba parte, se ináuguró el 8 de Noviembre de 1845. Este coliseo recibió en 1849, a virtud de la reforma del Conde de San Luis, el título de *Teatro de la Comedia*, y en 1855 el de *Teatro de Tirso de Molina*.

Otros coliseos de la época fueron: el *Circo de Madrid* o *Circo Paul*, en la calle del Barquillo, dedicado preferentemente a las funciones gimnásticas y ecuestres; el *Teatro de los Basillos*, en la calle del Desengaño, con vuelta a Valverde y Barco, inaugurado el 4 de Mayo de 1850; el *Circo Olímpico*, que construido en la plaza de la Cebada y abierto al público el 22 de Noviembre de 1856 con una compañía gimnástica-ecuestre, que no agradó a la concurrencia, adoptó en

la temporada siguiente el título de *Teatro de Novedades*, actuando en él desde este cambio compañías de comedia, drama y zarzuela, y, en Febrero de 1862, los gimnastas anglo-americanos, dirigidos por Mr. Rochet.

Los éxitos que acompañaron a las primeras zarzuelas puestas en escena a partir del año de 1850 en los teatros de *Variedades*, la *Cruz* y, sobre todo, del *Circo*, animaron a la empresa de éste a construir un local brindado a tal linaje de producciones líricas, firmándose el 11 de Febrero de 1856 un contrato entre los señores Olona, Salas, Gaztambide y Barbieri, de una parte, y don Francisco Rivas de otra, por el que se comprometía el último a construir, en el período de nueve meses y en los solares señalados con los números 2 y 4 de la calle de Jovellanos, un teatro capaz para tres mil espectadores. Tal fué el origen del teatro de la Zarzuela, inaugurado el 10 de Octubre de 1856.

Finalmente, el 18 de Junio de 1864 pudieron contar los madrileños con un nuevo centro de reunión y solaz: el *Jardín de los Campos Elíseos*, en las afueras de la puerta de Alcalá, pocos metros más arriba de la actual calle de Velázquez. En dicho parque de atracciones se alzaba el *Teatro Rossini*, en el que actuaron diferentes compañías de ópera, brillando como astros de primera magnitud el famoso tenor Tamberlik.

Como ya dejamos consignado al hablar de la música durante el período que estudiamos, la terminación del magnífico edificio del *Teatro Real*, permitió su solemne apertura el 19 de Noviembre de 1850 con asistencia de los Reyes y de lo más granado de la aristocracia madrileña.<sup>1</sup> Centro el más alto en categoría artística, ha cumplido el *Real* la misión de arraigar en el público la pasión filarmónica, instruyéndole y ampliando en la medida posible los horizontes del arte lírico.

Las peligrosas crisis económicas que hubo de experimentar la vida teatral durante el reinado de Isabel II, atrajeron la

1. El único palco que apareció vacío fué el de una conocidísima condesa, y con ocasión de este hecho, se hizo la frase de que *había brillado por su ausencia*.



atención de los gobernantes, que deseosos de evitarlas, realizaron con mejor intención que fortuna algunas reformas. En efecto, el Ministro de la Gobernación don Antonio Benabides, por Real Decreto de 30 de Agosto de 1847, encomendó por razones de *decoro nacional* al Gobierno la dirección, administración y explotación del *Teatro del Príncipe*, suprimiendo, además, las cargas y censos que abonaba a la Beneficencia y que tanto dificultaban su funcionamiento. No pudieron experimentarse los resultados favorables de tal disposición, porque un cambio político hizo salir a Benabides de su Departamento. Al ser nombrado titular de éste el Sr. Escosura, aspiró también a reorganizar el *Teatro del Príncipe*, que había de denominarse en adelante *Teatro Español*; pero una nueva crisis ministerial inutilizó la labor realizada. Encargado de la cartera de Gobernación el Sr. Sartorius nombró una Junta llamada a revisar el Real Decreto de 30 de Agosto de 1847, y refrendó el de 7 de Febrero de 1849. A virtud de tales disposiciones, los teatros de la Corte recibieron las siguientes denominaciones: el del *Príncipe* se llamó *Español*; el de la *Cruz*, *Teatro del Drama*; el del *Instituto*, *Teatro de la Comedia*; el de *Variedades*, *Supernumerario de la Comedia*, y el del *Circo*, *Teatro de la Opera*. Por Real Orden de 6 de Abril de 1849 quedaron los coliseos de España clasificados en de primero, segundo y tercer orden. Fueron de primer orden en Madrid los de la *Cruz* y el *Circo* (el *Español* tenía carácter oficial); en Barcelona el de la *Santa Cruz* y el *Liceo*; en Sevilla, el *Principal* y el de *San Fernando*; en Cádiz, el *Principal*, y en Valencia otro que no se nombraba, pero que seguramente es el que hoy existe con el título también de *Principal*. De segundo orden eran: en Madrid, el del *Instituto*; y otro en cada una de las poblaciones de Coruña, Granada, Málaga, Palma, Valladolid y Zaragoza. A la tercera categoría pertenecían todos los demás.

La anterior reforma no produjo el menor resultado útil, por lo que fracasó definitivamente, así como otras posteriormente iniciadas y especialmente dirigidas a la fundación de un Teatro Nacional.

Fallecido el 18 de Marzo de 1820 el genial actor Isidoro Máiquez, asombroso maestro de la declamación naturalista, fué continuada su escuela, en lo cómico, por Antonio Guzmán, y en lo dramático, por Rafael Pérez y Andrés Prieto. El estreno del célebre drama del Duque de Rivas *Don Alvaro o la fuerza del sino* (22 de Marzo de 1835) imprimió al arte declamatorio un nuevo rumbo al obligar a los intérpretes de tan famosa producción a abandonar el naturalismo de Máiquez y la frialdad de la escuela clásica, para adoptar el estilo lleno de pasión y de lirismo exigido por el teatro romántico. El ilustre actor García Luna se hizo intérprete de las nuevas orientaciones, cada vez más acentuadas a medida que producciones como *El Trovador*, *Macías*, *Los amantes de Teruel* y *El zapatero y el Rey* contribuían a que en los artistas y en el público prendiera con mayor vigor la corriente artística dominante, dando con ello lugar a que el declamatorio lirismo inicial degenerase en los excesos del llamado *efectismo*. El eminente trágico español Carlos Latorre no pudo eludirse de tan vitando influjo, y si bien logró alcanzar los más rotundos éxitos en la interpretación de *Edipo*, *Pelayo*, *Otelo*, *El Trovador*, *El Justiciero*, *El eco del torrente*, *El puñal del godo*, y, sobre todo, *Don Juan Tenorio*, que estrenó, no es menos cierto que el amaneramiento en que hubo de caer restó méritos a su personalidad artística, que sin tal mácula podía haber resistido la comparación con la del genial Máiquez.

A pesar de merecer Latorre ser incluido en la categoría de actor *efectista*, no fué la personificación más auténtica de tal corriente, que hubo de encarnar netamente don José Valero, de quien fueron imitadores José Mata y Pedro Delgado. Frente al *efectismo* declamatorio de Valero y al *lirismo* de García Luna, alzose el *naturalismo*, que adaptado a las exigencias de la alta comedia moderna, halló su más decidido defensor en Julián Romea.

Nació Romea en Murcia el año 1813; fué discípulo de Latorre y contrajo matrimonio con la eminente actriz Matilde Díez. Dotado de esmerada educación, gallarda figura y distinguidas maneras, llegó el año de 1840 a la categoría de

primer actor del *Teatro del Príncipe*, interpretando desde entonces del modo más perfecto famosas producciones dramáticas antiguas y modernas, y distinguiéndose también por su excepcional talento para caracterizarse, por el refinamiento con que hubo de cuidar la escena y por su irreprochable modo de vestir. "Porque Romea nunca, ni aun en sus comien-



Fig. 186.—Julián Romea

zos, aceptó nada de guardarropía, sino que toda su ropa era absolutamente personal y elaborada por los mejores sastres. El cárrik con que se vistió en el primer acto de *Súllivan*, fué expresamente encargado a Inglaterra y hecho de acuerdo con los figurines de la época por uno de los mejores sastres londinenses. El éxito que obtuvo con la representación de la magnífica comedia de Melesville fué tal, que de una sola vez, y quizás para siempre, resucitó el *naturalismo escénico*".

Otro actor de singulares merecimientos fué el madrileño Manuel Catalina (1820-1886), cuya aparición en el *Liceo Artístico* y posterior actuación en los teatros del *Instituto*,

de la *Cruz*, de *Variedades*, del *Circo*, de la *Zarzuela* y *Apolo*, teatro este último que estrenó, le permitieron colocarse en uno de los primeros puestos de la escena española. La necesidad de trabajar por los teatros provincianos, ya que los de la Corte estaban monopolizados por Latorre, García Luna, Valero y Romea, obligó a algunos artistas de reconocido mérito a cultivar sus aptitudes sin sujeción a modelo determinado. Ello dió margen a un *eclecticismo* en la declamación, del que fueron representantes González Mata, felicísimo intérprete de *El Rey moro*, de García Gutiérrez, y del *Alfonso el Casto*, de Hartzenbusch; José Calvo, dotado de extraordinaria flexibilidad en la encarnación de los tipos clásicos y modernos de nuestro teatro y, sobre todo, el sevillano Joaquín Arjona (1817-1875), actor que con admirable perseverancia logró aunar la asombrosa naturalidad de Romea y el inspirado lirismo de García Luna, llegando en la interpretación del melodrama *La aldea de San Lorenzo* a expresar sólo con el gesto los más variados sentimientos del alma.

Discípulos de Arjona fueron Emilio Mario<sup>1</sup> y Victorino Tamayo. Mario inauguró como director el hermoso teatro de la Comedia, en 1875, y fué uno de los actores que con mayor propiedad caracterizó los personajes y cuidó de la propiedad escénica. Tamayo, acertó a interpretar de un modo magistral las obras de su hermano don Manuel, especialmente la titulada *Un drama nuevo*, cuyo protagonista Yorik, estrenó, consiguiendo uno de los mayores triunfos que artista alguno alcanzara sobre la escena.

La Revolución de Septiembre de 1868, próximamente coincide con la aparición de dos artistas dramáticos de portentosas facultades: Rafael Calvo y Antonio Vico. Ambos cultivaron el *efectismo*, pero a su modo, ya que el primero fué efectista de la palabra y el segundo del gesto. Vico, que con frecuencia se mostraba apático, llegando a despertar por ello protestas ruidosas en el público, tenía momentos en

1. Se llamaba Mario Emilio López; pero este apellido le pareció a Eguilaz muy vulgar para la escena, por lo que pidió al actor que trocara el nombre en apellido.

que, reaccionando maravillosamente, alcanzaba cumbres elevadísimas, a las que quizá no ha llegado ningún actor español. Calvo, en cambio, era más reposado, más ecuaníme, más igual. Sabía su papel perfectamente, y lo decía siempre con la misma grandeza. Ir a ver a Vico era exponerse a salir defraudado. Ir a ver a Calvo era estar seguro... de ver a



Fig. 187.—Doña Teodora Lamadrid

Calvo.<sup>1</sup> Vico era el dominador de la mímica; Calvo el incomparable maestro de la dicción y el tono. Aludiendo Zorrilla a la interpretación que daban estos dos colosos al *Don Juan Tenorio*, decía: "Calvo lo canta y Vico lo encanta". La frase, por lo acertada, era un fiel reflejo de las características de ambos artistas.

Aunque Vico y Calvo tuvieron algunos imitadores, como Perrín, del primero y Ricardo Calvo, del segundo, quien dejó realmente una descendencia numerosa e ilustre de discípulos fué Emilio Mario. En efecto, la Tubau, la Fernán-

1. Díaz Escovar y Lasso de la Vega, *Historia del Teatro Español*, tomo II, pág. 120



dez, Emilia Ballesteros, la Morera, la eminente María Guerrero, Aguirre, Vallés, Cepillo, Sánchez de León, Julianito Romea, Larra, Balaguer, José Rubio y Mendiguchía, en la escuela de Mario se formaron, habiendo dado positivo brillo a la escena española.

En el sainete y en la comedia de figurón destacáronse en el período que historiamos, Mariano Querol, Pedro Cubas y Antonio Guzmán, conquistando también el aplauso público por su vis cómica, frecuentemente exagerada y nada fina, Mariano Fernández y los *bufos* Ramón Rosell, Ricardo Zamacois y Manuel Rodríguez.

Entre las comediantas que habiendo destacado su personalidad durante el primer tercio del siglo XIX siguieron actuando en el período *isabelino*, deben ser citadas: Antera, Teresa y Joaquina Baus. Esta última contrajo matrimonio con el primer galán don José Tamayo, de cuya unión nacieron el eminente dramaturgo don Manuel y el ilustre actor don Victorino. Otra actriz de mérito relevante fué Concepción Rodríguez, esposa del empresario y director del Príncipe don Juan Grimaldi, e inspiradísima creadora de las protagonistas de *Don Alvaro* y *El Trovador*. Como sucesoras de la Rodríguez deben ser consideradas Bárbara y Teodora Lama-drid. Bárbara fué, bajo la férula artística de Latorre, maravillosa intérprete del teatro romántico, y Teodora, que trabajó bastante tiempo con el ecléctico Arjona, sin lograr desprenderse de un exceso de sensibleria, dió vida a los papeles de más empeño del teatro clásico y de las producciones dramáticas modernas de Tamayo y Ayala.

Figura que descuella entre todas las artistas del siglo XIX fué la de Matilde Díez (1818-1883), que acertó a armonizar las corrientes del naturalismo y del lirismo romántico en genial síntesis. Casada con Julián Romea aventajó a éste en la manera de interpretar lo que debe ser la naturalidad en el teatro y dejó el más indeleble recuerdo en la memoria del público como asombrosa intérprete de obras como *Isabel la Católica*, *Amor de madre*, *Los amantes de Teruel*, *El haz leña* y *El hombre de mundo*. Discípulas suyas fueron Elisa Boldún y Elisa Mendoza Tenorio. La Boldún contó entre sus

principales creaciones la del drama de Echegaray *O locura o santidad*; la Mendoza Tenorio no sólo cultivó con excepcional acierto el teatro clásico, sino que desempeñando los papeles de *Consuelo* en la comedia de este nombre, de Aya-la; Beatriz, *En el seno de la muerte*; Teodora, en *El gran galeoto*, y Margarita en *La muerte en los labios*, rayó a una altura sólo accesible a los temperamentos dramáticos del más privilegiado fuste.

Asimismo merecen destacarse entre las cultivadoras del arte escénico en el último período del siglo XIX, Doña María Álvarez Tubau, figura señoril y espíritu dotado de gran riqueza de matices; Antonia Contreras, Julia Cirera, Balbina Valverde, Rosario Pino y, sobre todo, María Guerrero, cuyo recuerdo vive en cuantos hemos tenido la fortuna de admirar y aplaudir a aquel dechado de delicadeza, noble prestancia y prodigiosa comprensión dramática.

En Cataluña adquirieron merecida popularidad las actrices Catalina Mirambell, Cayetana Vidal, Carlota de Mena, Ana Ros, las Moreras, Lorenza Sagarra, Mercedes Abella, Balbina Pi, Mercedes Daroqui, las Guitart y las Clemente, Fermina Vilches y otras, todas las cuales fueron intérpretes de un teatro que, ya entrado el siglo XX, ha tenido como suprema encarnación a Margarita Xirgu, hoy dedicada a la escena castellana.

Entre los actores catalanes no pueden omitirse los nombres del gracioso intérprete de sus obras José Robreño, a quien se le calificaba como *l'amor de la rialla*, de León Fontoba, Acisclo Soler, José Villahermosa, García Parreño, Antonio Tutau, Teodoro Bonaplata, Pedro Riutort, Hermenegildo Goula, Ricardo Esteve, Andrés Guixé y, sobre todo, del genial Enrique Borrás.

En la escena valenciana, por último, han brillado actores como Palanca, Civera, Peydró, Bort, Agapito Cuevas, Lloréns y Manuel Taberner y actrices como Amparo Guillén, Carmen Ortega, Elena Rodríguez, Anita Mollá y Amparo Taberner.

EL ARTE COREOGRÁFICO.—Al segundo tercio del siglo XIX corresponde la máxima afición de nuestro público por el

espectáculo coreográfico. Disputábanse en 1850 el cetro de tal modalidad artística Petra Cámara, mantenedora de la tradición del baile clásico español, Manuela Perea, apodada *la Nena*, ágil y sugestiva, y Pepa Vargas, tan hermosa como desenfadada y que en sus presentaciones escénicas introdujo la novedad de exornar el garboso cuerpo con la chaquetilla de luces usada por los toreros. *El rumbo macareno*, *La feria de Sevilla* y *La bailaora de Jerez*, fueron los bailes en que, respectivamente, cosecharon los mayores aplausos las tres citadas artistas. La Cámara actuó en el *Gimnasio dramático*, de París, donde con el maestro Ruíz y algunas parejas de bailarinas llegó a dar veinte representaciones, y una en el *Teatro de la Ópera*. La Condesa de Montijo organizó un baile de sociedad para presentar a la Cámara y su compañía ante lo más escogido de la aristocracia parisiense, y, durante la velada, interpretó esta artista el *Olé*, *La manola* y *El jaleo de Jerez*, la Bueno lució sus gallardas extremidades inferiores, que le valieron el sobrenombre de *el hada de los piececitos*, y la Conchita Ruíz bailó el *Vito* sobre una mesa enloqueciendo a la concurrencia, que colmó de obsequios y aplausos a las desenvueltas españolas.

Pero con ser tan grande la admiración que suscitaron nuestras bailarinas, fué mucho mayor la que el público madrileño tributó desde 1850 a las de procedencia extranjera que actuaron en España. La empresa del Circo contrató a dos de éstas que gozaban de extraordinaria fama: la Fuoco y la Guy Stephan, a fin de poner en escena los bailes de gran espectáculo, alternados con ópera italiana.

La primera de las citadas artistas era ágil y voluptuosa; la segunda, correcta y elegantísima. El entusiasmo de los espectadores los llevó a dividirse en bandos, que con el apelativo de *fuocistas* y *guystas*, cubrían de ramos y coronas el escenario del Circo, testimoniando de tal manera la adhesión a su respectivo ídolo. Hubo desafíos, rompimientos de amistades, disgustos y desaveniencias entre las familias; los partidarios de la Guy representaban la burguesía, la gente de dinero; los de la Fuoco eran títulos de Castilla, gente de sangre azul; aquéllos llevaban para distinguirse un clavel

rojo en el ojal del frac o de la levita; éstos un clavel blanco. El famoso banquero don José de Salamanca arrojó una noche a la Guy una pulsera de brillantes entrelazada en un ramo; y un periódico de aquellos días calculaba en cerca de veinte mil duros el coste de las flores arrojadas a las tablas del Circo durante la temporada de tres meses en que las pasiones de *fuoquistas* y *guystas* tuvieron su máxima exaltación.

Otras bailarinas que gozaron también de justo renombre fueron la Fanny Cerito, la acróbata convertida al arte coreográfico Fanny Standley, las hermanas Senra, la hermosa Antonia Martínez y su hermana Adela, la Cubas, la Pícazo y la Romero, apodada la *Cuchillera*.

**LAS CORRIDAS DE TOROS.**—Continuó en el período *isabelino* el llamado *espectáculo nacional*, en creciente auge. La antigua plaza madrileña construída a expensas de Fernando VI en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá (proximamente por lo que hoy es arranque de la calle de Claudio Coello) e inaugurada el año de 1749, sirvió de apropiado escenario para que lucieran su valor y destreza los famosos lidiadores Francisco Montes (*Paquiro*), Curro Cúchares, *Chiclanero*, Juan Yust, Cayetano Sanz, Antonio Sánchez (el *Tato*), Antonio Carmona (el *Gordito*) y otros. Francisco Montes, nacido y muerto en Chiclana de la Frontera (1805-1851) fué discípulo de Juan Hidalgo y de la *Escuela de Tauromaquia de Sevilla*, regentada por el maestro Romero, y desde 1831 actuó de matador en la Corte. Circunstacialmente alejado de las plazas, reveses de fortuna le obligaron a volver a ellas, hasta que en la temporada de 1850 fué herido en una pierna, accidente que, complicado con otras dolencias del diestro, produjéronle la muerte. Francisco Arjona, apodado *Cúchares*, nacido en Madrid en 1818 y muerto en la Habana en 1868, fué como *Paquiro*, discípulo de la *Escuela de Tauromaquia de Sevilla* y mejor torero que matador. En competencia con éste actuó con general aplauso el espada José Redondo (el *Chiclanero*), discípulo de Montes. El sevillano Antonio Carmona (el *Gordito*) trabajó por primera vez en Madrid en 1857 y tomó la alternativa en 1862, distinguiéndose por su maes-

tría en el arte de poner banderillas. El 15 de Octubre de 1865 tomó la alternativa en la plaza de Madrid Rafael Molina (*Lagartijo*), nacido y muerto en Córdoba (1841-1900). Dominador de todas las suertes, fué el diestro que logró en su tiempo despertar mayor entusiasmo y acrecer considerablemente la afición taurina en toda España.

El 13 de Noviembre de 1864 se estrenó en el viejo circo madrileño la pantomina titulada *Los toneleros*. Se improvisó para ello en el redondel un taller en el que algunos obreros simulaban ocuparse en construir toneles. El maestro del taller tenía una bella hija, a quien cortejaba un molinero un aguador y un arlequín, a los que, al cesar el trabajo, iba sucesivamente recibiendo la agraciada joven y ocultando en sendos toneles. Reanudada la labor por los operarios, sorprendían éstos a los galanes en su respectivo escondite y los apaleaban. Llegado entonces el padre de la joven deliberaba sobre el caso, y cuando puesto a elegir novio para su hija, empezaba a mostrarse inclinado a favor del arlequín, se daba suelta a un novillo que acaba con el conflicto y con el taller. Pues bien; el tonelero de la pantomina fué Salvador Sánchez (*Frascuelo*), que mató el novillo haciendo derroche de valor e inteligencia, valiéndole la hazaña nuevas contratas que le pusieron en condiciones de perfeccionarse en su arte y de, pasado algún tiempo, recibir de manos de *Cúchares* la alternativa en la plaza de Madrid, el 27 de Octubre de 1867. En Junio del siguiente año toreó en Granada con *Lagartijo*, entablándose entre ambos lidiadores una competencia, que, durante veinte años, mantuvo dividida entre *lagartijistas* y *frascuelistas* la opinión de la España taurina.

El 16 de Agosto de 1874 anunció la empresa que explotaba la plaza vieja de Madrid la apertura por última vez de las puertas del secular circo. "La Empresa espera—se leía en los carteles anunciadores—que con tal motivo el público acudirá gustoso a presenciar la última corrida que ha de darse en este edificio, donde tanto se ha divertido, y que construido y regalado por el Rey Don Fernando VI al Hospital General, cuenta una antigüedad de 127 años, y son tantos los millones de reales que ha producido a la humanidad doliente".



Verificóse el espectáculo y cuando, a los pocos días (el 4 de Septiembre de 1874), se dirigían los aficionados a inaugurar la nueva plaza de toros construída en la carretera de Aragón, pudieron ver que el derribo del antiguo circo había comenzado. Así terminó su historia el famoso y viejo coso madrileño en el que se dieron unas 2,600 corridas y se mataron 25,500 toros, y en el que, si de un lado conquistaron el aplauso popular los más renombrados diestros del último tercio del siglo XVIII y de los dos primeros del XIX, de otro hallaron trágica muerte Manuel Rendón (picador), el 16 de Junio de 1777; Bartolomé Carmona Arroyo (picador), el 8 de Julio de 1772; José Delgado (*Hillo*), el 11 de Mayo de 1801; Antonio Herrera Cano (picador), el 14 de Junio de 1819; Diego Luna (picador), el 1.º de Julio de 1830, y el matador José Rodríguez (*Pepete*), el 30 de Abril de 1862.

El 13 de Noviembre de 1887 resultó gravemente herido en la nueva plaza madrileña Salvador Sánchez (*Frascuero*), y aunque reapareció ante los públicos, fué por poco tiempo, retirándose definitivamente el 13 de Mayo de 1890. Tres años después abandonó también su arriesgada afición el famoso *Lagartijo*. Concentróse entonces la adhesión de los aficionados en el antiguo banderillero Rafael Guerra (*Guerrita*), que desde el 29 de Septiembre de 1887 en que recibió la alternativa, logró colocarse en uno de los primeros puestos entre sus compañeros de profesión, llegando en pocos años a ser la figura cumbre de la tauromaquia, posición privilegiada que hubo de ocupar hasta el otoño de 1899, en que, sin anuncio previo, se retiró.

El famoso maestro del volapié Luis Mazzantini, que toreó desde 1884 a 1905; el valerosísimo Manuel García (*Espartero*), actuante como matador desde 1885 al 27 de Mayo de 1894, en que fué cogido y muerto en el coso madrileño; el popularísimo Antonio Reverte Jiménez, de tan singular atractivo físico; Antonio Fuentes, Emilio Torres (*Bombita*) el hermano de éste, Ricardo, *Algabeño* y *Machaquito*, no consiguieron, aun siendo muy notables lidiadores, rayar a la altura que lo había hecho *Guerrita*. Para encontrar quienes, no sólo puedan equiparársele, sino superarle, es necesario

llegar a los años de 1912 y 1913 en que comenzaron a actuar como matadores de cartel José Gómez Ortega (*Gallito*) y Juan Belmonte y García.

Como en Madrid, funcionaron en las capitales más importantes y aun en las de segundo y tercer orden dilatados edificios brindados al espectáculo nacional. Barcelona tuvo desde 1834 la plaza de toros de la Barceloneta, y en Junio de 1900, inauguró la llamada de las *Arenas*; Valencia terminó la hermosísima con que cuenta el año 1860, debiéndose los planos y la dirección de la misma al arquitecto don Sebastián Monleón; Sevilla siguió con su famoso y antiguo circo taurino, edificado en el llamado Baratillo, el año de 1734, y restaurado varias veces en el curso del siglo XIX; la plaza de toros de Zaragoza data de 1764 y, la nueva, de Abril de 1808; la de Aranjuez, de 1797, reedificada en 1829 y fundamentalmente reparada en 1881 y, como hemos apuntado, en la mayoría de las restantes localidades de alguna importancia, no dejó de tener el festejo taurino su apropiado esnario.

**112. La indumentaria y las prácticas sociales.** — En punto a la vida social, fueron realmente esenciales los cambios que hubieron de producirse a partir del año de 1833. El antiguo tipo del *Manolo* madrileño, al promediar la pasada centuria, había ya abandonado totalmente la coleta y la redecilla, el calzón y chupetín, el capote de mangas y el sombrero apuntado, substituyendo tales prendas por la chaqueta estrecha y corta, el chaleco abierto, la camisa bordada (doblado el cuello y recogido con un pañolito de color saliente asido por una sortija al pecho), la faja encarnada o amarilla, el pantalón ancho por abajo, el zapato corto y ajustado y el sombrero calañés. También experimentó algún cambio el indumento de la *Manola*, si bien siguió ésta luciendo como clásicas prendas el exornado guardapiés y la airosa mantilla de tira. Pero, más esencial que la transformación de los vestidos, fué la que experimentaron las costumbres de estas clases modestas de nuestra sociedad. Su escasa instrucción y su natural independiente, mantuvieronlas hasta bien entrado el siglo XIX en un agresivo aisla-

miento en determinados barrios de la Corte (Avapiés, Embajadores, el Rastro, las Vistillas, Maravillas y el Barquillo); pero vigorizado cada vez más el principio de autoridad, mejorada la instrucción, iniciado el progreso industrial y extendida por aquellos barrios extremos, con el aumento y mejora del caserío, una parte de población más culta y acomodada, la circulación por ellos dejó de ser peligrosa. "Ya no choca el ruido de los coches—decía Mesonero Romanos al promediar el siglo XIX, aludiendo a los citados barrios,—ni son perseguidas las señoras con gorro ni los hombres con *futraque* o *levosa*; los chicos de tierna edad no aparecen ya en cueros o en camisa jugando al toro o apedreándose a cada esquina; antes bien, se recogen en las benéficas *Escuelas Pías* y de *Párvulos* de las calles del Mesón de Paredes, Espino, de Atocha o de Belén. Las *Manolas* no serpentean ya todo el día con sus trajes ondulantes y campanudos; asisten a trabajar modesta y silenciosamente en la Fábrica de cigarrros o en los particulares obradores de zapatería, sastrería y otros; los *Manolos* son también artesanos o mercaderes ambulantes, y han tomado el gusto a una ganancia legítima y segura, si bien no curados enteramente de la excesiva afición a los toros y a la taberna".

Como las clases populares, la alta y la media participaron asimismo del cambio hijo de los tiempos. Al uniformismo de la época napoleónica, con el *frack* como prenda generalmente usada por los caballeros, y las *dulletas* y *citoyenes* como exornación femenina, sucedieron los más varios influjos de la moda extranjera, bien parisiense o inglesa, bien italiana y aun polaca y rusa. Después, con el predominio de las corrientes románticas, los *Hugoltras* suprimieron de una pluma los peluqueros y rapistas, dejando crecer barbas y greñas a placer; por otro decreto anularon la camisa o la eclipsaron con la corbata; hicieron inverosímil el chaleco; desdénaron cadenas y oropeles, y sólo transigieron por la decencia con un modesto y abrochado levitín. Ya desde entonces todo hombre tuvo a gala parecer de siniestra y fea catadura; y la palidez mortecina, los largos bucles y los anchos pliegues de las damas, fueron substituídos al ajustado

corpiño andaluz, al rodete chinesco o a la rosita simbólica de la sien. Las modificaciones que posteriormente se introducen en la indumentaria masculina sólo afectan a las líneas generales de la indispensable *levita*, a la simplificación de la *corbata*, a la mayor o menor anchura de los *pantalones*, al uso cada vez más extendido de la cómoda *americana* y al empleo del *gabán*, niveladora prenda llamada a confundir todas las clases sociales. Con él lucha durante la segunda mitad del siglo XIX la clásica *pañosa* o capa, no ya de colores vivos, sino de paño negro, castaño, azul o verde oscuro; y como prenda mediadora entre el gabán y la capa, sigue usándose, aunque no con tanta aceptación, el *carrik* inglés, transformado más tarde en el *macferlán*, especie de sobretodo sin mangas, con amplias aberturas para meter y sacar los brazos y dos especies de aletas para cubrirlos. Finalmente, al período de la Regencia de Doña María Cristina de Austria corresponde el uso entre la gente distinguida del *smóking* como prenda de media etiqueta y el del *chaquet*, que ha substituído en nuestros tiempos a la antigua levita, prendas todas las enumeradas que, entre los elementos de las clases media y alta, no eximían del sombrero de copa.

Sin embargo de ello, en cuanto al uso de este sombrero, graciosamente denominado *gabina* por nuestros abuelos, es obligado consignar que, desde 1859, tuvo en España acérrimos detractores que llegaron, a imitación de los elegantes de Bruselas, a constituir verdaderas ligas para proscribirlo, substituyéndolo por los varios tipos derivados del antiguo *chamberg*, es decir, por el sombrero flexible con sus múltiples modalidades. Grabados de la segunda mitad del siglo XIX patentizan que aquella conjura contra la *chistera* no llegó ni mucho menos a desterrarla, pero tampoco dejó de sumar regular número de partidarios del flexible. La aparición del sombrero *hongo*, tan generalizado en las postrimerías de la pasada centuria, representa como una fórmula de prudente eclecticismo entre *chamberguistas* y *gabinistas*.

Frente a la tendencia simplificadora en punto a indumentaria masculina, la moda femenina fué imponiendo mayores complicaciones en el vestido. Como hacía notar Mesonero

en 1840, las damas, en lugar de suprimir, fueron adicionando a sus personas, en términos que, si anteriormente necesitaban seis varas de tela para su vestido, en la citada fecha gastaban dieciocho, y otras tantas de crinolina (léase *miriñaque*) para el armazón, con lo cual había que andarlas adivinando, como por entre tela de cedazo, y todas tenían el aire de campanas ambulantes o de hormigas en dos pies.

A la manera como entre los hombres pugnó la capa por detener la invasión del igualitario gabán, entre las mujeres, la airosa *mantilla*, bien de *tohalla*, bien de *cazuela*, bien de lindos *madroños* de terciopelo, luchó denodadamente contra el extranjero *sombrero*. Fué éste en el período *fernandino* un adorno puramente de Corte; como los uniformes y las grandes cruces, imprimía carácter, por lo cual, era común que las gentes asociasen el uso del sombrero a la posesión de magnífico coche, en que únicamente podía aquél ser lucidos por su propietaria. Tal limitación desapareció en el período *isabelino*, hasta el extremo de poder decir autorizados escritores costumbristas, que, en 1835, era ya miserable la modista que no lograba envanecerse luciendo el correspondiente sombrerillo. Adornada tal prenda de cabeza con flores y espigas, cuando estaba brindaba a la juventud, y formando inextricable laberinto de plumas y cintas, si se destinaba a damas de representación, salió triunfante en la pugna con la mantilla, y aunque en las capitales de provincias no pudo obtener la victoria tan fácilmente, en la Corte, adquirió, como decimos, en breve espacio de tiempo la mayor boga, experimentando las múltiples variantes posibles en el ancho margen comprendido entre la reducida *capota* y el aparatoso *sombrero* de anchas alas y profuso adorno..

La moda francesa aplicada a obtener los máximos beneficios industriales, procuró introducir anualmente artificiosos cambios en la silueta femenina, y unas veces reduciendo el *miriñaque* o llevando sus aros a la parte baja de la falda, otras suprimiendo tan antipático zagalejo para reemplazarlo por el antiestético *polisón*, otras rectificando las líneas naturales por medio del opresor *corsé*, hasta obtener el inverosímil *talle de avispa*, tan alabado hace cuarenta años, otras



alargando las colas o abullonando las mangas, no se dió punto de reposo ni permitió que lo gozaran quienes, cada vez en mayor número, de buen grado se sometían a sus tiránicos mandatos.

Una prenda, con todo, aun teniendo carácter fundamentalmente popular, consiguió mantenerse en boga entre las mujeres del pasado siglo: el *mantón*. Descendiente del primitivo manto oriental introducido en España en época remota, siendo en su esencia la misma prenda, logró adquirir modalidades en relación con el linaje de quienes de él se servían. Así, el *mantón alfombrado* y el de *lana gruesa a grandes cuadros*, fué el abrigo típico de las mujeres del pueblo; el de *crepón negro*, sin bordar, el preferido por las airoosas modistillas; el de *mallá* de seda negra hecha a mano y bordada en colores, el usado por las damas distinguidas, y el de *Manila*, el que por su belleza alcanzó la entusiasta adhesión de todas las clases sociales. “Al mismo tiempo señorial y popular—dice Pérez Galdós—pues le han llevado en sus hombros la gran señora y la gitana. Envolverse en él es como vestirse con un cuadro. La industria moderna no inventará nada que iguale a la ingenua poesía del mantón salpicado de flores, flexible, pegadizo y mate, con aquel fleco que tiene algo de los enredos del ensueño y aquella brillantez de color que iluminaba las muchedumbres en los tiempos en que su uso era general”.

Con referencia a la distribución que de las horas del día solía hacer la porción más callejera de nuestras clases media y alta, allá por los años de 1837 a 1840, nos ha dejado Córdova en sus conocidas *Memorias* un cuadro lleno de animación: “Comíase—dice—a las dos, e inmediatamente, en el invierno, comenzaba el paseo por el Prado, dando vueltas y más vueltas en la calle llamada de París, hasta las cuatro de la tarde, hora en que empezaba el frío. Algunos, aunque no muchos, coches de las grandes casas, arrastrados por caballos andaluces de gran alzada y de vivas acciones, y conducidos por lacayos galoneados, recorrían el trayecto lentamente paseando a las señoras, a las cuales era difícil divisar bien por tener las carrozas mucho fondo y estar forra-

das al interior de terciopelo llamado de Utrech, de tonos oscuros. Los coches de alquiler no se ariesgaban en el Prado, y como el mayor número de éstos era de colleras, nadie se hubiera atrevido a presentarse con ellos ante el público. Las señoras, después de las cuatro, recorrían las iglesias, los dueños o las tertulias de tarde, reuniéndose en torno del brasero aun en las casas de más pretensiones, y los hombres, o bien paseaban por la calle de la Montera, todavía muy en boga, o por la carrera de San Jerónimo, que empezaba a ponerse a la moda, o se instalaban hasta las ocho en el Casino. Por la noche recorríanse a pie las tertulias, y se acudía a los teatros, que estaban entonces muy baratos”.

La mayor civilidad de las costumbres produjo como efecto en la época a que aludimos, el que, a los antiguos e irreconciliables partidismos, alimentados por el odio, sucediera la humana corriente favorable a una aproximación, que sin borrar las líneas que ideológicamente separaban a los militantes en las diferentes agrupaciones políticas, hizo posible el trato social y la estimación recíproca entre sus componentes. En su consecuencia, comenzó a ser frecuente desde 1838 la reunión de cenáculos políticos a los que concurrían personajes de los más varios matices. Carriquiri, en su casa de la calle del Príncipe; Salamanca, en su morada suntuosísima, y Fernández de Córdova, en la finca que ocupaba en Carabanchel, tuvieron el acierto de reunir en torno a sus bien servidas mesas a hombres de tan opuesto criterio como Toreno y el conde de las Navas; Mendizábal y Mon; Narváez y Olózaga; Villiers y Rayneval y Casa Irujo e Istúriz.

Por otra parte, la repercusión de las ardorosas contiendas civiles en el *gran mundo* se había traducido durante las Regencias de Doña María Cristina de Borbón y del general Espartero en un retraimiento de las clases aristocráticas respecto de la llamada vida de sociedad. El advenimiento al Poder de los moderados, el año de 1843, al dar mayores garantías a la causa del orden, permitió reanudar la antigua animación de los salones aristocráticos. En efecto, tanto en Palacio, como en la hermosa residencia de la Reina Madre, en la calle de las Rojas y en las suntuosas moradas del Mar-

qués de Miraflores, la Condesa de Montijo, el Embajador de Inglaterra Bulwer, el general Narváez, etc., se organizaron conciertos, bailes y comidas en los que lucieron su esplendorosa juventud Eugenia y Paca de Montijo, la primera, futura Emperatriz de los franceses, y con ellas, damitas y damas pertenecientes a familias de tan rancio abolengo como las de Tilly, Someruelos, Acapulco, Montufar, San Felices, Tendilla, Casa-Valencia, Zarco del Valle, etc., que deleitaban a sus admiradores con el ingenio de su conversación y con la gracia y elegancia con que bailaban la naciente *polka*, el cadencioso *vals* y el palatino *minué*, por aquellos días una vez más restaurado.

Nuevamente interrumpida la normalidad de la vida del gran mundo por los acontecimientos políticos que dieron al traste con el ministerio del Conde de San Luis (Julio de 1854), y transcurrido el accidentado *bienio*, volvió a animarse la sociedad aristocrática, que en las recepciones organizadas por el Embajador de Francia, Marqués de Turgot y por los Duques de Sotomayor, los Marqueses de Malpica, Superunda y Casa Bayona, y en los saraos, modestamente denominados chocolates, de casa de Fernán Núñez, halló el más apropiado escenario para lucir sus esplendores.

**113. La España post-isabelina.**—El rápido galopar de los años no alteró fundamentalmente el espíritu de la población española, agrupada, bien en localidades de escaso vecindario, bien en centros urbanos de mayor importancia. En éstos, en cambio, fueron operándose transformaciones enderezadas hacia la uniformidad con otros países, tanto en punto a la indumentaria, como respecto a las mejoras materiales de su caserío. Formando brusco contraste con tales mudanzas, la fisonomía de los pueblos de escaso vecindario fué variando muy lentamente. Durante la segunda mitad del pasado siglo, todavía se conservaba la sustantividad del indumento regional, que durante el último tercio de dicha centuria experimenta más perceptibles mudanzas a medida que las vías férreas van facilitando el acceso de los elementos rurales a las grandes capitales. Pero aun entre aquellos más dispuestos a someterse al influjo nivelador, han perdurado ciertos componentes del vestido

regional, que son los que, en una u otra forma usados, han constituido como denominador común de la indumentaria pueblerina. Tales son el *pañuelo de seda*, de tan diversas formas utilizado por aragoneses, valencianos, asturianos, gallegos y andaluces; tal la *peina*, de oro o plata o enjoyada, de concha sencilla o calada, de tamaño reducido y colocada a un lado a guisa de flor de oscuros pétalos, bien convada, para responder al calificativo de teja, o rematada por aguda punta a manera de inflexible y artificioso airón; tal, por último, los ricos *encajes y bordados*, con que la gente aldeana han exornado las ropas interiores, por modo especial la pechera de la fastuosa camisa de boda<sup>1</sup>.

En cuanto a la marcha progresiva de los grandes centros urbanos españoles hacia el tipo de urbe europea, Madrid y Barcelona, en el último tercio del siglo XIX, se distancian de modo extraordinario respecto de las restantes capitales. Dilatando la primera su caserío por los barrios de Argüelles, Pozas y Salamanca; utilizando el Canal de Isabel II o del Lozoya y llevando a los barrios altos las aguas del río Manzanares; aplicando al alumbrado público y al particular el fluido eléctrico; mejorando notablemente los medios de comunicación interior y embelleciendo las principales calles y paseos con magníficos edificios, se ha transformado totalmente, comenzando a adquirir las características de una gran capital. En comprobación de ello, cúmplenos aportar algunos datos interesantes. El 31 de Enero de 1872 se inauguró el viaducto de la calle de Segovia; el 21 de Abril de 1866 se puso la primera piedra del magnífico edificio destinado a Bibliotecas y Museos, obra proyectada por el arquitecto señor Jareño; el año de 1891 se terminó la construcción del palacio de la Equitativa, según planos de los señores Farrés y Grases, y, asimismo, se concluyeron las obras del Banco de España, edificado bajo la dirección de los señores Sáinz de la Lastra y Adaro, y, posteriormente, se embelleció la capital con profusa serie de monumentos.

Corresponde también al período *post-isabelino* el incremen-

1. Consúltese para más detalles sobre el particular la amena obra de Isabel de Palencia, *El Traje Regional de España*.

to en Madrid del servicio de comunicaciones. El 31 de Mayo de 1871 se inauguró la línea del tranvía de Madrid, cuyas tarifas eran: del barrio de Salamanca a la Cibeles, medio real; a la Puerta del Sol, un real; a la Plaza de Oriente, real y medio, y al barrio de Pozas, dos reales. Los coches del tranvía eran arrastrados por dos o tres mulas a las que, en las calles muy pendientes, se les añadían los llamados encuartes. Con los tranvías, los coches de plaza, mal llamados simones, y la pesada carretería, compartieron el dominio de las calles los incómodos *omnibus*, llamados *ripperts*, que el 1.º de Abril de 1882 comenzaron a funcionar en la línea "Lista, Puerta del Sol, Plaza de Oriente". A partir de 1898 fué estableciéndose el importante servicio de tranvías eléctricos en las líneas de Salamanca, del Norte, del Este, de Estaciones y Mercados y de Leganitos.

Al último tercio del siglo XIX corresponde, en punto a medios de locomoción, la aparición del *biciclo*, cuya deficiente estructura no permitió que fuera utilizado más que por acróbatas y deportistas. En los albores de la Regencia de Doña María Cristina de Austria, comenzaron a circular las primeras *bicicletas*, que si por constituir entonces un artículo de verdadero lujo, no se generalizaron, al abaratarse años después, hicieron posible que tan práctico invento se convirtiera en vehículo de las clases populares. Finalmente, en las postrimerías de la menor edad de Alfonso XIII apareció el *automóvil*, artefacto a la sazón feo de líneas y rudimentario de maquinaria, pero llamado a operar una verdadera revolución en la vida de los pueblos civilizados.

Más aun que Madrid experimentó inusitado desarrollo la ciudad de Barcelona en el período que historiamos. Respecto de los ensanchamientos que hubo de tener la hermosa capital bastará dejar consignado que si en 1860 ascendía el número de sus edificios a 8.665, en 1887 llegó a 11,517. El año de 1897 le fueron agregados los pueblos del llano, sumando entonces 30.138 edificios. Municipio y vecindario han cooperado en Barcelona a la más intensa transformación de la ciudad, logrando en premio de su laudable perseverancia gozar de la satisfacción legítima que hoy experi-



mentan al ver que su obra es admirada por cuantos la contemplan.

A la ya larga lista de teatros incluída en precedentes artículos, debemos añadir ahora la formada por los coliseos que vinieron en época más reciente a intensificar la proverbial animación de la Villa y Corte. El *Teatro de la Comedia*, sito en la calle del Príncipe, fué inaugurado el 18 de Septiembre de 1875; el de *Lara* el 3 de Septiembre de 1880; el de la *Princesa* el 15 de Octubre de 1885, y con ellos alternaron el famoso *Circo de Rivas* o del *Príncipe Alfonso*, en el paseo de Recoletos, donde hoy se alzan las tres casas inmediatas al palacio de Medinaceli; el *Teatro Felipe*, construído por Ducazcal en el Prado, junto al actual Palacio de Comunicaciones; el *Circo de Colón*, en la que hoy es plaza de Alonso Martínez, en el chaflán de Almagro y Santa Engracia; el *Teatro Eldorado*, a espaldas de la Bolsa, y el coliseo situado en la antigua huerta de San Juan, impropriamente denominado *Teatro del Buen Retiro*. En el del *Príncipe Alfonso* se celebraron magníficos conciertos y se estrenaron *Los sobrinos del capitán Grant*, *La vuelta al mundo* y, posteriormente, *La bohemia*, de Puccini; en el *Teatro Felipe*, se pusieron por vez primera en escena *La Gran Vía*, *El monaguillo* y *El año pasado por agua*; en el *Circo de Colón* actuó la bellísima acróbata Emilia Geraldini, que tuvo la humorada de representar el Tenorio caracterizando el papel de Doña Inés; y en el teatro de los Jardines del Buen Retiro (situados éstos en el actual solar ocupado por la casa de Correos, la calle de Montalbán y el Ministerio de Marina) diéronse durante el verano magníficas audiciones de ópera, bailes de gran espectáculo y funciones de zarzuela, actuando entre otros artistas el célebre tenor Julián Biel, y el popular picador de toros *Badila*, tan valeroso rejoneador y piquero como graciosísimo actor cómico.

La pelota vasca, tradicional juego en las regiones de esta habla, adquirió durante la Regencia de doña María Cristina de Austria general popularidad, siendo rara la población importante donde no se construyeran uno o varios frontones o trinquetes en los que actuaron con general aplauso los

famosos pelotaris Portal, Irún, Tandilero, Chiquito de Abanto, Gamborena, Chiquito de Ondárroa y otros.

El decurso de los años ha ido lentamente transformando la modalidad de nuestro pueblo en ciertos aspectos puramente formales de su existencia. Pero en el fondo, perviven las características que acabamos de apuntar y que tan íntimamente enlazan las instituciones y costumbres españolas de hoy con sus inmediatas precedentes de hace un siglo. Hasta de aquellos leves matices que estimamos como originalidades de la sociedad de nuestros días, puede decirse que ni son nuevos ni al ser reproducidos, han experimentado variantes de consideración. Así, la conocida y tan en boga expresión de nuestros días, *tener plan*, como expresiva, no sólo de grata ocupación, sino particularmente de amorosa inteligencia, fué ya registrada por Mesonero Romanos con referencia al primer tercio del pasado siglo en su artículo *Un viaje al Sitio*, en el cual trabajillo literario, un personaje pregunta a otro en esta forma: *¿Y V. tiene plan con esa que acompaña?* Pues como tal expresión, fueron también usadas entonces la de *secarse*, por aburrirse; hacer vida *circular*, por llevarla monótona; *tronar*, por romper relación de noviazgo, etc., etc. La propensión a utilizar tales idiotismos emplebeyecedores del idioma no se interrumpe durante el siglo XIX. El año de 1885 el brillante escritor Ortega Munilla aludía a una egregia dama que, para manifestar en ocasión solemne que gozaba de excelente salud, decía que estaba *al pelo*, y, asimismo, contaba el citado literato que, al referirse un ilustre académico, en discurso leído ante docta Corporación, a los numerosos y contradictorios juicios emitidos sobre el tema que desarrollaba, tan sólo se le ocurrió expresar este concepto diciendo *que sobre el particular había la mar de opiniones*. ¡Qué más!, el calificativo de *pollo bien* aplicado actualmente a los jóvenes que presumen de distinguidos a la moderna, fué, según autorizada opinión, un americanismo usado hace tiempo y, desde luego, el término *pollo*, gracioso remoquete con el que el Marqués de Santiago denominó por vez primera a los alborotadores mozalbetes que, allá por el año de 1826, se reunían en uno de los salones del magnífico

palacio que la duquesa de Osuna poseía en la Puerta de la Vega. Con tal vocablo vino a enriquecerse el léxico aplicado a quienes, representando en todo tiempo aquella porción de nuestra juventud dada a la vanidad y extremosa en la interpretación de la moda, atraieron sobre sí, primero, el dictado de *currutacos*, después el de *petrimetros*, más tarde el de *tónicos* o *elegantes* y, posteriormente, los de *lechuguinos*, *mequetrefes*, *lindos*, *galancetes*, *gomosos*, *pollastres*, *pollos* y *pollos bien*. Esto, y la tendencia a extranjerizarse, que llevó al hijo de don Melquiades Revesinos a transformar su apellido en Reveseint, y a don Juan de Trotinos a llamarse en Inglaterra Mister Trotan, en Rusia, Trotonoff; en Polonia, Trotiuski; en Francia, Mr. Trotein; en Italia, su patria, signor Gionnvani Trotini, y en Portugal, O senhor Troutiño, fué y sigue siendo mal endémico y, por lo visto, de difícil extirpación.

## RESUMEN DEL REINADO DE ALFONSO XIII

1902

**114. Hechos principales.**—La entrada del joven Monarca Don Alfonso XIII en el pleno goce de sus prerrogativas soberanas (17 de Mayo de 1902) fué celebrada con solemnidades y fiestas, expresivas del público regocijo. La Gaceta del día 18 insertó un Real Decreto, a cuya virtud condignamente le eran concedidos a la ex-Regente Doña María Cristina de Austria la categoría, honores y preeminencias de Soberana consorte reinante, y la del 23, instituía la Orden civil de Alfonso XII, para recompensar méritos científicos, literarios, artísticos, benéficos, etc.

En medio de la general satisfacción producida por el fausto acontecimiento que se estaba celebrando, una nota, rememoradora de recientes adversidades nacionales, vino a poner sombra de tristeza en el país: la proclamación de la República cubana bajo la presidencia de Estrada Palma (20 de Mayo), hecho éste que hizo doblemente doloroso la actitud

del diputado provincial vizcainarra don Sabino Arana, que tuvo la deplorable ocurrencia de felicitar desde tierra española al Gobierno de los Estados Unidos por aquella dolorosa secesión.

En las esferas del mando continuó el Gabinete presidido por el señor Sagasta, bien que amenazado por la disidencia de Canalejas respecto al criterio que había de adoptarse para resolver el problema planteado por las Asociaciones religiosas. Insistiendo sobre él el batallador Ministro de Agricultura, anunció el 24 de Mayo su propósito de abandonar el puesto que desempeñaba, caso de que el Gobierno no acordara la reunión inmediata de las Cortes y la aprobación por éstas de un proyecto de ley de Asociaciones, confeccionado independientemente de las negociaciones que se seguían con Roma. Para evitar la crisis, los Ministros de Gracia y Justicia y de Gobernación redactaron el proyecto solicitado; pero aun hallándose concebido en términos de un radicalismo que no pudo menos de satisfacer al Consejero intransigente, la negativa de Sagasta a reunir las Cámaras, dada la proximidad del verano, produjo la dimisión de Canalejas (30 de Mayo), a quien substituyó el Sr. Suárez Inclán.

La salida del Sr. Canalejas del Gobierno señaló el comienzo de una campaña política que, iniciada por el citado ex-Ministro en famoso banquete celebrado el día 14 de Junio en el restaurante de Tournié, y proseguida en Alicante y Valencia, donde fué significativamente agasajado por los republicanos, le colocó en situación harto comprometida, ya que tuvo en repetidas ocasiones que mostrarse en público menos monárquico de lo que en realidad era, y más propicio al republicanismo de lo que verdaderamente quería.

La disidencia canalejista estimuló al Gabinete a acentuar la nota liberal. En tal sentido, el titular de Instrucción pública Sr. Conde de Romanones presentó a la regia sanción el Decreto de 1.º de Julio (1902) por el cual se declaraba que la inspección de los Establecimientos de enseñanza no oficial, correspondía al Ministerio de Instrucción pública; que los Directores de dichos Centros serían responsables de las enseñanzas que en ellos se dieran contra el orden civil y polí-

tico del Estado y que entre los profesores de tales organismos docentes habían de figurar cinco, por lo menos, con el título de Bachiller o Licenciado en Facultad mayor, y de ellos, uno, con el Licenciado en Filosofía y Letras y otro con el de Licenciado en Ciencias. A los Establecimientos docentes no oficiales cuyo profesorado dejara de reunir las citadas condiciones, se les concedía el plazo de un año para adquirirlas.

Derogaba el Real Decreto a que nos referimos el párrafo tercero del artículo 24 del Real Decreto de 20 de Julio de 1900, que refrendara el Sr. García Alix, párrafo que exceptuaba de la posesión de títulos académicos a los profesores pertenecientes a los Colegios de las Corporaciones religiosas. Con la consignación de este extremo, podrá fácilmente comprenderse el alcance de la derogación a que aludimos y el carácter tendencioso de la disposición total suscrita por el batallador Conde. En representación del partido conservador, protestó elocuentemente el Sr. Silvela contra la disposición ministerial, y en el Congreso católico inaugurado en Santiago de Compostela el 20 de Julio, acordóse laborar con el mayor empeño en pro de la libertad de enseñanza.

Paralelamente a las medidas dictadas en orden a la instrucción pública, estableció el Gobierno, en punto al problema social, el contrato de trabajo entre los obreros y los concesionarios de obras públicas (Real Decreto de 21 de Junio) y reguló el trabajo de la mujer fijando la jornada de once horas, o, en su lugar, un *máximo* de sesenta y seis semanales, excluyendo siempre los domingos (Real Decreto de 26 de Junio). Por su parte, el Fiscal del Tribunal Supremo señor Ruiz Valarino declaró en circular dirigida al Ministerio fiscal que la coligación y la huelga de obreros encaminadas a recabar ventajas, ora en los salarios, ora en las condiciones del trabajo, no podía ser considerada como delito mientras no se realizara "abusivamente".

A la gestión de los gobernantes en el sentido apuntado, respondió, con todo, la compleja realidad española planteando como problemas de mayor monta el *obrerista*, representado por las frecuentes huelgas que tuvieron como escenario las



ciudades de Barcelona, Badajoz, Bilbao, Santander, Jerez y Córdoba; el *clerical*, que se tradujo en motines y asonadas, especialmente en Valencia, provocados por los elementos republicanos contra los católicos, y el *separatista*, que en Vizcaya y Cataluña hubo de manifestarse por medio de reprobables testimonios de animadversión contra la Patria común. De entre ellos, el último, era por su gravedad el que demandaba mayor resolución para atajarlo y, desde luego, un exquisito tacto para no confundirlo con el relativo a las reivindicaciones regionalistas, que, cuerdamente propugnadas, debían entrar en la categoría de aspiraciones lícitas. Un Real Decreto refrendado por el Conde de Romanones el 21 de Noviembre (1902) anunciando que serían castigados los maestros y las maestras que enseñansen a sus discípulos la Doctrina cristiana u otra cualquiera materia en idioma o dialecto que no fuera la lengua castellana, produjo hondo malestar en Barcelona, en la que la masa escolar adicta al catalanismo silbó a unos oficiales del Ejército y apedreó a la Guardia Civil (27 y 28 de Noviembre), dando margen a que la fuerza pública irrumpiese en el edificio de la Universidad. La deplorable circunstancia de haber sido objeto de desconsiderado trato por parte de la benemérita algunas autoridades académicas, agrió la cuestión, que vinieron asimismo a complicar los estudiantes republicanos, que oponiendo al canto de *Los Segadores* el de *La Marsellesa* y a los denuestos y agresiones de los catalanistas, otros proporcionados, convirtieron el edificio universitario en campo de general y lamentable contienda. El Gobernador Civil Sr. Manzano tomó entonces la iniciativa de visitar al Rector para desagraciar a las ofendidas autoridades docentes; pero este acto fué estimado por el Gobierno como indiscreta debilidad, por lo que exoneró al Sr. Manzano, y aunque en las Cortes dió el Ministro de Instrucción pública cumplidas explicaciones sobre el alcance del Real Decreto, causa inmediata de los desórdenes, estableciendo la distinción debida entre el uso de los dialectos regionales *como fin*, y el mero empleo de los mismos *como medio* o instrumento para la enseñanza, es lo cierto que los ánimos quedaron excitadísimos y prontos a dar nuevo

testimonio de la honda división que trabajaba el espíritu de la hermosa ciudad catalana.

Respecto a la cuestión religiosa, acuciado el Gabinete por la actitud de Canalejas, que seguía tremolando como banderín de enganche su proyecto de ley de Asociaciones, procuró dar alguna mayor actividad a los tratos entablados con Roma; mas, a decir verdad, o no supo o no quiso definir de un modo claro su opinión, patentizándose con ello las discrepancias que en tal asunto existían en el seno del Gobierno entre los que, como Moret, eran partidarios de que los institutos religiosos, como parte integrante de la Iglesia, no se rigieran por el derecho común, y los que, como el Conde de Romanones, se mostraron partidarios de la aplicación de tal derecho a aquellas Corporaciones que no tuvieran el carácter de concordadas. Prevaleció a la postre el criterio del Sr. Moret, pero el Vaticano puso especial empeño en no soltar prenda respecto de las Ordenes que deseaba ver amparadas por el Concordato, y con ello se frustró el justificado designio ministerial.

El problema obrero tuvo como expresiones bien acusadas, no sólo las repetidas y cada vez más violentas huelgas, sino la celebración el 29 de Agosto de 1902 del *Congreso socialista* de Gijón (en el que Pablo Iglesias abogó por la muerte de la Iglesia como cooperadora de la burguesía), y el nombramiento del *Comité nacional* del citado partido (10 de Octubre), que compusieron, entre otros, Pablo Iglesias, Matías Gómez, Francisco Mora y García Cortés.

Durante el verano de 1902 el joven Monarca visitó las ciudades de Gijón, Oviedo, León, Santander y Pamplona. Un exceso de solicitud de los elementos palatinos produjo durante el viaje rozamiento con algunas autoridades locales y lamentables diferencias con el Ministro de Agricultura Sr. Suárez Inclán. Por si ello no fuera suficiente para alimentar el comentario público, la expulsión de los informadores periodísticos del fuerte de San Cristóbal (Pamplona) en el momento en que era visitado por S. M. y no obstante haber sido autorizados para entrar en la citada fortaleza por el Ministro de la Guerra Sr. Weyler, vino a añadir nuevos mo-

tivos de crítica a los mentideros políticos, en los que se censuró acremente al Gobierno por su falta de energía para hacer que fueran guardadas a los Ministros las consideraciones a que tenían derecho por su categoría y representación.

El 20 de Octubre (1902), abriéronse las Cortes. En ellas fué combatido el Gabinete, así por sus debilidades durante el viaje regio, como por su irresolución al plantear el problema relativo a la ley de Asociaciones. Durante los debates sostenidos en la etapa parlamentaria a que estamos refiriéndonos, Sagasta expulsó del partido liberal a Canalejas; Maura llamó a los Ministros *cortesanos temporeros*, mostróse decidido partidario de realizar una *revolución desde el Poder*, y cáusticamente hubo de referirse a las diferencias sustanciales que existían entre gobernar y celebrar una *francachela* de familia, y Silvela pidió el mando *por la tremenda* (según expresión del Sr. Sagasta) y confirmó anteriores manifestaciones del Sr. Maura respecto a la unión política de ambos personajes.

La violencia de tan repetidos ataques, obligó a Sagasta a plantear la crisis total (10 de Noviembre). Ratificada por el Rey su confianza en el Presidente dimisionario, intentó éste formar con la colaboración de *tetuanistas*, *romeristas*, *lopezdominguistas* y *sagastinos*, un Gobierno de atracción. No aceptada la propuesta por el Duque de Tetuán y el general López Domínguez, y desbaratado el acuerdo con Romero Robledo por las desembozadas exigencias de éste (que aspiraba a obtener el Departamento de Gobernación y, caso de no serle concedido, dos carteras, una para él y otra para el Sr. Bergamín), don Práxedes declinó la misión de formar Gobierno; pero insistiendo el Rey en honrarle con tal encargo, constituyó el 14 de Noviembre el siguiente Gabinete: Presidencia, Sagasta, Estado, duque de Almodóvar; Gracia y Justicia, Puigcerver; Hacienda, Eguilior; Instrucción pública, Conde de Romanones; Gobernación, Moret; Guerra, Weyler; Marina, Veragua, y Obras públicas, Salvador. Sobre los Consejeros salientes, señores Suárez Inclán, Montilla y Rodríguez, cuyo despecho quisieron aprovechar las oposiciones, se discursó apasionadamente en las Cortes. Romero Robledo, con pas-

moso desenfado, interpeló al Gobierno llamando desgraciados a los tres aludidos ex-Ministros; de un famoso expediente sobre corta de pinos en el monte de Hortizuela (Jaén), se hizo arma contra el Sr. Suárez Inclán; esgrimiose también el argumento de la inmoralidad administrativa contra el señor Montilla, que al defenderse dijo, entre otras cosas, que él no era más *que el cacique de la provincia de Jaén*; Silvela reiteró una vez a nombre de los conservadores la demanda del Poder, y como a todo lo anterior hubieron de sumarse los ya referidos sucesos de Barcelona a que dió lugar el Real Decreto sobre la enseñanza del Catecismo en castellano, y la votación recaída en el Congreso contra el acuerdo del Consejo de Ministros de construir por adjudicación dos barcos-escuelas; nuevamente planteó Sagasta la cuestión de confianza (3 de Diciembre) que, al fin, quedó resuelta con la entrada a formar Gobierno de Sr. Silvela (día 6), el cual, presentó a la Corona la siguiente lista de Consejeros: Presidencia, Silvela; Gobernación, Maura; Gracia y Justicia, Dato; Estado, Abarzuza; Hacienda, Villaverde; Guerra, Linares; Marina, Sánchez Toca; Instrucción pública, Allendesalazar, y Agricultura, Vadillo.

El 11 de Diciembre se publicó en nota oficiosa el programa ministerial, comprensivo de los extremos que pasamos a enumerar: restablecimiento de los excedentes del Presupuesto; reforma completa de la administración local, fundamento de la unión de los señores Maura y Silvela; servicio militar obligatorio sin redención a metálico; nuevas bases de una organización militar con espíritu de continuidad y permanencia representado por los Estados Mayores Centrales del Ejército y de la Armada, y extensión de la enseñanza primaria, dejando para obra legislativa la secundaria y superior, siempre sobre el principio de libertad establecido por la Constitución.

## 1903

Posesionados los nuevos Ministros de sus carteras, dispu-

siéronse a dar cumplido testimonio de sus personales iniciativas. El de Gracia y Justicia sometió a la regia firma un Decreto sobre normas para el nombramiento y ascenso en la carrera judicial, suprimiendo el llamado *cuarto turno*, fuente de tantas inmundicias. El Ministro de Marina inició la reorganización de servicios de la Armada anunciando sus proyectos de construcción de una escuadra en el período de diez años, pudiendo desde el cuarto disponer de algunos barcos. El titular de Instrucción pública palió los rigores de la protesta catalanista reconociendo en los maestros la libertad de enseñar en otro idioma que el oficial, cuando se dirigiesen a alumnos que ignorasen el castellano. El Sr. Villaverde, desde el Departamento de Hacienda, reiteró su firme propósito de mantener a toda costa la nivelación presupuestaria. Por último, el señor Maura, mostróse decidido a suprimir los antiguos encasillados electorales, a fin de que la lucha comicial tuviera las máximas garantías de sinceridad.

Los elementos sagastinos, que una vez salidos del Gobierno se aprestaron, llamando a los disidentes, a rehacer la gran familia liberal, se vieron dolorosamente sorprendidos por la defunción de su jefe acaecida el 5 de Enero de 1903. La muerte de Sagasta fué generalmente sentida, y el entierro de tan ilustre personaje verificado el día 7, constituyó una imponente manifestación de duelo a la que se asociaron todas las clases sociales, desde la aristocrática hasta la popular, que tuvo, entre otras representaciones, la muy simpática y conmovedora de la humilde cigarrera María Baños, la *Pajaritos*, deudora a don Práxedes y a su familia de generoso y cordial patrocinio.

El día 11 de Enero reuniéronse los ex-Ministros liberales, que acordaron erigir mediante suscripción nacional, un mausoleo al llorado caudillo, y ratificar al Sr. Montero Ríos el encargo que Sagasta le tenía ya hecho de redactar el programa del partido. El arduo pleito de la jefatura quedó aplazado hasta que, discutido y aprobado el ideario liberal, pudiera ser reunida una Junta de Diputados, Senadores, ex-Diputados y ex-Senadores que decidiera el asunto. Cumpliendo Montero Ríos la misión, que se le había confiado, leyó a los pocos



días (24 de Enero) el aludido programa inspirado en principios de un liberalismo radical. En efecto, propugnábase en él como empeño de realización posible la separación de la Iglesia y el Estado; la libertad de las Congregaciones religiosas para asociarse en prosecución de sus fines peculiares, pero sometiéndolas a la ley común cuando su objetivo no fuera religioso; se establecía la necesidad de hacer obligatorio el sufragio universal; en cuanto a política internacional se recomendaba la abstención, sin perder de vista los intereses de España más allá del Mediterráneo; respecto al problema social se reiteraba el carácter individualista del partido, perfectamente compatible con una política amparadora del proletariado y traducida en disposiciones enderezadas a fomentar la fundación de Sociedades cooperativas y de previsión, a suprimir el impuesto de consumos, a abaratar los artículos de primera necesidad y a orientar la actividad legislativa hasta llegar a la regulación del contrato del trabajo; en cuanto a la estructura del régimen localista, se abogaba por la descentralización de la vida municipal, y en punto a la instrucción pública, pronunciábase por la libertad de enseñanza, bajo la vigilancia del Estado, y por la libertad de la cátedra en la investigación científica.

El carácter radical de algunos de los proyectos esbozados por el Sr. Montero Ríos, despertó el recelo de quienes no estaban conformes con la posible jefatura de este hombre público. Tal discrepancia se puso de manifiesto al inaugurarse el 28 de Enero el Círculo liberal, organizado por el Conde de Romanones, y al entrar en la discusión de los más importantes extremos del programa redactado por don Eugenio. No obstante esto, el temor a arrostrar las responsabilidades de un rompimiento contuvo a los primates liberales, que llegaron a ponerse de acuerdo en las líneas fundamentales a seguir, moderando el radicalismo de los proyectos de Montero Ríos, sobre todo, el relativo a la aspiración de separar la Iglesia del Estado y el referente al reconocimiento de las libertades de asociación y de enseñanza.

La calculada táctica de quienes representaban las diferentes tendencias del liberalismo, especialmente en relación con

el pleito de la jefatura, no pudo impedir que, aparte la disidencia de Canalejas, López Domínguez y el duque de Tetuán, se advirtiera en el partido puramente sagastino la aparición del grupo *monterista*, que, con don Eugenio al frente,



Fig. 188.—El Marqués de la Vega de Armijo

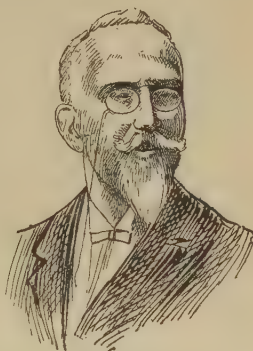


Fig. 189.—Gumersindo de Azcárate

integraban Groizard, Puigcerver, Weyler, Eguilior, Rodríguez, Capdepón y Gullón, y la de la fracción *moretista*, con Vega Armijo, Aguilera, Salvador, Teverga, Almodóvar, Suárez Inclán, Veragua, Auñón y Montilla, como elementos componentes; todo ello, sin apuntar el incipiente *romanonismo*, y el que pudiéramos calificar de sistemático *señorismo* del rectilíneo don Angel Urzáiz.

El Gabinete conservador, que con decisión tan plausible inició la primera etapa de su mando durante el nuevo reinado, halló bien pronto dificultades de todo linaje opuestas a su actuación. De una parte, los elementos silvelistas mal disimulaban su contrariedad por la participación que en el Gobierno se había concedido a Maura; de otra, las austeridades de éste traducidas en la supresión del régimen de clandestinas subvenciones (*fondo de reptiles*) y graciosa otorgación de desistinos con que se venía obteniendo la interesada benevolencia de algunos voceros de la opinión, hizo que se acentuase la crítica que, especialmente en la Prensa periódica, se hacía

contra el Ministro de la Gobernación. A aumentar el ya crecido número de complicaciones vinieron también las reiteradas muestras de disgusto de que dieron testimonio los marinos por la excedencia de siete capitanes del Depósito del Ferrol decretada por el Sr. Sánchez de Toca por causa de las instancias que habían presentado contra el Real Decreto refrendado por este Ministro sobre administración y empleo de los fondos de practica. La destitución del capitán general señor Morgado, a consecuencia del mismo asunto, acreció el descontento que acabamos de apuntar.

El 8 de Febrero murió el Duque de Tetuán, pasando parte de los elementos que le habían seguido a engrosar las filas conservadoras, mientras otra fracción, con Navarro Reverter al frente, continuó manteniendo la sustantividad del grupo. El batallador político, abogado y periodista don Rafael Gasset, despedido por no haber obtenido en el Gobierno conservador la cartera que ambicionaba, aplicóse a realizar una activa campaña en pro de la llamada política hidráulica, celebrando en Ciudad Real un resonante acto público (13 de Febrero). Finalmente, los republicanos, que habían iniciado, en mitin celebrado en Castellón el 5 de Enero (1903), la idea de reconstruir su antiguo partido mediante la unión de todos sus componentes en magna agrupación comprensiva de las múltiples tendencias que le habían dividido, convocaron una Asamblea en Madrid (23 de Marzo), de la que, por aclamación, salió nombrado jefe el elocuente tribuno don Nicolás Salmerón, el cual, en apasionado discurso, dió las gracias a sus correligionarios y se mostró partidario del empleo de la fuerza como medio para sanear y restablecer el derecho corrompido y quebrantado. Incorporóse también al movimiento republicano el ilustre patricio don Joaquín Costa, que en famoso mitin celebrado durante el mes de Abril, en Madrid, pidió que los gobernantes recorrieran con maza de hierro la Península para terminar con caciques y oligarcas, mandándolos a Ceuta hasta que la inundación de chaquetas, levitas y togas criminales rebasase la línea del Rif y acabasen con ellas a tiros las cábilas. Los entusiasmos suscitados por la viva propaganda a que se entregaron los miembros

de la naciente *Unión republicana*, tuvieron un motivo para entibiarse con el espectáculo de enconada discordia a que dieron lugar en Valencia los partidarios de Blasco Ibáñez y de Rodrigo Soriano. La llegada de Salmerón a aquella capital con el fin de poner paz entre los amigos de la víspera y, ahora, furibundos adversarios, no tuvo éxito, por lo que el desacatado don Nicolás se vió en el trance de expulsar del partido al levantisco Soriano.

A pretexto de que los Ministros de la Gobernación, Obras públicas, Guerra y Marina solicitaban aumentos en los presupuestos de sus respectivos Departamentos, dimitió el titular de Hacienda Sr. Fernández Villaverde (23 de Marzo), que justificó su decisión, no sólo en los aumentos aludidos, sino en los que habían de producirse si se llevaban a cabo los proyectos de fortificaciones de nuestras costas y de construcción de una escudra. En sustitución de Fernández Villaverde fué nombrado Ministro de Hacienda Don Faustino Rodríguez San Pedro.

Acordada por el Gobierno la disolución de las Cortes y la fijación del 26 de Abril para la elección de las nuevas, apretáronse las fuerzas políticas a la próxima contienda, de la que fué nota característica la honrada neutralidad observada por el Ministro de la Gobernación Sr. Maura, que puso en práctica al seguir tal conducta sus anteriores predicaciones contra el encasillado oficial y la ilícita presión ejercida por las autoridades para violentar la voluntad del cuerpo electoral. Triunfaron los republicanos en Madrid, Barcelona y Valencia, pero el Gobierno obtuvo 228 puestos en el Congreso. Comparada esta cifra con la de 171 Diputados que sumaban las oposiciones, daba una mayoría ministerial de 57 votos, que juzgó el Gabinete suficiente para poder gobernar.

Como tristes episodios que hubieron de registrarse durante el mes de Abril recordaremos: los motines escolares de Salamanca, provocados por el mal trato de que hizo objeto el Gobernador don Joaquín Velasco a un estudiante, motines que terminaron con la muerte violenta de dos alumnos por la fuerza pública (2 de Abril); la repercusión de aquellos tristes sucesos en Madrid, donde se produjeron algaradas callejeras,

que, al ser reprimidas, ocasionaron una nueva víctima: el muchacho de 19 años Asunción Martín (*el Hospicia*) sacrificado en la esquina de las calles de Lavapiés y del Ave María, y el cruento choque entre la Guardia Civil de Infiesto y los partidarios políticos del candidato derrotado Sr. Uría.

La apasionadísima campaña realizada por una parte de la Prensa contra el Ministro de la Gobernación, siguió sin dar punto de reposo a los hipercríticos de la cosa pública, y no obstante haber tenido repetidos motivos para elogiar en vez de zaherir. Una circular dirigida por aquellos días a los Gobernadores pidiendo que se sobrepusieran al tradicional y funesto concepto por el que se estimaban con patente de inmunidad las Administraciones locales que habían apoyado a candidatos triunfantes, fué un elocuente testimonio de la rectitud del Sr. Maura, y, sin embargo, de ello, se comentó adversamente por quienes eran incapaces de ponerse a la altura moral del que la dictó. La reunión, días antes de abrirse las Cortes, de los elementos integrantes de la mayoría parlamentaria, sirvió para poner de manifiesto el divorcio entre el Sr. Fernández Villaverde, que había de ocupar la Presidencia del Congreso, y su jefe don Francisco Silvela.

Verificóse en el Senado la solemne apertura de la representación nacional, el 10 de Mayo, y en tal acto, el Gobierno puso en labios de S. M. el consabido Mensaje, en el que se anunciaba como obra a realizar: la terminación de las negociaciones con Roma relativas al régimen de los Institutos religiosos; la organización definitiva del Consejo de Estado, pasando la jurisdicción contenciosa al Tribunal Supremo; la reforma de la ley Orgánica en punto a la justicia municipal; una nueva norma de Reclutamiento enderezada a implantar el servicio militar sin redenciones; varios proyectos de reconstitución de la Armada y de las industrias a ella afectas; un Presupuesto con excedente considerable; una reforma profunda de los regímenes provincial y municipal, y disposiciones varias encaminadas a ajustar la enseñanza al principio de libertad consagrado por la Constitución.

Haciendo honor a las promesas formuladas en el discurso de la Corona, el 27 de Mayo leyó el Sr. Maura en el Se-



nado un proyecto de ley sobre Administración local, que su autor calificó de Ley del *descuaje del caciquismo*, anunciando, además, que la no aprobación del mismo supondría la retirada de su autor del Gobierno de que formaba parte.

La discusión del Mensaje en las Cámaras dió margen al acostumbrado torneo oratorio. Los elementos liberales, con Montero Ríos como más caracterizado entre ellos, aprovecharon la solemnidad de tal debate para invitar a la unión de los correligionarios disidentes, y para atacar al Gobierno especialmente en la cuestión de las Asociaciones religiosas y en la relativa a la libertad de enseñanza, en una y otra de las cuales veían las oposiciones testimonios harto cumplidos del clericalismo de los Ministros. Defendiéronse éstos con habilidad y elocuencia, llevando el peso de la discusión los señores Maura y Silvela, y acusándose cada vez más ostensiblemente el influjo que sobre la mayoría ministerial iba adquiriendo el primero de dichos personajes, el que por su destreza dialéctica y avasalladora elocuencia obtuvo por aquellos días resonantes éxitos parlamentarios.

La actitud de intransigencia de Fernández Villaverde respecto del aumento de gastos, sobre todo, de los que habían de imponerse al país si prosperaba el proyecto de construcción de la escuadra, tan insistentemente sostenido por los señores Maura y Sánchez de Toca, aumentó la tirantez de relaciones entre el Presidente del Consejo y el del Congreso de Diputados. Estimulado este último por el grupo de parlamentarios llamado de los conjurados, dirigido por el Sr. Gasset, llevó su mal encubierta oposición al Gobierno a términos que obligaron a Silvela a plantear la crisis total (18 de Julio) y a tomar la resolución de renunciar la jefatura de su partido.

La Corona encargó de formar nueva situación al Sr. Fernández Villaverde, que constituyó (19 de Julio) el Ministerio graciosamente llamado de los *gallegos*, porque casi todas las carteras fueron ocupadas por políticos nacidos en Galicia<sup>1</sup>. El Gabinete venido a la vida en circunstancias que no sin

1. Compusieron este Gabinete: Fernández de Villaverde (Presidencia), Conde de San Bernardo (Estado), Santos Guzmán (Gracia y Justicia), Martitegui (Guerra), González Besada (Hacienda), Cobián (Marina), García Alix (Gobernación), Bugallal (Instrucción pública) y Gasset (Agricultura).

fundamento se calificaron de orientales, extremó los resortes del Poder en las elecciones municipales verificadas en Noviembre. Reanudadas el 21 de Octubre las sesiones de Cortes, dió en éstas Silvela amplias explicaciones de su retirada política, y aludido Maura por Melquiades Alvarez (sesión del



Fig. 190.—D. Antonio Maura

11 de Noviembre de 1903) para que manifestase su opinión acerca de los procedimientos electorales del Gobierno, pronunció un admirable discurso que tuvo la virtud de entusiasmar a la mayoría. La gran masa de los Diputados conservadores tributó a Maura una ovación delirante al abandonar éste el salón de sesiones, siguiéndole hasta el pasillo central de la Cámara. Don Francisco Silvela, que marchaba al lado del ilustre orador balear, cogió del brazo a éste, y empujándole

hacia los que tan frenéticamente le vitoreaban, exclamó: —¡Tomadlo! Ese es vuestro jefe.

La frase de Silvela fué acogida con un aplauso cerrado. El Marqués de la Vega de Armijo, que en aquel momento cruzaba por el pasillo, y que se detuvo para contemplar el hermoso espectáculo, exclamó conmovido:—¡Así se proclaman los jefes!

La exclamación, del anciano prócer liberal nació espontánea de su espíritu, que no podía menos de hallar diferencia entre los democráticos procedimientos utilizados por los conservadores para entronizar su caudillo, y los cabildeos, zancadillas y enconos puestos en juego por los liberales para organizar la Asamblea del partido, que reunida a los pocos días (15 de Noviembre), no logró sumar en pro de ninguno de los dos candidatos a la jefatura las dos terceras partes de sufragios necesarios para alcanzar el triunfo, ya que el señor Montero Ríos obtuvo 210 votos y don Segismundo Moret, 194.

Tras la entusiasta adhesión del sector más numeroso de la mayoría en pro de Maura, la situación de Villaverde se hizo insostenible. Comprendiéndolo así el Presidente del Consejo presentó la dimisión al Monarca (5 de Diciembre), el cual encargó de formar Gobierno a don Antonio Maura.<sup>1</sup>

El 7 de Diciembre se presentó ante las Cortes el nuevo Gabinete, que logró en pocos días aprobar los Presupuestos. Consecuente Maura con el programa que el partido conservador trazara al inaugurar las Cortes, manifestó la decisión de mantener el proyecto de administración local y de presentar en el próximo año el relativo a la escuadra.

La designación del dominico Padre Nozaleda, Arzobispo dimisionario de Manila, para la Sede arzobispal de Valencia (31 de Diciembre de 1903), fué el pretexto de que se valieron los numerosos y heterogéneos elementos hostiles al Sr. Maura para arreciar en la campaña contra éste; pero

<sup>1</sup>. Integróse este Ministerio de los siguientes señores: Maura (Presidencia), Rodríguez San Pedro (Estado), Sánchez de Toca (Gracia y Justicia), Linares (Guerra), Domínguez Pascual (Instrucción pública), Ferrándiz (Marina), Osma (Hacienda), Sánchez Guerra (Gobernación) y Allendesalazar (Agricultura).

tal maniobra produjo como lógico efecto una corriente de simpatía, cada vez más acusada, de los dispersos núcleos de-rechistas hacia quien comenzaba a ser estimado como la más alta personificación de la austeridad en el Poder y de la energía en la defensa del orden.

## 1904

Durante el mes de Abril de 1904 visitó el Monarca la ciudad de Barcelona acompañado del Presidente del Consejo. Un joven, Joaquín Miguel Artal, fanatizado por las ideas disolventes propagadas por los más caracterizados representantes del anarquismo y por algunos personajes del partido republicano, asestó una puñalada al Sr. Maura que, por fortuna, salió con vida del infame atentado. La policía encontró en los bolsillos del criminal un número del periódico de Valencia "El Pueblo", que insertaba un artículo de Blasco Ibáñez llamando a Maura *carne de Angiolillo*. Las extraordinarias condiciones de resistencia del Presidente del Consejo permitiéronle afrontar con éxito el concierto de cuantos elementos, desde los anarquistas hasta los liberales, se habían confabulado en contra suya, contando con el apoyo del *cacicato de publicidad* ejercido por la Prensa. Pero lo que no lograron tantos adversarios reunidos, consiguió producirlo un incidente, que poniendo de manifiesto el alto concepto que de sus prestigios como gobernante tenía el Sr. Maura, le movió a abandonar el Poder. En efecto, creado el Estado Mayor Central y propuesto por el Ministro de la Guerra para ocupar la jefatura de aquel organismo el General Loño, sorprendió al Sr. Linares la negativa del Rey a firmar el correspondiente Decreto y la recomendación, en cambio, del nombre de don Camilo Polavieja para desempeñar el aludido puesto. Enterado de la dificultad Maura, creyó que no debía ceder el Gobierno en tal cuestión, que tan substancialmente afectaba a sus iniciativas, y puso en manos de S. M. la renuncia del Gabinete (14 de Diciembre de 1904).

## 1905

De sucederle se encargó el general Azcárraga<sup>1</sup>, que hizo el nombramiento de Jefe del Estado Mayor Central a favor de Polavieja, y que hubo de abandonar el Poder a los pocos días (27 de Enero de 1905) ocupándolo Fernández Villaverde<sup>2</sup>, durante cuyo Gobierno se organizó el magnífico homenaje a don José Echegaray por habérsele otorgado el premio Nobel (18 y 19 de Marzo); tuvieron lugar las huelgas escolares que obligaron a salir de Instrucción pública al Sr. Cierva; se hundió el tercer depósito del canal de Lozoya, con muerte de cuarenta obreros (8 de Abril) y realizó un viaje a París Don Alfonso XIII, siendo objeto, juntamente con el Presidente de la República Mr. Louvet, de un cobarde atentado anarquista a la salida del Teatro de la Opera.

Falto de la indispensable mayoría parlamentaria Fernández Villaverde, vióse en el trance de hacer dejación del mando, substituyéndole al frente de un Gabinete de significación liberal el Sr. Montero Ríos<sup>3</sup>, circunstancialmente acatado como jefe por los parciales de Moret. El Ministerio liberal disolvió las Cortes y presidió la elección de las nuevas, que se reunieron el 11 de Octubre (1905). La falta de verdadera unidad de miras y el exceso de personalismo produjo, primeramente, una crisis parcial motivada por la dimisión del Ministro de Hacienda Sr. Urzáiz y, al poco tiem-

1. Los elementos componentes del nuevo Gabinete fueron: Azcárraga (Presidencia), Aguilar de Campóo (Estado), Ugarte (Gracia y Justicia), Vadillo (Gobernación), Castellano (Hacienda), Villar y Villate (Guerra), Cierva (Instrucción pública), Cárdenas (Agricultura). Interinamente se encargó de la cartera de Marina, el Presidente del Consejo.

2. Entraron a formar el Gabinete Villaverde: Villa-Urrutia (Estado), González Besada (Gobernación), García Alix (Hacienda), Martitegui (Guerra), Vadillo (Obras públicas), permaneciendo en sus puestos los señores Ugarte, Cierva y Cobián; este último, Ministro de Marina desde el 6 de Enero.

3. Compusieron el Ministerio liberal: Montero Ríos (Presidencia), García Prieto (Gobernación), Sánchez Román (Estado), González de la Peña (Gracia y Justicia), Weyler (Guerra), Villanueva (Marina), Urzáiz (Hacienda), Romanones (Agricultura) y Mellado (Instrucción pública).



po, una reorganización del Ministerio. Tampoco los partidos integrantes de las oposiciones daban muestras de acuerdo: la *Unión republicana* presentábase en liquidación, pues eran muchos los elementos de la misma que se hallaban disconformes con el criterio de su jefe don Nicolás Salmerón; los conservadores, aunque reorganizados bajo la férula de Maura, no lograron que al morir Villaverde (15 de Julio) se incorpo-



Fig. 191.—Monteros Ríos



Fig. 192.—Moret

rara al grueso del partido el grupo disidente, y el catalanismo comenzó a sumar en sus filas gentes de procedencia política harto dispar, pero incorporadas a él como protesta contra los radicalismos desaforados del Sr. Lerroux, a quien, en mal hora, seguía considerándosele por algunos Gobiernos como el representante de la integridad nacional frente a los excesos del separatismo catalán.

En tales circunstancias, la publicación en el periódico barcelonés *Cu-cut* de unas caricaturas ofensivas al Ejército, produjo el asalto de la redacción por un grupo de oficiales (25 de Noviembre) que hicieron también objeto de igual violencia a las oficinas de *La Veu*. Montero Ríos suspendió entonces las garantías constitucionales en Barcelona, pero no hallando una solución satisfactoria al grave problema

planteado, abandonó el Poder que asumió don Segismundo Moret (1.º de Diciembre).<sup>1</sup>

## 1906

Consiguió el nuevo Gobierno que las Cortes aprobasen los Presupuestos (31 de Diciembre), y cumpliendo con los compromisos anteriormente contraídos presentó a las Cámaras un proyecto de ley para reprimir los delitos contra la Patria y el Ejército. Los debates parlamentarios a que dió lugar tal proyecto y la viva oposición que al mismo opusieron los catalanistas dieron lugar a la formación del conglomerado político conocido con el nombre de *solidaridad catalana*, integrada por regionalistas, republicanos, carlistas, liberales y conservadores. Esto no obstante, la iniciativa ministerial vióse convertida en ley el 23 de Marzo de 1906; pero los motivos de complicación en el ya desbarajustado panorama político, vinieron a acrecerse.

El Monarca, que durante el mes de Noviembre del precedente año (1905) había realizado un viaje por algunas Cortes extranjeras, dió oficialmente cuenta al Consejo de Ministros (8 de Febrero de 1906) de su resolución de contraer matrimonio con la Princesa Victoria Eugenia de Battemberg, nieta de la Reina Victoria y sobrina por consiguiente del, a la sazón, Soberano de Inglaterra Eduardo VII. Verificóse el enlace en Madrid el 31 de Mayo (1906), interrumpiendo los espontáneos testimonios del público regocijo el bárbaro atentado contra los egregios desposados llevado a cabo en la calle Mayor por el anarquista Mateo Morral, discípulo de la Escuela Moderna que en Barcelona dirigía Francisco Ferrer Guardia.

1. Integraron el segundo Gabinete liberal: Moret (Presidencia), Duque de Almodóvar del Río (Estado), Romanones (Gobernación), García Prieto (Gracia y Justicia), Luque (Guerra), Concas (Marina), Amós Salvador (Hacienda), Gasset (Fomento) y Santamaría de Paredes (Instrucción pública).



Fig. 193.—Boda del rey Alfonso XIII



Fig. 194.—Los reyes de España Don Alfonso XIII y  
Doña Victoria Eugenia

El pleito de la jefatura liberal seguía inquietando a los prohombres de este partido. Aspiró Moret a resolverlo obteniendo el Decreto de disolución de las Cortes que le permitiera sacar de las urnas una mayoría adicta a su persona; pero aunque velando sus intenciones con el especioso pretexto de aspirar a una reforma constitucional en sentido librecultista, no consiguió realizar sus propósitos por la oposición que a ellos hicieron Canalejas, López Domínguez, el Marqués de la Vega de Armijo y el jefe de la minoría conservadora Sr. Maura. No se amilanó por ello el Presidente del Consejo que, resuelto a todo, solicitó de la Corona la sanción del aludido Decreto (4 de Julio), motivando una serie de regias consultas con los primates liberales, que al mostrar su disconformidad con los designios de Moret, obligaron a éste a presentar la dimisión.

El general López Domínguez, que presidía el Senado, recibió entonces el encargo de formar Ministerio, que constituyó con elementos adictos a su persona, con monteristas y con amigos del Presidente del Congreso Sr. Canalejas.<sup>1</sup> El influjo de éste en la política del Gabinete se patentizó en las limitaciones puestas a la libertad de enseñanza por el titular de Instrucción pública, en la Real Orden del Ministro de Gracia y Justicia Conde de Romanones, permitiendo a los católicos contraer matrimonio civil solamente, y en el radical proyecto de Ley de Asociaciones suscrito por el Ministro de la Gobernación Sr. Dávila. La protesta que suscitó el citado proyecto en el episcopado español y el desacuerdo en que se hallaban respecto al mismo los Sres. Montero Ríos y Moret, produjo como consecuencia el que el último, no obstante dar sus votos al Gobierno para impedir el quebrantamiento de la mayoría, participase al Rey su verdadero criterio opuesto a la marcha del Gabinete, valiéndose para ello de una carta que, privadamente, llevó a Palacio el señor Alba, antiguo villaverdista convertido al liberalismo de

1. Compusieron este Ministerio: López Domínguez (Presidencia), Gullón (Estado), Romanones (Gracia y Justicia), Dávila (Gobernación), Navarro Reverter (Hacienda), García Prieto (Fomento), Gimeno (Instrucción pública) y Alvarado (Marina). El Presidente se reservó la cartera de Guerra que, al poco tiempo, ocupó el general Luque.



Moret desde que, el 17 de Abril de 1906, quedara disuelto el grupo de antiguos amigos del Sr. Fernández Villaverde.

La llamada crisis del *papelito*, por las circunstancias que acabamos de referir, hizo recaer la confianza regia en el señor Moret (29 de Noviembre de 1906), cuyo acceso al mando por tal procedimiento concitó contra él una tan airada protesta de las Cámaras, que le forzó a desistir de su empeño (3 de Diciembre), facilitando la formación de un Gabineté presidido por el Marqués de la Vega de Armijo, llamado casi únicamente a legalizar la situación económica aprobando los Presupuestos. Cuantas gestiones realizó el ilustre prócer liberal para avenir a moretistas, canalejistas y monteristas, resultaron baldías, por lo que, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos en tal sentido, renunció a seguir gobernando (24 de Enero de 1907), viniendo a sucederle el jefe del partido conservador, don Antonio Maura.<sup>1</sup>

## 1907

La etapa de Gobierno del partido liberal-conservador bajo el caudillaje de Maura, se extendió desde el 25 de Enero de 1907 hasta el 21 de Octubre de 1909 y fué una de las más fecundas en disposiciones legislativas de cuantas registra la Historia española en lo que llevamos de siglo. Ello no obstante, la vigorización de los resortes de la disciplina social que el Gobierno de Maura suponía, produjo la hostilidad de cuantos parecían añorar los recientes, contradictorios y accidentados períodos de dominación liberal. Los órganos más populares de la Prensa periódica, *El Imparcial*, *El Heraldo* y *El Liberal*, solidarizados bajo la égida económica de la *Sociedad Editorial de España*; los partidos extremos anarquista, socialista, republicano y demás profesionales de la revuelta, y la masa allegadiza de gentes acostum-

1. Formó el siguiente Ministerio: Maura (Presidencia), Allendesalazar (Estado), Cierva (Gobernación), Marqués de Figueroa (Gracia y Justicia), Osma (Hacienda), González Besada (Fomento), Rodríguez San Pedro (Instrucción pública), Loño (Guerra), Ferrándiz (Marina).

bradas a prosperar a la sombra del claudicante patrocinio oficial, formaron, sin ponerse todavía de expreso acuerdo, un solo frente para combatir sin tregua al Gobierno. Después de unas elecciones que proporcionaron a éste nutrida mayoría, abrió las Cortes el 13 de Mayo de 1907, presentando en ellas, entre otros proyectos, el de Administración local y el de Organizaciones marítimas y armamentos navales. El primero comenzó a discutirse, tan prolijamente, que bien se echaba de ver el comienzo de una obstrucción parlamentaria; el segundo, en cambio, fué aprobado en famosa sesión patriótica (27 de Noviembre) en la que el Presidente del Consejo obtuvo con su acertada intervención la entusiasta aquiescencia de las oposiciones.

## 1908

Mientras las Cortes laboraban sobre los proyectos citados y sobre los de colonización interior, justicia municipal, reforma de la ley electoral especialmente en punto a la obligatoriedad del voto, desgravación de los vinos, emigración, etc., etc., seguía planteado el grave problema del terrorismo en Barcelona. Para poner un límite a los excesos de aquella bárbara serie de atentados que en situación tan deplorable colocaba a la hermosa ciudad y, a fin de enfrenar las demasías de la Prensa radical, a la que, en gran parte, era imputable la indisciplina social que se padecía, el Gobierno presentó un proyecto de ley que, enderezado a castigar con rigor los crímenes terroristas, facultaba además al Poder público para, en circunstancias especiales, suprimir periódicos y extrañar del Reino a los propagandistas de la anarquía. Aunque la iniciativa ministerial mereció la aprobación del Senado (9 de Mayo), no pudo gozar de igual suerte en el Congreso, quedando aplazada su discusión en vista de la apasionadísima campaña emprendida contra él por la Prensa y los prohombres de las fuerzas izquierdistas españolas.

Aquella unión circunstancial de éstas para atacar un pro-

yecto debido al hombre público a quien venían hacía tiempo combatiendo sin mediar expreso concierto, les sugirió la idea de cristalizar definitivamente éste, pues a ningún medio mejor cabía apelar para obtener lo que era común finalidad de



Fig. 195.—D. Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia, reyes de España

todas ellas: la anulación política del Sr. Maura. A tal efecto, constituyóse un *bloque de izquierdas* en el que entraron moretistas, canalejistas y republicanos, que apoyados por el *trust periodístico*, dirigido por don Miguel Moya, se entregaron a una activa propaganda por toda España. La política del *bloque*, consagrada solemnemente en famoso discurso pronunciado por Moret en el Casino liberal de Zaragoza (18 de Noviembre), no desaprovechó ocasión para lograr su ob-

jetivo. Así, habiéndose adjudicado a la importantísima *Sociedad Española de Construcciones navales* la de nuestra escuadra, el teniente auditor de la Armada Sr. Macías del Real, denunció la aludida adjudicación tachándola de irregular e injusta. Bastó este hecho para que las fuerzas del *bloque* y su coadyuvante el *trust*, sin pararse a considerar si las acusaciones tenían o no fundamento, apoyasen al denunciador procurando con el estrépito dar al asunto las mayores proporciones.

### 1909

Sumariado Macías del Real, no probó otra cosa que su afán de notoriedad, y como del expediente no se infería más que la absoluta corrección con que había procedido el Gobierno, hecho éste que noblemente hizo público en el Congreso el ilustre periodista y diputado republicano Sr. Morote, resultó que el mentido artilugio se vino a tierra, que Macías del Real, previo tribunal de honor, fué expulsado del Cuerpo a que pertenecía, y que los exaltados bloquistas quedaron contrariadísimos por el fracaso de su maniobra y hondamente resentidos con su correligionario Sr. Morote, que se vió en el trance de renunciar a su investidura de Diputado y de dimitir el puesto que ocupaba en la redacción del *Heraldo de Madrid*.

Asimismo fué esgrimido contra Maura como argumento el hallarse, según decían sus enemigos, interesado en la *Sociedad del Manzanares o de Santillana*, por aquel entonces comprometida seriamente en vista del impulso dado por el Delegado Regio Sr. Sánchez de Toca a la administración y mejoras materiales del Canal de Isabel II. Maura probó cumplidamente que era incapaz de sacrificar el interés público en aras de la conveniencia de una empresa particular; pero las repercusiones de aquel asunto en el Senado, produjeron una viva discusión entre el Sr. Sol y Ortega y el Presidente del Consejo y, tras de ella, diferentes manifestaciones calle-

geras en Madrid (22 de Marzo)<sup>1</sup> Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, etc., etc., nutridas por quienes aspiraban a sacar de la revuelta la ganancia del pescador.

En tales condiciones el ambiente político, la guerra de Melilla, durante el verano de 1909, vino a complicar la existencia ministerial, dando margen a gravísimos sucesos en la Península que motivaron la dimisión del Gobierno. En efecto, la necesidad imperiosa de castigar la agresión de que los ca-



Fig. 196.—El Príncipe de Asturias y los infantes Doña Beatriz y D. Jaime

bileños hicieron víctimas a los obreros que trabajaban en la línea férrea de las minas españolas (7 de Julio) obligó al general Marina, Gobernador militar de Melilla, a salir de la plaza para adueñarse de las posiciones de Sidi-Hamet, Sidi-Alí y Sidi-Muza, que distaban de aquélla unos ocho kilómetros. Los indígenas aspiraron a reconquistar lo perdido, a cuyo efecto, iniciaron un vigoroso asedio, imponiendo al general Marina el aprovisionamiento de las nuevas posiciones, empeño que resultaba peligroso por tener los

1. Aludiendo a esta manifestación, dice el Conde de Romanones en el tomo II de su obra. *Notas de una vida*: "Maura pudo impedirla, pero hubiera sido una torpeza y una falta de respeto al derecho ciudadano: tranquila su conciencia, poco le importaba que acudiera a la manifestación mayor o menor número".



convoyes que recorrer las faldas del Gurugú, monte desde cuyas estribaciones hacían mortífero fuego los naturales. Para reforzar nuestras huestes en África, que tan sólo ascendían a unos 6,000 hombres, envió el Gobierno, en vez de la



Fig. 197.—D. Fernando Primo de Rivera

división reforzada que organizara meses antes el Ministro de la Guerra general Primo de Rivera (don Fernando), la brigada de cazadores de guarnición en Barcelona (11 de Julio) y la que prestaba sus servicios en Madrid (20 de Julio). Estas órdenes y las dirigidas a que, como era legal, se incorporaran a las fuerzas expedicionarias los reservistas que a ellas estaban adscritos, produjeron profundo malestar en las clases populares, opuestas abiertamente a toda empresa

belicosa. Tampoco era partidario de ella el Gabinete, que vivía ajeno a que las circunstancias le obligaran por honor de España a emprenderla en las condiciones en que lo hizo; pero los imperios de una realidad de la que no podía desentenderse ningún hombre público, le trazaron el camino del penoso deber.

La salida de Barcelona con destino a Africa de la aludida brigada de cazadores, dejando reducida la guarnición de la ciudad a 800 soldados, fué aprovechada por los elementos perturbadores para organizar una huelga general, que degeneró inmediatamente en verdadera revuelta. Los revolucionarios dedicáronse a incendiar iglesias y conventos, acompañando su acción aniquiladora de los más execrables testimonios de vandalismo. Mas de cuarenta y tres edificios fueron destruídos en la que ha pasado a la historia con el título de *Semana trágica*; otras localidades catalanas como Mataró, Sabadell, Manresa, Figueras, Vendrell, Granollers, etc., fueron también escenario de vituperables excesos, y en capitales como Valencia, Bilbao, Murcia, y Gijón, alzóse asimismo la protesta alentada por republicanos y socialistas, que soliviantaban los

ánimos hablando de la injusticia de la guerra, en la que, a su entender, tenían los moros razón, y excitaban a las clases modestas a negar el concurso de sus hijos para una empresa que sólo interesaba a unos cuantos plutócratas mineros<sup>1</sup>.

Mientras se desarrollaban en Barcelona y otras localidades tan lamentables sucesos durante la última decena del mes de Julio (1909), en los alrededores de Melilla libraban nuestros soldados sangrientos combates con los rifeños, sobre todo, en el fatídico *Barranco del Lobo* (27 de Julio), en los que sucumbían jefes militares de tan sólido prestigio como el coronel Alvarez Cabrera, el teniente coronel Ibáñez Marín y el general Pinto. La importancia que de día en día fué adquiriendo la contienda forzó al Gobierno a trasladar a Africa nuevos y más respetables contingentes, que elevaron nuestro efectivo, a mediados de Agosto, a cerca de cuarenta mil hombres, aumentándose hasta cuarenta y cinco mil en el mes de Septiembre. Episodios de la guerra fueron la brillante carga de Taxdir (20 de Septiembre) mandada por el coronel Cavalcanti, y las conquistas de Hidun, Nador, Zelúan, el Gurugú, Tegüel-Manín y Atlatén, desde Septiembre a Noviembre (1909), en las que nuestro heroico Ejército, a las órdenes de los generales Tovar, Sotomayor, Orozco y Arizón, supo hacer honor a su gloriosa historia.

Entretanto, en la Península, después de haber logrado el Gobierno poner coto a la anarquía, comenzaron a funcionar en Barcelona, los consejos de guerra que, con plena justificación, condenaron a ser pasados por las armas a los más significados protagonistas de la revolución (Agosto a Octubre de 1909). Uno de ellos fué Francisco Ferrer Guardia, fundador de la *Escuela Moderna*, centro que, a ciencia y paciencia de las autoridades, venía funcionando hacía años sin otro objetivo que el de formar anarquistas prácticos.

1. "De esta campaña odiosa, dirigida contra el Gobierno, llegaron hasta mí — dice el Conde de Romanones, obra citada, t. II, pág. 236, — algo más que salpicaduras. Una determinada parte de la Prensa, la más exaltada, aquella cuya influencia era mayor entre las gentes menos cultas, repetía a diario que el Presidente del Consejo llevaba a los soldados a morir en los barrancos y peñascales rifeños, sólo para defender los intereses de la compañía minera, de la cual era principal partícipe el Conde de Romanones".

Cumplidamente probada la intervención directa de Ferrer como jefe de la rebelión, fué fusilado el 13 de Octubre. Los partidos radicales españoles puestos en comunicación con los centros anarquistas y socialistas europeos, indujeron a éstos a organizar en París, Londres, Bruselas, Roma, Lisboa y otras capitales, sendas manifestaciones de protesta contra la *inquisitorial España*, en la que—decían—se daba todavía el espectáculo de castigar con la muerte la profesión de determinadas ideas. La participación que Ferrer Guardia tuviera, como tuvo, en los trágicos sucesos de Barcelona, resultaba lo de menos para los protestantes. Lo importante era presentarle como un apóstol, dotado de extraordinaria cultura y de fe arraigadísima en supremo ideal de dignificación humana y, a continuación, ofrecerlo como víctima de tales ideas redentoras, sucumbiendo a manos de la intolerancia hispana. La obcecada pasión política impidió entonces a nuestros partidos avanzados poner un freno a las demasías de sus congéneres extranjeros, a quienes inicialmente estimularan a la protesta. El mito Ferrer, tan manifiestamente probado por hombres como el republicano Salillas, al darnos idea de la vulgar contextura moral del fundador de la *Escuela Moderna*, no logró por el momento contrarrestar el ambiente de hostilidad contra España, ambiente que contribuyeron a formar hombres a quienes por el predicamento científico mundial de que gozaban, parecía serles doblemente exigible no aventurar el menor juicio sin hallarse en la debida posesión de los elementos indispensables para formarlo.

El 14 de Octubre, es decir, al día siguiente del fusilamiento de Ferrer Guardia, se presentó Maura ante las Cortes donde fué combatido furiosamente por las oposiciones, incluso la liberal, que por boca de Moret expresó su intención de negar al Gabinete todos los medios para seguir gobernando. Maura entonces encargó al Presidente del Congreso señor Dato que fuese al domicilio de Moret a fin de conocer si la amenaza formulada se extendía también a los créditos para la guerra del Rif, y, al contestarle afirmativamente don Segismundo, exclamó el Presidente del Consejo de Ministros: *La normalidad constitucional está rota*, y se apresuró

a resignar el Poder (21 de Octubre), ya que sin contar con la cooperación de los liberales, no le quedaba otro expediente que alzarse con la dictadura, y esta solución repugnaba a su espíritu y no había de proponerla jamás.

Un Gabinete presidido por el Sr. Moret, sucedió al liberal conservador de don Antonio Maura<sup>1</sup>. Este ilustre hombre público reunió el 25 de Octubre a sus huestes en el Senado para explicar detalladamente la crisis, y en el memorable discurso que pronunció en tal ocasión, entre otras cosas, dijo:

“Fuimos a las Cortes por creer que ellas eran el remedio, porque, si entre los adversarios los había enconados, pensaba que la probidad y el honor patrio no se habían perdido. Pero en las Cortes no sucedió lo que esperaba, que era levantarse todas las voces para decir una de estas dos cosas: yo estoy con los que infaman, o yo estoy para decir que mi Patria no es una Patria de bandidos”.

Añadió después que si bien algunos afirmaban que la apasionada campaña extranjera pro-Ferrer no iba contra España, sino contra el Gobierno, era indudable que las oposiciones no habían tenido inconveniente en instalar su turbina en las hediondas aguas de aquella charca a fin de hacer su labor. Negado, además, el apoyo del partido liberal, se le presentaba al Gobierno conservador la siguiente disyuntiva: o ponerse a gobernar sin Cortes, por Real Decreto, supliendo la función legislativa y haciendo frente a la cuestión de orden público, en la que se apiñaban revueltos los anarquistas y los socialistas con los ex-Ministros y ex-Presidentes del Consejo, o franquear la función legislativa diciendo: “Bien, venid aquí y os votaremos nosotros lo que vosotros no queréis votarnos, en interés de la Patria y el Ejército”. Maura había optado por la última solución y se hallaba dispuesto a otorgar al Gobierno cuanto afectase directamente al interés público; pero en todo lo demás no podía tener con el Gabinete otra relación que la de una *implacable hostilidad*.

1. Entraron a formar parte de este Ministerio: Moret (Presidencia y Gobernación), Pérez Caballero (Estado), Alvarado (Hacienda), Martínez del Campo (Gracia y Justicia), Luque (Guerra), Concas (Marina), Gasset (Fomento) y Barroso (Instrucción pública).

## 1910

En posesión del Poder el Sr. Moret, aspiró una vez más a conseguir la jefatura de las fuerzas liberales mediante la obtención del Decreto de disolución de Cortes. Las circunstancias en que hubo de formular tal demanda permitieron augurar que en la contienda comicial que se avecinaba, no había, ciertamente, de salir beneficiado, el antiguo partido liberal, sino el allegadizo republicanismo incorporado al *bloque*, elemento de cuya sincera aproximación a la Monarquía había tantos motivos para dudar. En tal sentido fué solicitada la atención de la Corona por calificados representantes del liberalismo, opuestos a la táctica de *ilícitos e impuros acercamientos* con los republicanos. Una manifestación inequívoca de los Comités de Madrid contra la política de Moret, hizo ver a éste que no contaba con la anuencia de la mayoría de sus correligionarios, y sirvió al Monarca de fundamento para negarse a firmar el Decreto de disolución de las Cortes. Planteada la crisis por tal motivo (9 de Febrero de 1910), fué llamado a los Consejos de la Corona el Sr. Canalejas que, con elementos propios, con otros reclutados del monterismo, y con el apoyo del Conde de Romanones, formó Gobierno.<sup>1</sup>

Hombre dotado de extraordinaria capacidad y de gran palabra, procuró Canalejas poner en juego aquélla y ésta para convertirse en caudillo indiscutible de las fuerzas liberales. El Decreto de disolución, que se le otorgó (14 de Abril de 1910), colocó en excelentes condiciones para realizar sus propósitos, pero los compromisos adquiridos con la opinión respecto a la realización del programa de reivindicaciones

1. Integráronlo: Canalejas (Presidencia); García Prieto (Estado), Merino (Gobernación), Cobián (Hacienda), Ruiz Valerino (Gracia y Justicia), Calbetón (Fomento), Romamones (Instrucción pública), Aznar (Guerra) y Arias Miranda (Marina).



izquierdistas, que tantas veces expusiera en público, le marcaban un camino, que procuró hábilmente desviar en el sentido que le aconsejaban sus nuevos deberes como gobernante. A tal efecto, limitóse en punto al problema religioso a publicar una Real Orden permitiendo los signos exteriores del culto en las capillas protestantes y, abiertas las Cortes (9 de Junio), presentó en ellas el famoso proyecto de *Ley del Candado*, por el cual se impedía el establecimiento de nuevas Ordenes religiosas, hasta que se aprobara una ley de Asociaciones, o transcurrieran dos años sin presentarla a las Cámaras. La iniciativa de Canalejas en dicho respecto produjo la ruptura de las negociaciones que seguíamos con Roma y dió margen a que los elementos católicos organizaran actos de protesta contra el Gobierno. Canalejas obtuvo, después de no pocos esfuerzos, que Senado y Congreso aprobasen la discutidísima *Ley del Candado* (4 de Noviembre y 23 de Diciembre, respectivamente) y asistió, más que como protagonista como testigo, al furibundo debate parlamentario que la *Conjunción republicano-socialista* (formada el 8 de Noviembre de 1909) sostuvo contra los señores Maura y Cierva, a quienes a todo trance quería inhabilitar para ocupar el Poder.



Fig. 198.— Canalejas

## 1911

Entrado el año de 1911, planteáronse, en Enero y Junio del mismo, sendas crisis políticas, casi en puridad brindadas a satisfacer las aspiraciones de los diferentes núcleos

liberales que servían de base a la situación; y durante los meses de Agosto a Octubre, se realizaron en Marruecos las operaciones sobre el río Kert que costaron, entre otras sensibles bajas la del Jefe de la división de Melilla, general Ordoñez.

En las Cortes presentó el Gobierno el anunciado proyecto sobre Asociaciones y el de supresión del impuesto de consumos. Este fué convertido en Ley (31 de Mayo) sin que, por cierto, se advirtieran en el precio de los artículos de primera necesidad los efectos de la cacareada iniciativa ministerial.

Mientras, llegado el vérono, aplicábase el Gabinete a imprimir actividad a las operaciones de nuestro Ejército en Marruecos, la cuestión social, unida a las protestas que suscitaba la guerra de Africa, produjeron huelgas de consideración en Bilbao, Zaragoza y Barcelona, una insubordinación de doce marineros de la *Numancia* (5 de Agosto), y los gravísimos sucesos revolucionarios de Cullera, donde algunos centenares de obreros asesinaron villanamente al Juez de Sueca Sr. López Rueda y al oficial y al alguacil que le acompañaban. Aunque el Gobierno no pudo aconsejar el indulto del más gravemente comprometido en la insubordinación a bordo de la *Numancia*, individuo que fué fusilado, puso, en cambio, especial empeño en que se concediera a los siete sentenciados a pena capital, como autores de los asesinatos de Cullera, lográndolo al cabo mediante una piadosa habilidad del Presidente del Consejo de Ministros.

## 1912

El 19 de Enero de 1912 se promulgó la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, por la que se suprimía la redención a metálico para el servicio de guarnición en tiempo de paz, bien es verdad que reduciendo la permanencia en filas de los reclutas que abonasen determinadas cuotas. Pasados algunos meses, en el de Octubre del mismo año, presentó el Gobierno en el Congreso el proyecto de Ley de Man-

comunidades, que venía a satisfacer algunas de las aspiraciones del regionalismo catalán. Los primates del liberalismo mostráronse desacordes en punto a la oportunidad y orientación del proyecto, votando contra él en el Congreso los señores Moret y Gasset, y anunciando el Sr. Montero Ríos la dimisión de la Presidencia del Senado en cuanto pasase a conocimiento de esta Cámara.

La constante agitación de los elementos socialistas patentizada en las frecuentes huelgas que venían conturbando la vida nacional hacía años, tuvo el 25 de Septiembre de 1912 como gravísima expresión la organizada por los ferroviarios de la Sección catalana, rápidamente secundada por los de toda España. En presencia del conflicto, dictó el Gobierno la Real Orden de 4 de Octubre llamando a filas a los obreros y empleados ferroviarios de los reemplazos de 1901 a 1906, los cuales, al quedar convertidos en soldados, tuvieron que prestar servicio, con lo que hubo de fracasar el peligroso movimiento obrerista.

La política enérgica de Canalejas, creóle entre los elementos libertarios, deseosos siempre de hallar en las debilidades del Poder margen para la impunidad, ocultos enemigos. Uno de ellos, el anarquista Manuel Pardiña, confabulado con otros de su ralea, vino desde Burdeos a Madrid, y en la mañana del 12 de Noviembre, aprovechando la circunstancia de haberse detenido el Sr. Canalejas a examinar el escaparate de la librería de San Martín, en la Puerta del Sol, hizo dos disparos contra el Presidente del Consejo, que le produjeron la muerte instantánea, suicidándose acto seguido el criminal.

Nombrado interinamente Jefe del Gobierno el Sr. García Prieto, dejó a los pocos días (15 de Noviembre) este puesto al Conde de Romanones, que con el apoyo del Sr. Moret se dispuso a gobernar, legalizando la situación económica y presentando a la aprobación de las Cortes el *Convenio hispano-francés*, firmado el 27 de Noviembre de 1912. Constituía tal estipulación el término de una premiosa y complicada gestación diplomática que tuvo como momentos más característicos: el *Convenio franco-español* de 3 de Octubre de 1904; el *Acta de Algeciras* de 7 de Abril de 1906; el *Tratado hispa-*



Fig. 199.—Muley - Hafid, sultán de Marruecos

*no-marroquí*, de 12 de Enero de 1911, y el *Acuerdo franco-alemán*, de 4 de Noviembre del citado último año, que selló el Protectorado francés en Marruecos. Por el Convenio de 27

de Noviembre de 1912, quedó el Imperio marroquí dividido en tres zonas de influencia: una extensísima (572.000 kilómetros cuadrados) atribuida a Francia; otra, menor (28.000 kilómetros cuadrados) sometida a España, y, por último, una tercera, reducida a Tánger y su comarca (600 kilómetros cuadrados), que quedaba internacionalizada bajo la autoridad de



Fig. 200.—Firma del tratado de paz con Marruecos (1910)

las potencias signatarias del *Acta de Algeciras*, y cuyo régimen definitivo había de determinarse ulteriormente.

La solución dada a la crisis planteada por la muerte de Canalejas disgustó profundamente a don Antonio Maura moviéndole a renunciar el cargo de Diputado y la dirección del partido liberal conservador. A juicio del ilustre balear, liberales y demócratas habíanse habituado a influir en las decisiones de la Corona con inminencias coactivas, si no con disturbios, prevaleciéndose del cuidado por ella puesto en no irritar a las facciones de la extrema izquierda. El asalto combinado que determinó el cambio político en Octubre de 1909, fué una lógica etapa y término natural del sistema de promiscuidades corruptoras entre monárquicos y republicanos, gobernantes y facciosos. Por otra parte, estos últimos no resultaban ni siquiera atraídos por tal procedimiento, ya que ni llegaba a



lograrse que se abstuvieran de proclamar el delito como programa. Obteníase, en cambio, como efecto una vasta confabulación contra el partido conservador, que siempre se veía convertido en blanco de desaforadoras hostilidades y entorpecido en su obra de gobierno, sin que tan vituperable maniobra tuviera la compensación de permitir crear enfrente un partido liberal, pues cada vez aparecía éste en mayor desconcierto y disgregación. En su consecuencia, las fuerzas conservadoras acaudilladas por Maura no podían dentro de tal sistema funcionar como oposición de S. M., ni turnar en el gobierno ni compartir responsabilidades. Si la Corona juzgaba innecesaria o inconveniente la rectificación, el Ministerio de Romanones, u otro que se constituyese con elementos análogos, debía perdurar hasta que se formase otro partido, diferente del conservador e *idóneo* para turnar con aquél.

## 1913

Los precedentes conceptos contenidos en Nota redactada por el Sr. Maura el 31 de Diciembre de 1912, causaron, al hacerse públicos, hondo efecto en la opinión y extraordinario revuelo en el mundo político. El Sr. Cierva y 16 Diputados más renunciaron sus actas; los ex-Ministros conservadores reuniéronse (2 de Enero de 1913) acordando mostrar su absoluta y total identificación con el Sr. Maura y convocar a las minorías parlamentarias para que se sumasen a tal manifestación, y los elementos republicanos y socialistas celebraron en la Casa del Pueblo clamoroso mitín para felicitarse de la resolución tomada por el jefe conservador, y elogiar al Monarca por su virilidad frente a la coacción que representaba para la Corona la Nota de don Antonio Maura. Sobre este aspecto de la cuestión insistió elocuentemente el Diputado don Melquiades Alvarez que, a su modo, historió las violencias de que había hecho objeto Maura al Soberano, y para demostrar, sin duda, el grado de sinceridad con que abogaba por el libérrimo uso de las regias prerrogativas, terminó diciendo:

“Pero si la majestad de la Corona se dejara arrollar por la coacción indigna, que en un acto de incalificable soberbia pretende imponer el Sr. Maura; si tal sucediera, repito, el pueblo, en un supremo movimiento de dignidad, se alzaría imponente y justiciero, para recoger del suelo los atributos mayestáticos y elevarlos, purificados por el roce de sus manos, dignas de hombres libres y justos, colocándolos en el seno del pueblo mismo, que es, en definitiva, el único verdadero soberano”.



Fig. 201.—Marcelo de Azcárraga



Fig. 202.—Alejandro Pidal

El día 8 de Enero se reunieron las minorías conservadoras en el Senado y, previas unas palabras del general Azcárraga, leyó don Alejandro Pidal expresiva carta dirigida al Sr. Maura, reiterándole la entusiasta adhesión del partido e invitándole a retirar la renuncia del cargo de Diputado. Noventa y un Senadores y noventa y cuatro Diputados asistieron a la memorable reunión, que terminó con entusiastas vivas al Rey y al Jefe del partido conservador. Ante la cordialísima y unánime solicitud de sus correligionarios, accedió Maura a reintegrarse a la vida pública, bien que manifestando que el asunto substancial quedaba tal y como había sido expuesto en la Nota de 31 de Diciembre.

Tal decisión produjo extraordinaria contrariedad en la

*Conjunción republicano-socialista*, y el Gobierno, por su parte, quiso acentuar el criterio opuesto al del caudillo conservador en punto a la *colaboración sórdida y premiosa* de liberales, republicanos y socialistas, llevando a Palacio a los señores Azcárate, Cossío y Ramón y Cajal, que fueron recibidos amablemente por el Monarca. Mientras el Conde de Romanones acudía a tales expedientes para testimoniar su resolución de estrechar más y más los vínculos entre el Gabinete y las izquierdas antidinásticas, secretamente pactaba con Roma acordando con ella que durante el período de dos años no podría fundarse en España ningún Establecimiento religioso sin previa autorización del Vaticano, y prometiendo el Gobierno liberal no tomar ninguna medida en asuntos mixtos y concordatarios, cual el de las Ordenes religiosas, sin contar con Roma.<sup>1</sup>

El 28 de Enero falleció don Segismundo Moret. El 11 de Febrero se reunieron en fraternal banquete los elementos reformistas para que su jefe Sr. Alvarez pudiera hacer público el propósito de acortar la distancia que le separaba de la Monarquía. El 19 del citado mes de Febrero el general Alfau ocupó la ciudad de Tetuán.

La cada vez más patente división entre derechas e izquierdas españolas vino a acentuarla el anuncio de los designios atribuidos al Gobierno, en orden a la enseñanza del Catecismo en las escuelas. Con indudable exageración anunciaron los elementos derechistas que se trataba de suprimir en éstas la enseñanza de la religión católica, realizando para evitarlo actos de protesta que las propias autoridades eclesiásticas tuvieron que paliar unas veces y prohibir otras. A la postre, quedó todo reducido al Real Decreto de 11 de Abril de 1913, que en su artículo 1.º continuaba manteniendo como obligatoria la enseñanza de la Doctrina y la Historia Sagrada, exceptuando por el 2.º de recibirla a los hijos de padres que así lo desea-

1. En el tomo II, págs. 176 a 181 de *Notas de una vida*, recientemente publicado, como hemos dicho, por el Conde de Romanones, se muestra éste de acuerdo con las ideas de Clemenceau acerca de la conveniencia de hacer compatibles las reformas del más acentuado liberalismo con el mantenimiento de las relaciones con Roma. Y ello, no por respeto y adhesión al Pontífice, sino como único medio de impedir la coexistencia del Poder temporal con otro puramente espiritual en estado de divorcio.

ren por profesar religión distinta de la católica. Ni que decir tiene que las izquierdas estimaron minúscula la concesión, mientras los elementos más exaltados de las derechas siguieron creyendo que la iniciativa ministerial merecía la más violenta repulsa.

El 13 de Abril, al regresar a Palacio S. M. después de haber asistido a la jura de la bandera en la Castellana, fué objeto de un atentado del que resultó autor el anarquista Sancho Alegre que, en la calle de Alcalá, hizo dos disparos de revólver contra el Monarca.

El día 6 de Mayo partió Don Alfonso con dirección a París, adonde llegó el 7, siendo recibido con entusiasmo, no obstante los trabajos realizados por las entidades libertarias para hacer fracasar la noble acogida dispensada a S. M. por el pueblo francés.

Próxima la apertura de las Cortes, aspiró el Conde de Romanones a que ocupara la Presidencia del Congreso el señor Azcárate, que se negó a aceptarla. Solventada esta cuestión por haber sido designado para tan alto puesto don Miguel Villanueva, cubierta la vacante de Fomento por el Sr. Gasset y aceptada la dimisión del titular de Gracia y Justicia Sr. Barroso que se estimaba incompatible con el nuevo Ministro de Fomento, verificóse el 26 de Mayo la reapertura de las Cámaras. En la popular habló Maura justificando su resolución de no compartir las responsabilidades turnando en el Poder con los liberales, que, desde 1909, se habían juntado con republicanos y socialistas para hacer la apología de los crímenes de la *Semana sangrienta* y la impunidad de los delitos. La admirable oración parlamentaria de Maura movió al Conde de Romanones a plantear la cuestión de confianza (30 de Mayo), que quedó resuelta, previas las usuales consultas, siguiendo al frente del Gobierno el citado prohombre liberal. Proseguido el debate político en el Congreso con la intervención, entre otros, de los Sres. Lerroux, Alba y Cambó, y planteado en la Cámara Alta el debate sobre el proyecto de Ley de Mancomunidades, proyecto que en vida de Canalejas había combatido el Conde de Romanones, y que ahora, desde el Gobierno, patrocinaba, prodújose un rompimiento definitivo

entre el Presidente del Senado, Sr. Montero Ríos, nada afecto a la Mancomunidad, y el del Gobierno, separándose de las fuerzas liberales dirigentes el grupo monterista.

La nueva, crisis producida por tal disidencia quedó solucionada el día 13 de Junio siguiendo al frente del Gabinete el Conde de Romanones. Por su parte, la Conjunción republicano-socialista, no conforme con la actitud política de aproximación a la Monarquía de don Melquiades Alvarez, acordó la separación de éste. Como consecuencia de tal determinación, se constituyó el partido reformista en minoría independiente bajo el caudillaje de don Gumersindo Azcárate.

El Gobierno suspendió las sesiones de Cortes, produciendo la medida verdadero asombro en las minorías parlamentarias. El grupo de liberales disidentes con Montero Ríos a la cabeza, redactó un manifiesto (Junio de 1913) mostrando su disconformidad con la aludida suspensión. Firmaban el documento 56 Senadores y 70 Diputados. Escindido el partido liberal, no pudo prolongarse mucho tiempo la permanencia del Conde de Romanones en el Poder. A acortarla contribuyeron, además, otras circunstancias, tales como el mal aspecto de la guerra de Marruecos, donde, especialmente por la parte de Tetuán, menudeaban los combates con la inevitable serie de tristísimas bajas,

las frecuentes huelgas obreristas, y la indignación de las oposiciones parlamentarias, resueltas a que el Gabinete no dejara de purgar su falta de respeto a las Cortes.



Fig. 203.—General Marina

Aunque el Conde Romanones pugnó por salir airoso de tal cúmulo de dificultades; aunque la sustitución en la Alta Comisaría de Marruecos del general Alfau por su colega el general Marina (Agosto de 1913), permitió al Gobierno solicitar del país un crédito de paciencia a fin de llevar a la práctica el nuevo plan de pacificación



de la zona española en el Norte de Africa; aunque la llegada a Madrid del Presidente de la República francesa Mr. Poincaré (7 de Octubre) y los interesantes acuerdos de Cartagena, dieron margen a la esperanza de una leal colaboración militar de Francia y España en Marruecos que viniera a dar solución definitiva a la pesada carga que nos estaba impuesta, la reanudación de las sesiones de Cortes el 25 de Octubre y el planteamiento en el Senado del pleito que se ventilaba entre los liberales, motivó una votación adversa al Gobierno, el cual se apresuró a dimitir.

Llamados a consulta el día 26 los Sres. Villanueva y García Prieto, e interrogado telegráficamente el Sr. Montero Ríos, manifestaron su opinión favorable a la continuación de los liberales en el Poder. De los demás prohombres consultados por la Corona, el Conde de Romanones se mostró poco propicio a la solución apuntada, don Eduardo Dato expresóse en el sentido de que, de no ser posible una solución liberal, debían ser llamados a gobernar los conservadores, y el Sr. Maura hubo de manifestar que los gobernantes que durante los últimos años habían negociado el tratado con Francia (el de 1912), empeorando la cuestión de Tánger e implantando a su manera el protectorado en la zona española de Marruecos, tenían obligación estrecha de no transferir a otra situación política el desenlace inminente de la campaña militar, que era obra suya; y que, por otra parte, la aceptación del Poder por los conservadores en tales circunstancias no había de suponer sino una nueva ficción, pues disimulados los estragos de la gestión liberal por una eventual reyerta intestina, pero perseverando en su peculiar política, en plazo más o menos largo volverían al antiguo asalto, dando a la situación conservadora el carácter de mero puente que les permitiera enlazar los dos períodos de su mando, señalados por iguales máculas e idénticas corruptelas.

La discrepancia de criterio entre el jefe del partido conservador y el Sr. Dato en punto a la oportunidad de aceptar el mando, fué resuelta por la Corona encargando de formar gobierno al segundo de los citados hombres públicos, que con la anuencia de los señores Sánchez Guerra, Bugallal, Berga-

mín, Lema y otros significados personajes, formó el Gabinete de 27 de Octubre de 1913<sup>1</sup>.

Lo ocurrido no fué, en puridad, más que efecto de la constante pugna que en los individuos como en las colectividades han librado la consecuencia en las ideas y los estímulos del interés. Maura creyó que el partido que acaudillaba sabría sacrificar éstos a aquélla, pero se equivocó totalmente. Los disidentes del verdadero credo conservador, procuraron justificar la conducta invocando las obligaciones que les estaban impuestas con la Patria y el Rey, a quienes no era lícito dejar abandonados; pero es indudable que más hubieran contribuido a servirlos dando un alto ejemplo de rigor moral, que no entrando en la rotación del mando con elementos que, por punibles condescendencias, menoscababan la autoridad del Poder público.

Una activa propaganda iniciada por don Angel Ossorio y Gallardo en Zaragoza el 28 de Octubre, dió vida a nueva agrupación política, la maurista, que exaltando los merecimientos de su jefe y dando a los vientos de la publicidad los verdaderos motivos que habían aconsejado al Sr. Dato a formar situación, dividió profundamente las huestes conservadoras en *idóneas* y *mauristas*. Mientras éstas intensificaban su campaña, manifestaba Maura el propósito de abstenerse de combatir al Gobierno y de considerar terminada la jefatura que hasta entonces ejerciera sobre el partido conservador.

El día 9 de Noviembre se verificaron las elecciones municipales en medio de la mayor indiferencia, y durante el resto del mes siguieron los combates en Marruecos y comenzó a ser objeto de público comentario la gestión realizada por los ricos negociantes y mineros alemanes hermanos Mannesmann para lograr la paz con los cabileños, mediante algunas concesiones de nuestro Gobierno. Este desmintió los rumores circulados sobre tal asunto y dió una nota (12 de Diciembre) relativa a la política de atracción que se proponía seguir en Africa, sin perjuicio de mantener las posiciones ocupadas y

1. Entraron a formar el Ministerio: Dato (Presidencia), Lema (Estado), Vadillo (Gracia y Justicia), Sánchez Guerra (Gobernación), Bugallal (Hacienda), Echagüe (Guerra), Miranda (Marina), Ugarte (Fomento) y Bergamín (Instrucción pública).

las que se pudieran ocupar para dar mayores seguridades a nuestro Protectorado.

El 18 de Diciembre y sin otro aparato que el de un sencillo Real Decreto se concedió a las Diputaciones provinciales el derecho de mancomunarse. Cuando se recuerda la obstinada oposición que se hizo en el Parlamento al proyecto de Administración local del Sr. Maura, y el respeto por éste tributado a las Cortes, de las que no quiso prescindir nunca al tratar de la proyectada organización localista española, no puede menos de quedar absorto el espíritu al establecer comparaciones y, sobre todo, al considerar que todavía se llenaban la boca reformistas y republicanos hablando de los pruritos dictatoriales de don Antonio Maura.

Al finalizar el año, la familia liberal continuaba dividida; los elementos reformistas, cada vez más dispuestos a hacerse dinásticos si se les daban seguridades de heredar el Poder a la caída de los conservadores; los radicales, en buena relación con el Sr. Dato; éste y los suyos, con esperanzas ciertas de obtener el Decreto de disolución, y, frente a todo ello, la guerra de Marruecos causando bajas y el Presupuesto de 1913 realmente liquidado con un déficit de más de 34 millones de pesetas.

## 1914

El 2, de Enero de 1914 fueron disueltas las Cortes, y el 9 se celebró en Barcelona la *Asamblea de la Mancomunidad*, integrada por 77 representantes de las provincias catalanas. El "Diario Oficial del Ministerio de la Guerra" insertó el día 14 una Real Orden por la cual se autorizaba a los jefes y oficiales del Ejército que recibieran testimonios de consideración particular del Soberano, para responder a éste directamente, sin intervención de persona alguna. Tal disposición fué comentadísima y tachada por algunos de inconstitucional.

En el palenque político, a la activa propaganda de los mauristas, respondió la juventud conservadora organizando algu-

nos actos. En el celebrado el 23 de Enero para festejar el Santo del Rey, el Ministro de la Gobernación don José Sánchez Guerra, persona que hasta la crisis última había vivido en íntima relación de amistad con el Sr. Maura, pronunció un discurso en el que refiriéndose, sin duda, a la relaciones de su antiguo jefe con el Soberano, dijo: "El Rey es español, y le sucede lo que decía Calderón de los soldados de los Tercios, en la comedia titulada *La rendición de Breda*:

"Todo lo sufren en cualquier asalto,  
sólo no sufren que les hablen alto"

¡Y eso no lo sufre ni lo sufrirá el Rey de España!"

El 8 de Marzo se celebraron las elecciones de Diputados a Cortes. Ministeriales y romanonistas presentaron en Madrid una sola candidatura de coalición monárquica, sin admitir en ella a los demócratas, los que, en vista de ello, se dispusieron, lo mismo que los mauristas, a luchar separadamente en pro de sus respectivos candidatos, poniendo por tal causa en riesgo la candidatura oficial que, en efecto, sólo pudo sacar triunfante a los señores Conde de Santa Engracia y Alesanco, mientras los republicanos obtenían cinco puestos, y la agrupación católica llamada Defensa social, uno. Aunque derrotados los mauristas, consiguieron votación brillantísima. En Barcelona lograron la victoria los regionalistas, que sacaron cinco candidatos triunfantes, y la coalición radical nacionalista, que solamente logró dos puestos. El ex-Diputado Sr. Lerroux, no obstante haberse aliado con sus antiguos y enconados adversarios los nacionalistas, fué derrotado.

Las elecciones constituyeron un verdadero retablo de lástimas, pues el Gobierno hizo derroche de cuantos medios tuvo a su alcance para violentar el cuerpo electoral. En Cuenca no hubo siquiera proclamación de candidatos, ya que excitados con harto fundamento sus habitantes por la postergación tradicional de que venían siendo objeto por parte de los Gobiernos, y heridos recientemente sus intereses por el sesgo dado al proyecto de construcción del ferrocarril directo a Valencia, constituyeron una Junta, que tomó la resolución

de defender a toda costa su legítimo derecho a recibir trato menos depresivo del que hasta entonces se diera a tan sufrienda y abnegada provincia. En Benagalbón (Málaga), los republicanos, para evitar que les fuese arrebatado el triunfo conseguido en un colegio electoral, hicieron armas contra la Guardia civil, dando muerte a un guardia o hiriendo gravemente a otros dos. En León, un delegado del Gobernador, enviado a Padrosa, dió muerte a un elector e hirió a otro. En suma: por acción o por omisión dió margen la autoridad a violencias sin cuento, que la Prensa criticó con la debida severidad. Aun así y todo, la mayoría ministerial en el Congreso hubo de resultar harto escasa (alrededor de 200 votos); los liberales sumaron 82 puestos; los demócratas, 28; los republicanos, 19; los reformistas, 11; y los regionalistas, 12.

Durante el citado mes de Marzo vino a Madrid el Residente de Francia en Marruecos general Liautey, que conferenció con el Gobierno y el general Marina sobre los medios de lograr el más eficaz cumplimiento de la misión civilizadora asignada a España y Francia en Africa. En relación con nuestra política de Marruecos, pronunció don Gabriel Maura Gamazo una interesante conferencia en el Centro Maurista de Madrid. Algunas de las apreciaciones del joven e ilustre conferenciante fueron recogidas por el general Burguete, que, en vehemente e injustificado artículo, salió a la defensa del Ejército que, en verdad, no había sido ofendido por el Conde de la Mortera.

El 2 de Abril verificóse en el Senado la apertura de las Cortes. Elegido Presidente de la Cámara popular don Augusto González Besada y del Senado el general Azcárraga, discutióse en ambos Cuerpos colegisladores el Mensaje, girando especialmente el debate sobre la crisis de Octubre de 1913 y la actitud del Sr. Maura. También fué objeto de prolija discusión la política practicada por los Gobiernos en Marruecos. Frente al criterio abandonista propugnado por socialistas y republicanos, los hombres representativos de los partidos dinásticos, con Maura a la cabeza, coincidían en la necesidad de no imponer el Protectorado por medio de las armas, sino mediante una acción civil pacificadora. Pero, no



obstante tales opiniones, era lo cierto que, sin poder precisar las causas, la guerra continuaba y el avance de nuestros soldados, a veces por territorios pacíficos, que en la ocupación misma hallaban estímulos para el alzamiento, iba extendiendo la acción belicosa obligándonos a aumentar con el número de soldados el importe de los gastos de Guerra, Guardia civil y Marina, que si en 1908 ascendieron a 615.000 pesetas diarias, en 1913 arrojaron la cifra de 1.149.000 pesetas en igual unidad de tiempo. Para explicar fenómeno de tal singularidad se habló en el curso del debate del poder personal y de las oligarquías militares. Los hechos que historiamos están todavía muy recientes para poder ser apreciados en su justo valor.

El 28 de Junio comunicó el telégrafo la triste noticia de haber sido asesinado en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) el archiduque heredero de Austria, Francisco Fernando. El 29, nuevos combates sostenidos en el territorio de la comandancia de Ceuta originaron sensibles bajas en nuestras filas. El día 10 de Julio fueron clausuradas las Cortes y el 11 publicó la *Gaceta* la Ley aboliendo la redención a metálico en el servicio de la Armada.

Mientras la vida pública española se desenvolvía sin otra nota de relieve que la activísima propaganda de las agrupaciones mauristas en diferentes capitales, y mientras en Marruecos continuaba ocasionando la lucha que allí sosteníamos dolorosas pérdidas en hombres y en dinero, el referido asesinato del archiduque Francisco Fernando produjo la guerra entre Austria y Servia (28 de Julio) por estimar la primera que en territorio servio se había fraguado el complot contra el heredero austriaco. Nuestro Gobierno se apresuró a declarar la neutralidad de España (30 de Julio) ante la contienda, contienda que, agravada por la intervención de Rusia y Francia a favor de Servia, y de Alemania en pro de Austria, produjo la formidable guerra europea, complicada inmediatamente por la invasión alemana en Bélgica y por la intervención de Inglaterra a favor de los belgas..

La gravedad de las circunstancias movió al Gabinete español a tranquilizar al país haciendo público que ningún pac-

to internacional obligaba a España a intervenir en la lucha a favor de Inglaterra y Francia, con las que sólo nos hallábamos ligados por cordial inteligencia respecto a Marruecos. Una manifestación contraria al criterio de la neutralidad, sustentada en artículo periodístico publicado en el *Diario Universal*, órgano del Conde de Romanones, causó pésimo efecto en la Nación. Con idéntico desagrado fueron recibidas las tendenciosas opiniones emitidas por los Sres. Cambó y Lerroux. Este, sobre todo, al reiterar en París su parecer en pro de la participación de España en la contienda europea uniéndose a Francia e Inglaterra, motivó una violenta reacción de los neutralistas, que en Madrid, Barcelona, Irún y otras poblaciones, clamorosamente exteriorizaron su indignación contra el orador radical y sus correligionarios. Uno y otros protestaron ante el Gobierno de aquellas manifestaciones de hostilidad, pero, realmente, no tenían mucha autoridad moral para mostrarse quejosos de que la multitud apelase a los mismos procedimientos que, con menor motivo, habían ellos tantas veces puesto en práctica.

El 20 de Agosto entregó su alma a Dios el Papa Pío X, eligiendo a los pocos días el Cónclave como nuevo Pontífice al Cardenal Giacomo Della Chiesa, que tomó el nombre de Benedicto XV. Entrado el mes de Septiembre, interrumpióse el poderoso avance de los alemanes por territorio francés como consecuencia de la llamada batalla del Marne, comenzada el 5 de dicho mes, iniciándose la retirada germana. La repercusión que en la vida económica española ocasionó la guerra europea, movió al Gobierno a instituir una *Junta de iniciativas* llamada a auxiliar la acción del Poder público en relación con cuestiones que de modo tan esencial afectaban a la vida del país. La complejidad de las mismas produjo, a pesar de la buena intención de los elementos directores, medidas contradictorias y rectificaciones perturbadoras, como la adoptada con la importación de trigos y carbones, que exenta primeramente de derechos arancelarios, volvió al poco tiempo a ser agravada por ellos.

El 30 de Octubre se verificó la reapertura de las Cortes. En ellas se trató del tema de la neutralidad pronunciándose

a su favor el Gobierno y casi todas las minorías, ya que únicamente la radical, representada por Lerroux, se manifestó deliberadamente poco clara al definir su actitud. Discutiéronse formulariamente los Presupuestos, y con gran calor el proyecto de concesión de zonas francas o neutrales, solicitadas por los representantes de Cataluña; se planteó una crisis parcial producida por la dimisión del Ministro de Instrucción pública Sr. Bergamín, a consecuencia de un incidente parlamentario con el Conde de Romanones, y se suspendieron las sesiones de las Cámaras el 22 de Diciembre, para reanudarlas el 15 de Enero de 1915.

## 1915

Provistas las carteras de Gracia y Justicia e Instrucción pública en los Sres. Burgos y Mazo y Conde de Esteban Collantes, y recomenzada la labor parlamentaria, fué objeto de animadísimo debate, iniciado elocuentemente por el ilustre hombre público don César Silió, la prohibición por parte del Gobierno de una Asamblea de Diputaciones que había de celebrarse en Valladolid para tratar del proyecto de zonas neutrales. De la discusión sobre tal asunto, salió malparado el Ministro de la Gobernación señor Sánchez Guerra, y notoriamente distanciado del Gobierno don Juan de la Cierva, que pronunció un discurso de sãñuda oposición. Asimismo hubo de ser objeto de minuciosa discusión en ambas Cámaras el proyecto de Bases navales, que aprobó al fin el Congreso el 4 de Febrero, y el Senado el 11 del mismo mes.

A pretexto de agradecer al Gobierno belga la demolición del monumento hacía años elevado en Bruselas al anarquista Ferrer Guardia, aspiraron los elementos que simpatizaban con las naciones aliadas, a testimoniar sus predilecciones, por medio de actos públicos que habían de celebrarse en Madrid y Barcelona. El Ministro de la Gobernación, con buen acuerdo, las prohibió por estimar que eran opuestos a los deberes de la neutralidad, pero fué por ello combatido violentamente

en las Cortes. En relación con el tristemente famoso monumento, celebró por los días a que nos referimos una entrevista con el político belga M. Cooreman el periodista Gómez Carrillo, manifestándole el primero que, cuando se trató de erigir el aludido monumento, nadie absolutamente sabía en Bélgica quién era Ferrer; que al pronunciarse por tal erección el Municipio de Bruselas, estaba constituido en su mayoría por socialistas y anticlericales, y que tenía el convencimiento de que ninguno de cuantos tomaron entonces aquella ofensiva iniciativa la votarían de nuevo, pues se habían convencido de que no era Ferrer el gran pensador que al principio creyeron que glorificaban.

Suspendidas las sesiones de Cortes el 18 de Febrero giró el comentario público en torno a la carestía cada vez más acentuada de las subsistencias y a la no interrumpida serie de agresiones de los moros. Respecto al primer problema, procuró el Gobierno poner un límite a la codicia de los monopolizadores, suprimió totalmente los derechos de importación del trigo y la harina, adquirió por su cuenta uno y otra en el extranjero para distribuirlos por la Nación, prohibió la exportación de determinados artículos e instituyó *Juntas de Subsistencias* en las capitales de provincia. El 14 de Marzo se verificaron las elecciones provinciales obteniendo el triunfo de los candidatos conservadores y liberales. El 15 de Abril emprendió el señor Dato un viaje a Barcelona, donde fué cortésmente recibido. El 21 pronunció don Antonio Maura en el Teatro Real un admirable discurso político. Cuanto pudiera aquí apuntarse para dar una idea de la magnificencia del acto y de los aciertos oratorios del insigne tribuno, sería pálido reflejo de la realidad. Como réplica por el éxito alcanzado por los elementos mauristas, los adictos al señor Dato ofrecieron a éste la presidencia del Círculo Conservador, cargo que llevaba implícita la jefatura del partido. Por su lado, los liberales procuraban estrechar las relaciones con los reformistas, y los demócratas comenzaban a acariciar la idea de una próxima inteligencia con los amigos del Conde de Romanones.

Entrado el mes de Mayo, dos lamentables sucesos vinieron

a entristecer el espíritu público: el voraz incendio que el día 4 destruyó el magnífico Palacio de las Salesas, y el torpedeamiento por un submarino alemán en las costas de Irlanda del magnífico trasatlántico inglés "Lusitania", con desaparición de 1.502 pasajeros y tripulantes. En vista del general clamor de protesta producido por esta catástrofe, se vió Alemania en el trance de justificar la agresión, alegando que aquella violencia era el único medio que tenía de responder al designio del Gobierno británico de matar por hambre a la población civil germana y que, además, el "Lusitania" tenía el carácter de crucero militar.

Ante las violencias de unos y otros beligerantes, la opinión española aparecía dividida en bandos cada vez más definidos. Agrupábanse para tributar sus simpatías a Francia, Inglaterra y Bélgica la mayor parte de las izquierdas españolas; se pronunciaban sentimentalmente por Alemania y Austria los elementos derechistas, y quedaban en la penumbra de la indiferencia, o en la prudente zona de la neutralidad, equidistante de toda pasión partidista, quienes, no escasos en número, abominaban de cualquier política que complicase a la nación en empeños belicosos de los que, a su juicio, no había de obtener ventajas que compensasen los sacrificios que le fueran impuestos para adquirir derecho a merecerlas. El Gobierno, siguiendo la línea de conducta que se trazara al iniciarse la gran guerra, favorecía esta última orientación y aun pretendía convertirse en el único sostén de ella, como queriendo hacer ver los graves riesgos que había de acarrear el menor cambio en la situación política. Pero, a decir verdad, y no obstante las *germanofilias* y *francofilias* al uso, eran muy pocos los españoles que se mostraban dispuestos a convertir en hechos sus respectivas adhesiones a favor de los beligerantes. La palabra *simpatía* tuvo entonces una aplicación frecuente, como expresión del límite máximo a que se aventuraban a llegar los factores representativos de las opuestas orientaciones internacionales acusadas en España por aquellos días. Hubo, sí, extraordinario y aun escandaloso número de exportaciones, especialmente por la frontera francesa, de ganado de tiro, carga y consumo; de calzado, mantas,



primeras materias para explosivos, etc., etc., pero el hecho, en parte explicable por las circunstancias geográficas, ciertamente que más argüía en los exportadores afán de vituperable medro, que sincero testimonio de adhesión a la causa de las potencias por antonomasia llamadas aliadas.

En la última quincena del mes de Mayo, los elementos intervencionistas de Italia, haciendo caso omiso de los vínculos que ligaban a su patria con los Imperios centrales, impulsaron al Parlamento y al Gobierno, presidido por Salandra, a declarar la guerra al Austria (20 de Mayo). El ilustre político Giolitti, amigo de la neutralidad, fué objeto de las más vivas protestas por parte de los intervencionistas, y el genial poeta D'Annunzio, partidario de la guerra, vióse exaltado por las masas como un nuevo Tirteo. Casi al mismo tiempo, un alzamiento en Portugal, promovido por los partidarios de Alfonso Costa contra el Gabinete de Pimenta Castro, produjo la caída de éste, al que sustituyó Juan Chagas, que herido gravemente al ir a posesionarse de su cargo, fué reemplazado por Castro. En el vórtice de aquellos sucesos revolucionarios dimitió la Presidencia de la República Arriaga, sustituyéndole Teófilo Braga.

El 31 de Mayo pronunció el señor Vázquez Mella en el Teatro de la Zarzuela un elocuente discurso de furibunda oposición a la política inglesa y de extraordinario encomio para Alemania y su belicoso Emperador. Por su parte, el señor Lerroux, acentuó su propaganda aliadófila. Estos y otros excesos de la misma especie movieron al Gobierno a anunciar la adopción de enérgicas medidas contra quienes perturbasen la neutralidad oficialmente declarada y sostenida por la inmensa mayoría de los españoles. Para protestar de la prohibición ministerial de celebrar reuniones dedicadas a tratar del conflicto europeo, se agitaron socialistas, republicanos y reformistas, pero el Consejo de Ministros se mostró decidido a no consentirlas.

El 21 de Junio comenzaron las operaciones de inscripción a metálico para cubrir el empréstito de 750 millones acordado por el Gobierno. Aunque por haber sido presentadas al cange Obligaciones del Tesoro por valor de 283 millones,

quedaba rebajada a 467 millones la suma que se pedía a préstamo, es lo cierto que las suscripciones fueron escasas y que el señor Bugallal, visto el fracaso de la operación, manifestó el deseo de abandonar la cartera de Hacienda. Solidarizado con él el Presidente del Consejo de Ministros, planteó la crisis total (22 de Julio) y, pasados tres días, fué resuelta ratificando la Corona su confianza al señor Dato.

A pesar del optimismo a que parecía dar margen la confirmación de que acababa de ser objeto el Gobierno, la realidad política no ofrecía buen aspecto para los ministeriales. Los elementos catalanes aparecían cada vez más disgustados con Dato por su conducta, tanto respecto al proyecto de zonas francas, como al de bonos de exportación; los izquierdistas se le mostraban hostiles por creer que la sistemática enemiga a que se ejercitase el derecho de reunión, so pretexto de los riesgos que pudiera correr la neutralidad, no era sino la prueba plena de que España vivía bajo el régimen de una dictadura mansa, que no debía ser tolerada; el partido maurista, seguía entregado a una activa propaganda contra la llamada política *idónea*; la que se seguía en Marruecos carecía de orientación fija, caracterizándose ahora por las secretas inteligencias con el ex-cadí de Arcila, el famoso Raisuni, a quien, según se dijo, auxiliaba el general Marina contra la opinión del general Silvestre, siendo los dos jefes militares sustituidos por sus colegas Jordana y Villalba; una crisis parcial, producida por la dimisión de los Sres. Conde de Esteban Collantes y Ugarte, titulares de Instrucción pública y Fomento, que fueron sustituidos por los Sres. Andrade y Espada, debilitó el Gabinete, y, como fondo de cuadro tan poco risueño, seguía la elevación alarmantísima de las subsistencias, habiendo subido el kilo de carnero, de 1'60 a 2'10, el de ternera, de 2'10 a 3'00 y el de vaca, de 1'90 a 2'60.

El 5 de Noviembre se verificó la apertura de la nueva legislatura. El 8 fueron leídos en el Congreso los Presupuestos generales para 1916 y el proyecto de reformas militares. Un meditado discurso del Conde de Romanones sobre éstas, y la autorizada intervención de Maura en el debate colocaron al Ministro de la Guerra, general Echagüe, en si-

tuación poco airosa. Convertido el aludido proyecto de reforma en cuestión de Gabinete y hecha la manifestación por el Sr. Dato de que debía ser discutido antes que el Presupuesto, sin que pudiera ser aceptada la fórmula propuesta por los liberales de simultanear ambas discusiones, sobrevino la crisis (6 de Diciembre), que tras de no escaso número de consultas, fué resuelta encargándose de formar Gabinete el Conde de Romanones con elementos de su partido y con otros adictos al Sr. García Prieto, pues liberales y demócratas habían ya llegado a una inteligencia en vista de la necesidad de presentarse unidos para obtener los beneficios del mando. El nuevo Gobierno<sup>1</sup> dió a la publicidad su programa, todo él lleno de risueñas vaguedades, confirmó su criterio neutralista en punto a la política internacional a seguir, y prorrogó el Presupuesto de 1915 para 1916.

## 1916

Mantúvose en el Poder el Conde de Romanones hasta el 20 de Abril de 1917, y durante el relativamente dilatado período de su gestión ministerial, deben ser destacados como sucesos de mayor importancia: la crisis parcial producida por la salida de don Angel Urzáiz del Departamento de Hacienda, crisis motivada por la discrepancia entre dicho señor y los demás Ministros en punto a la aplicación de la Ley de subsistencias (25 de Febrero); el gravísimo conflicto provocado por la carestía de la vida y la falta de trabajo; la exacerbación del nacionalismo catalanista y del sindicalismo obrero, y la cada vez más espinosa pugna entre *aliadófilos* y *germanófilos*, excitados unos y otros por las medidas dictadas por las potencias beligerantes con daño evidente de las neutrales.

El 16 de Marzo firmó el Monarca el Decreto de disolución de las Cortes, reuniéndose las nuevas el 10 de Mayo. En

1. Se compuso de los siguientes elementos: C. de Romanones (Presidencia), Villanueva (Estado), Barroso (Gracia y Justicia), Urzáiz (Hacienda), Alba (Gobernación), Luque (Guerra), Miranda (Marina), Salvador (Fomento), Burell (Instrucción pública).

ellas y con motivo de la discusión del Mensaje, fueron preferentemente tratadas dos cuestiones: la neutralidad y la relativa a las aspiraciones autonomistas de los catalanes. Respecto a la primera, siguió el espíritu de los más dispuestos a mantenerla a toda costa; en relación con la segunda, el Gobierno se manifestó inclinado a conceder la descentralización en la vida regional, pero sin llegar nunca a la autonomía política.

Mientras los factores directivos del país fijaban su atención en los múltiples problemas que las circunstancias iban diariamente planteando, la contienda europea ofrecía las siguientes complicaciones: la declaración de guerra a Portugal, formulada por Alemania (10 de Marzo); los disturbios de Irlanda con motivo de los pruritos secesionistas de sus naturales, ansiosos de sacudir el yugo de Inglaterra (24 a 27 de Abril); el indeciso combate naval anglo-alemán de *Jutlandia* o de *Skagerrak* (31 de Mayo); la muerte de Lord Kitchener, Ministro de la Guerra inglés, por hundimiento del acorazado "Hampshire" en el que iba (6 de Junio), y la entrada en Cartagena del submarino alemán V-35, portador de un mensaje de gratitud dirigido por Guillermo II al Monarca español (21 de Junio).

Frente al general desquiciamiento, una nota consoladora debemos apuntar: la dada por S. M. el Rey Don Alfonso XIII organizando en su Secretaría particular una sección especial para responder a las solicitudes y cartas que las atribuladas familias de muchos de los combatientes dirigían al Monarca esperando por tan noble conducto conocer la suerte de éstos. "El origen de esta noble labor — dice Soldevilla — fué bien sencillo. Una infeliz mujer francesa había intentado por todos los medios conocer el paradero de su marido, desaparecido en uno de los primeros combates en aquel frente. El nombre del soldado no figuraba en las listas de muertos; entre los heridos de los Hospitales no estaba tampoco. Entonces se le ocurrió la idea de dirigirse al Rey de España y le escribió una carta a Don Alfonso XIII exponiéndole su situación y su inquietud. Y el Monarca español, por medio de nuestro Embajador en Ber-

lín, Sr. Polo de Bernabé, logró saber en qué campamento de concentración de prisioneros se encontraba el soldado francés. Al punto le comunicó la grata nueva a la angustiada esposa. Del agradecimiento de ésta a S. M. fueron testigos los periódicos de París, que dieron cuenta de lo sucedido, en frases muy halagadoras para Don Alfonso<sup>1</sup>.

A la iniciativa del Gabinete debióse la presentación a las Cortes de los siguientes proyectos: el de contribución sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las Sociedades particulares con ocasión de la guerra; el de reforma de la Ley electoral, y el de concesión de autonomía pedagógica a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. Tenazmente combatido el primero por las oposiciones, sobre todo, por la regionalista, no pudo ser aprobado más que en su primer artículo, cerrándose las Cámaras el 13 de Julio por causa de la huelga de los obreros ferroviarios. Solventada ésta por haber accedido el Gobierno a algunas de las aspiraciones de los huelguistas; publicado el 9 de Agosto un Real Decreto a cuya virtud se reconocía la personalidad de las Asociaciones y Sindicatos obreros, y restablecidas las garantías constitucionales (12 de Agosto), pareció algo encalmado el ambiente político. El 10 de Septiembre pronunció don Antonio Maura en Beranga un admirable discurso en el que abogó por la inteligencia con Inglaterra y Francia, siempre que estas naciones rectificasen totalmente su secular política contraria a los intereses de España. En el caso de no poder lograr tal finalidad — manifestó el orador, — se impondrían otras alianzas, aunque resultasen más onerosas y obligasen a mayores sacrificios, porque lo que no podía pretender nadie es que una nación se asociase como amiga con quien fuera buscando, día por día, su propia ruina y su muerte. De todas suertes, a juicio del Sr. Maura, más esencial que saber de qué lado habíamos de inclinarnos, era afirmar nuestra personalidad con nuestras obras, adquiriendo entre las naciones el necesario peso específico, de que no gozaríamos mientras permaneciéramos huecos o rellenos de miseria.

1. *El año político 1916.*



El 27 de Septiembre se verificó la reapertura de las Cámaras. En el Congreso se trató de la no interrumpida serie de torpedeamientos de que hacían objeto a nuestros barcos los submarinos alemanes y de la pérdida de otros por accidentes relacionados con la guerra. El tema revestía extraordinaria importancia, pues nuestra flota mercante había sufrido desde el principio de la contienda una merma que pasaba de las 80,000 toneladas. En el Senado leyó el Ministro de la Guerra general Luque su proyecto de reformas militares, y, el 29 de Septiembre, presentó en el Congreso el Ministro de Hacienda don Santiago Alba un conjunto de proyectos económicos y rentísticos del que formaba parte el Presupuesto ordinario y uno extraordinario llamado de reconstitución nacional. En pugna el Sr. Alba con la mayor parte de las minorías, tanto respecto de la oportunidad del Presupuesto extraordinario, como a si debía ser discutido después del ordinario, como estimaba don Eduardo Dato, enfrascáronse los representantes de los diferentes grupos parlamentarios en una discusión que, arrastrada hasta el mes de Diciembre, obligó a adoptar como socorrida fórmula la de que el Presupuesto de 1915, con las adaptaciones hechas para el 1916, rigiera el año 1917 (18 de Diciembre). Ninguna otra resolución podía constituir testimonio más cumplido de la esterilidad de nuestro Parlamento.

Entre tanto seguían los barcos españoles sufriendo las consecuencias de la guerra submarina; el encarecimiento de las subsistencias hacía imposible la vida a las clases modestas provocando clamorosas manifestaciones callejeras y la huelga general, llevada a cabo el 18 de Diciembre, y en Marruecos seguíamos, no obstante la ocupación del Fondak (13 de Mayo) y la realización de operaciones que, según las referencias oficiales, constituían indudables éxitos, gastando hombres y dinero, y sin obtener, en cambio, la más remota esperanza de que tal situación cesara algún día.

Tampoco la guerra europea llevaba trazas de terminarse con la ansiada concordia entre los beligerantes. La muerte del emperador Francisco José de Austria, acaecida en Noviembre, para nada influyó en la marcha de la contienda, y

la nota de Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía ofreciendo la paz (12 de Diciembre) fué contestada negativamente por los Gobiernos aliados de Francia, Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Japón, Montenegro, Portugal, Rusia y Serbia (30 de Diciembre), que no podían consentir que los Imperios Centrales manifestasen no haber sido los causantes de la guerra y hallarse en posesión de la victoria.

## 1917

Los primeros días del año de 1917 se señalaron por un recrudecimiento de la campaña que algunos periódicos venían haciendo contra el Conde de Romanones, a quien planteaban la incompatibilidad entre su actuación como Presidente del Consejo y su interés en varias y poderosas entidades industriales. Contrariado por la campaña, o movido únicamente por el deseo de robustecer su autoridad, el Conde de Romanones planteó la crisis total (9 de Enero de 1917) que después de las consultas de rigor fué resuelta por medio de una ratificación de confianza. El 29 de Enero se verificó la reapertura de las Cortes, y el 31 fué recibida en Madrid la nota por la que Alemania participaba que desde el 1.º de Febrero se opondría resueltamente por medio de las armas a todo tráfico marítimo dentro de las zonas determinadas alrededor de Inglaterra, Francia, Italia y en el Mediterráneo oriental, es decir, el bloqueo general de las potencias aliadas. La impresión causada en el país por resolución tan grave fué inmensa. El Presidente del Consejo, con aplauso de Diputados y Senadores, manifestó en las Cámaras su propósito de impedir a toda costa que la vida de España se interrumpiese, y el Ministro de Estado respondió a la nota alemana rechazando como legítimo un régimen de guerra excepcional que había de dificultar y hasta impedir el tráfico marítimo de España, comprometiendo su existencia económica, con serio peligro de la vida de sus súbditos.

El efecto de la nota germánica en los Estados Unidos fué la ruptura de relaciones con Alemania, ruptura a la que siguió el 6 de Abril la declaración de guerra entre ambas naciones.

La perturbación producida en el espíritu nacional por tantas novedades y la necesidad por parte del Gobierno de poder actuar más desembarazadamente, le estimularon a presentar a las Cortes, con la anuencia de los jefes de las minorías, un proyecto de Ley por el que amplísimamente se le autorizaba para ejercer una verdadera dictadura económica. Logrado este objetivo, suspendiéronse las sesiones parlamentarias, dando por terminada su primera legislatura (26 de Febrero). El 10 de Marzo acordó el Consejo de Ministros la emisión de un empréstito de mil millones de pesetas de Deuda amortizable al tipo de interés del 5 %, y el día 14 puso a la firma de S. M. el titular de Instrucción pública don Julio Burell un Real Decreto suprimiendo los ejercicios de reválida para la obtención de títulos correspondientes a cada uno de los grados de enseñanza dependientes del citado Ministerio. Esta disposición, por la que hubo de desaparecer (es verdad que por poco tiempo) prueba universitaria tan cumplida como la tesis doctoral, produjo extraordinario disgusto en los elementos docentes.

Por lo que respecta al desarrollo de la guerra europea, noticias llegadas a España el 16 de Marzo hicieron saber que la revolución rusa había destronado al Zar Nicolás II, constituyendo un Comité ejecutivo de la Duma, que se encargó de nombrar nuevo Gobierno. Este suceso, unido al malestar general producido por la carestía de la vida y por la actitud de Alemania reflejada en su última y gravísima nota, aumentaron el desasosiego público, que vino a intensificar el anuncio de la huelga general por los delegados obreros de la Casa del Pueblo. Por si todo ello fuera poco, el 9 de Abril circuló por Madrid la noticia de que otro buque español, el "San Fulgencio", de la matrícula de Cartagena, que procedente de Inglaterra venía cargado de carbón con destino a Barcelona, había sido torpedeado frente a la isla de Ré por un submarino alemán. El Consejo de Ministros se reunió para

tratar del caso; estudió la situación creada por la guerra, que había destruído una sexta parte del tonelaje de nuestra marina mercante; ocupóse de la justificada alarma producida por el trato, ciertamente no esperado, de que nos hacía objeto Alemania, y de las nuevas dificultades que había de causar a nuestro comercio la ruptura de relaciones de dicha nación con algunas Repúblicas americanas, y dada la índole delicadísima de la reclamación que debía formular, aplazó la redacción de ésta. Bien pudo advertir la opinión que se hallaba España en un momento de suprema gravedad. Por tal motivo se acentuaron, de una parte, las manifestaciones de los neutralistas, y, de otra, los testimonios favorables a la causa aliada, y como igual pugna de pareceres debió dibujarse en el seno del Gobierno, su Presidente se apresuró a dimitir (20 de Abril), justificando la resolución en el profundo convencimiento que había adquirido de que la defensa de las vidas e intereses españoles no podía hacerse eficaz mientras la política española ante la guerra se desenvolviera dentro de las limitaciones que hasta el día se le habían impuesto.

La Corona honró entonces con el encargo de formar Gabinete a don Manuel García Prieto<sup>1</sup> (20 de Abril), que inició su actuación restableciendo las garantías constitucionales, suspendidas desde el 28 de Marzo. La nota dirigida por nuestro Gobierno al de Berlín patentizaba cómo al emplear Alemania procedimientos belicosos de inusitada violencia para hacer imposible la vida económica de sus adversarios, ponía en grave peligro la de las potencias amigas y neutrales, y, asimismo, hacía constar que, si el Gobierno Imperial justificaba su decisión alegando que era el único medio que tenía para defender su existencia, no podría extrañarle que en la misma razón apoyase España su derecho a defender la suya.

El día 30 de Abril pronunció en la plaza de toros don Antonio Maura el discurso resumen del ciclo de conferencias

1. Integraron este Gobierno los señores García Prieto (Presidencia), Alvarado (Estado), Ruiz Valarino (Gracia y Justicia), Aguilera (Guerra), Miranda (Marina), Alba (Hacienda), Burell (Gobernación), Martín Rosales (Fomento), Francos Rodríguez (Instrucción pública).

dato por sus correligionarios. Afirmó la libertad en que se hallaba España para desarrollar la política internacional que creyese más conveniente a sus intereses; dijo que nuestra nación no debía, ni podía, ni quería ir a la guerra; reconoció que la naturaleza y la historia nos emplazaban en el grupo formado por las naciones occidentales, si bien teníamos grandes motivos para dudar de la amistad de Inglaterra y Francia; afirmó que no había razones suficientes que justificasen una ruptura con Alemania, y elocuentemente hizo la disección de la política interior española, reconociendo que los gobiernos que en ella se sucedían, no eran más que *parásitos del ascendiente moral y político del Trono*, y que todos los daños que de fuera pudieran ser causados a España serían infinitamente menores que los que se derivaban del bochornoso vivir interno.

Para responder al discurso del Sr. Maura organizaron las izquierdas en el mismo local en que aquél se pronunciara un clamoroso mitin (27 de Mayo), en el que usaron de la palabra, entre otros, los Sres. Unamuno, Alvarez y Lerroux, mostráronse partidarios del rompimiento con Alemania y de la identificación con los aliados. Con el espíritu que presidió aquel acto, manifestó su conformidad el Conde de Romanones, que, como el Sr. Alvarez, estimó que, de no romperse la neutralidad, corría nuestra Patria grave riesgo al llegar la hora de la paz.

El día 30 de Mayo firmó el Rey un Real Decreto sobre adjudicación de destinos militares. Tal disposición reconocía como principio fundamental para la provisión el de la antigüedad dentro de la categoría, y fué dictada para paliar la excitación que hacía tiempo venía observándose en el Ejército por causa del abandono en que se le tenía y del favoritismo que imperaba, sobre todo, en el reparto de ascensos y recompensas. De aquel peligroso estado de latente protesta se hizo intérprete por modo especial el Arma de Infantería, que para contribuir con eficacia al remedio de los males que la aquejaban, organizóse en Juntas de defensa, que reconocían como superior directiva la que radicaba en Barcelona. Aunque el movimiento corporativo a que nos referimos te-



nía precedentes de larga fecha, pues era antigua las aspiración en los Oficiales de Infantería de constituirse en Juntas, como ya lo estaban los Cuerpos de Artillería e Ingenieros, sus causas inmediatas databan del último período de dominación conservadora, y la existencia de tales Juntas había dado margen, durante la etapa de gobierno del Conde de Romanones (1916-1917), a que se ordenara al capitán general de Cataluña Sr. Alfáu la disolución de aquéllas por su notoria ilegalidad. El citado general respondió a Madrid asegurando que las Juntas habían quedado disueltas. Sobrevino el cambio de situación, substituyendo en la Presidencia del Consejo al Conde de Romanones el Sr. García Prieto, y en el Ministerio de la Guerra al general Luque su colega don Francisco Aguilera. Noticioso éste de que las Juntas, en vez de disolverse, seguían realizando una activa propaganda, requirió a Alfáu para que obtuviera de los Oficiales que constituían la Central una solemne declaración de su apartamiento de la misma. El Capitán General de Cataluña no pudo conseguir de sus subordinados la aludida declaración, y entonces el Ministro de la Guerra, sin conocimiento del Consejo de Ministros, ordenó el arresto en el castillo de Montjuich de los Oficiales desobedientes y el relevo del general Alfáu. Privados de libertad los elementos de la Junta, fueron substituídos por otros compañeros. En tal situación llegó a Barcelona, a fin de posesionarse del supremo mando militar de aquella región, el general Marina, que puesto en contacto con la Oficialidad, se percató bien pronto, no sólo de que no podía contar con su acatamiento para deshacer la Unión del Arma de Infantería, sino de que ésta exigía del Gobierno la libertad de los Oficiales detenidos en Montjuich y la reposición de los compañeros que, por haberse adherido al movimiento sindicalista militar, habían perdido los destinos que ocupaban en el Ministerio de la Guerra. Una y otra aspiración fueron atendidas con gran presteza en evitación de un grave conflicto; pero no satisfecha con esto la Junta, exigió del Gobierno la inmediata aprobación del Reglamento por el que se regía. El Consejo de Ministros manifestó su conformidad con el artículo 1.º, pero, al mismo

tiempo, su resolución de no aprobar los restantes.<sup>1</sup> Ello produjo la dimisión del Gabinete (9 de Junio) y, tras de un período laboriosísimo de consultas, el advenimiento de don Eduardo Dato al Poder (11 de Junio). El Gabinete conservador<sup>2</sup> accedió a reconocer integramente el ya famoso Reglamento de las Juntas, y el coronel Márquez, presidente de la Superior, actuante en Barcelona, pudo exteriorizar su satisfacción por el triunfo alcanzado.

Que lo acaecido tenía los caracteres de una sedición victoriosa, era indudable. Pero con ser ello cosa tan grave, todavía resultaba acrecida su importancia por la actitud con que el país asistía al espectáculo, disculpando, cuando no aplaudiendo, a quienes, rompiendo los cauces de la legalidad, se disponían a poner término a un largo y vergonzoso período de punibles abandonos en punto a la organización del Ejército, desatendido en sus necesidades de orden moral, técnico y económico, y corroído por las ingerencias del nepotismo. En el manifiesto publicado por las Juntas de defensa se leía este párrafo: "Aspira el Arma de Infantería a que la justicia, la equidad, la moralidad más perfecta, todo, rija sus destinos; como instrumento para lograrlo, ha creado la Unión.

1. El aludido artículo primero, decía:

"Se constituye la Junta de defensa de la escala activa del Arma de Infantería para trabajar por su mejora y progreso, para mayor gloria y poderío de la Patria, para defender el derecho y la equidad de los intereses colectivos y los individuales de los miembros de ella, desde la salida de la Academia hasta el empleo de Coronel inclusive. Es decir, todos los Oficiales del Arma."

"Es otro de sus fines fomentar el verdadero compañerismo, mutua ayuda y perfecta y legendaria caballerosidad, desarrollando estas virtudes en la oficialidad y velando por su decoro y prestigio profesional; persiguiendo con sus particulares iniciativas y con la ayuda que recabe de los Poderes constituidos, por una parte, los medios y facilidades para que pueda adquirir y perfeccionar el Oficial las aptitudes profesionales y, por otra, para que mejore su situación económica y renazca la interior satisfacción que nace de sus entusiasmos al empezar su carrera y se perpetúa con la confianza en la justicia y equidad con que serán apreciados sus méritos y esfuerzos.

"El detenido estudio y análisis de este primer artículo por la ilustrada y entusiasta oficialidad del Arma, dará a los elementos directores de su unión el programa general de sus gestiones, y a cada asociado el concepto de sus deberes".

2. Compusieron el Ministerio conservador los siguientes señores: Dato (Presidencia), Lema (Estado), Burgos y Mazo (Gracia y Justicia), Bugallal (Hacienda), Marqués de Estella (Guerra), Flores (Marina), Sánchez Guerra (Gobernación), Vizconde de Eza (Fomento) y Andrade (Instrucción pública).

Está persuadida de haber contribuído con ello al bien de España, dando un ejemplo y señalando una orientación digna de meditar por todos cuantos organismos nacionales, oficiales y no oficiales, sienten la necesidad de ser bien gobernados; ofrece este ejemplo y esta orientación y ofrecería su apoyo, a no vedárselo su condición de institución armada."

Que el ejemplo y la orientación fueron prontamente seguidos, hartó lo patentizó la realidad al ofrecer como nuevos brotes de la iniciada sindicación, de un lado, las Juntas civiles de defensa, constituidas por los funcionarios públicos y, de otro, las primeras manifestaciones colectivas formuladas por los suboficiales, brigadas y sargentos.

Aunque los elementos directores del movimiento militar procuraron quitar a éste toda finalidad política, reduciendo su alcance a la reivindicación de algunas mejoras de clase, es lo cierto que su repercusión en todos los órdenes de la vida nacional fué extraordinariamente perturbadora. Por serlo tanto, quisieron aprovecharla las izquierdas españolas para hallar en la perturbación producida el medio más eficaz de lograr sus particulares designios, y como la defensa de la supremacía del Poder civil ofrecía no escasos argumentos para justificar el mayor acercamiento de cuantos pugnaban por la implantación de un régimen político de amplio espíritu democrático, al calor de tal defensa aparecieron confundidos gubernamentales como Azcárate y Melquiades Alvarez y regionalistas como Cambó y Abadal, con socialistas y radicales como Iglesias y Lerroux, dispuestos unos a participar directamente en el movimiento revolucionario que se fraguaba, y emplazados los otros en aquella zona de acomodaticia penumbra que les permitiera asistir al desarrollo de los acontecimientos y sacar de ellos las ventajas posibles en pro de sus respectivos idearios.

En presencia de tan general confabulación, el Gobierno se puso en guardia suspendiendo las garantías constitucionales en toda España, y el partido liberal no tuvo mejor iniciativa que la de plantear en ocasión tan crítica el minúsculo pleito de su jefatura, que seguían disputándose el Conde de Romanones y el Sr. García Prieto; como si no fuera por

éste y parecido linaje de cuestiones personales por los que vivían en notorio desconcepto las clases directoras y con ellas el Poder público, que tantas veces y tan estérilmente habían asumido.

Aunque el Gabinete no había querido disolver las Cortes



Fig. 204.—El Conde de Romanones



Fig. 205.—García Prieto

liberales por estimar que las circunstancias podían hacerlas necesarias, era indudable que no entraba en sus planes el reunirlos. Por ello, el Senador regionalista Sr. Abadal citó, sin distinción de partidos, a los Diputados y Senadores de Cataluña a una reunión que, celebrada en Barcelona el 5 de Julio, acordó demandar del Gobierno la apertura de las Cámaras, y, caso de no ser inmediatamente atendida esta petición, convocar a todos los representantes parlamentarios españoles a una Asamblea extraoficial, que podía celebrarse en Barcelona el día 19 del mismo mes de Julio. El Consejo de Ministros respondió a esta demanda negando a los peticionarios el derecho de ejercer facultades que sólo a aquél le estaban atribuidas por las leyes, y tal contestación resolvió a los representantes catalanes a llevar adelante su proyecto. En efecto, con asistencia de regionalistas, reformistas, republicanos, socialistas y carlistas, celebróse la anunciada Asamblea en el Palacio del Gobernador, situado en el Parque barcelonés, elevándose a cerca de 80 el número de representantes presentes o simplemente adheridos (19 de

Julio de 1917). Los asistentes acordaron reiterar la petición de convocatoria de Cortes que, en funciones de Constituyentes, deliberasen y resolviesen acerca de la organización del Estado, de la autonomía de los Municipios y de los demás problemas que las circunstancias planteaban con apremio inaplazable y que, a la vez, expresasen su deseo de que el acto realizado por el Ejército el 1.º de Junio, fuese seguido de una profunda renovación de la vida pública española, emprendida y realizada por los elementos políticos, sin lo cual, aquel acto perdería ante la conciencia del pueblo el carácter de iniciativa patriótica para dejar sólo el recuerdo de un acto estéril de indisciplina. La Asamblea fué disuelta por el Gobernador Sr. Matos, y el Ministerio, ligeramente estimó que el conflicto surgido en Barcelona quedaba reducido "a una sencilla cuestión de Guardia civil".

En la última decena del mes de Julio se inició en Valencia, Bilbao y Santiago la huelga revolucionaria; el 5 de Agosto los guardias de Seguridad, que habían también organizado sus Juntas de defensa, formularon determinadas peticiones de mejora, y el día 10 fueron al paro los ferroviarios del Norte. Aunque tal actitud no fué secundada por todas las Secciones, claramente se advirtió, desde los primeros momentos, que el personal obrero irreductible se mostraba en tal disposición de ánimo por esperar que nuevas complicaciones convirtieran el incipiente movimiento en gravísimo conflicto social. Como se temía, ocurrió: el día 13 de Agosto estalló sin previo aviso la huelga general, viéndose el Gobierno en la precisión de declarar el estado de guerra en toda España. En Madrid, tomaron parte en la huelga los albañiles, los panaderos y los tipógrafos; pero la perturbación se redujo a pequeñas algaradas callejeras con rotura de lunas de escaparates y pedrea de tranvías, y sólo el día 15 funcionaron las ametralladoras en la barriada de los Cuatro Caminos. En cambio, en Barcelona, Sabadell y Tarrasa la fuerza pública tuvo que repeler violentas agresiones, produciéndose en las refriegas numerosas bajas, y en Bilbao, así como en las cuencas mineras de Asturias y León, los sucesos adquirieron extraordinaria gravedad. Detenido en Madrid el Co-



mité de huelga formado por los Sres. Besteiro, Largo Caba-  
llero, Anguiano y Saborit; privado también de libertad en  
Barcelona el diputado don Marcelino Domingo y habiendo  
repasado la frontera francesa los Sres. Lerroux y Maciá, fué  
poco a poco restableciéndose el orden en la capital y en las  
provincias. De la fracasada huelga revolucionaria quedó en  
el concepto público como algo inconcuso, la participación  
directa que en ella habían tenido los socialistas, los republi-  
canos y un corto número de nacionalistas catalanes, y la  
complicidad moral de otros elementos que, menos audaces  
o más cautos, procuraron no comprometerse, pero sin renun-  
ciar a participar del botín, caso de que el éxito hubiera co-  
ronado la intentona de los sediciosos.

El día 20 de Agosto se celebró un Consejo de Ministros  
que aprobó el proyecto formulado por el Estado Mayor Cen-  
tral para la adquisición de material y organización del Ejér-  
cito, proyecto cuyos primeros gastos importaban unos 78 mi-  
llones de pesetas. A pesar de esta medida y de otras dictadas  
por aquellos días, expresivas de la disposición del Gobierno  
a favor de las aspiraciones de las Juntas de defensa, éstas  
manifestaron su disgusto por la continuación del estado de  
guerra y la suspensión de garantías que, a su parecer, no  
habían impedido los sucesos revolucionarios y, en cambio,  
eran utilizados por el Gabinete como medio de amordazar a  
la opinión pública. El Ejército quería que sin lenidades, pero  
también sin excesivos rigores, se aplicase la ley a los culpa-  
bles de aquellos sucesos; mas deseaba, asimismo, que no se  
le pudiera atribuir el propósito de sostener el estado de gue-  
rra, ni menos que, por habilidades políticas, se le presentase  
como único responsable de la reciente represión, que elemen-  
tos gubernamentales habían tenido interés en que revistiera  
caracteres de inusitada violencia.

A los precedentes testimonios del malestar de las Juntas  
de defensa se apresuró el Gobierno a dar contestación por  
medio de una nota oficiosa que, entre otras cosas, decía:  
"Está plenamente justificado el disgusto que han producido  
en el Ejército los insidiosos rumores que le atribuyen la res-  
ponsabilidad de que sea la jurisdicción militar la que entien-

da en los procesos incoados por los sucesos del mes de Agosto, y le suponen interesado en el mantenimiento del estado de guerra y de la suspensión de las garantías constitucionales". "Por fortuna, el país, que conoce las virtudes militares de nuestro Ejército, sabe bien a qué atenerse respecto a tales patrañas, que no han de modificar en lo más mínimo los sentimientos de entusiasmo y cariño de que la Nación entera ha dado recientes y ostensibles muestras a las fuerzas del Ejército y de la Armada". Como complemento de ésta nota el Consejo de Ministros levantó el estado de guerra (7 de Octubre) y restableció las garantías constitucionales.

Cuando el Gobierno tomaba estas determinaciones, habíase ya reunido el Consejo de Guerra (29 de Septiembre) llamado a juzgar a los directores de la revolución de Agosto. La sentencia recaída condenó a Besteiro, Largo Caballero, Anguiano y Saborit, a la pena de reclusión perpetua, y a otras inferiores a los demás individuos complicados en el proceso.

El día 1.º de Octubre acordó el Gabinete la institución de la Comisaría de Abastecimientos, y el 17, se produjo una crisis parcial por dimisión del Ministro de la Guerra señor Marqués de Estella, a quien substituyó el general Marina. La causa que motivó esta crisis fué el divorcio entre el veterano e ilustre Marqués y la Unión del Arma de Infantería. "En un concepto podemos convenir las Juntas de defensa y yo—decía en comentadas declaraciones el ex-Ministro de la Guerra—: reclamen, soliciten aquello que más convenga al Ejército; resuelvan ellas por sí aquello que las Leyes no tienen delicadeza bastante para discernir, tal como las cuestiones de dignidad, de honor; eso han hecho en Artillería, en Ingenieros. En todo esto estamos conformes. Pero estimo que, por ejemplo, una organización militar no puede en ningún caso dirigirse a un Gobierno para decirle: "Levántese el estado de guerra", o para hacer consideraciones y comentarios a la conducta de los gobernantes con ocasión de una huelga general".

Sintetizando la difícil situación por que atravesaba Es-

paña en aquellos días, expresábase don Antonio Maura en la siguiente forma:

"La mayoría inmensa de la Nación, ausente del Gobierno y descontenta, ansiosa de conseguir remedios sin trastorno, habria de apoyar fervorosamente a los gobernantes para que éstos tuviesen alguna expectativa de restituir a su asiento las principalísimas cosas que están visiblemente desquiciadas. El primer paso para tal intento ha de ser que el clamor notorio de la opinion nacional se sienta bien acogido por la Corona. Lo que al revés advertimos en el prurito insensato de fundir la Corona en el ruin caldero de una mesnada banderiza".

En la última decena del mes de Octubre, el propósito por parte de los representantes de todas las Armas de entregar a S. M. un mensaje, producido, despues de una serie de incidencias que la índole de estos breves apuntes no permite detallar, la crisis total (día 27). Desde esta jornada hasta la del 1.º de Noviembre se tramitaron las regias consultas; fracasó el intento de formar un Gabinete de concentración acaudillado por don Joaquín Sánchez de Toca; se celebró en el Ateneo de Madrid la Asamblea de parlamentarios (día 30); trató inutilmente don Antonio Maura de constituir Ministerio y, a la postre, fué encargado de formar Gobierno el Sr. García Prieto (1 de Noviembre).<sup>1</sup>

El Ministro de la Gobernación del nuevo Gabinete acordó la cesación de los Alcaldes de Real Orden, sin otra excepción que la relativa al Ayuntamiento de Madrid; el titular de Guerra, don Juan de la Cierva, procuró y llegó a conseguir la confianza de las Juntas de defensa, y los Ministros regionalistas, tutelados por don Francisco Cambó, comenzaron a trabajar a favor de sus aspiraciones autonómicas, procurando la disolución de Cortes, que habia de permitirles forjar el instrumento parlamentario para realizar aquellas.

1. Formaron el nuevo Ministerio: García Prieto (Presidencia), Alvalade (Estado), Bahamonde (Gobernación), Fernandez Prada (Gracia y Justicia), Cierva (Guerra), Ventosa (Hacienda), Gimeno (Marina), Alcalá Zamora (Fomento) y Rodas (Instrucción pública).

1918

Firmó, en efecto, S. M. el Decreto de disolución de las Cámaras el día 3 de Enero de 1918, pero hubo de ser aplazada su publicación hasta el 10 en vista del conflicto suscitado por los brigadas y sargentos que, organizados en Juntas, prepararon un movimiento, felizmente desbaratado mediante el licenciamiento de los más directamente complicados en la sedición. El día 20 de Febrero se celebró en los comedores del Palace Hotel un banquete organizado por los generales, jefes y oficiales procedentes de la Academia General Militar. Asistieron al acto el Monarca y los Ministros de la Guerra y de Marina. El discurso pronunciado en esta ocasión por el Sr. Cierva, puso una vez más de manifiesto el ascendiente adquirido por este personaje sobre el elemento militar. El día 21 de Febrero comenzó la huelga del personal de Correos y Telégrafos como protesta contra la demora del Gobierno en atender las peticiones de mejora que tenía formuladas. El 24, se verificó la elección de Diputados a Cortes, que dió como resultado el triunfo de pequeños núcleos de fuerzas pertenecientes a los diferentes partidos políticos; el 27 y a pretexto de que, verificadas las elecciones de Diputados, había cumplido el Gabinete la finalidad que motivara su constitución anunciaron sus dimisiones los titulares de Guerra, Hacienda e Instrucción pública. Aceptada la de los dos últimos, que fueron substituídos por los señores Conde de Caralt y don Luis Silvela, respectivamente, siguió ocupando la cartera de Guerra don Juan de la Cierva, que participó a sus compañeros el propósito de realizar las reformas militares por Real Decreto, es decir, sin aguardar a que las Cortes manifestasen su opinión sobre problema de tan excepcional importancia. Frente al criterio del Sr. Cierva expuso el Ministro de Marina Sr. Gimeno el suyo, dando con ello lugar a una crisis parcial que convirtió en total el Sr. García Prieto al enterarse del contenido de una violenta nota

entregada, sin conocimiento del Consejo de Ministros, a los periodistas por el Ministro de la Guerra censurando las apreciaciones que contra las Juntas de defensa había formulado don Joaquín Sánchez de Toca. Después de no pocas diligencias, retiró el Marqués de Alhucemas su renuncia, disponiéndose a presentarse ante las Cortes con el Gabinete tal y como se hallaba constituido antes de la dimisión de don Amalio Gimeno.

Entretanto, las Juntas civiles de defensa laboraban en pro de las peticiones que tenían presentadas, y los funcionarios de Telégrafos, limitándose a cumplir los deberes impuestos por su anacrónico Reglamento, daban lugar a un retraso en la expedición de los despachos, que iba creando un gravísimo conflicto. En vista de todo ello, el Consejo de Ministros acordó militarizar el servicio de Comunicaciones haciéndolo depender del Departamento de Guerra; negó existencia legal a las Juntas civiles de defensa y, el día 13 de Marzo, disolvió los Cuerpos de Correos y Telégrafos. A fin de evitar que el comentario público siguiera acentuando la falta de paridad entre las complaciente conducta del Gabinete con los elementos armados y la violencia de que hacía objeto a los civiles, consiguió el Sr. Cierva que las Juntas militares hicieran público su propósito de limitar su actuación a las cuestiones internas que a las mismas afectasen. Así las cosas, el deseo de García Prieto de hallar una solución pacífica al conflicto, separándose de los temperamentos rigoristas de Cierva, le llevó a autorizar al Subsecretario de la Presidencia, Sr. Rosado, para que se pusiera al habla con los representantes de los funcionarios declarados en huelga. De la conferencia celebrada con tal motivo, el 18 de Marzo, salió el principio de un acuerdo. El mismo día, tuvo lugar la apertura de las Cortes y, al siguiente, se verificó la elección de Mesa del Congreso, comunicándose a las Cámaras que el Gobierno se hallaba en crisis. La causa de ésta era, como puede fácilmente comprenderse, el decidido propósito manifestado por Don Juan de la Cierva de abandonar su puesto por estimarse falto de autoridad después de la conferencia del señor Rosado con los empleados de Correos y Telégrafos.



A partir de este momento comenzaron las consultas. Fueron sucesivamente llamados a Palacio los representantes más caracterizados de cada uno de los grupos políticos; recibió don Antonio Maura el encargo de formar Ministerio, fraca-



Fig. 206.—D. Eduardo Dato



Fig. 207.—D. Francisco Cambó

sando en el intento por negarle su colaboración los señores Cambó y Besada, y por obstinarse don Juan de la Cierva en no desempeñar otra cartera que la de Guerra, y como el tiempo pasaba y la situación iba haciéndose cada vez más grave, tomó el Monarca la decisión de reunir, a las diez de la noche, en la Regia cámara a los señores Maura, Dato, García Prieto, Conde de Romanones, Alba y Cambó e invocando su patriotismo, pudo conseguir que, bajo la Presidencia de don Antonio Maura, se formara un Gabinete Nacional (21 de Marzo)<sup>1</sup> llamado a la realización de los siguientes fines: reforma del Reglamento de los Cuerpos Colegisladores: otorgación de una amnistía; legalización de la situación económica y aprobación de las reformas militares. El Ministerio se presentó a las Cortes el 22 y desde este día hasta el 18 de Julio, en que se suspendieron las sesiones de las Cámaras, logró que éstas aprobaran: la reforma de sus respectivos Reglamentos; la concesión de la amnistía (Mayo); las bases para la reorganización del Ejército (Junio), y el proyecto contra el es-

1. Formaron este Gabinete los señores Maura (Presidencia), Dato (Estado), García Prieto (Gobernación), Romanones (Gracia y Justicia), Besada (Hacienda), Cambó (Fomento), Alba (Instrucción pública), Marina (Guerra) y Pidal (Marina).

pionaje, el de jornada mercantil, el de nacionalización de industrias, el de funcionarios civiles, el relativo a la defensa de los bosques, el que reformaba el impuesto del Timbre, el de anticipo reintegrable a la Prensa, el de electrificación de la rampa de Pajares, el referente a excedencia de los Catedráticos, el que regulaba los derechos pasivos del Magisterio primario, los que fijaban las fuerzas terrestres y marítimas, el de organización de Tribunales de justicia para niños, y otros menos importantes, que omitimos en gracia a la brevedad (Julio). Paralelamente a la discusión y aprobación de los mencionados proyectos, debatióse también en el Congreso sobre los sucesos de Agosto, obteniendo el señor Dato repetidos éxitos parlamentarios por el acierto y la energía con que supo responder a los ataques de que le hicieron objeto los directores del fracasado movimiento revolucionario. Asimismo acertó el Gobierno al acordar (10 de Agosto), en vista de las pérdidas que nos ocasionaba la guerra submarina de Alemania, que el tonelaje por ella hundido fuera reemplazado con los buques germanos surtos en puertos españoles. El torpedeamiento de los vapores *Carasa* (25 de Agosto) y *Atxerimendi* (31 de Agosto), permitió al Consejo de Ministros comenzar a hacer efectivo el anterior acuerdo.

Tras de las vacaciones estivales, animóse la vida política. En la última quincena de Septiembre y como consecuencia de haber tratado el Consejo de Ministros durante el mes de Agosto del avance de Presupuestos presentado por el señor González Besada, planteóse por el titular de Fomento don Francisco Cambó el problema de la incautación por el Estado de las líneas férreas y el de la delegación a favor de las Mancomunidades de atribuciones del Poder central. En este propósito hubo de ser apoyado por el Sr. Ventosa, cuya Comisaría de Abastecimientos, convertida en Ministerio, le había permitido jurar el cargo de Consejero de la Corona el 5 de Septiembre. Por su parte don Santiago Alba, al exponer sus proyectos en relación con el presupuesto de Instrucción pública, solicitó que el sueldo mínimo de los maestros fuera de 1.500 pesetas, es decir, que se aumentara

en 500. Así como las propuestas del señor Cambó quedaron virtualmente desechadas por el Consejo sin que el citado personaje se sintiera, por el momento, obligado a adoptar actitudes heroicas, el Sr. Alba, a quien se le hizo ver que su iniciativa implicaba una mejora para los maestros del 70 u 80 % de sus sueldos, cuando no había pasado del 30 % la de los demás empleados, se obstinó en mantener su criterio, y en vista de la oposición que halló en sus compañeros de Gabinete, presentó la dimisión, obligando al planteamiento oficial de la crisis (8 de Octubre) que, a las veinticuatro horas, quedó resuelta mediante el pase del titular de Gracia y Justicia Conde de Romanones a Instrucción pública, quedando encargado de aquél Departamento el Presidente del Consejo.

El 22 de Octubre se verificó la reapertura de las Cortes. Un debate promovido por don Leopoldo Romeo, dió lugar a la intervención de los señores Alba, Cambó, Conde de Romanones y García Prieto, cada uno de los cuales dió a su discurso el carácter de verdadera exposición de su respectivo programa político. Como a ello hubo de añadirse la declaración hecha por don Antonio Maura acerca de la corta vida que restaba al Gobierno, pues su cesación dependía de la próxima aprobación del Presupuesto, don Eduardo Dato se apresuró a dimitir por estimarse falto de autoridad para continuar representando a España en sus relaciones exteriores; y si bien el Sr. Besada leyó en las Cortes el proyecto de Presupuestos el 5 de Noviembre, las dificultades opuestas por las minorías a su rápida aprobación, forzaron al Gobierno a plantear la crisis total (6 de Noviembre).

Nuevamente el Monarca consultó a los primates de la política y una vez más tuvo que apelar al recurso de reunir a algunos de ellos en la Cámara palatina para conseguir que se pusieran de acuerdo. Logrólo ahora con los señores García Prieto, Conde de Romanones y Alba, y bajo la presidencia del primero se constituyó el 9 de Noviembre un Gabinete liberal,<sup>1</sup> que se presentó a las Cortes el día 12. En la sesión

1. Entraron en este Gabinete: García Prieto (Presidencia), Romanones (Estado), Roig y Bergadá (Gracia y Justicia), Alba (Hacienda), Silvela (Gobernación), Berenguer (Guerra), Chacón (Marina), Burell

siguiente, la minoría republicana solicitó la concesión de la autonomía integral para Cataluña por estimar que la constitución de Estados regionales autónomos y libres no era incompatible con la unidad superior de la Nación española. El día 15, las Directivas de las Sociedades obreras de la Casa del Pueblo hicieron profesión de fe revolucionaria comprometiéndose a apoyar cualquier República que reemplazase a la Monarquía española, hasta poder alcanzar el *desideratum* de una República social que hiciera imposible el privilegio capitalista y la explotación del hombre por el hombre. El día 16 se verificó en el salón del Consejo de la Mancomunidad, en Barcelona, la entrega solemne de los tomos que contenían los votos de los Ayuntamientos catalanes en pro de la autonomía integral de la región. El 19, formuló el Sr. Cambó en el Congreso la misma demanda, afirmando que el problema catalán lo era de soberanía y que debía deliberarse sobre su extensión, pero no en cuanto a su intensidad. "Dentro de un límite—dijo—que se fije a la soberanía del Poder catalán, el Poder catalán debe ser completo".

Tras de haber sido prorrogado el Presupuesto y autorizado el Gobierno para presentar a las Cortes un proyecto de Ley restableciendo el año económico, que tendría principio el 1.º de Abril y terminaría el 31 de Marzo, y después de leer el Ministro de Hacienda Sr. Alba en el Congreso un atrevido proyecto sobre régimen fiscal de la propiedad, volvió a ocupar el primer plano entre los problemas a la sazón planteados el relativo a las reivindicaciones catalanistas, pues el día 29 fué entregado al jefe del Gobierno por los delegados de la Mancomunidad el Mensaje de ésta solicitando la *autonomía integral*, que habría de estar representada por un *Gobierno regional* con plena soberanía para regir los asuntos interiores, Gobierno que integrarían, un *Parlamento catalán* constituido por dos *Cámaras*, y un *Poder ejecutivo* responsable ante dicho Parlamento.

Examinada la cuestión catalana en Consejo de Ministros se patentizó la discrepancia de criterios entre don Manuel García

(Instrucción pública) y Garnica (Abastecimientos). De la cartera de Fomento se encargó interinamente el Presidente del Consejo.

Prieto, dispuesto a discutir inmediatamente el tema en las Cortes, pero sin llegar a más concesiones que las contenidas en las bases de la Asamblea parlamentaria, y el Conde de Romanones, propicio a mayores larguezas, que habían de ser objeto de estudio por parte de una *Asamblea extraparlamentaria* nombrada para entender en el asunto. Por tal causa surgió la nueva crisis (3 de Diciembre) con la inevitable serie de consultas. Con indudable gracejo expresó el Sr. Dato su pensamiento sobre la frecuencia con que se veía la Corona obligada a llamar a capítulo a los prohombres políticos, diciendo: "En Palacio hace falta poner un camarín para las consultas". De las entonces celebradas poco o nada logró sacar el Monarca, viéndose en la precisión de requerir al Conde de Romanones para que constituyese un Gabinete reclutado en las filas de sus adeptos que, por cierto, solamente sumaban en el Congreso unos cuarenta votos.<sup>1</sup> Mientras se tramitaba en Madrid la crisis, las Diputaciones leonesas y castellanas, reunidas en Burgos, alzaban su protesta contra los proyectos de desintegración nacional, y las clases mercantiles e industriales de Andalucía, la Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza y el Consejo Permanente de la Comunidad de los Municipios Aragoneses, se unían al mismo movimiento.

El 10 de Diciembre se presentó el Gobierno en las Cámaras teniendo que entrar a debatir sobre el problema catalán, que el Sr. Cambó planteó una vez más. Con este motivo pronunció don Antonio Maura un maravilloso discurso en pro de la unidad nacional, que nada tenía que ver con la criticada centralización o absorción de la vida local por el vitando centralismo madrileño. A juicio del Sr. Maura, la autonomía municipal era más precisa a la región que otras autonomías. El efecto causado por la inspiradísima oración del ilustre balear fué tal, que la Cámara tributóle clamorosa ovación, que duró algunos minutos, distinguiéndose el Conde de Ro-

1. Constituyeron el Gobierno: el Conde de Romanones (Presidencia y Estado), Roselló (Gracia y Justicia), Gimeno (Gobernación), Calbetón (Hacienda), Marqués de Cortina (Fomento), Salvatella (Instrucción pública), Argente (Abastecimientos), Berenguer (Guerra) y Chacón (Marina).



manones en exteriorizar su entusiasmo. Comprendiendo los regionalistas por estas manifestaciones cuál había de ser el fallo que la Cámara pronunciara en definitiva sobre el pleito catalán, hicieron pública en la sesión del día 12 su resolución de retirarse del Congreso, conducta que siguieron también algunos republicanos. El 16 pronunció el Sr. Cambó en el Teatro del Bosque de Barcelona, un violento discurso que terminó con las siguientes frases: "Sea República o Monarquía, Cataluña está decidida a todo, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Lo que se ponga frente a la marcha de Cataluña, será arrollado. En esta situación, ¿República? ¿Monarquía? ¡¡Cataluña!!"

El 17 de Diciembre contestó el Gobierno al Mensaje regionalista mostrándose propicio a reconocer el pleno derecho de los Poderes regionales a ejercer las facultades que las Cortes españolas les otorgasen de una manera total, completa y absoluta, quedando a salvo íntegramente la soberanía inmanente del Estado español para derogar y modificar el Estatuto de autonomía votado por las Cortes y sancionado por la Corona y para corregir las extralimitaciones en que pudieran incurrir los aludidos Poderes regionales. Respecto de las facultades autonómicas que habían de ser concedidas y de la forma de establecerlas, estaba dispuesto el Gabinete a constituir una *Comisión extraparlamentaria* integrada por las más altas representaciones políticas y sociales, a fin de que preparase una ponencia de conciliación que, elevada al Gobierno, fuera por éste sometida al examen del Parlamento.

La Mancomunidad no aceptó los ofrecimientos del Gabinete, y, por ello, cuando a virtud del Real Decreto de 19 de Diciembre que autorizaba al Presidente del Consejo para designar la referida Comisión fueron nombrados como elementos de ella, entre otros, los señores Abadal, Cambó, Ventosa, Rodés, Puig y Cadafalch, Albert, etc., los designados negáronse a aceptar el nombramiento, decisión que también tomaron los parlamentarios izquierdistas. En cambio, la Asamblea de la Mancomunidad, reunida el 21 de Diciembre con los Diputados y Senadores de Cataluña, encargó a éstos y al

Consejo de aquélla la redacción del primer Estatuto de la autonomía, y la adopción de los acuerdos necesarios para su más pronta implantación.

Respecto de la guerra europea, el año de 1918, ofreció como salientes novedades el armisticio de los aliados con Bulgaria (30 de Septiembre); la petición de paz de Austria y Alemania (6 de Octubre) seguida de las comunicaciones entre los Secretarios de Estado de los Gobiernos de Washington y Berlín, concretando la forma de llegar a un acuerdo sobre la base de los catorce puntos propuestos por Wilson en su mensaje al Congreso de los Estados Unidos del 8 de Enero de 1918; el comienzo del armisticio entre Austria e Italia (4 de Noviembre); la abdicación del Kaiser (9 de Noviembre); el armisticio firmado por el Mariscal Foch a nombre de las potencias aliadas y asociadas y el Secretario de Estado alemán Erzberger, asistido de otros personajes (11 de Noviembre) y la abdicación del Emperador de Austria (21 de Noviembre).

## 1919

Al comenzar el año de 1919 seguía planteada como cuestión de máxima importancia la relativa a las aspiraciones de los regionalistas catalanes. El 2 de Enero quedó constituida la *Comisión extraparlamentaria*, que nombró como Ponentes a los señores Maura, Sánchez de Toca, Rodrigáñez, Ruiz Jiménez y Alcalá Zamora. Los citados prohombres cumplieron con su cometido redactando luminoso dictamen que, aprobado por la Comisión, fué elevado al Gobierno, el cual hubo de aceptarlo íntegramente, prometiendo llevarlo como proyecto de Ley a la aprobación de las Cortes (13 de Enero). Mientras en Madrid se laboraba en la forma que acaemos de consignar, en Barcelona crecía por momentos el desasosiego producido por la tirantez de relaciones entre catalanistas y castellanistas. La exasperación de algunos de los

primeros llegó a ofender gravemente a elementos del Ejército, que no se recataban de criticar la lenidad de los Ministros en presencia de los repetidos ataques de que se hacía objeto a la Patria. Por aquellos días, una modesta cupletista, Mary-Focela, había dado lugar al entonar una patriótica canción en que se vitoreaba a España, a que los catalanistas intransigentes promovieran ruidosas protestas en el Coliseo donde actuaba la mencionada cantante. Los fundados temores de que aquellos choques aislados llegaran a adquirir mayores proporciones, movieron al Consejo de Ministros a decretar la suspensión de garantías (17 de Enero). Pasados unos días, se reanudaron las sesiones en ambas Cámaras (21 de Enero), y en Barcelona, la Mancomunidad aprobó, frente a la propuesta de la *Comisión extraparlamentaria* de Madrid, el *Estatuto de Cataluña* (24 de Enero). Llevado el espinoso problema a las Cortes, don Francisco Cambó hizo elocuente defensa de las aspiraciones de sus correligionarios y rechazó el dictamen de la comisión de Madrid por estimar que partía de un principio falso al suponer que el problema catalán no lo era de soberanía, sino de mera descentralización. Respondió al Diputado regionalista el Presidente del Consejo, que se mostró dispuesto a conceder el proyecto de autonomía redactado por la Comisión, ya que en él aparecían substancialmente servidas las peticiones de la Mancomunidad, quedando a salvo la unidad de la Patria y la soberanía del Estado. El vivo debate, en el que intervinieron otros varios oradores, produjo la impresión de que la Liga Regionalista no podía contar con el Parlamento para convertir en ley el *Estatuto Catalán*.

Entretanto, los atentados sindicalistas aumentaban de modo alarmante; los obreros de La Canadiense declaraban en Barcelona la huelga general, y en Valencia, Sevilla, Salamanca, Cádiz, Alcoy y otras localidades la rebeldía obrera adquiría caracteres gravísimos. Hondamente preocupado el Gobierno por tales sucesos y contrariadísimo por los obstáculos que a la aprobación de los Presupuestos iban creando las oposiciones, presentó la dimisión (24 de Febrero). Ratificada por la Corona su confianza en el Conde de Ro-

manones, se resignó éste a seguir gobernando; pero a fin de poder actuar con mayor desembarazo suspendió las sesiones de Cortes (27 de Febrero). Al día siguiente, un grave motín producido por la carestía de las subsistencias dió lugar a que la multitud recorriera las calles madrileñas asaltando tahonas y tiendas de comestibles. El Gobierno declaró la capital en estado de guerra e intervino las fábricas de panificación y las tahonas a fin de que no se interrumpiera la elaboración de tan esencial artículo. Respecto de Barcelona, donde los sindicalistas eran verdaderos árbitros de la ciudad; donde la inmensa mayoría de la población vivía presa de la preocupación que suscitaba la impunidad de los más bárbaros atentados contra las personas honradas; donde, hasta las víctimas sobrevivientes de ellos, cohibidas por la amenaza, dejaban de prestar su concurso a la justicia; respecto de Barcelona, repetimos, estimó el Gobierno que la única política eficaz que debía seguirse era la de llegar a una inteligencia con los causantes del desorden. A tal efecto, fueron nombrados los señores Doval y Montañés para desempeñar los cargos de Jefe superior de Policía y Gobernador civil de la provincia, encomendándose, además, al Subsecretario de la Presidencia don José Morote una misión informativa que, perentoriamente, había de realizar en la Ciudad Condal. El 17 de Febrero se dió por solucionada la huelga de La Canadiense; pero habiendo exigido los huelguistas que fueran puestos en libertad los obreros presos por los incidentes de aquellos días, el Gobernador civil quiso acceder a esta demanda, mientras el capitán General Sr. Miláns del Bosch se opuso a ella respecto de once de los detenidos sujetos a la jurisdicción militar. Exacerbados los huelguistas por esta contrariedad, negáronse a reanudar el trabajo, dando con ello lugar a que las nuevas concesiones que las autoridades civiles les dispensaran sublevaran en tal forma el espíritu de las Juntas militares de defensa que movieran a éstas a pedir la destitución de los señores Montañés y Doval y a acudir en queja al Soberano. En presencia de tantas y tan serias dificultades volvió el Conde de Romanones a plantear la crisis, que S. M. hubo de resolver encargando de

formar Ministerio a don Antonio Maura (15 de Abril de 1919). Apenas posesionado del cargo, tuvo buen cuidado de manifestar el Presidente del Consejo que “no había procurado, pretendido ni deseado” el Poder que, a su juicio, debía haber asumido un Ministerio menos extraño a la generación del estado de las cosas públicas a la sazón, y más compenetrado con las colectividades parlamentarias llamadas a legalizar la situación económica.<sup>1</sup>

En el empeño de lograr esta legalización, encontró el señor Maura no escasas dificultades, pues los señores Alvarez, Alba y el mismo Conde de Romanones mostráronse decididos a discutir minuciosamente los Presupuestos y a oponerse al cierre del Parlamento mientras no quedara en él tratada con toda amplitud la crisis última. Bien se podía colegir que esta actitud no significaba otra cosa que la obstrucción al Gabinete Maura, anunciada por quienes, habiendo podido anteriormente facilitar la obra de aprobar un Presupuesto, no lo habían hecho. En vista de la inutilidad de cualquier otra gestión para llamar al buen sentido a las oposiciones liberales, el Presidente del Consejo planteó a la Corona este dilema: o la dimisión del Gobierno, o la disolución de las Cortes. El Rey optó por facilitar el oportuno Decreto, que insertó la *Gaceta* el día 3 de Mayo. Liberales, republicanos y socialistas criticaron acerbamente la decisión del Rey, y el partido conservador hizo público su propósito de ir a las elecciones con su organización, su bandera y su jefatura, y de apoyar exclusivamente al Gobierno en la votación del Presupuesto constitucional y en la defensa del orden público. Fracasados los repetidos intentos para llegar a una concentración de las fuerzas conservadoras, aprestáronse las diferentes parcialidades políticas a obtener en la contienda electoral el triunfo de sus respectivos candidatos.

El 21 de Mayo firmó el Monarca el Real Decreto debido a la iniciativa del Ministro de Instrucción Pública don César

1. Compusieron este Gabinete los señores Maura (Presidencia), González Hontoria (Estado), Vizconde de Matamala (Gracia y Justicia), Silió (Instrucción pública), Goicoechea (Gobernación), Ossorio y Gallardo (Fomento), Miranda (Marina), Cierva (Hacienda), Maestre (Abastecimientos) y Santiago (Guerra).



Silió concediendo a las Universidades españolas personalidad jurídica para adquirir, poseer y enajenar bienes de todas clases, y plena autonomía en su doble carácter de Escuelas profesionales y de Centros pedagógicos de alta cultura nacional. La importantísima disposición que reseñamos dió margen a que cada una de las Universidades y de las Facultades integrantes de aquéllas redactasen sus correspondientes Estatutos, labor ésta que produjo el más fecundo e intenso movimiento universitario de cuantos registra la historia de nuestra enseñanza superior en lo que llevamos de siglo.



Fig. 208.—César Silió

Volviendo a la lucha comicial a que anteriormente nos referíamos, cúmplenos decir, que, como se esperaba, al ma-

nifestarse el cuerpo electoral, no hizo sino reflejar el estado de disgregación de los partidos políticos: el liberal, fraccionado en grupos que dirigían el Conde de Romanones, García Prieto, Alba, Gasset, Alcalá Zamora y Melquiades Alvarez, y el conservador, dividido entre los señores Maura, Dato y Cierva. El 24 de Junio se verificó en el Senado la apertura de las Cortes. Elevado a la Presidencia de la Cámara Alta el Sr. Allendesalazar, y elegido para la del Congreso el Marqués de Figueroa, iniciaron los elementos izquierdistas una tan desconsiderada y sistemática oposición al Gobierno, que fácilmente permitió vaticinar lo que la dignidad herida de don Antonio Maura había de aconsejarle hacer a los pocos días. Logró el Gabinete la prórroga del Presupuesto para el mes de Julio; pero una votación recaída con ocasión de discutirse el acto de Coria, al dar el triunfo a las oposiciones por haberse abstenido de votar la minoría conservadora, produjo la crisis total (15 de Julio). Tras de laboriosa tramitación y en vista de que las izquierdas

seguían confabuladas contra Maura, y que los elementos conservadores rechazaban todo proyecto de concentración, decidió el Monarca encargar de formar Gobierno a don Joaquín Sánchez de Toca, que constituyó un Ministerio liberal-conservador (19 de Julio)<sup>1</sup> con la esperanza de llegar a legalizar la situación económica, empeño que, en parte, aspiró a conseguir mediante una fórmula pactada con los representantes de las oposiciones, a virtud de la cual, la autorización económica votada por las Cortes durante el anterior Gabinete, había de regir hasta el 31 de Marzo de 1920; fórmula ésta que, combatida por el Sr. Cierva, fué modificada, prorrogando los Presupuestos de 1918 hasta el 31 de Diciembre de 1919, y entendiéndose continuada su vigencia hasta el 31 de Marzo de 1920 en el caso de que se estuviera tramitando parlamentariamente el nuevo Presupuesto, que había de regir desde 1.º de Abril.

Durante el período comprendido entre los meses de Agosto y Diciembre, el Ministerio de Sánchez de Toca estableció la jornada mínima legal de ocho horas y tuvo que hacer frente al problema social, que en Barcelona era cada vez más grave, por la declaración del *lock-out*, acordada por la Confederación patronal, en vista de la actitud por demás transigente del Gobierno con los sindicatos obreros, cuyos representantes Angel Pestaña y Salvador Seguí (*Noy del Sucre*) fueron recibidos en Madrid con inusitada deferencia. Por otra parte, la guerra continuaba en Marruecos, la exasperación nacionalista daba fe de vida en Cataluña y las Vascongadas, los crímenes sociales se repetían con alarmante frecuencia y con la más escandalosa impunidad y, aunque con designios honrosos, las perturbadoras Juntas militares de defensa volvían a actuar mediatizando la autoridad del Poder público. La ocasión deparada ahora por la realidad para que se produjera este último efecto, fué la ya de antiguo sistemática oposición del Arma de Infantería a que individuos de su oficialidad ingresaran en el Cuerpo de Estado Mayor. A los que, a pesar de dicha repugnancia, se disponían

1. Lo formaron, Sánchez de Toca (Presidencia), Lema (Estado), Amat (Gracia y Justicia), Bugallal (Hacienda), Burgos y Mazo (Gobernación), Calderón (Fomento), Prado Palacios (Instrucción pública), Marqués de Mochales (Abastecimientos), Tovar (Guerra) y Flórez (Marina).

a seguir estudios en la Escuela Superior de Guerra, exigiéndoles el Arma de Infantería el compromiso de no volver a ésta si fracasaban en su intento. Tales exigencias subieron de punto al constituirse las Juntas de defensa y motivaron el que vein-



Fig. 209.—D. Joaquín  
S. de Toca



Fig. 210.—D. Manuel  
Allendesalazar

ticinco Oficiales de Infantería, alumnos de la mencionada Escuela, redactaran una declaración separándose de las Juntas (16 de Octubre de 1919) y dieran a la publicidad un folleto criticando la actuación de estos organismos. Por causa de tal acto, reunióse un Tribunal de honor, que acordó la separación del servicio de dieciséis oficiales de los veinticinco que habían firmado la declaración de Octubre. Aunque los textos legales daban lugar a duda en punto a si para ejecutoriar los actos de los Tribunales de honor debía o no ser oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Ministro de la Guerra resolvió la cuestión elevando el expediente a que nos referimos al Supremo, y éste, por mayoría de votos, dictaminó en el sentido de anular la actuación del referido Tribunal de honor por no haberse constituido legalmente. Indignadas por este fallo las Juntas, adoptaron acuerdos que, por su gravedad, pusieron de manifiesto el estado de apasionamiento en que se hallaban. El 3 de Diciembre dictó el Ministro de la Guerra, general Tovar, una Real Orden dando normas para la constitución de los Tribunales de honor, y, el mismo día, constituyóse uno por los Tenientes de Infantería, con arreglo a las prescrip-

ciones que acababan de establecerse, acordando la expulsión, no de dieciséis, sino de veintitrés de los veinticinco Oficiales inculcados. El día 5 fueron firmadas las Reales Ordenes separando del servicio a los veintitrés Oficiales aludidos. El Gobierno, cuyos deseos de concordia se habían visto tan violentamente contrarrestados por las Juntas de defensa, presentó su dimisión el día 9, siendo reemplazado por un Gabinete parlamentario presidido por don Manuel Allendesalazar (12 de Diciembre)<sup>1</sup>, que se presentó a las Cortes (día 30) haciendo la manifestación de que su fundamental propósito era el de dotar a España de un Presupuesto, pues se daba el caso de que respecto al de ingresos, siguiera la Nación viviendo del aprobado en 1914. El mismo 30 de Diciembre fué presentado en la Cámara Alta un proyecto que autorizaba a los concesionarios de ferrocarriles a elevar las tarifas de transporte de viajeros de primera clase hasta un 50 %, las de viajeros de segunda, un 48 %, y un 45 las de viajeros de tercera. Las tarifas relativas al transporte de mercancías podían ser recargadas hasta el límite de un 50 %.

## 1920

El Gabinete Allendesalazar deseó normalizar la existencia de las Juntas de defensa, convirtiéndolas en *Comisiones informativas* para cada Arma, Cuerpo e Instituto del Ejército (Real Decreto de 2 de Enero de 1920). Conjurado por el momento este conflicto, otros de excepcional importancia seguían pesando sobre los gobernantes, siendo de entre ellos el más grave, el planteado por los llamados crímenes sociales. En Barcelona donde, como hemos dicho, la clase patronal había apelado al *lock-out*, y donde el elemento obrero, o permanecía en huelga, o, cuando se reintegraba al trabajo, se entregaba al *sabotage*, las circunstancias de la vida econó-

1. Integraron este Ministerio. Allendesalazar (Presidencia), Lema (Estado), Garnica (Gracia y Justicia), Fernández Prida (Gobernación), Bugallal (Hacienda), Gimeno (Fomento), Rivas (Instrucción pública), Terán (Abastecimientos), Villalba (Guerra) y Flórez (Marina).

mica, agravadas por las violencias del sindicalismo revolucionario, no podían ser peores. El 5 de Enero fué objeto de un infame atentado el presidente de la Federación patronal, señor Graupera. El capitán general Miláns del Bosch acordó, entonces, con la Junta de autoridades, declarar el estado de guerra y, en su consecuencia, quiso publicar un enérgico bando, que los Ministros liberales del Gabinete no quisieron aprobar, motivando el disgusto de aquella autoridad militar que, al poco tiempo, y con ocasión de un incidente parlamentario provocado por el Conde de Romanones, dimitió su cargo con disgusto bien manifiesto de los elementos de orden de Barcelona.

El 9 de Enero, el sindicalista Checa, ayudado por unos soldados, penetró en el cuartel del Carmen, en Zaragoza, pretendiendo sublevar al 9.º regimiento de Artillería. Cumpliendo con su deber, perdieron la vida el oficial de guardia don Anselmo Bergés y el sargento don Antonio Antón. Los compañeros de éste rechazaron a los asaltantes, pereciendo Checa en la refriega, y siendo condenados a la última pena siete soldados.

Mientras de modo tan violento se acusaba el estado de anarquía del país, el Gobierno acometía la empresa de legalizar la situación económica y de obtener el voto de las Cortes a favor del aumento de las tarifas ferroviarias. Consiguió esto último en el Senado; pero llegado el proyecto al Congreso, la oposición del Sr. Cierva y de la minoría socialista y la falta de ambiente propicio en la Cámara, hicieron fracasar aquél. Prodióse por ello una huelga de los obreros de ferrocarriles (21 de Marzo) provocada, según la opinión de algunos, por las mismas Compañías; pero el Congreso no varió de actitud, viéndose precisado el Gobierno a publicar una Real Orden por la que se autorizaba al Ministro de Abastecimientos para anticipar a las Compañías las cantidades a que ascendían durante un mes los aumentos de haberes ofrecidos por las mismas a su personal para el día en que contarán con los recursos necesarios al efecto.

En cambio, después de no pocos esfuerzos, aprobaron las Cámaras la Ley de Presupuestos (Abril) ¡tras de cinco años



de vigencia de la antigua! Cumplido con ello el patriótico empeño que se había impuesto el Sr. Allendesalazar, presentó la dimisión (3 de Mayo), entrando don Eduardo Dato a sucederle<sup>1</sup>.

Durante los primeros meses de gobierno del partido conservador fué instituido el Ministerio de Trabajo (Real Decreto de 8 de Mayo), suprimiéndose el de Abastecimientos, que recobró su anterior denominación de Comisaría; la huelga de los operarios de la fábrica *La Fortuna*, en Madrid, hizo escasear el pan, dando lugar a las inevitables colas formadas a la puerta de las tahonas, y siguieron registrándose en las capitales más industriales de la Nación los escandalosos atentados perpetrados por los elementos terroristas: desde las Navidades del año de 1920 hasta fines de Mayo de 1921 se realizaron en la Ciudad Condal 79 de ellos; el día 4 de Agosto fué asesinado en Valencia el ex-Gobernador de Barcelona don Francisco Maestre; el 16, resultaron bárbaramente agredidos en Bilbao algunos obreros por otros declarados en huelga; el 23 sucumbieron en Zaragoza víctimas del feroz sindicalismo el arquitecto municipal don José Yarza, el ingeniero don César Boente y el oficinista don Joaquín Octavio de Toledo; el 11 de Octubre estalló una bomba en el Salón Pompeya de Barcelona causando dos muertos y gran número de heridos, y, el 26 de Noviembre, incendiaron los terroristas el hermoso trasatlántico de 14.000 toneladas "Alfonso XIII", varado en los astilleros del Nervión. Mas ¿para qué seguir la relación? Una verdadera ola de locura amenazaba destruir los cimientos del orden social. Con apuntar el dato de que las huelgas, que en 1914 no pasaron de 264, llegaron en 1920 a la enorme cifra de 1361, está dicho lo bastante para comprender el grado de desconcierto y subversión a que se había llegado.

Afanoso el Gobierno por paliar los rigores de semejante anarquía, suspendió la actuación del Jurado en Barcelona y, admitiendo la dimisión del Gobernador Sr. Bas, nombró para sustituirle al general Martínez Anido, que hasta entonces ha-

1. Entraron a formar Gobierno: Dato (Presidencia), Lema (Estado), Bugallal (Gracia y Justicia), Domínguez Pascual (Hacienda), Bergamín (Gobernación) Eza (Guerra), Ortuño (Fomento) y Espada (Instrucción pública).

bía desempeñado el Gobierno militar en la misma ciudad. La nueva autoridad civil ordenó la detención de sesenta y cuatro sindicalistas y deportó a treinta y seis de los más caracterizados enviándolos a Mahón a bordo del "Giralda".

Mientras se desarrollaban los anteriores sucesos, en los restantes aspectos de la vida española se producían las siguientes novedades: el 31 de Agosto dimitió el Sr. Bergamín, pasando a desempeñar la cartera de Gobernación el Sr. Bugallal y la de Fomento don Luis Espada, y posesionándose de las de Gracia y Justicia e Instrucción pública los nuevos Ministros señores Ordóñez y Marqués de Portago; el 2 de Octubre firmó el Monarca el Decreto de disolución de las Cortes, produciéndose la consiguiente protesta de los liberales, que veían con tal medida alejarse la hora de usufructuar el Poder; el 14 entraba nuestro Ejército de Africa en Xauen, la ciudad sagrada; el 15 dictaba el Ministro de Fomento un Real Decreto sobre material ferroviario, por cuya disposición se autorizaba a favor de las Compañías la concesión de anticipos en metálico que habían de destinarse precisa y necesariamente a la adquisición de material móvil y de tracción para establecer la normalidad en los servicios, debiendo ser aquéllos devueltos en veinte anualidades consecutivas; el 29 de Noviembre y con motivo de la alarma económica producida en la plaza de Barcelona, acordó el Gobierno dirigirse al Banco de España para que, con la garantía del Estado, prestase a la Banca de Barcelona el concurso que estimara necesario a fin de conjurar el conflicto, y, también por aquellos días, llegó a América la Misión española presidida por el Infante don Fernando para asociarse a las fiestas organizadas en Chile para solemnizar el cuarto centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Verificáronse las elecciones de Diputados a Cortes el 19 de Diciembre, triunfando en Madrid la candidatura monárquica y en Barcelona la regionalista. A los diez días, abandonó el Departamento de Instrucción pública el Marqués de Portago, reemplazándole el catedrático y senador don Tomás Montejó.

## 1921

El 4 de Enero del 1921 se verificó la apertura de las Cortes y, el 5, quedó constituida la Mesa de la Cámara Alta bajo la presidencia de don Joaquín Sánchez de Toca y fué designado para la del Congreso don José Sánchez Guerra. La creación por Real Decreto del Ministerio de Hacienda de cien plazas de liquidadores del impuesto de Utilidades, motivó la protesta de los funcionarios de dicho Departamento, que declarados en huelga el día 15 obligaron al Gobierno a llevar el asunto a las Cámaras. En éstas, los jefes de las minorías se mostraron opuestos a la actitud de los funcionarios, pero conformes en considerar como ilegal el Real Decreto causante del conflicto, por lo que el titular de Hacienda se estimó desautorizado, presentando la dimisión de su cargo, en el que hubo de sustituirle el Subsecretario señor Argüelles (27 de Enero).

El 1.º de Febrero llegaron a Madrid los Reyes de Bélgica, que fueron recibidos no sólo con la consideración que merecía su altísima alcurnia, sino con la efusiva cordialidad a que se habían hechos acreedores por su abnegación y heroísmo durante los luctuosos años de la formidable contienda europea.

No constituido todavía el Congreso, hubo en él de discutirse la política del Gobierno en relación con el terrorismo. Socialistas y republicanos, especialmente, combatieron los procedimientos de represión empleados por el Sr. Martínez Anido en Barcelona, y de la empeñada discusión no salió la luz, sino un cúmulo de recíprocas reconvenciones que, en vez de simplificar, complicaron los términos de posible solución de un problema que gravitaba sobre la conciencia nacional como una verdadera pesadilla. Tramitábase en el Senado la discusión del Mensaje cuando, como testimonio el más cumplido de la asombrosa audacia terrorista, el Presidente del Consejo de Ministros don Eduardo Dato resultó villanamente asesinado al regresar a su domicilio en las primeras horas de la noche del 8 de Marzo. El abominable crimen se cometió en

la Plaza de la Independencia, al llegar el automóvil que conducía al Presidente a la altura de la calle de Serrano. Las subsiguientes investigaciones de la policía y los acertados trabajos de la autoridad judicial, lograron averiguar que los autores del



Fig. 211.—D. Juan de la Cierva



Fig. 212.—D. Juan Vázquez de Mella

hárbaro atentado habían sido los anarquistas Matheu, Casanellas y Nicolau. El primero fué detenido, pero los otros dos que con él ocupaban la motocicleta desde la cual hicieron fuego sobre el Sr. Dato, consiguieron evadirse.

Encargado interinamente de la Presidencia del Consejo de Ministros el Sr. Bugallal, suspendió las sesiones de Cortes mientras se resolvía la crisis. El Monarca confió entonces a don Antonio Maura la misión de formar Gobierno, a cuyo efecto reunió éste en su domicilio particular a los señores Cambó, González Hontoria, Bugallal, Cierva, Vázquez de Mella. Ossorio, Conde de Romanones y Rivera, a quienes expresó el deseo de constituir un Gabinete de coalición en el que sus elementos componentes habían de aportar como máxima ofrenda al bien público la firme decisión de postergar sus compromisos de partido. La oposición a tan generosos designios, especialmente por el lado del partido conservador, malogró el intento. En vista de ello fué honrado con la regia confianza don Manuel Allendesalazar (12 de Marzo), que constituyó un Gabinete

con elementos idóneos y ciervistas<sup>1</sup>. En las Cortes hubo de ser objeto de animado debate la crisis última, exponiendo los señores Maura y Cambó su opinión contraria a la dinámica política representada por el turno pacífico de los partidos liberal y conservador en el ejercicio del Poder. También fué objeto de apasionada discusión la conducta que en Barcelona practicaba el general Martínez Anido favoreciendo, según los socialistas y republicanos, al sindicalismo libre en sus luchas contra el sindicalismo rojo. Si de la discusión parlamentaria pudo sacarse como consecuencia la falta de acuerdo entre las derechas y las izquierdas españolas respecto de las cuestiones de mayor entidad que preocupaban al país, del Congreso socialista por aquellos días celebrado en Madrid (9 a 13 de Marzo) obtúvose como resultancia la fundamental división de la masa obrera en dos grupos: el partidario de la *Internacional reconstructora de Viena* y el adicto a la *Tercera Internacional comunista de Moscú*.

Seguía en tanto el terrorismo acusando su existencia, sobre todo, en Barcelona; comentaba la Prensa el escandaloso contrabando de armas en Marruecos; elevábase el precio de los artículos de primera necesidad y, en las Cortes, el proyecto de contrato con la Tabacalera y el de transportes, por el que se instituía un Consejo Superior de Ferrocarriles y se proponía el establecimiento de un consorcio entre el Estado y cada una de las Empresas, daban lugar a interesantes y animadísimos debates. El citado primer proyecto quedó aprobado en el Congreso, teniéndose que aplicar la guillotina, el día 2 de Junio, y el día 17 votólo el Senado; el segundo, es decir, el relativo a transportes, a pesar de la tenacidad del Ministro de Fomento Sr. Cierva, no pudo ser aprobado en la Cámara popular y ésta contrariedad, unida a las discrepancias de criterio de los Ministros de Hacienda y de Gracia y Justicia respecto de la obra del Sr. Cierva, ocasionó la dimisión de los señores Argüelles y Piniés, que fueron reemplazados por sus correligionarios señores Ordóñez y Wais (6 de Julio).

1. Formaron este Ministerio, Allendesalazar (Presidencia), Lema (Estado), Piniés (Gracia y Justicia), Argüelles (Hacienda), Vizconde de Eza (Guerra), Fernández Prada (Marina), Bugallal (Gobernación), Cierva (Fomento), Aparicio (Instrucción pública) y Sanz Escartin (Trabajo).



El día 20 presidieron los Reyes la solemnísimá función religiosa celebrada en Burgos con ocasión del séptimo Centenario de la fundación de su famosa Catedral, y el 21 fueron trasladados a ésta los restos del Cid Campeador y de su esposa doña Jimena. Durante la jornada del 22 comenzaron a ser conocidas las primeras noticias relativas a gravísimos combates que, según se decía, había tenido que librar con infausta suerte nuestro Ejército en Marruecos. Desgraciadamente, la más desconsoladora realidad confirmó los alarmantísimos rumores. En efecto, el Comandante general de Melilla Fernández Silvestre, había salido el día 20 de la plaza dirigiéndose hacia la posición de Igueriben, atacada por los moros. El formidable empuje de éstos obligó al General a retirarse a la de Annual, donde, en forma tan violenta se vió hostilizado que, después de pedir auxilio al Alto Comisario y a Madrid, no tuvo otro remedio que disponer la evacuación de la posición, enderezando la retirada hacia la de Dar Drús. Enloquecido, sin duda, por el enorme fracaso, obstinóse Silvestre en no seguir a las fuerzas que se retiraban, quedándose con su Estado Mayor en Annual, donde sucumbió juntamente con sus más adictos subordinados. Entretanto, las fuerzas iban llegando a Dar Drús, reorganizándolas el general Navarro, que había asumido el mando. El 23 de Julio la jarka sublevada atacó a Dar Drús, obligando a los nuestros a retirarse a Batel, de aquí a Monte-Arruit y de éste a Nador. La precipitación de aquel retroceso, desmoralizó en tal forma a las fuerzas españolas, que pronto hubo de convertirse en verdadera desbandada, aumentándose por ello el número de nuestras bajas y dando lugar a que las cábilas amigas se alzasen como un solo hombre contra los fugitivos. La catástrofe fué enorme. Entre muertos y desaparecidos se perdieron de doce a catorce mil hombres y con ellos un copioso material que cayó en poder de los indígenas victoriosos. El formidable alzamiento que infligía a nuestra sufrida Nación tan doloroso castigo, reconocía como jefe al tristemente rebelde cabecilla Abd-el-Krim, durante algún tiempo amigo de España. Por el contrario, un antiguo enemigo de ésta, Abd-el-Kader, aliado nuestro en la época a

que nos referimos, supo dar cumplido testimonio de su lealtad impidiendo que la morisma sublevada se apoderara de Melilla. La llegada a esta plaza del Alto Comisario general Berenguer y de las fuerzas de Regulares de Ceuta y del Tercio extranjero, capitaneadas por los tenientes coroneles González Tablas y Millán Astray, empezó a alejar el riesgo de aquella conquista que, de haberse consumado, en posición tan excepcional hubiera colocado a España respecto del pleito marroquí.

Al finalizar el mes de Julio la situación era la siguiente: en Melilla se iban concentrando los elementos indispensables para iniciar la reconquista de lo que tantos años y tantos sacrificios había costado ganar; la jarka se entregaba con entusiasmo a gozar de los beneficios del cuantioso botín recogido, y algunos efectivos militares se resistían heroicamente en Nador, Zeluán y Monte-Arruit, sitiados por los indígenas.

El 4 de Agosto fué declarada la crisis ministerial; el 12 recibió don Antonio Maura el encargo de formar Gobierno; el 13 quedó éste constituido<sup>1</sup> y el 15 dió una sobria nota anunciando sus propósitos y ratificando su confianza en el Alto Comisario don Dámaso Berenguer.

Concentradas en Melilla fuerzas que ascendían a cerca de 40.000 hombres comenzó el avance el día 12 de Septiembre, ocupando el poblado del zoco El Arbáa; el 17 se reconquistó Nador, ofreciéndose a la vista de las tropas españolas un horrendo cuadro de desolación y de muerte; el 29 libróse el combate de Tisza, ocasionado por la tenaz resistencia de los moros a que fuese abastecida dicha población, en la que entró el Comandante general de Melilla Sr. Cavalcanti dirigiendo personalmente el asalto; el 3 de Octubre tuvo lugar el rudísimo, pero victorioso combate de Sebt; el 5 ocupó el general Sanjurjo a Atlaten; el 10 tremoló la bandera española en las cimas del Gurugú; el 14 fué recuperado Zeluán y el 24 Monte-Arruit, donde una vez más se tuvo ocasión de con-

1. Entraron a formar parte de este Ministerio: Maura (Presidencia), González Hontoria (Estado), Francos Rodríguez (Gracia y Justicia), Cierva (Guerra), Marqués de Cortina (Marina), Cambó (Hacienda), Silió (Instrucción pública), Conde de Coello de Portugal (Gobernación), Maestre (Fomento) y Matos (Trabajo).

firmar la inaudita barbarie rifeña, patentizada en las ruinas producidas en el poblado y en las crueles mutilaciones que presentaban los centenares de cadáveres españoles que allí se encontraron insepultos.

El rápido derrumbamiento de la Comandancia de Melilla dió lugar a que el comentario público girase especialmente sobre las causas de tamaño desastre. Quiénes atribuían la máxima responsabilidad al Gabinete Allendesalazar por su absoluta imprevisión, ya que la actitud agresiva de los moros bastantes meses antes de la catástrofe, había dado sobrados motivos para sospechar la general conflagración que se hurdió contra España; quiénes convertían en blanco de sus críticas al Alto mando, refiriéndose a la falta de acuerdo entre el general Silvestre, acostumbrado siempre a obrar por cuenta propia, y el general Berenguer, poco enérgico al no imponer su autoridad a su colega y subordinado; quiénes concentraban sus tiros en las Juntas de defensa, manifestando que la división del Ejército por ellas producida era el principal motivo de la tragedia que se lloraba, pues suprimidas por las Juntas las recompensas por méritos de guerra, a pretexto de anteriores abusos, habíase hecho desaparecer uno de los más poderosos estímulos para la oficialidad y un eficazísimo sistema de selección; quiénes, por último, como el Ministro de la Guerra don Juan de la Cierva, consideraban que lo ocurrido había sido un justo castigo al abandono en que la Nación dejara los más urgentes problemas y que, por ello, a todos alcanzaban las responsabilidades.

El 20 de Octubre se presentó el Gobierno a las Cámaras, empezando el debate sobre los recientes descalabros. Entrar a detallar las opiniones emitidas en la discusión sería repetir una vez más los conocidos conceptos favorables al carácter civil del protectorado, a la formación de un Ejército colonial y a la necesidad en que España se encontraba de no abandonar el territorio de Marruecos por merecer ser considerado como una prolongación del nacional. De esta última opinión discrepó, ello no obstante, en el Senado el capitán general de Madrid don Miguel Primo de Rivera, que, repitiendo juicios ya emitidos el año de 1917, abogó por el aban-

dono gradual de la empresa que había llevado a nuestra Nación al Norte africano. Este parecer, tan públicamente exteriorizado por una autoridad militar, disgustó profundamente al Gobierno, motivando el nombramiento del general Orozco para sustituir al marqués de Estella en el desempeño del mando de Castilla la Nueva.

El 22 de Noviembre llegó a Madrid el Alto Comisario don Dámaso Berenguer, que fué recibido en la estación por el Rey y el Gobierno en pleno. El proyecto de recompensas presentado por don Juan de la Cierva en el Congreso durante el mes de Octubre, la depuración de las responsabilidades civiles y militares y el rescate de los prisioneros, constituyeron temas preferentes en las discusiones mantenidas dentro y fuera del Parlamento. El día 1.º de Diciembre las *Comisiones informativas*, en franca oposición con el Ministro de la Guerra, solicitaron que no se tratase el asunto de las recompensas mientras no estuvieran averiguadas las responsabilidades; y si bien es cierto que las noticias llegadas de Africa no podían ser más favorables, pues nuestros soldados habían ocupado Batel y Tistutin (21 de Diciembre) y pasado el río Kert, no lo era menos que el desacuerdo entre el Sr. Cierva y las Juntas de defensa amenazaba con un próximo y violentísimo rompimiento.

## 1922

El día 3 de Enero de 1922 dimitió el general Weyler el cargo de Jefe del Estado Mayor Central, fundando su decisión en el olvido en que parecían tener los Ministros de la Guerra a tan calificado organismo; por aquellos días menudearon las reuniones de las Juntas de Defensa y las entrevistas de los representantes de éstas con el Sr. Cierva, hablándose, además, de conjuras para destituir al general Berenguer, de protestas contra el nombramiento del general Sanjurjo para la Comandancia general de Melilla, de amenazas contra el Ministro de la Guerra, etc., etc. Sintetizando *La Correspon-*

*dencia Militar* el estado de opinión de las Juntas manifestó, que a la falta de competencia en asuntos militares del Ministro de la Guerra y a su deseo de convertirse desde el Palacio de Buenavista en dictador y máximo cacique, se debía la actitud de protesta de los elementos armados. Ante el resuelto propósito manifestado por las *Comisiones informativas*, singularmente por la de Infantería, de no transigir con el aludido Ministro, resolvió éste, de acuerdo con sus compañeros de Gobierno, poner a la firma del Monarca un Real Decreto a cuya virtud las tantas veces citadas *Comisiones informativas* habían de quedar domiciliadas en el Ministerio de la Guerra, debiendo, además, nombrar sus representantes, no por elección directa, sino mediante propuesta en terna elevada al Ministro, el cual, tendría la facultad de hacer el nombramiento. El Soberano pretextó tener que estudiar el asunto antes de decidirse a firmar el Decreto, y no conforme el Gobierno con este aplazamiento, puso en manos de aquél la correspondiente renuncia (11 de Enero). De las consultas celebradas desde el 12 al 16 pudo sacar la Corona como consecuencia la de que, independientemente de las apasionadas opiniones partidistas emitidas por algunos prohombres políticos, los más de entre éstos mostrábanse opuestos a la abusiva intervención de las Juntas, y como, por otra parte, el Ejército de Africa reiteró su adhesión al Gobierno, y el sentir del país comenzaba a exteriorizarse nada favorablemente a las enojosas ingerencias del sindicalismo militar en los asuntos privativos del Poder público, los representantes de las tan traídas y llevadas *Comisiones informativas*, optaron por someterse al Mando. En su consecuencia, pudo el Rey ratificar su confianza a don Antonio Maura y la *Gaceta* insertar el Real Decreto reorganizando las citadas *Comisiones*, en la forma que dejamos dicha.

El 23 de Enero entregó su alma a Dios el Papa Benedicto XV y el 7 de Febrero eligió el Cónclave como nuevo Pontífice al Arzobispo de Milán Cardenal Aquiles Ratti, que tomó el nombre de Pío XI.

Realizado cumplidamente el patriótico empeño de castigar a los moros por su barbarie de Julio y el de asegurar la posesión de Melilla y una zona exterior amplia protegida por



escalonada cortina de fortificaciones, se planteó el problema de sentar en el litoral de nuestra zona el apoyo militar necesario para ejercer el Protectorado. A fin de dar a este asunto adecuada solución, celebráronse en Pizarra (Málaga) varias conferencias entre el Alto Comisario y el Gobierno; de ellas salió como resolución de mayor monta la de, en momento oportuno, dominar la bahía de Alhucemas por medio de un desembarco que, quizá, también fuera preciso realizar en otro punto del litoral, para que los apoyos y consistencias resultaran mayores. Abierta la segunda legislatura de las Cortes (1.º de Marzo), pues la primera se había dado por concluida en Diciembre del año anterior, explanó el Conde de Romanones una interpelación al Gobierno sobre la suspensión de las garantías constitucionales, que decretada el 24 de Marzo 1919 por el citado personaje liberal, creía que las circunstancias no justificaban ya su mantenimiento. De esta opinión discrepó el Presidente del Consejo de Ministros, por lo que, en desacuerdo los elementos liberales que tenían su representación en el Gabinete con el criterio de la mayoría de éste, obligaron a plantear la crisis, a decir verdad latente hacía tiempo por causa del antagonismo harto manifiesto entre los señores González Hontoria y Cierva (7 de Marzo). El día 8 formó Gobierno don José Sánchez Guerra, a quien sus correligionarios habían ya proclamado como jefe el 25 de Enero. Del nuevo Gabinete entraron a formar parte elementos de la fracción liberal conservadora, don César Silió, representante del señor Maura y el señor Bertrán y Musitu, amigo y correligionario de don Francisco Cambó. La circunstancial unión de estos factores políticos resultó poco duradera, pues habiendo el señor Sánchez Guerra sometido a la firma del Rey el Decreto restableciendo las garantías constitucionales (30 de Marzo) sin que el Consejo de Ministros hubiera dado su aprobación a tal medida, estimáronse objeto de una evidente desconsideración los señores Silió y Bertrán, que se apresuraron a abandonar sus puestos, los cuales fueron ocupados por los señores Montejo y Ordóñez.

El día 8 de Abril se celebró en el Senado una reunión de los reformistas, alcalá-zamoristas, y garciprietistas para hacer

público el acuerdo de integrar la concentración de las izquierdas liberales bajo el caudillaje del marqués de Alhucemas. El Conde de Romanones dejó de sumarse al referido concierto por creer que debía haberse éste producido después de un período de propaganda en el que cada uno de los elementos integrantes de la futura concentración hubiese definido su ideario. El 9 y 10 tuvo lugar en Madrid el grandioso homenaje nacional a los actores María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. El 21, y a pretexto de que se preparaba un Real Decreto concediendo a la Mancomunidad catalana la administración de las redes únicas o grupos telefónicos ya caducados o próximos a caducar, comenzó a manifestarse la actitud de disgusto del Cuerpo de Telégrafos.

Entretanto acentuábase en las Cámaras el deseo de que no recayera resolución sobre el proyecto de recompensas sin que el Parlamento tratase antes de hacer efectivas las responsabilidades por los sucesos de Marruecos, estudiando a tal efecto el expediente que el Gabinete del señor Allendesalazar había encargado de instruir al general Picasso. Este aspecto de la cuestión y la ostensible pugna entre las Juntas de defensa, que seguían actuando en la Península, y la oficialidad que luchaba en Africa, destacábanse como problemas de mayor relieve a la sazón. El día 7 de Junio pronunció el Monarca en Las Planas (Barcelona) un comentadísimo discurso recomendando a la nutrida representación militar allí reunida el respeto a las ordenanzas y, por ende, el abandono de la política perturbadora de las Juntas de defensa. Tratóse a los pocos días en el Congreso el asunto y, en el curso del debate, el Presidente del Consejo refrendó las palabras del Soberano e hizo público que había aconsejado a éste el acto de Las Planas. Pensóse lógicamente por muchos que a las manifestaciones del Rey y del señor Sánchez Guerra había de seguir la publicación en la Gaceta del Real Decreto suprimiendo radicalmente las *Comisiones informativas*; pero, contra lo que se creía, tal medida se hizo esperar todavía algunos meses. En cambio, la cuestión de las responsabilidades tomó un giro extraordinariamente interesante cuando el Consejo Supremo de Guerra y Marina, a

cuyo examen fuera sometido el informe de los fiscales militar y togado acerca del expediente instruido por el general Picasso. creyó de justicia extender la culpabilidad por los sucesos de Melilla, no sólo a los treinta y tanto jefes y oficiales a quienes la exigía el juez instructor, sino a doble número de ellos, entre los cuales colocaba al Alto Comisario y a los generales Silvestre y Navarro. Era indudable, que con arreglo a la Real Orden de 24 de Agosto de 1921, dictada por el señor Cierva, la información practicada por el general Picasso no podía extenderse a don Dámaso Berenguer que, como general en jefe, se entendía directamente con el Gobierno y sólo a éste le era lícito apreciar sus actos; mas como, prescindiendo de dicha Real Orden, se decidía el Supremo a encartar también en el proceso al Alto Comisario, éste presentó la dimisión, pues no podía compaginar aquel procesamiento, que significaba una depresiva presunción de culpabilidad, con el hecho de que, al mismo tiempo, el Gobierno le ratificara su confianza invistiéndole de amplísimas facultades para seguir actuando en Africa. En sustitución del general Berenguer fué nombrado Alto Comisario el general Burguete que, apenas llegado a Marruecos, dió los más optimistas informes sobre la situación de los dos sectores, el de Yebala y el Rif, en que se había de desenvolver la futura acción política.

Una nueva complicación vino a primeros de Agosto a aumentar el número de preocupaciones que pesaban sobre el país. Nos referimos a la huelga de Correos, planteada por los funcionarios de este servicio en vista de que las peticiones que tenían presentadas no habían sido acogidas por el Gobierno en la forma que desearan. Para resolver el conflicto llegó desde San Sebastián a Madrid el Sr. Sánchez Guerra, recabando de los funcionarios un amplio voto de confianza, que le fué concedido en vista de la cordial acogida que hubo de dispensar a los representantes de aquéllos. Sin embargo de esto, pasados unos cuantos días, cambió a juicio de los funcionarios la actitud del Presidente, exteriorizándose la mudanza al ir éste a saludarlos al Palacio de Comunicaciones, el día 16 de Agosto. En su consecuencia, se agravó el conflicto, y por

tal motivo fué decretada la disolución del Cuerpo de Correos, reorganizándose el personal del mismo a base de la admisión de los antiguos funcionarios que el día de la publicación del Decreto (18 de Agosto) prestasen normalmente su servicio y, además, mediante la institución del Cuerpo de auxiliares femeninos. La forma desordenada y poco justa con que fué llevada a cabo la medida que examinamos, amortiguó los sinceros plácemes que había merecido de la opinión la conducta enérgica del Gobierno<sup>1</sup>.

Entrado el mes de Octubre, la discrepancia de criterio entre el Presidente del Consejo y el Gobernador de Barcelona acerca de los procedimientos que debían ser aplicados para vigorizar los resortes de la disciplina social en dicha ciudad, produjo la brusca separación del señor Martínez Anido del cargo que hasta entonces desempeñara; determinación que aplaudieron los liberales y censuraron las fuerzas vivas de la Ciudad Condal. Para ocupar la vacante producida, fué designado el general don Alberto Ardanaz.

Casi al mismo tiempo que el Gabinete exoneraba al señor Martínez Anido, producíase en Italia la formidable reacción *fascista* contra el terrorismo que amenazaba destruir la nación hermana. En efecto, el 30 de Octubre y procediendo de diferentes puntos de la Península se concentraron en Roma las fuerzas ciudadanas que, con sus camisas negras como emblema, se dirigieron al Palacio del Quirinal asistiendo a la exaltación de su jefe Mussolini a la Presidencia del Gobierno. Los resultados de aquella mudanza política fueron inmediatos, pues en pocas horas reemplazó a la anarquía el imperio del orden.

A los primeros días del mes de Noviembre correspondió un recrudecimiento de la guerra de Marruecos, donde por causa de la ocupación de Tizza-Assa, los elementos indígenas provocaron algunos sangrientos combates. Al mismo tiempo que se desarrollaban aquellos sucesos en tierra africana, en la

1. Asimismo, durante el mes de Agosto, acordó el Gobierno la suspensión de los preceptos establecidos en el Real Decreto de 21 de Mayo de 1919, que establecieron el régimen de autonomía universitaria. Salvo honrosas excepciones, los Claustros permanecieron como indiferentes a la preciosa suma de atribuciones de que se les privaba.

Península ponía el Gobierno debido término a las Juntas militares decretando su disolución (14 de Noviembre), y en el Parlamento actuaba la Comisión designada por el Congreso para examinar el expediente formado por el general Picasso. Del análisis de tal labor informativa se derivaron dos ponencias antagónicas, la conservadora y la liberal y un apasionado voto particular suscrito por el diputado socialista señor Prieto. Solicitaba éste que fueran separados del Ejército los generales Berenguer y Navarro, así como los coroneles y demás jefes de grado inferior con destino en la Comandancia General de Melilla, presentes en la demarcación al iniciarse la retirada de Annual, y acusaba de prevaricación al Gobierno presidido por el señor Allensalazar al ocurrir la catástrofe, es decir, en Julio de 1921, y al constituido por don Antonio Maura el 14 de Agosto. La ponencia liberal proponía un voto de censura contra el Gabinete que gobernaba a España en Julio del citado año, especializando la declaración de responsabilidad política en el Ministro de la Guerra, el de Estado y el Presidente del Consejo de dicho Gabinete. Solicitaba también una reforma del Código Penal en el sentido de llevar a su libro II, título II, previsiones y sanciones adecuadas para castigar las infracciones y negligencias de los Gobiernos, y pedía que se adoptasen enérgicas medidas para acelerar la tramitación de las causas seguidas contra los responsables de los sucesos de Africa. Por último, la ponencia conservadora estimaba que no procedía exigir responsabilidades ministeriales y que debía activarse la substanciación de las causas militares.

En la discusión mantenida en la Cámara popular, hicieron uso de la palabra defendiendo sus respectivos puntos de vista los señores Prieto, Alcalá Zamora, Alvarez Arranz, Marín Lázaro y Sánchez Guerra. La intervención subsiguiente del señor Maura marcó el momento de máximo interés. A juicio de este ilustre hombre público si, como se deducía de la ponencia liberal, existían responsabilidades políticas, no había otro procedimiento legal para hacerlas efectivas que el de que el Congreso formulara la acusación y el Senado juzgara a los inculpados. De no reconocer la eficacia de este criterio,



lo que realmente perseguían los liberales era la impunidad descarada, pues afirmar que había responsables y añadir a continuación que por no definir el Código Penal ciertas figuras de delito en que los gobernantes pudieran incurrir no podían ser éstos castigados por la Cámara Alta, valía tanto como declararlos libres de toda punición, pues realmente no podía constituir la un simple voto de censura de la Cámara popular. La recia argumentación de don Antonio Maura, convenció al señor Cambó, el cual, se dispuso a presentar una proposición solicitando que el Congreso acusase ante el Senado a los señores Allendesalazar, Vizconde de Eza y Marqués de Lema, Presidente del Consejo el primero, y Ministros de la Guerra y de Estado los dos últimos en el Gabinete que ocupaba el Poder cuando se produjo la catástrofe de Annual, dándose por extendida la acusación a los restantes Ministros que formaban dicho Gobierno para el caso en que, al tramitarse el sumario, se entendiese que a todos alcanzaban las responsabilidades.

Bastó el anuncio de la proposición, para que los señores Fernández Prida y Ordóñez, que habían formado parte del Ministerio acusado, sintiéndose heridos en su dignidad, presentasen la dimisión de sus carteras, solidarizándose con ellos el Presidente del Congreso señor Bugallal. La crisis planteada por tal causa fué resuelta el día 4 de Diciembre mediante una ratificación de confianza al señor Sánchez Guerra; pero al presentarse el nuevo Gobierno en la Cámara popular el día 5 y notificar la renuncia del señor Bugallal, mientras los conservadores se mostraron dispuestos a no admitirla, las oposiciones creyeron lo contrario, dando con ello lugar a que airadamente declarase el Presidente del Consejo que el Gabinete estaba en crisis.

La aspiración a ocupar el Poder tan fervientemente sentida por la concentración de las izquierdas gubernamentales, se vió al fin lograda el día 7 de Diciembre, en que el Marqués de Alhucemas, recibió el encargo de formar Ministerio<sup>1</sup>.

1. Quedó constituido por los señores García Prieto (Presidencia), Alba (Estado), Romanones (Gracia y Justicia), Alcalá Zamora (Guerra), Silvela (Marina), Pedregal (Hacienda), Almódovar del Valle (Gobernación), Gasset (Fomento), Salvatella (Instrucción pública), Chapaprieta (Trabajo).

El mismo día se publicó una declaración ministerial encaiminada a participar al país que, no pudiendo el Gobierno por falta de mayoría resolver en el Parlamento la cuestión de las responsabilidades, sometería oportunamente a la firma del Rey el Decreto de disolución de las Cortes, aplazando para las venideras el ventilar aquella cuestión. Diferida por tal medio esta dificultad, correspondía abordar el problema relativo a la política a seguir en Marruecos, el que afectaba a la reforma constitucional y los atañedores a las organizaciones societarias, al régimen de la propiedad, al municipal y al de la Hacienda, a las reformas militares, en suma, a cuanto había constituido el programa de la concentración izquierdista, tan traído y llevado durante su reciente y activa propaganda por toda España.

## 1923

Respecto de Marruecos, el Gobierno aceptó la dimisión del Alto Comisario, general Burguete, nombrando para sucederla al señor Villanueva (2 de Enero de 1923), que no habiendo podido tomar posesión del cargo por causa de enfermedad, hubo de ser substituído por don Luis Silvela (16 de Enero); organizó el Mando militar suprimiendo el cargo de General en Jefe y agrupando las fuerzas del Ejército de Africa en dos regiones, la oriental y la occidental, bajo el mando de los comandantes generales de Melilla y Ceuta; realizó con el aplauso del país el rescate de los prisioneros (27 de Enero), interviniendo abnegadamente en la piadosa empresa el rico minero vizcaíno señor Echevarrieta, y tras de contener el apasionado ímpetu de quienes deseaban a toda costa infligir a los rifeños un severo castigo en vista de su conducta inhumana con los excautivos, reiteró hasta la saciedad su propósito de caminar derechamente a la implantación del protectorado civil.

En punto a la reforma constitucional, y vista la actitud de protesta del episcopado español frente a la posible mo-

dificación del artículo 11 de la Constitución, redujo sus pruritos innovadores al mero anuncio de la futura transformación del Senado y al de algunas variaciones en el artículo 17 relativo a la suspensión de garantías, y en el 32, al que se añadiría un precepto estableciendo que las Cortes habían de estar reunidas, a lo menos, cuatro meses cada año. El abandono por el Gobierno de la reforma relativa a la libertad de cultos motivó la dimisión del Ministro Sr. Pedregal (3 de Abril), pero no la de los numerosos reformistas que ocupaban otros cargos públicos.

En relación con los restantes problemas de la vida nacional necesitados de urgentes y acertadas soluciones, tantas veces preconizadas por los liberales desde los bancos de la oposición, a decir verdad, poco o casi nada hicieron los gobernantes izquierdistas. Inventariando con la mejor intención las principales disposiciones por ellos adoptadas en tales respectos, citaremos: el Real Decreto publicado el 22 de Febrero reformando el Estado Mayor Central del Ejército, al que habían de quedar atribuidas, entre otras obligaciones, el señalamiento de las normas relativas a la organización de la guerra y la instrucción del Ejército y el estudio de los teatros y planes de operaciones; las disposiciones del Ministro de la Gobernación encaminadas a la supresión del juego, con excepciones a favor del Casino de Madrid, Centro del Ejército y de la Armada, Gran Peña y Circulo de Bellas Artes; el inútil Real Decreto sobre el régimen económico de las Asociaciones; el que nombraba al Magistrado del Tribunal Supremo don Fernando de Prat, al general de división don Pedro Bazán y al almirante don Federico Ibáñez como instructores de sendos expedientes para depurar las responsabilidades administrativas, civiles y militares, y el referente a la regulación de las subvenciones para el seguro contra el paro forzoso. Respecto a enseñanza, régimen de la propiedad, problema de la Hacienda, vida local, etc. etc., quedó la actuación del Gobierno reducida a la excelente disposición de ánimo que revelaban los párrafos dedicados a empeños tan vitales en la Declaración ministerial del día 6 de Abril y en el Mensaje leído al verificarse la apertura de las Cortes, el 23 de Mayo.

A las dos magnas cuestiones, Marruecos y terrorismo, los esfuerzos del Gobierno no lograban siquiera hallarles asomo de posible solución. En efecto, como reflejo de la pugna entre los temperamentos belicosos y los pacifistas del país, exacerbada desde el rescate de los prisioneros, el Gabinete comenzaba a incurrir en la dualidad de políticas que tan acremente censurara en los conservadores. Enemigo de exigir mayores sacrificios a la Nación aumentando el contingente de elementos armados en Africa, enviaba, sin embargo de ello, tropas con aquel destino; opuesto a lo que no fuera, si no factor coadyuvante de la encomiada acción civil, nombraba al general Martínez Anido para la Comandancia general de Melilla, como si ignorara lo que había de suponer en dicho puesto la gestión de un tan resuelto y caracterizado jefe militar; laudable apologista de la paz, veíase en el trance de contrariar sus generosos designios, teniendo que reaccionar violentamente contra la obstinación rifeña en los aledaños de Tizzi-Assa, donde el crecido número de bajas sufridas especialmente durante el mes de Junio, cumplidamente acreditaba cómo seguía el azote de la guerra flagelando al organismo nacional.

Tampoco acompañaba la fortuna al buen deseo del Gobierno de poner un límite al terrorismo. Una curiosa estadística publicada por aquellos días patentizaba que, en Barcelona, y durante el período de seis meses (Diciembre a Mayo) el número de atentados seguidos de muerte se elevaba a treinta y cuatro; el de atentados en los que las víctimas habían resultado heridas, a sesenta y seis, y el de agresiones sin consecuencia, a sesenta y tres. A esto había que agregar la vergonzosa huelga de transportes, que prolongada días y días paralizaba la vida industrial barcelonesa e impedía hasta sacar las basuras de la ciudad, dejando que ésta se fuera convirtiendo en antihigiénico depósito de moscas y desperdicios. Mientras patronos y obreros discutían y porfiaban, en las calles se mataba lo que se podía, sin perdonarse a nadie. La pena de muerte alcanzaba a todo el mundo: a patronos, a sindicalistas rojos y blancos, a somatenistas, a autoridades, a periodistas, a *requetés*, a pistoleros, a jurados, a viejos y a

niños. A pesar de su buena intención, habían ruidosamente fracasado los Gobernadores liberales señores Raventós y Barber. Contra éste último, y en ocasión de asistir al entierro del somatenista don José Franqueza, villanamente asesinado, los elementos patronales hicieron una manifestación de indignadísima protesta por suponerle sistemático protector del sindicalismo único. Por el contrario, el capitán general señor Marqués de Estella, que también formaba parte del duelo, fué objeto de reiteradas muestras de consideración de los allí reunidos. La dualidad entre las autoridades civil y militar, que estos hechos ponían de manifiesto, quedó al fin resuelta a favor del general Primo de Rivera, que al regresar a Barcelona (23 de Junio) después de un breve viaje a Madrid para resolver el enojoso pleito, recibió en los andenes de la estación el más entusiasta homenaje de las clases amantes del orden.

El vórtice de disolución social que venía azotando a la hermosa capital de Cataluña y a algunas de las localidades más industriosas de aquella región, tuvo como nuevas y bochornosas manifestaciones, el asalto a la Banca de los señores Padrós, en Manresa; el atraco de que fueron víctimas los pacíficos comensales de la Fonda de Francia, situada en las inmediaciones del Gobierno civil, y el inaudito saqueo de las oficinas de la Compañía Arrendataria de Contribuciones. Como en Barcelona, registráronse también en Zaragoza, Valencia y otras ciudades bárbaros atentados terroristas: en la capital aragonesa fué asesinado el cardenal Soldevilla (4 de Junio) y en Valencia corrió igual suerte el Sr. Domínguez, Presidente del Sindicato de funcionarios de la Banca de Barcelona (13 de Julio).

Entretanto, en Madrid se tramitaba en las Cortes el asunto de las responsabilidades. El día 28 de Junio votó el Senado el suplicatorio para procesar al general Berenguer. Algunas manifestaciones hechas en el curso de la discusión por don Joaquín Sánchez de Toca molestaron al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, general Aguilera, que escribió a aquél una injuriosa carta. Llevado el asunto a la Alta Cámara se produjo antes de comenzar la sesión del día 5 de



Julio un violento altercado entre los señores Sánchez Guerra y Aguilera, que llegaron a golpearse. Abierta la sesión dió el General brevísimas explicaciones sobre lo ocurrido entre él y el Sr. Sánchez de Toca, dejando, además, traslucir que si el Gobierno se decidía a separarlo del Consejo Supremo interrumpiendo la obra de hacer justicia a los culpables de la catástrofe de Annual, el país se encargaría de demostrar de parte de quién estaba la razón. Esta amenaza de una próxima dictadura militar produjo las más airadas protestas de parte de los Senadores; pero, a decir verdad, en el ánimo de los más vivía el convencimiento de que, con el general Aguilera o con otro representante del Ejército, la entronización de un Gobierno de fuerza había de resultar el único expediente capaz de poner un dique a la bárbara anarquía dominante.

El día 6 de Julio, a propuesta del Diputado reformista señor Alvarez Valdés, nombró el Congreso una Comisión de responsabilidades integrada de representantes de cada una de las fracciones políticas de la Cámara, y el 24 del mismo mes quedó decretada la suspensión de las sesiones parlamentarias, debiendo, sin embargo de ello, seguir actuando la aludida Comisión durante las vacaciones estivales.

Entrado el mes de Agosto propuso el Comandante general de Melilla Sr. Martínez Anido un avance hacia Alhucemas y el plan para el establecimiento de una línea defensiva, dentro de la cual había de comenzarse a implantar la política del protectorado. El Gobierno rechazó de plano el proyecto de marcha sobre Alhucemas; pero al tratar de ponerse de acuerdo sobre la línea defensiva, mientras el Ministro de la Guerra, general Aizpuru, mostró su opinión favorable al no abandono de la posición de Tizzi-Assa, a partir de la cual el Ejército debía extender su ocupación directamente hacia el mar, llegando hasta el cabo Kilates, la mayoría de sus compañeros se mostró partidaria de un retroceso a la línea Drius a Afrau, y, aun mejor, a la antigua del río Kert. Como consecuencia de la actitud del Gobierno, presentó su dimisión el general Martínez Anido, y en vista de las diferencias de apreciación entre los Ministros, acordaron éstos

que una Delegación del Estado Mayor Central, presidida por el general Weyler, marchase a Marruecos a fin de delimitar la nueva línea estratégica que permitiese a España la disminución de los dispendios de sangre y de dinero. Contra lo que el Gobierno esperaba, la Memoria presentada por la referida Delegación pronunciábase por una acción belicosa, que permitiendo formar una cortina militar avanzada, hiciera posible la evacuación de las posiciones que por entonces ocupaban nuestros soldados. Aunque la constitución de la referida cortina había de ser transitoria, resultaba indudable que ella debía imponer nuevos avances y exigir más hombres y más dinero. Fundados en estas consideraciones, los señores Villanueva, Gasset y Chapaprieta, Ministros de Hacienda, de Fomento y de Trabajo, respectivamente, se negaron a aceptar la ponencia del Estado Mayor Central. Se dijo que a ésta actitud se había sumado don Santiago Alba, aunque después puso especial empeño en demostrar su conformidad con los técnicos militares. En vista de tales discrepancias, se produjo la crisis (1.º de Septiembre); y cuando, después de haber ratificado el Rey su confianza al Sr. García Prieto, fundadamente se estimaba que el conflicto quedaría resuelto dejando de formar parte del Gobierno los tres Ministros disidentes, es decir, los señores Villanueva, Gasset y Chapaprieta, resultó, que, si para las carteras de Fomento y Trabajo fueron propuestos los señores Portela y Rosado, amigos del Presidente del Consejo, para la de Hacienda consiguió Alba que quedara designado Chapaprieta, como si al cambiar de Departamento cambiara también de ideas respecto a la política que había de seguirse en Marruecos. La burda maniobra fué desbaratada por Villanueva, que recabó su libertad de acción para denunciar cuanto había ocurrido; pero tal actitud no impidió que el Sr. Alba, en el nuevo acoplamiento ministerial impuesto por las circunstancias, lograra llevar a la cartera de Trabajo a su íntimo amigo don Luis Armiñán.

Como se ha indicado más arriba, el convencimiento, muy generalizado en toda España, de que el estado de las cosas públicas no podía conducir sino a la revolución o a la dic

tadura, había impulsado a valiosos elementos militares de Barcelona a agruparse en torno al general Primo de Rivera, a fin de impedir la catástrofe que se avecinaba como efecto fatal de la descomposición en que yacía el país. Aunque oficialmente disueltas las Juntas de defensa, era indudable que el espíritu que animaba a los factores concertados en Barcelona no difería esencialmente de aquel que, en 1917, llevara a la oficialidad del Arma de Infantería a encontrar en la sindicación el medio de poner un límite a los males que aquejaban, no sólo al Ejército, sino a la Nación entera. Este movimiento de 1923 era, como el de 1917 en sus comienzos, generoso y patriótico, discrepando de él únicamente en que lo que en 1923 se perseguía no era ya actuar sobre los hombres públicos para conseguir su enmienda, sino separarlos violentamente de la dirección del país como protervos incorregibles, dando margen a que tras de un breve período de circunstancial predominio militar que permitiera limpiar de escombros el solar patrio, quedasen aflorados preciadísimos elementos individuales con que España no había hasta entonces contado para su dirección y gobierno, por impedirlo las corruptelas de nuestra malhadada política.

Tales fueron, sin duda, los interiores estímulos que llevaron al Marqués de Estella a quebrantar gravemente la disciplina para, de acuerdo con algunos de sus colegas de otras regiones militares, dar el ya famoso golpe de Estado de 13 de Septiembre, que le elevó al Gobierno, con el beneplácito de buena parte de la opinión.

La pasividad del país había ido tolerando la lenta, pero ineluctable ruina de un régimen que, o no es nada, o es la resultante de la suma de actividades ciudadanas acuciosa y rectamente ejercidas. Esa misma punible pasividad debía, al menos, permitir que, hasta cierto límite, la unidad de mando viniese a llenar el vacío producido por una extensa serie de lamentables claudicaciones colectivas. Como lección o con o revulsivo, quizá el golpe de Estado del 13 de Septiembre sirva para suscitar en la conciencia española un concepto más exacto de los deberes impuestos por la ciudadanía en países que aspiran a hacerse dignos del régimen constitucional.

# Indice

---

## I.—HISTORIA POLITICA

82.—El Gobierno provisional ... ..	1
83.—El Poder ejecutivo, la Constitución de 1869 y la Regencia del Duque de la Torre... ..	4
84.—Reinado de Amadeo de Saboya ... ..	13
85.—La República española ... ..	23
86.—El Poder ejecutivo... ..	32
87.—El Príncipe Alfonso y la restauración borbónica.	34
88.—Regencia de Doña Maria Cristina de Austria du- rante la menor edad de Alfonso XIII ... ..	54

## II.—ORGANIZACION SOCIAL Y POLITICA (1833-1902)

89.—Las clases sociales ... ..	102
90.—La familia ... ..	106
91.—La propiedad ... ..	109
92.—La organización administrativa ... ..	116
93.—Evolución del régimen local español desde 1833 a 1902.	118
94.—Reformas legislativas ... ..	128
95.—La administración de Justicia ... ..	133
96.—La Hacienda ... ..	137
97.—Relaciones entre el Estado y la Iglesia ... ..	146

## III.—LA VIDA ECONOMICA NACIONAL (1833-1902)

98.—La Agricultura... ..	154
99.—El desarrollo industrial y comercial ... ..	164
100.—La cuestión social y las organizaciones obreras ...	176
101.—Las Obras públicas... ..	180

## IV.—CULTURA Y COSTUMBRES (1833-1902)

102.—La instrucción pública ... ..	193
103.—El progreso científico y sus principales representantes ... ..	244
104.—Los géneros literarios ... ..	253
105.—La Música ... ..	263
106.—La Pintura ... ..	276
107.—La Escultura ... ..	284
108.—La Arquitectura. ... ..	286
109.—Reformas urbanas (1833-1902) ... ..	288
110.—Fiestas religiosas y profanas ... ..	300
111.—Espectáculos públicos ... ..	304
112.—La indumentaria y las prácticas sociales ... ..	319
113.—La España post-isabelina... ..	325

## RESUMEN DEL REINADO DE ALFONSO XIII

114.—Hechos principales ... ..	330
--------------------------------	-----



# 

	PÁG.
113.—Don Pascual Madoz...	2
114.—Juramento del Duque de la Torre como Regente del Reino ...	6
115.—Guillermo I...	7
116.—Bismarck ...	8
117.—Napoleón III ...	9
118.—Emperatriz Eugenia...	10
119.—El rey Amadeo ante el cadáver de Prim ...	11
120.—Amadeo I prestando juramento ante las Cortes ...	12
121.—Prim ...	13
122.—D. Francisco Serrano Duque de la Torre ...	14
123.—D. Manuel Ruiz Zorrilla ...	17
124.—D. Nicolás M. <sup>a</sup> Rivero ...	23
125.—Estanislao Figueras...	24
126.—Francisco Pi y Margall ...	27
127.—D. Carlos de Borbón ...	28
128.—D. Nicolás Salmerón ...	29
129.—D. Emilio Castelar...	30
130.—General Pavía...	31
131.—Muerte del general Concha ...	34
132.—D. Antonio Cánovas del Castillo ...	37
133.—D. Adelardo López de Ayala ...	38
134.—El coronel Contreras en Treviño (1875) ...	40
135.—Entrada de Alfonso XII en Madrid terminada la guerra carlista....	41
136.—Sagasta ...	42
137.—El Marqués de la Habana ...	43
138.—Alfonso XII ...	45
139.—La reina Doña Mercedes ...	46
140.—María Cristina...	47
141.—D. Manuel Alonso Martínez ...	43
142.—D. José Posada Herrera ...	49
143.—Alfonso XII visitando los coléricos de Aranjuez ...	51
144.—Muerte de Alfonso XII...	53
145.—Juramento de María Cristina ...	55
146.—D. Juan Francisco Camacho...	56
147.—Romero Robledo ...	57
148.—López Domínguez ...	59
149.—Rius y Taulet ...	61
150.—D. Cristino Martos...	63
151.—Isaac Peral ...	65
152.—Martínez Campos ...	78
153.—Weyler...	80
154.—Polavieja ...	82
155.—Rizal ...	83
156.—Restos del <i>Maine</i> en el puerto de la Habana ...	88
157.—Almirante Cervera ...	90
158.—General Linares ...	90
159.—Conde de las Almenas ...	92
160.—Joaquín Costa ...	93
161.—D. Francisco Silvela...	94
162.—Ramón y Cajal...	250

	PÁG.
163.—Jaime Balmes...	251
164.—D. Marcelino Menéndez y Pelayo	253
165.—Mariano José de Larra	255
166.—Espronceda...	256
167.—José Zorrilla	257
168.—Gustavo Adolfo Becquer	257
169.—D. Gaspar Núñez de Arce	257
170.—D. Ramón de Campoamor	258
171.—Pedro Antonio de Alarcón	258
172.—Juan Valera	258
173.—El Duque de Rivas	259
174.—Hartzenbusch	260
175.—Bretón de los Herreros	260
176.—Manuel Tamayo y Baus...	260
177.—José de Echegaray	260
178.—Serafín Álvarez Quintero	261
179.—Joaquín Álvarez Quintero	261
180.—Benito Pérez Galdós	261
181.—Jacinto Benavente	261
182.—Leopoldo Alas (Clarín)	262
183.—Jacinto Verdaguer	262
184.—Hilarión Eslava	267
185.—D. Emilio Arrieta...	269
186.—Julián Romea	310
187.—Doña Teodora Lamadrid...	312
188.—El Marqués de la Vega de Armijo	339
189.—Gumersindo de Azcárate	339
190.—D. Antonio Maura	344
191.—Monteros Ríos	348
192.—Moret...	348
193.—Boda del rey Alfonso XIII	350
194.—Los reyes de España Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia...	351
195.—D. Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia, reyes de España.	355
196.—El Príncipe de Asturias y los infantes Doña Beatriz y D. Jaime	357
197.—D. Fernando Primo de Rivera	358
198.—Canalejas	363
199.—Muley-Hafid, sultán de Marruecos	366
200.—Firma del tratado de paz con Marruecos (1910)	367
201.—Marcelo de Azcárraga	369
202.—Alejandro Pidal...	369
203.—General Marina	372
204.—El Conde de Romanones	396
205.—García Prieto	396
206.—D. Eduardo Dato	403
207.—D. Francisco de A. Cambó	403
208.—César Silió...	413
209.—D. Joaquín S. de Toca	415
210.—D. Manuel Allendesalazar	415
211.—D. Juan de la Cierva	421
212.—D. Juan Vázquez de Mella	421

# Historia Universal Moderna

por **EDUARDO IBARRA Y RODRIGUEZ**

**Catedrático de Historia Universal  
en la Universidad de Madrid**

**Con 454 grabados y mapas**

## VOLUMEN PRIMERO

*Indice:* Introducción. — La conquista turca. — La defensa eslava. — Alemania y los Estados escandinavos. — Inglaterra y Escocia. — Borgoña. — Francia. — Italia. — La Península ibérica. — Los descubrimientos geográficos. — Vida religiosa, política y social, científica y económica. — El renacimiento. — El Imperio hispánico y la lucha contra su preponderancia. — El protestantismo y su difusión en Alemania. — El protestantismo en los Estados escandinavos y Suiza. — El protestantismo en Inglaterra y Escocia. — El protestantismo en los Países Bajos. — El protestantismo y las guerras de Religión en Francia. — La restauración católica contra el protestantismo.

## VOLUMEN SEGUNDO

*Indice:* El Imperio y la guerra de treinta años. — La revolución puritana en Inglaterra. — Francia hasta la paz de Westfalia. — España y los Países Bajos. — Italia. — Los Estados Escandinavos y los Eslavos. — Los turcos otomanos y los eslavos. — Los descubrimientos geográficos y el desarrollo colonial. — Vida religiosa, política, social y económica. — Vida científica. — Las artes. — Luis XIV. — Fin de la Casa de Austria. — Engrandecimiento de Inglaterra. — La guerra de sucesión a la corona de España. — Holanda y Suiza hasta la Revolución francesa. — España y Portugal. — Italia. — Francia. — Inglaterra. — La Casa de Hannóver. — Los Estados de la Europa Central. — Los Estados Escandinavos. — Los Estados eslavos. — Los Turcos otomanos. — Los descubrimientos geográficos y el desarrollo colonial. — Vida religiosa, política y económica. — Vida científica. — Las artes.

**Dos tomos, con 1.604 páginas, en tela**

**Ptas. 30**

# HISTORIA DE ORIENTE

por PEDRO BOSCH GIMPERA

Catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Barcelona

con 718 grabados y 86 mapas en negro

## VOLUMEN PRIMERO

*Indice:* Civilización primitiva del género humano. — Etnología. — Comienzos de las civilizaciones históricas. — El Asia anterior y sus grandes regiones. — Egipto. — El próximo Oriente. — Los primeros estados de la Mesopotamia. — El imperio Acadio y el dominio de los guti. — La segunda época sumeria. — La primera dinastía de Babilonia. — Los cassitas. — Los comienzos de la historia del Asia Menor y Asiria. — El imperio Hetita. — El Zagro y el Cáucaso. — Los movimientos de los indo germanos. — Siria y Palestina. — El Egipto predinástico. — Epoca tinita. — Imperio antiguo. — Fin del imperio antiguo. — Cultura del imperio antiguo. — Historia política del imperio medio. — Epoca de los hicsos. — El nuevo imperio de la dinastía XVIII y las conquistas de Thutmés III. — Amenhotep III. — Sus relaciones con el Asia. — Amenhotep IV y pérdida de Siria. — Cultura egipcia durante la dinastía XVIII. — Siria, Palestina y Chipre y sus relaciones con los imperios vecinos. — Civilización de Siria, Palestina y Chipre en la segunda parte del segundo milenario. — La hegemonía de Mitani. — Babilonia y Asiria durante el predominio de Mitani. — El apogeo del imperio hetita. — Egipto durante la dinastía XIX. — Las dinastías XX y XXI. — Asiria y Babilonia en los últimos siglos del segundo milenario. — Las invasiones frigias. — La decadencia egipcia.

## VOLUMEN SEGUNDO

*Indice:* Los hebreos. — El apogeo de los hebreos. — Los fenicios. — Civilización fenicia. — Los estados de los arameos y de los hetitas. — Los reinos de Israel y Judá. — Organización y cultura de los hebreos. — Historia religiosa de los hebreos. — Imperio asirio. — Imperio de los urartios. — Imperio frigio. — Ultimo imperio asirio. — Egipto y Asiria. — Imperio babilónico. — La época saíta. — Civilización asiro-babilónica. — Imperio lido. — Indogermanos y no indo-germanos en el Cáucaso. — Historia de los Indos. — Los indogermánicos hasta

Claxares I. — Cimmerios y escitas. — Imperio de los medos — Los persas. — Reinados de Kambises y Darío el grande. — Organización y cultura persa. — Reinados de Jerjes y Artajerjes I. — Decadencia del imperio persa. — Su civilización. — Alejandro Magno en Oriente. — Oriente helenístico. — Pérgamo. — La Fenicia persa, helenística y romana. — Los macabeos y nabateos. — Evolución religiosa de los judíos. — Dominación romana. — Arabia y Palmira. — El imperio de los partos. — Los sasánidas. — La India hasta la época Buda. — Los reinos indos. — El dominio griego en la India. — Imperio de los yue-chi. — India indígena. — Epoca de los gupta. — Prehistoria en el Asia interior. — Historia china primitiva. — Las relaciones de la China. — Decadencia china. — Civilización china. Corea, Japón y el Extremo Oriente.

**Dos tomos en 8.º, con 1.482 páginas, en tela**

**Ptas. 32**

# Historia de España y de la Civilización Española

**Por RAFAEL ALTAMIRA**

**Cuarta edición ilustrada con 457 grabados**

La frecuencia con que tenemos que reinprimir esta excelente obra demuestra el favor que le dispensa el público ávido de poseer un buen libro de historia. Efectivamente, según *La Epoca* "Se trata de un buen manual de historia española, propio para la generalidad del público semiculto que no gusta de enfrascarse en largas lecturas y quiere, sin embargo, enterarse del estado actual de los acontecimientos en cualquier rama del saber". Y *El Magisterio* añade: "No es simplemente una historia de los reyes, es ante todo la historia del pueblo". Y según *La Vanguardia* "refiere los hechos como son y destruye la leyenda".

"Avaloran el libro, multitud de grabados, en los que se reproducen objetos, trajes, monedas, etc., tomados de la realidad, en vez de fantasearlos a gusto del dibujante". (*Revista de Aragón*).

*Opinión de dos sabios*: "En esta obra he visto realizado todo lo que hoy se podría soñar respecto un manual de esta clase" *R. Menéndez y Pidal*.—"Es con mucho, el mejor libro de su género que yo conozco". *Flitzmaurice Kelly*.

**Cuatro tomos en 8.º, con 2.673 páginas, en tela,**

**Ptas. 40**



# Historia de la Edad Contemporánea por CARLOS RIBA

**Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia** **Con 245 grabados**

*Indice:* Fijación de conceptos para el estudio de la Revolución francesa. — Los Estados generales. — Los órganos de la Revolución. — La Asamblea Constituyente. — La Asamblea legislativa. — La Convención nacional. — La lucha del Directorio con Europa. — El gobierno interior del Directorio. — La obra de la Revolución francesa. — España y la Revolución francesa. — La cultura española en la época de la Revolución francesa. — El Gobierno consular. — La política exterior del Consulado. — Organización civil del Imperio. — Organización militar del Imperio. — La política exterior del Imperio. — Prusia y Rusia. — España en la política general de Europa. — La quinta coalición. — La legislación y la Iglesia durante el Consulado y el Imperio. — Inglaterra. — Italia. — Suiza y Holanda. — Alemania y Hungría. — Estados Escandinavos. — Polonia y el Gran Ducado de Varsovia. — Campaña de Rusia en 1812. — La campaña de Alemania en 1813. — La campaña de Francia en 1814. — La primera restauración de los Borbones. — Los cien días de la restauración bonapartista.

**Vol. I en 8.º de 900 páginas, en tela**

**Ptas. 16**

---

## CURSO DE GEOGRAFIA Por P. Vidal de La Blache y P. Camena de Almeida

**Adaptado a las necesidades de España y América por ANTONIO BLÁZQUEZ**

Es tan conocida y apreciado el nombre de los autores de esta monumental obra, que nos creemos relevados de todo elogio y preferimos detallar el plan de la misma.

Vol. 1.º.—LA TIERRA. Geografía General, 3.ª edición, 642 páginas, con 125 grabados.

Vol. 2.º.—EUROPA. 3.ª edición de 1927, 496 páginas con 57 grabados.

Vol. 3.º.—PENÍNSULA IBÉRICA, por Antonio Blázquez. 680 páginas con 181 grabados.

Vol. 4.º.—ASIA, INDIA PENINSULAR, AFRICA. 536 grabados.

Vol. 5.º.—AMÉRICA SEPTENTRIONAL, AMÉRICA CENTRAL, LAS ANTILLAS. 532 páginas con 211 grabados.

Vol. 6.º.—AMÉRICA MERIDIONAL, OCEANÍA. 660 páginas con 379 grabados.

**Cada tomo en 8.º, en tela**

**Ptas. 10**



















